ESTUDIOS PÚBLICOS

Nº 81 *VERANO* *2001*

Enrique Barros
Lo público y lo privado en el derecho

Óscar Godoy Arcaya
Democracia y razón pública: En torno a John Rawls

Carla Cordua
Concordancia y aceptación morales

Beltrán Villegas (ss.cc.)
La caridad y el otro como otro

John R. Anderson, Lynne M. Reder y Herbert A. Simon
Educación: El constructivismo radical y la psicología cognitiva

Emilio Meneses, Patricio Valdivieso y Carlos Martin
El servicio militar obligatorio en Chile: Fundamentos y motivos de una controversia

Juan Pablo Montero, José Miguel Sánchez y Ricardo Katz
Análisis de mercado de emisiones de material particulado en Santiago

Ana María Stuven
Chile y Argentina: Representación y prácticas representativas para un nuevo mundo

Alfredo Joignant R.
El lugar del voto. La ley electoral de 1874 y la invención del ciudadano-elector en Chile

Bernardo Subercaseaux
Hacia un nuevo mapa latinoamericano: Ilustración y mercado

Nieves Olcoz
La era Lezama: Paradiso *y las vanguardias latinoamericanas*

Joaquín Barceló Sobre Símbolos, *de Francisco José Folch*

Mario Valdovinos *Hay algo extraño en su situación, Mr. Baker* (Como si Tuviera Alas, *de Chet Baker*)

Cristián Pérez *La izquierda vista por la izquierda*

CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN EL DERECHO*

Enrique Barros

El ensayo asume que el derecho es público en un sentido elemental: es una institución que ordena la convivencia; se asienta en la justicia, la más pública de las virtudes; y su eficacia reside en una instancia judicial que resuelve los conflictos e invoca el uso legítimo de la fuerza.

Más allá de esa publicidad básica, el derecho muestra diversas dimensiones de lo público y lo privado en la sociedad contemporánea. Ante todo, lo público aparece como sinónimo de lo estatal en la lógica normativa que subyace a las regulaciones, que se expresan en actos de voluntad política y cuyo principio operativo es la eficacia. En otros ámbitos, lo público del derecho se muestra en su función vivificante de la sociedad civil, en cuanto favorece la comunicación y establece reglas de justicia que hacen posible la interacción espontánea, como ocurre con el derecho civil y comercial y, en cierto sentido, con el penal.

Una radical individuación del derecho y, en tal sentido, su privatización, se muestra en la institución moderna del derecho subjetivo, que

ENRIQUE BARROS. Abogado. Doctor en Derecho, Universidad de München. Profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Política y Morales del Instituto de Chile.

* Versión revisada y completada del discurso de incorporación del autor a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

Estudios Públicos, 81 (verano 2001).

es referida críticamente, desde una perspectiva lógica e histórica, a la luz de la dialéctica de lo público y lo privado.
Finalmente, en un apéndice, se intenta una caracterización de las raíces positivistas de la cultura jurídica chilena y se plantean algunas hipótesis respecto de la fragilidad histórica del principio de supremacía del derecho en el país.

Lo público y lo privado son conceptos analógicos, que admiten sentidos diferentes en diversos contextos. No es mi intención analizar el uso que los juristas hacemos de esos conceptos, sino, a la inversa, discernir con su ayuda algunas de las principales tareas y características del derecho en nuestro tiempo.

La exposición comprende dos partes. En la primera se analizan las principales formas de manifestación de lo público y lo privado en el derecho contemporáneo; la segunda es un excurso acerca del concepto de lo público en la cultura jurídica chilena.

I. FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN EL DERECHO

La publicidad elemental del derecho

Si nos miramos desde las profundidades de la caverna, el derecho es público en un sentido antropológico muy elemental: desprovistos de instintos suficientemente fuertes y precisos, los hombres debemos llenar con *instituciones*, con prácticas comunes, el vacío que provoca y la oportunidad que nos abre nuestra indeterminada constitución biológica. El hombre ha debido asumir en todos los tiempos la necesidad de encauzar la agresividad y de hacer fructíferas las relaciones. Tendemos a la paz y necesitamos la colaboración recíproca, pero nuestra naturaleza también nos predispone a la violencia y al egoísmo. Las instituciones expresan el orden que crea la cultura para favorecer la convivencia, para darnos cobijo y seguridad, permitiéndonos encauzar nuestra subjetividad. La publicidad del derecho como institución se muestra con especial nitidez cuando el orden es infringido: permite que el acto de violencia o deslealtad tenga una réplica distinta a la venganza directa, y se transforme en la infracción a una regla o principio objetivo de convivencia. El derecho encauza el sentimiento más profundo de venganza o autorreparación frente al daño sufrido. Estudios comparados del comportamiento humano nos muestran que desde sus orígenes más

remotos el hombre ha inventado las más ingeniosas formas de pacificación, que son indicio de una disposición natural[1]. Pronto, decía Cicerón, la multitud que en el desorden se dispersaba, mediante la concordia llegó a formar comunidad[2]. Las instituciones jurídicas modernas son refinadas creaciones culturales, y en tal sentido públicas, que propenden al mantenimiento de la paz y nos hacen posible la colaboración.

La publicidad específica del derecho también se muestra con nitidez en la *justicia*, la virtud que se le asocia con naturalidad. La justicia se limita a establecer umbrales mínimos de convivencia. Las directivas del derecho, en correspondencia, sólo nos exigen actuar con corrección y con decencia[3]. Su observancia no merece especial elogio, porque es una mera condición para convivir. La ley civil hace posible la sociedad entre los hombres, pero no define la calidad afectiva o espiritual más profunda de la relación que logramos en la familia, el trabajo, los negocios o la sociedad política. Recíprocamente, la justicia, en su sentido moderno, más preciso que el bíblico, es una virtud más modesta que el amor o la caridad. Es la virtud pública por naturaleza, porque se expresa en la disposición y el hábito de ser simplemente buenos ciudadanos. El derecho no exige heroísmo, ni santidad; le basta la honorabilidad, incluso la fundada en la mera conveniencia. Por eso, como lo expresó un célebre juez británico, el precepto bíblico que nos llama a amar al vecino, se restringe en el derecho a que no se le debe causar daño[4]. El derecho se limita a establecer lo mío y lo tuyo, y, en la

---

[1] A. Gehlen, "El Hombre y sus Instituciones" (1973); p. 94 y ss.; "Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung" (Sobre el Nacimiento de la Libertad desde la Alienación) (1952), p. 338 y ss. La teoría de Gehlen es extremadamente escéptica acerca de la racionalización de las instituciones. En el fondo, hace explícitos los supuestos antropológicos en que se apoya la más fuerte doctrina política conservadora. Una idea semejante es expresada, desde un punto de vista lógico, por L. Wittgenstein en su teoría del lenguaje corriente como práctica que no es autorreflexiva, en *Investigaciones Filosóficas* (1958). La idea de incompletitud del hombre, su caracterización como "el animal peor logrado, el más riesgosamente desviado de sus instintos", es una tesis antropológica fundamental de F. Nietzsche, quien ve en las instituciones más bien el riesgo de la domesticación de la voluntad en la artificiosa falsedad de las condiciones de vida; las reflexiones más precisas de F. Nietzsche sobre el derecho, en *Más allá de Bien y Mal* (1972) y especialmente en *Sobre la Genealogía de la Moral* (1972), en especial párr. 11 y ss. Un estudio empírico de la tendencia humana primigenia a idear formas institucionales de pacificación, en I. Eib-Eibesfeldt, *Der vorprogrammierte Mensch* (1974). La función constitutiva del instinto de agresión en el ser humano, en K. Lorenz, *Sobre la Agresión: El Pretendido Mal* (1981, 11ª edición [1963]).

[2] De la República, Libro I, párr. 40 (citado según edición alemana de W. Sontheimer, Stuttgart: Reclam, 1980, p. 40).

[3] Una temprana discusión sobre los límites del derecho como honestidad en Cicerón, *De los Deberes*, L. III, párr. 12 (tomado de versión de B. Estrada, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1948). Sobre la diferencia entre el amor y la justicia, J. Pieper, *Las Virtudes Fundamentales* (1997, 5ª edición), pp. 129-131.

[4] Lord Atkin en el caso Donoghue vs. Stevenson (1932), citado por J. G. Fleming, *An Introduction to the Law of Torts* (1985, 2ª edición), p. 36.

posición de juez, lo que corresponde a cada cual. Giotto pinta la justicia como una reina de semblante sereno, pero frío y severo, que sostiene la balanza con la mirada de quien ha logrado domesticar las pasiones. En el fondo, el derecho es a nuestras relaciones en sociedad lo que la gramática es al lenguaje[5]: es la forma más elemental de convivencia, que permite establecer una comunicación incluso entre personas alejadas física o afectivamente entre sí. Dentro de los límites de la justicia, el derecho no atiende a la calidad intrínseca de la relación que mantenemos con los demás. Pero establece un umbral de moralidad, para que resulte posible la vida en sociedad. Por eso, carece de sentido intentar la caridad, fundada en el amor, si antes no se cumple con el deber elemental que impone la justicia[6]. Del mismo modo como la justicia es la menos heroica de las virtudes, también el derecho es el más elemental de los bienes que puede disfrutar la sociedad.

El derecho es además público en cuanto a su forma. Si se mira atrás en el tiempo, parece que recién tiene sentido hablar de derecho cuando aparecen los jueces y se establece un régimen público de sanciones coactivas. En otras palabras, el derecho supone una organización pública mínima, que con el tiempo ha derivado en el complejo estado moderno. Esta radical publicidad del derecho es también fuente de sus limitaciones. El derecho se vale de medios eficaces, pero toscos. Por eso, las tradiciones jurídicas más fuertes, en concordancia con la naturaleza de la justicia, reconocen que la primera función de la ley no es transformarnos en virtuosos. El derecho se limita a poner un límite externo a nuestra propensión al abuso y a la violencia, favoreciendo la cooperación entre individuos que miden su propio interés con una vara distinta que el ajeno. Por eso, su tarea no es realizar el mejor de los mundos, sino, más bien, evitar el peligro latente del peor y, sólo entonces, servir de supuesto para una convivencia fructífera. La rudeza de sus medios coactivos hace que el derecho sea un instrumento inepto para actuar sobre las convicciones o para obtener ideales de perfección. En definitiva, la potencia del derecho como orden positivo de las relaciones en sociedad es también la medida de sus limitaciones y riesgos.

En definitiva, la publicidad del derecho se muestra en todas sus características esenciales: en su función antropológica como institución, en la naturaleza relacional de las virtudes en que se sostiene y de los bienes que realiza y en la organización que permite que sus normas se impongan

---

[5] L. Fuller, *The Morality of Law* (1964), p. 6 y ss.

[6] He escuchado que esta idea era frecuentemente expresada por Alberto Hurtado, pero desconozco si fue alguna vez publicada.

con independencia de las razones que tengamos para observarlas, gracias a una jurisdicción obligatoria, cuyas decisiones se imponen por la fuerza.

La lógica de las regulaciones

Parte importante de la ciencia jurídica de los últimos dos siglos ha concebido radicalmente el derecho a la luz de su aptitud para generar normas por medio de actos de voluntad y de la coactividad organizada que lo distingue de cualquier otro ordenamiento. En esas doctrinas lo público deja de ser lo que interesa a la comunidad, y pasa a ser concebido en un sentido restringido, simplemente como lo estatal[7].

Lo cierto es que el poder se encuentra en la base del derecho moderno. En su sentido más estricto el derecho es público porque es el instrumento de que se vale la política. Es una constatación diaria que las autoridades públicas dictan leyes, decretos y resoluciones administrativas con los fines más diversos. La legislación y el gobierno tienen, ante todo, la función de satisfacer lo que los economistas con precisión analítica han llamado *bienes públicos*, esto es, aquellos que no pueden ser realizados mediante la interacción espontánea de las personas y asociaciones, porque el esfuerzo que cada cual haga por separado para satisfacerlos no es significativo para la consecución del objetivo. A pesar de que el interés que expresan los bienes públicos es común a muchos, no puede razonablemente ser satisfecho mediante contribuciones individuales[8]. La persecución criminal, la administración de justicia (en la medida que su ejercicio no sea privatizable en la forma de arbitrajes), la fuerza pública, la defensa y la legislación son ejemplos clásicos de bienes de este tipo. El estado también debe corregir los efectos negativos (*externalidades*, dicen los economistas), que ciertas actividades privadas producen respecto de la comunidad y que no están naturalmente incorporadas como costos en la producción de otros bienes, como ocurre, por ejemplo, con las regulaciones urbanísticas y medioambientales.

[7] Pareciera que los orígenes intelectuales del positivismo jurídico contemporáneo hay que encontrarlos en J. Benthan, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) y en J. L. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence* (1832). Ambos constituyen relevantes influencias intelectuales en A. Bello. La expresión teórica más fuerte de la identidad entre el derecho y el estado, en H. Kelsen, *Teoría Pura del Derecho* (1960 [1934]). Aunque H. Kelsen intenta formular una lógica jurídica fundamental, me parece que su teoría resulta especialmente ilustrativa de la función del derecho como instrumento de regulación. A estas doctrinas subyace un concepto instrumental del derecho que normativamente se aviene con el utilitarismo moral.

[8] F. von Hayek, *Law, Legislation and Liberty*, T. III, *The Political Order of a Free People* (1979), p. 43 y ss.

A ello se agregan las clásicas funciones del estado a efectos de realizar principios de *justicia distributiva*, que han pasado a formar parte de las definiciones constitucionales básicas de la sociedad contemporánea, y que consisten en asegurar a las personas y grupos humanos un umbral mínimo de existencia y de igualdad de oportunidades, atendidas las condiciones generales de desarrollo, en bienes como la educación, la salud, la seguridad social o la cultura.

La tarea del estado en todos estos respectos es la producción de un efecto deseado, un fin que se pretende lograr mediante regulaciones y mediante gasto en prestaciones sociales, que se entregan directamente o mediante subsidios. Para satisfacer estas funciones, el estado obtiene financiamiento forzoso de las personas privadas, gravándolas en los roles más diversos. En retribución, el estado desarrolla una actividad crecientemente instrumental, que se muestra esencialmente en la función de gobierno[9].

El derecho tiene poco que decir respecto de los fines cuando el estado actúa como regulador o servidor de la comunidad. Es cierto que las constituciones contemporáneas, incluida la chilena de 1980, reconocen derechos sociales basados en consideraciones de justicia distributiva, a la salud, la educación y a la seguridad social. Sin embargo, la autoridad pública sólo secundariamente está controlada por los jueces en el cumplimiento de esas tareas. Por otro lado, es por completo excepcional que acciones judiciales autoricen hacer valer directamente esos derechos[10]. Los jueces cautelan, en un estado de derecho en forma, que esas potestades sean ejercidas de acuerdo con los procedimientos que establece la ley y en el marco de las atribuciones conferidas. Los jueces constitucionales, por su parte, pueden ser llamados a revisar si lo actuado por actos de gobierno y legislación está conforme a las competencias distribuidas por la constitución y a cautelar el respeto de las garantías constitucionales. Sin embargo, tanto en sede administrativa como constitucional, el control judicial se refiere esencialmente a la observancia de los procedimientos y de las autorizaciones legales y, sólo en el límite, al control material de constitucionalidad. La jerarquización de los fines y las técnicas regulatorias correlativas, dentro del

[9] Un espléndido análisis comparado del cambio en el sistema de fuentes del derecho que ha traído la "gubernamentalización" de la política, en A. von Bogdandy, *Gubernative Rechtssetzung* (2000).

[10] Así, por ejemplo, se ha fallado en sede de protección que no es arbitraria la negativa que los servicios de salud han dado a portadores de sida de ofrecerles costosos medicamentos, porque las prestaciones de salud, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, sólo "se concederán por esos organismos a través de sus establecimientos, con los recursos físicos y humanos de que dispongan" (Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de noviembre de 2000; confirmada por Corte Suprema, 13 de diciembre de 2000; fallos referidos en *Semana Jurídica* N° 8, 2001).

amplio margen de discreción que concede la Constitución, son tareas del legislador y de la administración, en ejercicio de su función de gobierno[11].

Salvo en períodos de excepcional emotividad política, el modo de pensar de la administración tiende a ser pragmático: la tarea de gobierno por excelencia es conceptualizar y jerarquizar los fines y problemas, e instrumentar las técnicas más eficientes para alcanzar y resolverlos. Ésa es la esencia de la política: se trata de decisiones que no están regidas por una norma que determine cómo actuar. En una sociedad democrática son los ciudadanos quienes califican el mérito con que es ejercido el gobierno. Por el contrario, resulta usualmente exorbitante que los jueces asuman el control de mérito u oportunidad de las políticas públicas. Los jueces carecen de los instrumentos analíticos, y, además, de la legitimidad política, para definir criterios de distribución del gasto, para jerarquizar prioridades y para decidir acerca de las técnicas regulatorias más eficientes. En consecuencia, aunque el orden político en su conjunto sea concebido a la luz de principios de justicia distributiva y de fines de interés general, ellos sólo indirectamente, mediante leyes y regulaciones administrativas, adquieren forma normativa[12].

El político de excepción, el estadista, tiene la percepción existencial de lo general y es capaz de congregar la opinión y la voluntad de muchos tras fines públicos, creando la confianza en su destreza para resolverlos. Pero irremediablemente llega el momento en que debe instrumentar los medios técnicos para lograr esos fines. El derecho da forma a la organización del estado y establece límites a su actuación, pero no define el conteni-

[11] La Constitución está construida bajo el esquema regla (derecho reconocido)-excepción (limitación establecida por el legislador). El principio de esencialidad en el reconocimiento de los derechos (Consti0tución, artículo 19 N° 26), se materializa en un principio práctico de proporcionalidad, cuya aplicación supone definir el mínimo de satisfacción que resulta exigible para que se entienda que el derecho está reconocido y, muy especialmente, la interferencia máxima que el mismo derecho puede soportar sin ser desnaturalizado. Sobre estas ideas provenientes de la doctrina constitucional alemana, en cuya constitución fue por primera vez introducido el principio de esencialidad, I. von Münch y Ph. Kunig (eds.), *Grundgesetzkommentar*, T. 1 (1992, 4ª edición), p. 998 y ss.

[12] Así se explica que la Constitucion suiza de 1999 haya desistido de referirse a *derechos sociales* y lo haga respecto de *fines sociales* que "la federación y los cantones asumen en complemento de la responsabilidad personal y de la iniciativa privada", con expresa negación de que tales fines otorguen acciones judiciales para requerir prestaciones estatales (art. 41). Al respecto, J. P. Müller, *Grundrechte in der Schweiz* (1999). En verdad, los jueces *pueden* adoptar una perspectiva activista en el reconocimiento de derechos sociales, fijando umbrales mínimos de satisfacción de diversa intensidad, pero ello encuentra su límite en la circunstancia de que las condiciones presupuestarias para hacerlos efectivos son una materia esencialmente política, porque suponen que el público esté dispuesto a financiar su efectiva realización. Un excelente análisis de los derechos desde esta perspectiva, en S. Holmes y C. R. Sunstein, *The Cost of Rights* (1999).

do de las decisiones. Por eso, incluso en un país tan extensamente judicializado como los Estados Unidos, un agudo analista de la cultura legal ha expresado que "los tribunales rara vez están en la situación de denegar al orden político la oportunidad de hacer lo que de lo contrario habría hecho"[13]. El derecho puede definir cómo y dentro de qué ámbito, más bien amplio, operan las decisiones públicas. Por cierto que su tarea es crítica para la libertad y la igualdad de las personas; pero más allá de estos límites, la esencia de la política se expresa en la decisión, en la voluntad del legislador y del gobernante.

Por cierto que una sociedad ordenada en torno a principios de justicia, que disfrute de las ventajas de la legitimidad del poder público, tiende a transformar la observancia de estas regulaciones (como, por ejemplo, pagar impuestos) en un deber de decencia, que es fundamento de la confianza de que todos estamos sujetos a las mismas reglas y de que contribuimos en lo que nos corresponde al bien general. Sin embargo, la textura jurídica de este tipo de reglas tiende a agotarse en el programa de conducta: si estás en tal situación, entonces debes hacer tal cosa; y si no haces tal otra, debes ser sancionado de tal forma. La relación entre fines y técnicas que subyace a las regulaciones usualmente no es discernible por los jueces con arreglo a normas o principios jurídicos más generales. El derecho de las regulaciones tiende a expresarse en un código binario, lícito-ilícito, que opera sin referencia inmediata a nuestros sentidos cotidianos de lo correcto. Que la tasa de impuestos sea tal, o las emisiones industriales toleradas tales otras, o los subsidios habitacionales alcancen a tanto, son reglas que tienen por objeto satisfacer bienes que suelen ser muy valiosos. Sin embargo, tanto los fines, como la adecuación técnica de los medios, no resultan directamente discernibles en el programa de conducta que expresa la regulación[14].

La tarea del derecho en estas materias es ante todo formal. La ley establece los procedimientos para que las decisiones públicas sean adopta-

---

[13] P. Kahn, *The Cultural Study of Law* (1999), p. 130. El derecho, en verdad, suele hacer abstracción de una forma potente de expresión de la sociedad civil, como es la influencia que grupos corporativos o de opinión pueden tener en la modulación del curso de la política. Respecto de esta acepción de la sociedad civil, Ch. Taylor, "Invocar la Sociedad Civil" (1997 [1995]), p. 269 y ss.

[14] Me parece que la mayor contribución de N. Luhmann a la comprensión del orden jurídico es haber expuesto radicalmente esta forma de actuación del derecho en la sociedad contemporánea. Una amplia exposición de su teoría del derecho como programa en una obra publicada poco antes de su muerte, *Recht der Gesellschaft* (Derecho de la Sociedad) (1993). Resulta sintomático que Luhmann haya comenzado a prestar atención al derecho *desde* la administración pública, a la cual estuvo ligado en los comienzos de su vida profesional e intelectual.

das y puede así tomar los resguardos de transparencia y debido proceso administrativo. En definitiva, el derecho regula el procedimiento decisorio, y, de ese modo, puede prescribir un itinerario público al proceso de decisión que favorezca que todas las opiniones relevantes sean escuchadas, así como la razonabilidad técnica e imparcialidad del *output*. Por el contrario, usualmente es una ilusión esperar que los jueces puedan discernir el mérito de los antecedentes que llevan a la autoridad a establecer la regulación, como lo muestran las insalvables dificultades que han encontrado recursos de protección contra órganos reguladores (en materias de tarificación de servicios públicos, por ejemplo), cuando se ha perseguido un control material de arbitrariedad. La dificultad de discernir jurídicamente la adecuación de los medios no se opone a que el intérprete atienda al fin de la regulación o de la potestad regulatoria, especialmente si el control judicial está a cargo de tribunales especializados en actos regulatorios de la administración. Sin embargo, más allá de la relevancia que puede tener el fin en la interpretación de regulaciones ambientales, urbanísticas o de otro orden (incluso en sus efectos penales y civiles[15]), el control jurídico tiende a ser formal, y en lo sustantivo se limita esencialmente a los casos en que la autoridad ha abusado de su potestad, desviando su ejercicio del fin regulatorio con que fue conferida[16]. Dentro de estos límites, que constituyen el corazón del

[15] De especial interés resulta el fin cuando la regulación tiene efectos en materias de responsabilidad civil o penal. La conducta objetivamente contraria a una norma puede no dar lugar a responsabilidad cuando, a pesar de haberse incurrido en infracción de una norma legal, el daño que resulta de esa acción no corresponde al fin protector de la norma infringida (esto es, al daño que la norma pretende evitar). Así, se puede estimar que la infracción de la regla que obliga a renovar periódicamente la licencia de conducir no da lugar a responsabilidad civil si quien la infringe participa, con plena observancia de las reglas del tránsito, en un accidente que ha sido provocado por un tercero (Corte de Concepción, 5 de agosto de 1980). El principio ha sido recogido en la Ley del Tránsito: "El mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño causado" (Ley N° 18.287, art. 171). Un análisis jurídico desde el punto de vista civil, en K. Larenz, *Schuldrecht. Allgemeiner Teil* (1987, 14ª edición), p. 440 y ss.; desde el punto de vista penal, K. Roxin, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, T. 1 (1994, 2ª edición), p. 312 y ss.

[16] La doctrina administrativista francesa introdujo tempranamente, a fines del siglo XIX, el concepto de desviación del poder para hacerse cargo del control judicial del fin con que es ejercida una facultad (R. Chapus, *Droit Administratif Général*, T. 1, [1998, 12ª edición], p. 964 y ss). Aun así, a menudo no resulta fácil a los jueces dar por establecida una desviación del poder, atendida la multiplicidad de fines que usualmente subyacen a las regulaciones y a la circunstancia de que con frecuencia las potestades son discrecionales. Por eso, el instituto tiene en la práctica una aplicación limitada a casos más bien límites y la doctrina administrativa ha debido recurrir a otros instrumentos de control que atienden a los supuestos de hecho previstos para el ejercicio de la potestad y, finalmente, a los principios generales del derecho. Al respecto R. Chapus, *op. cit.* [en esta nota], p. 971 y ss., y E. García de Enterría y T. R. Fernández, *Curso de Derecho Administrativo*, T. 1 (1984), p. 445 y ss.

moderno derecho administrativo, las regulaciones constituyen decisiones acerca de políticas públicas y no la aplicación de una regla o principio jurídico.

Por eso, no es extraño que los teóricos del derecho que atienden a su positivación en decisiones públicas tiendan a concebirlo como un instrumento para configurar la realidad, como una técnica social. Austin, un célebre jurista inglés del s. XIX, expresa algo, que, más despectivamente, también podría haber dicho Portales: que el derecho es un mandato que un hombre inteligente dirige a otro hombre inteligente, sobre quien tiene poder para imponer su voluntad[17]. Siguiendo la evolución de los tiempos, el mandato se ha despersonalizado, y ha devenido en norma, en programa de conducta[18]. En estas materias, los expertos en derecho señalan los caminos para adoptar decisiones y las fronteras de las potestades, pero, dentro de ese marco, las regulaciones responden a una racionalidad técnica, crecientemente refinada gracias al análisis económico, que es característica de la política contemporánea. Pareciera que éste es el sentido más estricto de lo público, entendido como lo estatal, en el derecho moderno.

Lo público como espacio de comunicación y de asociación

La doctrina positivista destaca la característica instrumental del derecho referida en el párrafo anterior: su ductibilidad técnica como instrumento de políticas públicas. Sin embargo, esa doctrina tiende a ignorar su función más extensa en las sociedades contemporáneas, donde el derecho constituye un orden que favorece la interacción de infinidad de personas, en un espacio que es público, pero no estatal.

En su sentido más elemental se muestra esa publicidad en el conocimiento del propio derecho. Las costumbres se muestran en prácticas reiteradas; las leyes sólo rigen desde que son publicadas. Como expresaba Kant, en la forma pública radica la más elemental pretensión del derecho: “sin

[17] J. Austin, *Lectures on Jurisprudence* (1873, 4ª edición), sección I, p. 90 y ss.

[18] Así, en la tradición analítica contemporánea desde H. Kelsen, *Teoría Pura del Derecho* (1960 [1934]), y en la teoría social de N. Luhmann, especialmente *Legitimation durch Verfahren* (Legitimación mediante Procedimientos) (1969) y “Die Codierung des Rechtssystems” (1988), p. 337 y ss. Una forma moderada de positivismo jurídico, más cercana al concepto de regla proveniente de la lógica del lenguaje corriente, en H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (1961), (hay una espléndida traducción de G. Carrió); la publicidad característica de la “regla” de Hart es más diferenciada que la “norma” de Kelsen o que el “programa” de Luhmann, de modo que permite comprender más extensamente las funciones no regulatorias del derecho, que son desarrolladas en los capítulos siguientes.

publicidad no habría justicia, pues la justicia no se concibe oculta, sino públicamente manifiesta"[19].

Pero más allá de la publicidad intrínseca de sus propias reglas y principios, el derecho establece las condiciones para la creación de un *espacio público de discernimiento*, de comunicación, asociación e intercambios al interior de la sociedad. Ello se muestra, ante todo, en la esencialidad de las libertades de opinión y de expresión para el funcionamiento fluido de una sociedad abierta. Su estructura es la misma de las demás libertades: se expresan como libertades negativas, como prohibiciones de interferir en su ejercicio. Sin embargo, su rango preferente en las sociedades regidas por principios del constitucionalismo democrático se debe precisamente a su función constitutiva de un espacio público, que permite la interacción de ideas y formas de vida y favorece deliberadamente el control de toda forma de poder, público y privado. En definitiva, el predominio de la razón supone la capacidad, como decía Mill, de que "falsas opiniones y las prácticas impropias gradualmente cedan ante los hechos y argumentos", y el ordenamiento que hace ello posible es el de la libertad de expresión[20]. Como ocurre con las demás libertades, la libertad de información no garantiza resultados; pero, en el largo plazo, es un supuesto necesario para la formación de un ámbito público, que, por definición, se pueda afirmar incluso contra el poder estatal o privado.

El papel esencial de la comunicación reaparece en otras múltiples instituciones, distintas a las libertades de conciencia y expresión. Ante todo, en la forma de *deberes positivos de información*. Por un lado, como se ha visto, pareciera que la transparencia procedimental es el instrumento técnico más apropiado para asegurar el discernimiento público acerca de la razonabilidad e imparcialidad de los procesos regulatorios, atendidas las dificultades para establecer controles jurídicos de mérito de las decisiones públicas. Pero la transparencia también adquiere valor en el derecho priva-

[19] I. Kant, *Para la Paz Perpetua* (1796), Apéndice II a la 2ª edición; tomado de la versión alemana *Zum ewigen Frieden*, edición de T. Valentiner (1983), p. 68.

[20] J. S. Mill, *On Liberty* (De la Libertad de Pensamiento y Discusión) (1859), Cap. II, tomado de la edición de G. Himmelfarb (1974), p. 80. La Corte Suprema norteamericana, en uno de los casos más influyentes de la jurisprudencia constitucional comparada, afirmó que la Constitución impedía que un medio de prensa fuera hecho responsable por un mero error difamatorio y exigió que la responsabilidad civil de los medios de comunicación se justificara en la mala fe o culpa grave de quien difundía la información "atendido el trasfondo de un compromiso con el principio de que el debate sobre asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto, todo lo cual supone aceptar ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos en contra del gobierno y de funcionarios públicos" (New York Times vs. Sullivan, 1964, tomado de T. Barton, M. Franklin, y J. Wright, *The First Amendment and the Fifth Estate*,1986, p. 466).

do, donde los antiguos deberes generales de lealtad y buena fe que se imponen a las partes de un contrato, han dado forma a reglas más precisas sobre información a los consumidores, inversionistas y accionistas de sociedades anónimas[21]. No debe extrañar que los deberes de información se vinculen en el derecho de los contratos al principio de buena fe, que es fundamento de los deberes que cautelan la confianza en las relaciones privadas, de modo análogo a como la libertad de información y la publicidad de los procesos de decisiones públicas contribuyen a la confianza en el ámbito más amplio de la sociedad civil.

Muchas otras instituciones jurídicas tienen por finalidad asegurar el bien de la comunicación nítida y abierta al interior de la sociedad civil. Así, la importancia de que la economía tenga un medio de comunicación inequívoco, ha llevado a que la cautela del *valor del dinero*, el más abstracto medio de comunicación que ha creado la sociedad humana, esté entregado al Banco Central, un organismo especializado en esa tarea, autónomo de las instancias ordinarias de decisión de políticas públicas[22].

A su vez, las reglas sobre *libre competencia* también cumplen la función de cautelar la comunicación inherente a una economía basada en la propiedad y los contratos. Desde esta perspectiva, que me parece la correcta, el orden de la competencia no responde a políticas públicas instrumentales, sino a la función de asegurar una comunicación abierta, con respeto de

---

[21] Desde un punto de vista económico estos deberes de información favorecen los intercambios porque aumentan la confianza de quienes se encuentran en una posición asimétrica de conocimiento, que no pueden remontar atendidos los costos de transacción envueltos. Así se explican, por ejemplo, las regulaciones sobre información en materias de consumidores (especialmente las reglas sobre rotulación de productos y sobre condiciones generales de contratación), inversionistas (especialmente las relativas a mercados de valores y sociedades anónimas abiertas) y ahorrantes. Los deberes de información contractual tienen su fuente más remota en el derecho romano, que estableció acciones en favor del comprador por vicios ocultos de la cosa comprada: "Los vendedores de esclavos hagan saber a los compradores la enfermedad o vicio de cada esclavo, cuál de ellos tiene hábito de fuga o se halla bajo responsabilidad noxal por un delito que cometió. Todas estas cosas serán declaradas clara y verazmente al vender los esclavos" (*Digesto*, de Justiniano, párr. 21.1.1.1, citando un edicto de los ediles curules; tomado de la edición de A. D'Ors y otros, 1972, T. II, p. 37). El principio está recogido en las acciones por vicios ocultos de la cosa que se vende, reconocidas por el derecho civil moderno (*Código Civil* chileno, art. 1.857 y ss.). Los deberes de información tienden a hacerse más exigentes a medida que los contratos adquieren formas crecientemente estandarizadas; el fundamento normativo debe encontrarse en el principio de buena fe (*Código Civil*, art. 1.546), aplicado por extensión al momento de la conclusión del contrato. Las regulaciones contemporáneas sobre mercados de valores, sociedades anónimas y contratos con consumidores persiguen que la información sea pública como condición para que en contratos masivos, marcados por la asimetría originaria de información, pueda operar la presunción de justicia que cubre a un contrato libremente consentido.

[22] Sobre los fines de la autonomía del Banco Central, J. A. Fontaine, "Banco Central Autónomo: en Pos de la Estabilidad" (2000), p. 393 y ss.

los derechos de propiedad. Por eso, su tarea es neutralizar, con respeto a los derechos de propiedad, posiciones privadas de poder que no resulten razonablemente desafiables. En el trasfondo del derecho de la competencia está el propósito de evitar que posiciones de poder privado entraben el orden de los intercambios, esto es, el proceso de descubrimiento característico del mercado como espacio público en que coactuamos incontables personas y asociaciones que perseguimos nuestros propios fines[23].

Por diversos medios, el derecho contribuye decisivamente a establecer las condiciones para que se constituya un ámbito público que abra oportunidades infinitas de comunicación. Desde esta perspectiva, lo público se expande desde lo propiamente estatal hacia las condiciones para que se constituya un espacio plural de intercambio de ideas, experiencias y bienes y se discurra acerca de las reglas más justas y de las políticas públicas más convenientes al bien general.

Este conjunto de principios, sumados a los de la libertad de asociación (en sus sentidos positivo, de que es lícito asociarse, y negativo, de que la pertenencia a las asociaciones no puede ser impuesta sino en casos excepcionales), hace del derecho una condición necesaria para la formación de una potente sociedad civil.

Lo público y lo privado del derecho civil

En su sentido más elemental, también el derecho privado está sujeto a las exigencias de publicidad de todo el derecho. Del mismo modo como no puede haber un lenguaje privado, también carece de sentido un ordenamiento secreto de las relaciones interpersonales espontáneas. Como toda institución, el derecho atribuye un sentido, un significado público, a las relaciones privadas. Aunque los principios que rigen las relaciones privadas hipotéticamente no necesitan ser enunciados, porque en esencia corresponden a criterios de justicia conmutativa que son espontáneamente discernibles, el derecho civil tiene las ventajas de la relativa certeza que le dan las leyes y costumbres jurisprudenciales, así como su arquitectura conceptual, desarrollada a lo largo de más de dos mil años. Todo ello contribuye a que las múltiples relaciones privadas en que coactuamos estén sujetas a reglas que definen con cierta precisión y coherencia su sentido público, esto es,

[23] El más profundo análisis jurídico de la libre competencia se encuentra, en mi opinión, en la obra de F. Böhm, un jurista vinculado a la escuela austríaca. Una síntesis tardía de su pensamiento en “Privatrechtsgesellshaft und Marktwirtschaft” (Sociedad de Derecho Privado y Economía de Mercado) (1966), pp. 75-151.

conocido y general. Ello es refrendado por el deber que tiene el juez de decidir las contiendas con arreglo explícito a una regla o un principio de derecho. En definitiva, en las relaciones privadas, la mano invisible del mercado sólo resulta posible y virtuosa gracias a la mano visible del derecho[24].

Por cierto que el derecho privado y las regulaciones tienen una dimensión relativa variable en el conjunto de las instituciones políticas y jurídicas. Con todo, la sociedad contemporánea es esencialmente una sociedad de derecho privado[25]. Ello se muestra en datos de la economía chilena: aproximadamente el 78% del gasto en Chile es privado; y del 22% que corresponde a gasto gubernamental[26], parte importante se efectúa mediante relaciones de derecho privado, incluso en ámbitos donde la actuación del estado se justifica por razones de justicia distributiva (como ocurre con la educación y las prestaciones de salud, por ejemplo).

Adam Smith, hace casi tres siglos, describió con una analogía muy lúcida la forma cómo actúa el derecho privado en la sociedad, en contraste con un ordenamiento que siga radicalmente la lógica de las regulaciones: mientras la mentalidad de sistema concibe al derecho como un plan, donde la mano del gobernante puede arreglar los miembros de la sociedad del mismo modo como se arreglan las piezas del ajedrez, en la que él llama gran sociedad, cada pieza individual tiene su propio principio de movimiento[27]. El papel del derecho en una sociedad de ese tipo no es dirigir la conducta, sino establecer un orden que haga posible la convivencia entre personas y asociaciones que interactúan por sí mismas.

Por cierto que un orden que concibe la conducta a partir del movimiento autónomo de cada una de sus partes cumple un fin de interés general, aunque sus normas estén referidas a relaciones privadas. Ello es consecuencia de que no sólo los actos deliberadamente orientados a conseguir un fin sirven a necesidades comunes[28]. Así, las políticas económicas de mercado pueden ser justificadas por razones de pura utilidad, simplemente porque un orden de ese tipo es más eficiente para la creación de riqueza. Desde

---

[24] E. J. Mestmäcker, "La Mano Visible del Derecho: Derecho y Economía en Adam Smith" (1986), p. 59 y ss.

[25] F. Böhm, "Privatrechtsgesellshaft und Marktwirtschaft" (Sociedad de Derecho Privado y Economía de Mercado) (1966).

[26] El gasto corriente del estado ascendió a 20,5% en 1999 (Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, Estadísticas de las Finanzas Públicas, 1999), pero se estima superior al 22% si se atienden gastos correspondientes al 10% de las ventas de cobre destinado legalmente a las Fuerzas Armadas.

[27] A. Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (1976), párr. VI ii 2, 16.

[28] F. von Hayek, *Law, Legislation and Liberty*, T. I, *Rules and Order* (1973), cap. VI.

esta perspectiva utilitarista, el derecho privado en su conjunto es concebido como la más eficaz de las regulaciones. Por eso, un derecho privado cierto, justo y eficazmente cautelado por tribunales independientes, ha llegado a ser un aspecto fundamental para la competencia entre los países.

El análisis económico del derecho extrema este punto de vista instrumental y propone que todas las instituciones sean concebidas a la luz de su función de bienestar[29]. Desde este punto de vista, todo el derecho, incluidos el privado y el penal, es entendido como una forma de regulación, como una técnica normativa para la obtención de un fin (aumento del bienestar, prevención de la delincuencia y así sucesivamente).

Un camino diferente ha seguido la tradición jurídica que se remonta a la filosofía clásica y a los ancestros romanos del derecho privado moderno. A pesar de su esencial publicidad, al derecho privado subyace una manera de pensar que difiere de la típica de las regulaciones. Su perspectiva corresponde a la forma más intuitiva de la justicia, que se centra exclusivamente en el tipo o naturaleza de la relación. Lo esencial desde el punto de vista de esa justicia correctiva o conmutativa es el vínculo entre las partes, y no un fin social más general que resulta ajeno a esa precisa relación. Si alguien causa un daño a otro, la justicia correctiva exige atender al hecho y al daño, a las exigencias de reparación o de liberación de responsabilidad que resultan de las características típicas de la relación entre las partes. Y en los contratos, la atención se pone en el vínculo normativo que nace del acuerdo o intercambio y en los deberes que para ellas surgen de cumplir lo recíprocamente prometido.

La diferencia del derecho privado con las regulaciones administrativas reside en la lógica, en la manera de pensar. Hayek entendió que esa diferencia se plantea entre la lógica de la organización, del orden creado mediante decisiones regidas por el propósito de influir en la realidad social, y la lógica característica de un orden espontáneo, en que las reglas no tienen otro sentido que regir conductas según principios de justicia aplicables a cada tipo de relación, de modo que no responden a un plan preconcebido de autoridad pública alguna[30]. En esta dimensión, coincidente con la tradición intelectual del derecho privado, éste es un orden normativo orientado por un concepto no instrumental de lo que es correcto, que, expresado en términos kantianos, constituye "el conjunto esencial *(Inbegriff)* de las condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede ser conjugado con el arbitrio del otro según una luz general de la libertad"[31]. Así, mientras en la

[29] R. Posner, *The Economics of Justice* (1980), pp. 48-49.

[30] Ibídem, cap. II.

[31] I. Kant, *Metaphysik der Sitten* (Metafísica de las Costumbres) (1968 [1797]), p. 337.

lógica de la organización el derecho es una técnica para obtener fines públicos (distributivos o de otra especie), que por nobles y fundamentales que sean resultan extrínsecos a la relación entre las partes, el derecho civil o comercial, y en cierto sentido el derecho penal[32], son derecho privado porque atienden exclusivamente a la justicia de la precisa relación[33].

Por cierto que el derecho privado tiene componentes técnicos de extrema formalidad, como ocurre con el régimen posesorio sobre inmuebles o con las reglas sucesorias, que, en general, se expresan en refinadas y muy precisas categorías conceptuales. Sin embargo, su más típica función es hacer intelegibles normativamente relaciones libres y espontáneas. Por mucho que sus reglas, para garantizar la certeza, están extensamente sujetas al código binario (de lo lícito y lo ilícito; de lo que pertenece a mí y a ti) el sentido de esas reglas no expresa un mero programa de conducta. En el derecho privado, como en el penal con el que presenta importantes analogías, el sentido de lo correcto, dicho metafóricamente, pertenece a la comprensión de la norma.

Es una experiencia fascinante que hasta hoy los pueblos más remotos, en el trasfondo de sus respectivas culturas, lleguen a concebir las relaciones de derecho privado bajo principios análogos. Gianbattista Vico aludía hace tres siglos a la existencia de un fondo común de verdad entre los hombres, una especie de derecho natural, "que nació separadamente en todos los pueblos sin saber nada unos de otros; y que después, con motivo de guerras, embajadas, alianzas y comercios, se advirtió que era común a todo el género humano"[34]. Bajo condiciones diferentes, lo mismo puede decirse hoy del derecho que hace posible que los intercambios sean universales. Por cierto que a ello contribuye la existencia de tratados que rigen las compraventas internacionales o la emisión de acreditivos bancarios y otros medios de pago, así como la codificación de las prácticas del comercio. Sin

---

[32] El derecho penal es estatal en el sentido de que se funda directamente en el monopolio estatal para aplicar la coacción. Sin embargo, sustancialmente el derecho penal, a pesar del enfoque utilitarista que recibe en las teorías que lo justifican como técnica preventiva, se sostiene internamente en último término en la idea de justicia, en la medida que el principio de culpabilidad sigue estableciendo un límite a toda actuación punitiva del estado. Al respecto, Art. Kaufmann, *Das Schuldprinzip*, (1961, 2ª edición); E. Cury, *Derecho Penal. Parte General*, Tomo I (1992, 2a. edición), p. 43 y ss.; J. Bustos, *Manual de Derecho Penal* (1989, 3a. edición), p. 56 y ss.; K. Roxin, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, T. I (1994, 2ª edición), p. 36 y ss.; E. Barros, "Derecho y Moral. Consideraciones a Propósito de la Teoría de los Delitos Económicos (1983), p. 3 y ss.

[33] Una excelente relación contemporánea de la "privacidad" del derecho privado, en oposición a las políticas públicas, a la luz de las tradiciones romanista y kantiana, en E. Weinrib, *The Idea of Private Law* (1995), p. 210 y ss.

[34] G. Vico, *Ciencia Nueva*, L. I, tomado de edición de M. Fuentes (1956), secc. 2, XIII, 146.

embargo, lo esencial para que esa comunicación resulte posible, en la escala que ha llegado a ser realidad, es ese trasfondo de común sabiduría práctica que inspira al derecho privado.

Ya los romanos entendieron que había un derecho de gentes, aquel que usan todos los pueblos humanos y que regía el comercio, las compraventas, los arrendamientos, las obligaciones[35]. La relación entre el comprador y el vendedor es comprensible, aun sin conocer el derecho de un país extranjero, a la luz de los principios prácticos de la razón que iluminan acerca de los deberes que surgen de promesas e intercambios. Así se explica la relativa actualidad de las reflexiones de Aristóteles y Cicerón acerca de la justicia, a diferencia extrema de lo que ocurre, por ejemplo, con la física. Aún hoy, el verdadero conocedor del moderno derecho de los negocios, a diferencia del mero operador práctico de regulaciones, es quien ha logrado penetrar en el modo de pensar del derecho privado, que exige comprender la naturaleza normativa de las compraventas, los préstamos y las sociedades, lo que, a su vez, supone descubrir las razonables expectativas recíprocas de las partes en cada tipo de relación[36].

Desde esta perspectiva, como se podrá comprender, resulta muy diferente el papel de la ley en el derecho privado que respecto de las regulaciones administrativas. Aunque esté expresado en leyes o códigos, el sentido de la norma de derecho privado no se agota en la declaración, como podría ocurrir, por ejemplo, con una ley tributaria que establece una tasa. El espíritu humano requiere de instituciones que den sentido "regular" a nuestras relaciones[37], de modo que también en el derecho privado las leyes tienen la importante tarea de crear certeza y de anticipar la adaptación a nuevas circunstancias. Pero, como lo muestran los ejemplos recientes de las legislaciones sobre libre competencia, valores o sociedades de capital, las principales normas del derecho privado usualmente son discernibles desde el punto de vista de la justicia, como normas que atribuyen deberes y

[35] *Digesto*, de Justiniano, I, 1, 1, 4 (tomado de versión castellana de A. D'Ors, F. Hernández, P. Fuenteseca, M. García y J. Burillo, 1968).

[36] Éste es el sentido de la referencia metódica al tópico de la "naturaleza de las cosas" en el método jurídico, utilizado en la dogmática privatista para invocar el sentido normativo inmanente a la *comprensión* de una relación. El Código Civil se refiere en lugares muy importantes del derecho de obligaciones a la "naturaleza de la relación" (arts. 1.444, 1.546, 1.563). Sobre la noción de "naturaleza de las cosas", O. Ballweg, *Zu einer Lehre von der Natur der Sache* (Sobre una Teoría de la Naturaleza de las Cosas) (1960) y A. Kaufmann, *Analogía y Naturaleza de la Cosa*, (1976 [1964]). El más penetrante estudio de la función que desempeña el ámbito normativo implícito (*Normbereich*) en las relaciones interpersonales, en F. Müller, *Juristische Methodik* (1971).

[37] Las reflexiones más lúcidas (tal vez porque son muy modestas) sobre la naturaleza normativa de la norma de derecho privado las he encontrado en J. Carbonnier, *Flexible Droit* (1992, 7ª edición), p. 85 y ss.

derechos, y no como programas que materializan políticas públicas. En el corazón del derecho privado está la confianza que resulta de la ecuación de justicia y de certeza de la regla aplicable a la relación.

Por lo mismo, el papel de la jurisprudencia y de la doctrina científica es esencial para la adaptación progresiva de las instituciones a los cambios de la economía. En el fondo, el problema no es *si* los contratos celebrados por Internet estarán o no regidos por el derecho privado, sino más bien cómo actúan los principios y reglas conocidos sobre estas nuevas realidades técnicas. Como mostró Wittgenstein en sus estudios tardíos, existen reglas que son subsumtivas, porque su sentido se agota en su expresión, en su tenor literal, y hay otras que llevan implícito el cambio y la adaptación según sean los contextos en que se aplican[38]. Por su naturaleza, las normas del derecho privado exigen este arte. Por eso, el derecho civil y el comercial son históricos, por permanentes que sean las formas de pensar y los principios en que se apoyan. Así, están igualmente alejados de la ingeniería social, que concibe todo el derecho a la luz del principio de organización, y del escepticismo moral, que niega sentido a la pregunta por el principio de justicia material que subyace a las relaciones.

El aspecto público del derecho privado, se muestra en los referidos bienes de la certeza y de la justicia que contribuye a materializar. En razón del primero, la regla nos permite orientarnos al futuro, nos proporciona la confianza de saber a qué atenernos. En virtud del segundo, la relación está sujeta al escrutinio de un juez que resuelve desde un punto de vista externo, atendiendo a la naturaleza de la relación, a las expectativas que razonablemente podemos tener respecto a la conducta de los demás. Y el derecho privado, para cumplir esa función pública, actúa típicamente como un orden evolutivo y no puramente subsumtivo.

En uno de sus ensayos más hermosos, Hannah Arendt escribió que "sin testamento o, para sortear la metáfora, sin tradición —que selecciona y denomina, que transmite y que preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor—, parece que no existe una continuidad voluntaria en el tiempo y, por tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro"[39]. A pesar de los cambios que nos deslumbran, la llamada nueva economía sigue soportándose sobre los principios jurídicos universales a los que aludía Vico, y la tarea de legisladores, jueces y expertos en derecho privado es

---

[38] La explicación de los tipos de reglas que describe L. Wittgenstein en sus *Investigaciones Filosóficas* (1958) la he tomado de S. Körner, "Über Sprachspiele und rechtliche Institutionen" (Sobre Juegos Lingüísticos e Instituciones Jurídicas), en *Ethik: Grundlagen, Probleme, Anwendungen*, Akten des 5. Internationalen Wittgenstein Symposiums (1981), p. 480 y ss.

[39] H. Arendt, *Entre el Pasado y el Futuro* (1996 [1954]), p. 11.

la típica de las humanidades: que los nuevos problemas surgidos del tráfico sean planteados como preguntas que el jurista hace a la tradición.

La inversión de lo público: el derecho subjetivo

El más radical reconocimiento de lo privado se produce cuando el derecho es concebido a partir del concepto de derecho subjetivo[40]. El derecho subjetivo es una creación conceptual moderna. Mientras en la antigüedad la ley es concebida en una dimensión relacional, el derecho subjetivo desplaza el foco de atención hacia el individuo, hacia la persona que dispone de un título jurídico para actuar a su propio arbitrio.

La libertad romana, incluso en épocas de la república, no fue jamás concebida como un poder atribuido socialmente a la voluntad del individuo. Incluso los filósofos y juristas antiguos más sensibles a la filosofía de la virtud, conciben la libertad a la luz del orden de la sociedad. La libertad aparece indisolublemente unida a la idea de *res publica* (república o cosa pública), entendida como aquello que afirma la solidaridad interna de los ciudadanos[41].

---

[40] En este párrafo el concepto de derecho subjetivo es entendido en su sentido originario, comprensivo de los derechos de libertad personal y de propiedad. Este concepto se extiende, asimismo, a la idea de igualdad ante la ley, que excluye discriminaciones arbitrarias, y de igual participación política, aunque éstas fueron de más tardío desarrollo histórico. El lenguaje de los derechos ha tendido a expandirse sin límites en el último siglo. Es difícil encontrar un bien que se tenga especialmente por valioso que no haya sido transformado en un derecho. En una primera extensión el derecho subjetivo fue extendido hacia los derechos sociales, que se hacen efectivos *por medio* de la comunidad y que se materializan jurídicamente en acciones para exigir prestaciones públicas (servicios o subsidios para la educación, por ejemplo) o privadas (como el antiguo derecho de alimentos, que se reconoce a quien está en situación de destitución económica en contra de su cónyuge y familiares más cercanos). Los jueces constitucionales tienen usualmente poco que decir acerca de la justicia distributiva de las políticas públicas que instrumentan las regulaciones, porque si exceden un cierto umbral mínimo de intervención (que usualmente está dado por el principio de no discriminación), se ven en la necesidad de adoptar decisiones que requieren de una legitimidad propiamente política y no jurisdiccional. Algo semejante puede decirse de los derechos que expresan bienes transpersonales, como el medio ambiente, lo que explica que en la Constitución chilena sólo sea amparado por turbaciones que resulten arbitrarias y, además, ilegales (*Constitución Política*, art. 19 N° 26). Una crítica a la noción individualista del derecho subjetivo, en los trabajos de M. Villey, recopilados en *Estudios en Torno a la Idea de Derecho Subjetivo* (1976). Una crítica a la expansión del derecho subjetivo hacia cualesquiera bienes y su alejamiento de la idea correlativa de responsabilidad, en M. A. Glendon, *Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse* (1991) (capítulos 1, 2 y 7 traducidos al castellano en *Estudios Públicos* 70, otoño 1998, p. 77 y ss.). Una llamada de atención acerca del contenido político, en tanto supone distribuir recursos fiscales, de los derechos, en S. Holmes y C. R. Sunstein, *The Cost of Rights* (1999).

[41] J. Gaudemet, *Institutions de l'Antiquité* (1982, 2ª edición), pp. 355 –357.

Los derechos de las personas, como elementos estructurales del orden jurídico moderno, responden tanto a una cultura individualista, como a una teoría moral. Los orígenes más remotos del individualismo se encuentran, según Peter Berger, en las dos tradiciones espirituales más poderosas de la cultura occidental, que rompen con la tradición arcaica, que radica las preguntas por el orden de la sociedad en sede mitológica. En primer lugar, en la experiencia religiosa de Dios personal y trascendente, que se presenta a Moisés como "Soy el que soy", y que inevitablemente crea el contrapunto del ser humano individual. A ello se suma, el descubrimiento por los griegos de la capacidad del hombre para actuar de acuerdo con la razón[42].

En la confluencia de estas tradiciones espirituales, sumada a los cambios culturales y económicos de la temprana modernidad, surge la noción de *derecho subjetivo*, de un derecho radicado en la persona. Su primera formulación parece proceder de la obra de teólogos y juristas de la escolástica tardía española, especialmente del jesuita Luis de Molina[43]. En sus orígenes, el derecho subjetivo permite explicar las facultades que la propiedad confiere al titular sobre la cosa. Luego, el instituto se expande hacia las demás libertades personales y políticas y a los derechos de la personalidad. Una aplicación del nuevo principio individualista es la justificación moderna del orden político a partir de un pacto ideal en que ciudadanos libres e iguales, en ejercicio de sus derechos naturales, convienen voluntariamente en un orden que hace posible la vida en sociedad. De acuerdo con este orden básico, a la persona son reconocidos derechos de libertad (que se expresan en la tradición del constitucionalismo y del derecho privado) y derechos potestativos o competencias para participar en la decisión política, relativa a quien habrá de gobernar (que se expresan en la tradición de la democracia).

---

[42] P. Berger, *The Capitalist Revolution. Fifty Propositions about Prosperity, Equality and Liberty* (1986), p. 95, con referencia a E. Voegelin. G. W. F. Hegel, *Fundamentos de la Filosofía del Derecho*, traducción A. Llanos (1987 [1821]), p. 189, vio el origen interno de la personalidad autónoma, en sí misma infinita, en la libertad interior que surge de la religión cristiana, y el externo en la universalidad abstracta del mundo romano, en un principio que habría resultado ajeno al mundo griego.

[43] H. Coing, *Europäisches Rechtsgeschichte*, T. I (1985), p. 172 y ss., citando a L. de Molina, *De Iustitia et Iure Opera Omnia* (1611), tract. II, disp. I. Sobre los orígenes filosóficos de la doctrina del derecho subjetivo, en W. von Occam, M. Villey, *Seize Essays de Philosophie du Droit* (1969), p. 140 y ss. Una interpretación corporativista del origen de los derechos subjetivos, en Ch. Taylor "Invocar la Sociedad Civil" (1997 [1995]), p. 278 y ss.). Asume Taylor que el derecho subjetivo ya aparece en la maraña de deberes y derechos recíprocos que caracterizaron el estatuto social del medievo. Por ilustrativa que esa perspectiva resulte para comprender la compleja red de relaciones en la sociedad medieval, el moderno concepto *jurídico* de derecho subjetivo responde a la perspectiva inversa, esencialmente individualista.

Desde un punto de vista puramente lógico, el reconocimiento de derechos (especialmente de libertad) supone una distribución del poder al interior de la sociedad[44]. Todo poder que se les reconozca constitucionalmente a las personas restringe correlativamente los medios de que se puede valer el estado para cumplir sus fines. La técnica de los derechos, asociada a la distribución de funciones al interior de la organización estatal, supone una actitud escéptica respecto del poder público: por grandes que sean los beneficios que se pueden obtener de un gobierno fuerte y carente de control, pesan más los males excesivos que con ello se arriesga sufrir, como tuvieron conciencia los fundadores de la tradición constitucional norteamericana[45].

Por eso, relacionada como está con el poder público, la doctrina jurídica de las libertades necesariamente comprende una teoría acerca de los límites de la coacción. En tal sentido se aviene con una posición conservadora, naturalmente recelosa de toda autoridad pública que pretenda definir mediante la ley positiva lo que es moralmente correcto e incorrecto. Como irónicamente expresa Oakeshott, esa actitud conservadora se opone a "la concepción del gobierno de la sociedad como un medio de transformar compulsivamente un sueño privado en uno público"[46]. El establecimiento de límites al poder público no significa abandonar la idea de moralidad, sino desplazar la pregunta por lo bueno, lo hermoso, lo virtuoso y lo admirable hacia el ámbito de la sociedad civil. La doctrina jurídica de las libertades refleja, por un lado, una desconfianza respecto a los bruscos medios del derecho para imponer una noción del bien y, por otro, la confianza en las capacidades de la persona humana para abrirse un camino de buena vida en el amplio espacio de la sociedad civil. El reconocimiento de derechos, por consiguiente, constituye una instancia institucional que hace viable la reconstrucción de la persona como sujeto moral responsable[47].

Desde esta perspectiva, las libertades no se fundan en un mero escepticismo acerca de lo que es justo, que suspende la pregunta por el bien, sino, al revés, en un concepto positivo acerca de la persona como sujeto moral. El propio pluralismo, más allá de constituir una mera realidad social de nuestro tiempo, tiene la dimensión moral y jurídica de hacer viable la coexistencia de formas de vida virtuosa que son muy diferentes entre sí,

---

[44] L. Weinreb, *Natural Law and Justice* (1987), p. 133.

[45] Ch. Wolfe, *La Transformación de la Interpretación Constitucional*, trad. M.G: Rubio de Casas y S. Valcárcel (1991 [1986]), p. 496 y ss.

[46] M. Oakeshott, "On Being Conservative" (1991 [1962]), p. 426. (Traducido al castellano en *Estudios Públicos*, 11, invierno 1983, pp. 245-270.)

[47] Sobre esta bipolaridad de la libertad, L. Weinreb, "Natural Law and Rights" (1996), pp. 277-283.

pero que coexisten y se enriquecen recíprocamente[48]. El desarrollo de la comunidad, el ideal republicano de participación de las personas en lo público, también se produce desde abajo, a partir de personas libres que establecen diversas redes de vínculos formales e invisibles. Por eso, la lógica de los derechos de libertad permite establecer un vínculo coherente entre el derecho privado y el sistema político, evitando el divorcio, que ya ocurrió en Roma, entre un derecho privado vigoroso y un despotismo político desbocado.

La prevalencia de las libertades, en consecuencia, exige que la sociedad política asuma como elemento constitutivo un concepto moral positivo de la persona en sus relaciones en la sociedad. Y como lo expresó Kant, "no caben aquí componendas; no cabe inventar un término medio entre derecho y provecho, un derecho condicionado en la práctica"[49]. Por eso, si son concebidos como meras formulaciones legales o constitucionales, los derechos son tan precarios y accidentales como el contenido de cualquiera regulación. Siempre podrá encontrarse una razón de estado suficientemente poderosa como para justificar que se use a las personas como medios para grandes fines. El riesgo es doblemente grave, porque como ha mostrado Hannah Arendt en su sobrecogedor ensayo sobre el totalitarismo del s. XX, los grandes fines, pasada la pasión inicial, suelen diluirse en la afirmación nihilista del puro poder[50].

La radical individuación que supone la técnica de los derechos encuentra, por cierto, grandes limitaciones y problemas. La forma de la universalidad (en definitiva, de la publicidad), que Hegel mostró como uno de los principios fundamentales de la sociedad civil, cede, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, a la forma de lo particular, que hace de la persona concreta un fin en sí mismo[51]. Las definiciones básicas del derecho tienden a perder su referencia a la comunidad y a los fines más generales de la vida en común. La publicidad esencial del derecho de la sociedad hace inviable que sea pensado sobre un fundamento radicalmente monológico,

---

[48] Un lúcido ensayo normativo sobre el pluralismo como camino de construcción de la identidad en la interacción respetuosa con otras identidades humanas distintas, en M. Orellana, *Pluralismo: Una ética del Siglo XXI* (1994). Un enfoque jurídico de la autonomía y el pluralismo como condiciones contemporáneas de una buena vida en J. Raz, "Autonomía, Tolerancia y el Principio del Daño" (1999), p. 91 y ss.

[49] I. Kant, *Para la Paz Perpetua* (1796), Apéndice II a la 2ª edición; tomado de la versión alemana *Zum ewigen Frieden*, edición de T. Valentiner (1983), p. 68.

[50] H. Arendt, *Los Orígenes del Totalitarismo*, 3 (1982), p. 572 y ss.

[51] Con todo, Hegel es lo suficientemente lúcido como para descubrir que aun el principio de la particularidad sólo deviene realidad normativa en la medida que se universalice (esto es, llegue a ser público) en la forma de una institución jurídica; al respecto, G. W. F. Hegel, *Fundamentos de la Filosofía del Derecho*, Parte III, Secc. 2, p. 187 y ss.

desarraigado de la cultura, de formas de vida que nos constituyen como personas, incluso en la dimensión de nuestra libertad[52]. Encapsulado en el individuo, dotado de prerrogativas expresadas en derechos subjetivos, el derecho arriesga ignorar su significado relacional. Ello se muestra, por ejemplo, en el derecho a la privacidad, el más individualista de los derechos, que ha dado lugar en la jurisprudencia constitucional norteamericana a un derecho constitucional al aborto, inclinando dramáticamente la balanza en contra de la vida. La lógica de los derechos amenaza finalmente a que éstos devengan en un conjunto de garantías de autogratificación, que tienen por destinatarios a seres domesticados, en vez de representar la autoconfianza basada en la disciplina personal[53].

Sin embargo, por apodíctica que se plantee la lógica de los derechos, la práctica constitucional ha debido reconocer que con frecuencia ellos están en situación de conflicto con otras garantías, como ocurre típicamente entre la privacidad y la libertad de expresión. Y que, inevitablemente, el bien general requiere limitarlos para fines muy diversos, ambientales, urbanísticos o simplemente de justicia distributiva. A la larga, el sopesamiento de bienes, el juicio prudencial acerca del contenido esencial de los derechos, como exige la Constitución, resulta inevitable al momento de definir el alcance de los derechos. Radicar esta función en los jueces se justifica como una manera de distribuir y especializar el poder público. Los jueces, aun en casos extremos, están obligados a fundar sus decisiones en una regla o en un principio; en una deliberación que forma parte indivisible de su decisión. Aunque ello no garantiza un resultado seguro, así y todo, la técnica de los derechos introduce en ese discernimiento un elemento que inclina la balanza del argumento y la razón en favor de la persona, en la tarea de propender hacia un orden dotado de esa nobleza elemental, que puede esperarse del derecho de toda sociedad política bien constituida.

---

[52] La doctrina de los derechos subjetivos, además de su trasfondo ético individualista, tiene una inevitable filiación racionalista. La crítica al racionalismo que emprendieron Heidegger y Wittgenstein tiene precisamente por resultado superar la perspectiva del agente humano constitutivamente solitario que entra en sociedad por un acto asociativo voluntario, como en las doctrinas del contrato social originario hasta la contemporánea de J. Rawls en *Teoría de la Justicia*, traducción M. D. González (1979 [1971]). No es el lugar de discutir lo influyente que esa crítica ha sido en la filosofía política contemporánea del comunitarismo y del republicanismo. Sólo cabe destacar que el derecho subjetivo en la tradición jurídica moderna es el contrapunto a la tendencia inversa de absorción de la persona en la comunidad o en la razón de estado.

[53] M. A. Glendon, *Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse* (1991), p. 173 (capítulos 1, 2 y 7 traducidos al castellano en *Estudios Públicos* 70, otoño 1998, p. 77 y ss.).

II. EXCURSO: LO PÚBLICO EN LA CULTURA JURÍDICA CHILENA

Si volvemos la mirada hacia Chile, constatamos que los historiadores, cualquiera sea la actitud que adopten, convienen en que la organización de lo que se llamó "el estado en forma" fue decisiva en la configuración del país en el siglo XIX.

A pesar de sus peculiaridades nacionales, el estado chileno en el medio siglo que siguió a Portales respondió a características bastante universales del estado moderno. En sus orígenes está un levantamiento militar que derivó en un eficaz control de la fuerza, específicamente del ejército, por la autoridad presidencial, y a la implacable represalia del caudillismo y la rebelión. Los sentimientos que lo inspiraron fueron, por un lado, la necesidad de un orden que previniera del caos y la guerra civil, pero también una particular voluntad de ser de la sociedad política[54], que, bajo formas políticas diferentes, antes había caracterizado la formación de los estados nacionales europeos.

Parece haber acuerdo en los historiadores que el antecedente más directo del estado moderno fue la revolución que en el siglo XI emprendió Gregorio VII para dotar a la Iglesia de una estructura jurídica centralizada, jerárquica y autogenerada, que había sido extraña a su tradición durante los diez siglos anteriores. Ello contribuyó tempranamente a crear un modelo de organización política que se extendió al terreno secular[55]. Con el tiempo, esos principios llegaron a expresarse en el concepto de soberanía, en su doble sentido de que el estado nacional reúne en sí todos los poderes temporales y de que el ejercicio de esas potestades reside en un titular cuya voluntad política no puede estar sujeta al control de juez alguno, porque ello significaría transformar en súbdito al soberano[56]. Así, la voluntad suplanta a la razón quebrada por las disputas políticas, las guerras de religión y la emergencia de intereses locales o grupales.

Si se atiende al derecho del estado chileno del siglo pasado, se comprueban notables analogías con esta tradición política. Es cierto que la Constitución de 1833 consolidó un sistema de sucesión en el poder y que los ciudadanos, incluso quienes daban sustento social al poder, estaban regidos por la ley, así como los funcionarios y los jueces. En este sentido, tempranamente se tendió a consolidar un orden basado en reglas públicas y generales. Pero más allá del ordenamiento civil, el ejercicio del poder por

[54] Véase Hernán Godoy, *El Carácter Chileno* (1981, 2ª edición), p. 213.

[55] H. J. Berman, *Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition* (1983), p. 94 y ss.

[56] J. Bodin, *Los Seis Libros de la República*, L. I, cap. X (tomado de la edición castellana de P. Bravo (1985 [1576], p. 72 y ss.).

la presidencia era esencialmente discrecional cuando así lo exigía el interés general, calificado por la propia autoridad. La concepción escéptica, más bien cínica, que Portales tenía del poder, se basa en un juicio desdeñoso respecto de las virtudes ciudadanas del país. Su opinión era que la sociedad se sostiene en paz y progresa porque el poder de la presidencia es ejercido sin otra limitación que la virtud moral de los gobernantes. En ese concepto de gobierno "la Constitución y el reglamento son una simple telaraña cuando se trata del orden y del interés público", como aun expresaría Antonio Varas poco antes de la revolución de 1891[57]. El estado chileno gestado en el siglo XIX tiene un fundamento político aristocrático y una forma jurídica positivista, en absoluto religiosa o filosófica. Como antes ocurrió con los estados nacionales europeos, el estado chileno se definió como centralizado y jerárquico, con una presidencia que domina el proceso político, resguarda el orden como el bien más preciado e impulsa voluntariosamente una tarea nacional unívoca en el terreno militar, económico y cultural.

Todo ello coincidió con el temprano florecimiento del derecho privado: primero mediante la abolición de las vinculaciones de la tierra y la apertura al comercio; luego, con las reformas judiciales y las codificaciones; y, finalmente, con la sujeción de todo el territorio a un estatuto general de propiedad. Esos mismos derechos de propiedad, la vigencia de los contratos, la responsabilidad por daños que se causaran a los demás estuvieron regidos por un ordenamiento coherente, refinado y esencialmente eficaz. Pero quedó en suspenso la primacía del derecho en lo que concernía al gobierno y a la legislación. La Corte Suprema, en pleno siglo XIX, ofició al presidente Bulnes, en perfecta consonancia con las doctrinas sobre la soberanía del siglo XVI: "El Tribunal observará que ninguna Magistratura goza de la prerrogativa de declarar la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas después del Código fundamental, y de quitarles, por este medio sus efectos y su fuerza obligatoria. Este poder, que por su naturaleza sería superior al del legislador mismo, puesto que alcanza a anular sus resoluciones, no existe en Magistratura alguna, según nuestro sistema constitucional"[58]. Huneuss, en su espléndido comentario a la Constitución de 1833, muestra desencantadamente que su aplicación efectiva se tradujo a menudo en la indefensión jurídica frente al gobierno y la administración[59]. Un siglo

---

[57] Citado por M. Góngora, *Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX* (1986), p. 42.

[58] Oficio de 27 de junio de 1848, referido por L. Claro, *Lecciones de Derecho Civil Chileno y Comparado*, T. I (1898), p. 30.

[59] J. Huneuss, *La Constitución ante el Congreso* (1891, 2ª edición). Véanse, por ejemplo, comentarios a art. 36 (27) (T. I, p. 177 y ss.); art. 82 (73) (T. II, p. 49 y ss.); art. 108 (99) (T. II, p. 223 y ss.); art. 135 (126) (T. II, p. 306 y ss.).

después, la Constitución de 1925 sólo reconoció un recurso de efecto limitado para el control de constitucionalidad de las leyes (la inaplicabilidad por inconstitucionalidad) y si bien previó tribunales administrativos para el control de los actos del gobierno, en la práctica esos tribunales nunca fueron constituidos, a la vez que los tribunales ordinarios declararon su propia incompetencia para fiscalizar a la administración, con fundamento, como en el siglo anterior, en el principio de separación de poderes.

Durante la crisis de inobservancia del derecho ocurrida bajo el gobierno del Presidente Allende, aunque los tribunales reconocieron acciones, especialmente civiles, para controlar la ilegalidad y la desviación de poder que subyacía a la estatización de la economía mediante actos de gobierno, quedó en evidencia la precariedad constitutiva del estado de derecho en Chile. Simplemente no había tradición establecida de control judicial de los actos de gobierno. Recién, en las actas constitucionales de 1976, y luego en la Constitución de 1980, se introdujo una acción judicial de amparo, el recurso de protección, que cautela la generalidad de los derechos de las personas frente a la administración. El avance, con todo, resulta paradojal, si se atiende a que se produjo cuando el país vivía bajo gravosos estados de excepción que suprimían o restringían severamente el ejercicio de las libertades más fundamentales.

Con todas sus calificaciones, el régimen político chileno de la época fundacional de la república se explica con referencia al orden pacificador de Hobbes (sin la connotación individualista que le da sustento) y a la voluntad de poder expresada en la idea de soberanía que acompañó a la formación de los estados nacionales. Por el contrario, las tradiciones de libertades y fueros del derecho español antiguo, ya debilitadas durante el tardío absolutismo colonial[60], jamás fueron invocadas durante la república. Tampoco resultaron evidentes a nuestra cultura jurídica las modernas libertades naturales, como las enunciadas por Locke, Kant o los padres fundadores de la constitución norteamericana. Bajo estas condiciones, no resulta extraño que en Chile la cultura jurídica dominante haya sido positivista, y que todo el derecho haya sido concebido como el contenido de actos de poder.

Las más diversas ideas provenientes de la filosofía moral y política, incluyendo las del constitucionalismo democrático, han circulado profusamente por nuestras elites. Sin embargo, las ideas por sí solas no crean instituciones, como se muestra en las sucesivas ocasiones en que ante la

[60] A. Jocelyn-Holt, *La Independencia de Chile. Tradición, Modernización, Mito*, (1992), p. 43 y ss.

angustia del desgobierno, el orden ha sido impuesto por las armas. De modo análogo a las virtudes personales, que se muestran en los hábitos y costumbres, las instituciones no se construyen a partir de conceptos abstractos, sino sobre la base de la conciencia jurídica concreta que se expresa en las prácticas. Aristóteles decía que los pueblos son bárbaros en sus principios porque todavía no están civilizados por las costumbres[61]. Las ideas encuentran un terreno fértil cuando las circunstancias de la historia favorecen su aceptación; pero no subsisten, ni enraízan por sí solas. Por eso, principios normativos como la "libertad de expresión", el "sometimiento de la autoridad pública a la ley", la "buena fe", por mucho que sean invocados con las mismas palabras en diversas constituciones y codificaciones civiles, tienen en cada sociedad un significado diferente, que se expresa en las prácticas normativas, cuyas raíces residen en que son vividas existencialmente como obligatorias[62].

Por casi dos siglos el positivismo legal, que define el derecho como un conjunto de actos de voluntad del soberano, ha sido la teoría del derecho asumida por la sociedad chilena. Así, por lo demás, lo expresó Andrés Bello en el primer artículo del Código Civil al definir la ley como una "declaración de la voluntad soberana". Ese mismo código fue luego interpretado de modo legalista, como si emanara de un acto de voluntad desligado de toda tradición, lo que conduce a desconsiderar el sentido de lo correcto que subyace a un ordenamiento civil refinado. Desde esa perspectiva positivista, la Constitución de 1980, creada durante un estado de excepción, arriesga a ser concebida como un instrumento que fue otorgado durante una dictadura plebiscitaria, más que como un ordenamiento en el que naturalmente consentimos, porque establece las bases razonables y generales de la convivencia de personas libres que tienen un común interés en una convivencia justa y ordenada.

En verdad, en una democracia constitucional el derecho se mueve en los dos extremos del poder. Por un lado, le da forma, lo organiza y lo legitima; distribuye competencias y señala procedimientos para crear continuamente nuevas normas, que son el resultado de decisiones públicas en sentido estricto. Por otro lado, sin embargo, se funda en normas y princi-

---

[61] Citado por G. Vico, *Ciencia Nueva*, L. I, tomado de edición de M. Fuentes (1956), secc. 2, párr. LXXXV, sin indicación de la fuente.

[62] Los límites más próximos del positivismo formalista como doctrina acerca del derecho se encuentran precisamente en la vigencia que las prácticas agregan a las reglas expresadas en textos. Ése fue el tema central de *mi* tesis de doctorado, *Rechtsordung und Rechtsgeltung. Eine Kritik des analytischen Rechtsbegriffs*, (1984). Un espléndido análisis reciente del concepto de regla como práctica en Ch. Taylor, "Seguir una Regla" (1997 [1995]), p. 221 y ss.

pios de convivencia, que sólo secundariamente se expresan en decisiones o en textos legales, sino más bien se muestran en el orden que da forma efectiva a nuestra vida de relación. En definitiva, al derecho de una sociedad compleja resulta inevitable una tensión dialéctica entre voluntad y razón[63]. La primera se muestra en las necesidades de gobierno, de seguridad y de certeza; la segunda se expresa en la idea clásica de un orden que aspira a la justicia.

La voluntad se expresa en esa positividad característica del orden político establecido desde los orígenes de la república. El derecho, al establecer procedimientos para la adopción de decisiones, contribuye a que esa voluntad política sea aceptada. Así, la ley positiva resulta esencial para la gobernabilidad y la certeza, bienes muy valiosos en la sociedad contemporánea, que, con toda su admirable complejidad, requiere de poder público con mayor urgencia e intensidad que cualquiera época anterior. El derecho responde en esta dimensión a la lógica pragmática del poder, cuyo principio orientador es la eficacia.

En el otro polo, la razón invoca principios y normas que no pretenden ser aceptados por su pura positividad, por mucho que se expresen en textos constitucionales y legales. Su función institucional es dirimir en favor de la justicia, del orden básico y mínimo de convivencia, el conflicto entre la moral y el poder. Como expresó Kant en su hermoso ensayo sobre la paz perpetua, hay un momento en que la política se encuentra con la moral y el derecho de los hombres y, en tales circunstancias, éste debe ser mantenido como cosa sagrada, por muchos sacrificios que cueste al poder dominador[64]. Del mismo modo como la forma política de la democracia contribuye a la gobernabilidad, en tanto legitima el poder desde los ciudadanos y regula su traspaso pacífico, así, el derecho también conoce instituciones para procurar el predominio público de la razón, como he intentado mostrar en este ensayo.

Para que el derecho contribuya a un equilibrio virtuoso de voluntad y de razón, resulta indispensable, sin embargo, atender al *sistema de acciones judiciales*. Lo distintivo del derecho es que su observancia pueda ser establecida por un juez independiente. Por cierto que los límites entre lo jurídico y lo político son a menudo tenues, casi invisibles, lo que plantea una exigencia de autolimitación ascética de los jueces. Pero también requiere de ellos, especialmente de los que poseen jurisdicción constitucional, un

---

[63] Al respecto, P. Kahn, *The Cultural Study of* Law (1999).

[64] I. Kant, *Para la Paz Perpetua* (1796), tomado de la versión alemana *Zum ewigen Frieden*, edición de T. Valentiner (1983), Apéndice I, p. 67.

amplio discernimiento de aquello que pertenece a las definiciones básicas del sistema jurídico que da forma elemental a la convivencia.

Los tiempos han cambiado desde Prieto, Portales y Bulnes. Por severos que sean los problemas de integración de grupos o pueblos que permanecen desintegrados o excluidos del progreso, la sociedad chilena ha llegado a ser crecientemente una comunidad política de ciudadanos. Por cierto que ello supone asumir el pluralismo estructural de la sociedad chilena, que plantea un desafío de reconocimiento recíproco en la diferencia, no sólo de individuos, sino también de grupos[65]. Pero también exige que cada ciudadano esté en situación de hacer valer su derecho. Ello supone discernir críticamente nuestro sistema de acciones y procedimientos judiciales. Nuestra tradición jurídica, como muchas otras, ha estado más caracterizada en el pasado por declaraciones que por acciones constitucionales y administrativas eficaces. Un jurista inglés escribía a fines del siglo XIX que el mayor error de muchos estados era entender que la Constitución se agota en declaraciones de derechos; porque por mucho que la expresión de principios en leyes sea una tarea natural de los legisladores, la experiencia enseña que las reglas de *habeas corpus,* que permiten recurrir en toda circunstancia a los tribunales cuando se es víctima de un abuso, no declaran principio ni derecho alguno, pero valen para efectos prácticos más que cien artículos constitucionales que expresan libertades individuales[66].

Por cierto que el derecho, por lo expuesto al comenzar este ensayo, sólo se refiere fragmentariamente a las relaciones que se hacen realidad al interior de una sociedad. Pero, en ese ámbito limitado, el fundamento práctico de lo jurídico está dado por las acciones judiciales. Por eso, su supremacía en ese ámbito limitado (pero esencial) que está tocado por el derecho supone precisamente que existan prácticas judiciales. Un estado de derecho en forma, como toda institución asentada en la cultura, se muestra en que podamos simplemente decir "así se hace entre nosotros" cuando un tribunal es invocado para resolver un conflicto o poner término a un abuso. Ante la debilidad de nuestra antigua tradición jurídica publicista, resulta necesario discernir los procedimientos que son condición para que llegue a consolidarse una práctica generalizada de observancia del derecho. El recurso de protección, con todas las limitaciones de una mera acción de amparo, y la reforma procesal penal parecen ser un punto de partida en una evolución que comienza. En el derecho, para ascender a las ideas e intereses más

---

[65] Sobre las diversas formas que puede asumir una política pública de igual respeto, Ch. Taylor, "La Política del Reconocimiento" (1997 [1995]), p. 293 y ss.

[66] A. V. Dicey, *Introduction to the Law of Constitution*s, reimpresión 8ª edición, 1982 [1915]), p. 117 y ss.

nobles, primero es necesario descender a las oscuridades de la caverna. Y en el piso de la caverna de la sociedad humana, uno de los primeros signos de civilización es el reconocimiento de acciones para que un juez independiente decida lo que es el derecho de cada cual, aun en circunstancias excepcionales.

BIBLIOGRAFÍA

Arendt, H. *Entre el Pasado y el Futuro*. Barcelona: Península, 1996 [1954].

Arendt, H. *Los Orígenes del Totalitarismo*, 3. Madrid: Alianza, 1982.

Austin, J. *Lectures on Jurisprudence*. 1873. 4ª edición.

Austin, J. L. *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence*. 1832.

Ballweg, O. *Zu einer Lehre von der Natur der Sache* (Sobre una Teoría de la Naturaleza de las Cosas). Basilea: 1960.

Barros, Enrique. *Rechtsordung und Rechtsgeltung. Eine Kritik des analytischen Rechtsbegriffs*. Ebelsbach: R. Gremer, 1984.

Barros, E. "Derecho y Moral. Consideraciones a Propósito de la Teoría de los Delitos Económicos". En *Estudios Públicos*, 10, 1983.

Barton, T.; Franklin, M.; y Wright, J. *The First Amendment and the Fifth Estate*. Nueva York: Foundation Press, 1986.

Benthan, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1789.

Berger, P. *The Capitalist Revolution. Fifty Propositions about Prosperity, Equality and Liberty*. Nueva York: Basic Books Inc., 1986.

Berman, H. J. *Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1983.

Bodin, J. *Los Seis Libros de la República.* Edición castellana de P. Bravo. Madrid: Technos, 1985 [1576].

Böhm, F. "Privatrechtsgesellshaft und Marktwirtschaft" (Sociedad de Derecho Privado y Economía de Mercado). En *Ordo* XVII, 1966.

Bustos, J. *Manual de Derecho Penal*. Barcelona: Ariel, 1989, 3ª edición.

Carbonnier, J. *Flexible Droit*. Paris: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1992, 7ª edición.

Cicerón. *De la República*, Libro I. Edición alemana de W. Sontheimer. Stuttgart: Reclam, 1980.

Cicerón. *De los Deberes*, Libro III. Traducción de B. Estrada. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1948.

Claro, L. *Lecciones de Derecho Civil Chileno y Comparado*, Tomo I. Santiago: Estudio Poligráfico Roma, 1898.

Coing, H. *Europäisches Rechtsgeschichte*, Tomo I. München: Beck, 1985.

Cury, E. *Derecho Penal. Parte General*, Tomo I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1992, 2a. edición.

Chapus, R. *Droit Administratif Général*, Tomo 1. París: Montchrestien, 1998, 12ª edición.

De Molina, L. *De Gustitia et Iure Opera Omnia*. Venecia, 1611. Citado en H. Coing, *Europäisches Rechtsgeschichte*, Tomo I. München: Beck, 1985.

Dicey, A. V. *Introduction to the Law of Constitution*. Indianapolis: Liberty Classics, 1982 reimpresión de la 8ª edición [1915].

Eib-Eibesfeldt, I. *Der vorprogrammierte Mensch*. München: Piper, 1974.

Fleming, J. G. *An Introduction to the Law of Torts*. Oxford: Clarendon Press, 1985, 2ª edición.

Fontaine, J. A. "Banco Central Autónomo: en Pos de la Estabilidad". En F. Larraín y R. Vergara (editores), *La Transformación Económica de Chile*. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2000.

Fuller, L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.

García de Enterría, E.; y Fernández, T. R. *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo 1. Madrid: Civitas, 1984.

Gaudemet, J. *Institutions de l'Antiquité*. París: Sirey, 1982, 2ª edición.

Gehlen, A. "El Hombre y sus Instituciones". En *Ensayos de Antropología Filosófica*. Santiago: Editorial Universitaria, 1973.

Gehlen, A. "Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung" (Sobre el Nacimiento de la Libertad desde la Alienación). En *Archiv für Rechts und Sozialphilosophie* XL, 1952.

Glendon, M. A. *Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse*. Nueva York: The Free Press, 1991. [Versión en castellano de los capítulos 1, 2 y 7 en *Estudios Públicos* 70, otoño 1998.]

Godoy, Hernán. *El Carácter Chileno.* Santiago: Editorial Universitaria, 2ª edición, 1981.

Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon, 1961. [Hay traducción de G. Carrió.]

Hegel, G. W. F. *Fundamentos de la Filosofía del Derecho.* Traducción de A. Llanos. Buenos Aires: S. XX, 1987 [1821].

Holmes, S.; y Sunstein, C. R. *The Cost of Rights.* Nueva York: W.W. Norton, 1999.

Huneuss, J. *La Constitución ante el Congreso*. Santiago: Imp. Cervantes, 1891, 2ª edición.

Jocelyn-Holt, A. *La Independencia de Chile. Tradición, Modernización, Mito*. Madrid: Mapfre, 1992.

Justiniano. *Digesto.* Edición de A. D'Ors y otros. Pamplona: Aranzandi, 1972.

Justiniano. *Digesto.* Versión castellana de A. D'Ors, F. Hernández, P. Fuenteseca, M. García y J. Burillo. Pamplona: Aranzadi, 1968.

Kahn, P. *The Cultural Study of Law.* Chicago: Chicago University Press, 1999.

Kant, I. *Para la Paz Perpetua*. Versión alemana: *Zum ewigen Frieden,* edición de T. Valentiner. Stuttgart: Reclam, 1983.

Kant, I. *Metaphysik der Sitten* (Metafísica de las Costumbres). En *Obras Completas,* Tomo VIII, editadas por W. Weischedel. Frankfurt: Suhrkamp, 1968 [1797].

Kaufmann, Art. *Das Schuldprinzi.* Heidelberg: Müller, 1961, 2ª edición.

Kaufmann, A. *Analogía y Naturaleza de la Cosa*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1976 [1964].

Kelsen, H. *Teoría Pura del Derecho*. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1960 [1934].

Körner, S. "Über Sprachspiele und rechtliche Institutionen" (Sobre Juegos Lingüísticos e Instituciones Jurídicas). En *Ethik: Grundlagen, Probleme, Anwendungen,* Akten des 5. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 1981.

Larenz, K. *Schuldrecht. Allgemeiner Teil*. Munich: Beck, 1987, 14ª edición.

Lorenz, K *Sobre la Agresión: El Pretendido Mal*. México: S. XXI, 1981, 11ª edición [1963].

Luhmann, N. *Recht der Gesellschaft* (Derecho de la Sociedad). Frankfurt: Suhrkamp, 1993.

Luhmann, N. “Die Codierung des Rechtssystems”. En G. Roelleche (ed.), *Rechtsphilosophie oder Rechtstheorie*. Darmstadt: Luchterhand, 1988.

Luhmann, N. *Legitimation durch Verfahren* (Legitimación mediante Procedimientos). Darmstadt: Luchterhand, 1969.

Mestmäcker, E. J. “La Mano Visible del Derecho: Derecho y Economía en Adam Smith”. En *Estudios Públicos* 23 (invierno 1986).

Mill, J. S. *On Liberty* (De la Libertad de Pensamiento y Discusión). Edición de G. Himmelfarb. Londres: Penguin, 1974 [1859].

Müller, F. *Juristische Methodik*. Berlin: Duncker & Humblot, 1971.

Müller, J. P. *Grundrechte in der Schweiz*. Bern: Stämpfli, 1999.

“New York Times vs. Sullivan”, 1964. En T. Barton, M. Franklin, y J. Wright, *The First Amendment and the Fifth Estate*. Nueva York: Foundation Press, 1986.

Nietzsche, F. *Más allá de Bien y Mal*. Edición de A. Sánchez. Madrid: Alianza, 1972.

Nietzsche, F. *Sobre la Genealogía de la Moral*. Edición de A. Sánchez. Madrid: Alianza, 1972.

Oakeshott, M. “On Being Conservative”. En *Rationalism in Politics and other Essays* (prólogo de T. Fuller). Indianapolis, 1991 [1962]. (Versión en castellano en *Estudios Públicos*, 11, invierno 1983.)

Orellana, M. *Pluralismo: Una Ética del S. XXI*, Santiago: Editorial Universidad de Santiago, 1994.

Pieper, J. *Las Virtudes Fundamentales*, Madrid: Rialp, 1997, 5ª edición.

Posner, R. *The Economics of Justice*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1980.

Rawls, J. *Teoría de la Justicia*. Traducción M. D. González. México: Fondo de Cultura Económica, 1979 [1971].

Raz, J. “Autonomía, Tolerancia y el Principio del Daño”. En *Estudios Públicos*, 76 (primavera 1999).

Roxin, K. *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, Tomo 1. Munich: Beck, 1994, 2ª edición.

Smith, A. *The Theory of Moral Sentiments*. Edición de D. Raphael y A. L. Macfie. Oxford: Clarendon Press, 1976.

Taylor, Ch. “Invocar la Sociedad Civil”. En *Argumentos Filosóficos*. Barcelona: Paidós, 1997 [1995].

Taylor, Ch. “La Política del Reconocimiento”. En *Argumentos Filosóficos*. Madrid: Paidós, 1997 [1995].

Taylor, Ch. *Argumentos Filosóficos*. Barcelona: Paidós, 1997 [1995].

Vico, G. *Ciencia Nueva*. Edición de M. Fuentes. Buenos Aires: Aguilar, 1956.

Villey, M. *Estudios en Torno a la Idea de Derecho Subjetivo*. Valparaíso, Ediciones Universidad Católica de Valparaíso, 1976.

Von Bogdandy, A. *Gubernative Rechtssetzung*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000.

Von Hayek, F. *Law, Legislation and Liberty*, Tomo III: *The Political Order of a Free People*. Chicago: Chicago University Press, 1979.

Von Hayek, F. *Law, Legislation and Liberty*: Tomo I: *Rules and Order*. Chicago: The University of Chicago Press, 1973.

Von Müch, I.; y Kunig, Ph. (eds.). *Grundgesetzkommentar:* Tomo 1. München: Beck, 1992, 4ª edición.

Von Occam, W.; y Villey, M. *Seize Essays de Philosophie du Droit*. París: Dalloz, 1969.

Weinrib, E. *The Idea of Private Law*. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1995.

Weinreb, L. “Natural Law and Rights”. En R. George (ed.) *Natural Law Theories. Contemporary Essays*. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Weinreb, L. *Natural Law and Justice*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1987.

Wittgenstein, L. *Investigaciones Filosóficas*. Traducción de A. García Suárez y U. Moulines. Barcelona: Civitas, 1988 [1958].

Wolfe, Ch. *La Transformación de la Interpretación Constitucional*. Traducción de M. G. Rubio de Casas y S. Valcárcel. Madrid: Civitas, 1991 [1986]. □

DEMOCRACIA Y RAZÓN PÚBLICA
EN TORNO A JOHN RAWLS

Óscar Godoy Arcaya

El autor analiza las principales ideas sobre la concepción de justicia política como equidad de John Rawls, siguiendo el hilo conductor de la razón pública democrática. El estudio tiene dos partes. En la primera se establecen las bases conceptuales que según Rawls definen tanto las concepciones liberales de la justicia como las sociedades democráticas bien ordenadas y su racionalidad pública. Estas bases se refieren a la idea de persona y de ciudadano, como libres e iguales, por un lado; y al carácter exclusivamente político de los valores y principios de toda concepción de la justicia que sirva de fundamento a la estructura constitucional de una democracia, por otro. En la segunda parte se expone la concepción rawlsiana de la justicia como equidad o imparcialidad, en el contexto de la familia de concepciones liberales de la política. Y, además, se dan algunas indicaciones sobre su mayor cualidad para servir de estructura básica a las sociedades pluralistas contemporáneas.

ÓSCAR GODOY ARCAYA. Doctor en Filosofía, Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de Teoría Política del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del Institut des Études Politiques de Paris. Miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Consejero del Centro de Estudios Públicos.

La razón pública es una característica esencial de toda sociedad políticamente organizada. Se puede decir que es la facultad a través de la cual ella define las bases de su sistema político, sus instituciones fundamentales, la estructura y modalidades de sus procesos y prácticas políticas, sus proyectos de largo plazo y las decisiones públicas de toda índole que eslabonan su existencia en el tiempo. En consecuencia, hay tantas razones públicas como sociedades políticamente organizadas. Esto es equivalente a afirmar que el Estado, por el hecho de ser un cuerpo político organizado, posee una racionalidad. Y, sobre esta premisa, a sostener que cada régimen político tiene una matriz propia de racionalidad pública. De este modo, al hilo de la división clásica de los regímenes políticos básicos, podemos concluir que la monarquía, la aristocracia y la democracia poseen sus propias racionalidades públicas.

En este trabajo vamos a analizar el concepto de razón pública elaborado por John Rawls. Nuestro propósito primario es dar cuenta de esta concepción y descubrir su capacidad para salvar las aparentes contradicciones de la democracia con la diversidad de doctrinas, ideologías y concepciones religiosas, filosóficas y morales que sustentan quienes viven en ellas. Por lo tanto, la razón pública nos va a servir de hilo conductor para establecer la aptitud de la concepción de justicia política como equidad o imparcialidad, desde la cual aquella fluye, para echar las bases de una democracia pluralista estable. La idea de razón pública rawlsiana nos remite a los principios y valores que fundamentan y regulan las relaciones de los ciudadanos en una democracia constitucional[1]. O sea, justamente las relaciones entre quienes deben convivir y cooperar preservando identidades, pertenencias y filiaciones que los separan y diferencian entre sí al interior de una democracia.

La razón pública aparece en la obra de Rawls como una característica central de la sociedad democrática bien ordenada[2], es decir, como una "sociedad efectivamente regulada por una concepción política de la justicia"[3], que todos sus miembros aceptan como suya. La politicidad de la justicia se plantea como respuesta a uno de los problemas más arduos que enfrentan las democracias contemporáneas. Se trata de la cuestión de las bases de la convivencia y la cooperación social, en un contexto en que el

[1] Samuel Freeman, "The Idea of Public Reason Revisited" (1999), p. 574.
[2] Ibídem, p. 573.
[3] John Rawls, *Political Liberalism* (1993), p. 35.

hecho del pluralismo religioso, filosófico y moral, que es una marca distintiva de las sociedades abiertas, induce a los miembros de la sociedad civil a la división, el conflicto, la intolerancia e incluso la violencia. De un modo intuitivo sabemos cómo las democracias resuelven *de facto* este grave problema; sin desconocer, además, los avances del constitucionalismo democrático que tienen el mismo propósito. Pero, al mismo tiempo, tenemos conciencia sobre el grave y constante peligro que se cierne sobre las democracias, que consiste en la tentación de las doctrinas y de las ideologías, especialmente aquellas que tienen una fuerte base mayoritaria, de destruir las prácticas pluralistas e incluso los complejos arreglos constitucionales sobre los cuales se fundan la convivencia y la cooperación. La concepción rawlsiana de la razón pública aspira a fortalecer normativamente al agente principal de la convivencia democrática y a las instituciones a través de las cuales ella se despliega; o sea, al ciudadano y a la estructura básica de la sociedad democrática.

1. Bases de la razón pública de la democracia liberal

Sobre la razón pública, nos dice Rawls, hay que hacer tres afirmaciones preliminares: ella es la razón de los ciudadanos como tales; es, en seguida, la razón cuyo objeto preciso es el bien público; y, en fin, su naturaleza y contenidos son públicos, en el sentido de que los principios e ideales que la sociedad política expresa a través de la justicia política y su ejercicio son públicos[4].

En una sociedad democrática, la razón pública es la razón de los ciudadanos, concebidos como libres e iguales al interior de un cuerpo colectivo, y habilitados para ejercer el poder político final o soberano. La libertad y la igualdad aparecen así vinculadas específicamente al ciudadano democrático, es decir a la persona investida de un estatuto político. Pero el ciudadano no es sino la persona investida de derechos políticos para participar en la esfera pública. Por esta razón, en definitiva, se trata aquí de una *concepción política de la persona*. Y, por lo mismo, parece necesario referirse al contenido de la misma, para establecer en qué sentido hablamos de libertad e igualdad como rasgos políticos de ese sujeto subyacente en el ciudadano que es la persona humana como ciudadano de una democracia.

[4] Ibídem, p. 216.

a) Persona, ciudadano y razón pública

La concepción política de la persona nos dice que ésta es libre al menos en tres dimensiones[5]. En primer lugar, en virtud del poder moral de aceptar, hacer suya y sustentar una concepción del bien[6]. Rawls discierne dos poderes o facultades morales en la persona humana: su capacidad para adherir a una concepción religiosa, filosófica o moral y darle forma a su proyecto de vida a partir de la misma, por un lado; y su sentido de la justicia, por otro[7]. Ahora bien, la libertad política de la persona, en la esfera de las concepciones del bien, solamente se refiere a su poder de adherir, aceptar, revisar y rechazar esta o aquella doctrina, sobre bases racionales y razonables. De este modo, desde un punto de vista político, el reconocimiento de libertad solamente se limita a postular que la decisión acerca de la filiación y la desafiliación a una doctrina le corresponde individualmente a cada cual.

Los contenidos de las decisiones personales y las formas como cada cual articula su propia vida a la luz de una concepción del bien son particulares o privados. Tales decisiones forman parte de la identidad de las personas y su proyección en la esfera privada y social; pero, como veremos a lo largo de este escrito, ellas no integran la esfera de lo político. Digamos, por ahora, sumariamente, que esas mismas personas, ahora como ciudadanos y a partir de su sentido de la justicia, afirman valores de justicia política y desean verlos encarnados en las instituciones y en las políticas públicas. Se trata de dos esferas de acción distintas, dotadas de su propia y distintiva racionalidad. Lo que es político respecto de las concepciones del bien es el ejercicio que cada cual hace de su libertad para hacerlas suyas o rechazarlas.

Las personas son políticamente libres, en segundo lugar, porque se experimentan a sí mismas como fuentes legítimas de demandas, que los demás y las autoridades, en especial, deben considerar como válidas[8]. Esta autopercepción de sí como titular, habilitado y poderizado para hacer demandas, es una idea intuitiva, evidente de suyo, que se expresa en todos los regímenes políticos, pero que se manifiesta más plenamente y con más fuerza en las democracias[9]. Ahora bien, esta libertad es política, además,

[5] Ibídem, p. 29.
[6] Ibídem, p. 30.
[7] Ibídem, p. 19.
[8] Ibídem, p. 32.
[9] En la tradición del derecho político occidental se reconoce el *derecho de petición* como una facultad natural e indiscutida de los súbditos. Este derecho, por ejemplo, se ejercía por medio de los *cahiers des doléances* que se presentaban en los Estados Generales en

porque los ciudadanos deben validar sus propias demandas haciéndolas en el marco de las instituciones y las prácticas de la democracia. Y, en ultima instancia, a la luz de los principios y valores de la justicia política que les sirven de fundamento. La libertad política, en este segundo nivel, consiste en la autolegitimidad de cada cual como fuente de sus demandas. Pero, para hacer efectiva esta libertad, las demandas deben enmarcarse en los principios e instituciones políticas de la sociedad. El hecho de que las demandas de cada cual eventualmente tengan su origen en concepciones del bien no es relevante, porque ellas no tienen rango ni visibilidad política, dado que su portavoz las expresa en términos políticos y en virtud de su estatuto ciudadano. De este modo se quiere decir que la politicidad de esta forma de libertad está radicada en la persona misma, en su calidad de vocero de sus propias demandas. Estamos diciendo, en otras palabras, que la legitimidad política de las personas, como ciudadanos habilitados para hacer demandas válidas, se funda en ellos mismos, como tales personas, y no en la concepción del bien a través de cuyos contenidos o lenguajes ellas puedan eventualmente expresarlas.

Esta precisión es importante, porque en muchos regímenes no democráticos se puede asegurar el derecho de los ciudadanos a manifestar sus demandas, pero sujetándolo a la cláusula de que éstas deben subordinarse totalmente a una doctrina religiosa, filosófica o moral. Así, por ejemplo, si se diese el caso de que en una sociedad tales demandas debieran ajustarse absolutamente al islamismo, al catolicismo, al judaísmo o al puritanismo. En suma, el valor intrínseco de la doctrina que el sujeto demandante afirma a través de su discurso, no cae bajo el campo de visión de esta forma de libertad. Aquello que está en juego, en cambio, es su realidad de persona como ciudadano, sujeto y portavoz de demandas válidas.

Los ciudadanos son libres, en tercer lugar, porque son capaces de asumir la responsabilidad de sus fines[10]. Se trata, en efecto, de que los ciudadanos, junto con llevar adelante sus propios fines, en el marco de los principios de justicia política que regulan la estructura básica de la sociedad, asumen las obligaciones que derivan de los mismos. En definitiva, si suponemos ciertas instituciones fundamentales y un elenco de bienes disponibles —cuya índole es establecida por los principios políticos que nosotros mismos hemos aceptado—, nuestras demandas también deben ajustarse a la

Francia durante la monarquía. Este derecho no afectaba a la libertad del príncipe para tomar la decisión final, en virtud de su potestad plena y soberana. Pero en la argumentación expuesta se quiere destacar que la existencia de este derecho indica el reconocimiento de una libertad del sujeto político.

[10] John Rawls, *Political Liberalism* (1993), p. 33.

razonable capacidad del sistema para satisfacerlas. Esta capacidad se entiende mejor, según Rawls, a la luz de la idea de la sociedad como un sistema justo de cooperación. Pues, en definitiva, los principios y valores de la justicia política definen los esenciales constitucionales y la justicia básica de la sociedad bien ordenada. Ellos, a su vez, regulan las relaciones de cooperación de las personas en el largo plazo histórico, o sea, a través de las generaciones. En el núcleo interior de esas relaciones cooperativas se instala un principio de reciprocidad que pone límites insoslayables a las demandas que emergen de los fines de cada cual. Tales demandas se "dirigen a" los demás, especialmente a las autoridades políticas, pero también los incluyen, pues de lo contrario constituirían demandas unilaterales, voces paralelas, simplemente arbitrarias. El sistema de cooperación, que fluye de una sociedad bien ordenada por principios de justicia política, está condicionado a que la reciprocidad opere realmente, articulando el altruismo con que en conjunto buscamos el bien general y la mutua y legítima ventaja que cada cual desea obtener de la cooperación[11].

En fin, para una mejor comprensión del concepto rawlsiano de ciudadanos libres, conviene incluir en esta línea argumental una nota acerca de cómo nosotros, según nuestro autor, nos convertimos en ciudadanos autónomos. Rawls sostiene que la constitución del ciudadano autónomo pasa por actualizar la capacidad humana de discernir principios de cooperación que todos puedan aceptar. Los ciudadanos, en las sociedades pluralistas, no pueden satisfacer su más profunda aspiración a construir las bases de la sociedad civil sobre los principios de su doctrina comprehensiva, religiosa, filosófica o moral. Ello es contradictorio con la libertad e igualdad a lo menos por dos razones. En primer término porque reducir los principios de la sociedad a los principios de una doctrina particular entraña extinguir o hacer desaparecer arbitrariamente el hecho de su pluralismo, afectando a la libertad y a la igualdad de las personas. Y, en segundo término, porque ello involucra poner a disposición de una doctrina comprehensiva —y, por lo mismo, del universo particular de quienes la sostienen— el poder coercitivo del Estado, que necesariamente debería reprimir o violentar al resto de las doctrinas y a sus sostenedores para imponerse sobre ellas. Los ciudadanos pueden, en cambio, sin afectar la integridad de su propia doctrina, tener "una vida política compartida en términos aceptables para todos como ciudadanos libres e iguales"[12]. Esos términos justos de cooperación están al alcance de la razón práctica, en unión con las concepciones de la persona

[11] Ibídem, p. 50.
[12] Ibídem, p. 98.

como libre e igual y de la "sociedad como un sistema justo de cooperación a través del tiempo"[13].

En la actualización de esta capacidad de autonomía, la razón pública tiene una función central, porque es a través suyo que los ciudadanos solucionan y superan sus diferencias. Ahora bien, los ciudadanos adoptan una perspectiva autónoma cuando ella no está impuesta por otros ciudadanos o proviene de alguna doctrina comprehensiva, sino cuando afirman libremente una doctrina política, o sea a la luz de la razón práctica y de las concepciones de las personas como libres e iguales y la sociedad como un sistema cooperativo fundado en la reciprocidad. Al hacer esta afirmación, nos dice Rawls, "nosotros, como ciudadanos, nos convertimos en seres autónomos, en términos políticos"[14].

Los ciudadanos, como vimos, son libres. Pero, además, son iguales. La idea de igualdad a la cual apela Rawls es aquella que encontramos en la cultura política de las sociedades democráticas[15]. La igualdad consiste en la posesión de una igual libertad en el triple sentido que hemos expuesto más arriba. Los ciudadanos, nos dice Rawls, son iguales en virtud de la posesión mínima básica de los dos poderes morales de la persona humana, es decir, del sentido de la justicia y la capacidad de afirmar y sostener una concepción del bien[16]. La posesión de estos dos poderes nos habilitan como miembros plenos de un sistema de cooperación; y, a la vez, nos constituyen en sujetos de los mismos derechos, libertades y oportunidades básicas[17]. Ahora bien, esta doble habilitación nos caracteriza como ciudadanos. Si ejercemos nuestros poderes morales es obvio que somos agentes morales, en sentido general, pero si los ejercemos como personas libres e iguales, investidos de los mismos derechos, libertades y oportunidades, en la esfera de la cooperación social y a través de las generaciones, entonces lo hacemos en la precisa y específica condición de ciudadanos[18]. En este sentido podemos hablar más bien de agentes políticos.

Hemos hecho un recorrido por la concepción del ciudadano rawlsiano, que en definitiva no es sino una concepción de la persona como libre e igual, pero en tanto miembro de un sistema de cooperación social regulado por principios de justicia política. La necesaria racionalidad de los ciudadanos libres e iguales, sin la cual éstos no podrían discernir los principios y valores de la justicia política, ni crear las instituciones de la estructu-

[13] Ibídem, p. 98.
[14] Ibídem, p. 98.
[15] Ibídem, p. 79.
[16] Ibídem, pp. 19, 79, 81.
[17] Ibídem, p. 79.
[18] Ibídem, p. 109.

ra social básica, ni configurar, en suma, una sociedad bien ordenada, es la razón pública. Veamos ahora cuál es el campo al cual se aplica esta razón.

b) La constitución de una sociedad democrática bien ordenada

Rawls restringe la aplicación de la razón pública a las cuestiones fundacionales de la organización política de la sociedad. En consecuencia, ella no cubre todo el vasto campo de la actividad pública, como podría creerse a primera vista. En efecto, la razón pública solamente opera para tomar decisiones concernientes a los esenciales constitucionales y a los asuntos de justicia básica. Dicho de otro modo, esta razón es la racionalidad colectiva de los ciudadanos cuando éstos deben tomar decisiones acerca de los principios fundamentales de la estructura básica de la sociedad: el régimen de gobierno y los canales del proceso político; la división de poderes; las facultades de la legislatura, el ejecutivo y la judicatura; el sistema electoral y los límites del gobierno de la mayoría; los derechos y libertades básicas; las principales instituciones sociales y económicas; y todo lo referente a la justicia política (que se debe entender también como justicia distributiva)[19].

En la esfera de los derechos y libertades básicas hay que distinguir aquellas que se ciñen al canon de la igualdad, por una parte, de aquellas que fluyen de la aplicación de principios de justicia distributiva, por otra. En efecto, al instituir principios políticos justos, en la estructura básica de la sociedad se especifican y asegura el ejercicio de tales y cuales libertades y derechos iguales para todos, como son la igualdad ante la ley, los derechos de opinión, asociación y otros. Pero, a la vez, como esos principios incluyen las bases de la justicia distributiva, en la estructura básica también se especifican las instituciones y normas que regulan la aplicación de una justicia social apropiada a ciudadanos que son personas libres e iguales. La función de estas instituciones y normas es corregir y limitar las desigualdades sociales y económicas, sin cuya acción la libertad y la igualdad básica de la democracia serían inexistentes.

De acuerdo a esta reducción a lo esencial, quedan marginados del uso de la razón pública una gran parte de los temas del debate público. Para entender este punto de vista hay que tomar en cuenta que en la sociedad civil se despliegan una pluralidad de racionalidades, que bajo ningún res-

[19] Ibídem, p. 227.

pecto son públicas. Rawls argumenta que en el complejo tejido de la sociedad civil, además de las posiciones particulares de los individuos sobre los más diversos asuntos públicos, existe una vasta pluralidad de asociaciones que desarrollan sus propias formas de racionalidad. Rawls sostiene que estas asociaciones no hacen un uso público sino social de la razón[20]. De este modo, por ejemplo, las iglesias y las universidades, sociedades científicas y profesionales, corporaciones culturales, etc., recurren a la razón no pública para organizarse, proyectar la realización de sus fines, deliberar y tomar decisiones, asuntos que solamente les incumben a sus miembros.

Es obvio que todas esas asociaciones que existen en el seno de la sociedad civil reflexionan y deciden sobre su quehacer. Esa actividad constituye evidentemente una racionalidad, pero, como tal, solamente está dirigida a orientar la acción de sus propios miembros. No se dirige, entonces, a la sociedad en general, ni tiene como agentes a los individuos como ciudadanos, sino como particulares. Tales racionalidades tienen rasgos comunes, porque todas ellas se sujetan a un mismo concepto de juicio, apelan a principios comunes de inferencia y se rigen por idénticas reglas de evidencia (y se rigen por normas jurídicas comunes). Si no fuese así, no podrían deliberar, ni tomar decisiones inteligibles y válidas para todos sus miembros. A este respecto, Rawls dice que sin las características comunes de la razón social no habría razonamiento en sentido estricto, sino solamente recursos retóricos y medios de persuasión.

Hay, en conclusión, una sola razón pública y muchas razones no públicas. La primera es la razón de los ciudadanos como tales, y no hay otra; en cambio, las razones no públicas son todas las racionalidades que ejercen los individuos a través de su membrecía en las múltiples asociaciones a las cuales pertenecen. A este respecto, hay que anotar que Rawls advierte que a estas asociaciones se ingresa libremente, en el sentido de que aceptamos ser miembros de ellas por nuestra propia voluntad, sin coacción alguna[21]. Y ello acontece justamente porque los principios fundamentales que informan la estructura básica permiten la libre elección, la libertad de conciencia, de pensamiento y de asociación. En cambio, todos ingresamos involuntariamente a la sociedad en que vivimos, por el solo hecho de nacer en su seno. Y las únicas salidas que *prima facies* tenemos para abandonarla, fuera de la muerte, son el exilio y la emigración.

Pero actos tan radicales como el exilio y la emigración no parecen propios de las sociedades democráticas, en el sentido de que ellos se impongan por los efectos de situaciones intolerables de ausencia de libertad y

[20] Ibídem, p. 220.
[21] Ibídem, p. 221.

oportunidades. Es cierto que la autoridad bajo la cual nacemos y sus anclajes en la cultura y la historia operan tempranamente sobre nosotros, moldeando nuestras vidas. Pero, por otra parte, nuestros propios poderes morales nos abren la posibilidad de aceptar o rechazar, de adecuarnos o intentar modificar los principios que rigen el sistema político en el cual se desarrolla nuestra vida. Y es en este ámbito donde puede constituirse la razón pública, como la razón de los ciudadanos libres e iguales que aspiran a convivir en una sociedad bien ordenada. En efecto, cuando los ciudadanos toman en sus manos la responsabilidad de construir una estructura básica de la sociedad, regulada por principios políticos aceptados por todos, y se dan instituciones y desarrollan prácticas conformes a los mismos, es la razón pública la que se despliega. Y es justamente a ese despliegue al cual debemos referirnos a continuación.

El escenario de la razón pública es el foro público. Ahora bien, en una democracia, el foro público en primera línea está constituido por los espacios institucionales en los cuales discurren y se expresan las actividades y las palabras de las personas representativas. O sea, aquellas personas que directa e indirectamente han recibido la autorización de los ciudadanos para representarlos en la esfera pública. De este modo, la razón pública se expresa por antonomasia a través de los legisladores, cuando hablan y deliberan en el parlamento; de las autoridades del poder ejecutivo cuando hacen pronunciamientos públicos y ejecutan acciones administrativas y de gobierno; y de la judicatura cuando a través de sus sentencias aplica e interpreta las leyes (y en especial de los tribunales constitucionales o de las cortes supremas, cuando éstas ejercen el equivalente al *judicial review* de la Corte Suprema norteamericana).

No obstante, hay otro nivel del foro público en que opera la razón pública. En efecto, también el foro público incluye los discursos de los candidatos a las funciones representativas, de las dirigencias de los partidos y de los conductores de las campañas políticas, así como los programas, plataformas partidistas y electorales, los informes políticos, etc.[22] Y, en fin, la razón pública se activa cuando los ciudadanos discuten un asunto público y lo hacen en tanto militantes, dirigentes de los partidos, y candidatos en campaña electoral, o, simplemente, como voceros de grupos que apoyan causas públicas[23]. No perdamos de vista que Rawls, a pesar de la amplitud

[22] Ibídem, p. 575.

[23] Rawls ordena tres niveles de foro público: 1) jueces de la Corte Suprema; 2) miembros de los poderes ejecutivos y legislativos; y 3) candidatos y dirigentes de campaña, etc. Samuel Freeman (1999), p. 575. Esta división tripartita tiene por objeto establecer la especificidad con que funciona la razón pública en cada uno de esos niveles, asunto que no abordaremos en este trabajo y que está demasiado relacionado con la realidad norteamericana.

material del foro público, restringe la esfera de la razón pública a las cuestiones relacionadas con la estructura básica de la sociedad y las políticas públicas que conciernen a la aplicación de la justicia política y a la justicia distributiva que ella abarca y orienta.

Podemos inferir que hay amplio espacio para un foro no público o semipúblico, que es aquel en el cual se desarrolla el debate sobre variados asuntos de la sociedad civil no relacionados directamente con las cuestiones fundamentales ya expuestas. Este debate tiene lugar apoyando y dando por supuesta esa trama subyacente que llamamos Constitución, esenciales constitucionales o bases de la sociedad políticamente organizada. De este modo, si recurrimos a la distinción de Benjamin Constant entre poder constituyente y poder constituido, podemos decir que la razón pública opera plenamente en los períodos e instancias constituyentes, cuando se trata de establecer o modificar por consenso la Constitución. Y también, en el marco prefijado para los poderes constituidos, en la discusión y decisión sobre cuestiones cruciales relacionadas con la aplicación de la justicia política, especialmente en su dimensión de justicia distributiva, porque en este caso están en cuestión la libertad, la igualdad y las oportunidades básicas de las personas. Las discusiones que desbordan estos dos géneros de asuntos, que en una sociedad compleja son múltiples, se desarrollan siempre al interior de la trama del poder constituido, sin afectarla sustancialmente. Esta esfera configura el amplio espacio de la cultura de la sociedad civil. Y ella incluye una gran diversidad de actividades que fluyen de asociaciones y grupos que promueven múltiples intereses, en el marco de la libertad de pensamiento y de palabra y de la libertad de asociación[24].

Ahora bien, si nos colocamos en el punto de vista de los actores públicos mismos, podemos decir que ellos deberían realizar el "ideal de razón pública". Ello acontece solo si los jueces, los legisladores, los ejecutivos, funcionarios públicos, candidatos, dirigentes políticos, etc., actúan en virtud de la idea de razón pública y exponen a la sociedad civil los argumentos racionales sobre los cuales se fundan tales y cuales decisiones[25]. Esto es equivalente a sostener que ese ideal se realiza cuando los actores nombrados legitiman sus actos demostrando que ellos fluyen de los principios y valores de la justicia política que regulan la estructura básica de la sociedad. En definitiva, se trata de una adecuación entre esos principios y valores —que configuran a la razón pública— y la conducta de los agentes políticos.

[24] Samuel Freeman (1999), p. 576.
[25] Ibídem, p. 576.

El ideal de la razón pública también se refiere a los ciudadanos comunes. La idea de razón pública se realiza idealmente cuando los ciudadanos piensan y actúan como si ellos mismos fuesen los legisladores. Por lo tanto, cuando idealmente se preguntan a sí mismos por las mejores leyes posibles, tomando en consideración qué razones satisfacen más plenamente el criterio de reciprocidad y, en suma, estableciendo cuáles serían aquellas que podrían ser razonablemente aprobadas, mutuamente compartidas y puestas en vigor por todos los ciudadanos[26]. Esta disposición o talante es la plataforma moral que habilita a los ciudadanos a maximizar las posibilidades de elegir correctamente a sus representantes, ejercer un mejor control sobre su gestión y, en fin, premiar o castigar su desempeño, reeligiéndolos o no en las próximas elecciones.

c) La familia de las doctrinas liberales de la justicia política

Si revisamos los argumentos expuestos, podemos concluir que hemos trazado un concepto de ciudadano democrático cuya actividad se despliega en el foro público. El concepto de ciudadano libre e igual es el punto de emergencia de la razón pública, entendida como el flujo de la racionalidad a través del cual el conjunto de los ciudadanos deliberan y toman decisiones acerca de la estructura básica de la sociedad y las cuestiones capitales relacionadas con la aplicación de la justicia política. Ahora bien, para Rawls las decisiones originarias que se adoptan para configurar la estructura básica de la sociedad y las instituciones que emanan de ella deben cumplir una condición *sine qua non* fundamental: los principios y valores sobre los cuales se afirme la estructura básica deben ser políticos y solamente políticos. No pueden ser la consecuencia de doctrinas comprehensivas religiosas, filosóficas y morales. Y ello porque, dado el hecho del pluralismo, tales principios y valores no podrían ser compartidos por todos los miembros de la sociedad civil. Y, además, porque pondrían a disposición de una doctrina comprehensiva y a quienes la sustentan el uso legal de la fuerza de coerción, anexa al poder político.

Rawls, por lo tanto, hace un elisión entre lo político, por una parte, y la esfera de las doctrinas comprehensivas que las personas sostienen para configurar y alimentar sus proyectos de vida, por otra. Esta distinción es fundamental para el liberalismo político. Por esta razón, para el liberalismo político, lo político consiste y opera en el campo estrictamente acotado del derecho y la justicia considerados como *freestandings*, o sea, como inde-

[26] Ibídem, p. 567.

pendientes, sostenidos sobre sí mismos[27]. Si revisamos la filosofía política nos encontraremos con que a lo largo de la historia se nos ha propuesto una diversidad de doctrinas políticas del derecho y la justicia, entre las cuales algunas tienen la característica de ser independientes. A estas últimas —en contraposición a las que son dependientes de una doctrina comprehensiva religiosa, metafísica o moral— las llamamos liberales. Pues bien, Rawls inscribe "su" doctrina sobre la justicia política entendida como equidad o imparcialidad como una más en la familia de las doctrina liberales[28].

En efecto, para establecer los principios de la justicia hay distintos caminos y uno de ellos es aquel que deriva de la posición original. Éste es el camino de Rawls. Las distintas alternativas para establecer tales principios configuran una *familia de concepciones liberales de la justicia política*. Entre ellas, a modo de ejemplo, se pueden nombrar las concepciones de la justicia política de Kant y de Stuart Mill. Para poder hablar de una familia es necesario establecer entre ellas alguna afinidad. Y, en efecto, los rasgos fundamentales que las vinculan entre sí son los que ya hemos expuesto.

Los miembros de la familia liberal definen o especifican y priorizan los derechos, libertades y oportunidades básicas de ciudadanos libres e iguales y establecen medidas para que ellos las ejerzan del modo más pleno posible. Sus concepciones son políticas porque aplican principios y valores políticos a la estructura básica de la sociedad, a sus principales instituciones políticas, sociales y económicas y configuran un sistema de cooperación social libremente consentido por todos. Y, también, porque junto con los principios de justicia incluyen pautas o guías de indagación que especifiquen "maneras de razonar" y criterios para establecer modalidades de información relevantes para tratar los asuntos políticos[29]. Sin estas pautas, nos dice Rawls, los principios de justicia no se podrían aplicar. De este modo, Rawls afirma que la politicidad y el liberalismo básico de los diferentes liberalismos están configurados, por una parte, por los principios de justicia que informan la estructura básica de la sociedad, y por otra, por las directivas de razonamiento y las "reglas de evidencia" a partir de las cuales los ciudadanos juzgan si se aplican o no esos principios y cuáles son las instituciones y leyes que mejor los expresan y proyectan[30]. De estas dos dimensiones de los liberalismos políticos fluye el doble repertorio de valores que ellos afirman: 1) por la vía de los principios de justicia, los valores de la

[27] John Rawls, "Réplica a Habermas" (1998), p. 77.
[28] Ibídem, p. 77. Samuel Freeman (1999), p. 575.
[29] John Rawls, *Political Liberalism* (1993), p. 223.
[30] Ibídem, p. 224.

libertad política y civil igual para todos, la igualdad de oportunidades, la reciprocidad económica y el bien común (como un valor que es la condición de existencia de los tres valores anteriores); 2) por la vía de las directivas de la indagación, los valores políticos de la razón pública; esto es, las libertades básicas y la igualdad de oportunidades necesarias para el despliegue de la deliberación pública democrática, o sea, "la discusión pública razonada de las cuestiones políticas"[31]. Este doble plexo axiológico nos permite, al paso, remarcar que Rawls se cuida bien de establecer que el hecho de que la concepción política de la justicia no constituya una doctrina comprehensiva moral y no dependa de ninguna, no quiere decir que ella misma no sea moral.

Ahora bien, las diferencias entre los miembros de esta familia se refieren a cómo ordenan y balancean los principios y valores comunes, a los mayores énfasis que se ponen en ellos y también a la mayor o menor independencia respecto de las doctrinas comprehensivas que ellas puedan tener. Más arriba se han dado como ejemplo de "otras" concepciones de justicia, emparentadas pero distintas a la de Rawls, aquellas de Kant y Mill. Ambas, según Rawls, trascienden lo político, porque sus ideas de autonomía e individualidad tienen fuertes lazos de pertenencia a sendas doctrinas morales comprehensivas[32]. En este sentido, Rawls sostiene que su concepción de la justicia política, al interior de la constelación de las concepciones liberales, es netamente superior. Y lo es, en primer término, porque además de cumplir con todas las condiciones expuestas, es más independiente que el resto, respecto de cualquier doctrina comprehensiva y, en consecuencia, más equitativa e imparcial. Intentaremos, en la parte final de este texto, dar cuenta de las razones que aduce Rawls para afirmar la superioridad de su teoría de la justicia.

2. La concepción liberal de la justicia como equidad de Rawls

Si la concepción rawlsiana de la justicia, que se denomina justicia política como equidad o imparcialidad, es una concepción liberal entre otras, veamos ahora en qué consiste.

a) La justicia política como equidad y el consenso sobrepuesto

Como punto de partida, tengamos presente que los principios de justicia política que Rawls pretende establecer deben regular las estructu-

[31] Ibídem, p. 224.
[32] John Rawls, "Réplica a Habermas" (1998), p. 78.

ras básicas de una sociedad bien ordenada, de tal modo que ciudadanos libres e iguales, que sostienen posiciones diferentes respecto del bien, puedan cooperar entre sí durante una vida completa, de una generación a la siguiente.

Ahora bien, para discernir y establecer estos principios, previamente hay que hallar un punto de vista desde el cual pueda alcanzarse un acuerdo equitativo o imparcial entre personas libres e iguales. A este punto de vista Rawls llama "velo de la ignorancia"[33]. Este velo intenta evitar que el acuerdo imparcial sobre principios de justicia política, generado por personas libres e iguales, se vea interferido por las situaciones contingentes actualmente existentes, que conceden ventajas de tipo individual, social e histórico a personas y grupos y desventajas de la misma índole a otros. El velo de la ignorancia pone a estas ventajas y desventajas entre paréntesis, en un acto que precede a la elección de los principios de justicia política.

Pero el velo de la ignorancia tiene otro componente, sin el cual tampoco podrían discernirse principios equitativos de justicia política. Ese componente se refiere a las partes que en la posición original, y bajo la condición del velo de la ignorancia, proceden a elegir los principios en cuestión. Esas partes deben ser representativas de ciudadanos libres e iguales, capaces de alcanzar un acuerdo, bajo condiciones de imparcialidad. Y para ello es necesario que las partes ignoren la posición social, las doctrinas comprehensivas particulares, la raza, el sexo, las dotes naturales, etc., de sus representados. Solamente cumpliendo esta segunda condición, la posición original se constituye en un dispositivo de representación, habilitado para discernir con un máximo de neutralidad los principios de justicia política que mejor expresen los intereses que fluyen de la libertad e igualdad de los ciudadanos de una democracia.

No obstante, al hablar de condiciones para ejercer la acción de discernimiento, hay que destacar que Rawls pone límites a la abstracción exigida por el velo de la ignorancia. En efecto, hay cosas que las partes no pueden ignorar. La primera es que ellas mismas son portadoras de todas las características que más arriba se le atribuyen a la persona, como libre e igual. O en clave política, las partes, en la posición original, "se describen como representantes racionalmente autónomos de los ciudadanos en la sociedad"[34]. En este sentido se da una representación de tipo microcósmica, porque los representantes reflejan condensadamente a todos los ciudadanos

[33] John Rawls, *Political Liberalism* (1993), pp. 22-26.
[34] Ibídem, p. 305.

representados (macrocosmos), pero solamente en su dimensión más sustantiva. Pero, además, las partes disponen de un breve elenco de alternativas entre las cuales discernir los principios de justicia política. Tales alternativas son las que hallamos en la tradición de la filosofía moral y política[35], a la cual se aludió anteriormente.

Cumplidas las condiciones expuestas, las partes representativas rawlsianas acuerdan los siguientes principios de justicia política: a) Cada persona tiene igual derecho a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas compatibles con un esquema similar de libertades para todos. b) Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones: primero, todas ellas deben estar relacionadas con funciones y posiciones abiertas a todos, bajo las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades; segundo, ellas deben existir para el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad[36]. Estos dos principios se aplican a la construcción de la estructura básica de la sociedad y sus instituciones fundamentales[37]. Ellos cumplen, a su vez, con el principio de reciprocidad, pues sus contenidos aseguran a cada cual algo que el otro puede razonablemente aceptar, como dispositivo normativo de regulación de la cooperación social en el largo plazo, entre ciudadanos libres e iguales que, sin embargo, sostienen concepciones del bien distintas e incluso contradictorias.

Los principios de la justicia política, en tanto discernidos por las partes representativas en la situación original, son un enfoque autónomo, cuyo fin es constituir la estructura básica de la sociedad y articular los valores políticos de la justicia y de la razón en la esfera pública. Pero, en este nivel, se trata de acuerdos hipotéticos y ahistóricos, alcanzados por las partes representativas. Se requiere un segundo paso para aterrizarlos en la realidad histórica de una sociedad que aspira a fundar democráticamente su estructura política básica. Ese segundo paso, una vez provisionalmente establecidos los principios de justicia política, consiste en un consenso que Rawls concibe como parcialmente sobrepuesto (*overlaping consensus)* a las doctrinas comprehensivas que sustentan los miembros de la sociedad civil[38].

---

[35] Ibídem, p. 305.

[36] Ibídem, p. 291.

[37] John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), Segunda Parte. En esta obra, en su segunda parte, Rawls describe las instituciones fundamentales que incorporan los principios de justicia, configurando así la estructura básica de la sociedad. Aunque hay diferencias entre el alcance y expresión de estos principios, que en *Political Liberalism* se reducen a las democracias constitucionales, sigue siendo válido el modo con que Rawls concibe la aplicación de los principios a la construcción de las bases del sistema político.

[38] John Rawls, *Political Liberalism* (1993), pp. 134-171.

En realidad, la necesidad de este consenso surge una vez que se plantea el problema de la estabilidad en el largo plazo de la sociedad políticamente organizada. Y ello, en virtud de los potenciales efectos disgregadores que pueden ejercer las doctrinas comprehensivas, a las cuales se puso entre paréntesis en la situación original, y la necesidad de arraigar los principios de justicia a la realidad concreta e histórica de una sociedad. En esta segunda instancia del proceso constitutivo de una sociedad democrática bien ordenada, estos principios operan como un elemento catalizador del consenso sobrepuesto a las doctrinas comprehensivas razonables, ganando su apoyo y dándole unidad y estabilidad al régimen constitucional. A través suyo, las doctrinas mencionadas aprueban y adhieren a la concepción política de la justicia. Cada una de ellas lo hace desde su punto de vista. De este modo, la unidad social se funda en doble consenso, por cuya virtud la estabilidad proviene tanto de la afirmación que los ciudadanos hacen de los principios de justicia política, postulados en la situación original (consenso constitucional)[39], como también de la compatibilidad entre éstos y las doctrinas que ellos sostienen y dan sentido a sus proyectos de vida *(overlaping consensus*)[40]. En este proceso, que se refiere a la estructura básica en sí misma y a su arraigo estable en la sociedad democrática, la razón pública despliega todas sus virtualidades.

Así, el *overlaping consensus* no es un acuerdo para designar autoridades o llegar a arreglos institucionales, fundado en una convergencia de intereses individuales o de grupos, sino un acto de aceptación de las bases de la estructura básica de la sociedad a partir de las doctrinas comprehensivas razonables que los ciudadanos democráticos sustentan. El consenso provee así un suelo común, estable y sólido, para la cooperación social de una generación a otra. Dicho de otro modo, el consenso sobrepuesto es equivalente a una decisión de la razón práctica colectiva que, a la luz de un elenco de términos justos e imparciales para la cooperación entre los individuos, decide echar las bases de un espacio público común, compartido y abierto, compatible con las diferencias que los individuos puedan tener o establecer entre sí.

En los argumentos precedentes hemos recurrido al término “razonable”, para especificar las doctrinas que participarían en el *overlaping consensus*. Rawls atribuye a las personas, junto con sus poderes morales, la racionalidad y la razonabilidad[41]. La primera, en definitiva, no es sino una versión de la facultad discursiva humana, que permite pensar siguiendo las

[39] Ibídem, pp. 158-164.
[40] Ibídem, pp. 164-168.
[41] Ibídem, pp. 48-54.

reglas del razonamiento y la inferencia. La razonabilidad no está suficientemente explicada, pero su noción es intuitivamente inteligible. Rawls nos dice que la razonabilidad, mirada desde la perspectiva general del ciudadano democrático, involucra los siguientes elementos: conciencia de sí como un ser libre e igual; conciencia de que la existencia propia trascurre al interior de un sistema social de cooperación en un tiempo que cruza las generaciones; disposición a ofrecerle al otro términos recíprocos y equitativos de cooperación, o sea, mutuamente aceptables, en concordancia con la justicia política[42]. La razonabilidad, en otras palabras, es la razón práctica aplicada a la relación con el otro. Y, además, aplicada a un otro en el contexto de una sociedad abierta y democrática, donde los actos y las palabras de las personas deben servir de vehículo a los acuerdos, a efecto de que aquél acepte e incluso haga suyas nuestras propuestas y recíprocamente. En consecuencia, la razonabilidad tiene desafíos mayores en un sistema de convivencia democrático, porque ella debe llenar un campo que en otros sistemas está colmado por la obediencia debida a la autoridad.

Ahora bien, la racionalidad y la razonabilidad también se atribuyen a las doctrinas que sustentan los individuos. Rawls establece que las doctrinas comprehensivas racionales y razonables son las que están habilitadas para la convivencia democrática, justamente porque su razonabilidad les permite aceptar principios políticos justos e imparciales. A mi juicio, la razonabilidad de la doctrinas tiene dos dimensiones. Primero, la razonabilidad les permite aceptar principios y valores que los representan parcialmente, en el sentido que ellos son aceptados por ser partes de una verdad más integral, o, al menos, por no ser contradictorios con ella. Y, segundo, la razonabilidad las habilita para explicar los actos que derivan de ella, de tal modo que los demás los consideren aceptables (no es, por ejemplo, razonablemente aceptable por lo demás el genocidio derivado de una doctrina, por muy racional que ella sea).

A partir de ese consenso se constituyen y cobran forma los valores políticos que están en la base de la sociedad democrática. Estos valores son aceptados como algo común, que relacionan y vinculan entre sí a personas que afirman doctrinas comprehensivas distintas, no solamente por su propia razonabilidad, sino además en virtud de la razonabilidad de las mismas doctrinas. Ahora bien, si la verdad completa de todas y cada una las doctrinas racionales y razonables se retrae de su aplicación a los fundamentos de la estructura básica de la sociedad, se supone que ésta solamente tiene una sustentación política. De esta sustentación se sigue que la eventual raciona-

[42] Samuel Freeman, " The Idea of Public Reason Revisited" (1999), p. 578.

lidad pública que cualquier doctrina comprehensiva pudiera fundar es substituida por la razón pública, cuya noción hemos expuesto más atrás. La razón pública rawlsiana, en efecto, reemplaza a las doctrinas comprehensivas por la idea de lo políticamente razonable[43]. De este modo, Rawls considera que los ciudadanos se comprometen con la razón pública cuando deliberan dentro del marco establecido por una concepción política de la justicia, que ellos mismos consideran la más razonable. O sea, por aquella que unos y otros, como libres e iguales, pueden aprobar [44]. Y este sería el caso de su propia concepción de la justicia política como equidad.

De acuerdo a los argumentos expuestos, la razón pública rawlsiana es un punto de vista exclusivo del cual las doctrinas comprehensivas no pueden formar parte. No obstante, dado el consenso sobrepuesto y ciertas condiciones impuestas por las circunstancias concretas, esas doctrinas pueden tener un rol condicionado en el despliegue de la razón pública. En efecto, los ciudadanos en determinadas ocasiones pueden sostener los valores políticos de la razón pública mediante los argumentos provenientes de sus propias doctrinas comprehensivas, siempre y cuando con ellos refuercen, y no contradigan, ni limiten el ideal de la razón pública misma. Rawls ilustra con el ejemplo de la discusión sobre la supresión de la esclavitud en los Estados Unidos. Los abolicionistas presentaron argumentos de la teología cristiana para dar su apoyo a la libertad e igualdad de todos los seres humanos. Y tenían que hacerlo, porque invocaban argumentos comprehensivos sostenidos por la mayoría. En caso contrario, no habrían tenido ninguna viabilidad, por ausencia de referentes anclados en la cultura política del país. Dicho esto hay que advertir que de hecho los abolicionistas les daban un giro político a los argumentos doctrinario-religiosos. En suma, para Rawls, en términos generales, la presencia directa de las doctrinas comprehensivas en la esfera de la razón pública debe fortalecer su despliegue. Y la condición necesaria para que ello acontezca es que esa presencia en el debate público se haga a través de razones políticas[45].

En la aplicación de las condiciones indicadas hay que apelar a la buena fe y a la experiencia. Por eso no debe haber restricciones o regulaciones, pues se supone que los sostenedores de las doctrinas comprehensivas recurrirán a razones prácticas para difundir y hacer aceptables sus puntos de vista a una audiencia más vasta que su propia membrecía[46]. O sea, a la audiencia ciudadana. También juega un papel importante, en la justifica-

[43] Ibídem, p. 574.
[44] Ibídem, p. 581
[45] Ibídem, p. 591.
[46] Ibídem, p. 592.

ción de esta participación, el conocimiento mutuo de las distintas doctrinas comprehensivas entre sí y la convicción socializada de que la fidelidad democrática de sus miembros tiene asidero en su propia concepción política, parcial o totalmente coincidente con los principios y valores de la justicia política vigentes en la estructura básica de la sociedad.

De este modo, la inclusión de las doctrinas comprehensivas razonables está sujeta a una estipulación. Tal estipulación señala que hay que dar una justificación pública para que la inclusión en cuestión se produzca legítimamente. Además de lo dicho, es obvio que así como la razón pública obliga a que el discurso público se someta a los cánones del razonamiento válido, al cual se ha aludido más atrás, así también lo obliga a ser razonable. Recordemos que la razonabilidad nos remite a la capacidad del discurso para comunicarse efectivamente con el otro. Un otro que puede tener y tiene una filiación a una diversidad de doctrinas comprehensivas. De este modo, el discurso razonable es esencialmente político. O sea, su argumento debe ser político, en el sentido de ser pensado y emitido "para ser aceptado" por el otro, a pesar de las diferencias que separan a sus respectivos emisores y receptores en virtud de las doctrinas comprehensivas que sustentan[47].

b) Las virtudes de la concepción rawlsiana de la justicia política

En este trabajo hemos expuesto la concepción rawlsiana de ciudadano democrático y a través suyo la noción de persona libre e igual que le sirve de base. Este primer paso es fundamental para definir quiénes, a través de sus poderes morales y su racionalidad y razonabilidad, son los agentes habilitados para discernir los principios de justicia política a partir de los cuales se puede configurar una sociedad democrática bien ordenada. También vimos que aquello que los ciudadanos desean construir con los principios políticos es la estructura básica de la sociedad, que les permite contar con un sistema de cooperación permanente y estable en el tiempo y aceptado por todos a pesar de las múltiples diferencias que los distinguen y dividen (hecho del pluralismo). Y en fin, expusimos cómo los ciudadanos, ya provistos de principios de justicia, se dan a la tarea efectiva de dar forma a la estructura básica de la sociedad, a través del *overlaping consensus*. Para ello, Rawls nos propone que adoptemos "su" concepción de la justicia política como equidad o imparcialidad. Como es evidente, tal propuesta nos

[47] Ibídem, p. 594.

obligó a dar una sucinta visión de ella. Y al hacerlo nos hicimos cargo de que Rawls sitúa "su" concepción política al interior de una familia de concepciones liberales de la política como un propuesta que responde mejor que el resto a los desafíos de una sociedad democrática, abierta y pluralista.

La concepción de las personas y los ciudadanos libres e iguales, que sostiene la teoría de la justicia política como equidad o imparcialidad, tiene tres cualidades principales. Por una parte, tiene la consistencia y densidad necesarias para fundar una concepción política de la justicia, intuitivamente aceptable para los ciudadanos de una sociedad pluralista, en la cual la cultura política incluye ideas y prácticas democráticas. Sobre ella se puede, en efecto, construir una estructura básica adecuada a la convivencia y cooperación entre personas que tienen concepciones distintas del mundo, de la vida humana y la trascendencia. Enseguida, atribuye a cada persona un poder moral que la habilita para establecer principios equitativos de regulación de su relación con el otro, y, además, un poder moral para hacer suyas, como fundamento de su proyecto y estructura moral de su vida, doctrinas morales y religiosas, sin que el ejercicio de sendos poderes sean mutuamente excluyentes. Este aspecto es central, porque armoniza a partir de la persona misma la coexistencia de normas políticas para la cooperación social con las normas morales para la constitución de la vida personal. Hay que recordar que, por ejemplo, hasta fines del siglo XIX la Iglesia Católica no consideraba aceptable la existencia de estructuras políticas democráticas, porque su neutralidad o imparcialidad religiosa era incompatible con las normas de la vida cristiana. Y que la respuesta a esta posición era otra doctrina excluyente —el laicismo—, que en su forma más radical sostenía que la erradicación de las prácticas religiosas era una condición necesaria para la libertad política. Rawls supera esta contradicción, porque los principios políticos de la justicia como equidad son la base para una serie de libertades ciudadanas, como la libertad de conciencia, de culto, de asociación, de educación y otras que son plenamente compatibles con las prácticas de la religión. Pero, además, la supera porque supone que la doctrina católica misma y quienes la viven y sostienen participan del *overlaping consensus*, y que, por lo mismo, considera como partes o dimensiones parciales de su verdad integral los principios y valores de la justicia política. Y, por último, también es una cualidad de la concepción rawlsiana de la persona su pertenencia "a" y afinidad "con" otros miembros de la familia liberal. En efecto, su concepción es afín, cercana y no incompatible con las concepciones de la persona que encontramos no solamente en Kant y Mill, sino en grandes filósofos anteriores al fenómeno del liberalismo, como

Aristóteles y Tomás de Aquino. En ninguno de estos autores encontramos contradicciones con esa concepción. Hay diferencias, como es obvio, pero ellas se refieren a la mayor complejidad y diversidad de perspectivas con que construyen sus respectivas teorías de la persona y, por derivación, del ciudadano. Y, también, debido a que en los autores citados esas concepciones constituyen e integran una doctrina comprehensiva. No obstante, a partir de ellas, por ejemplo, un Nicolás de Cusa contemporáneo podría construir sorprendentes concordancias político-democráticas.

Hay que decir algo equivalente respecto de las nociones de racionalidad y razonabilidad que propone Rawls. Ambas son asimilables o guardan similitudes con los usos de la razón según Kant. Rawls, al pasar, en *Liberalismo Político*, nos dice que suele suceder en la vida cotidiana que nos encontremos con personas a las cuales consideramos muy inteligentes, racionales, pero muy poco razonables. Y podríamos agregar que para un observador perspicaz los grandes intolerantes generalmente son extremadamente racionales y escasamente razonables. En nuestra tradición filosófica se distinguen el uso teórico y el uso práctico de la razón; la razón que sólo piensa y la razón que orienta la acción humana. Aquí nos interesa especialmente el uso práctico de la razón y su afinidad con la razonabilidad rawlsiana. En efecto, los dos conceptos son próximos porque entrañan aplicaciones de la razón a la acción humana en relación con el otro. La razonabilidad da cuenta de nuestra capacidad para expresar términos de acuerdo con el otro aceptables para él y, en consecuencia, por extensión, aceptables para establecer un sistema de cooperación estable. No se trata de un mero uso del argumento retórico, para plegar al otro a nuestra posición a través de la persuasión. Más bien la razonabilidad se orienta al discernimiento, junto con el otro, de un acuerdo sobre algo común. Por eso la razonabilidad rawlsiana se ordena a la consecución del *consenso sobrepuesto*, para estabilizar y proyectar hacia adelante los principios y valores de justicia y la estructura básica de la sociedad. O sea, aquello que, en el ámbito del proceso constituyente de la organización política de la sociedad, Rawls denomina "esenciales constitucionales". En este sentido, hay una simetría con el uso de la razón práctica kantiana cuando ella se aplica a la comunicación entre individuos libres y que carecen de una base cierta y trascendente para hacer algo en común (y, como propone Rawls, se atienen a una concepción política para desplegar a la razón pública). En la *Crítica del Juicio*, Kant habla de una facultad crítica que en sus actos reflectivos incluye la consideración del modo de representación del otro, ponderando el propio juicio a la luz de la razón colectiva de la humanidad, para así excluir

todo sesgo subjetivo y puramente individual[48]. Esa facultad crítica es el sentido común o público (en contraposición al sentido privado), que entra en acción cuando aplicamos las máximas de la comunicación. Estas máximas son tres y dicen lo siguiente: piensa por ti mismo, piensa desde el punto de vista del otro y piensa consecuentemente. Parece legítimo acercar la razonabilidad rawlsiana al poder de la razón para aplicar las máximas kantianas a nuestra comunicación con el otro. Ellas, en efecto, ponen a nuestro alcance acuerdos recíprocamente satisfactorios para la cooperación y la convivencia en el largo plazo, al interior de una sociedad democrática bien ordenada. Esas máximas operan en cualquier acuerdo, y, en consecuencia, forzosamente en los acuerdos sobre la estructura básica o los esenciales constitucionales de una sociedad democrática.

Por último, la conceptualización rawlsiana sobre la razón pública nos propone los desafíos que emergen de una versión sustantiva de la democracia. Y con ello se quiere enfatizar el carácter no puramente procedimental de su teoría democrática. En efecto, el desarrollo de la idea de razón pública, como una razón propia de la democracia constitucional y como un principio y un valor puramente político, apoyado por un consenso de las doctrinas comprehensivas, conduce a Rawls a sostener que en definitiva estamos hablando de democracia deliberativa. En efecto, nos dice, la democracia constitucional bien ordenada es la democracia deliberativa[49]. Ésta a su vez no significa otra cosa que la deliberación o el acto deliberativo mismo. Y Rawls afirma que deliberar significa intercambiar puntos de vista y razones cuyo propósito es sustentar proposiciones concernientes a cuestiones políticas o públicas. En este sentido, la deliberación supone que todas las opiniones deben ser sometidas a la discusión ciudadana. En consecuencia, la deliberación es una condición necesaria para que, al debatirse los esenciales constitucionales y las cuestiones de la justicia básica, pueda intervenir y operar la razón pública.

La democracia deliberativa, considerada en sí misma, entraña tres elementos esenciales para su existencia y desarrollo. El primero es que ella incluye la idea de razón pública. El segundo es que ella exige como marco general para su ejercicio las instituciones de la democracia constitucional (especialmente, aquellas referentes a la legislatura deliberativa). El tercero es que los ciudadanos democráticos tienen el deber de conocer y seguir a la razón pública e intentar realizar su ideal.

---

[48] Immanuel Kant, *Crítica del Juicio* (1951) I, parágrafo 40, p. 304.

[49] Samuel Freeman, “The Idea of Public Reason Revisited” (1999), p. 579.

Los elementos esenciales de la democracia deliberativa plantean complejas condiciones precedentes, sin las cuales ella no puede desarrollarse adecuadamente. Entre ellas, la principal es la educación de los ciudadanos, que debe ser suficiente como para que ellos comprendan los aspectos básicos del gobierno constitucional. Y, además, entre otras, la necesidad de que el público esté bien informado sobre la agenda pública, sepa jerarquizar los problemas más importantes y evaluar las alternativas para solucionarlos. Rawls también incluye entre las condiciones para el desarrollo de una democracia deliberativa la necesidad del financiamiento público de las elecciones ("la deliberación pública debe ser posible y reconocida como una característica básica de la democracia, libre del influjo del dinero") y, además, la disponibilidad de iguales oportunidades para el debate sobre los asuntos públicos[50].

Ya vimos más atrás que la razón pública rawlsiana es la razonabilidad o razón práctica de los ciudadanos libres e iguales, en su precisa actividad discursiva concerniente a la estructura básica de una sociedad democrática bien ordenada. El objeto esencial de esa razón es la justicia política. Ella, como ya vimos, por ser puramente política, excluye de su campo de atención a las doctrinas comprehensivas, salvo excepciones (*supra*). Una breve excursión sobre la misma actividad de la razón práctica en la esfera pública desde el punto de vista de Aristóteles nos muestra que, en efecto, desde una perspectiva enteramente distinta a la de Rawls, podemos hablar de una razón pública que es reductivamente política, en el sentido rawlsiano, o sea, equitativa o imparcial.

Encontramos en los tratados éticos y en la *Política* de Aristóteles una amplia y compleja teorización acerca de la razón pública del régimen democrático. El núcleo central de esta teorización consiste en el concepto de co-deliberación que elabora su autor. Ahora bien, tal concepto tiene algunos supuestos, a los cuales debemos referirnos previamente. Un primer supuesto es la concepción aristotélica de ciudadanía. Aristóteles, al examinar la cuestión de la ciudadanía, nos entrega una definición que se aplica de modo eminente al ciudadano democrático. Esa definición dice lo siguiente: "llamamos ciudadano al que tiene el derecho de participar en la función deliberativa o judicial de la ciudad, y llamamos ciudad, para decirlo en pocas palabras, una muchedumbre de tales ciudadanos suficiente para vivir con autarquía"[51]. Esta definición esencial de ciudadanía se aplica plena y necesariamente en las democracias, porque en el resto de los regímenes el ciudadano tiene derechos políticos limitados y, en especial, carece de poder

[50] Ibídem, p. 580.
[51] Aristóteles, *Política*, III, 1275 b 15-20.

deliberativo. Así, por ejemplo, la *isegoría* o igual "libertad de palabra", es prescindible en la monarquía y en la aristocracia. Pues en estos regímenes no tiene función el pueblo, ni existe necesariamente una asamblea, ni las magistraturas judiciales son estables[52]; en cambio, es esencial en un régimen democrático. El segundo supuesto está relacionado con la definición de ciudadanía democrática expuesta. En efecto, en el libro III de la *Política*, Aristóteles, una vez que ha despejado la cuestión de la ciudadanía, se plantea la pregunta de si el *plethos*, o sea la mayoría, debe ejercer el poder soberano, antes que la minoría de los mejores, o sea, la aristocracia[53]. Y la respuesta preliminar que nos entrega es que los más (*plethos*) reunidos, y no considerados individualmente, pueden ser mejores que la reunión de aquellos que individualmente son los mejores (los *aristoi*, que son los menos). Respuesta que fundamenta del siguiente modo: "como son muchos, cada uno tiene una parte de virtud y prudencia, y reunidos, el *plethos* viene a ser como un solo hombre con muchos pies, con muchas manos y muchos sentidos, y lo mismo ocurre con los caracteres y la inteligencia"[54]. En efecto, en los mejores, tomados uno a uno, se da acumulado en una unidad aquello que está disperso y separado en los individuos de la mayoría. Pero no es el caso si se trata de los más considerados como un todo, pues, entonces, aquello disperso y separado también se acumula en una unidad. De este modo, la mayoría puede ser mejor que la minoría. El tercer supuesto es que para Aristóteles el régimen democrático es la democracia directa. O sea, el régimen político en el cual ciudadanos libres e iguales deliberan reunidos en la Asamblea (*ékklesía*), como su órgano de participación política principal. Razón por la cual ella es el foro público donde se despliega la razón pública. En consecuencia, la democracia aristotélica es esencialmente una democracia cuya racionalidad consiste en las prácticas de la deliberación colectiva, realizada por los ciudadanos reunidos en asamblea.

Ahora bien, la deliberación colectiva de la democracia directa tiene un campo acotado y preciso de acción. Por de pronto, Aristóteles sostiene que el campo de lo deliberable tiene límites, porque solamente se delibera acerca de ciertas cosas humanas y no sobre todas. En efecto, solamente podemos deliberar sobre *aquello que depende de nosotros*[55]. Y, por el contrario, no se delibera sobre las cosas y verdades eternas, "como sobre el mundo o la inconmensurabilidad de la diagonal y del lado de una cuadrado", ni sobre el movimiento y sus leyes, ni sobre las cosas que no pueden

[52] Ibídem, III , 1275 b5-10.
[53] Ibídem, III, 1181 a 35-40.
[54] Ibídem, III, 1181 b5-10.
[55] Ibídem, III, 1112 b -1.

ser de un modo o de otro, ni sobre lo que depende del azar, pues "ninguna de ellas podría hacerse por nuestro intermedio". Tampoco se delibera sobre los asuntos de la India, porque también están fuera de nuestro alcance. Por eso, deliberar sobre lo que podemos hacer por nosotros mismos significa, a la vez, deliberar sobre las cosas que no siempre acontecen del mismo modo, porque ellas pueden ser de una u otra manera. Y esta última formulación precisa aún más el campo de lo deliberable reduciéndolo a las cosas contingentes.

Este breve ex-curso aristotélico nos muestra desde otra perspectiva el concepto de la autonomía e independencia de lo político. Aristóteles establece que la deliberación política solamente puede extenderse a aquello que puede ser causado por el conjunto de los ciudadanos en el campo de la contingencia. Por esta línea argumental se establece que cuando la razón, a través de la deliberación, opera en este campo, no está en cuestión la "verdad" en su sentido más estricto, pues ella está relacionada con aquello que es necesario (y que, por lo mismo, solamente puede ser objeto de la razón teórica y de las creencias). Cuando los ciudadanos co-deliberan, en definitiva, lo hacen para tomar una decisión que trata acerca de los medios para realizar una política o una acción pública.

La actividad deliberativa constituye, entonces, el eje central de la vida política de la democracia directa. Ahora bien, el régimen democrático existe porque una determinada comunidad, desplegando su *elan* hacia la creación de una comunidad suficiente para alcanzar el bien-vivir, adopta principios de justicia política que constituyen el fundamento de su constitución (*politeia*), estructura básica o esenciales constitucionales. En consecuencia, los principios políticos de la democracia aristotélica acotan el uso de la razón pública a la discusión de los asuntos comunes de la ciudad: aquello que la comunidad de ciudadanos puede "hacer por sí misma". De este modo, la razón práctica aristotélica, en su uso público, confirma o es concordante con la razón pública y la razonabilidad rawlsiana. Ambas coinciden en una concepción subyacente de la persona y del ciudadano democrático, como libre e igual. Ambas son concurrentes en la necesidad de crear una estructura básica de la organización política, en conformidad con esa concepción subyacente. Ambas, en fin, supuesta la justicia política democrática, permiten la emergencia de un sistema de cooperación estable, independiente de una concepción religiosa, filosófica o moral comprehensiva.

Podríamos, finalmente, hacer el ejercicio de ponernos en el punto de vista de una doctrina religiosa comprehensiva razonable, como es el caso

del catolicismo, y, a la luz de la constitución *Gaudium et Spes*[56], demostrar la compatibilidad de las normas de la Iglesia Católica sobre las relaciones de sus fieles con los no católicos, para entender por qué y cómo ella puede integrarse perfectamente a un *overlaping consensu*s como el que propone Rawls. Pero ello puede ser el objeto de otro trabajo. Ahora, por el momento, nos basta con dejar establecida la viabilidad de la justicia política como equidad y su superioridad para superar los dilemas que el hecho del pluralismo plantea a las democracias contemporáneas.

BIBLIOGRAFÍA

Aristóteles, *Política*, libro III.

Freeman, Samuel. "The Idea of Public Reason Revisited". En Samuel Freeman, *John Rawls. Collected Paper*. Harvard University Press, 1999.

Gaudium et Spes. Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual. En *Documentos Completos del Vaticano II*. Bilbao: Ediciones Mensajero, S.A.

Kant, Immanuel. *Crítica del Juicio I*. Buenos Aires: Librería El Ateneo Editorial, 1951.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

Rawls, John. *Political Liberalism*. Nueva York: Columbia University Press, 1993.

Rawls, John. "Réplica a Habermas". En *Jurgen Habermas y John Rawls, Debate sobre el Liberalismo Político.* Ediciones Paidós, 1998. □

[56] *Gaudium et Spes*, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, pp. 135-227.

CONCORDANCIA Y ACEPTACIÓN MORALES*

Carla Cordua

Ocasionalmente Wittgenstein sostiene que las cosas importantes no las *hacemos*, sino que *nos suceden*, y declara que él suele practicar la concordancia con el curso del mundo. A partir de estas observaciones exploramos el contenido moral de las ideas de concordancia y aceptación. Para contrastar esta opción moral, examinamos la posición que Elías Canetti nos conmina a tomar ante la muerte. El hombre debe rechazar su propia mortalidad. Sostenemos que esta proposición de Canetti no representa una posibilidad moral. Se podría pensar que "aceptación moral" coincide con la idea estoica de la acción de acuerdo con la naturaleza, pero ésta presupone una noción inactual del orden cósmico. Presentamos dos ejemplos, tomados, uno de la vida filosófica, otro de la política, para exhibir el sentido moral de la concordancia y la aceptación.

CARLA CORDUA. Doctora en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Autora de numerosas publicaciones en revistas especializadas y de varios libros; entre ellos: *Idea y Figura: El Concepto Hegeliano de Arte* (Río Piedras, Puerto Rico, 1979), *El Mundo Ético: Ensayos sobre la Esfera del Hombre en la Filosofía de Hegel* (Barcelona, 1989), *Explicación Sucinta de la "Filosofía del Derecho", en Hegel* (Santa Fe de Bogotá, 1992), *Variedad en la Razón: Ensayos sobre Kant* (Río Piedras, 1992), en colaboración con Roberto Torreti, y *Wittgenstein: Reorientación de la Filosofía* (Edit. Dolmen, 1997).

* Versión extendida de la conferencia ofrecida en el Centro de Estudios Públicos el 27 de septiembre de 2000.

Estudios Públicos, 81 (verano 2001).

Cada cosa es lo que es,
y es difícil explicar a alguien cómo eso me alegra
cómo eso me basta.
Basta existir para ser completo
(Fernando Pessoa[1])

I

De ser posible un minimalismo moral estaría probablemente asociado a la actitud de Wittgenstein frente a su propia vida. Decía: "Mi *vida* consiste en que con algunas cosas me doy por contento"[2]. Aquella moral mínima se caracterizaría porque el contentamiento de que alguien es capaz se lo debería a la aceptación de algunas cosas decisivas para sí mismo y a la práctica deliberada de tal disposición hasta que su vida, como dijo Wittgenstein de la suya, consista en buena medida de lo adquirido de este modo. "Las cosas más importantes simplemente te suceden"[3], le dice el filósofo a un amigo. Quien se contenta con aceptar lo que le sucede sabe sin falta que también podría rechazarlo, de manera que, aparte de qué sea lo que cada cual acepta, hablando de esta posibilidad moral nos referimos al ejercicio de una opción. Es obvio que de todos modos, aún sin quererlo, aceptamos mucho, pero, a propósito de la concordancia moral que se establece con lo que adoptamos como nuestro, nos interesa mucho el contentamiento que para el filósofo derivaba de su práctica expresa de lograr un acuerdo con el curso de las cosas y de la vida. Este aspecto no es toda la moral pero puede convertirse en la base y la dirección general de una actitud moral no doctrinaria, aceptable para algunos en los tiempos que corren.

Wittgenstein asoció la moralidad con la felicidad personal; en su *Diario* juvenil afirma: "Siempre vuelvo simplemente a que la vida feliz es buena y la infeliz, mala"[4]. Allí mismo formula el único imperativo ético que reconoce: "¡Vive feliz!"[5]. Y explica que "Para vivir feliz tengo que estar en concordancia (o de acuerdo: *Uebereinstimmung)* con el mundo. Y esto es lo que *se llama* 'ser feliz'"[6]. Apreció a los que saben cómo conseguir la paz consigo mismos[7], a los que evitan los tormentos autoimpuestos, precisa-

[1] Pessoa, *Obra Poética* (1997), tomo I, p. 299.

[2] "Mein *Leben* besteht darin, dass ich mich mit manchem zufrieden gebed". L. Wittgenstein, *Über Gewissheit* (1974a), § 344; cf. §§ 343, 144, 196, 204, 331, 411, 556.

[3] O. K. Bouwsma, *Wittgenstein Conversations 1949-1951* (1986), p. 46. Cf. el verso de W. H. Auden, "We are lived by powers / we pretend to understand".

[4] L. Wittgenstein, *Notebooks 1914-1916,* 30 de julio de 1916 (1979).

[5] L. Wittgenstein, *Notebooks 1914-1916,* 8 de julio de 1916 (1979).

[6] Ibídem; cf. 30 de julio de 1915 y 13 de agosto de 1916.

[7] L. Wingenstein, *Philosophische Untersuchungen* (1974b), § 133.

mente aquellos de los que algunos románticos, que se conciben como luchadores natos, se enorgullecen.

Al hablar de concordancia con lo que es y de aceptación morales, no nos referimos, pues, a los gestos, hábitos y significados que nos incorporamos por imitación o por inercia; por ejemplo, al uso de palabras para determinados efectos, pescado al vuelo; a las actitudes y reacciones típicas que luego no sabemos cómo nos hicimos de ellas. Pensamos, más bien, en la posibilidad de desarrollar una política estable para el curso de la vida en el mundo que nos tocó, cuyo propósito central consista en recibir buena parte de lo que tal curso trae, en adueñarse de ello con comprensión, y a veces, cuando algo lo merece, con gratitud y contentamiento. Pero contentarse con lo que se acepta en un sentido moral es una práctica más bien inaparente, a pesar de que es preciso no sólo haberla aprendido, sino, aún antes, haberla elegido o preferido entre otras posibilidades morales. Este compromiso básico con lo que aceptamos lo tenemos que tomar personalmente, a sabiendas y sin asistencia. En ninguna otra parte somos tan irreemplazables como cuando nos hacemos promesas morales.

¿Qué es lo que puede conferirle un sentido moral a la concordancia con algunas de las cosas que nos ocurren, ésas de que nos vamos apropiando de buen grado, esto es, a la "aceptación de lo razonable", como lo llama Eugenio Trías? Darse por contento con lo que llegamos, paulatinamente, a ser, no ha sido reconocido entre las virtudes y al parecer no suele contar como manera de actuar voluntaria y responsablemente. Las virtudes fueron concebidas como formas del vigor, como capacidades de hacer y lograr y la implicación volitiva, característica de lo moral, parece faltarle a la conformidad con lo que se acepta. La primera impresión que tenemos es que la aceptación y la concordancia, cuando se las adopta como política de vida, más bien contrastan con las maneras de actuar que acostumbramos a llamar morales.

Este contraste, pienso, se podría poner al servicio de la aclaración del sentido ético de ciertas variantes de la aceptación y el contentamiento. Pues "contrastar" es una relación lógica entre significados, que los liga entre ellos. Resulta obvio que la virtud como fuerza y la moral en su grandiosa seriedad y su alcance imperativo, contrastan con la relativa impasibilidad de quien se conforma y con la impresión de insignificancia que nos hace la aceptación como postura y conducta. Pero si éstas contrastan con los conceptos de la moral tradicional, es seguro que tienen que ver con aquellos pues las cosas meramente diferentes son ajenas unas a otras y su comparación no dice nada determinado sobre ellas. Las contrastantes u opuestas, en cambio, suelen estar ubicadas en los extremos de una misma

serie. En este caso nos interesa la serie de los asuntos específicamente morales que, creemos, tal vez comprende tanto a la tradición que da por descontado que la moral exige una voluntad enérgica, tensa y exigente como también a las actitudes de conformidad con las cosas que decidimos aceptar como nuestras tal cual nos ocurren.

La gran tradición del pensamiento moral tiende a presentar al ejercicio de las virtudes como esforzado y difícil. Reclama de las personas no sólo determinación y carácter sino que pide que estos rasgos se combinen, además, con una buena educación y hábitos establecidos de comportamiento decente. Si estos últimos faltaren, piensan los moralistas, la buena conducta sostenida y confiable costaría esfuerzos heroicos que no resulta sensato esperar de todo el mundo. También la idea de darse principios morales y guardarles fidelidad, cueste lo que cueste, sugiere por sí sola una disposición tenaz y enérgica de la personalidad moral. En efecto, el discurso moral condena casi unánimemente el oportunismo del que hace lo que sus circunstancias le sugieren; la indignidad del que se adapta sin reservas a las situaciones en que la suerte lo pone, del que no hace sino lo que le conviene de momento. La llamada "fuerza de voluntad" se caracteriza, más bien, por dictar leyes y someterse a ellas con respeto; por eso la posibilidad de la anomia de la voluntad ha preocupado a los moralistas desde la antigüedad. Pues la moralidad misma depende, según la tradición, no sólo de la libertad sino también de la fuerza legislativa eficaz de la voluntad.

Las exigencias morales de las épocas cristianas no hacen sino intensificar el compromiso heroico de la voluntad con el bien. Mandan, en efecto, tanto el amor de lo perfecto como su emulación: ser como el Padre e imitar al Hijo. Tales exigencias presuponen, además, la lucha con este mundo y con las cosas que se ofrecen en él. Tal extremismo de la obligación con la virtud se puede ver ironizado en la figura de Don Quijote quien blande la espada y golpea sobre todo cuanto aparece delante de él, a menudo antes de averiguar de qué se trata. Pues el caballero puede contar con la maldad del mundo: "donde quiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida", sostiene (II, ii); por eso, la vida del caballero andante no puede ser más esforzada: "Ha de guardar la fe a Dios y a su dama; ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y, finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla" (II, xviii).

A la luz de tal tradición, la concordancia y la aceptación tendrán grandes dificultades para hacerse reconocer como dotadas de sentido moral. Donde el sufrimiento vale como mérito o, al menos, como preparación para

hacer el bien, el contentamiento consigo viene a situarse cerca de la pereza, la vanidad culpable y el egoísmo. El enemigo del mundo que se enorgullece de serlo, acompañará su desaprobación depositando su confianza exclusivamente en la fuerza del brazo castigador que sostiene la espada, como hace Don Quijote. Cualquier asomo de conformidad tiene que resultarle, además de inmoral, antirromántica e innoble.

II

Todos sabemos que hay muchas y variadas razones para convertir la desaprobación del mundo en una preferencia moral. ¿Por qué resignarse a lo malo, a la mediocridad, a la injusticia y la perversidad? En particular, algunos rasgos sobresalientes de la condición humana despiertan la indignación permanente de ciertos pensadores exigentes y apasionados. En su entusiasmo por la vida, Nietzsche, por ejemplo, condena la moderación y la cautela, la debilidad y la compasión y exclama ¡crecer!, ¡más vida!, ¡una vida más compleja, más difícil, más tensa! Un sediento de intensidad, ¿podría nunca consentir en la moralidad de la aceptación? Claro que no.

Otros, amantes de los extremos y creyentes en el inagotable repertorio de experiencias que ofrece la vida, personas como Sartre, como Canetti, se declaran en rebeldía contra la mortalidad humana. Creen con toda sinceridad que una prolongación de la existencia aquí sería un beneficio inequívoco para nosotros. Consideran abiertamente inmoral que los hombres se acepten como mortales, pues, con su resignación, exageran el poder de la muerte. Inmorales serían, asimismo, quienes profesan religiones que justifican o pretenden explicar la mortalidad del hombre. Es una obligación moral, sostiene Canetti, declararle una guerra sin cuartel a la muerte propia y ajena. Para meter un poco de lógica en las cosas, piensa, lo único humanamente aceptable es la inmortalidad segura aquí y ahora. Canetti acusa a los filósofos que invitan a meditar sobre la muerte y a prepararse para bien morir, de ser colaboradores con el enemigo. Pensando, tal vez, en Heidegger, dice: “Los filósofos que quieren *atribuirnos* la muerte como si ella estuviera en uno desde el comienzo. —No soportan verla sólo al final, prefieren prolongarla hasta el comienzo; la destinan a ser el más íntimo acompañante de toda la vida y así, en versión aguada y de confianza, la muerte se les torna soportable. —No comprenden que con ello le han conferido más poder del que le corresponde” (p. 294)[8].

[8] Elias Canetti, *Die Provinz des Menschen: Aufzeichnungen 1942-1972* (1980). Los números entre paréntesis después de las citas remiten a esta edición. La traducción del alemán es mía.

Comprendo el asco hacia los cultores de la muerte y los rondadores de tumbas, pero no sé qué se proponen los enemigos de la muerte cuando, abandonando el terreno de la opinión, hablan de pasar a la acción práctica contra ella. Como este paso parece carecer de sentido, el rechazo de la muerte no puede ser una moral sino sólo una toma de posición y una manera de hablar. Expondré las principales razones que aduce Canetti en favor de su concepción de la muerte. Aunque estos argumentos figuran en todas sus obras, elijo para presentarlos la versión concentrada en aforismos que forma parte de *La Provincia del Hombre: Notas de 1942 a 1972.*

Canetti reconoce que los hombres en general viven reconciliados con la muerte, pero estima que ello demuestra su cobardía, el odio de sí mismos y su capacidad para engañar y engañarse. Es decir, tal reconciliación exhibe su inmoralidad. "Sepárate de todos los que aceptan la muerte. ¿Quién te queda?" (p. 28). "El que se odia a sí mismo... tiembla ante la muerte y dice: 'Es lo mejor que tenemos"' (p. 301). "¿,Por qué odia el Salmista la muerte como sólo yo?" (p. 61; cf. 267). "Mi odio de la muerte presupone una conciencia permanente de ella; me sorprende cómo puedo vivir así" (p. 92). La explicación de la muerte por el pecado le arranca la pregunta crítica: "¿Y cuál es el pecado original de los animales? ¿Por qué padecen muerte los animales?" (p. 40).

La muerte, piensa Canetti, es absurda, mala e injusta y, como otras cosas de este tipo, malea y pervierte al hombre. La mortalidad basta para explicar la inmoralidad de los humanos, pues no hay ningún hombre que se haya merecido la muerte, ni el peor de ellos. "Alguna vez se verá que los hombres empeoran con cada muerte" (p. 48; cf. 105). "Tenemos que ser malos porque sabemos que moriremos. Seríamos peores si desde un comienzo supiésemos cuándo" (p. 144). "Por cada uno [la muerte] es lamentable. Nadie debiera haber muerto nunca. El peor crimen no merecía la muerte y sin el *reconocimiento* de la muerte no habría habido nunca los peores crímenes" (p. 142; cf. 186). "Es muy importante lo que uno todavía se propone hacer para terminar. Da una medida de la injusticia de la muerte" (p. 303). "El final, por mucho que se lo embellezca, es tan absurdo que ningún esfuerzo por explicar la creación tiene sentido; tampoco la representación de Dios como un niño que juega: a éste le parecería que la broma ya dura demasiado" (p. 254). "La muerte tiene un modo propio de penetrar a sus enemigos, de minar su voluntad de lucha, de desmoralizarlos: siempre se presenta como la solución radical, nos hace recordar que, fuera de ella, no hay todavía ninguna verdadera solución" (p. 106).

Lo primero que corresponde hacer al lúcido que comprende esta situación, sostiene Canetti, es declararle la guerra a la muerte. Para comen-

zar, no aceptarla, no justificarla, no prestarle apoyo de ninguna clase. “El esfuerzo máximo de la vida es no acostumbrarse a la muerte” (p. 258). “Odiar la muerte de todos los demás como la propia; celebrar alguna vez la paz con todo, nunca con la muerte” (p. 40). “Mi carácter, mi orgullo consisten en que nunca he *alabado* a la muerte... Me parece tan inútil y mala como siempre, el mal fundamental de todo lo existente, lo no resuelto e incomprensible...” (p. 142). “Desde hace muchos años nada me ha conmovido y llenado tanto como la idea de la muerte. La meta totalmente seria, concreta y consciente de mi vida es lograr la inmortalidad para los hombres... —En este campo de honor, puedo caer aunque [los demás] me entierren como a un perro sin nombre, me maldigan como a un loco, me eviten como una tortura amarga, porfiada e incurable” (p. 142). “A veces creo que tan pronto como yo reconozca a la muerte el mundo se disolverá en nada” (p. 49; cf. 272). “Que los dioses mueran aumenta la insolencia de la muerte” (p. 69).

¿Qué consecuencias para la vida y el mundo tendría si los hombres se decidieran a pensar en la eliminación de la muerte, si se propusieran lograrla?, se pregunta Canetti. “Es imprevisible lo que serán capaces de creer los hombres apenas hayan librado al mundo de la muerte” (p. 49; cf. 233). “Ni siquiera las consecuencias racionales de un mundo sin muerte han sido nunca pensadas al cabo” (p. 49). “Se dice que la muerte les llega a muchos como una liberación y es difícil que exista un hombre que no se la haya deseado a veces. Ella es el símbolo supremo del fracaso. Cuando algo grande fracasa hay quien se consuela con que algo más puede fracasar y echa mano de aquella manta oscura que cubre todo de manera pareja. Pero si faltara la muerte del todo, entonces no le podría fracasar realmente nada a uno; mediante siempre renovados intentos se podrían corregir las debilidades, las deficiencias y los pecados. El tiempo inagotable le daría a uno un ánimo inagotable” (p. 92; cf. 142-3). “Del esfuerzo de los individuos por apartar la muerte de sí procede la tremebunda estructura del poder. —Se exigían innumerables muertes para que sobreviviera un individuo. La confusión que provino de esto se llama historia. —Aquí debiera comenzar la verdadera ilustración, que justificara el derecho de *cada uno* a sobrevivir” (p. 304).

Después de 1945, abrumado por la última guerra mundial, Canetti expresa por vez primera algunas dudas sobre la seriedad de una “moral” que se propone la eliminación de la muerte y la conquista de la inmortalidad terrenal. Dice: “Ya no vale cosa alguna que hayas podido pensar sobre la muerte. De una terrible manotada ella alcanzó un poder de contagio que nunca antes había tenido. Ahora la muerte es realmente omnipotente, un

verdadero dios" (p. 78). "Lo único que no se debe ser *nunca* es un triunfador. Pero uno lo es sobreviviendo a cualquier persona bien conocida. Triunfar es sobrevivir. ¿Cómo hacerlo: seguir viviendo y no ser un triunfador? La cuadratura moral del círculo" (p. 153). Y, en relación con la comida, Canetti declara que si existiesen ascetas que no comen pero se mantienen bien "se podría pensar seriamente en una superación de la muerte" (cf. 272; 290).

Las personas que se proponen cosas difíciles y hasta dificilísimas son admirables, sobre todo cuando éstas bien valen la pena. ¿Se puede decir lo mismo de quienes se empeñan en un combate por imposibles o en contra de ellos? Me parece que no puede haber mérito moral donde las metas carecen, radicalmente, de posibilidades de realización. Habría que agregar que, en rigor, las imposibilidades no pueden ni siquiera ser propiciadas por la acción. Además de que nosotros, en los casos en que insistimos en perseguir quimeras, acabamos no teniendo ni la menor idea de lo que habría que hacer para llevarlas a cabo. Pues la claridad sobre los medios adecuados de la acción proviene del carácter definido de los fines. ¿Qué sentido puede tener una moral cuyo propósito es el combate contra la muerte? No puedo poner en duda la seriedad moral de Elias Canetti pero confieso que no sé qué pensar de su apasionada enemistad hacia la muerte, en la que coincide, hasta cierto punto, con Sartre y otros, aunque lleva las cosas mucho más lejos que los demás.

III

En la antigüedad los moralistas estoicos y algunas otras escuelas filosóficas predicaban la vida en conformidad con la naturaleza, pero lo hacían a partir de una concepción teológica del orden universal que hoy no compartimos. ¿Por qué habríamos de coincidir con su actitud ante la necesidad que escapa al poder del hombre, le dispensa suerte o lo priva de ella y se lo somete, al final, en todos los casos? Para el estoicismo el destino es el logos del cosmos, el pneuma o espíritu que lo penetra y controla todo. Estos pensadores encontraban en la lógica, la física y la ética la misma concatenación necesaria de las cosas que, desde su punto de vista, garantizaba el orden universal que el sabio conocía y aceptaba de buen grado. Éste es el sentido en que para los estoicos todo cuanto ocurre, ocurre conforme al destino. El filósofo, cuyo saber penetra la interdependencia de todo, actúa conforme al destino en contraste con el ignorante, al que el destino arrastra en dirección ajena u opuesta a su voluntad.

Para el pensamiento contemporáneo la naturaleza, más que un sistema unitario de partes conectadas por una red universal y homogénea de

causas, es una mezcla compleja de regularidad y de azar. La naturaleza no es la fuente de inspiración de nuestra conducta ni aspiramos a adaptarnos a ella en todo lo que nos proponemos. Carecemos de un modelo único de acción; estamos dispuestos a arriesgarnos por caminos nunca hollados y todo fatalismo nos es ajeno y antipático. Estos rasgos y otros nos separan tajantemente de la idea antigua de aceptación moral. Consideramos, más bien, en contraste con cualquier fatalista, que, hasta la muerte y la experiencia del dolor, aunque inescapables, son modificables por la acción humana. Aunque no disponemos de los medios para garantizarle resultados positivos a determinados cursos de acción, de manera que la previsión inteligente pudiera guiar la conducta y hacerla infalible, nos compensa la firme convicción de que no son muchas las cosas deseables que están puestas de antemano enteramente fuera de nuestro alcance. Todo cuanto me puede afectar ha de acercárseme lo suficiente como para que yo a mi vez pueda afectarlo, si quiero. En este sentido, la aceptación moral a la que se refieren ciertos autores contemporáneos, en particular Wittgenstein, pero también, de otra manera, Heidegger[9], no es una actitud ante lo fatal ni un sometimiento de antemano resignado a cuanto sucede. Somos, para bien y para mal, ricos en recursos frente a lo que se nos viene encima. Pero no tan ricos como para inducirnos a creer que tenemos nuestra suerte bajo control, pues es obvio que no la tenemos.

Hablamos frecuentemente de la manera en que nos golpean ciertos sucesos funestos, de la aplastante mala suerte, la inmerecida arbitrariedad de la fortuna adversa, etc. Puede parecer intolerable oír hablar de aceptación a propósito de las posibilidades que nos inducen a expresarnos así. Pero la narración y enumeración de las desgracias que nos esperan y efectivamente nos suceden, ignora siempre nuestra recepción de ellas, la capacidad de responder y de adoptar una posición propia frente a lo que no hemos podido evitar. Comúnmente se enfocan la desgracia y el mal como asuntos literarios, poéticos o dramáticos, idealmente completos en sí mismos, como los presenta la obra de arte. A esta manera de ver las dificultades de la existencia le suele faltar la inserción del drama en la vida de alguien capaz de reaccionar prácticamente, de medir lo que le ha ocurrido, de apropiárselo, de asignarle importancia o de negársela. Sufrir la ocurrencia de algo nefasto no es como escuchar un cuento interesante y maravillarse de su curso perfecto entre comienzo y fin, sino, más bien, como tropezar en medio de la marcha, y tener que reanudarla para poder llegar a su destino.

Hay una profunda diferencia entre la desgracia y el mal como asuntos estéticos y los mismos como cuestiones prácticas. El contexto estético

[9] Cf. Martin Heidegger, *Gelassenheit* (1959), pp. 24-26.

del suceso fatal exhibe, precisamente, su carácter ideal de ocurrencia irremediable, su procedencia de una fuente incontrolable, su poder superior a toda iniciativa concebible. El arte prefiere las cosas enteras que lucen un sentido abarcable por la percepción inmediata. Situada en un contexto moral, en cambio, la llamada fatalidad es el disfraz de una combinación de posibilidades de acción y de imposibilidades. Lo que cuenta en este último caso es qué hace el afectado con lo que le ha ocurrido. Su situación se definirá como la oportunidad en la que se le van a revelar posibles medidas prácticas u obstáculos impasables, porque descubre en ella un camino abierto o un naufragio. Sólo cuando los sucesos son parte de asuntos de este orden tiene sentido hablar de aceptación o de rechazo moral, de concordancia con las cosas o conflicto práctico con ellas.

IV

La aceptación moral no debe ser concebida como mera pasividad y omisión. Puede, claro está, incluir, como cualquier otra política de vida, decisiones de abstenerse de actuar en determinadas situaciones, pero no consiste de tales omisiones. La aceptación de nuestra condición limitada y menesterosa, de la existencia del mal, de la casualidad y las coincidencias desgraciadas, tanto como la aceptación de nuestras capacidades, de la existencia de la bondad y generosidad ajenas, de la regularidad de los sucesos con que podemos contar y de la buena suerte son compatibles con una vida activa plena. La aceptación de algunas cosas no es tampoco una fórmula totalitaria a la que haya que recurrir siempre para decidirlo todo de manera correcta; no es una regla ni una ley ni tampoco un imperativo que por sí solos establezcan en qué consiste la moral —que pueda decidir acerca de todos sus motivos, ser su única fuente de inspiración o un modo exclusivo de actuar. La aceptación que nos pone en concordancia con lo que hay es, más bien, un ingrediente de la conducción de la vida capaz de darle un carácter bien definido a la acción y a la personalidad moral.

La expresión de Wittgenstein, citada al comienzo, “aceptar algunas cosas” o “darse por contento con algunas cosas” (*mit manchen sich zufrieden geben),* es amplia, vaga y formal: se cuida de fijar contenidos dignos de ser aceptados. A pesar de su carácter abierto excluye definitivamente todo dogmatismo y pretensión de dictar el bien a los demás. Tratándose de moral soy yo quien tiene que concordar, ser feliz, etc. Es parte de la dirección moral que este filósofo ofrece que exprese su convicción como una declaración sobre sí mismo —“mi vida consiste”— que los demás pueden escuchar

o desoír. Todo aquí es asunto de cada uno. La fórmula da, además, una seña de moderación, que tácitamente desaconseja los extremismos, las pasiones e impulsos incontrolables que nos mantienen agitados, tensos y en guerra con las cosas como son. Entendida de esta manera la aceptación que pone en concordancia define un estilo, da un punto de partida y apunta en cierta dirección, pero no alcanza a convertirse en una doctrina, ni lo pretende. Por eso no admite, tampoco, la formulación de generalizaciones sobre sus alcances. En lo que sigue propongo, en vez de un discurso que define, dos casos prácticos que debieran aclarar las posibilidades de aplicación del sentido moral de la aceptación y la concordancia.

La obra de Wittgenstein contiene múltiples consideraciones sobre los límites de las cosas y de las actividades humanas. Establecer tales límites con claridad y respetarlos una vez que se los concibe, tuvo, para este filósofo, un sentido moral. Todo está bien con la condición de que no se lo tome por lo que no es, esto es, mientras no se lo confunda o presente enredado con otra cosa. "Como todas las cosas son, es Dios. —Dios es como todas las cosas son"[10]. Ir más allá de los límites de algo o siquiera tratar de hacerlo, conduce al fraude y a la confusión. A veces, incluso al pecado, piensa el filósofo. En este sentido, Wittgenstein es un seguidor de Kant, para quien la manera crítica de la filosofía redunda, precisamente, en el señalamiento de límites o fronteras del conocimiento, del uso legítimo de la razón, de la conducta libre, del juicio estético. Entre las obras de Wittgenstein, el *Tractatus,* sobre todo, define los límites del mundo, del lenguaje, del sentido, del pensamiento, de la filosofía. Tales límites prestan un servicio moral a quien quiere pensar con claridad y precisión en cuanto sirven para excluir de cierto contorno, con gran severidad, los muchos asuntos situados fuera de él. Los límites que la investigación filosófica fija a sus posibles asuntos legítimos y a sí misma como actividad son aceptados, antes que nadie, por el propio filósofo. "Mis proposiciones sirven como elucidaciones de la siguiente manera: cualquiera que eventualmente me entienda las reconoce como carentes de sentido..."[11] El filósofo no encuentra mérito ni gracia en las trasgresiones; sólo muestra cierta comprensión más tarde en el caso de la ética, que resulta de un impulso humano insistente de chocar con los límites del lenguaje[12] pero que no consigue pasarlos; y en el de la religión[13], que trata de expresar verbalmente un sentimiento en

[10] L. Wittgenstein, *Notebooks* 1914-1916 (1979), 1 de agosto de 1916.

[11] L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus* (1974c), 6.54.

[12] L. Wittgenstein, *A Lecture on Ethics* (1993), pp. 37-44. "The first thing I have to say is, that the verbal expression which we give to these experiences is nonsense!" (p. 41).

[13] L. Wittgenstein, *Wittgenstein und der Wiener Kreis,* 17 de diciembre de 1930: *Religion* (1984), Vol. 3.

términos absolutos, sin lograrlo. Frente a otros límites, como la inescrutabilidad del futuro, la ineficacia de la voluntad para cambiar el orden del mundo de los hechos, nuestras culpas y errores pasados, sólo cabe aceptarlos.

Aunque más tarde los trabajos de Wittgenstein dejan de ser tan ascéticos y prohibitivos como el *Tractatus,* la idea de que todo es y significa sólo dentro de contextos limitados se mantiene constante[14]. La renuncia a la teoría y a las pretensiones dogmáticas y especulativas de la metafísica tradicional es, de nuevo, un mensaje moral como ya era el contenido de la primera obra. Para Wittgenstein, la filosofía es algo cuya legitimidad depende del reconocimiento y la aceptación de sus propios límites y también de los del pensar y el sentido que ella explora. En particular: lo que se puede explicar es limitado[15] y la necesidad de explicaciones se agota pronto. De hecho, aceptamos muchas convicciones sin precisar de fundamentos y nuestro saber reposa sobre certezas adoptadas sin examen o justificación. La incapacidad de aceptar las limitaciones del intelecto ha arruinado al pensamiento filosófico y a la teoría en el pasado. La humildad que el segundo Wittgenstein asocia con las tareas de la filosofía depende de dos alcances que sus *Investigaciones* le niegan sin vacilar: sabemos muchas cosas con firmeza que no proceden de la filosofía ni necesitan de su auxilio; además, lo que la filosofía puede hacer por el mundo y la vida es prácticamente nulo. No obstante, le dedica su vida a la filosofía y nunca entiende su propio trabajo en la disciplina sino como tarea moral.

Mi segundo caso ilustrativo propone una práctica de la aceptación y la concordancia morales para mejorar la política democrática contemporánea. Varios filósofos han planteado recientemente la cuestión de la tolerancia que han de ejercer los miembros de una sociedad democrática en la que coexiste una variedad de culturas interesadas en conservar su idiosincrasia. Un buen ejemplo de una discusión conceptual del tema lo encontramos en un ensayo de Fernando Salmerón, titulado "La tolerancia"[16]. Confirmando la necesidad de la tolerancia en las comunidades latinoamericanas en las que viven juntos diversos grupos étnicos que aspiran a ejercer sus derechos ciudadanos sin tener que renunciar a su identidad colectiva, Aguilar Camín, el ensayista mexicano, propone una crítica de la tolerancia y señala una exigencia moral que la supera.

Por encima de la tolerancia, que a menudo es recomendada como una virtud política, se encuentra la aceptación, sostiene Aguilar Camín,

[14] L. Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen* (1974b), §§ 499-500.
[15] L. Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen* (1974b), §§ 109, 126.
[16] Fernando Salmerón, *Diversidad Cultural y Tolerancia* (1998), pp. 27-39.

refiriéndose a la actitud debida frente a la diversidad de los hombres que pertenecen a una misma sociedad[17]. La tolerancia "no necesariamente comprende ni incluye" a los otros con los que nos toca convivir. "Hay... un más allá de la tolerancia, una civilidad superior constitutiva del verdadero espíritu democrático. Ese más allá... [es] la aceptación de lo distinto". "La aceptación de la diversidad implica el reconocimiento de que las posiciones y los intereses de los otros son tan legítimos como los míos, por distintos, opuestos o inauditos que me resulten".

Aún reconociendo la virtud y la necesidad de la tolerancia conviene detenerse en sus características limitaciones; éstas se pueden ver con claridad si se la compara con su peldaño superior, la aceptación. Uno de los límites de la tolerancia consiste en que "acepta a regañadientes, por convicción o simulación cívica, aquello que en el fondo rechaza, aquello que la irrita y sólo puede aceptar porque mira a otra parte". —"Tolero, haciendo un esfuerzo, lo que en el fondo me resulta inaceptable, lo que borraría del mundo si pudiera... Tolero la existencia de adversarios políticos porque es el precio que debo pagar para vivir en una democracia donde mis propios puntos de vista y mis propios intereses sean tolerados, pero, si pudiera suprimiría del ágora esas diversidades adversarias". En cambio, la aceptación mutua, aunque más ardua para algunos, dará lugar a una convivencia superior, más generosa, libre y pacífica. "Los credos más extravagantes, los intereses más opuestos, los representantes más diversos de esas creencias y esos intereses no sólo han de ser aceptados como legítimos, sino aún como deseables..." —"La aceptación de la diversidad como legítima y deseable, más que su tolerancia, es el corazón de la cultura democrática, el más allá que no encuentra en la pluralidad una molestia, sino una riqueza, no un riesgo, sino una premisa de la vida pública".

Referencias bibliográficas

Bouwsma. O. K. *Wittgenstein, Conversations 1949-1951*. Editado por Craft y Hustwit. Indianapolis: Hackett, 1986.

Camín Aguilar, Héctor. "Más Allá de la Tolerancia". En revista *El Sábado* del diario *El Mercurio*, Santiago, 20 de mayo de 2000, p. 20.

Canetti, Elias. *Die Provinz des Menscheh: Aufzeichnungen 1942-1972*. Frankfurt a/M: Fischer, 1980.

Heidegger, Martin. *Gelassenheit*. Pfullingen: Neske, 1959.

Pessoa, Fernando. *Obra Poética*. Tomo I. Edición bilingüe. Traducción de Miguel Ángel Viqueira. Barcelona: Ediciones 29, 1997.

[17] Héctor Aguilar Camín, "Más Allá de la Tolerancia" (2000), p. 20.

Wittgenstein, L. *Über Gewissheit.* Herausgegeben von G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright. Oxford: Blackwell, 1974 a.

Wittgenstein, L. *Philosophische Untersuchungen.* Herausgegeben von G. E. M. Anscombe y R. Rhees. En L. Wittgenstein, *Schriften,* Frankfurt/M: Suhrkamp, 1974b.

Wittgenstein, L. *Tractatus Logico-Philosophicus.* Frankfurt/M: Suhrkamp, 1960. En L. Wittgenstein, *Schriften,* Frankfurt/M: Suhrkamp. 1974c.

Wittgenstein, L. *Notebooks 1914-1916*. Editado por G. H. von Wright y G. E. M. Anscombe. Segunda edición. Incluye traducción al inglés de G. E. M. Anscombe. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Wittgenstein, L. *Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis.* Gespräche, aufgezeichnet von Friedrich Waismann. Aus dem Nachlass herausgegeben von B. F. McGuinness. En L. Wittgenstein, *Werkausgabe in 8 Bänden,* Vol. 3. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1984.

Wittgenstein, L. *A Lecture on Ethics.* En *Philosophical Occasions 1912-1951*. Editado por Klagge y Nordmann. Indianápolis: Hackett, 1993.

Salmerón, Fernando. *Diversidad Cultural y Tolerancia.* México: Paidós, 1998. □

LA CARIDAD Y EL OTRO COMO OTRO

Beltrán Villegas (ss.cc.)

¿Cuál es el origen semántico de la palabra "caridad"? ¿Por qué la utilizaron los cristianos de lengua latina para traducir la palabra griega "agápe"? Al hilo de la respuesta a estas preguntas, se muestra cómo la iglesia cristiana, desde sus primeros años, ha visto en el "agápe"/"caritas", y concretamente en el amor al prójimo, el resumen de toda la ética cristiana.

La palabra "caridad" no tiene muy *buena barra* entre quienes se ocupan de ética en nuestro ambiente, pues se la usa en referencia a un tipo de "amor" que no resulta atrayente. Vinculada casi exclusivamente con la limosna, es fácilmente considerada como un "accesorio" de poca monta y sin real gravitación en la estructura ética normal de la gente. A lo más se le atribuye el papel de "rellenar los vacíos" que suele dejar incluso la mejor de las institucionalidades, y se piensa que es *retórica eclesiástica* decir —como lo dijeron los obispos latinoamericanos en Puebla— que la justicia es "el

BELTRÁN VILLEGAS M. (ss.cc.). Profesor de la Facultad de Teología, Universidad Católica de Chile.

* Versión escrita de la conferencia presentada el 26 de agosto de 1998, en el marco del ciclo para estudiantes universitarios, "Virtudes de la vida", organizado por el CEP.

mínimum exigible de la caridad". Me parece muy significativo que todo el mundo admire a un P. Hurtado o una M. Teresa de Calcuta, pero que se considere que ellos han asumido una tarea no exigible al común de los miembros de una sociedad. Caricaturizando, podría decirse que la caridad aparece como una virtud admirable en otros, pero no necesariamente incluida en el proyecto moral propio.

Me propongo mostrarles qué papel desempeña ella en la visión cristiana de la *praxis* humana, como la encontramos en los documentos fundantes del cristianismo, es decir, en los libros del *Nuevo Testamento*. Pero antes quiero invitarlos a un breve "paseo semántico".

I

"Caridad" viene del latín "caritas", que es el sustantivo abstracto que de suyo designaba la cualidad de las cosas o personas consideradas "caras", es decir, de alto precio o valor. En su uso primario y más común se refería a la "carestía", es decir, al alto precio que en un momento dado adquirían las cosas necesarias, haciéndolas "caras". Pero también se podía usar "caritas", por ampliación, para designar la actitud subjetiva que se adopta frente a las cosas o personas "caras", reconociéndoles su alto precio o valor: podríamos decir que, en este segundo uso derivado, equivalía a "aprecio". En todo caso, hay que dejar constancia de que, sobre todo en su segunda acepción, era un sustantivo muy poco usado, y de que jamás aparece en los tan diversos "elencos de virtudes" que nos dejaron los moralistas latinos (en general de raigambre estoica).

Lo curioso e interesante está en que "caritas" fue la palabra que los cristianos de lengua latina utilizaron para traducir la palabra "agápe" que se encontraba en sus libros sagrados, escritos en griego (el *Nuevo Testamento*) o traducidos al griego (el *Antiguo Testamento*), dejando de lado los términos latinos clásicos "amor", "amicitia", "dilectio". Las razones las vamos a comprender muy pronto, ya que son las mismas que llevaron, en griego, al uso de "agápe".

En el mundo griego había tres verbos para expresar la idea de "amar": "era-o", "phile-o" y "agapa-o". Los dos primeros tenían una individualidad muy marcada que los diferenciaba —y aun los oponía— de manera clarísima: "era-o" (de donde viene el sustantivo "eros") designaba la búsqueda y el deseo apasionados del bien que puede a uno colmarlo de gozo, y de manera muy particular tenía a la vista ese dinamismo incontenible que la sexualidad pone en movimiento. Por su parte, "phile-o" (de donde

viene "philía") designaba la inclinación solícita por el bien de aquel a quien uno consideraba digno de tal solicitud. En cambio, "agapa-o" no tenía nada de la magia del "eros" cantado por los poetas líricos griegos (piénsese en Píndaro o en Safo), y muy poco de la noble calidez de la "philía" celebrada por los filósofos y los trágicos (piénsese en Aristóteles o en Sófocles). "Agapa-o" tenía un sentido bastante impreciso, lo que hacía posible asociarlo con "era-o" con "phile-o" como un sinónimo "de relleno" para prolongar una idea o redondear una frase. En todo caso, nunca aparece como punto de partida para una reflexión sobre su sentido, y —esto es capital— no hay constancia de que existiera en el griego prebíblico el sustantivo "agápe".

Pues bien, los judíos greco-parlantes que asumieron, en Alejandría y a partir del s. III a.C., la tarea de traducir al griego la Biblia hebrea, que tanto maneja la idea del amor, tomaron para traducirla una opción que es patente a través de los siguientes datos: usaron 4 veces el verbo "era-o" y 2 el sustantivo "eros", 25 veces el verbo "phile-o" y 25 el sustantivo "philía", y más de 200 veces el verbo "agapa-o" y unas 20 veces el sustantivo "agápe" (al parecer creado por ellos). Esto muestra claramente que para esos traductores el tipo de amor que aparecía en la Biblia no cabía en los términos "era-o" / "eros", y no del todo bien en "phile-o" / "philía", por lo que pensaron que era mejor usar el indefinido verbo "agapa-o" y dejar que, por su uso en la Biblia, se cargara con un nuevo y específico sentido. Y esto se confirma cuando se tiene delante de los ojos la terminología que encontramos en el *Nuevo Testamento*: aquí simplemente no se usa jamás "era-o" / "eros", se usa 25 veces el verbo "phile-o" y 1 vez el sustantivo "philía", y se usa más de 140 veces el verbo "agapa-o" y cerca de 120 veces el sustantivo "agápe".

II

Es imposible tener una mayor evidencia de que el judaísmo y sobre todo el cristianismo tuvieron una aguda conciencia de estar hablando de una nueva forma o tipo de amor, irreductible a las que había conocido y celebrado el mundo griego, especialmente a la especie de amor que se expresaba con el término "eros".

Y no cabe duda de que en "eros" lo inconciliable con la visión del amor que imperaba ya en el *Antiguo Testamento*, estaba en su carácter instintivo, ciego e indiscriminado. Para la Biblia no es "amor" ("ahab") una adhesión afectiva que no signifique una "elección" y que no sea "libre": incluso el amor de los amantes, en el *Cantar de los Cantares*, consiste en

que cada uno es para el otro "el único" y "el elegido". No hay amor donde no hay decisión de una libertad. Y es muy significativo que con el verbo "ahab" pueda expresarse también la idea de "mostrar agradecimiento": detrás de este fenómeno está la percepción de que ser tratado bien por otra persona es una "gracia", un amor que pudo no darse.

"Eros" no sólo había sido cantado sensualmente por los poetas líricos; también había sido objeto de la reflexión filosófica de Platón. Éste, en el *Banquete*, había visto a "Eros" —hijo de la Indigencia— como una fuerza incontenible que dinamiza y atraviesa toda la realidad en busca de bienes cada vez más altos y, en última instancia, del Bien Supremo. El judaísmo —y con mayor claridad y coherencia el cristianismo— nos presentan una visión exactamente opuesta: ven también toda la realidad atravesada por un dinamismo de amor, pero de ese amor llamado a "habitar" en el término "agápe": un amor, "hijo de la Plenitud", que, libremente, se desborda y que busca comunicar como un don gratuito el Bien que posee y que es, creando seres capaces de participar de ese Bien, y creando especialmente al hombre capaz de entrar en comunión personal de amor con ese Bien Supremo.

Todo en la Biblia está dominado por la prioridad libre del amor creador y salvador de Dios. Lo que expresa la frase del apóstol Juan: "Dios nos amó primero" (1 Jn 4, 19), es una convicción que estaba ya presente en Dt 7, 7-8 y que está detrás del mandamiento supremo del *Antiguo Testamento*: "Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas" (Dt 6, 5), porque ese amor a "Yahveh, el único", pero que ha querido hacerse "el Dios de Israel", no es otra cosa que el afán de mostrarle con hechos el agradecimiento por ser él lo que es y por haberse mostrado como tal mediante obras maravillosas a "su pueblo" (Dt 6, 4-6). Es este telón de fondo el que nos permitirá comprender lo que —con la terminología de "agápe"— nos dice el *Nuevo Testamento* acerca del amor.

III

La primera novedad que introduce Jesús es poner en relación con ese "mandamiento supremo" —y dándole carácter de "segundo mandamiento"— otra prescripción que se encontraba medio perdida entre una serie de normas de segunda categoría en el libro del Levítico: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Lev 19,18). El evangelista Mateo subraya el alcance de esta vinculación diciendo que el "segundo" de estos mandamientos es "semejante al primero" y añadiendo que "en estos dos mandamientos se basan

toda la Ley y los Profetas" (Mt 22, 34-40). Lo esencial de este "segundo mandamiento" está en la consideración de que este "prójimo" tiene el mismo valor que uno mismo y que su existencia es tan autónoma como la de uno, por lo que no se puede pensar que él esté ahí en función de uno ni cabe valorarlo a la luz de lo que él es para uno. El prójimo es "otro", pero su "otreidad" es tan digna de estimación como eso que hace de mí un Yo provisto de una "dignidad" que ninguna "cosa" posee. La consecuencia es que uno tiene que tratar a este prójimo tal como uno desea que (fijarse que no se dice "para que") los demás lo traten a uno: no como un "objeto" o un "medio", sino como persona libre y autónoma: consecuencia, al parecer, obvia, pero que nadie había formulado, en forma positiva, antes que Jesús (Mt 7,12); sólo se había llegado a "no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti" (formulación de Isócrates: s. V-IV a.C., y que ya se vislumbra en algunos textos mesopotámicos del segundo milenio a.C.).

Por otra parte, este "segundo mandamiento" es realista y *aterrizado*, no sólo por cuanto encuentra su medida en el amor que espontáneamente cada cual siente por sí mismo, sino también porque concretiza con igual sobriedad en "el prójimo", es decir, en el cercano, en el vecino, el objeto del amor que se prescribe, sin caer en la vaguedad abstracta de un "amor a la humanidad".

Pero esta "cercanía", por otro lado, no es la elegida por uno, ni está circunscrita a las "pertenencias" ideológicas, nacionales, o culturales, como lo subraya la parábola de El Buen Samaritano (Lc 10, 25-37), y se extiende, además, hasta los enemigos (Mt 5, 43-48), sin duda alguna porque —como alguien lo ha dicho— nadie está tan "cerca" de nosotros como nuestros enemigos.

Es claro que todo este enfoque de Jesús constituye una enorme revolución espiritual, ética y religiosa. Hay en ella una concentración en el amor ("agápe") de todos los "deberes" que se le imponen al hombre. La recién citada parábola de El Buen Samaritano muestra a las claras y gráficamente la verdad de la formulación con que R. Bultmann expresó tal revolución llevada a cabo por Jesús: "Para Jesús, la sacrosanta voluntad de Dios nos asalta y se nos echa al cuello, no desde las páginas de un código, sino desde la necesidad del hombre que está cerca de nosotros". Es decir, el prójimo sustituye a la Ley, y lo esencial no es saber teóricamente "quién es mi prójimo" —como quería el doctor de la Ley—, sino mostrarse uno como prójimo del que puede mirarnos como su única o última posibilidad de socorro: con los ojos con que miraba el que quedó tirado medio muerto a la vera del camino a los que veía acercarse al sitio donde se hallaba. La

parábola de El Buen Samaritano, en efecto, se ordena a que miremos las situaciones poniéndonos en el lugar del necesitado, identificándonos con él, más que —y antes que— con el samaritano de la historia, pues la actuación de éste nació de "haber sentido compasión", es decir, de haberse *puesto en el pellejo* del otro en su "otreidad" concreta y dolorosa.

Esta enorme revolución se sitúa dentro de lo que constituye el corazón de "la Buena Nueva" proclamada por Jesús: la del amor paternal de Dios por los hombres, que lo ha llevado a poner "cerca" de ellos su reinado (Mc 1, 15): es decir, su presencia personal como factor determinante de la existencia humana y de su orientación, pero también —y antes— como fuente de ese perdón que el hombre, en su condición caída, necesita. Este sentirse amados y perdonados por un Dios que es Padre ("Abbá"), es el resorte que mueve a amar y a perdonar como Dios ama y perdona (Lc 6, 27-36, y véase Mt 18, 23-35), a actuar como hijos de ese Dios "que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos" (Mt 5, 45).

IV

Teniendo en cuenta la claridad de esta enseñanza de Jesús, no puede llamar la atención que la iglesia cristiana, desde sus primerísimos años, haya visto en el amor ("agápe") —y concretamente en el amor al prójimo— el resumen de toda la ética cristiana. Quiero comenzar esta última parte de mi exposición leyendo las primeras líneas del primer escrito cristiano, que es la 1ª carta a los Tesalonicenses, escrita por Pablo el año 50 /51, sólo veinte años después de la muerte de Jesús: "Damos siempre gracias a Dios por vosotros en nuestras oraciones, cuando recordamos ante Dios nuestro Padre lo activa que es vuestra fe, lo esforzado que es vuestro amor, y lo constante que es vuestra esperanza en (la venida de) nuestro Señor Jesucristo, sabedores, hermanos amados ("egapeménoi") por Dios, de que habéis sido elegidos por él" (1 Tes 1, 2-4). Según este antiquísimo texto, ser cristiano tenía sus últimas raíces en el amor libre y "electivo" de Dios, y consistía en tres actitudes que, según Pablo, se daban con excelencia entre los tesalonicenses: la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza eran la forma de acoger lo que Dios ya había hecho por los hombres en la muerte y resurrección de Cristo (la fe: cf. 1 Tes 4, 14; 5, 10) y lo que haría por ellos en la venida gloriosa del mismo Cristo al fin de la historia (esperanza: cf. 1 Tes 1, 10; 4, 14; 5, 9-10); el amor ("agápe") era amar a los demás con un amor semejante al de Dios y "enseñado" por él (1 Tes 4, 9). Es muy claro en esta

carta (como en las demás cartas de Pablo) que cuando se habla de "amor" ("agápe") a secas, se trata del amor al prójimo; Pablo nunca usa "amor" ("agápe") para hablar de nuestro amor a Dios: para él, la única forma real de amar a Dios consiste en dejarse amar por él, acogiendo ese amor mediante la fe y la esperanza. De modo que en esta tríada que define el ser cristiano, la *praxis* cristiana se reduce al amor (al prójimo).

Esto mismo lo va a recalcar Pablo de varias maneras. Ante todo, para él los cristianos están libres de "la Ley", porque si aman ya han cumplido toda la Ley: "Toda la Ley queda cumplida con el *amarás a tu prójimo como a ti mismo*" (Gal 5, 1-3). Y reitera más ampliamente: "Con nadie tengáis otra deuda que la de amaros mutuamente, pues quien ama al prójimo, ha cumplido toda la Ley. Porque aquello de *No cometerás adulterio, No matarás, No robarás, No codiciarás,* y de los demás mandamientos, se cumple en esta palabra: *Amarás a tu prójimo como a ti mismo.* Por lo tanto, el pleno cumplimiento de la Ley es el amor" (Rom 13, 8-10).

Otra manera tiene Pablo de expresar esta concentración de la ética en el amor, y es la de considerar todas las que tenemos por "virtudes", no como valores autónomos, sino como modalidades o cualidades del amor. Escribe, en efecto, Pablo: "El amor ("agápe") es paciente, el amor es benigno; no es envidioso, no presume ni se engríe; el amor no es indecoroso ni busca su interés; no se irrita ni lleva en cuenta el mal; no se alegra con la injusticia, sino que disfruta con la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta" (1 Cor 13, 4-7).

Una tercera manera que tiene Pablo de acentuar la centralidad del amor la encontramos en la siguiente plegaria que él hace por los cristianos de su muy querida comunidad de la ciudad macedonia de Filipos: "Y ésta es mi oración: que vuestro amor abunde todavía más y más en conocimiento perfecto y en toda sensibilidad, hasta el punto de poder vosotros discernir los valores de las cosas, para que seáis puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de las obras que de vosotros espera Dios" (Flp 1, 9-10). Así es que, para Pablo, es el amor el que se convierte en fuente de luz que permite "discernir" en las encrucijadas de la vida los caminos correctos. Nada puede ser "virtuoso" u "obra buena" si no ha sido percibido como tal teniendo como criterio decisivo el amor ("agápe"). Por eso es que Pablo les dice todo a los corintios cuando les dice: "Que todo lo vuestro sea hecho en el amor" (1 Cor 16, 14).

Algo que no se puede omitir es que para los cristianos primitivos este imperativo de amar al prójimo no provenía del imperio de un mandamiento externo, sino que brotaba libremente como una exigencia obvia e ineludible de una conciencia empapada, por el don del Espíritu Santo, del

amor universal de Dios (Rom 5, 5) experimentado a través del tipo de amor con que cada uno se sentía y se sentía amado por él: "Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros" (1 Jn 4, 11). Gracias a la transformación existencial que significa "conocer y creer el amor que Dios nos tiene" (1 Jn 4, 16), "el contenido justo de la Ley *se cumple* en nosotros" (como quien dice, casi sin darnos cuenta), dice Pablo (Rom 8, 4).

Sé muy bien que los cristianos —quizá sobre todo los católicos— tenemos la culpa de que esta espléndida imagen del amor —"agápe" / "caritas"— no se pueda descubrir cuando se nos ve actuando, y de que lo que evoca hoy día la palabra "caridad" tenga tan poca miga. Y ello, sobre todo porque le hemos dado cabida a cierto legalismo de "prácticas" —o incluso de "virtudes"— que de hecho ocupan (por no decir "llenan") el espacio del "ethos" cristiano-católico.

Pero, por otra parte, creo que algunos de los atributos del amor de que nos habla el *Nuevo Testamento* han pasado, "secularizados", al "ethos" común de la gente (pienso sobre todo en la *solidaridad*), y que se los practica sin mucha conciencia de que se trata de una actuación "virtuosa". Y me alegro de ello. Porque pienso que se introduce así en la vida una dosis de "gratuidad", de actuación no conscientemente programada como parte de un proyecto ético de vida. Y me imagino que esto no le desagradaría a Jesús, quien no nos quería demasiado conscientes de nuestra virtud. Porque, ¿en qué otra cosa pensaba él cuando decía: *cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha* (Mt 6, 3)? Y, por otra parte, él supone que los que lo sirvieran a él en la persona de los hambrientos, forasteros, enfermos o encarcelados, podrían muy bien no darse cuenta de que así lo hicieran, ya que pone en sus labios la pregunta: "Pero ¿cuándo, Señor, te vimos necesitado y te servimos?" (Mt 25, 31-40). Es posible que el amor-"agápe" que no sabe su nombre sea más evangélico que el que lo sabe demasiado. □

EDUCACIÓN: EL CONSTRUCTIVISMO RADICAL Y LA PSICOLOGÍA COGNITIVA*

John R. Anderson, Lynne M. Reder y Herbert A. Simon

Los autores analizan las bases de sustentación de algunas de las corrientes más populares de reforma educacional en los Estados Unidos, deteniéndose especialmente en el "constructivismo radical" que ha tendido a predominar en la enseñanza de las matemáticas. Aun cuando muchas de estas corrientes se autoatribuyen bases "científicas", J. R. Anderson, L. M. Reder y A. Simon sostienen que ellas suelen basarse en ideologías y no en la ciencia. La reiterada afirmación de que los niños deben descubrir por sí mismos el conocimiento, señalan los autores, no está respaldada por estudios científicos; por el contrario, los estudios indican que el aprendizaje requiere instrucción. Las investigaciones en el campo de la psicolo-

JOHN R. ANDERSON. Carnegie Mellon University.
LYNNE M. REDER. Carnegie Mellon University.
HERBERT A. SIMON. Carnegie Mellon University.

* "Radical Constructivism and Cognitive Psychology", publicado originalmente en Diane Ravitch (ed.), *Brookings Papers on Education Policy* (© The Brookings Institution). Su reproducción en castellano en esta edición cuenta con la debida autorización. Traducción de Rose Cave de la Maza.

Los autores agradecen a Sharon Carver, Susan Chipman, Albert Corbett. Ellen Gagné, David Klahr, Ken Koedinger, Rich Lehrer, Marsha Lovett, Melvin Reder y Steve Ritter por sus valiosas observaciones, lo que no significa que estén de acuerdo con nuestras afirmaciones. La elaboración del presente trabajo contó con el apoyo de la National Science Foundation Directorate for Education and Human Resources (MDR-92-53161).

gía cognitiva, advierten los autores, validan la importancia de la enseñanza directa y la ejercitación deliberada, en un contexto en el que el profesor sabe qué está eseñando y diseña meditadas estrategias para enseñarlo.

Aquellos que piensan que la educación necesita basarse en la moderna ciencia de la psicología cognitiva suelen tener la impresión de que pelean contra molinos de viento. Cualesquiera sean sus méritos, prácticamente todas las corrientes educacionales afirman que tienen una base científica. Pero a menudo no es así.

Lamentablemente, la ciencia del aprendizaje humano nunca ha influido mucho en la práctica de la educación. Hasta hace poco, esta ciencia no había madurado lo suficiente como para prestar mucha utilidad a los profesionales de la educación o a los encargados de formular las políticas educacionales. Sin embargo, en los últimos decenios, la psicología cognitiva ha desarrollado un conjunto de teorías y de conocimientos que ofrece amplias oportunidades para mejorar la educación. En general, la educación no les asigna una función muy importante a las conclusiones de la ciencia cognitiva, sino que sigue debatiéndose entre dos puntos de vista precientíficos del aprendizaje que se remontan a filosofías de siglos atrás.

A riesgo de incurrir en una leve caricaturización, estos dos puntos de vista podrían caracterizarse de la siguiente manera:

La filosofía asociacionista sostiene que el aprendizaje no consiste más que en formar asociaciones. En consecuencia, la educación no plantea ninguna dificultad. Lo único que hay que hacer es enseñarles a los alumnos las asociaciones que necesitan aprender.

Por su parte, para la filosofía racionalista, el conocimiento se logra examinándose uno mismo. Por lo tanto, la educación no plantea ninguna dificultad. Lo único que hay que hacer es permitir que los alumnos descubran lo que necesitan aprender.

El lugar central ocupado por ambas corrientes en la práctica educacional ha tenido altibajos. En los períodos de auge, el medio intelectual imperante les proporciona rasgos adicionales. La última vez que se impuso la escuela asociacionista fue durante el apogeo del conductismo (*behaviorism*), bajo la influencia de Edward Thorndike y John B. Watson, y posteriormente de B. F. Skinner. En su cúspide, esta escuela se vinculó con características tales como la instrucción programada y los objetivos con-

ductistas[1]. Actualmente, el conductismo ha sido dejado de lado y se ha con vertido en víctima propiciatoria de los nuevos movimientos de reforma de la educación.

Una de las principales características del movimiento conductista como teoría psicológica fue su rechazo de la idea de la existencia de estructuras mentales y la afirmación de que el pensamiento humano puede comprenderse íntegramente en función del comportamiento externo. Más adelante, el conductismo en psicología fue reemplazado por la "revolución cognitiva", que demostró de diversas maneras que el comportamiento sólo puede comprenderse postulando la existencia de estructuras y procesos mentales. Sin embargo, la expresión "revolución cognitiva" es un tanto exagerada, puesto que muchos de los paradigmas y metodologías de la era conductista se han incorporado, con frecuencia muy modificados y aumentados, a la psicología cognitiva moderna. Así pues, junto con las grandes transformaciones teóricas se ha producido un avance acumulativo de la ciencia, como generalmente sucede en otras ciencias cuando experimentan "revoluciones".

En su forma más pura, el conductismo se aplica a la educación prescribiendo el comportamiento que debe tener el alumno y dejando de lado sus patrones de pensamiento. Algunas de las aplicaciones a la educación de la era conductista conservaron la pureza teórica, pero a menudo fueron mucho más flexibles y se limitaron a poner énfasis en la retroinformación inmediata y en la medición cuidadosa de los avances educativos. Como esta aproximación a veces funcionaba bien, vale la pena citar un caso en que un programa conductista dio buenos resultados.

D. Porter relata un experimento realizado con "máquinas de enseñanza" en que se trató de aplicar fielmente los principios de Skinner sobre el refuerzo inmediato mediante el conocimiento de los resultados: enseñarles ortografía a los alumnos mediante una serie de aproximaciones sucesivas (primero el alumno lee la palabra, a continuación deletrea una parte de ella y finalmente, luego que se le han dado las demás partes, deletrea toda la palabra), minimizar los errores y aproximar la situación de aprendizaje a la situación de transferencia[2]. En programas de entrenamiento de un año de duración para segundo, cuarto y sexto grado, tanto los alumnos de los grupos experimentales (máquinas de enseñanza) como los grupos de control

[1] A. A. Lumsdaine y R. Glaser (eds.), *Teaching Machines and Programmed Learning* (1960); R. C. Atkinson y H. A. Wilson (eds.), *Computer-Assisted Instruction* (1969); N. E. Gronlund, *Stating Behavioral Objectives for Classroom Instruction* (1985); y R. F. Mager, *Preparing Instructional Objectives* (1962).

[2] D. Porter, *An Application of Reinforced Principles to Classroom Teaching* (1961).

(instrucción estándar) avanzaron alrededor de un grado. Sin embargo, los alumnos de los primeros grupos sólo necesitaron un tercio del tiempo de clases que requirieron los segundos para lograrlo. El programa skinneriano hacía hincapié en este aumento de la eficiencia del aprendizaje.

No obstante que los problemas empíricos y teóricos que plantea el conductismo hicieron que fuera rechazado por la ciencia de la psicología, nunca fue descartado de plano como programa educacional. Algunos proyectos tuvieron éxito y otros fracasaron. Uno de los acercamientos, basado libremente en el conductismo, fue el de instrucción basada en el dominio de la materia (*mastery-based instruction*). De acuerdo con esta aproximación, se les daba a los alumnos todo el tiempo que necesitaban para dominar la materia inicial antes de avanzar a la siguiente, con el fin de acelerar el aprendizaje de la materia posterior y mejorar el aprendizaje en general[3]. Pese a que desde el punto de vista empírico, comúnmente los resultados fueron positivos, en la actualidad los círculos educacionales tienen una impresión poco favorable de la instrucción basada en el dominio de las materias y no se aplica mucho[4].

En los Estados Unidos, la educación de corte conductista nunca fue muy común y prácticamente ha desaparecido. Las razones de ello son complejas y no se conocen muy bien. Pero lo más probable es que las dificultades teóricas y empíricas con que tropezó dentro de la psicología científica y su reemplazo por la psicología cognitiva no hayan influido demasiado.

En el último tiempo, un nuevo movimiento racionalista dentro de la educación, denominado constructivismo, cuyos partidarios coinciden apenas con los científicos que le dieron contenido experimental y teórico a la revolución cognitiva, se han atribuido los desarrollos de la psicología cognitiva. "Constructivismo" es un término vago que abarca una amplia gama de posiciones, incluidas algunas que se contraponen. Algunas versiones no pasan de ser intentos de introducir en la educación los nuevos descubrimientos teóricos de la psicología cognitiva.

Una versión más extrema, denominada "constructivismo radical", ha arraigado de manera particularmente fuerte en la enseñanza de las matemáticas. (Esta corriente nos interesa de manera especial debido a que nuestra investigación se centró en el aprendizaje de las matemáticas.) Junto con la

[3] B. S. Bloom, "Learning for Mastery" (1968), p. 2; B. S. Bloom, *Human Characteristics and Social Learning* (1976); R. Glaser, "Individuals and Learning: The New Aptitudes" (1972), pp. 5-13; F. S. Keller, "Good-Bye Teacher" (1968), pp. 78-89; y P. Suppes, "Modern Learning Theory and The Elementary School Curriculum" (1964), pp. 79-93.

[4] T. R. Guskey y S. Gates, "Synthesis of Research on the Effects of Mastery Learning in Elementary and Secondary Classrooms" (1986), pp. 73-80; y C. Kulik y R. Bangert-Downs, "Effects of Testing for Mastery on Student Learning" (1986).

corriente racionalista general, ha tomado aspectos de otras dos corrientes que también están fuertemente representadas en las corrientes modernas en materia de educación: el aprendizaje contextualizado (*situated learning*) y la teoría crítica deconstruccionista. El constructivismo radical hace hincapié en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje en situaciones complejas y el aprendizaje en contextos sociales, y al mismo tiempo desconfía mucho de la evaluación sistemática de los resultados de la educación.

> El aprendizaje [en un aula constructivista] se concebiría como un proceso activo, constructivo, en que los alumnos tratan de resolver los problemas que se van planteando a medida que participan en los ejercicios de matemáticas que se realizan en la sala de clases. Este punto de vista hace hincapié en que el proceso de aprendizaje y enseñanza es interactivo y comprende la negociación tácita y expresa del significado de los conceptos matemáticos. En el curso de estas negociaciones, maestro y alumnos elaboran una realidad matemática que se da por compartida y que constituye la base de la comunicación en curso[5].

Puede ser que esta definición sea difícil de comprender, por lo que vale la pena citar el caso, supuestamente basado en el constructivismo radical, de una intervención exitosa en matemáticas, a fin de equipararlo con la intervención exitosa recién citada, que sostiene que se basa en el conductismo. P. Cobb y sus colegas describen un programa de estudios de matemáticas para el segundo grado que comprende los principios del constructivismo radical[6]. A manera de ejemplo, cabe citar el método que aplican para enseñar a los alumnos de segundo grado a contar en decenas. En vez de enseñar el principio directamente, dividieron el curso en grupos y les pidieron que contaran objetos reunidos en conjuntos de a diez. Los grupos llegan invariablemente a la conclusión de que es preferible contar por decenas en vez de hacerlo por unidades. Cuando prepararon un programa de estudios para el segundo grado en torno a estas técnicas, comprobaron que los resultados que obtenían sus alumnos eran tan buenos como los que lograban los alumnos de los cursos tradicionales, y además realizaban un mayor número de transferencias y mostraban mejor disposición hacia las matemáticas. Los constructivistas radicales hacen gran hincapié en la transferencia y en el mejoramiento de las actitudes.

---

[5] P. Cobb, E. Yackel, y T. Wood, "A Constructivist Alternative to the Representational View of Mind in Mathematics Education" (1992), pp. 2-33.

[6] P. Cobb y otros, "Assessment of a Problem-Centered Second Grade Mathematics Project" (1991), pp 3-29.

Tal vez parezca contradictorio que tanto el acercamiento conductista como el constructivista radical produzcan programas de estudio eficaces. Sin embargo, esto indica lo difícil que resulta evaluar la relación entre las corrientes educacionales y los resultados en materia de aprendizaje. Las intervenciones complejas involucran cambios en muchos aspectos, lo que hace difícil determinar cuáles son las características a que deben atribuirse los resultados en materia de aprendizaje. Ambas clases de intervenciones podrían haber logrado sus resultados independientemente de la filosofía de la educación aplicada en la práctica. Es preciso que la teoría y la evaluación sean más definidas. Sin embargo, ambos intentos trataron seriamente de evaluar sus intervenciones. Con demasiada frecuencia se realizan intervenciones sin procurar realmente una evaluación objetiva.

La educación no ha progresado en forma sostenida porque ha oscilado entre posiciones simplistas, tales como las corrientes asociacionista y racionalista. La psicología cognitiva moderna ofrece realmente una base para avanzar mediante un análisis científico acucioso que identifica aquellos aspectos de las posiciones teóricas que sí contribuyen a que los alumnos aprendan y aquellos que no. El constructivismo radical es el actual modelo de extremismo simplista, y algunos de sus partidarios dan muestras de un sesgo contrario a la ciencia que, de prevalecer, echaría por tierra toda esperanza de progreso en la educación.

La base teórica del constructivismo radical

En la literatura se encuentran frecuentes referencias a cuatro fuentes que proporcionarían la base "científica" del constructivismo radical.

La psicología cognitiva moderna

A menudo se dice que la psicología cognitiva es la base del constructivismo radical. Por ejemplo, R. Lesh y S. J. Lamon describen la enseñanza de las matemáticas más que nada a partir de un enfoque constructivista radical:

> La psicología conductista (que se basa en normas fácticas y de procedimiento) ha cedido paso a la psicología cognitiva (que se basa en modelos destinados a dar sentido a las experiencias del mundo real), y los instrumentos tecnológicos han ampliado radicalmente el tipo de situaciones en que son útiles las matemáticas, y al

> mismo tiempo han incrementado los tipos de matemáticas que son útiles y los tipos de personas que las utilizan a diario. Para hacer frente a estas tendencias, las organizaciones profesionales y gubernamentales han llegado a un consenso nuevo y sin precedentes, teóricamente acertado y orientado al futuro, respecto del fundamento de las matemáticas en una era de la información[7].

Lo anterior es característico de las falsas pretensiones de consenso que campean en el área. En nombre de la ciencia moderna se formulan afirmaciones que carecen de base científica. En el párrafo recién citado de Lesh y Lamon, la diferenciación entre "normas fácticas y de procedimiento" y "modelos destinados a dar sentido a las experiencias del mundo real" no constituye una diferenciación entre la psicología conductual y la psicología cognitiva. Ambos son importantes componentes teóricos de la psicología cognitiva, y gran parte de la investigación actual se ocupa de definir cuáles dominios del pensamiento se entienden mejor en función de "modelos mentales" y cuáles en función de "reglas mentales".

En la psicología cognitiva hay consenso en que la gente no registra las experiencias en forma pasiva, sino que interpreta la información nueva con la ayuda de los conocimientos y la experiencia previos. Éste es el sentido con que la psicología utiliza el término "constructivismo" y los profesores de matemáticas con razón nos llaman constructivistas (en este sentido)[8]. Sin embargo, negar que la información se registra en forma pasiva no significa que el alumno deba descubrir por sí mismo los conocimientos, sin mediar instrucción explícita, como sostienen los constructivistas radicales. De acuerdo con las teorías cognitivas modernas, toda adquisición de conocimientos, ya sea mediante la instrucción o el descubrimiento, exige una activa labor interpretativa de parte del que aprende. El procesamiento de la instrucción puede ser complejo, ya que su alcance aumenta según la cantidad de conocimientos que el estudiante aporte a la tarea[9].

La psicología cognitiva moderna dista mucho de estar de acuerdo en todo sentido. Hay consenso respecto de la mayor parte de los hechos bási-

---

[7] R. Lesh y S. J. Lamon, *Assessment of Authentic Performance in School Mathematics* (1992), pp. 18-19.

[8] E. A. Silver, "Foundations of Cognitive Theory and Research for Mathematics Problem-Solving" (1987).

[9] M. T. Chi y otros, "Self-Explanations: How Students Study and Use Examples in Learning to Solve Problems" (1989), pp. 145-182; K. Bielaczyc, P Pirolli y A. L. Brown, "Training in Self-Explanation and Self-Regulation Strategies: Investigating the Effects of Knowledge Acquisition Activities on Problem Solving (1995), pp. 221-252: J. D. Bransford y M. K. Johnson, "Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall" (1972), pp. 717-726; y D. E. Kieras y S. Bovari, "The Role of a Mental Model in Learning to Operate a Device" (1984), pp. 255-273.

cos de la cognición y el aprendizaje, pero se mantiene la controversia en algunas cuestiones relacionadas con la interpretación teórica. Actualmente, hay bastante acuerdo sobre cuestiones de hecho que respaldan aplicaciones educacionales importantes. Una de ellas, por mencionar alguna en particular, es que la evidencia empírica desmiente la aseveración de los constructivistas radicales de que el alumno no puede aprender mediante la instrucción directa.

Nosotros representamos una forma de abordar la cognición humana generalmente conocida como "psicología del procesamiento de la información". Uno de sus instrumentos importantes son modelos precisos de aspectos de la cognición, que a menudo son utilizados para crear simulaciones computarizadas de los actos cognitivos de los seres humanos.

Dentro de la psicología cognitiva, la corriente más controvertida con la que estamos asociados es quizá la "simbólica", esto es, la que afirma que algunos aspectos de la cognición humana entrañan conocimientos que se representan simbólicamente. En cambio, la corriente "conexionista" sostiene que no hay representaciones simbólicas de esa naturaleza y que el conocimiento sólo puede describirse en función de conexiones sinápticas entre elementos neurales[10]. La controversia entre las posiciones simbólica y conexionista ha perdido fuerza desde fines de los años ochenta y, bajo el peso de la evidencia, la mayoría de los investigadores, incluidos nosotros mismos, hemos evolucionado hacia posiciones "híbridas" —reconociendo que algunos aspectos de la cognición se comprenden mejor mediante representaciones simbólicas y otros en función de conexiones neurales. Actualmente, la cuestión es determinar qué aspectos de la cognición habría que modelar de acuerdo con uno u otro sistema y cómo podrían vincularse los planos simbólico y neural.

Algunos constructivistas radicales se consideran a sí mismos contrarios a la psicología del procesamiento de la información, en especial en su forma simbólica. P. Cobb, E. Yackel y T. Wood, que son los más explícitos al respecto, plantean el constructivismo radical como un rechazo del "punto de vista representacional de la mente". Sin embargo, nosotros y otros psicólogos cognitivos, que efectivamente defendemos un punto de vista representacional, apenas nos reconocemos en la descripción que hacen los constructivistas radicales de nuestro punto de vista[11]. Cobb, Yackel y Wood

[10] Por ejemplo, J. L. McClelland y D. E. Rumelhart (eds.), *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition* (1986); y D. E. Rumelhart y J. L. McClelland, "On Learning the Past Tenses of English Verbs" (1986).

[11] Cobb, Yackel y Wood, "A Constructivist Alternative to the Representational View of Mind in Mathematics Education" (1979).

citan la caracterización errada que hace R. Rorty de la concepción representacional:

> [De acuerdo con la concepción representacional de la mente] saber es representar con precisión lo que está fuera de la mente; de tal modo que comprender la posibilidad y la naturaleza del conocimiento es comprender la forma en que la mente puede construir estas representaciones[12].

Contrariamente a lo que afirma Rorty, la concepción representacional de la mente tiene en cuenta la evidencia tanto de la relación entre la mente y el mundo como de la exactitud y la cabalidad o falta de cabalidad de las representaciones internas de las características del mundo. En el marco cognitivo, la representación no es ni un juego sintáctico o lógico con símbolos formales que carecen de referencia del mundo real, ni un registro literal y mecánico del estímulo[13]. En este marco, formarse una representación interna de un problema es por sí un proceso psicológico complejo.

Además, esos constructivistas radicales a menudo reducen la idea de "símbolo" a expresiones orales o lógicas y a continuación niegan que sea adecuada para construir modelos de pensamiento "no lineales", "no lógicos", "no verbales" o "intuitivos". Como podría decirlo cualquiera que utilice una pantalla de computador para mostrar diagramas, ilustraciones o dispositivos visuales de distinta naturaleza, la clase de símbolos que pueden utilizarse o el tipo de procesos "lógicos" o "no lógicos" que pueden operar en ellos no tienen estas limitaciones. En el último tiempo, parte importante de la investigación cognitiva procuró estudiar la relación que hay entre el pensamiento usualmente denominado "intuitivo" y los procesos comunes y conocidos de reconocimiento de las claves familiares que ofrecen los estímulos.

Un símbolo (esto es, un patrón discernible) deriva su utilidad de su capacidad de denotar (apuntar hacia) objetos, relaciones y sucesos que acaecen en el mundo; pero en el mejor de los casos una representación mental simbólica es un cuadro incompleto y distorsionado del medio ambiente, que correlaciona los pensamientos con la información que entregan los sentidos y con los actos motrices y sus efectos. A nuestro juicio, la

[12] Ibídem, p. 3.

[13] Gran parte de la investigación y teoría de la psicología del procesamiento de la información se refiere al problema de la interpretación equivocada de la realidad por parte de los sujetos.

competencia cognitiva (en este caso ser competente en matemáticas) depende de la disponibilidad de estructuras simbólicas (por ejemplo, patrones mentales o imágenes mentales) creadas para responder a la experiencia.

Para desacreditar a la concepción de la mente utilizada por la psicología cognitiva, los escritos de los constructivistas radicales a menudo recurren a las críticas que se formulan a la posición "de hombre títere" que ilustra la cita de R. Rorty. Pero las teorías cognitivas modernas no parten de la base de que el aprendizaje sea un registro pasivo de la experiencia.

La interpretación errada de la concepción representacional conduce a una gran confusión respecto de la relación entre las representaciones matemáticas externas (por ejemplo, ecuaciones, gráficos, reglas, cubos de Dienes, etc.) y las representaciones internas de estos mismos objetos. Los defensores del constructivismo radical, equiparando la concepción representacional al registro pasivo de los estímulos, sin transformaciones, interpretan erradamente las deficiencias de las representaciones externas como si fueran inadecuaciones de la representación interna de la noción. Por ejemplo, si el conjunto de reglas que ofrece un libro de texto es incompleto, implicaría que las reglas mentales no pueden captar los conceptos. Sin embargo, las teorías cognitivas postulan (y ofrecen pruebas) que hay procesos complejos para transformar estas representaciones externas a fin de producir estructuras internas que no son en absoluto isomórficas a los estímulos. Por ejemplo, el hecho de que un diagrama sea bidimensional no significa que su representación mental no pueda ser tridimensional.

Poco hay en la psicología cognitiva que respalde las afirmaciones más extremas del constructivismo radical. En realidad, como lo reconocen algunos constructivistas radicales, la psicología cognitiva moderna contradice estas afirmaciones.

Piaget

A menudo se dice que Jean Piaget le da base científica al constructivismo. Piaget ha ejercido enorme influencia en la comprensión del desarrollo cognitivo y fue uno de los grandes responsables del surgimiento del cognitivismo desde los comienzos de la era conductista en psicología. Aunque muchas de sus afirmaciones específicas han sido seriamente cuestionadas, en general su concepción teórica sigue ejerciendo una influencia importante. La distinción que hace Piaget entre los mecanismos de asimilación y adaptación en el aprendizaje y el desarrollo es de fundamental importancia para el constructivismo. La asimilación incorpora pasivamente la

experiencia en una representación que ya es conocida por el niño. Sin embargo, cuando las discrepancias entre lo que exige la tarea y la estructura cognitiva (representación) del niño se torna demasiado grande, el niño tiene que reorganizar sus pensamientos. Esto es lo que se llama adaptación (últimamente se ha denominado "re-representación").

Piaget hizo hincapié en que el niño internaliza el conocimiento modificando la estructura mental. Los constructivistas a menudo se refieren a este análisis, en especial al proceso no pasivo de adaptación. Una lectura más detenida de los escritos de Piaget indica que la asimilación de conocimientos desempeña un papel decisivo en la preparación de la escena para el proceso de adaptación, que no puede haber adaptación sin asimilación. En todo caso, tanto la adaptación como la asimilación forman parte del concepto representacional de la mente.

Otro aspecto de Piaget es su caracterización en etapas del desarrollo cognitivo, que ha llevado a sostener que se producen grandes cambios cualitativos a medida que se desarrolla la cognición. De toda la teoría de Piaget, éste es el aspecto que ha recibido menos apoyo empírico. Actualmente, la impresión general es que los cambios cognitivos son graduales y acumulativos. Las descripciones mejor confirmadas de las tareas piagetianas son las que se refieren al procesamiento de la información, las cuales identifican los diversos componentes de los conocimientos que se están adquiriendo[14]. Para R. S. Siegler, la creencia en la existencia de etapas constituye lo que denomina "teoría de la inmaculada transición" y ofrece pruebas de sus fallas empíricas[15].

El aprendizaje contextualizado y Vygotsky

También se dice con frecuencia que el aprendizaje contextualizado es la base del constructivismo radical y los escritos que mencionan este tipo de aprendizaje están referidos a L. S. Vygotsky, psicólogo ruso que a comienzos del siglo veinte puso de relieve el marcado carácter social del desarrollo humano. La alianza del aprendizaje contextualizado con el constructivismo radical es algo singular, puesto que el primero hace hincapié en que el conocimiento se mantiene en el mundo externo, social, mientras que el constructivismo sostiene que yace en el estado interno de la persona, el

[14] Por ejemplo, R. S. Siegler. *Children's Thinking: An Information Processing Approach* (1980)

[15] R. S. Siegler, *Emerging Minds: The Process of Change in Children's Thinking* (1996).

que quizá no pueda ser conocido por los demás. Sin embargo, ambas escuelas comparten el punto de vista filosófico general de que el conocimiento no se puede descomponer ni descontextualizar ya sea con fines de investigación o de instrucción.

El aprendizaje contextualizado ha llegado a asociarse con la idea de que los conocimientos no se transfieren de la sala de clases a situaciones del mundo y de que la instrucción debe darse en contextos similares a la vida real y que a menudo se asemejen a situaciones vinculadas al trabajo. La crítica que formulamos a este aspecto del aprendizaje condujo a un intercambio de opiniones que puede llevar a una de estas dos conclusiones: que las afirmaciones del aprendizaje contextualizado están equivocadas o que el aprendizaje contextualizado no agrega nada al hecho generalmente reconocido de que algunas veces el aprendizaje es de algún modo situacional[16]. Nuestra posición en esa discusión se resumió así:

> Aunque tal vez sea necesario introducir grandes reformas en la educación estadounidense, parece haber consenso en que ellas no consistirán en convertir la sala de clases en lugar de trabajo. Las poderosas herramientas intelectuales abstractas desarrolladas a lo largo de la historia humana tienen sus méritos[17].

Sin embargo, la discusión también llevó a la conclusión de que el aprendizaje que tiene lugar en la clase posee importantes aspectos sociales. Aparte de esto, es poco lo que se puede deducir de Vygotsky y del aprendizaje contextualizado para las prácticas educativas en la sala de clases. Sea como sea, no hay mucha conexión entre los puntos de vista recién analizados y la validez de los métodos de instrucción en grupos.

John Dewey

Otro autor que se menciona tanto en los escritos constructivistas radicales como en los del aprendizaje contextualizado es John Dewey, que representa parte de una versión anterior de la orientación racionalista de la educación. Aunque Dewey comenzó como psicólogo, se convirtió en filósofo de la educación y desarrolló una orientación educacional basada libre-

---

[16] J. R. Anderson, H. A. Simon y L. M. Reder. "Situated Learning and Education" (1996), pp. 5-11: J. G. Greeno, "On Claims That Answer the Wrong Questions" (1997), pp. 5-17; y J. R. Anderson, H. A. Simon y L. M. Reder, "Rejoinder: Situative versus Cognitive Perspectives: Form versus Substances" (1997), pp 18-21.

[17] Anderson, Simon, y Reder, "Rejoinder..." (1997).

mente en sus primeras críticas de los enfoques analíticos de la psicología que estuvieron en boga a fines del siglo pasado. Muchas de las ideas del constructivismo radical y del aprendizaje contextualizado se pueden encontrar en los escritos de Dewey, y uno llega a pensar que los educadores modernos partidarios del constructivismo radical están reinventando la rueda de Dewey.

Dewey creó una escuela experimental en la Universidad de Chicago, en 1896, y las descripciones que se hacen de ella despertarían la envidia de un padre moderno[18]. Las numerosas escuelas progresistas que se crearon en torno al modelo de la escuela experimental de Dewey a comienzos del siglo veinte fueron muy diferentes, pero en general se caracterizaron por impartir menos instrucción dirigida y por centrar el aprendizaje más bien en proyectos. Al propio Dewey poco le agradaron los intentos más radicales por lograr que las escuelas eliminaran los currículos fijos, so pretexto de que impartían educación progresista[19].

La escuela experimental de Dewey ha pasado al olvido y muchas de las escuelas progresistas que se basaron en ella prácticamente desaparecieron en medio de la controversia en torno a la "educación para adaptarse a la vida"[20]. Sin embargo, al parecer cada generación crea sus propias escuelas progresistas, que hacen hincapié en muchas de las mismas características.

Uno de los intentos por evaluar las consecuencias que tuvo esta primera generación de educación progresista en el desempeño en la universidad (*college*) llegó a la conclusión de que no hay grandes diferencias entre el rendimiento de los alumnos que provienen de escuelas progresistas y el de los que provienen de escuelas tradicionales[21]. Da para pensar el hecho de que aproximaciones educacionales radicalmente diferentes se traducen en pocas diferencias, o ninguna, entre los estudiantes que egresan de la universidad.

Esto indica que la educación adolece de una gran falta de progreso acumulativo y que hay que estudiar más a fondo lo que está sucediendo con las distintas corrientes en materia de filosofía de la educación. No se ha determinado qué aspectos de la escuela experimental o de otras escuelas progresistas eran acertados y cuáles simples productos de la imaginación. No se sabía entonces ni se sabe ahora cómo se podría repetir la experiencia

[18] Por ejemplo, K. C. Mayhew y A. C. Edwards, *The Dewey School* (1936). En estas clases había una relación de cuatro alumnos por profesor y los alumnos eran hijos de profesores.

[19] Dewey, *Experience and Education* (1938).

[20] D. Ravitch, *The Troubled Crusade: American Education*, 1945-1980 (1983).

[21] D. Chamberlin y otros, *Did They Succeed in College? The Follow-Up Study of the Graduates of the Thirty Schools* (1942).

de la escuela experimental en otro medio. Más que una filosofía de la educación, lo que se necesita es una ciencia de la educación. Los intentos modernos por mejorar la educación vuelven la mirada hacia teóricos (Piaget, Vygotsky y Dewey) cuyas teorías resultan vagas para los estándares psicológicos actuales y no están fuertemente relacionadas con la evidencia empírica, como se acostumbra actualmente en la materia.

Principales características del constructivismo radical

Las características más salientes del constructivismo radical aplicado a la enseñanza de las matemáticas son la dependencia en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje en situaciones complejas "auténticas", el aprendizaje en contextos sociales y la falta de confianza en las evaluaciones empíricas. Aun cuando los supuestos en que se basan estas orientaciones tienen más de algo de verdad, pueden y suelen llevarse a extremos inútiles.

Aprendizaje por descubrimiento

Lo que define al constructivismo radical es la idea de que no se puede enseñar a los alumnos sino que hay que permitirles que ellos creen los conocimientos que necesitan. Esto suele describirse como un contraste entre "instructivismo" y "constructivismo". Es fácil aceptar que el aprendizaje debe ser un proceso activo, porque para aprender es preciso que se produzca un cambio en el sujeto, el que sólo puede lograrse mediante lo que hace dicho sujeto: a qué presta atención, a qué actividades se dedica. La actividad del maestro es importante en la medida en que logre que los alumnos realicen tareas que de otra manera no realizarían, lo que incluye, pero no exclusivamente, la adquisición de conocimientos proporcionados por el maestro o los textos de estudio. El maestro también puede hacer que los alumnos realicen actividades, algunas de las cuales pueden incluir la adquisición de destrezas mediante ejemplos prácticos. Otras actividades incluyen la práctica de las destrezas para lograr niveles eficaces, la interacción con los compañeros y la interacción con el maestro.

El problema que se plantea a la psicología y a la educación es diseñar una serie de experiencias que les permitan a los alumnos aprender eficazmente, e inducirlos a realizar las actividades pertinentes. En ambos aspectos, prácticamente no hay desacuerdo entre los constructivistas radica-

les y otros psicólogos cognitivos. Lo más difícil es determinar cuáles son los objetivos de aprendizaje y las experiencias que, incorporadas en el diseño de la instrucción, servirán mejor para que los alumnos alcancen estas metas. Lograr un buen diseño no es cuestión de debate filosófico, sino que exige evidencia empírica acerca de la forma en que aprenden las personas, especialmente los niños, y qué es lo que aprenden de las distintas experiencias educacionales.

Muchas investigaciones revelan que, en algunas circunstancias, las personas recuerdan mejor la información que crean ellas mismas y no la que reciben en forma pasiva[22]. El estudio original de N. J. Slamecka y P. Graf es característico de las investigaciones acerca del aprendizaje generativo. Estos autores hicieron que los sujetos trataran de recordar listas de palabras, que debían reunir cuatro requisitos:

1. Los sujetos debían dar un sinónimo de cada palabra. Por ejemplo, se les pedía que dieran un sinónimo de *océano*, que empezaba con *m*.

2. Los sujetos examinaban el sinónimo proporcionado. Por ejemplo, examinaban la palabra *mar* como sinónimo de *océano*.

3. Los sujetos debían formar una rima. Por ejemplo, se les pedía que dieran una palabra que empezara con m que rimara con *amasar*.

4. Los sujetos examinaban un verso. Por ejemplo, estudiaban que *amasar* rima con *mar*.

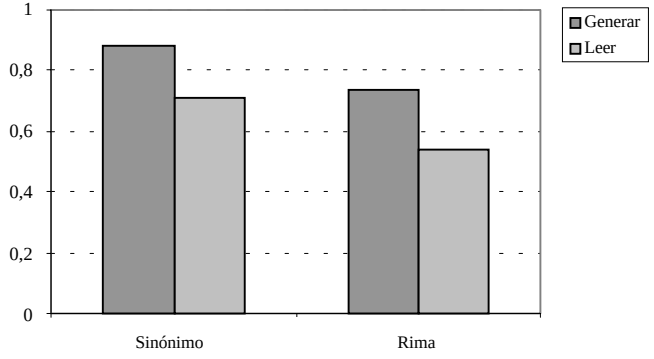
En todos los casos se comprobaba luego si los sujetos reconocían la palabra crítica *mar*.

Los sujetos aprenden mejor la materia en ciertas condiciones: cuando procesan el significado (condiciones de sinonimia 1 y 2) y cuando generan el material (condiciones 1 y 3), en vez de estudiarla en forma pasiva (véase el Gráfico N° 1). Comparando los casos extremos, se comprueba un efecto muy importante: los sujetos recuerdan un 50% en vez de un 85%. Los psicólogos cognitivos discuten si este efecto refleja factores cognitivos fundamentales o, por el contrario, factores de motivación y atención selectiva[23]. Sin embargo, desde el punto de vista educacional, podría decirse que

[22] D. G. Bobrow y G. H. Bower, "Comprehension and Recall of Sentences" (1969), pp. 455-461; y N. J. Slamecka y P. Graf, "The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon" (1978), pp. 592-604.

[23] Por ejemplo, I. Begg y otros, "The Generation Effect Is No Artifact: Generation Makes Words Distinctive" (1989), pp. 977-989; D. J. Burns, "The Generation Effect: A Test Between Single and Multifactor Theories" (1990), pp. 1060-1067; E. Hirshman y R. A. Bjork, "The Generation Effect: Support for a Two-Factor Theory" (1988), pp. 484-494; M. A. McDaniel, P. J. Waddill, y G. O. Einstein, "A Contextual Account of the Generation Effect: A Three Factor Theory" (1988), pp. 521-536; y N. J. Slamecka y L. T. Katsaiti, "The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon" (1987). pp. 589-607.

GRÁFICO N° 1: PROBABILIDAD DE RECONOCIMIENTO COMO FUNC1ÓN DEL TIPO DE ELABORAC1ÓN, YA SEA GENERADA O LEÍDA



Fuente: N. J. Slamecka y P. Graf, "The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon", *Journal of Experimental Psycltology: Learning, Memory and Cognition,* Vol. 4 (1978), experimento 2.

esta clase de discusión carece de importancia. Los efectos son claros e indudablemente uno querría aprovecharlos en la instrucción.

Sin embargo, es preciso formular varias advertencias respecto de estos efectos de generación. Primero, las personas pueden aprender en las peores condiciones y prácticamente todos los estudios revelan que la memoria no es más que dos veces mejor en condiciones de generación que en condiciones de pasividad. Segundo, lo único que pueden asegurar los psicólogos experimentales es que sus sujetos generarán el material deseado utilizando material artificial. Si bien es cierto que el efecto de generación podría generalizarse al material más natural, es difícil asegurar, por su complejidad, la generación de esta clase de material[24]. A menudo cuesta lograr que los alumnos generen una parte importante de lo que uno quiere que aprendan. En estos casos es conveniente una instrucción dirigida que induzca a que los propios alumnos generen ellos mismos el conocimiento,

[24] Bransford y Johnson, "Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall" (1972).

pero proporcionando al mismo tiempo instrucción directa para maximizar la eficiencia del aprendizaje.

La idea de que el conocimiento debe construirse se asemeja a los antiguos argumentos de que el aprendizaje por descubrimiento es mejor que la instrucción directa. Empero, no hay mucha evidencia acerca de esta clase de aprendizaje y cuando la hay, a menudo es de inferior calidad[25]. Incluso cuando permite adquirir el constructo o concepto deseado, el aprendizaje por descubrimiento tal vez exija dedicarle una gran cantidad de tiempo valioso que podría haberse destinado a ejercitar el constructo (que también es un proceso activo), en caso de que dicho concepto se hubiera aprendido con la instrucción. Debido a que gran parte del aprendizaje sólo tiene lugar después de que se ha descubierto el constructo, cuando la búsqueda es prolongada o infructuosa, la motivación generalmente languidece. Como dijo D. P. Ausubel en 1968, resumiendo las conclusiones de su investigación sobre el aprendizaje por descubrimiento:

> Cuando se examina la bibliografía que se supone respalda el aprendizaje por descubrimiento, se comprueba que prácticamente no hay evidencia válida de esta naturaleza. Al parecer, los ardientes partidarios del método del descubrimiento han estado apoyándose recíprocamente en sus investigaciones, por así decirlo, citándose unos a otros e invocando esas citas como evidencia de sus propias opiniones y afirmaciones y formulando locas generalizaciones a partir de resultados dudosos e incluso negativos[26].

Algunos sostienen que la instrucción directa conduce a "rutinizar" el conocimiento y desplaza la comprensión:

> Mientras más claro soy respecto al comportamiento que espero de mis alumnos, mayores probabilidades hay de que se comporten de esa manera sin recurrir a la comprensión que se supone debe indicar el comportamiento; esto es, hay mayores probabilidades de que absorban la forma y no la substancia[27].

Una ampliación de este argumento es que el exceso de práctica también desplaza la comprensión. Los escritos de los constructivistas radi-

---

[25] Por ejemplo, D. H. Charney, L. M. Reder y G. W. Kusbit, "Goal Setting and Procedure Selection in Acquiring Computer Skills: A Comparison of Tutorials, Problem-Solving, and Learner Exploration" (1990), pp. 323-342.

[26] D. P. Ausubel, *Educational Psychology: A Cognitive View* (1968), pp. 497-498.

[27] G. Brousseau, "The Crucial Role of the Didactical Contract in the Analysis and Construction of Situations In Teaching and Learning Mathematics" (1984), pp. 110-119.

cales critican esta práctica (que se denomina "ejercitarse hasta morir", como si esta consigna peyorativa proporcionara una evaluación empírica). De las investigaciones realizadas en los últimos veinte años nada resulta más chocante que la afirmación de que la ejercitación es algo negativo. Tanto la evidencia de laboratorio como los amplios estudios de casos llevados a cabo por profesionales indican que la habilidad sólo se alcanza en realidad mediante la ejercitación prolongada[28]. Cuando se niega que la ejercitación es fundamental, se niega al niño precisamente lo que necesita para ser competente. El problema de la instrucción no consiste en matar la motivación exigiendo ejercitación, sino en encontrar tareas que proporcionen práctica y al mismo tiempo mantengan el interés.

Sin embargo, los psicólogos experimentales han demostrado que, en algunas circunstancias, la ejercitación prolongada del material no produce prácticamente aprendizaje, al menos de acuerdo con algunas mediciones[29]. Esto sucede casi siempre cuando se hace que los sujetos sometidos a experimentación reciten en forma mecánica el material. Estos resultados dejan de manifiesto lo que hay de cierto en las críticas del sistema de ejercitarse hasta morir: es preciso mantener a los alumnos atentos mientras estudian.

Énfasis en las situaciones de aprendizaje complejas

Los constructivistas radicales a menudo se expresan como si el conocimiento tuviera alguna propiedad mágica que le impidiera ser comunicado y, por esta razón, para traspasarlo no bastará con una situación de instrucción sencilla, cualquiera que fuese ese conocimiento. Por ejemplo, los constructivistas radicales recomiendan que los niños aprendan la totalidad o la casi totalidad de las matemáticas en el contexto de problemas complejos[30]. Formulan esta recomendación sin evidencia alguna de su efectividad en la educación.

Este enfoque plantea dos problemas graves, puesto que para realizar una tarea compleja se debe tener un elevado número de competencias. Primero, el sujeto al que le cuesta absorber muchos de los componentes de la materia enseñada fácilmente puede sentirse abrumado por el proceso de

[28] Por ejemplo, J. R. Hayes, "Three Problems in Teaching General Skills" (1985); y K. A. Ericsson, R. T. Krampe, y C. Tesch-Romer, "The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance" (1993), pp. 363-406.

[29] Por ejemplo, F. I. M. Craik y M. J. Watkins, "The Role of Rehearsal in Short-Term Memory" (1973) pp. 599-607; y A. M. Glenberg, S. M. Smith, y C. Green, "Type I Rehearsal: Maintenance and More" (1977). pp. 339-352.

[30] Por ejemplo, R. Lesh y J. S. Zawojeski, "Problem Solving" (1992), pp. 49-88.

elaboración que le impone la labor compleja. Segundo, en la medida en que domine bien muchos de los componentes, el alumno perderá mucho tiempo repitiéndolos antes de poder practicar los pocos componentes que requieren ejercitación adicional.

Gran cantidad de investigaciones que se han llevado a cabo en el campo de la psicología revelan que la capacitación por partes a menudo es más efectiva cuando la parte componente es independiente o casi independiente de la tarea mayor[31]. En el entrenamiento de equipos es corriente recurrir a la capacitación individual para realizar partes de la tarea debido a que sería caro e inútil hacer funcionar al grupo cuando hay que enseñarle a un solo miembro el funcionamiento de una nueva pieza de equipo[32]. En los deportes que se practican en equipo, que atribuyen mucha importancia a la eficacia del entrenamiento, el tiempo disponible siempre se distribuye entre el entrenamiento individual de las destrezas y el entrenamiento en equipo.

Hay casos en que se justifica ejercitar las destrezas en su escenario complejo. A veces, ello se debe a la motivación, pero la razón también pueden ser las destrezas especiales que son propias de la situación compleja. El alumno que aspire a tocar el violín en una orquesta difícilmente podrá avanzar si siempre se ejercita junto con la orquesta. Sin embargo, si nunca practica como miembro de una orquesta, no adquirirá las destrezas críticas necesarias para coordinarse con los demás ejecutantes. Lo mismo puede decirse de los deportes, y en ambos casos se pueden invocar argumentos relacionados con la motivación para justificar la práctica compleja. Es posible que para un niño no tenga sentido ejercitar solo, pero lo tendrá cuando los ejercicios estén incorporados en la actividad del mundo real. Los niños se sienten motivados a ejercitar las destrezas deportivas ante la perspectiva de participar en juegos de la vida real. Sin embargo, a menudo pasan mucho más tiempo practicando las distintas destrezas requeridas que jugando. Ejercitar periódicamente las destrezas en su contexto real es importante para la motivación y a la vez para aprender a practicar, pero no es razón para que ello sea el principal mecanismo de aprendizaje.

Aun cuando haya méritos motivacionales en insertar la práctica de las matemáticas en situaciones complejas, D. C. Geary señala que hay razones de peso para poner en duda que las matemáticas complejas sean intrínsecamente motivadoras para la mayoría de los alumnos, cualquiera que sea su contexto. En general, la mayoría de las personas no se sienten

---

[31] Por ejemplo, C. M. Knerr y otros, *Simulation-Based Research in Part-Task Training* (1987); y J. Patrick, *Training: Research and Practice* (1992)

[32] E. Salas y otros, "Toward an Understanding of Team Performance and Training" (I993).

motivadas a realizar la ejercitación constante que se requiere para destacarse en un campo de actividad avanzado y necesitarán de bastante apoyo familiar y cultural[33]. Al igual que otros autores, Geary sostiene que esta diferencia en cuanto al apoyo cultural explica la gran brecha en los logros en matemáticas que se da entre los niños estadounidenses y los niños asiáticos[34].

Los escritos constructivistas también propugnan la utilización de problemas "auténticos"[35]. Por lo general se define mal lo que es "auténtico", y se pone mucho énfasis en los problemas con que podrían tropezar los alumnos en la vida diaria. Si se centra la atención en el proceso cognitivo subyacente, cabría deducir que es un requisito sin importancia. El verdadero objetivo, en cambio, debería ser motivar a los alumnos a realizar procesos cognitivos que sean transferibles[36]. Lo importante es qué procesos cognitivos evoca un problema y no las situaciones del mundo real en que pueda ir envuelto. Los problemas del mundo real a menudo entrañan mucho trabajo y no dan muchas posibilidades de adquirir las competencias a que se aspira. Por ejemplo, en las clases de matemáticas en la enseñanza secundaria, en que para enseñar álgebra se plantean problemas más similares a los del mundo real, se pierde mucho tiempo de clase en actividades tales como confeccionar cuadros y gráficos, que rápidamente se hacen rutinarias[37]. No se destina mucho tiempo a relacionar las expresiones algebraicas con las situaciones del mundo real que ellas representan.

Basarse en situaciones de aprendizaje social

Algunas de las situaciones de aprendizaje que recomiendan los escritos de los constructivistas radicales involucran tareas que pueden ser resueltas por un solo sujeto, pero hay creciente tendencia a convertirlas en

[33] Ericsson, Krampe, y Tesch-Romer, "The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance" (1993).

[34] Por ejemplo, H. P. Bahrick y L. K. Hall, "Lifetime Maintenance of High School Mathematics Content" (1991), pp. 20-33; y H. W. Stevenson y J. W. Stigler, *The Learning Gap: Why Our Schools Are Failing and What We Can Learn from Japanese and Chinese Education* (1992).

[35] Por ejemplo, J. S. Brown, A. Collins, y P. Diguid, *Situated Cognition and the Culture of Learning* (1988); y Lesh y Lamon, *Assessment of Authentic Performance in School Mathematics* (1992).

[36] Por ejemplo, J. Hiebert y otros, "Authentic Problem Solving in Mathematics" (1994).

[37] K. R. Koedinger y otros, "Intelligence Tutoring Goes to School in the Big City" (1995).

situaciones de aprendizaje en grupos. Sin duda ello se debe en parte a la influencia ejercida por el movimiento de aprendizaje contextualizado.

La afirmación de que la instrucción sólo es efectiva en un medio altamente social se basa en las ideas de que: 1) prácticamente todos los empleos son marcadamente sociales, y 2) el aprendizaje está íntimamente vinculado con el contexto en que se desarrolla. Como lo han demostrado J. R. Anderson, H. A. Simon y L. M. Reder, la segunda afirmación es exagerada[38]. Probablemente en alguna medida la primera también lo sea, aunque no se conocen análisis de encuestas de empleo que muestren el grado y tipo de interacción social que involucran los distintos empleos. Algunos empleos no son de índole social, y esta afirmación no les es aplicable. Del mismo modo, en otros empleos la ejecución es altamente social. Las personas que trabajan en esta clase de empleos deben aprender a abordar eficazmente la naturaleza social de su trabajo.

No obstante que las personas tienen que aprender a hacer frente a los aspectos sociales del empleo, no es necesario enseñarles en un contexto social todas las destrezas que se requieren para estos trabajos. Por ejemplo, considérese el caso de las destrezas que se necesitan para llegar a ser un buen contador, especializado en impuestos. Aunque el contador tiene que aprender a tratar con los clientes, para aprender el código tributario o a utilizar la calculadora no necesita estar interactuando con un cliente. Es preferible enseñarle por separado las distintas partes que componen una actividad porque se requerirán menos recursos cognitivos para desempeñarla y de esta manera se reservará suficiente capacidad para el aprendizaje. En consecuencia, es mejor aprender el código tributario sin tener que interactuar al mismo tiempo con el cliente, y es mejor aprender a interactuar con el cliente después de que se ha dominado el código tributario.

Otro aspecto de la afirmación de que la instrucción se da mejor en un medio altamente social lo proporcionan aquellos que sostienen que el aprendizaje cooperativo, como método de instrucción, tiene ventajas[39]. Este tipo de aprendizaje, también conocido como “comunidades de ejercitación” y “aprendizaje en grupos”, se refiere a los ambientes de aprendizaje en que personas de igual condición trabajan juntas para mejorar la adquisición individual de los conocimientos y destrezas. Estos ambientes deben compararse con el sistema de tutorías (en que tutor y pupilo tienen niveles de conocimientos y situación desiguales) y con el entrenamiento en grupo (en que los resultados deseados se relacionan con el desempeño del equipo o

[38] Anderson, Simon, y Reder, “Situated Learning and Education” (1996) .

[39] Por ejemplo, D. W. Johnson y R. T. Johnson, *Cooperation and Competition: Theory and Research* (1989).

del grupo). Un estudio realizado por el Committee on Techniques for the Enhancement of Human Performance, del National Research Council (NRC), señala que las investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo a menudo no se han fiscalizado adecuadamente (por ejemplo, no se ha controlado la asignación aleatoria a tratamientos, ni se han verificado los efectos del "profesor" y del tratamiento), que hay relativamente pocos estudios que "han logrado demostrar las ventajas del aprendizaje cooperativo en contraposición al aprendizaje individual", y que se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo tiene una serie de resultados negativos: los efectos del "aprovechador" (*free-rider*), del "oportunista", de la "diferencia de status" y de las "alianzas de todos contra uno"[40].

La revisión de experiencias de aprendizaje cooperativo realizada por el NRC señala que muchos estudios muestran que no hay diferencias significativas entre grupos experimentales, pero, lamentablemente, un elevadísimo número de artículos de difusión para los profesores pasan por alto las dificultades que plantea el aprendizaje cooperativo y lo tratan como una panacea académica[41]. Se aplica con demasiada liberalidad, sin la estructuración ni la esquematización (*scripting*) necesarias para que sea eficaz. El aprendizaje cooperativo debe organizarse de modo que ofrezca incentivos (al menos para los niños) que induzcan a la cooperación y contenga una estructura de objetivos compartidos[42]. Aplicado de modo incondicional, el costo de esta clase de instrucción seguramente será superior a los beneficios que se espera obtener de ella.

En las universidades (*colleges*), los proyectos colectivos son cada vez más populares entre los profesores, pero la enseñanza en grupo puede llegar a ser contraproducente. Los alumnos suelen quejarse de que les resulta difícil encontrar tiempo para reunirse y trabajar juntos en la realización de las actividades y de que algunos estudiantes se aprovechan del sistema al permitir que otros miembros del grupo hagan todo el trabajo (y en consecuencia adquieren todos los conocimientos y destrezas). Según se dice, algunos estudiantes acostumbran dividirse el trabajo entre los distintos cursos, de tal modo que uno de los miembros del grupo hace todo el trabajo de un proyecto en un curso, mientras que otro asume la responsabilidad en otro. No hay duda de que éstos no son los resultados que se esperan obtener del aprendizaje cooperativo, pero ellos se producirán a menos que la ejecu-

[40] National Research Council (NRC), *Learning, Remembering, Believing: Enhancing Human Performance* (1994); y G. Salomon y T. Globerson, "When Teams Do Not Function the Way They Ought To" (1989), pp. 89-98, especialmente pp. 94-95.

[41] Por ejemplo, R. E. Slavin, *Cooperative Learnig: Theory, Research and Practice* (1990).

[42] D. F. Dansereau y D. W. Johnson, "Cooperative Learning" (1994).

ción y la esquematización de la situación de aprendizaje sean manifiestas. Parte de la popularidad de que goza este sistema entre los profesores universitarios se debe a que permite manejar el tamaño de los cursos: es más fácil supervisar y asesorar 3 ó 4 proyectos que N proyectos diferentes.

Falta de confianza en métodos estándares de evaluación

La más extrema y trascendental afirmación de los constructivistas es que quizá nieguen la posibilidad de realizar evaluaciones objetivas. La forma en que interpretan este principio todos los constructivistas no está en claro. Algunos constructivistas radicales han realizado evaluaciones estándar de actividades de aprendizaje[43]. En cambio, a otros la idea de evaluar les incomoda, lo que en parte revela la influencia del constructivismo radical en la filosofía de la "deconstrucción". D. Charney demuestra que en los escritos de los "deconstructivistas" el empirismo ha pasado a ser una palabra obscena[44]. D. H. Jonassen describe el problema desde el punto de vista de un constructivista radical:

> Si se piensa, como lo hacen los constructivistas radicales, que los estudiantes no pueden interpretar de manera uniforme la realidad objetiva, entonces no se puede evaluar la adquisición de esta clase de realidad. Un punto de vista menos extremo indica que los estudiantes interpretarán los puntos de vista de manera diferente, de tal modo que los procesos de evaluación deberían incluir la mayor variedad de respuestas posibles[45].

Las hipótesis en materia de educación no pueden evaluarse empíricamente porque para ello se requeriría comprometerse con un conjunto arbitrario de valores, determinados culturalmente. Para los constructivistas más moderados, esta afirmación propugna centrar la evaluación más bien en el proceso de aprendizaje y no en el producto (lo que se aprende), conforme a lo que se considera actividades "auténticas", y en hacer participar múltiples puntos de vista en la evaluación.

Este criterio más moderado conduce a mecanismos de evaluación más subjetivos y definidos con menos precisión. Aunque compartimos la aversión instintiva que sienten la mayoría de los educadores por las pregun-

---

[43] Por ejemplo, Cobb y otros, "Assessment of a Problem-Centered Second Grade Mathematics Project" (1991).

[44] D. Charney, "Empiricism Is Not a Four-Letter Word" (1996), pp. 567-593.

[45] D. H. Jonassen, "Evaluating Constructivist Learning" (1992).

tas con cuatro alternativas y pese a que estamos de acuerdo en que, en matemáticas, la evaluación debería ir más allá de la simple comprobación de las destrezas de cálculo, nos asiste la duda de que el sistema de evaluación abierta que se propicia como alternativa adecuada conduzca a evaluaciones más exactas o más libres de connotaciones culturales. El problema fundamental es que no se especifica con exactitud cuál es la aptitud puesta a prueba y, en cambio, se depende más de una apreciación subjetiva, con todas las posibilidades de sesgo social e intelectual que ello reintroduce.

La cuestión ha sido abordada en una serie de trabajos[46]. L. B. Resnick, D. Briars y S. Lesgold ofrecen dos ejemplos de respuestas objetivamente equivalentes (en su esquema de evaluación objetiva les asignan el mismo puntaje)[47]. Sin embargo, esta igualdad les incomoda y piensan que habría que agregar un componente subjetivo, de manera que se asigne un puntaje más alto a una respuesta porque da muestras de mayor "competencia en materia comunicativa". Aunque la caligrafía de la respuesta "mejor" era más clara, tal vez simplemente se considerara más extensa que la "peor". La "competencia en materia de comunicación" depende del color del cristal con que se mira.

Al explicar el nuevo sistema flexible de calificación del National Assessment of Educational Progress, J. A. Dossey expresa que al alumno se le asignará un 50% (dos puntos) por respuesta correcta si la justificación de la respuesta "no es comprensible", mientras que se asignará un 100% (cuatro puntos) por la respuesta errada si "no indica falta de comprensión del problema o de la forma de aplicar el método, sino más bien parece ser un error de copia o de cálculo"[48]. Esta clase de juicios subjetivos permite que la evaluación tenga un marcado sesgo cultural[49]. Cada vez que la evaluación contenga la palabra "parece", debería ser una señal de que los evaluadores no saben lo que están buscando. La corriente de procesamiento de la información plantea, en cambio, que debería especificarse con exactitud lo que se persigue en función de un modelo cognitivo y luego realizarse la comprobación a este respecto.

Otra señal de lo poco amigos de la evaluación que son los constructivistas radicales es la máxima de que el maestro es el novato y el alumno el

---

[46] I. Wirszup y R. Streit (eds.), *Developments in School Mathematics Education around the World* (1992) .

[47] L. B. Resnick, D. Briars, y S. Lesgold, "Certifying Accomplishments in Mathematics: The New Standards Examining System" (1992), pp. 189-207.

[48] J. A. Dossen, "Assessing Mathematics: Enhancing Understanding" (1992), pp. 208-222 .

[49] R. C. Rist, "Student Social Class and Teacher Expectations: The Self-Fulfilling Prophecy in Ghetto Education" (1989), pp. 411-451.

experto[50]. La idea es que todos los alumnos obtienen igual valor de cada experiencia de aprendizaje. La labor del maestro es llegar a comprender y apreciar lo que el alumno ha aprendido. Como dice J. Confrey:

> Las respuestas de los estudiantes rara vez son descuidadas o antojadizas. Debemos tratar de encontrar sus cualidades sistemáticas, que generalmente se basan en los conceptos del alumno [...] [C]uando las respuestas de los alumnos no coinciden con lo que esperamos, a menudo contienen el germen de enfoques alternativos que pueden ser importantes, válidos y apoyados históricamente si estamos dispuestos a poner a prueba nuestras propias hipótesis[51].

O bien, como dicen Cobb, Wood y Jackel:

> El enfoque respeta el hecho de que el alumno es el mejor juez de lo que encuentra difícil y le alienta a concebir soluciones que encuentre aceptables de acuerdo con sus actuales formas de conocer[52].

Si en el curso de las experiencias de aprendizaje se supone que el alumno avance de un nivel bajo de competencia a uno más alto, ¿por qué razón se consideran válidos los juicios que formulan los alumnos acerca de la aceptabilidad de las soluciones? Aunque se aprecia al maestro capaz de reconocer la individualidad de los alumnos, captar sus percepciones e inducirlos a dar lo mejor de sí y a valorizar los conocimientos, hay que fijarle metas definidas a la educación. En otras palabras, si en la educación dominara la actitud de que "el alumno es el juez", no podría saberse a ciencia cierta cuándo falló y cuándo tuvo éxito la instrucción, cuándo ella avanza y cuándo retrocede.

Una cosa es entender por qué el alumno hace algo en una etapa determinada; otra es ayudarle a saber cómo avanzar desde procesos que son "satisfactorios" en una gama limitada de tareas, hasta procesos que son eficaces en una más amplia. Como sostiene L. B. Resnick, muchos de los conceptos a los que los niños llegan en forma natural (por ejemplo, que el movimiento implica fuerza) no son lo que la cultura espera de la educación, y en estos casos "la educación debe seguir un camino diferente: cons-

---

[50] Por ejemplo, véanse los trabajos en E. von Glaserfeld (ed.), *Radical Constructivism in Mathematics Education* (1991).

[51] J. Confrey, "Learning to Listen: A Student's Understanding of Powers of Ten" (1991), pp. 111-138.

[52] Cobb, Yackel y Wood, "A Constructivist Alternative to the Representational View of Mind in Mathemathics Education" (1992).

tructivista en el sentido de que no basta simplemente con decírselos, pero mucho menos dependiente del descubrimiento no dirigido y de la exploración"[53].

La alternativa de la psicología cognitiva

Aunque no podemos pretender que nuestra filosofía responda a todas las interrogantes que plantea el problema de cómo deberíamos proceder en materia de educación, la psicología cognitiva moderna efectivamente ofrece algunas indicaciones sobre cómo habría que progresar en la enseñanza de las matemáticas.

El análisis cognitivo de la tarea

Si hay un tema central de las investigaciones en materia de psicología cognitiva que se debe destacar, es el de la fuerza conceptual que emana del hecho de tomar un fenómeno cognitivo complejo y analizar los elementos que lo componen; esto es, hay que comprender el comportamiento del todo a partir del conocimiento de los componentes y de sus interacciones. Todavía se discute (y se investiga para resolver la controversia) cuáles son esos componentes, pero se ha llegado a consenso en cuanto a que este análisis de la tarea conduce a un mayor conocimiento. A menudo resulta que las consecuencias de planteamientos teóricos diferentes acerca de los componentes son similares, porque ellos siguen analizando la misma tarea, y la estructura de esa tarea es decisiva[54]. Lo importante es examinar qué significa la estructura de la tarea para la persona que la lleva a cabo.

En el contexto de la educación, el valor real se encuentra identificando los componentes que necesita aprender el alumno y orientando la instrucción hacia ellos. En muchos casos, este conocimiento no queda de manifiesto cuando se examina la superficie del problema y, en consecuencia, al alumno le cuesta aprender. En geometría, por ejemplo, uno de los principales problemas con que tropiezan los alumnos para adquirir destreza en la demostración de los teoremas es que les cuesta identificar los compo-

[53] L. B. Resnick, "Situated Rationalism: Biological and Social Preparation for Learning" (1994), pp. 474-493.

[54] H. B. Richman y H. A. Simon, "Context Effects in Letter Perception: Comparison of Two Theories" (1989), pp . 417-432.

nentes de las destrezas[55]. Por lo general, en geometría se da al alumno toda la demostración y se le deja que descubra por sí solo lo que hay que hacer para llegar a esa demostración. Algo similar parece sucederles a los alumnos que tratan de dominar los problemas de álgebra expresados en palabras[56]. El análisis de las tareas ha cumplido una función importante en los intentos de enseñar matemáticas en las escuelas estadounidenses y chinas[57].

El análisis de las tareas a menudo pondrá de manifiesto los conocimientos previos que se requieren para que un alumno adquiera una nueva competencia. Con frecuencia, subgrupos importantes de la población escolar no llegan a dominar estos conocimientos previos. A manera de ejemplo cabe citar el conocimiento de la recta numérica y de las operaciones básicas relacionadas con ella. R. Case y S. Griffin comprobaron que muchos estudiantes en situación de riesgo no tenían este conocimiento, que es requisito indispensable para dominar las matemáticas en los primeros años de escuela[58]. Los alumnos de primer grado mejoraron en forma espectacular su rendimiento cuando se les enseñaron explícitamente estos conocimientos.

A medida que se avanza en los campos del conocimiento, su estructura cognitiva subyacente tiende a hacerse menos clara. Así, mientras que sigue siendo fácil entregar retroinformación sobre la respuesta final, se torna difícil proporcionar información sobre los distintos pasos que hay que dar mentalmente para llegar a la respuesta. El maestro muchas veces no se da cuenta cabal de lo que es este conocimiento y no sabe cómo enseñarlo. Los intentos de enseñar algunas destrezas relativamente elementales ponen de manifiesto el problema. Un buen ejemplo es lo que sucede con la lectura cuando se avanza más allá de las destrezas básicas para identificar las palabras. A. S. Palinscar y A. L. Brown lograron mejorar notablemente la capacidad de comprensión de los alumnos dándoles a conocer las técnicas para hacer resúmenes y haciéndoles ejercitarlas, aclarando las dificultades,

---

[55] J. R. Anderson, C. F. Boyle, y G. Yost, "The Geometry Tutor" (1985), pp. 1-7; J. R. Anderson y otros, "Acquisition of Problem Solving Skill" (1981); y K. R. Koedinger y J. R. Anderson, "Abstract Planning and Perpetual Chunks: Elements in Expertise in Geometry" (1990), pp. 511-550.

[56] R. E. Mayer, *Educational Psychology: A Cognitive Approach* (1987); J. M. Paige y H. A. Simon, "Cognitive Processes in Solving Algebra Word Problems" (1966); y M. K. Singley y otros, "The Algebra Word Problem Tutor" (1989), pp. 267-275.

[57] J. R. Anderson y otros, "Cognitive Tutors: Lessons Learned" (1995), pp. 167-207: y X. Zhu y H. A. Simon, "Learning Mathematics from Examples and by Doing" (1988), pp. 137-166.

[58] R. Case y S. Griffin, "Child Cognitive Development: The Role of Control Conceptual Structures in the Development of Scientific Thought" (1990).

formulando preguntas, etc.[59]. Estas actividades son importantes para la lectura, pero al parecer a estos niños no se les había enseñado, y no eran capaces de aprenderlas por su cuenta.

También es importante que los alumnos analicen sus malos resultados a fin de que queden de manifiesto sus errores o confusiones de razonamiento. En numerosas ocasiones, en las condiciones habituales de ejercitación no se da mucha retroinformación y el alumno puede terminar absorbiendo estructuras de conocimiento equivocadas. Al respecto, se ha estudiado a fondo el caso de la resta, en que los alumnos pueden aprender reglas equivocadas y llegar a practicarlas a la perfección[60]. Una situación similar se da en la física intuitiva (*naive physics*): puede ser que el alumno se haya pasado la vida ejercitando la física equivocada, que es difícil de descartar cuando llega a la sala de clases[61]. Los resultados de la educación mejoran si se logra que los maestros se percaten de las confusiones en que los alumnos incurren sistemáticamente[62].

El papel de la ejercitación deliberada

Una de las consecuencias poco felices de la conocida máxima "ejercitarse hasta morir" es que deja la impresión de que la ejercitación es algo perjudicial. Empero, los estudios sobre "expertos" (*expertise*) han demostrado fehacientemente que adquirir una especialización toma mucho tiempo y exige mucha ejercitación. El análisis cognitivo de las tareas revela por qué. Toda competencia compleja contiene implícitamente un elevado número de componentes de conocimiento, para cuyo dominio se necesita bastante ejercitación. J. R. Anderson ha demostrado que para aprender una competencia compleja es preciso aprender sus numerosos componentes[63].

Al parecer, deliberadamente se estaría tratando de restarle importancia al tiempo que se dedica al aprendizaje. C. C. McKnight y otros tratan de quitarle a este factor el lugar que ha solido ocupar[64]. Para ello, citan esta-

[59] A. S. Palinscar y A. L. Brown, "Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and Comprehension-Monitoring Activities" (1984), pp. 117-175.

[60] K. Van Lehn, *Mind Bugs: The Origins ef Procedural Misconceptions* (1990); y R. Young y T. O'Shea, "Errors in Children's Subtraction" (1981), pp. 153-177.

[61] A. B. Champagne, L. E. Klopfer, y J. H. Anderson, "Factors Influencing the Learning of Classical Mechanics" (1980), pp. 1074-1079; y M. McCloskey, "Intuitive Physics" (1983), pp. 122-130.

[62] T. P. Carpenter y E. Fennema, "Cognitively Guided Instruction: Building on the Knowledge of Students and Teachers" (1992), pp. 457-470.

[63] J. R. Anderson, *Rules of the Mind* (1993), capítulos 7, 8 y 10.

[64] C. C. McKnight y otros, *The Underachieving Curriculum: Assessing U. S. School Mathematics from an International Perspective* (1990).

dísticas sobre los escolares japoneses de séptimo grado y estadounidenses de octavo grado, que reciben 101 y 144 horas de instrucción, respectivamente. Sin embargo, esta comparación induce a error. En Japón, el séptimo grado es el único de los doce años de enseñanza que los escolares dedican tan poco tiempo a las matemáticas. En la mayor parte de la enseñanza primaria destinan 175 horas a las matemáticas (el doble que los escolares estadounidenses), en el resto del primer ciclo de la enseñanza secundaria 140 horas y en el segundo ciclo aún más tiempo[65]. A eso hay que agregar las numerosas horas, no incluidas en estas cuentas, que muchos escolares japoneses asisten a cursos extracurriculares llamados *juku*, donde reciben adicionalmente instrucción tutorial intensiva. Además, en las escuelas japonesas el tiempo se utiliza en forma mucho más eficiente. Mientras que en Japón los alumnos reciben instrucción durante un 90% del tiempo, en las escuelas estadounidenses esta proporción es de sólo un 46%[66]. No obstante que las cifras oficiales hablan de 140 horas, en las escuelas públicas de Pittsburgh los alumnos de noveno grado sólo pasan un promedio de sesenta horas aprendiendo matemáticas en la sala de clases.

Los estudios psicológicos sobre el aprendizaje revelan reiteradamente que la principal variable del aprendizaje humano es el tiempo que se dedica a la tarea. Dejando de lado, por cierto, que también hay otros factores importantes, como ser la forma en que se pasa ese tiempo. Además, uno podría pasárselo aprendiendo cosas inútiles. Pero, en general, lo que se aprende es más o menos proporcional al tiempo que se destina a ello[67]. La segunda variable del aprendizaje humano (esto es, el olvido) es el tiempo que transcurre fuera de la actividad. Por ejemplo, en los Estados Unidos se desconfía de las vacaciones largas de verano, y suspender por un año algún ramo importante, como álgebra (por lo general, entre álgebra I y álgebra II corresponde geometría), crea la condición ideal para olvidarla. Los maestros a menudo se quejan de la materia que tienen que repasar después de las vacaciones de verano.

Aunque el tiempo que se dedica a la tarea es decisivo, no se recomienda la ejercitación mecánica. La forma en que se distribuye el tiempo es fundamental. Como subrayan los constructivistas (y otros autores), lo que se desea es que los alumnos participen activamente en el proceso de apren-

---

[65] M. White, *The Japanese Education Challenge: A Commitment to Children* (1987).

[66] J. W. Stigler y M. Perry, “Mathematics Learning in Japanese, Chinese, and American Classrooms” (1990).

[67] H. A. Simon, “How Big Is a Chunk?” (1974), pp. 482-488.

dizaje. En su estudio sobre el desarrollo de la condición de experto (*expertise*), K. A. Ericsson, R. T. Krampe y C. Tesch-Romer hicieron hincapié en la "ejercitación deliberada"[68]. Ésta se define como el hecho de hacer participar a sujetos motivados que reciben retroinformación mediante una práctica y una supervisión esmerada y constante. Por desgracia, en las aulas estadounidenses estas condiciones no se dan con frecuencia. H. W. Stevenson y J. W. Stigler han puesto de relieve las complejas y focalizadas explicaciones y discusiones que forman parte de las clases de matemáticas en Asia[69].

La ejercitación es tan importante para el alumno como lo es para el maestro. En Asia, los maestros dedican más tiempo que en los Estados Unidos a preparar sus clases y a ejercitarse en la instrucción. Stigler y Stevenson dicen que en Japón los maestros montan en la asignatura de matemáticas una verdadera representación teatral para sus alumnos[70]. Los maestros estadounidenses tienen cursos más pequeños pero disponen de menos tiempo para preparar sus clases, mientras que los maestros asiáticos tienen cursos más numerosos pero también más horas para preparar las clases. En las escuelas asiáticas, una de las cosas que facilitan el desarrollo de las técnicas docentes es que los programas de estudio son relativamente constantes y no varían mucho de un año a otro. En cambio, en el mundo reformista y caprichoso de la educación estadounidense, los programas de estudio nunca se mantienen el tiempo suficiente como para que los maestros lleguen realmente a dominar la materia.

Transferencia, insight *y comprensión*

A diferencia de las antiguas aproximaciones "conductistas" al aprendizaje, que propiciaban el aprendizaje mediante repetición mecánica, los escritos de los constructivistas radicales a menudo recomiendan que los alumnos aprendan "con comprensión". Es fundamental determinar lo que podría significar la "comprensión" en el aprendizaje y su aplicación a actividades reales. Comprender un concepto no es ni más ni menos que tener una nutrida red de estructuras de conocimiento que puedan utilizarse para resolver problemas que involucran el concepto de manera flexible en numerosas situaciones. Cada una de las estructuras de conocimiento debe aprenderse

[68] Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, "The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance" (1993).

[69] Stevenson y Stigler, *The Learning Gap* (1992).

[70] J. W. Stigler y H. Stevenson, "How Asian Teachers Polish Each Lesson to Perfection" (1991), pp. 12-47.

por separado. De esta manera, la comprensión de una materia no se produce de golpe sino que se va construyendo paso a paso a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, cuando se dice que un alumno ha entendido un concepto como las fracciones, ello significa que puede utilizar ese conocimiento en forma flexible en muchas situaciones. Así, el alumno puede calcular cuánta pizza le corresponderá a cada uno de tres niños si tienen que compartir media pizza; el alumno se dará cuenta de que, cuando hay que trasladar a treinta y cinco personas en autobuses que tienen capacidad para veinte, se necesitan dos autobuses y no uno tres cuartos; el alumno podrá explicar por qué para dividir una fracción hay que invertirla, etc. Un niño no adquiere de pronto la habilidad para hacer todo esto.

La idea de que en educación hay momentos de transformación está indudablemente vinculada con la antigua idea que propiciaba la psicología del desarrollo de que los niños pasan abruptamente de una etapa a otra, idea que, por su parte, a menudo se vincula con Piaget. En cambio, como lo demuestra con gran cuidado R. S. Siegler, el desarrollo es siempre gradual y continuo[71]. Lo mismo puede decirse de la educación.

La comparación que hace M. Wertheimer entre los alumnos a quienes se enseña a resolver de memoria los problemas y aquellos que aprenden a hacerlo por *insight** es un ejemplo clásico de la diferencia entre el aprendizaje con comprensión y el aprendizaje mecánico[72]. Los escolares a quienes se les entrega un *insight* de la fórmula para calcular el área de un paralelogramo (observando una construcción) pudieron transferirla a otros cuerpos en que podía aplicarse la fórmula (base por altura). En cambio, aquellos a los cuales simplemente se les enseñó la fórmula no pudieron transferir este conocimiento. En ambos casos, los niños aprendieron un conjunto de hechos y de procedimientos. Sin embargo, en el caso del *insight* se les enseñó un conjunto más rico y diverso de hechos que hicieron posible la transferencia. La instrucción que implica *insight* tomó más tiempo, lo que indica la mayor riqueza del conocimiento adquirido.

M. K. Singley y J. R. Anderson estudiaron en detalle las condiciones en que los conocimientos adquiridos para resolver un tipo de problema se transferían a la solución de otro[73]. Demostraron que, en general, la transferencia de un campo de conocimiento a otro no es del tipo "todo o nada" sino que varía según la cantidad de conocimientos compartidos por ambos.

---

[71] Siegler, *Emerging Minds...* (1996).

* *Insight*: Percepción o comprensión de la verdadera naturaleza de algo, por lo general en forma repentina (*Oxford Advanced Learner's Dictionary*). (N. del T.)

[72] M. Wertheimer, *Productive Thinking* (1945).

[73] M. K. Singley y J. R. Anderson, *Transfer of Cognitive Skill* (1989).

La comprensión de la forma en que se transfieren los conocimientos de un campo a otro del saber depende críticamente de los análisis de tareas que examinan las estructuras de conocimiento que ha adquirido el sujeto respecto de una materia y evalúan su aplicabilidad a otra. Habrá transferencia en la medida en que haya elementos cognitivos compartidos.

Los autores que han escrito sobre educación y que sostienen que la comprensión tiene momentos mágicos en que se transforma el conocimiento, están haciendo hincapié en el fenómeno del *insight*. Los problemas que plantea el *insight* han sido objeto de alguna investigación experimental[74]. Una de sus características notables es que los sujetos no saben que están próximos a encontrar la solución mucho antes de llegar a ella. Puesto que los problemas de *insight* se definen como aquellos cuya solución requiere un solo *insight* clave, no es raro que se tarde muy poco en codificar ese trozo de conocimiento una vez que se le reconoce. En cambio, los problemas no relacionados con el *insight* (como realizar una demostración en geometría) exigen desarrollar múltiples elementos de conocimiento. En estos casos, los alumnos pueden apreciar cuándo han resuelto una parte del problema, pero no su totalidad.

En un análisis detenido del problema del tablero de ajedrez incompleto, célebre problema de *insight*, C. A. Kaplan y H. A. Simon examinaron la relación que existe entre el *insight* crítico y el resto de la solución del problema[75]. La solución del problema exige decidir si es posible cubrir un tablero de ajedrez con piezas de dominó que abarcan exactamente dos cuadrados del tablero cada una. Cuando se eliminan dos cuadrados de extremos opuestos del tablero, se hace imposible cubrir la totalidad del tablero, porque cada pieza de dominó tapa un cuadrado blanco y uno negro y se han eliminado dos cuadrados del mismo color situados en extremos opuestos. Esto es lo que se llama el *insight* de la paridad y generalmente la persona se pasa varias horas tratando infructuosamente de encontrar la solución del problema, pero luego lo resuelve rápidamente. Sin embargo, aunque la solución aparentemente fue repentina, varios pasos sentaron las bases del *insight*, entre los cuales está la alternativa de considerar las invarianzas del problema. Es más, cuando los sujetos efectivamente pensaron en el *insight*, de todas formas tuvieron que pasar por el proceso de descubrir lo que éste implicaba. La prueba total de la imposibilidad no se produjo instantáneamente sino que tuvo que desarrollarse debido a la decisión de tener

[74] J. Metcalfe y D. Wiebe, "Intuition in Insight and Noninsight Problem Solving" (1987), pp. 238-246.

[75] C. A. Kaplan y H. A. Simon, "In Search of Insight" (1990), pp. 374-419.

en cuenta la paridad. Así pues, incluso en los problemas de *insight*, la suma de conocimientos no se produce en forma milagrosa, de golpe, sino que hay que ir obteniéndola parte por parte.

La evaluación empírica

El desarrollo de métodos educacionales exige más que nada una evaluación constante. Los programas de investigación no deberían imponerse como programas educacionales hasta que se hayan analizado a fondo sus consecuencias para el aprendizaje. Debería existir algo así como el Departamento de Administración de Drogas y Alimentos, que evaluara las consecuencias de los programas educacionales, tal como se hace con los medicamentos antes de que se autorice su venta al público. La mayoría de las corrientes en boga en materia de educación no resistirían esta clase de evaluaciones empíricas. Cabe preguntarse si la resistencia que opone el constructivismo radical a la validación empírica se daría si no se temiera a lo que ella puede revelar. La adhesión a una filosofía de la educación acrecienta la renuencia a verla refutada.

Parte de la objeción a la evaluación que formulan los constructivistas radicales y también otros educadores consiste en que ningún método de evaluación es perfecto. Centrarse en los inconvenientes de la evaluación es pasar por alto la información que proporciona. A manera de ejemplo cabe citar la evaluación del Project Follow Through (Proyecto de Seguimiento), que llegó a la conclusión de que, en el caso de niños de situación socioeconómica baja pertenecientes a grupos en riesgo, los métodos de instrucción directa son más eficaces que los métodos de clases abiertas[76]. De inmediato el informe fue blanco de grandes críticas por todos sus inconvenientes, y se desvió totalmente la atención de la importante información que contenía la evaluación[77]. Los científicos saben que deben tener conciencia de las limitaciones de los instrumentos que utilizan, pero también que no deben descuidar lo que esos instrumentos les dicen.

Aunque es importante saber cuáles son los sistemas educacionales que producen resultados positivos, también lo es comprender qué aspectos de la actividad educacional están dando lugar a las diversas partes del

[76] L. Stebbins y otros, *Education as Experimentation: A Planned Variation Model* (1977).

[77] E. House y otros, "No Simple Answer: Critique of FT Evaluation" (1978), pp. 128-160; y C. Bereiter y M. Kurland, "A Constructive Look at Follow Through Results" (1981), pp. 1-22.

resultado en materia de aprendizaje. Las investigaciones relativas a la evaluación de la educación distinguen entre evaluaciones "sumativas" y "formativas". Las primeras tratan de identificar las consecuencias para el aprendizaje de algunos tratamientos educacionales determinados, mientras que las segundas procuran definir cómo se podría mejorar el tratamiento. Hay que realizar mayores investigaciones en psicología cognitiva que cumplan una función formativa y ayuden a determinar qué aplicaciones de la educación dan resultados y cuáles no. Por desgracia, gran parte de la investigación que se lleva a cabo en psicología cognitiva es demasiado abstracta como para que sea de utilidad para el educador. Hay que vincular más claramente la investigación de laboratorio con los problemas que plantea la educación, a fin de que pueda orientar mejor las intervenciones educacionales.

La evaluación empírica efectivamente plantea problemas importantes, uno de los cuales es la definición de los objetivos. Ningún sistema de instrucción optimizará los objetivos de todos. Además, puede ser que las distintas evaluaciones lleguen a conclusiones diferentes acerca de lo que el alumno ha aprendido. En consecuencia, hay que analizar los objetivos de la educación y tener en cuenta las consecuencias de los distintos métodos de evaluación. Con todo, estas legítimas preocupaciones no deberían hacer que los educadores y los estudiosos dejen de recopilar aquella información que puede orientar sus juicios.

Conclusión

Ha llegado el momento de abandonar las filosofías de la educación y volver la mirada hacia la ciencia de la educación. Tomemos el caso de la medicina. Durante miles de años, antes de que se conociera realmente la fisiología humana, médicos y otras personas conocían y utilizaban remedios para algunas patologías, a veces con éxito. J. Gleick nos ofrece una descripción gráfica de la medicina precientífica:

> Quienes la practicaban tenían la autoridad que se les ha reconocido a los curanderos a lo largo de la historia humana; utilizaban un lenguaje especializado y se escudaban tras escuelas y sociedades profesionales, pero sus conocimientos eran una mezcla de sabiduría popular y modas cuasicientíficas. Eran pocos los investigadores de la medicina que comprendían los rudimentos de la experimentación estadística dirigida. Las autoridades defendían o atacaban determinadas terapias más o menos como los teólogos defendían o atacaban

> sus teorías, empleando una mezcla de experiencia personal, razonamiento abstracto y juicio estético[78].

Cuando la medicina comenzó a adoptar los métodos de la ciencia, junto con desarrollarse la fisiología y la bioquímica modernas se desarrollaron tratamientos muchísimo más eficaces. En la actualidad, los tratamientos se basan precisamente en esas ciencias. Para intervenir eficazmente en las enfermedades fue preciso profundizar el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, esto es, lo que sucede en el cuerpo enfermo. Ésta es la revolución de la medicina en el siglo veinte, y sus resultados ahorran comentarios.

Del mismo modo, los seres humanos han estado aprendiendo, y enseñando a sus hijos, desde los albores de la humanidad. Con la ayuda de tecnología como papel y pizarrón se ha desarrollado una "medicina popular" razonablemente poderosa, basada en clases y lecturas y en aprendizaje y enseñanza, una medicina popular que no exige saber demasiado acerca de lo que pasa por la mente humana durante el proceso de aprendizaje y que no ha cambiado mucho desde que se crearon las primeras escuelas.

Para avanzar más allá de estas técnicas tradicionales hay que seguir el ejemplo de la medicina y, como lo ha estado haciendo la psicología cognitiva en los últimos treinta o cuarenta años, hay que elaborar una teoría acerca de los procesos de información contenidos implícitamente en el desempeño calificado y en la adquisición de destrezas. Hay que formular una teoría acerca de las formas en que los conocimientos se representan internamente y acerca de los modos de adquirir estas representaciones internas. La psicología cognitiva ha logrado avanzar un largo camino hacia una teoría de esta naturaleza y ya se sabe mucho sobre lo que se puede hacer, y comienza a hacerse, para mejorar los procesos de aprendizaje.

Si se logra avanzar hacia un acercamiento más científico, se comprobará que las filosofías de la educación tradicionales se asemejan a las doctrinas de la medicina popular: contienen algunos elementos de verdad y otros de información falsa. Lo mismo puede aplicarse al constructivismo radical. Sólo podrán lograrse avances importantes en la práctica de la educación cuando se desarrolle una ciencia de la educación que separe la verdad de la fantasía, tal como la que se está comenzando a desarrollar actualmente.

---

[78] J. Gleick, *Genius: The Life and Science of Richard Feynman* (1992).

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, J. R.; y otros. "Acquisition of Problem Solving Skill". En J. R. Anderson (ed.), *Cognitive Skills and Their Acquisition.* Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1981.

Anderson, J. R.; Boyle, C. F.; y Yost, G. "The Geometry Tutor". *Proceedings of IJCAI* (1985).

Anderson, J. R. *Rules of the Mind.* Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1993.

Anderson, J. R., y otros. "Cognitive Tutors: Lessons Learned". *Journal of Learning Sciences*, Vol. 4 (1995).

Anderson, J. R.; Simon, H. A.; y Reder, L. M. "Situated Learning and Education". *Educational Researcher*, Vol. 25 (mayo 1996).

Anderson, J. R.; Simon, H. A.; y Reder, L. M. "Rejoinder: Situative versus Cognitive Perspectives: Form versus Substance". *Educational Researcher*, Vol. 26 (1997).

Atkinson, R. C.; y Wilson, H. A. (eds.). *Computer-Assisted Instruction*. Nueva York: Academic Press, 1969.

Ausubel, D. P. *Educational Psychology: A Cognitive View.* Nueva York: Holt, Rinehart, and Winston, 1968.

Bahrick, H. P.; y Hall, L. K. "Lifetime Maintenance of High School Mathematics Content". *Journal of Experimental Psychology: General*, Vol. 120 (1991).

Begg, I.; y otros. "The Generation Effect Is No Artifact: Generation Makes Words Distinctive". *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Vol. 15 (1989).

Bereiter, C.; y Kurland, M. "A Constructive Look at Follow Through Results". *Interchange*, Vol. 12 (1981).

Bielaczyc, K.; Pirolli, P.; y Brown, A. L. "Training in Self-Explanation and Self-Regulation Strategies: Investigating the Effects of Knowledge Acquisition Activities on Problem Solving". *Cognition and Instruction*, Vol. 13 (1995).

Bloom, B. S. "Learning for Mastery". *Evaluation Comment*, Vol. I (1968).

Bloom, B. S. *Human Characteristics and Social Learning.* McGraw-Hill, 1976.

Bobrow D. G.; y Bower, G. H. "Comprehension and Recall of Sentences". *Journal of Experimental Psychology.* Vol. 80 (1969).

Bransford, J. D.; y Johnson, M. K. "Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall". *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, Vol. 11 (diciembre 1972).

Brousseau, G. "The Crucial Role of the Didactical Contract in the Analysis and Construction of Situations in Teaching and Learning Mathematics". En H.-G. Steiner (ed.), *Theory of Mathematics Education*, Occasional Paper No. 54, Bielefeld, Alemania, Universidad de Bielefeld, Institut fur Didaktik de Mathematik, 1984.

Brown, J. S.; Collins, A.; y Diguid, P. *Situated Cognition and the Culture of Learning.* Technical Report No. IRL88-0008. Institute for Research on Learning, 1988.

Burns, D. J. "The Generation Effect: A Test Between Single and Multifactor Theories". J*ournal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Vol. 16 (1990).

Carpenter, T. P.; y Fennema, E. "Cognitively Guided Instruction: Building on the Knowledge of Students and Teachers". En W. Secada (ed.), *Curriculum Reform: The Case of Mathematics in the United States.* Edición especial de *International Journal of Educational Research*, Elmsford, N.Y.: Pergamon Press, 1992.

Case, R.; y Griffin, S. “Child Cognitive Development: The Role of Control Conceptual Structures in the Development of Scientific Thought”. En C. A. Hauert (ed.), *Developmental Psychology: Cognitive, Perception-Motor, and Neurophysiological Perspectives.* North Holland, 1990.

Cobb, P.; y otros. “Assessment of a Problem-Centered Second Grade Mathematics Project”. *Journal for Research in Mathematics Education*, Vol. 22 (enero 1991).

Cobb, P.; Yackel, E.; y Wood, T. “A Constructivist Alternative to the Representational View of Mind in Mathematics Education”. *Journal for Research in Mathematics Education*, Vol. 23 (enero 1992).

Confrey, J. “Learning to Listen: A Student’s Understanding of Powers of Ten”. En E. von Glaserfeld (ed.), *Radical Constructivism in Mathematics Education.* Dordrecht, Holanda: Kluwer Academic Publishers, 1991.

Craik, F. I. M.; y Watkins, M. J. “The Role of Rehearsal in Short-Term Memory”. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, Vol. 12 (1973).

Chamberlin, D.; y otros. *Did They Succeed in College? The Follow-Up Study of the Graduates of the Thirty Schools.* Harper and Row, 1942.

Champagne, A. B.; Klopfer, L. E.; y Anderson, J. H. “Factors Influencing the Learning of Classical Mechanics”. *American Journal of Physics*, Vol. 48 (1980).

Champagne, A. B. “Empiricism Is Not a Four-Letter Word. *College Composition and Communication*, Vol. 47, No. 4 (diciembre 1996).

Charney, D. H.; Reder, L. M.; y Kusbit, G. W. “Goal Setting and Procedure Selection in Acquiring Computer Skills: A Comparison of Tutorials, Problem-Solving, and Learner Exploration”. *Cognition and Instruction*, Vol. 7, No. 4 (1990).

Chi, M. T.; y otros. “Self-Explanations: How Students Study and Use Examples in Learning to Solve Problems”. *Cognitive Science*, Vol. 13 (abril-junio 1989).

Dansereau, D. F.; y Johnson, D. W. “Cooperative Learning”. En D. Druckman y R. A. Bjork (eds.), *Learning, Remembering. Believing: Enhancing Team and Individual Performance.* Washington: National Academy Press, 1994.

Dewey. J. *Experience and Education.* Nueva York: Collier, 1938.

Dossen, J. A. “Assessing Mathematics: Enhancing Understanding”. En I. Wirszup y R. Streit (eds.), *Developments in School Mathematics Education around the World.* Vol. 3. Actas de la Third UCSMP International Conference on Mathematics Education. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 1992.

Ericsson, K. A.; Krampe, R. T.; y Tesch-Römer, C. “The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance”. *Psychological Review*, Vol. 100 (1993).

Glaser, R. “Individuals and Learning: The New Aptitudes”. *Educational Researcher*, Vol. I (1972).

Gleick, J. *Genius: The Life and Science of Richard Feynman.* Nueva York: Pantheon Books, 1992.

Glenberg, A. M.; Smith, S. M.; y Green, C. “Type I Rehearsal Maintenance and More”. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, Vol. 16 (1977).

Greeno, J. G. “On Claims That Answer the Wrong Questions”. *Educational Researcher*, Vol. 26 (1997)

Gronlund, N. E. *Stating Behavioral Objectives for Classroom Instruction.* Macmillan, 1985.

Guskey T. R.; y Gates, S. “Synthesis of Research on the Effects of Mastery Learning in Elementary and Secondary Classrooms”. *Educational Leadership*, Vol. 43 (1986).

Hayes. J. R. “Three Problems in Teaching General Skills”. En J. Segal, S. Chipman y R. Glaser (eds.), *Thinking and Learning*, Vol. 2. Hillsdale N. J.: Erlbaum, 1985.

Hiebert, J.; y otros. "Authentic Problem Solving in Mathematics". Trabajo presentado en la reunión anual de la American Educational Research Association, New Orleans, La., 1994.

Hirshman, E.; y Bjork, R. A. "The Generation Effect: Support for a Two-Factor Theory". *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Vol. 14 (1988).

House, E.; y otros. "No Simple Answer: Critique of FT Evaluation". *Harvard Educational Review*, Vol. 48 (1978).

Johnson, D. W.; y Johnson, R. T. *Cooperation and Competition: Theory and Research.* Edina, Minn.: Interaction Book Co., 1989.

Jonassen, D. H. "Evaluating Constructivist Learning". En T. M. Duffy y D. H. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction Hillsdale*, N. J. Erlbaum, 1992.

Kaplan, C. A.; y Simon, H. A. "In Search of Insight". *Cognitive Psychology*, Vol. 22 (julio 1990).

Keller, F. S. "Good-Bye Teacher". *Journal of Applied Behavior Analysis*, Vol. I (1968).

Kieras, D. E.; y Bovari, S. "The Role of a Mental Model in Learning to Operate a Device". *Cognitive Science*, Vol. 8 (julio-septiembre 1984).

Knerr, C. M.; y otros. *Simulation-Based Research in Part Task Training*, AF HRL-TR-86-12, AP-B107293. Brooks Air Force Base, Texas: Air Force Human Resources Laboratory, 1987.

Koedinger, K. R.; y Anderson, J. R. "Abstract Planning and Perpetual Chunks: Elements in Expertise in Geometry". *Cognitive Science*, Vol. 14 (1990).

Koedinger, K. R.; y otros. "Intelligence Tutoring Goes to School in the Big City". Trabajo presentado en la Seventh World Conference on Artificial Intelligence in Education, Washington, D. C., agosto 16-19, 1995.

Kulik C.; y Bangert-Downs, R. "Effects of Testing for Mastery on Student Learning". Trabajo presentado en la reunión anual de la American Educational Research Association, San Francisco, California, 1986.

Lesh R.; y Lamon, S. J. *Assessment of Authentic Performance in School Mathematics.* Washington: AAAS Press, 1992.

Lesh R.; y Zawojeski, J. S. "Problem Solving". En T. R. Post (ed.), *Teaching Mathematics in Grades K-8: Research-Based Methods.* Needham Heights, Mass.: Allyn and Bacon, 1992.

Lumsdaine, A. A.; Glaser, R. (eds.). *Teaching Machines and Programmed Learning.* Washington: National Education Association, 1960.

Mager, R. F. *Preparing Instructional Objectives*. Palo Alto, Calif.: Fearon, 1962.

Mayer, R. E. *Educational Psychology: A Cognitive Approach.* Little, Brown, 1987.

Mayhew, K. C.; y Edwards, A. C. *The Dewey School.* Nueva York: Appleton-Century, 1936.

McClelland, J. L.; y Rumelhart, D. E. (eds.). *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*, Vol. 2. MIT Press, Bradford Books, 1986.

McCloskey, M. "Intuitive Physics". *Scientific American*, Vol. 248 (1983).

McDaniel, M. A.; Waddill, P. J.; y Einstein, G. O. "A Contextual Account of the Generation Effect: A Three Factor Theory". *Journal of Memory and Language*, Vol. 27 (1988).

McKnight, C. C.; y otros. *The Underachieving Curriculum: Assessing U. S. School Mathematics from an International Perspective.* Champaign, lll.: Stipes Publishing Co., 1990.

Metcalfe, J.; y Wiebe, D. "Intuition in Insight and Noninsight Problem Solving". *Memory and Cognition*, Vol. 15 (1987).

National Research Council (NRC). *Learning, Remembering, Believing: Enhancing Human Performance.* Editado por D. Druckman y R. A. Bjork. Washington: National Academy Press, 1994.

Paige, J. M.; y Simon, H. A. "Cognitive Processes in Solving Algebra Word Problems". En B. Kleinmuntz (ed.), *Problem Solving.* John Wiley and Sons, 1966.

Palinscar, A. S.; y Brown, A. L. "Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and Comprehension-Monitoring Activities". *Cognition and Instruction*, Vol. I (1984).

Patrick, J. *Training: Research and Practice.* San Diego, Calif.: Academic Press, 1992.

Porter, D. *An Application of Reinforced Principles to Classroom Teaching.* Cooperative Research Project No. 142. Harvard University, 1961.

Ravitch, D. *The Troubled Crusade: American Education, l945-1980.* Basic Books, 1983.

Resnick, L. B.; Briars, D.; y Lesgold, S. "Certifying Accomplishments in Mathematics: The New Standards Examining System". En I. Wirszup y R. Streit (eds.), *Developments in School Mathematics Education around the World*, Vol. 3. Actas de la Third UCSMP International Conference on Mathematics Education. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 1992.

Resnick, L. B. "Situated Rationalism: Biological and Social Preparation for Learning". En Lawrence A. Hirschfield y Susan Gelman (eds.), *Mapping the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture Cambridge*, N. Y.: Cambridge University Press, 1994.

Richman, H. B.; y Simon, H. A. "Context Effects in Letter Perception: Comparison of Two Theories". *Psychological Review*, Vol. 96 (julio 1989).

Rist, R. C. "Student Social Class and Teacher Expectations: The Self-Fulfilling Prophecy in Ghetto Education". *Harvard Educational Review*, Vol. 40 (1989).

Rumelhart, D. E.; y McClelland, J. L. "On Learning the Past Tenses of English Verbs". En J. L. McClelland y D. E. Rumelhart (eds.). *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*, Vol. 2. MIT Press, Bradford Books, 1986.

Salas. E.; y otros. "Toward an Understanding of Team Performance and Training". En R. W. Swezey y E. Salas (eds.), *Teams: Their Training and Performance.* Norwood, N. J.: Ablex, 1993.

Salomon, G.; y Globerson, T. "When Teams Do Not Function the Way They Ought To". *International Journal of Educational Research*, Vol. 13 (1989).

Siegler, R. S. *Children's Thinking: An Information Processing Approach.* Englewood Cliffs. N. J.: Prentice-Hall, 1980.

Siegler, R. S. *Emerging Minds: The Process of Change in Children's Thinking.* Nueva York: Oxford University Press, 1996.

Silver, E. A. "Foundations of Cognitive Theory and Research for Mathematics Problem-Solving". En A. H. Schoenfeld (ed.), *Cognitive Science and Mathematics Education.* Hillsdale, N. J.: LEA, 1987.

Simon, H. A. "How Big Is a Chunk?" *Science*, Vol. 183 (1974).

Singley, M. K.; y otros. "The Algebra Word Problem Tutor". *Artificial Intelligence and Education* (1989).

Singley, M. K.; y Anderson, J. R. Transfer of Cognitive Skill Harvard University Press, 1989.

Slamecka, N. J.; y Graf, P. "The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon". *Journal of Experimental Psychology: Learning Memory, and Cognition*, Vol. 4 (l978).

Slamecka, N. J.; y Katsaiti, L. T. "The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon". *Journal of Memory and Language*, Vol. 26 (1987).

Slavin, R. E. *Collective Learning: Theory, Research, and Practice.* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1990.

Stebbins, L.; y otros. *Education as Experimentation: A Planned Variation Model*, Vol. IV-A. Cambridge, Mass.: Abt Associates, 1977.

Stevenson, H. W.; y Stigler, J. W. *The Learning Gap: Why Our Schools Are Failing and What We Can Learn from Japanese and Chinese Education.* Nueva York: Summit Books, 1992.

Stigler, J. W.; y Perry, M. "Mathematics Learning in Japanese, Chinese, and American Classrooms". En J. W. Stigler, R. A. Shweder y G. Herdt (eds.), *Cultural Psychology*. Nueva York: Cambridge University Press, 1990.

Stigler, J. W.; y Stevenson, H. "How Asian Teachers Polish Each Lesson to Perfection". *American Educator*, Vol. 15 (1991).

Suppes, P. "Modern Learning Theory and The Elementary School Currriculum". *American Educational Research Journal*, Vol. 2 (1964).

Van Lehn, K. *Mind Bugs: The Origins of Procedural Misconceptions.* MIT Press, 1990.

Von Glaserfeld, E. (ed.). *Radical Constructivism in Mathematics Education.* Dordrecht, Holanda: Kluwer Academic Publishers, 1991.

Wertheimer, M. *Productive Thinking.* Harper and Row, 1945.

White, M. *The Japanese Education Challenge: A Commitment to Children.* Free Press, 1987.

Wirszup, I.; y Streit, R. (eds.), *Developments in School Mathematics Education around the World*, Vol. 3. Actas de la Third UCSMP International Conference on Mathematics Education. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 1992.

Young, R.; y O'Shea, T. "Errors in Children's Subtraction". *Cognition and Science*, Vol. 5 (1981).

Zhu, X.; y Simon, H. A. "Learning Mathematics from Examples and by Doing". *Cognition and Instruction*, Vol. 4 (1988). □

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN CHILE
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE UNA CONTROVERSIA*

Emilio Meneses, Patricio Valdivieso y Carlos Martin

En este trabajo se analiza el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Chile desde las perspectivas histórica, estratégica, económica y política. Sus autores concluyen que el SMO en Chile presenta actualmente varios inconvenientes: no es un instrumento militarmente efectivo; recurre a un mecanismo ineficiente de empleo de recursos económicos y es políticamente injusto, pues le impone un tributo al sector de menos recursos y menos preparado de la sociedad. El trabajo finaliza con una propuesta financiera y operacional para reemplazar el actual SMO por un SM voluntario.

EMILIO MENESES CIUFFARDI. Profesor Titular del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cátedra José Ignacio Centeno de Estudios de Defensa.

PATRICIO VALDIVIESO. Profesor Auxiliar del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

CARLOS MARTIN. Instructor del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

* Este trabajo ha contado con financiamiento del Centro de Estudios Públicos y de fondos de estudios de la Cátedra de Defensa del Instituto de Ciencia Política de la P. Universidad Católica. Los autores agradecen los comentarios recibidos en el seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos el 11 de abril del 2000.

I. INTRODUCCIÓN

El concepto de Servicio Militar Obligatorio (SMO) surgió en Europa en el siglo XVIII, pero recién se llevó a la práctica a fines del siglo XIX. No obstante su utilidad en cierto contexto particular, en las últimas décadas ha sido objeto de revisiones y sucesivas adaptaciones en distintas partes del mundo. Se ha buscado adaptarlo a los modernos requerimientos no sólo de la defensa y seguridad, sino también de las sociedades y economías modernas. En el caso específico de Chile, las consideraciones estratégicas para mantener un tipo de reclutamiento obligatorio se enfrentan con consideraciones económicas y políticas, lo que lleva a la necesidad de analizar los impactos socioeconómicos y políticos del SMO. En efecto, el tema del servicio militar que el país quiere tener está relacionado intrínsecamente con las implicancias políticas que éste supone para la sociedad en su conjunto.

En este trabajo se realiza un estudio del SMO desde distintos puntos de vista. La primera parte examina sus fundamentos antropológicos, éticos, legales e históricos, llevándose a cabo, desde estos puntos de vista, una revisión del objeto de estudio a través del tiempo y de distintas áreas geográficas. La segunda parte resume el seguimiento del debate público en Chile sobre esta materia, en el cual se resaltan, en tres etapas de la discusión nacional, las diferencias de posiciones y los temas de interés pendientes. Finalmente, se profundiza en las implicancias estratégicas así como económicas y políticas del SMO en el contexto chileno, determinándose las serias tensiones y deficiencias que éste tiene en el presente, y se entrega una proposición para hacer evolucionar dicho sistema a uno de carácter voluntario.

II. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS, ÉTICOS, LEGALES E HISTÓRICOS[1]

En el mundo actual, afectado por megatendencias o procesos de larga duración tales como la globalización y el pluralismo, entre otros,

[1] El término “servicio militar” es entendido en este trabajo como sinónimo de deber ciudadano de servicio en las actividades de defensa del Estado, y no necesariamente como el deber de los ciudadanos de dar servicio de carácter militar en algunas de las instituciones del sector de la defensa. Se usará el término “servicio militar” y no otros términos sinónimos más neutrales desde el punto de vista semántico tales como “servicio público”, porque en Chile está incorporado al vocabulario común de los ciudadanos.

surgen preguntas sobre la adecuación de determinadas instituciones para responder a las demandas emergentes dentro y fuera de los países.

Respecto al servicio militar hay una serie de interrogantes que generan debate público, y que, por lo tanto, inducen al tratamiento de este tema en la agenda pública.

Para entrar en el debate sobre el servicio militar es indispensable comenzar por sus fundamentos antropológicos, éticos, legales e históricos, porque la adecuada comprensión de los mismos es una condición necesaria para evaluar las ventajas y desventajas de la forma del servicio militar chileno, y para discutir sus posibles reformas.

2.1. Fundamentos antropológicos y éticos

Cada ser humano es único e irrepetible, es un individuo distinto a los demás, y ese hecho fundamenta el derecho de cada uno a la autodeterminación y a la libertad para formular sus intereses y metas, y desde luego a buscar el camino para la realización de ellas. Pero, al mismo tiempo, desde su nacimiento, el ser humano está vinculado con otros seres humanos por relaciones interpersonales, que van desde la familia hasta el Estado, y que son condiciones necesarias para que el desarrollo individual sea posible. De allí que junto a los derechos individuales existan deberes hacia esas relaciones comunes, y que en principio la absolutización de los derechos individuales, sin deberes de ningún tipo, no encuentra fundamentación antropológica ni ética[2]. Los derechos y los deberes van de la mano, es decir, para que los primeros estén garantizados son necesarios los segundos. Por esa razón, en la mayoría de los países del mundo, el Estado constitucional democrático declara derechos y deberes en las constituciones; los primeros se reconocen como expresión de la naturaleza humana, y los segundos se establecen para garantizar el ejercicio de esos derechos.

De la concepción antropológica expuesta resulta un principio social que fundamenta las actividades de defensa y la necesidad del servicio mili-

[2] Hay autores que en el momento de preguntar por los fundamentos antropológicos y éticos del servicio militar señalan que hay dos tradiciones en la teoría política (véase, por ejemplo, April Carter, "Liberalism and the Obligation to Military Service" [1998], pp. 68-81). La tradición intelectual liberal postularía que el ser humano es un sujeto racional, con derecho a la autodeterminación, la independencia, la libre determinación de sus intereses y metas, y que los derechos del ser humano individual serían anteriores al Estado y a la sociedad. La tradición republicana, por su parte, entendería al ser humano como un sujeto con derechos y deberes al mismo tiempo, y entre sus deberes no sólo estarían los de carácter político, en sentido estricto, sino también los de defensa. Para otra perspectiva complementaria, véase Patricio Valdivieso, "Ética Política y Éxito Moral" (1998), pp. 6-10.

tar: solidaridad. La idea de la solidaridad expresa la relación de interdependencia de las personas. Las personas se necesitan mutuamente desde que nacen. Ellas están vinculadas, porque sólo de ese modo se pueden desarrollar individualmente y en conjunto. Del principio de solidaridad se sigue una demanda de carácter normativo: las dependencias recíprocas obligan a deberes recíprocos, como son los deberes de responsabilidad de individuos y de grupos en el cuidado de sus relaciones recíprocas, de los individuos y grupos en el cuidado de sus instituciones comunes, y de los órganos estatales en el cuidado y el respeto de los individuos y grupos que son el fundamento de su legitimidad. En otras palabras, del principio de la solidaridad se sigue que cada miembro de una sociedad es co-responsable por el bien común, y cada comunidad es responsable por el bienestar de sus miembros.

Para que los deberes comunes de responsabilidad queden garantizados es necesario un orden legal e institucional. Precisamente por esa razón, una de las tareas centrales del Estado, entendido en su dimensión de esfera de toma de decisiones que obligan, consiste en declarar algunos de nuestros deberes de solidaridad en forma de leyes e instituciones. La defensa es un deber común de solidaridad y, por lo tanto, el Estado debe reconocerla y promoverla por medio de leyes e instituciones que garanticen la participación de los ciudadanos en el cuidado de ese bien común.

Por otra parte, las leyes e instituciones debieran ser condiciones favorables o estímulos para el incremento de la solidaridad y de la integración nacional. De lo anterior se sigue que las formas concretas adoptadas por el sistema de defensa, y del servicio militar dentro del mismo, debieran contribuir a reforzar la solidaridad nacional, en el sentido de ser instituciones que estimulen positivamente el espíritu de lo común entre las personas que integran la comunidad nacional.

El Estado y sus instituciones se fundamentan en la voluntad de los ciudadanos para estar integrados, vivir en un territorio común y funcionar según reglas comunes[3]. Los órganos e instituciones del Estado, por lo tanto, tienen la función de garantizar el orden común interno de la sociedad y de preservar la seguridad y la paz en las relaciones del Estado con otros

[3] No basta compartir un mismo territorio, lenguaje y otras características comunes; piénsese en el caso de muchos Estados que en el período contemporáneo se están desintegrando por luchas entre distintas nacionalidades y minorías que aspiran a la autodeterminación. La voluntad ciudadana y la voluntad política de querer mantener lo común es esencial, especialmente en nuestro tiempo, cuando predominan valores individualistas. Sobre nacionalismo, véase Bruce D. Porter, *War and the Rise of the State* (1994), pp. 121-125; también Karl Deutsch, *Nationalism and Social Communication* (1966), y del mismo autor, *Nationenbildung-Nationalstatt-Integration* (1972).

Estados. Para cumplir esas funciones, el Estado dispone de fuerza pública (*potestas*) y de instrumentos de fuerza (*vis coactiva*). El Estado es la única instancia legítima para hacer uso de la fuerza con el objeto de cumplir las funciones indicadas: defensa del orden común, en lo interno, y relaciones de paz en las relaciones externas[4].

Puede ocurrir que la conciencia individual del ciudadano entre en contradicción con los deberes que le imponga su Estado. En principio, de producirse tal problema, el ciudadano debe seguir los dictados de su conciencia, porque ella es anterior a cualquier otra cosa, pertenece a la dimensión individual de la persona. Pero si se vive en sociedad y de ello resultan beneficios para el desarrollo individual, aun cuando cada persona tenga su conciencia individual hay deberes comunes, y la conciencia no dispensa de la responsabilidad que le cabe al ciudadano respecto a ellos. La conciencia individual tampoco justifica el daño que se podría ocasionar a principios generales de igualdad y universalidad de derechos y deberes. En caso de producirse realmente problemas de conciencia, el ciudadano deberá hacer un esfuerzo por fundamentar ante los demás ciudadanos, en la práctica ante sus representantes, sus razones para ser exceptuado de deberes comunes, porque con su actitud resultan afectados tanto los principios comunes como el orden común de la sociedad. Asimismo, quien por problemas de conciencia no cumple con deberes comunes, debe estar dispuesto a aceptar con responsabilidad las consecuencias de su decisión o las alternativas que sus conciudadanos le ofrezcan para conciliar el principio de la conciencia y el principio de los deberes comunes hacia el Estado y las instituciones.

En el contexto internacional actual, marcado por tendencias de globalización y de regionalismo abierto[5], el Estado debe continuar desempeñando la función de garantizar el orden común y la paz en las relaciones con otros Estados. Los procesos de globalización y cooperación no hacen desaparecer conflictos y guerras, no garantizan la justicia, y por lo tanto no dispensan a los ciudadanos y a los órganos estatales del cumplimiento de sus funciones y deberes para la seguridad y la defensa. El sistema internacional está lejos de haber llegado a ser un lugar seguro, y el riesgo de conflictos está siempre latente debido a peligros de agresión de distinta naturaleza (tales como liderazgos nacionalistas, por ejemplo). A pesar del incremento de las relaciones de cooperación y la mayor interdependencia

[4] Mayor fundamentación en Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre* (1988), pp. 475-488.

[5] Sobre el tema, véase Fredric Jameson y M. Miyoshi (eds.), *The Cultures of Globalization* (1998).

de los actores internacionales, no existe una instancia supranacional que esté en condiciones de garantizar la seguridad. Por cierto, y si se compara con el período de Guerra Fría, actualmente no impera el clima de bipolaridad y de tensiones globales que caracterizó al sistema internacional en décadas pasadas, pero de todos modos se han producido numerosas crisis y se han desatado guerras locales y regionales de gran violencia[6]. En América Latina, donde también se manifiestan los procesos de globalización y regionalización, y sin lugar a dudas con mayor fuerza en la actualidad que en el pasado, los argumentos expuestos mantienen su validez, por cuanto aún hay numerosas diferencias no resueltas entre los Estados, tales como las controversias sobre demarcación de límites territoriales y nuevos problemas emergentes en el contexto de mayor interdependencia económica[7].

Las instituciones de defensa, entre ellas las Fuerzas Armadas y el servicio militar, encuentran su razón de ser en los fundamentos ya expuestos, y por lo tanto no pueden ser entendidas como un fin en sí mismo. El servicio militar, entonces, consiste en una de las condiciones necesarias para que el sector de la defensa, en su conjunto, y las Fuerzas Armadas, dentro del mismo, estén en condiciones de cumplir las funciones estatales de seguridad, pues proporcionan el personal necesario para ello. Pero, y esto debe ser subrayado, de todo lo anterior *no se extrae ninguna conclusión sobre la forma que debe tener el servicio militar*. En efecto, por deber de servicio militar se entenderá el deber legal del ciudadano común de

[6] Sobre crisis y conflictos contemporáneos, véanse Reinhard Meyers, "Krieg und Frieden" (1995), pp. 238-254; Barry B. Hughes, *Continuity and Change in World Politics. The Clash of Perspectives* (1994), pp. 109-118; Helmut Hubel, "Regionale Krisenherde der Weltpolitik" (1995), pp. 347-360. Durante la década de 1990 se desataron numerosas crisis y conflictos en distintos lugares del planeta. No eran conflictos pequeños, porque murieron cientos de miles de personas y se produjeron movimientos de población de envergadura. La mayor parte de los conflictos no se generan entre Estados, como ocurría en el pasado. Se trata de conflictos al interior de Estados, o bien de formas mixtas de conflicto: conflictos estatales internos y conflictos entre Estados. El más grave de todos, en la ex Yugoslavia, ha adquirido una dimensión cada vez más internacional. El aumento de los conflictos deja de manifiesto que el Derecho Internacional, la Carta de la ONU y, por cierto, todas las herramientas diplomáticas y políticas del período de la globalización son insuficientes para garantizar la seguridad internacional.

[7] Sobre el tema, véanse ponencias del seminario "Globalización, Identidad y Defensa Nacional", mayo-diciembre de 1998, organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo, especialmente: Alberto von Klaveren, "Globalización y Políticas de Defensa" (1998), y vicealmirante Alfredo Gallegos, "Globalización, Identidad y Defensa Nacional: Un Problema No Resuelto" (1998). Para mayores antecedentes sobre la discusión del tema a nivel latinoamericano, véanse Francisco Rojas y W. Smith (eds.), *El Cono Sur y las Transformaciones Globales* (1994); Jorge Domínguez (ed.), *Seguridad Internacional, Paz y Democracia en el Cono Sur* (1998); Barbara Stallings (ed.), *Global Change, Regional Reasons* (1995); Alicia Frohmann, *Cooperación Política e Integración Latinoamericana en los 90* (1996); Francisco Rojas y otros (eds.), "La Seguridad Internacional en los Países del ABC" (1998).

cumplir con un servicio para la defensa común, bajo modalidades que pueden cambiar según cambien las circunstancias históricas nacionales e internacionales[8].

¿Cuál ha de ser el criterio ético para evaluar la forma del servicio? ¿Es legítimo aspirar a la reforma de la institución?

Las instituciones tienen su origen en personas y en relaciones sociales de personas, expresan valores y deberes sociales, y cumplen la función de dar orden y estabilidad[9]. Por el servicio que brindan, ellas demandan respeto, pero también dejan espacio para la interpretación. No deben distanciarse de su origen y de su sentido, pretendiendo llegar a ser un fin en sí mismas. Las instituciones deben ser percibidas y experimentadas por los miembros de la sociedad como llenas de sentido. Instituciones basadas sólo en la tradición, y totalmente alejadas del consentimiento de los ciudadanos, pasan a ser una fachada sin sentido, sin legitimidad. Ellas permanecen vivas cuando su sentido motivador persiste en las personas y en las nuevas generaciones, y por esta razón deben tener espacio para la interpretación y, por cierto, para la transformación de su forma.

Los ciudadanos, al tener la posibilidad de desarrollar acciones en el contexto de un orden común, de instituciones comunes, ganan espacio para el desarrollo individual. Pero, por otra parte, las instituciones no pueden ser tomadas como algo hecho para siempre, porque demandan adecuación a circunstancias históricas cambiantes. Sólo mediante esa adecuación las instituciones pueden mantener su sentido original para distintas generaciones. Por ello, hasta cierto punto, las instituciones pueden ser transformadas. Para mantener determinada institución puede ser necesario cambiar determinadas normas.

---

[8] La importancia del servicio militar para que las instituciones de las Fuerzas Armadas cumplan o estén preparadas para realizar las funciones de seguridad y defensa que les corresponden ha conducido a acalorados debates sobre la mejor manera de regular esa forma específica de servicio cívico. Si las Fuerzas Armadas funcionan como verdaderos "dinosaurios", donde quienes cumplen su servicio de defensa común deben vegetar durante unos meses perdiendo el tiempo y haciendo perder recursos al Estado, resulta extremadamente difícil, si no imposible, ver alguna ventaja en esa forma de servicio. Igualmente difícil resulta fundamentar una forma de servicio donde se ofrecen todas las comodidades e incentivos, desde el punto de vista del bienestar individual, si ello no se traduce en un buen cumplimiento de funciones para la defensa común; véase amplio debate con representantes de distintos países, en Miguel Ángel Aguilar y R. L. Bardaji (eds.), *El Servicio Militar ¿Obligatorio o Voluntario?* (1992).

[9] Las instituciones son imprescindibles para la vida social, porque dispensan de tener que pensar diariamente cómo regular múltiples asuntos, y por esa razón contribuyen a la libertad de las personas. Sobre el tema, véase Siegfried Bachmann, "Institution" (1995), pp. 518-519; desde la perspectiva abordada por este trabajo, véase también Bernhard Sutor, *Politische Ethik* (1992), pp. 25-26.

Las instituciones no tienen un sentido en sí, su función es posibilitar, apoyar y facilitar la buena interrelación de los seres humanos desde su accionar específico. Pero ellas pueden faltar a ese fin, y por lo tanto la crítica de las instituciones es necesaria. En todo caso, esa crítica carecerá de sentido si está orientada por la idea utópica de que la vida social sería posible sin instituciones. La crítica ha de basarse en la pregunta por el sentido original de las instituciones, por las funciones que deben cumplir y por su capacidad de ofrecer un marco estable a las relaciones sociales.

De lo anterior se sigue que es legítimo y deseable preguntarse si la institución del servicio militar mantiene su sentido original, y de qué forma puede cumplir mejor sus funciones bajo condiciones de nuevos escenarios nacionales e internacionales emergentes[10].

La crítica fundamentada y los deseos realistas de reforma de las instituciones demandan hacer uso de la virtud ética de la prudencia, esto es, preguntarse por el sentido y las metas de la institución, evaluar racionalmente ventajas y desventajas de la forma adquirida por la institución para el cumplimiento de sus metas, observar qué factores de la realidad demandan preservación, reforma o renovación de la institución[11].

2.2. Fundamentos legales: Constitución y leyes

En las bases constitucionales de los regímenes políticos democráticos, el Estado reconoce los derechos inherentes a la dignidad humana de los ciudadanos, y adquiere el compromiso de proteger y estimular esos derechos. Una condición necesaria para el cumplimiento del compromiso indicado consiste en la capacidad de defensa del territorio, de la población, de los bienes y de las instituciones comunes. Pero el deber de protección del Estado sólo puede ser realizado con la ayuda de los ciudadanos mismos, mediante su aporte para el cumplimiento del compromiso común. Por lo

[10] Véanse, más adelante, los fundamentos estratégicos del servicio y las propuestas de este artículo. La crítica y los deseos de reforma están plenamente justificados, y preguntas como las siguientes deben ser debatidas: ¿se necesitan en la actualidad mayores incentivos para el cumplimiento del servicio?, ¿se traducirían realmente esos mayores incentivos en un mejor sistema de defensa?, ¿es buena y fundamentable para la defensa la idea de que se debe retener por fuerza a los ciudadanos para que cumplan sus deberes?, ¿cómo puede evaluar el ciudadano común la eficiencia de sus instituciones de defensa? Esas preguntas surgen en países que están en etapa de pleno crecimiento económico y modernización sociocultural. Véase, por ejemplo, Miguel Ángel Aguilar y R. L. Bardaji (eds.), *El Servicio Militar ¿Obligatorio o Voluntario* (1992), p. 18.

[11] Mayores fundamentos sobre la virtud de la prudencia o sensatez en la política, en P. Valdivieso, "Ética Política y Éxito Moral" (1998), pp. 35-39.

tanto, las constituciones de los regímenes democráticos declaran el deber de los ciudadanos de participar en las actividades de defensa nacional, y dejan en manos del legislador la determinación de las formas y condiciones en las cuales se dará cumplimiento a ese deber[12]. En todo caso, esas formas y condiciones no pueden entrar en contradicción con el imperio de la justicia, y a la justicia corresponde la igualdad ante la ley, es decir, todos los ciudadanos están obligados por igual a participar en las tareas o deberes de bien común.

En Chile, desde el período de la independencia nacional, en la década de 1810, las Constituciones han declarado que la función de defensa del Estado recae fundamentalmente en las Fuerzas Armadas, y que los ciudadanos chilenos tienen por deber contribuir a esa tarea mediante el servicio militar[13]. La primera Ley Especial de Reclutas y Reemplazos en el Ejército y la Armada (Ley 1.362, de 5 de septiembre de 1900) estableció la modalidad de servicio militar obligatorio[14].

En la actualidad, la Constitución Política de 1980 sienta las bases del orden legal e institucional del Estado chileno[15]. Por lo tanto, en la Constitución se encuentran los fundamentos legales de las actividades de defensa y del servicio militar dentro de ellas.

En el marco de la tradición legal chilena y occidental, en su primer artículo, la Constitución de 1980 declara que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población[16]. En consecuencia, ese deber del Estado es condición necesaria para el ejercicio de los

---

[12] Las bases constitucionales declaran principios generales, orientadores, sin dispensar a quienes formen parte del poder legislativo del esfuerzo de buscar normas e instituciones específicas para la realización de esos principios generales, en el contexto de situaciones históricas y sociales que cambian.

[13] Sobre el tema, véase Carlos R. Maldonado, "El Servicio Militar en Chile: Del Ejército Educador al Modelo Selectivo, Ejército de Chile" (1997), pp. 26-45, y Carlos Molina Johnson, "El Deber Militar en Chile" (1998), p. 162 y siguientes.

[14] Sobre el tema, véase Carlos R. Maldonado, "El Servicio Militar..." (1997), pp. 29-30. Debido a las sugerencias de una misión prusiana encabezada por el capital Emil Körner y a las tensiones entre Chile y Argentina, derivadas de desacuerdos sobre demarcación de fronteras, el gobierno chileno aprobó la ley de reclutamiento obligatorio. Por lo tanto, la forma que adquirió el servicio fue una consecuencia de las circunstancias históricas de ese entonces.

[15] Véase República de Chile, *Constitución Política de la República de Chile* (1992). El Capítulo III de la Constitución, titulado "De los Derechos y Deberes Constitucionales", en armonía con los primeros artículos que tratan sobre "Las Bases de la Institucionalidad", da cuenta de una serie de derechos y deberes que han sido garantizados por el legislador a fin de propender a un orden común y a una convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad toda, incluyendo a los órganos del Estado. De hecho todos, sin excepción, individuos aislados y máximos órganos gubernamentales, deben someter su acción a lo prescrito por la Constitución, tal como lo señala el art. 6 de la misma.

[16] República de Chile, *Constitución...*, Cap. I, Bases de la Institucionalidad, p. 12.

derechos que la misma Constitución declara y garantiza más adelante, en su art. 19[17]. En el artículo 22 declara que los chilenos tienen el deber de defender la soberanía del país y contribuir a preservar la seguridad nacional. En otras palabras, los ciudadanos son co-responsables del cumplimiento de los deberes del Estado. En el mismo artículo 22, declara expresamente: "El servicio militar y las demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine". Finalmente agrega que los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente exceptuados[18].

Al reservar a la ley la determinación de la forma y los términos del servicio militar, tal como ocurre con otras múltiples materias, la Constitución de 1980, siguiendo coherentemente sus principios orgánicos sobre prerrogativas de los poderes públicos, deja en manos del legislador la función de determinar la forma concreta que ha de tener el servicio militar en Chile. Pero por razones históricas y políticas, al momento de promulgarse la Constitución de 1980 siguió en vigencia el Decreto Ley 2.306 de 1978 sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, que había sido resuelto por la Junta Militar de Gobierno integrada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Con posterioridad a 1980, el Decreto Ley 2.306 y un reglamento complementario, del mismo año, pasaron a ser expresión de la voluntad del legislador respecto a las modalidades y términos del cumplimiento del servicio militar en Chile[19].

En esa reglamentación se declara que el deber militar se extiende a todas las personas, sin distinción de sexo, desde los 18 a los 45 años de edad (art. 13). Las formas de cumplir el servicio militar son el servicio militar obligatorio, la reserva y la movilización. El servicio militar obligatorio puede cumplirse mediante la conscripción ordinaria, los cursos especiales o la prestación de servicios. Finalmente, el deber militar sólo puede cumplirse en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea (art. 163). Los chilenos que cumplen 18 años de edad deben inscribirse en los registros militares, concurrir a las convocatorias periódicas de la Dirección de Movilización Nacional, y si son seleccionados deben integrar las distintas instituciones castrenses por períodos que van de 12 a 22 meses[20].

[17] Ibídem, p. 17 y siguientes.

[18] Ibídem, p. 31.

[19] Adicionalmente, otras normas que regulan a las Fuerzas Armadas, tales como la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el Código de Justicia Militar y el Reglamento Disciplinario de las Fuerzas Armadas, contienen disposiciones destinadas a garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos que están realizando servicios en las FF. AA.

[20] Informaciones, en Carlos Molina Johnson, "El Deber Militar en Chile" (1998), pp. 163, 165.

En la década de 1990, los gobiernos chilenos han conservado la modalidad de servicio militar obligatorio selectivo, pero al mismo tiempo han introducido algunas reformas con el objeto de flexibilizarlo. Así, en 1997 comenzó a funcionar el sistema de doble convocatoria o llamado: el primer llamado está destinado a aquellos ciudadanos sin problemas ni inconvenientes para hacer el servicio; al segundo llamado deben presentarse todos aquellos que obligatoriamente han de ser sometidos al proceso de selección[21].

Finalmente, se debe agregar que una serie de normas han sido incorporadas a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y al Decreto Ley 2.306, con el objeto de garantizar los derechos de las personas que hacen el servicio militar[22]. Todo lo anterior, en conformidad con el artículo 19, inc. 3, de la Constitución Chilena, sobre igualdad de protección de la ley en el ejercicio de derechos[23].

2.3. Fundamentos históricos

Fuera de toda duda están los siguientes hechos: primero, las crisis y guerras son constantes en la historia de la humanidad, y no hay razones para pensar que son problemas sólo del pasado, puesto que no hay período histórico de la humanidad sin esos fenómenos. Segundo, en los tiempos modernos y en el período contemporáneo, el Estado nacional ha sido el único actor internacional en condiciones de garantizar la integridad de su territorio y la seguridad de su población, y no hay razones para pensar que tal situación haya cambiado[24]. Tercero, el factor humano es central en la

[21] Ibídem, p. 165, y Carlos R. Maldonado, "El Servicio Militar..." (1997), p. 128 y siguientes.

[22] Véase Carlos Molina Johnson, "El Deber Militar en Chile" (1998), p. 167. Se trata de materias como: accidentes en acto de servicio; beneficios a los que pueden optar las víctimas; regulaciones respecto a asistencia médica de cargo fiscal; derecho de los ciudadanos a retención de prerrogativas inherentes a funciones, empleos o trabajos mientras permanezcan acuartelados; manutención del derecho a matrícula y a continuar estudios en el caso de aquellos que en el momento de ser convocados están matriculados o estudiando.

[23] La Constitución declara: "Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos" (República de Chile, *Constitución...*, art. 18). También debe entenderse como el derecho de quienes hacen su servicio militar, y de los miembros regulares de las Fuerzas Armadas, de hacer uso de la garantía del recurso de protección (ibídem, art. 20, 30).

[24] La literatura que fundamenta estas afirmaciones podría llenar bibliotecas enteras; véase, por ejemplo, Robert Gilpin, *War and Change in World Politics* (1981). Tal vez el ejemplo contemporáneo más elocuente de lo que se afirma fue la falta de acción de los organismos internacionales de seguridad internacional y colectiva (ONU y OTAN) frente a los problemas de la ex Yugoslavia, hasta que los liderazgos políticos de los Estados más poderosos del mundo optaron por apoyar la intervención.

defensa, y el servicio militar es una vía que ha demostrado tener validez para adquirir ese factor humano, aun cuando las formas de reclutar personal y de hacer el servicio hayan variado en los distintos períodos históricos debido al cambio de condiciones locales, nacionales e internacionales[25].

¿Qué enseñanzas sobre formas del servicio militar ofrece la historia?

Desde la Antigüedad, el status político de los ciudadanos ha estado unido al deber de defender la comunidad, aunque las formas de cumplir ese deber han cambiado según las circunstancias históricas y las demandas hacia los sistemas de defensa. En tiempos del Imperio Romano, todo ciudadano libre estaba obligado a hacer el servicio militar, contribuyendo así a la defensa y ocupación de regiones sometidas por los romanos. Entre los germanos valía también el principio de que todo hombre libre debía hacer el servicio de guerra, y hacerlo con armamentos extraídos de sus propios medios[26]. En el orden político descentralizado de la Edad Media, el servicio militar pasó a ser parte de una relación contractual, y en consecuencia voluntario. Era un deber del vasallo o subordinado respecto al señor feudal, quien a su vez garantizaba los bienes y la vida. Al señor feudal correspondía preparar los medios de la guerra y seleccionar las personas que le acompañarían a la guerra. Una situación similar era la de los primeros ejércitos profesionales desde el siglo XIV, por estar compuestos de voluntarios que recibían salario y equipamiento[27]. Desde el fin de la Guerra de los Treinta Años (1648), los Estados absolutistas emergentes de Europa continental y Gran Bretaña comenzaron a demandar gran cantidad de contingente y a invertir cuantiosos recursos para responder a las necesidades de defensa. El período estuvo caracterizado por una persistente rivalidad de los Estados, inseguridad internacional y gran cantidad de enfrentamientos bélicos de corta duración[28].

La Revolución Francesa, el acelerado crecimiento de la población y la Revolución Industrial son procesos que, en conjunto, condicionaron el desarrollo de ejércitos nacionales numerosos y bien armados. El servicio militar obligatorio pasó a ser la forma de reclutar personal.

La Revolución Francesa difundió ideales ilustrados democráticos, valores nacionalistas y un modelo de ejército nacional compuesto por per-

---

[25] Véase G. Cerezo, F. Alviria, G. Laguna y T. G. Cano Hevia, "El Factor Humano y la Defensa" (1992), pp. 21-62.

[26] April Carter, *Liberalism...* (1998), pp. 70-71; Doug Bandow, "Unnecessary and Un-American" (1990), p. 372.

[27] Armin A. Steinkamm, "Wehrpflicht" (1995), pp. 907-912.

[28] Bruce Porter, *War and the Rise of the State* (1994), pp. 105-121.

sonal reclutado de todos los sectores sociales[29]. El ejército francés se convirtió en el espejo de una sociedad que demandaba la participación de todos los ciudadanos en sus instituciones comunes. Pasó a ser una encarnación de los valores revolucionarios democráticos[30].

La superioridad del modelo de ejercito francés, en comparación con los ejércitos profesionales del período del absolutismo, forzó a reformas militares en otros países europeos[31]. Por otra parte, la revolución industrial y el acelerado crecimiento demográfico de los siglos XVIII y XIX hicieron posible los ejércitos numerosos y bien armados. La industrialización se tradujo en la producción estandarizada de armas y municiones, y ello multiplicó la capacidad bélica de los soldados. La modernización de los transportes y las comunicaciones facilitó la movilidad de recursos materiales y de soldados para fines de defensa[32].

En el período de 1870-1914, los gobiernos de los Estados europeos, dominados por sentimientos nacionalistas y rivalidades, aumentaron el número de personal de sus fuerzas armadas y destinaron cuantiosos recursos a las industrias de armamentos. En esos tiempos, el sistema de reclutamiento prusiano, consistente en conscripción mediante servicio militar obligatorio y fuerzas de reserva, llegó a ser paradigmático dentro y fuera de Europa[33].

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, marcadamente en las dos últimas décadas, tienden a imponerse modalidades distintas a las de antaño en los sistemas de defensa de los países más desarrollados del mundo: disminución de la cantidad de personal de las fuerzas armadas, sistema de reclutamiento consistente en el voluntariado e incentivos (sueldos, capacitación, estudios de perfeccionamiento, etc.), redistribución presupuestaria en favor de los progresos tecnológicos y la formación del personal[34]. La adopción de esas medidas guarda relación con nuevos contextos nacionales e internacionales: el fin de la transición demográfica y la estabilización del crecimiento de la población; el crecimiento

[29] El gobierno revolucionario francés decretó la gran conscripción en agosto de 1793, y su ejército pasó a ser el más numeroso del mundo. Véase Bruce Porter, *War and the Rise of the State* [1994], pp. 129-134.

[30] Ibídem, p. 128.

[31] Sobre el impacto de la Revolución Francesa en las formas que adoptan las fuerzas armadas de otros países, ibídem, pp. 121-145.

[32] Ibídem, p. 149 y siguientes.

[33] Ibídem, p. 171. En el caso de Chile, una misión de oficiales prusianos encabezada por E. Körner reorganizó al Ejército.

[34] Véase Aguilar y Bardaji (eds.), *El Servicio*... (1992); Charles Moskos, "Necessary and American" (1990), pp. 385-391; D. Bandow, "Unnecessary and Un-American" (1990); Robert Arnett y M. Fitzgerald, "A Volunteer Red Army?" (1990), pp. 398-402; William E. Odom, "Transforming the Military" (1997), pp. 54-64; Benjamin S. Lambeth, "Russia's Wounded Military" (1997), pp. 86-98.

económico y atractivas posibilidades de ocupación fuera del área de la defensa; la mayor interdependencia de las sociedades y el incremento de formas de cooperación entre los Estados a nivel mundial y regional; la tendencia de disminución de los presupuestos para la defensa en la mayor parte de los países del mundo, y la universalización de pautas culturales y de valores tales como derechos humanos, pluralismo y democracia.

Estados Unidos y Gran Bretaña son países con sistemas de defensa paradigmáticos por su eficiencia y buen funcionamiento[35]. Ambos países tienen FF. AA. compuestas por profesionales reclutados voluntariamente, lo cual es coherente con su tradición histórica y su cultura cívica democrático-liberal[36]. La carrera militar ofrece incentivos materiales, buenos salarios, exige cierta formación y habilidades para ingresar a ella, y entrega una preparación de alta calidad técnica[37]. En Europa continental, la tradición política y cívica ha sido la subordinación del individuo a los intereses generales de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, desde tiempos de la Revolución Francesa han predominado ejércitos numerosos y el servicio militar obligatorio. Contemporáneamente, en las últimas dos décadas, las nuevas realidades nacionales e internacionales demandan reformas en la

[35] Véase Aguilar y Bardaji (eds.), *El Servicio*... (1992), pp. 112, 156. En el caso de Gran Bretaña, la eficiencia de las fuerzas armadas ha quedado en evidencia en diversos escenarios (Guerra de las Malvinas, participación en misiones de la NATO y actividades en Irlanda del Norte). Asimismo, la eficiencia de las FF. AA. estadounidenses se ha visto en todos los escenarios bélicos en que han participado en las décadas de 1980 y de 1990.

[36] Gran Bretaña tuvo tradicionalmente FF. AA. profesionales y un sistema de reclutamiento voluntario. Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas armadas profesionales no bastaban para cubrir las necesidades de la guerra, y el gobierno británico introdujo la conscripción obligatoria (1916). Terminada la guerra, se volvió al sistema tradicional. Durante la Segunda Guerra Mundial se volvió a introducir la conscripción obligatoria (1947). Terminada la guerra, ante el avance de Unión Soviética con sus fuerzas convencionales en Europa central y del sur, el gobierno británico consideró necesario mantener la conscripción obligatoria. En 1957 fue eliminada la conscripción forzosa y se volvió al sistema tradicional (véase Aguilar y Bardaji (eds.), *El Servicio*... [1992], p. 111). Probablemente influyó en esa decisión el hecho de que las zonas de influencia dentro y fuera de Europa estuviesen más o menos definidas, además de los avances tecnológicos acaecidos en la industria de armas. En la historia de los Estados Unidos, los sistemas de reclutamiento obligatorios también han tenido un carácter transitorio. Durante este siglo, se procedió a introducir el reclutamiento obligatorio cuando el país estaba en guerra. Al terminar la guerra de Vietnam, en 1973, se volvió al sistema de fuerzas armadas profesionales y reclutamiento voluntario (ibídem, pp. 141-142).

[37] Véanse Aguilar y Bardaji (eds.) *El Servicio*... (1992); Charles Moskos, "Necessary and American" *(*1990), pp. 385-391; Doug Bandow, "A Bad Deal, a Flawed Ideal" (1990), pp. 392-397; Robert Arnett y M. Fitzgerald, "A Volunteer Red Army?" (1990), pp. 398-402; William E. Odom, "Transforming the Military" (1997), pp. 54-64; Benjamin S. Lambeth, "Russia's Wounded Military" (1997), pp. 86-98. Véase también la ponencia de Bruce George y Robert Goldich, en Aguilar y Bardaji (eds.), *El Servicio*... (1992), pp. 111-117, 141-166.

línea del paradigma anglosajón de defensa[38]. En Francia, los gobiernos trataron de conciliar la tradición republicana con el nuevo contexto histórico emergente, ofreciendo junto a la alternativa de servicio militar obligatorio otras posibilidades para cumplir con la obligación cívica del servicio público. Pero, en 1996, el gobierno francés optó finalmente por eliminar el servicio militar obligatorio[39].

En síntesis, la historia deja una enseñanza: la defensa es una función central del Estado y un deber común de los ciudadanos. Pero las formas y modalidades de las instituciones de la defensa, en particular las formas de reclutar personal, cambian en el curso de la historia, en cuanto emergen nuevas realidades y desafíos en períodos históricos distintos.

III. EL DEBATE SOBRE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN CHILE

El seguimiento del debate público sobre el SMO demuestra que en Chile el tema ha cobrado creciente importancia en los últimos años, pudiéndose identificar de hecho tres etapas. La primera corresponde al inicio del debate, el que fue incentivado por el retorno a la democracia a comienzos de la década de 1990. Algunos de los temas que preocupaban a la ciudadanía, entre los cuales se encontraba el régimen de reclutamiento militar, se incorporan entonces a la agenda pública. Sin embargo, el debate no fue muy profundo. La segunda etapa corresponde al gobierno de Eduardo Frei. Con el Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma se constata un mayor nivel del debate, un liderazgo compartido en el tema entre el Ministerio de Defensa y el Ejército y la incorporación de sectores más amplios de la sociedad. Aquí se introdujo, entre otras medidas que se concretaron en este período, el sistema de doble llamado al SMO. Finalmente, se puede identificar a partir de 1998 una etapa de promoción del servicio militar, en parte como reacción a la muerte del conscripto Pedro Soto Tapia y a varias denuncias de maltratos y deserciones que cobraron gran notoriedad pública.

En términos generales, encuestas realizadas en el país durante 1991 mostraron una gran legitimidad del SMO en el país. De hecho, sólo un 4% de los entrevistados optó por la alternativa de eliminar esta obligación

[38] Sobre los casos de Suiza y Austria, véase Steinkamm, "Wehrpflicht" (1885), p. 911; sobre Bélgica, Holanda, Alemania y Francia, entre otros, véanse informaciones y fuentes reproducidas en Maldonado, "El Servicio Militar..." (1997), pp. 5-6, 64-127, 205-216, 218-220.

[39] Sobre el caso de Francia, véase ponencia del general Savay, en Aguilar y Bardaji (eds.) *El Servicio...* (1992), pp. 93-97, y Maldonado, "Servicio Militar..." (1997), p. 6.

ciudadana, lo cual es reflejo de que en Chile el debate no se ha centrado en mantener o eliminar el SMO, sino más bien en su forma y en su carácter obligatorio[40]. Asimismo, se constata que las organizaciones juveniles claramente han manifestado una preferencia por un servicio militar optativo —preferencia que cruza visiones ideológicas—, lo que demuestra que, más que divisiones políticas, frente al tema militar hay divisiones generacionales. Cabe destacar también que las personas con niveles educacionales más altos muestran una mayor preferencia por un servicio militar optativo[41]. Estas tendencias han sido una constante del debate nacional en esta materia durante la presente década.

3.1. Primera etapa: El SMO no se reforma

Desde 1991 y durante la primera mitad de 1992 el entonces Ministro de Defensa, Patricio Rojas, señaló que el SMO no sería derogado y que la legislación en la materia no se modificaría[42]. El Presidente de la República, Patricio Aylwin, también aseguró que su Gobierno no propondría la supresión del SMO, resaltándolo como "expresión de compromiso con la patria"[43]. Sin embargo, las juventudes de los partidos políticos y las federaciones de estudiantes continuaron planteando la necesidad de modificar el sistema[44]. Las diversas propuestas comprendían desde su derogación hasta promover un sistema de servicio social alternativo. Muchas de estas proposiciones se centraron en buscar alternativas para flexibilizar la institución y proteger los derechos humanos de los reclutas[45]. Durante este período los

[40] Por ejemplo, véase Claudio Fuentes, "¿Quieren los Jóvenes un Servicio Militar Obligatorio?" (1994), p. 30.

[41] Ibídem, p. 32.

[42] El Ministro señaló que el servicio militar se mantendría tal como estaba estructurado, y que las FF.AA. también mantendrían el esquema de su contingente, con mejorías que acentuaran el rol de capacitación laboral que reciben los conscriptos. Véanse declaraciones en *El Mercurio*, 20 de mayo de 1992.

[43] *El Mercurio*, 10 de julio de 1992.

[44] Por esta razón, parlamentarios de la Concertación hicieron esfuerzos por avanzar en un proyecto de ley en la materia. Al mismo tiempo, Francisco Estévez, representante del Instituto Nacional de la Juventud (INJ), afirmó que "se hace necesario crear alternativas (formas de flexibilizar el servicio), pues el servicio militar es una de las preocupaciones de la juventud", *La Época*, 28 de abril de 1992.

[45] Por ejemplo, la juventud de la UDI propuso que, sin alterar la existencia del SMO, se refuercen sus contenidos académicos, posibilitando que quienes lo efectúan, obtengan el título técnico-profesional, permitiéndoles tener en dos años una opción de trabajo concreta (*El Mercurio*, 13 de mayo de 1992). A su vez, la directiva de Renovación Nacional (RN) planteó que en una sociedad libre es totalmente deseable y, además, aspiración de este estamento, que el servicio militar sea optativo, pero que éste no debe concretarse mediante

líderes políticos también hicieron una serie de mociones al respecto. Inicialmente, hubo mayor énfasis en los políticos de oposición en defender la necesidad de mantener un sistema obligatorio de reclutamiento, entregando principalmente razones valóricas. Sin embargo, una vez superado este nivel del debate y con la constatación del consenso general de no dañar la capacidad de defensa del país, surgió un número mayor de iniciativas parciales, incluso desde la oposición, tendientes a flexibilizar el sistema de reclutamiento. Algunas de las iniciativas se refirieron a la reducción del período de reclutamiento o mejor adaptación a los tiempos de estudios de los jóvenes. En este sentido, se puede destacar que Ricardo Lagos planteó la propuesta de un servicio social alternativo al militar, basándose en que la juventud debería contar con espacios propios que a su vez le permitiesen retribuir a la sociedad lo que ésta le entrega, lo cual no debe acotarse solamente al ámbito estricto de las FF. AA.[46].

A pesar de la compleja situación para discutir en el país formas de flexibilización del SMO, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modificaba el DL. 2.306 sobre reclutamiento y movilización de las FF. AA. y se propuso la creación de un servicio cívico alternativo. En efecto, en mayo de 1992 los diputados Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Adriana Muñoz y Carlos Smok del PS-PPD, Andrés Palma y Aldo Cornejo del PDC, y Pedro Guzmán de la UDI, presentaron en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que posibilitaría a las personas en edad de servir a la patria optar entre el servicio militar tradicional y un servicio cívico-social[47]. El diputado socialista Juan Pablo Letelier, uno de los gestores de la iniciativa parlamentaria, afirmó que había dos razones centrales que ameritaban el proyecto. La primera eran los cambios ocurridos en el sistema internacional, los que hacían necesario modificar el sistema de reclutamiento vigente en Chile, a la luz de nuevos conceptos de seguridad. La segunda se refería a que el actual sistema de reclutamiento restringe el

medidas adoptadas unilateralmente sino que a través de un sistema latinoamericano, con el fin de no dar ventajas a otros países. Respecto al servicio cívico, señaló que era una falacia, pues, además de implicar un alto costo al Fisco, no sería una opción libre sino una obligación para todos aquellos que no cumplieran con el SMO (*El Mercurio*, 8 de junio de 1992). Por su parte, la Unión de Jóvenes Socialistas y la juventud del PDI iniciaron una campaña para recolectar 50 mil firmas con el propósito de conseguir la modificación del SMO (*El Mercurio*, 22 de junio de 1992). Por otro lado, dirigentes del comité central de la juventud socialista manifestaron que la mayor parte de los jóvenes chilenos está por que se modifique el actual SMO, por ser éste altamente discriminatorio (*La Época*, 29 de julio de 1992). Y la directiva del Partido Alianza Humanista Verde solicitó formalmente al Ministro de Defensa que el servicio militar fuese voluntario y no obligatorio (*El Mercurio*, 14 de octubre de 1992).

[46] *El Mercurio*, 11 de octubre de 1993.

[47] El proyecto, además, contemplaba extender el deber cívico a todas las personas, hombres y mujeres, desde los 18 a 45 años de edad (*El Mercurio*, 13 de mayo de 1992).

aporte a la patria de los jóvenes sólo al cumplimiento militar, desaprovechándose de esta manera un enorme potencial social[48]. Además, esta situación se veía agravada por el hecho de que son los jóvenes de estratos sociales más bajos los que efectivamente cumplen con las obligaciones militares. Por estas razones, el proyecto propuesto apuntaba a mantener el objetivo de una adecuada defensa nacional, adaptándola a los cambios internacionales de la década de 1990. Se proponía conservar un contingente mínimo adecuado y alcanzar una mayor equidad en la carga pública, lo que implicaría incrementar el 25 por ciento de jóvenes que cumplen con su obligación patria y permitir que el aporte a la sociedad de los jóvenes no se limite sólo a las esferas de la defensa nacional[49]. Posteriormente, en julio de 1992 la comisión de defensa de la Cámara rechazó por unanimidad la idea de legislar en el proyecto de ley. El diputado Ramón Elizalde rechazó la iniciativa porque adolecía de inconstitucionalidades y generaba gasto público, y el gobierno planteó que no habría modificación al SMO. El diputado Juan Pablo Letelier, en tanto, dijo que el proyecto debía ir a la sala donde se daría el debate necesario para flexibilizar el SMO[50]. Si bien el proyecto de ley no prosperó en el Congreso, sirvió para impulsar el debate en el país con miras a mejorar el sistema de reclutamiento[51].

Los Comandantes en Jefe de las instituciones armadas reiteraron con frecuencia la necesidad de mantener intacta la institucionalidad del SMO por una percepción valórica más que técnica. La Armada presentó una de las posturas más reticentes a alterar la institucionalidad vigente. Las razones fundamentales se basaban en que el número de reclutas destinados a la institución ya era bastante reducido y que el sofisticado nivel tecnológico de la institución también hacía necesario mantener intacto el sistema. El planteamiento de la Fuerza Aérea fue similar durante todo este período. Desde el punto de vista de estas instituciones, los altos niveles tecnológicos

---

[48] Juan Pablo Letelier, "Servicio Militar: Propuestas Alternativas e Iniciativas de Modernización" (1994).

[49] Véase Claudio Fuentes, "¿Quieren los Jóvenes un Servicio Militar Obligatorio?" (1994), p. 35.

[50] Declaraciones de Juan Pablo Letelier aparecidas en *El Mercurio*, 18 de julio de 1992.

[51] Por ejemplo, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal, a través de su presidente Arturo Domínguez estimó importante y urgente abrir un debate nacional sobre el SMO y sobre el proyecto de ley que creaba el servicio cívico alternativo (*La Nación*, 28 de julio de 1992). Asimismo, se presentó en el Senado un proyecto de ley que concedía amnistía a los infractores a las normas sobre reclutamiento y movilización de las FF. AA. La iniciativa fue de los parlamentarios de RN Arturo Longton, Claudio Rodríguez y Federico Ringeling (diputados) y Sergio Romero (senador). Con este proyecto se pretendía beneficiar a cuatro mil remisos procesados en la Fiscalía Naval de Valparaíso (*El Mercurio*, 11 de diciembre de 1992).

y el reducido número de reclutas no permitía introducir cambios que significaran un aumento en los presupuestos de las instituciones. El Ejército, institución que concentra la mayoría de los jóvenes que cumplen con el SMO, realizó una defensa más valórica de la institucionalidad vigente, resaltando aspectos como el de servir a la patria a través de la defensa de la nación y la soberanía del país, pero se mostró más abierto a dialogar en temas prácticos del SMO que no alteraran la seguridad nacional[52].

A principios de 1993, el Ejército anunció que junto a autoridades de gobierno se encontraba estudiando la posibilidad de acortar el SMO en su institución de 24 a 12 meses[53]. En la ocasión el Comandante en Jefe de la Iª División de Ejército, brigadier general Juan Fernando Stuven, anunció en Calama que el SMO sería acortado en un año, con el fin de permitir la especialización de los soldados conscriptos, y que la totalidad del contingente que cumplía con este deber cívico en la Iª División de Ejército tendría la posibilidad de acceder a cursos de capacitación técnica. Esta posibilidad fue categóricamente rechazada por las otras dos instituciones armadas. Por ejemplo, el Comandante en Jefe de la Fach, general Ramón Vega, señaló que a su juicio el Servicio Militar es un medio mediante en el cual muchos jóvenes chilenos que por diversas circunstancias no llegan a la educación técnica pueden acceder a un programa de perfeccionamiento técnico "que es gratuito y eficiente; donde se egresa con una profesión u oficio determinado y hasta con un cartón" y que por lo tanto "no sería conveniente estudiar una racionalización del tiempo de año y medio. En un año y medio nosotros podemos prepararlos muy bien"[54]. Posteriormente, tanto autorida-

[52] En declaraciones a *El Mercurio*, el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Martínez Busch, rechazó la iniciativa de algunos sectores políticos que planteaban la posibilidad de suprimir el SMO, por considerar que ello atentaba contra el concepto de nación (*El Mercurio*, 21 de abril de 1992). En la misma línea, el Comandante en Jefe de la FACH, Ramón Vega, sostuvo que el SMO en vigencia es un excelente camino para la juventud, por cuanto capacita y prepara a los jóvenes no sólo como combatientes sino que también como ciudadanos (*El Mercurio*, 16 de mayo de 1992). Posteriormente, el general Pinochet sostuvo en Antofagasta que el servicio militar es la forma en que se produce una mancomunión civil-militar y que, en la práctica, la unidad nacional del país está en la base misma de ese servicio (*El Mercurio*, 8 de julio de 1992). El vicecomandante en Jefe del Ejército, brigadier general Jorge Lucar, planteó en Concepción que el SMO debía mantenerse, ya que constituye un factor de integración nacional al entregar valores que son comunes a todos los chilenos. (*El Mercurio*, 10 de julio de 1992). Para mayor información en la materia, se puede consultar la tesis de Carlos R. Maldonado, "Servicio Militar en Chile..." (1997).

[53] Ejército de Chile, declaraciones hechas a *El Mercurio*, Calama, 12 de marzo de 1993.

[54] Tras el anuncio del Ejército, los Comandantes en Jefe de la Armada y de la FACH coincidieron en que sus instituciones no eran partidarias de reducir la duración del SMO *(El Mercurio*, 8 de abril de 1993).

des castrenses como gubernamentales oficializaron el anuncio de la reducción a 12 meses, informando que tal medida sería aplicada a partir del llamado de 1993[55]. De hecho, fue el mismo Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, quien señaló en una reunión de su institución que la duración del SMO sería reducida a un año a contar de 1993 y que debido a esto los planes de instrucción de los soldados habían sido reestructurados, ajustándolos al nuevo lapso, ya sea en lo referido a instrucción castrense propiamente tal como a los programas de perfeccionamiento docente. Luego de la reunión se aclaró que la rebaja de tiempo no significaba una alteración en el nivel de alistamiento o preparación de los soldados-conscriptos. La reducción fue aprobada después de un acabado estudio que se hizo sobre la materia y luego que se comprobara el mejor nivel de educación con que se acuartelan los conscriptos, en su mayor parte con cuarto año medio rendido. Unos meses más tarde, el Ministro de Defensa, Patricio Rojas, reafirmó los anuncios del Ejército, señalando que la conscripción no sería superior a doce meses a partir de 1993 y que esto se debía a un programa de experimentación que estaba llevando a cabo esa institución[56]. Estos cambios fueron favorablemente recibidos por la mayoría de los sectores de la ciudadanía e incentivaron nuevas discusiones relativas a profundizar los cambios, como la creación de un servicio cívico y la objeción de conciencia, iniciativas que sin embargo no prosperaron considerablemente durante la administración del Presidente Aylwin.

El debate nacional adquirió progresivamente un mayor nivel de complejidad. Las propuestas se centraron principalmente en tratar de crear un sistema de servicio social alternativo al SMO. Sin embargo, ninguna de ellas fue apoyada por el Gobierno; de hecho, éste declaró su intensión de no alterar la modalidad del servicio militar. Por ejemplo, el Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, precisó que el Gobierno consideraba que el servicio constituía una realidad legal de la República, y que por lo tanto el Gobierno no tenía ninguna intención de modificarlo, pero que, al mismo tiempo, había muchas maneras de perfeccionarlo[57]. En consecuencia, sólo se realizó la reducción del período de reclutamiento, iniciativa en la cual el Ejército cumplió un importante rol, con lo cual se inició una tendencia a la flexibilización del SMO sin alterar sus aspectos fundamentales.

---

[55] En declaraciones a la prensa, el general Pinochet también señaló que habría mayor incentivo para los estudiantes que cumplan con la Ley de Reclutamiento (*El Mercurio*, 3 de abril de 1993).

[56] Véanse declaraciones del ministro Patricio Rojas en *El Mercurio*, 23 de septiembre de 1993.

[57] Véanse declaraciones del Ministro de Defensa en *El Mercurio*, 16 de junio de 1994.

3.2. Segunda etapa: Flexibilización y modernización del SMO

El inicio de la segunda etapa del debate nacional sobre el SMO se encuentra en 1994 cuando el Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, anunció que realizaría un largo y amplio análisis para estructurar una política de Estado consensuada en materia de defensa, la cual incluiría el tema del SMO[58]. Diversas organizaciones juveniles y partidos de centro-izquierda incrementaron sus demostraciones así como sus propuestas relativas al SMO, constatándose en la primera mitad de ese año un leve aumento en la ideologización y divisiones políticas frente al tema. El debate se agudizó aún más a partir de la segunda mitad de 1994 debido al nuevo incremento en las denuncias por maltratos a reclutas durante el cumplimiento del SMO. Un estudio realizado por la FLACSO muestra que a pesar de que el número de denuncias realizadas entre 1991 y 1996 es bajo, 22 en total, son casos con consecuencias graves, daños físicos importantes o resultado de muerte. Asimismo, las denuncias afectan mayoritariamente al Ejército: 20 casos *versus* un caso para la Armada y otro para la Fach[59]. Estos eventos fomentaron la introducción de medidas adicionales para flexibilizar el SMO.

Durante 1995 la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados formuló diversas declaraciones acerca del tema, destacándose su confirmación de la existencia de un consenso, en todos los sectores del país, sobre la necesidad de mantener el servicio militar con carácter de obligatorio, pero adaptándolo a la realidad actual del país. De esta manera, en cumplimiento con un acuerdo de la Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa iniciaría un estudio de todo lo relacionado con el SMO, con el objetivo de informar al Congreso si era necesario o no revisar la legislación existente y para que se propusieran las medidas apropiadas y pertinentes[60]. En este

[58] El Ministro afirmó que había muy buenas razones para mantener el SMO, aun cuando el Gobierno miraba con interés cualquier iniciativa tendiente a lograr su modernización o flexibilización. A su vez señaló que el Ministerio había recibido iniciativas de parlamentarios, así como de organismos castrenses y de la Dirección General de Movilización Nacional. En tanto, Jorge Lucar manifestó que el alto mando del Ejército se encontraba estudiando la forma de flexibilizar el sistema (véanse declaraciones hechas a *El Mercurio*, 3 de agosto de 1994).

[59] Véase el artículo de Claudio Fuentes en *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad* (1996).

[60] Información sobre la Comisión de Defensa aparecida en *El Mercurio*, 13 de diciembre de 1994. En relación a los consensos nacionales, también se debe destacar que el debate en torno al SMO se agudizó durante 1994, tras el anuncio del Presidente de Argentina en orden a profesionalizar sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, en Chile se tendió a ratificar la estructura vigente del sistema de reclutamiento. El general Javier Salazar descartó que prosperaran aquellas propuestas orientadas a la creación de servicios alternativos al militar y anunció un mayor énfasis en los incentivos y en la búsqueda de retribución para los jóvenes que realicen el servicio militar en el país (*La Época*, 10 de junio de 1995).

sentido se requería introducir algunas modificaciones al sistema y establecer incentivos para hacerlo más atractivo a los jóvenes. Adicionalmente, el presidente de la Comisión, Ignacio Walker, propuso al Ejecutivo diez medidas con el fin de crear una nueva base "vocacional y motivacional" para el SMO y reimpulsar el sistema nacional de reclutamiento. La propuesta incluía: la introducción de un primer llamado convocatorio sólo para voluntarios; la posibilidad de elegir la rama de las FF. AA. y el lugar donde cumplir con la conscripción; un sistema voluntario para mujeres; reducción del tiempo de reclutamiento, así como una justa "compensación" con incentivos y premios para los jóvenes que lo realicen[61]. En tanto, el entonces Director General de Movilización Nacional, general Javier Salazar, afirmó que la posibilidad de crear servicios alternativos al militar estaba descartada, al igual que la objeción de conciencia, pero que sí se podrían introducir algunas medidas de flexibilización del SMO, ya que éste seguía siendo la mejor respuesta del Estado para garantizar la defensa en circunstancias que la paz no es regalada sino que debe conquistarse día a día. Los posibles incentivos para que los jóvenes cumplan con el servicio militar podrían ser acceso a facilidades de crédito fiscal para los estudios e incluso subsidios habitacionales[62].

Progresivamente durante 1996, el ministro Pérez Yoma manifestó la decisión gubernamental de estudiar formas de flexibilizar el SMO vigente en el país. El seguimiento de la postura del ministro Pérez Yoma muestra que inicialmente manifestó una clara decisión de mantener el SMO tal como ha funcionado en el último siglo, dando razones de carácter político y de seguridad nacional. Según explicó, el Ejecutivo había tomado una importante cantidad de medidas para mejorar y flexibilizar el sistema, las que habían redundado en una conscripción "extraordinariamente buena", siendo un proceso que estaba a punto de terminar y que no había presentado dificultades. Adicionalmente, el Ministro de Defensa afirmó que el Gobierno no promovería modificaciones a la ley de reclutamiento con el fin de incrementar las penas a aquellos jóvenes que no concurran a los cuarteles a realizar el SMO. A continuación se puede apreciar, en las declaraciones a *La Nación* en abril, un hecho relevante, cuando tras la discutida aprobación en la Cámara de Diputados del informe que recomienda mantener el SMO, el Ministro de Defensa señaló que había que ver cómo se podía avanzar más hacia un voluntariado o analizar la posibilidad de una profesionalización y de la objeción de conciencia. Posteriormente, las primeras manifesta-

[61] Véase *La Época*, 4 de julio de 1995.

[62] Estas declaraciones del general Salazar fueron hechas a *El Mercurio*, 16 de marzo de 1995.

ciones públicas de un cambio de postura se observan en las declaraciones hechas a *El Mercurio*, ocasión en la cual se anunció la implementación de un sistema de doble llamado al SMO, con lo cual se esperaba que las 33 mil plazas se llenarían con voluntarios. Finalmente, el ministro Pérez Yoma anunció la implementación de una serie de nuevas medidas destinadas a flexibilizar el SMO y lograr, de esta manera, armonizar las nuevas realidades sociales y culturales del país. Las medidas a implementar eran las siguientes: doble citación, reducción y readecuación de períodos, cursos especiales, compensaciones e incentivos, capacitación laboral[63].

La publicidad del debate nacional sobre el tema tuvo un incremento considerable durante 1996. Una de las principales causas de esto radicó en el alza de denuncias de maltratos a los reclutas en los cuarteles. En este agudo período de debate, la Cámara de Diputados aprobó, con los votos en contra del Partido por la Democracia, el informe de su Comisión de Defensa, en el cual se reiteraba la necesidad de mantener la obligatoriedad del servicio, pero introduciéndole algunas modificaciones destinadas a flexibilizar el actual sistema y crear algunos incentivos a cumplir con este deber. La Cámara acordó que la Comisión de Defensa, en un plazo de 120 días, evacuara un nuevo informe sobre una eventual profesionalización del contingente y el consiguiente tránsito hacia una conscripción voluntaria, y analizara la posibilidad de incluir la denominada "objeción de conciencia" como causal de exclusión del cumplimiento del SMO y, además, considerara el perfeccionamiento de instancias para cautelar eficazmente los derechos de los reclutas[64]. Por su parte, el ministro Pérez Yoma señaló que se debía mejorar la imagen y percepción que los jóvenes tienen del SMO. Algunas medidas para lograrlo serían el sistema de doble citación. Asimismo, dijo que debía analizarse el tema de la objeción de conciencia y manifestó que se debía mantener la política de beneficios en las condiciones de vida del conscripto, y que se deseaba aumentar los programas de capacitación laboral durante la conscripción[65]. El análisis de aspectos del SMO como la "profesionalización" del contingente y la objeción de conciencia, entre otros, fue postergado para estudios futuros.

---

[63] La primera postura se puede apreciar en *El Mercurio*, 7 de marzo de 1996. La evolución de esa postura pública sigue en marzo de 1996, fecha en que también se puede constatar la petición de los presidentes de las juventudes Vicente García (socialista) y Nolberto Díaz (demócrata cristiano), quienes junto al diputado del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, solicitaron al Gobierno que flexibilice el SMO (*El Mercurio*, 23 de marzo de 1996; *La Nación*, 5 de abril de 1996; *El Mercurio*, 19 de abril de 1996; y *El Mercurio*, 6 de septiembre de 1996).

[64] *El Mercurio*, 4 de abril de 1996.

[65] Ibídem.

El Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, manifestó que se requería discutir estas materias en el futuro. Por el momento reiteró la necesidad de mejorar el SMO y el perfeccionamiento de los jóvenes que cumplían con éste. En abril de 1996, el Ministro anunció la implementación de un sistema de "doble llamado", el cual sería un paso significativo en este sentido. Esta modalidad contempla un primer llamado para aquellos que voluntariamente desean cumplir con su servicio militar. A continuación se realizaría un segundo llamado, esta vez obligatorio, como en la modalidad tradicional, para completar el número de conscriptos determinado como necesario, si éste no es alcanzado con el primer llamado. Posteriormente se anunciaron medidas para flexibilizar el SMO. Éstas incluían: reducción y readecuación de los períodos, cursos especiales, compensaciones e incentivos como mayores facilidades de traslado, y capacitación laboral[66]. En términos generales, las modificaciones fueron favorablemente acogidas por una amplia gama de sectores en el país[67]. Lo cual no significó que varias organizaciones juveniles siguieran solicitando cambios más de fondo en el sistema[68]. De hecho, diversos sectores propusieron alternativas para garantizar la seguridad de los reclutas[69], al mis-

[66] El ministro Pérez Yoma anunció cuatro modificaciones esenciales para incentivar el cumplimiento del SMO, indicando que se impulsaría una mejor política informativa, mayores "compensaciones y retribuciones", un doble sistema de convocatoria y una readecuación de los períodos de cumplimiento. En la ocasión, también se explayó a fondo sobre las últimas polémicas en torno al SM, como las denuncias de malos tratos, suicidios y presuntas desapariciones. Al respecto, entregó una inédita encuesta donde se determinaba objetivamente la dimensión que tiene el maltrato durante el reclutamiento y anunció mayores controles para terminar con esta práctica, que, en todo caso, señaló, no es generalizada (*La Segunda*, 11 de febrero de 1997).

[67] Como un verdadero avance para perfeccionar el SMO calificaron dirigentes de las juventudes políticas las innovaciones implementadas por el Gobierno al sistema del SMO. El presidente de la juventud de la UDI, Jacinto Gorosabel, se mostró muy de acuerdo con lo manifestado por el Gobierno. En tanto el presidente de la JDC, Patricio Walker, también se declaró satisfecho por los anuncios formulados por el Ministerio de Defensa y coincidió con las declaraciones de Gorosabel, en el sentido de que este conjunto de medidas eran una respuesta verdadera a las inquietudes planteadas por las juventudes políticas y federaciones de estudiantes *(El Mercurio*, 12 de febrero de 1997). Las principales manifestaciones en contra provinieron de la directiva de la juventud del PC y de miembros de la Corporación de Derechos Juveniles (Codeju), quienes manifestaron su rechazo a las iniciativas del Ministerio. Estas propuestas, a juicio del dirigente, no contemplaban tres temas fundamentales: la voluntariedad del servicio, la creación de un servicio alternativo al militar y la construcción de un organismo, ajeno a la institución, que fiscalice las denuncias de maltrato (*El Mercurio*, 14 de febrero de 1997).

[68] Así se puede apreciar en un artículo de *Las Últimas Noticias*, 2 de marzo de 1997.

[69] Por ejemplo, una serie de medidas para evitar los maltratos a quienes cumplen el SMO dieron a conocer Leonardo González, director del INJ, Gabriel Pozo y Rodrigo Leighton, dirigentes del Codeju, y familiares de reclutas fallecidos en el cumplimiento de la conscripción durante 1996. Entre las medidas para evitar estos hechos González informó que su institución había iniciado gestiones orientadas a solicitar la incorporación de civiles en la comisión del Ministerio de Defensa que investiga los casos de maltrato en las instituciones castrenses (*El Mercurio*, 21 de marzo de 1997).

mo tiempo que continuaron algunas manifestaciones en demanda de cambios más de fondo[70].

La primera convocatoria de "doble llamado", realizada en 1997, fue catalogada como exitosa por las autoridades. De hecho, el número de jóvenes que se presentó en forma voluntaria para cumplir con el servicio militar superó las expectativas de las autoridades gubernamentales[71]. El éxito del doble llamado de 1997 comprobó, además de su legitimidad, primero, que el servicio militar representa una alternativa real de perfeccionamiento y compromiso social para un cierto sector de la juventud, siendo la inscripción voluntaria de jóvenes mayor en sectores que tienen condiciones sociales más bajas, y, segundo, el hecho de que al mismo tiempo la inscripción de los jóvenes de estratos sociales altos fuera muy bajo, incluso nula en una de las comunas más ricas del país como la de Las Condes, evidenciaba que las diversas posiciones frente al tema del SMO cruzan las diferentes posturas políticas existentes en el país.

Durante el segundo semestre de 1997, un número de casos de abusos en los cuales estaban involucrados conscriptos mantuvo la atención del público sobre el tema del SMO. En este sentido, por ejemplo, se pueden destacar principalmente la muerte de Pedro Soto Tapia, en San Felipe, el suicidio de Yamir Méndez y algunas deserciones de reclutas. Adicionalmente, la Dirección General de Movilización rechazó la petición del primer grupo que buscaba eximirse del cumplimiento de este servicio a través de la objeción de conciencia[72]. Hacia fines de 1997, en una reunión con jóvenes de La Granja, el Presidente Eduardo Frei afirmó que no era posible profesionalizar el SMO "porque eso significaría aumentar significativamente el

---

[70] Más de un millar de personas respondió al llamado de organizaciones juveniles y se hicieron presentes en una pacífica marcha de rechazo al SMO. Portando pancartas, los manifestantes, en su mayoría escolares y universitarios, recorrieron la Alameda entre la Plaza Italia y calle Miraflores. El presidente de la FECH, Rodrigo Rocco, dijo que "la medida que tomó el ministro Pérez Yoma de plantear que con el sistema diferido de postulación estaba todo solucionado, es eludir el debate de fondo" (*Las Últimas Noticias*, 5 de abril de 1997).

[71] Los altos niveles de voluntarios detectados en la primera semana de funcionamiento del sistema de "doble llamado" al SMO se habrían confirmado en la segunda y tercera semana de convocatorias, aseveró el ministro Pérez Yoma (*El Mercurio*, 20 de marzo de 1997). El Subsecretario de Guerra, Mario Fernández, reiteró que si bien estaba abierto al debate público en la materia, el Gobierno tenía claro que su carácter obligatorio no será modificado en el corto plazo. Junto al Director de Movilización, brigadier general Carlos Molina Johnson, Fernández entregó los resultados de la aplicación del sistema de doble llamado en el proceso de conscripción, el cual, dijo, superó todas las expectativas del Ministerio de Defensa (*La Época*, 5 de abril de 1997).

[72] En uno de los primeros casos, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto por Roberto Martínez, quien había invocado la objeción de conciencia con el fin de no realizar el SMO. El tribunal de alzada desestimó tal argumentación (*La Época*, 15 de abril de 1997). Posteriormente, un

gasto en Defensa", y que, debido a que el país no estaba en condiciones de incrementar el gasto en esta área, se había ideado un sistema intermedio para estimular a quienes deseen realizar voluntariamente el servicio militar[73].

3.3. La tercera etapa: Los temas del futuro debate

Finalmente, la tercera etapa que se puede identificar comienza en 1998, cuando, tras la notoriedad del tema en 1997, el Ministerio de Defensa y la Dirección de Movilización Nacional iniciaron una nueva campaña para promover el SMO, buscando incrementar la aceptación del llamado voluntario. La campaña —emitida por radio, prensa y televisión— tuvo el lema "El Servicio Militar: Tu Oportunidad de Crecer". El Subsecretario de Guerra, Mario Fernández, aseveró que se optó por realizar otra campaña publicitaria ya que las anteriores habían demostrado que el llamado al Servicio Militar había sido más efectivo[74]. También destacó que durante 1997 "más del 39% del personal fue voluntario"[75]. Esta iniciativa encontró cierto rechazo en algunas organizaciones de jóvenes. Por ejemplo, la Juventud del Partido Socialista (JS) manifestó su rechazo a la campaña del Gobierno a través de Álvaro Elizalde, presidente de la JS, quien afirmó que ésta "no cuenta con el aval ético necesario". Ello porque aún no se aclaraba la muerte de Pedro Soto, lo que, "junto a numerosos hechos de tortura y maltrato a reclutas", constituye una muestra de que las instituciones castrenses "no están en condiciones de garantizar la seguridad de los conscriptos". Asimismo, Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la Juventud de la Democracia Cristiana (JDC), respaldó los anuncios del Gobierno, "ya que como juventud siempre hemos planteado que es necesario que durante el servicio

grupo de trece o catorce jóvenes presentó una declaración jurada ante notario manifestando su objeción de conciencia contra el SMO, ante la Dirección General de Movilización y Reclutamiento, mediante una apelación al derecho a libertad de conciencia y de pensamiento consagrado en el artículo 19 de la Constitución (*El Mercurio*, 29 de agosto de 1997). En respuesta, la Dirección General de Movilización rechazó la solicitud de eximirse del cumplimiento del servicio militar a este primer grupo de la organización "Objeción de Conciencia Ni Casco Ni Uniforme". El abogado del Codeju, Hugo Gutiérrez, en representación del grupo de objetores, sostuvo que presentarían una nueva solicitud al Ministerio de Defensa (*La Nación*, 30 de octubre de 1997).

[73] Reportaje de la visita en *Las Últimas Noticias*, 21 de noviembre de 1997.

[74] El Ministerio de Defensa y la Dirección de Movilización Nacional lanzaron una campaña comunicacional destinada a promover el SMO entre los jóvenes, fue hecha pública al darse por inaugurado el proceso de reclutamiento de 1998 (*El Mercurio*, 17 de febrero de 1998).

[75] Ibídem.

se mejore la educación de los enrolados y se les dé capacitación laboral". José Sabat, también vicepresidente JDC, reconoció buenas intenciones en la nueva propuesta gubernamental. No obstante, pidió "un cambio en la malla curricular porque hoy prima la doctrina de seguridad nacional"[76]. Más aun, dirigentes de las juventudes de los partidos PS, PDC y PPD, en conjunto con el presidente del Codeju, Gabriel Pozo, criticaron duramente el SMO, debido a que éste —según señalaron— se basa en los mismos principios que rigen a las FF. AA., es decir, "prepara no sólo para luchar en contra de un posible ataque extranjero, sino que además para atacar a sus propios compatriotas"[77].

En 1998 también se registraron algunos casos de conscriptos que fallecieron durante el cumplimiento de su servicio militar o de jóvenes que desertaron, por ejemplo el caso del Regimiento Sangra, con lo cual se mantuvo el interés de la opinión pública en el tema[78]. A pesar de este escenario, el Ministro de Defensa, Raúl Troncoso, informó que el porcentaje de conscriptos voluntarios para la promoción de 1998 alcanzó el 42%, lo cual fue catalogado como un "avance bastante grande"[79].

En marzo de 1998, la Cámara de Diputados propuso estudiar la posibilidad de que el servicio militar se realizara en Carabineros de Chile[80], iniciativa que no prosperó durante 1998 debido a que se realizaron otros planes de modernización de la institución policial. El segundo semestre se inició con la negativa del Subsecretario de Guerra, Mario Fernández, de crear un servicio militar alternativo o de reducir el actual SMO a seis meses[81]. Esta tendencia fue reforzada unos días más tarde por el propio

---

[76] *La Época*, 17 de febrero de 1998.

[77] *La Nación*, 18 de marzo de 1998.

[78] Por parte de los jóvenes, sin embargo, pareció persistir la desconfianza hacia el SMO. Por ejemplo, la Corporación de Derechos Juveniles (Codeju, organismo que desde 1990 ha planteado la idea de incorporar la llamada objeción de conciencia), a través de su presidente, Gabriel Pozo, explicó que más allá de que el Gobierno y el Ejército lancen campañas sobre nuevas ventajas materiales para los reclutas como becas, sueldo y capacitación, aún quedaba por resolver el problema del maltrato físico y síquico de los conscriptos. El Codeju, por otra parte, hizo presente que entre 1996 y 1997 recibió alrededor de 537 denuncias relacionadas con maltratos durante el proceso de reclusión y cumplimiento del SMO (*La Nación*, 18 de febrero de 1998).

[79] Declaraciones hechas a *El Mercurio*, 17 de marzo de 1998.

[80] El Gobierno estudió una modificación a las normas que rigen el SMO, la que permitiría que un importante grupo de carabineros pudiera realizar mayor patrullaje en las calles. La propuesta contemplaba que los jóvenes pudiesen optar por hacer su SMO en Carabineros cumpliendo labores de tipo administrativas y burocráticas (*El Mercurio*, 6 de mayo de 1998).

[81] Durante un foro panel organizado por el Codeju, donde se trató la problemática de la función del servicio militar en una sociedad democrática, el Subsecretario de Guerra, Mario Fernández, reiteró el rechazo a la posibilidad de un servicio militar alternativo o de reducir la conscripción a seis meses (*La Nación*, 16 de julio de 1998).

Ministro de Defensa, Raúl Troncoso, el cual manifestó el rotundo rechazo de las autoridades a considerar la cláusula de conciencia. El Ministro descartó considerar en el presente o futuro mediano la puesta en vigencia de la cláusula de conciencia para quienes no desean hacer el SMO, afirmando: "No y no. No se va a considerar", cuando se le insistió sobre el tema, agregando que "no está en tabla" la instauración de un servicio paralelo al SMO, de acuerdo a lo sugerido por parlamentarios y dirigentes juveniles[82]. El Gobierno reforzó su postura con una nueva campaña publicitaria del SMO a principios de 1999[83]. A pesar de la insistencia del diputado Juan Pablo Letelier[84], junto a algunos sectores, de reformular el SMO, lo más concreto que se desprende del seguimiento del tema en esta última etapa es la importancia de dos temas pendientes: 1) el procedimiento para las denuncias de maltratos al interior de los cuarteles, y 2) la objeción de conciencia.

IV. IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL SMO

4.1. El significado estratégico de la conscripción obligatoria en Chile

El SMO en Chile, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, recluta aproximadamente 30.000 varones por año, de los cuales unos 27.000 reconocen cuarteles en el Ejército, unos 2.000 en la Armada y unos 1.000 en la Fuerza Aérea[85]. El contingente que ingresa al Ejército representa casi el 50% de los efectivos de esa institución, concen-

[82] *La Nación*, 20 de julio de 1998.

[83] Un plan piloto de comunicaciones, destinado a mejorar la imagen del SMO, pondrá en práctica la FACH a partir de un trabajo de diagnóstico y propuesta hecha por alumnos de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Santo Tomás, que también son miembros de la FACH y que fue premiado por el Ministerio de Defensa. El trabajo de los estudiantes propone un nuevo diseño comunicacional basado en un mayor acercamiento de las unidades militares con la comunidad, además de difundir videos que muestren las actividades reales de los conscriptos durante el SMO (*La Nación*, 18 de enero de 1999).

[84] La urgente necesidad de legalizar el doble llamado al SMO —el primer llamado, de carácter voluntario— y de establecer nuevas causales de exención, entre ellas la de ser estudiante o sostén económico de la familia, planteó el diputado PS Juan Pablo Letelier. "Le estamos haciendo un grave daño a nuestra juventud. Nos parece un contrasentido que, en un país donde hablamos de reforma educacional, mantengamos un sistema que les niega el único instrumento que tienen para superarse y desarrollarse plenamente", expresó. Aclaró que la idea no era atacar o denostar a las instituciones militares, ni menos alejar a los jóvenes de las Fuerzas Armadas, pues ellos no son responsables directos de este tema (*La Nación*, 17 de marzo de 1999).

[85] Véase International Institute of Strategic Studies, *The Military Balance, 1998/9*.

trados principalmente en los regimientos de infantería, aunque están presentes en todas las unidades de ese servicio. En conjunto, el contingente del SMO constituye casi el 30% del personal en uniforme de las FF. AA. en todo momento. Hasta hace dos años, el período de reclutamiento era de 18 meses en el Ejército y de 24 meses en las otras ramas, a contar de entonces se redujo a 14 meses en el primero, con una sola fecha de ingreso, a principios de cada año. El SMO está regido por el Decreto Ley No. 2.306 sobre Reclutamiento y Movilización de las FF. AA. del año 1978. En su contenido se especifica la obligación de todos los chilenos de ambos sexos, de 18 a 45 años, de cumplir el deber militar (art. 13), que se entiende como el cumplimiento del SMO, la participación en la reserva y en la movilización en caso de guerra. La mujeres están exceptuadas del deber militar en tiempos de paz y su inscripción en los cantones es de carácter voluntario (art. 19)[86].

En 1996 se introdujeron algunas modificaciones en la modalidad de llamados, como se indicó anteriormente, permitiendo llenar las vacantes con voluntarios y, si faltan puestos por completar, se llenan con llamados obligatorios. Con esto se cumple el principio de "voluntario hasta donde sea posible, obligatorio hasta donde sea necesario". Esta flexibilización del SMO, como se indicó más arriba, busca hacerlo más eficiente como proceso desde el punto de vista vocacional, dejando dentro de las filas al máximo de los que desean realizarlo. De acuerdo a una investigación reciente, la voluntariedad en 1997, por región del país, fue la siguiente: Norte, 49,7%; Centro-Norte, 43,6%; Región Metropolitana, 33,5%; Centro-Sur, 43,9%; Sur, 21,2% y Austral, 15,8%[87].

Las Fuerzas Armadas, lideradas por el Ejército, han argumentado persuasivamente que el SMO es necesario para la defensa militar del país. Aunque no se conocen documentos que sustenten en forma pormenorizada este aserto, reiteradas discusiones en el seno de la comunidad de la Defensa han permitido clarificar un número de razones que fundamentarían su permanencia y necesidad.

Primero, el Ejército es el principal operador del SMO y por ende el más interesado en su permanencia, porque su misión requiere de una masa de combate suficientemente grande que se interponga entre los posibles adversarios territoriales y sus objetivos históricos, esto sería especialmente válido en los extremos del país donde existen grandes espacios abiertos y escasas fronteras naturales[88]. La disuasión que producen usualmente las

[86] *Diario Oficial*, Santiago, 12 septiembre de 1978.
[87] Carlos R. Maldonado, "El Servicio Militar..." (1997), p. 174.
[88] Emilio Meneses, "Chile: Percepción de Amenazas y Política de Defensa" (1993).

fuerzas de tierra es por interposición. Un factor importante para que el eventual adversario pueda ser efectivamente disuadido es que advierta que su pretendida víctima tiene la resolución de no permitirle el paso, negándole el acceso a su objetivo[89]. La escasez relativa de recursos materiales en Chile, unida a la falta de profundidad estratégica y excesiva longitud, ha llevado a que la solución fuese crear un dispositivo militar de tierra intensivo en mano de obra, que por razones culturales, sociológicas e históricas tiene justificada fama de ser valiente y abnegado.

Segundo, obligado por la geografía, el Ejército tiene un despliegue permanente, principalmente concentrado en las I, II y XII regiones, que constituyen los teatros de operaciones Norte y Austral, zonas con relativamente pocos habitantes y muy distantes de la base poblacional del país. En una contingencia bélica de corta duración, las fuerzas de tierra tendrían que sostenerse basadas únicamente en sus medios en presencia, puesto que no habría forma posible de transportar tropas a tiempo y en cantidad desde el centro del país. Lo anterior refuerza la idea de que debe haber allí, en los extremos del país, contingentes numerosos y autárquicos en lo operacional; en ese contexto el servicio militar cumpliría un papel insustituible en las actuales condiciones.

Tercero, las FF. AA. han adherido al principio de que el SMO prepara a contingentes que luego de realizar su período en uniforme pasan a integrar la Reserva, la cual podría ser movilizada en caso de necesidad. En otras palabras, habría un potencial humano al cual se puede recurrir, el que no existiría de no ser por el reclutamiento obligatorio. Más aún, sigue el raciocinio, esta masa de soldados-ciudadanos ha recibido instrucción en valores que les son útiles luego en la vida civil, como obediencia, disciplina, aseo personal, etc.

Cuarto, desde su adopción en 1900, el SMO ha probado ser un efectivo medio de la defensa nacional. Las crisis fronterizas de 1901, 1958, 1974 y 1978 fueron, entre otras cosas, acompañadas de movilizaciones que terminaron por disuadir a los eventuales rivales, y el *statu quo* territorial y la paz internacional fueron debidamente preservados. Al tenor de los resultados, reflexionan algunos uniformados, esta institución militar casi centenaria, hoy administrada por la Dirección General de Movilización Nacional, ha dado pruebas de su efectividad, por lo que no habría razones de peso para abandonarla o modificarla radicalmente, y así lo han estimado los dos últimos gobiernos electos.

---

[89] Robert Pape, "Coercion and Military Strategy: Why Denial Works and Punishment Doesn't" (1992), pp. 423-475.

Y quinto, aunque no es una razón estrictamente militar, el Ejército, señalan con razón diversas voces entre sus filas, no cuenta con un presupuesto para implementar un esquema enteramente voluntario, que significaría, entre otras cosas, ofrecer condiciones salariales y materiales atractivas a un contingente de jóvenes que, siendo probablemente menos numeroso que los reclutas forzosos, tendrían que cumplir similar cometido por un período posiblemente más largo de tiempo[90].

A pesar de las razones arriba indicadas, el SMO chileno presenta serias interrogantes en el terreno estratégico-militar. En primer término, con la presente modalidad de 12 y 14 meses de conscripción y de ingreso masivo a comienzos del año se produce una notable vulnerabilidad en la capacidad defensiva que otorga el SMO. Con anterioridad a esta disposición, bajo el esquema de 18 meses y con ingresos escalonados a lo largo del año, había siempre una fuerza entrenada y disponible. En la actualidad existe un bajo nivel de capacidad militar de los reclutas al iniciar su entrenamiento a principios de año (febrero a mayo), para ir aumentando progresivamente hasta alcanzar un óptimo entre septiembre y diciembre. Es conocido que los reclutas tienen menos productividad militar que los soldados regulares. Según un estudio reciente sobre el impacto del tiempo de entrenamiento en la efectividad militar, la valoración de un conscripto está en relación al tipo de equipo que opera y de esto dependerá su curva de aprendizaje[91]. Por ejemplo, si esta curva se "aplica en Europa, el típico conscripto que está, en promedio, al sexto mes de su curva de aprendizaje, sería, en promedio, un tercio de efectivo del típico soldado regular en su nivel de 21 meses". Al ingresar, un recluta infante tiene una ponderación negativa como combatiente (-7%), es decir es más una carga que un aporte. A los 12 meses de ingresado el soldado infante —voluntario o conscripto— tiene el 50% de la capacidad militar de un soldado que ya ha servido 48 meses, que contrasta con un 42% de capacidad de un tripulante de tanque o un 35% de un especialista en alimentación[92]. Con todo, a pesar de los problemas que se indicarán más adelante, el infante es el que avanza más rápido en su preparación.

Las lecciones que dejan este tipo de estudios son tres: primero, la escasa capacidad militar de los reclutas en sus primeros meses en uniforme; segundo, el creciente impacto negativo en el poder agregado de combate

[90] Un desafío interesante es evaluar cuánto cuesta en términos monetarios desarrollar un sistema enteramente voluntario y con la cantidad de personal que dicho esquema requiere en comparación con el actual.

[91] Nicholas Owen, "How Many Men Do Armed Forces Need? An International Comparison" (1994), pp. 286-287.

[92] Ibídem, p. 287.

general de las fuerzas de tierra al reducirse la conscripción por debajo de los 18 meses, y, tercero, los bajos niveles de apresto en determinados períodos del año al incorporar a todos los llamados de una sola vez. Para el caso chileno, usando los datos del estudio antes citado, se podría inferir que en la primera mitad del año el aporte militar individual de los reclutas es muy bajo (13%) en relación a un soldado profesional, para fluctuar entre un 33% y 50% entre julio y febrero del año siguiente. Con el sistema anterior, 18 meses y escalonado, se podría presumir una fuerza de más de 30.000 conscriptos con un 50% de capacidades respecto del personal de planta. Proyectado sobre el Ejército, en la modalidad anterior, los reclutas que representaban un 50% de la fuerza aportaban un 25% de la capacidad de combate de la institución. En la presente modalidad, 14 meses e ingreso masivo a inicios de año, representado el SMO un 50% de la fuerza, pero con un tercio de capacidades respecto del personal de planta, tenemos que aportan un 16,5% de la capacidad de combate en condiciones óptimas y, *ceteris paribus,* la capacidad total de combate de este servicio armado se reduce en un 8,5% entre agosto y febrero, y se reduce en promedio a un 16,75% en los meses de febrero a julio cuando los reclutas sólo tienen un 16,5% promedio de las capacidades del personal de planta.

¿Dónde son necesarios los soldados reclutas? El objetivo principal del reclutamiento militar es proveer personal en suficiente número en aquellas posiciones que sólo requieren conocimientos básicos y donde los soldados profesionales son demasiado costosos. Esos cargos son labores de apoyo y mantenimiento en las fuerzas de blindados, artillería, logística y sanidad. Pero es en la infantería donde son más requeridos en cantidades significativas. De acuerdo al International Institute of Strategic Studies (IISS), el Ejército chileno tiene 25 regimientos de infantería de un total 52 regimientos, ellos comprenden cerca de 900 efectivos cada uno en promedio, de los cuales el 60% son reclutas[93]. Esto totalizaría unos 13.500 conscriptos en dichos regimientos, a los cuales habría que sumar unos 3.500 conscriptos en los regimientos de caballería blindada que cumplen funciones de apoyo como infantes y otros 2.500 infantes de marina en la Armada, totalizando aproximadamente 20.000 efectivos reclutas infantes, es decir dos tercios del total de conscriptos que anualmente reconoce cuarteles.

A la infantería, sin duda el oficio de armas más peligroso, le toca el grueso del combate y de las bajas. “Si los potenciales reclutas conocieran sus probabilidades, lo más difícil sería enganchar a cualquiera en la infantería. Durante este siglo las probabilidades de servir en la infantería en com-

[93] I.I.S.S., *The Military Balance, 1998/99,* p. 216.

bate y escapar sin heridas ha sido menor de una en tres"[94]. Con un 2% de pérdidas diarias promedio en un enfrentamiento regular, las probabilidades de un infante de mantener unidos su cuerpo y alma después de 100 días de combate son prácticamente nulas[95]. "Gane o pierda, la infantería sufre la mayoría de las bajas"[96]. La experiencia indica que una división que ha perdido el 30% de sus soldados muestra serios signos de desintegración, ya carece de más del 66% de sus infantes y de continuar el combate perderá rápidamente toda utilidad militar porque empezarán a caer sus técnicos y líderes. De hecho, al ritmo de 2% de pérdidas diarias, luego de dos semanas de acción (28% de bajas) una división de ejército debería ser retirada del frente por lo menos durante un mes para recuperar a sus heridos, incorporar reemplazos y reparar vehículos[97]. Las buenas noticias para nuestros conciudadanos que hacen el servicio militar como infantes es que ya quedan pocos tipos de guerra regionales que duren más de una semana.

El fin del reclutamiento entre varios los miembros de la OTAN y, prontamente, en Rusia, es un interesante indicador de cambios que también afectan a nuestra región latinoamericana. Una vez terminada la Guerra Fría algunos miembros de la alianza atlántica abandonaron el SMO, sumándose así al grupo anglosajón (EE. UU., RU y Canadá). Los primeros en hacerlo fueron Bélgica (1994) y Holanda (1995), luego más recientemente Francia y España han anunciado el fin de sus reclutamientos forzosos. Rusia ha anunciado para el año 2003 unas FF. AA. enteramente voluntarias. Es interesante destacar que ningún país de Europa Central, sea neutral o no, ha anunciado el término de la conscripción.

Warner y Asch han argumentado persuasivamente que, entre otras cosas, la conscripción obligatoria es más común en los países que perciben amenazas importantes a la seguridad nacional. La lógica de este argumento es militar, pero con un sustrato de carácter económico. Sobre cierto nivel en cantidad, la fuerza de voluntarios sólo aumenta en número a costos exponenciales. Hay que aumentar los sueldos en sobremedida para reclutar más soldados; entonces, para continuar agregando fuerzas, se hace preciso recurrir a la conscripción. Concluyen que: "nuestro análisis indica que el caso por la conscripción se fortalece cuando la demanda por defensa es alta, como en tiempos de extremas y permanentes amenazas a la seguridad nacional. También demuestra que es más probable que la conscripción sea el

[94] James Dunningan, *How to Make War* (1993), p. 301.

[95] Nótese que un 2% de las pérdidas en una división de 10-12 mil hombres implica bajas diarias del 10-20% para los 1.000 a 2.000 efectivos que están en contacto directo con el enemigo, la mayoría de los cuales son infantes.

[96] James Dunningan, *How to Make War* (1993), pp. 29-30.

[97] Ibídem, pp. 503-505.

método de reclutamiento más eficiente cuando aumenta la elasticidad de la demanda por defensa, y la creciente elasticidad de demanda por defensa puede estar sistemáticamente relacionada al grado de amenaza a la seguridad"[98]. Lo anterior parece estar respaldado por la situación de los miembros de la OTAN. Los EE. UU., el Reino Unido y Canadá, por ser los menos amenazados por la ex URSS, abandonaron tempranamente el SMO. Terminada la Guerra Fría, le siguieron pronto los que tenían bajo porcentaje de conscriptos y sentían menos comprometida su seguridad, como Bélgica y Holanda, y le seguirán luego Francia (2002) y España (2004). Alemania, por razones que no son enteramente militares, ha decidido, en una reciente evaluación, mantener la conscripción, entre otras cosas porque el 60% de los enlistados voluntarios han sido conscriptos previamente, mecanismo que no operaría sin el reclutamiento obligatorio[99]. Quienes parecen más lejanos a dejar el sistema de SMO son Grecia y Turquía, que mantienen una situación de tensión estratégica fronteriza de proporciones desde 1974. No es sorprendente que ambos países mantengan a su vez los niveles más altos de conscripción en la alianza en relación al cuadro permanente[100].

Si aplicamos este criterio a la presente situación de seguridad en el Cono Sur, observamos que se está experimentando desde 1985 un creciente proceso de distensión. Las medidas de confianza mutua (MCM), la caída relativa de los gastos en defensa, las continuas visitas entre uniformados y Ministros de Defensa, la solución de los diferendos fronterizos, en fin, la caída en el ritmo de adquisición de armamentos, evidencian una persistente disminución de la competencia geoestratégica y con ello ha caído sustancialmente el nivel percibido de amenaza externa vecinal. Argentina ha dado un paso decisivo al eliminar en diciembre de 1994 su sistema de conscripción obligatoria, y no sería sorprendente que, en un futuro próximo, otros países siguieran el ejemplo. En este contexto de continua disminución de la amenaza externa regional las razones puramente estratégicas para mantener el SMO en Chile tenderán a erosionarse, a pesar de las enormes vulnerabilidades geográficas que presenta este país.

Pero hay otro fenómeno que puede venir en auxilio de los infantes reclutas, mucho antes de que sea obvio para todos que la amenaza ha caído substancialmente, se trata de la Revolución en los Asuntos Militares (RMA). El futuro soldado de infantería de los países desarrollados multipli-

---

[98] John Warner y Beth Asch, "The Economic Theory of a Military Draft Reconsidered", p. 311.

[99] John Roos, "A New Bundeswehr" (1999), pp. 54-58.

[100] John Warner y Beth Asch, "The Economic Theory of a Military Draft Reconsidered".

cará varias veces su poder de fuego y precisión, con armas más precisas, trajes térmicos y antibalas, visores especiales de todo tiempo, tecnología GPS, sensores ultralivianos, etc. Esto significa que el costo de su equipo subirá de los US$10.000 por combatiente y exigirá un entrenamiento superior a los seis meses. Ese soldado del futuro ya es una realidad en los ejércitos de Estados Unidos y Francia. Una vez más se cumplirá el imperativo tecnológico: lo que es técnicamente posible se convierte, tarde o temprano, en políticamente necesario. La RMA "incluirá guerreros más inteligentes, armamento orientado al conocimiento, un campo de batalla de cinco dimensiones (ancho, profundidad, altura, espacio y tiempo), envoltura global, capacidades para atacar simultáneamente en los niveles tácticos, operacionales y estratégicos, y una explícita participación directa e indirecta del público en la guerra"[101]. Guerra de maniobra y simultaneidad a fin de romper el ciclo de decisiones del adversario son esenciales en la RMA, que requerirá como primera medida establecer dominancia de la información[102]. La lógica implícita del Plan Alcázar con su reorganización territorial, con más énfasis en la movilidad y fuerzas blindadas más numerosas, dejará el Ejército de Chile en el umbral de la RMA. Cuando ese fenómeno toque a las puertas de nuestros cuarteles habrá llegado la hora de evaluar la efectividad de la infantería sustentada en reclutas con entrenamiento obsoleto y pobremente equipados.

4.2. La realidad económico-social del SMO

El impacto económico del reclutamiento forzoso en Chile es posiblemente uno de los aspectos menos evaluados del SMO. El argumento tradicional que se esgrime para justificar la necesidad económica del SMO es que es más "barato" que cualquier modalidad voluntaria que se adopte. Dicho en otras palabras, el SMO sería menos costoso porque no obliga a las FF. AA. a desembolsar los salarios que requeriría una fuerza voluntaria. Esta afirmación es correcta desde la perspectiva presupuestaria de los servicios armados. Pero, desde la perspectiva de la economía nacional la realidad es diferente. El servicio militar retira fuerza laboral del mercado, fuerza que tiene un costo de oportunidad y también un costo social. En otras palabras, la productividad potencial y el aporte económico a realizar en la

[101] Antulio Echevarría, "War, Politics and RMA: the Legacy of Clausewitz" (1995/96), pp. 76-80.

[102] Earl Tilford, "The Revolution in Military Affairs: Prospects and Cautions" (1995).

sociedad de los varones jóvenes que cumplen la conscripción es mayor en el mercado que estando en uniforme. Una respuesta usual a esta afirmación es que el SMO "combate la cesantía", por cuanto recluta personal menos calificado y hace bajar los índices específicos de cesantía de una cohorte que los tiene usualmente elevados. En este caso se están confundiendo problemas: los bajos niveles de calificación laboral son un problema no relacionado que se resolvería con una adecuada política de educación y que, una vez resuelto, con el tiempo presionará sobre la conscripción. Por otra parte, quienes al final de su período abandonan las filas engrosan durante un tiempo prolongado las estadísticas de cesantía. Luego, el SMO aparece resolviendo un problema, pero en realidad pospone un fenómeno que finalmente se refleja en las estadísticas de igual manera.

Defensores y contradictores del SMO han debatido apasionadamente sobre la pertinencia de mantenerlo o abolirlo. "Pocos asuntos de política pública han sido tan divisivos como el de proveer personal militar"[103]. Entre todos los aspectos que han sido acarreados al debate, la dimensión económica ha contribuido con más análisis objetivo que ninguna otra. Hace ya tiempo que se ha establecido que el costo del personal varía en las fuerzas armadas. Desde el punto de vista de la política de personal de las FF. AA., el SMO se inscribe como una forma más de proveer de miembros a los servicios armados. Hay una demanda por enlistados, la cual se localiza en la base de la pirámide jerárquica de cada institución. Cada población nacional también tiene una determinada estructura de oferta. El servicio armado ofrece una determinada paga y otros beneficios no salariales, los cuales resultan atractivos para un determinado sector de la población[104]. Si los recursos disponibles no son suficientes para satisfacer la demanda, se recurre al SMO u otro mecanismo que supla ese requerimiento.

El SMO implica tres tipos de costos económicos: presupuestarios, individuales y sociales. El primero está reflejado en el presupuesto de las autoridades que lo administran; el segundo se carga a los individuos directamente en tiempo y esfuerzo personal, y el tercero son los efectos sobre la sociedad al dejar de disponer de un porcentaje de la oferta laboral[105].

Desde la perspectiva de la teoría económica de mercado, hace ya bastante tiempo que hay unanimidad respecto a si una fuerza de reclutas es o no preferible a una fuerza de voluntarios. Primero, el SMO representa un costo presupuestario pequeño para el servicio armado que lo practica (por

[103] John Warner y Beth Asch, "The Economics of Military Manpower", p. 373.

[104] Ibídem, pp. 352-373.

[105] K. Kerstens y E. Meyermans, "The Draft Versus an All-Volunteer Force: Issues of Efficiency and Equity in the Belgian Draft" (1993), pp. 271-284.

ejemplo, instructores, cuarteles, material y salarios menores). Los voluntarios significan elevados costos presupuestarios para la institución que lo realiza y por ende para los contribuyentes, ya sea bajo la forma de mayores impuestos o inflación. Los reclutas bajo el sistema SMO son retirados del mercado, lo que implica un elevado costo social, que invariablemente es superior al costo directo de los voluntarios. El costo social del reclutamiento obligatorio lo paga la sociedad entera y no es evidente para la opinión pública, por esa razón pasa desapercibido. Por su parte los voluntarios, y siempre los hay en toda cohorte de enlistables, por preferir las filas a otra actividad, representan el costo de oportunidad más bajo. Se ha estimado que el costo social para la economía en su conjunto es dos a tres veces superior al costo de oportunidad de los voluntarios[106]. Para que esto se cumpla en toda cohorte debe haber un número suficiente de voluntarios o, en caso del servicio militar, los reclutables deben ser más que los que efectivamente son llamados a filas[107].

Segundo, los salarios de los militares, al igual que todo salario fiscal, deben provenir de impuestos recolectados por el gobierno. Al agregar nuevos salarios será necesario aumentar los impuestos, los cuales crean distorsiones en el comportamiento económico de la población, lo que implica pérdidas netas a la economía. Se ha determinado que las pérdidas netas por distorsiones de los impuestos de ingresos por efecto de creación de puestos de trabajo fiscales es de un 30-40% por cada unidad monetaria recolectada de impuesto. Por tanto, una fuerza exclusivamente de voluntarios tendrá un costo salarial mayor que impondrá pérdidas netas mayores que el SMO. A medida que el número de voluntarios requeridos crece cada vez más, el costo directo lo hace en forma exponencial; por su parte, el costo directo del SMO crece mucho más lentamente con el aumento del número de soldados[108].

Tercero, los costos de entrenamiento difieren marcadamente entre un sistema y otro. En el sistema voluntario el costo se incurre una vez y se divide por un período usualmente largo de servicio. En el sistema SMO el entrenamiento debe repetirse cada año para todo el contingente que ingrese. Entonces, el costo permanente de entrenamiento es superior en una fuerza de reclutas que en una voluntaria[109]. Costos unitarios de entrenamiento

---

[106] Ibídem, pp. 277-278. El costo social está representado por la producción económica de los reclutas en el sistema privado menos la tasa de desempleo para esa cohorte. El costo de oportunidad lo representa el valor de los salarios que ganarían en el sector privado menos la tasa de desempleo.

[107] Warner y Asch, “The Economics of Military Manpower”, p. 375.

[108] Ibídem, p. 375.

[109] Ibídem, p. 375.

sumados a bajos rendimientos por individuo redundan en baja productividad del personal de la defensa bajo el sistema de reclutamiento.

Finalmente, otro costo oculto del SMO en países donde el sistema no es universal consiste en los recursos que gastan las personas en evitar que sus hijos, amigos o parientes realicen el servicio, interviniendo con gestiones oficiosas ante autoridades, obteniendo certificados de salud física o mental, probando condición de estudiante, etc.

Por tanto, el costo directo del personal de las FF. AA. está constituido por el costo de oportunidad del personal de la fuerza, la pérdida directa por efecto del aumento de impuestos para pagar la fuerza y por los costos de entrenamiento. En el caso de una fuerza con reclutamiento obligatorio, el primer y tercer ítems son más elevados debido a que hay implícito un costo social, y para el caso de una fuerza voluntaria el segundo ítem es más oneroso. La pregunta que se plantea es cuál sistema elegir desde el punto de vista de costos totales. Todo dependerá del nivel de fuerzas que se pretenda conseguir. En general, fuerzas pequeñas son más baratas con un sistema voluntario y las fuerzas masivas son más económicas con un sistema obligatorio. Pero de todas formas existe un área intermedia donde no se aplicaría tan fácilmente este principio. En dicha área el sistema voluntario también es claramente superior, por tres razones. La primera se refiere al nivel de apresto, que es el porcentaje de fuerzas entrenadas disponibles. Como el SMO siempre tiene mayor porcentaje de personal en entrenamiento y requiere de un cuadro numeroso de instructores, a igual número el sistema voluntario tiene más personal disponible para la acción. La segunda es que en la medida que la productividad aumenta con la experiencia, siendo la fuerza voluntaria más experimentada, en igualdad numérica es más productiva que el SMO. Y la tercera es que los voluntarios presentan mayor motivación que los reclutas, lo que de suyo los hace también más productivos[110].

Un aspecto no menos importante en la realidad económica del SMO es que las FF. AA., en particular el Ejército, aplican la racionalidad de los bienes libres. Dicho en otras palabras, como el personal del SMO casi no tiene costo, se hace un empleo excesivo de ellos, llamando a filas a mayor cantidad de la estrictamente necesaria. Esto también podría explicar en parte la falta de un adecuado entrenamiento de las reservas, por cuanto sale más costoso reentrenarlas que llamar más conscriptos a las filas en un momento de necesidad. De paso es preciso indicar que en la práctica defen-

[110] Ibídem, p. 377.

der la permanencia del SMO argumentando la existencia de reservas entrenadas no se condice con la realidad; por el contrario, el SM voluntario podría ofrecer mejores garantías en ese sentido.

4.3. Las implicancias políticas del SMO

El origen moderno de la política del reclutamiento militar es la emergencia del sistema democrático universal masculino después de la Revolución Francesa. La lógica era muy simple, los aspirantes a ciudadanos debían cumplir primero con sus obligaciones militares para luego obtener sus derechos políticos. El "invento" del servicio militar permitió la revolución militar que dio a Francia un arma social y estratégica para la cual las monarquías absolutas de Europa Central simplemente no tuvieron respuesta con sus ejércitos profesionales o mercenarios. Las masas de soldados entusiastas que Napoleón pudo reclutar a bajo costo produjeron un efecto estratégico devastador que sólo la perseverancia de las alianzas británicas y el invierno ruso durante la Campaña de 1812 pudieron finalmente vencer, luego de veinte años de constante guerra. Había nacido el ejército de masas. La restauración traería el absolutismo por un tiempo limitado, la democracia volvería después del 48, pero el reclutamiento universal sería sólo definitivamente adoptado varias décadas más tarde y por la sociedad política menos democrática de la Europa de fines del siglo XIX: la Alemania Imperial. La revolución industrial haría mucho por el servicio militar moderno. Ambos fenómenos irían de la mano, la guerra industrial requería de los ejércitos de masas y, viceversa, los ejércitos masivos requerían la producción industrial de armamentos, municiones y vituallas. De esta forma el servicio militar se había constituido en el mecanismo político-estratégico para resolver los requerimientos de la guerra total.

Chile adoptó el modelo alemán en 1900, en plena crisis fronteriza con Argentina. Al igual que en el caso francés y de los que le sucedieron, la lógica del servicio militar se basó en la adquisición de la ciudadanía como premio al cumplimiento previo de la obligación militar. El desarrollo y ampliación de la base democrática en Chile durante el siglo XX, con la incorporación de las mujeres y los iletrados al derecho a voto, creó una importante desequilibrio entre las obligaciones y deberes ciudadanos. Con el tiempo, a medida que la población continuó creciendo y el SMO fue requiriendo una cantidad estable de reclutas, el porcentaje de los llamados a filas fue decreciendo, perdiendo el carácter universal y adquiriendo cada vez más el rasgo de sistema selectivo del presente. La selectividad actual se

fue acentuando en la medida en que se creó un número creciente de mecanismos formales e informales para que un sector importante de la población masculina quedara eximida de hacerlo. Aparte de las consabidas razones de salud, el aspecto discriminatorio más importante pasó a ser la educación: quienes se encuentran estudiando al momento de la inscripción y del llamado a filas, quedan automáticamente marginados del cumplimiento de la obligación mediante sucesivas prórrogas. Este mecanismo implica que las clases económico-sociales que acceden a la educación superior tienen garantizada su exclusión del servicio militar en tiempos de paz. Otra manera informal de eximirse, siendo probablemente la segunda forma más recurrida, consiste en solicitar esa eximición a los oficiales directamente a cargo del proceso, empleando alguna relación cercana de amistad o de parentesco con ellos[111]. Luego, al cabo de un siglo, la situación ha cambiado diametralmente. Hoy hacer el servicio militar no garantiza la ciudadanía, pues las mujeres también la adquieren sin hacerlo, no es de carácter universal y es realizado por quienes no tienen mecanismos para evitarlo.

La dimensión del contingente que requieren las FF. AA., consistente en aproximadamente un quinto de la cohorte masculina, y la falta objetiva de razones para eximirse de la obligación militar que tienen los sectores de más bajos recursos hacen que sobre estos últimos recaiga el peso del cumplimiento de la misma. En otras palabras, los menos educados, aquellos sin recursos económicos y que carecen de relaciones de amistad o parentesco con quienes realizan la selección militar son los destinados a cumplir con un deber que se supone universal, pero que en la práctica ha pasado a ser un tributo desigual. Hay que hacer presente que para un grupo importante de estos afectados aún existen razones marginales para cumplir con esta obligación, puesto que el SMO todavía entrega ciertos beneficios diferenciadores con aquellos de su misma condición que no lo realizan. Estas pequeñas ventajas, como una mejor disciplina laboral, buenos hábitos, buen estado físico, etc., se irán paulatinamente erosionando en la medida que el mercado vaya ofreciendo mejores oportunidades. No obstante, el factor que más rápidamente afectará la percepción del trato discriminatorio será la creciente secularización política de este sector de la población, lo que llevará a una creciente resistencia a realizarlo. En efecto, tomarán conciencia de que sobre ellos recae un tributo de carácter regresivo, que se les aplica a ellos y no a otros simplemente poque son hombres y pertenecen a los estratos más

[111] Es importante destacar que este mecanismo, que ciertamente es irregular, no ha sido acusado de corrupto o de que envuelva alguna compensación pecuniaria.

débiles al interior de la sociedad. Por tanto, pretender que el SMO en su actual forma constituya un adecuado mecanismo de redistribución de las obligaciones de la defensa es un contrasentido no exento de cierta ironía.

Desde una perspectiva política, el SMO tiene sus días contados, el acceso universal a la educación básica, la reintroducción de cursos de Educación Cívica a nivel de la enseñanza media, con la consiguiente ampliación de la cultura política, la incorporación de mujeres a la oficialidad de las FF. AA., el aumento del ingreso medio de los chilenos y un mayor debate ciudadano sobre distintos aspectos de la política de defensa harán cada vez más cuestionable la falta de equidad política del actual sistema. Para quienes hagan el Servicio Militar resultará incomprensible tener que cargar con un tributo regresivo, que adopta la forma de una obligación que el resto de los hombres y mujeres de su cohorte no cumplen, y que recae sobre ellos simplemente porque son menos educados, más pobres y sin conexiones sociales o políticas.

4.4. Una propuesta

Consideramos que la mejor alternativa al presente sistema es una rápida evolución al Servicio Militar Voluntario. Ésta reúne varias ventajas, aparte de resolver serias inequidades: soluciona las necesidades estratégico-militares del país en forma más eficiente, es económicamente la más barata para la sociedad y es políticamente ética. Más aún, creemos que el soldado reclutado bajo el sistema voluntario no será moralmente inferior al actual recluta ni al militar de carrera. Rechazamos, por tanto, supuestas distinciones en el terreno valorativo[112]. Luego, proponemos la implementación de un SM voluntario sin mayores modificaciones a la legislación vigente, consistente en realizar una estimación de las necesidades de las FF. AA., considerando personal que recibirá un entrenamiento militar mejor y más largo y servirá por un período uniforme de 24 meses. Para este fin se destinarán fondos adicionales del presupuesto de la República con el objeto de pagar salarios equivalentes al sueldo mínimo, más otras regalías hoy vigentes. Estimativamente el volumen de voluntarios bordearía los diez mil por año,

[112] No participamos de críticas infundadas basadas en categorías espurias, como aquella de que el SM voluntario generaría un nuevo tipo de militar denominado "soldado voluntario ocupacional". ¿Qué hace realmente que haya un profesional voluntario como se dice que hoy existiría? ¿Cuál es la superioridad ética demostrable de éste con el anterior? ¿Acaso el recluta obligatorio está motivado por razones altruistas para hacer su servicio militar bajo el actual sistema? ¿Cómo se llegó a esa conclusión?

lo que daría un total de veinte mil por ser bianual. El valor de los salarios anuales de ese contingente será de aproximadamente US$50 millones. Debido a que la calidad del entrenamiento mejorará, como asimismo el equipamiento, y las FF. AA. deberán concurrir con gastos adicionales por servicios que hoy dan los reclutas, se estima que habrá costos adicionales por unos US$ 20 millones. Este gasto directo es notablemente más bajo que el costo social del SMO hoy día, consistente en el valor productivo de esos reclutas en el sector productivo deducida la tasa de desempleo. El valor aproximado de ese costo social, que no considera los costos individuales y familiares, es de aproximadamente US$200 millones, cifra que se obtiene estimando la producción agregada que esa mano de obra produce en el sector privado[113].

Para darle un estímulo a la eficiencia del empleo de estos voluntarios, se sugiere un sistema de evaluación física-intelectual de los postulantes a nivel nacional similar en su concepción al de la Prueba de Aptitud Académica, pero con otros parámetros. Cada postulante tendrá un puntaje y con ése postulará a la rama y especialidad de la rama de su elección hasta llenar los cupos ofrecidos. Los fondos estatales se asignarán a las FF. AA. conforme a un sistema equivalente al Aporte Fiscal Independiente (AFI), de esta manera habrá un incentivo para que las instituciones ofrezcan mejores oportunidades de desarrollo y calidad de preparación profesional a los reclutas voluntarios y para que exista un grado de competencia por conseguir los mejores voluntarios[114]. De esta forma tendremos a los mejores y más motivados donde más se les necesite, con la ventaja adicional de que las FF. AA. movilizarán sus propios recursos para ofrecer alternativas atractivas a los postulantes donde ellas los precisan. Así, no sólo se empleará más eficientemente el recurso humano que aporta el servicio militar, sino que cada institución armada hará una profunda revisión de sus reales necesidades en esta materia y realizará los aportes propios de acuerdo a las conclusiones que arribe[115]. Asimismo, para no perder los recursos humanos formados de esta manera, se agregará un presupuesto adicional para

[113] Este valor se obtiene de multiplicar el ingreso potencial de los conscriptos por 3,25 veces, que consiste en el valor agregado promedio de la mano de obra en el sector productivo y al que se le deduce la tasa de desempleo normal de esa cohorte.

[114] Se dividen los aportes individuales en cinco tramos decrecientes. Así, los primeros 2.000 puntajes reciben un aporte mayor que los 2.000 siguientes, y así sucesivamente.

[115] La puesta en práctica de un mecanismo en donde oferentes (los voluntarios) y demandantes (las FF. AA.) se encuentren y deban ajustarse de manera competitiva, traerá seguramente algunos cambios en los incentivos para atraer postulantes y reajustes en el número de efectivos que requiere cada rama.

reentrenamiento de los reservistas, valor que estimamos bordea los US$10 millones anuales a repartir proporcionalmente entre las FF. AA.

En resumen, un programa de SM voluntario —con soldados motivados, bien pagados y bien tratados— con un financiamiento centralizado de US$80 millones parece ser la mejor solución estratégica, económica y política a la actual situación de larvada crisis que experimenta el esquema de reclutamiento vigente. Algunas ventajas adicionales de esta propuesta son que no requiere cambios sustanciales a la legislación vigente, pone fin a una agria e innecesaria disputa con los objetores de conciencia e introduce un grado adicional de transparencia económica y política en un sector de la política pública que se caracteriza por su opacidad. Sólo resta por saber si la clase política nacional se encuentra preparada para conceder que parte importante de la solución de este problema pasa por hacerse de la voluntad de asignar los recursos económicos necesarios.

CONCLUSIÓN

El Servicio Militar se inscribe dentro de las obligaciones que la sociedad organizada, bajo la forma del Estado moderno, ha demandado de sus ciudadanos para satisfacer sus necesidades de seguridad externa. No es casualidad que con el perfeccionamiento de la democracia y de la toma de conciencia en amplios sectores de la sociedad de los deberes y derechos ciudadanos, se haya desarrollado el concepto de servicio a la patria como una manera de responder a necesidades surgidas al interior del Estado, principalmente a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Pero, indudablemente el servicio militar también es un fenómeno histórico y, como tal, parece que su utilidad práctica ha declinado constantemente durante la segunda mitad del siglo XX.

El Servicio Militar Obligatorio (SMO) fue incorporado al sistema de defensa chileno en 1900, en un período de crisis fronteriza y de reforma del Ejército de Chile. Vino a satisfacer las necesidades de la guerra de masas de la época y fue un mecanismo efectivo de movilización de fuerzas. Durante un largo período tuvo carácter universal —todos los varones en condiciones de hacerlo sin importar clase o condición socioeconómica concurrían a las filas—, se constituyó en un importante factor de difusión de los valores patrios y en un medio de contacto entre los miembros de las distintas clases sociales, debido al importante contingente que convocaba. Los reclutas iletrados también tenían la oportunidad de alfabetizarse y, así, de acceder al derecho a voto.

Con el tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, producto del aumento de la población y de los menores requerimientos relativos de soldados, se inició un creciente proceso de selectividad. Cada vez se requirieron menos reclutas por número de inscritos y simultáneamente se fue haciendo menos atractivo para los hijos de los sectores de mayores ingresos el que ellos se mantuvieran durante un período largo de tiempo en una función aparentemente improductiva o que agregaba tan poco valor a las capacidades profesionales de un joven. Se hizo una práctica habitual gestionar la evasión del SMO en la clase media y alta, mediante el empleo de contactos informales. En el presente se han iniciado tendencias de largo plazo que presionan por eliminar el servicio militar o, al menos, por terminar con su carácter obligatorio. Por el momento, producto de consideraciones económicas y de la necesidad de crear consensos entre las FF. AA. y el Ejecutivo, se han tomado medidas de flexibilización que tienden a maximizar la opción voluntaria dentro de un marco de obligatoriedad. Es evidente, sin embargo, que los diversos participantes del proceso y observadores más cercanos estiman que ésta es una situación transitoria.

Este trabajo ha dejado en evidencia que hay diversas concepciones erróneas y supuestos que se contradicen con la realidad del SMO en Chile. Entre ellas destacan las siguientes. Primero, el SMO no se condice con la realidad estratégica emergente en la región, por cuanto la amenaza ha disminuido sustantivamente; tampoco se encuentra a tono con los avances de la tecnología, debido a que el recluta del SMO no está en condiciones de absorber dichos avances y, por último, el tiempo de entrenamiento les hace ser mediocres combatientes de infantería expuestos a la condición más peligrosa. Segundo, el SMO es la alternativa más costosa para la sociedad chilena, por cuanto su costo social es varias veces más alto que la alternativa de implementar un SM voluntario o de crear en el largo plazo FF. AA. enteramente voluntarias. Al parecer, el verdadero problema consiste en que la clase política y los uniformados se decidan, de común acuerdo, a poner el SM en las cuentas nacionales y dejar de suponer que la presente situación es la más barata. Tercero, el actual SMO constituye una grave injusticia política por cuanto le impone un tributo al sector más desposeído y menos preparado de la sociedad chilena, les grava a cuenta del único capital de que disponen, que consiste en su tiempo y, más grave aún, es posible que esto ocurra precisamente porque ese sector de la población no tiene plena conciencia de la inequidad a que están sometidos ni tienen la capacidad organizativa para modificar la presente situación.

Por tanto, el acceso a la educación, los mayores ingresos promedios de la población y, por sobre todo, la creciente toma de conciencia política

entre los jóvenes han hecho que surja un consenso de que el SMO en su actual forma produce un efecto estratégico-militar crecientemente obsoleto, que se ha tornado en un tributo regresivo difícil de defender y constituye una flagrante injusticia política para aproximadamente un décimo de la población en el momento de llegar a su mayoría de edad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar, Miguel Ángel; y Bardaji, R. L. (eds.). *El Servicio Militar ¿Obligatorio o Voluntario?* Madrid: Ed. Tecnos S.A., 1992.

Arnett, Robert; y Fitzgerald, M. "A Volunteer Red Army?" *Orbis. A Journal of World Affairs*, Vol. 34, 4 (1990).

Bachmann, Siegfried. "Institution". En *Wörterbuch des Christentums*. München: Orbis Verlag, 1995.

Bandow, Doug. "Unnecessary and Un-American". *Orbis. A Journal of World Affairs*, 34, 4 (1990).

Bandow, Doug. Rejoinder: "A Bad Deal, a Flawed Ideal". *Orbis. A Journal of World Affairs*, Vol. 34, 4 (1990).

Carter, April. "Liberalism and the Obligation to Military Service". *Political Studies*, 46, 1 (1998).

Cerezo, G. F.; G., Alviria, Laguna; y Cano Hevia, T.G. "El Factor Humano y la Defensa". En Aguilar y Bardaji (comp.), *El Servicio Militar ¿Obligatorio o Voluntario?* Madrid: Ed. Tecnos S.A., 1992.

Deutsch, Karl. *Nationenbildun-Nationalstatt-Integratio.* Düsseldorf: 1972.

Deutsch, Karl. *Nationalism and Social Communication*. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.

Domínguez, Jorge (ed.). *Seguridad Internacional, Paz y Democracia en el Cono Sur*. Santiago: Flacso, 1998.

Dunningan, James. *How to Make War*. Nueva York*:* William Morrow, 1993, 3a. edición.

Echevarría, Antulio. "War, Politics and RMA: The Legacy of Clausewitz". *Joint Forces Quarterly*, invierno 1995/96.

Frohmann, Alicia. *Cooperación Política e Integración Latinoamericana en los 90.* Santiago: Flacso, 1996.

Fuentes, Claudio. "¿Quieren los Jóvenes un Servicio Militar Obligatorio?" *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, Vol. IX, No. 1 (enero-marzo 1994).

Fuentes, Claudio. En *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, Año 11, N° 4 (octubre-diciembre 1996), Santiago, Flacso.

Gallegos, Alfredo. "Globalización, Identidad y Defensa Nacional: Un Problema No Resuelto". Ponencia presentada en el seminario "Globalización, Identidad y Defensa Nacional", organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Santiago, mayo-diciembre de 1998.

George, Bruce y Goldich, Robert. En Miguel Ángel Aguilar y R. L. Bardaji (eds.), *El Servicio Militar ¿Obligatorio o Voluntario?* Madrid: Ed. Tecnos S.A., 1992.

Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. Cambridge University Press, 1981.

Hubel, Helmut. "Regionale Krisenherde der Weltpolitik". En K. Kaiser y otros (eds.), *Die neue Weltpolitik*. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1995.

Hughes, Barry B. *Continuity and Change in World Politics. The Clash of Perspectives*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1994.

International Institute of Strategic Studies (I.I.S.S.). *The Military Balance, 1998/99.* Londres: Oxford University Press.

Jameson, Fredric; y Miyoshi, M. (eds.). *The Cultures of Globalization*. Durham y Londres: Duke University Press, 1998.

Kerstens, K.; y Meyermans, E. "The Draft versus an All-Volunteer Force: Issues of Efficiency and Equity in the Belgian Draft". *Defence Economics*, 1993, Vol. 4, 3.

Lambeth, Benjamin S. "Russia's Wounded Military". *Foreign Affairs*, Vol. 76, 4 (1997).

Letelier, Juan Pablo. "Servicio Militar: Propuestas Alternativas e Iniciativas de Modernización". *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, Vol. IX (enero-marzo de 1994), Flacso, Santiago.

Maldonado, Carlos R. "El Servicio Militar en Chile: Del Ejército Educador al Modelo Selectivo, Ejército de Chile". Comandos de Instituciones Militares, Academia de Guerra, Santiago 1997.

Meneses, Emilio. "Chile: Percepción de Amenazas y Política de Defensa". En Cruz y Varas (editores), *Percepción de Amenazas y Políticas de Defensa en América Latina.* Santiago: CEEA/Flacso.

Molina Johnson, Carlos. "El Deber Militar en Chile". *Memorial del Ejército de Chile*, 458, 1998.

Moskos, Charles. "Rebuttal: Necessary and American". *Orbis. A Journal of World Affairs*, Vol. 34, 4 (1990).

Odom, William E. "Transforming the Military". *Foreign Affairs*, Vol. 76, 4 (1997).

Owen, Nicholas. "How Many Men do Armed Forces Need? An International Comparison". *Defence and Peace Economics*, Vol. 5, 4 (1994).

Pape, Robert. "Coercion and Military Strategy: Why Denial Works and Punishment Doesn't". *The Journal of Strategic Studies*, Vol. 15, 4 (1992).

Porter, Bruce D. *War and the Rise of the State.* Nueva York: The Free Press, 1994.

Reinhard, Meyers. "Krieg und Frieden". En W. Woyke (ed.), *Handwörterbuch Internationale Politik*. Opladen: UTB für Wissenschaft, 1995, 6a edición.

República de Chile. *Constitución Política de la República de Chile.* Santiago: Ed. Jurídica, 1992.

Rojas, Francisco; y otros (eds.). "La Seguridad Internacional en los Países del ABC". Documento de Trabajo (1998), Flacso, Santiago.

Rojas, Francisco; y Smith, W. (eds.). *El Cono Sur y las Transformaciones Globales.* Santiago: S.R.V. Impresos S.A., 1994.

Roos, John. "A New Bundeswehr". *Armed Forces Journal International*, junio 1999.

Savay. En Miguel Ángel Aguilar y R. L. Bardaji (eds.), *El Servicio Militar ¿Obligatorio o Voluntario?* Madrid: Ed. Tecnos S.A., 1992.

Stallings, Barbara (ed.). *Global Change, Regional Response*. Cambridge University Press, 1995.

Steinkamm, Armin A. "Wehrpflicht". En Goerres Gesellschaft (ed.), *Staatslexikon*, 5. Freiburg: Sonderaufgabe, 1995.

Sutor, Bernhard. *Politische Ethik.* Paderborn, 1992.

Tilford, Earl. "The Revolution in Military Affairs: Prospects and Cautions". US Army War College, Carlisle Barracks, PA, Strategic Studies Institute, Informe, 1995.

Valdivieso, Patricio. “Ética Política y Éxito Moral”. *Revista de Ciencia Política*, XIX, 2 (1998).

Van Klaveren, Alberto. “Globalización y Políticas de Defensa”. Ponencia presentada en el seminario “Globalización, Identidad y Defensa Nacional”, organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Santiago, mayo-diciembre de 1998.

Warner, John; y Asch, Beth. “The Economic Theory of a Military Draft Reconsidered”. *Defence and Peace Economics*, 7, 4.

Warner, John; y Asch, Beth. “The Economics of Military Manpower”.

Weber, Max. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehr*. J. Winckelmann (editor). Tübingen: UTB für Wissenschaft, 1988.

Diarios:

Diario Oficial.

El Mercurio.

La Época.

La Nación.

La Segunda.

Las Últimas Noticias. □

ANÁLISIS DEL MERCADO DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO EN SANTIAGO*

Juan Pablo Montero, José Miguel Sánchez y Ricardo Katz

A pesar del creciente interés en el uso de permisos transables de emisión para el control de la contaminación, la evidencia empírica de este instrumento de regulación se reduce a unas pocas experiencias en EE. UU. Este trabajo amplía la base empírica al analizar el Programa de Compensación de Emisiones que se estableció en 1992 para controlar emisiones de material particulado en Santiago. Del análisis se concluye que mientras los objetivos ambientales del Programa se han cumplido, en gran parte gracias a la introducción del gas natural, el mercado de compensación de emisiones no se ha desarrollado debido a altos costos de transacción, incertidumbre y

JUAN PABLO MONTERO. (jpmonter@ing.puc.cl). Profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador asociado del MIT Center for Energy and Environmental Policy Research (MIT-CEEPR).

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ (jsanchez@volcan.facea.puc.cl). Profesor asociado en el Instituto de Economía de la PUC.

RICARDO KATZ (rkatzbi@entelchile.net). Director de Gestión Ambiental Consultores e investigador asociado del Centro de Estudios Públicos (CEP).

* Agradecemos a Denny Ellerman por sus valiosos comentarios; a los participantes de un Seminario en la Universidad de Concepción por diversas sugerencias; a Alfonso Mujica y Rosita Villanueva por su excelente trabajo como ayudantes de investigación, así como también a diversas personas e instituciones (particularmente a Marta Zamudio de PROCEFF) por información de emisiones, precios y transacciones. Juan Pablo Montero también agradece a Fondecyt-Chile (Proyecto # 1990100) y a MIT-CEEPR por la ayuda financiera.

fiscalización deficiente. Con todo, señalan los autores, las rentas de escasez creadas por la asignación de derechos de emisión (basada en criterios históricos) han demostrado ser una herramienta importante en la realización del inventario de emisiones.

1. Introducción

En años recientes ha habido creciente interés en utilizar de instrumentos de mercado —particularmente sistemas de transacción de emisiones o de permisos transables de emisión— para tratar problemas de contaminación atmosférica, en lugar del enfoque más tradicional de comando y control basado en la imposición de estándares de emisión y estándares tecnológicos. Si bien casi toda la experiencia con el uso de sistemas de permisos transables se concentra en EE. UU. (Tietenberg, 1985; Hahn, 1989; Schmalensee *et al.*, 1998), algunos pocos países menos desarrollados (PMD) están empezando a experimentar con diferentes formas de transacción de emisiones (Banco Mundial, 1997). Un examen detallado de estas experiencias es particularmente interesante en este momento debido a que un sistema global de transacción de emisiones con algún tipo de participación voluntaria de PMD está en el centro de las negociaciones actuales respecto al cambio climático y cómo disminuir las emisiones de dióxido del carbono y otros gases de efecto invernadero (Jacoby *et al*., 1999).

Este trabajo proporciona una evaluación del "Programa de Compensación de Emisiones" que fue establecido por el Decreto Supremo No. 4 (DS 4) en marzo de 1992 para controlar las emisiones de material particulado total en suspensión (PTS) de fuentes estacionarias de origen industrial en Santiago (en adelante, Programa de Compensación). Para hacerlo, se describe el sistema y su creación desde un punto de vista institucional. Se evalúa su desempeño medioambiental y también el desempeño del mercado basado en los datos recolectados desde 1993 hasta 1999, y se sugieren maneras en que se podría mejorar el funcionamiento de este mercado dentro del contexto institucional actual.

El Programa de Compensación fue establecido para resolver, de una manera costo-efectiva, el conflicto entre el crecimiento industrial y las normas de calidad ambiental del aire para PTS y el material particulado respirable (PM10) en la ciudad de Santiago, las que han sido constantemente excedidas desde los años setenta. Con el Programa de Compensación, las fuentes existentes —es decir, aquellas registradas cuando el DS 4 se promulgó— recibieron *derechos de capacidad de emisión diaria* a perpetui-

dad, de manera proporcional a una tasa de emisiones predeterminada que es uniforme para todas las fuentes existentes[1].

Una fuente debe mantener suficientes derechos para cubrir el nivel máximo de emisiones proyectado para un día cualquiera. Llamamos a este nivel *la capacidad de emisión* de la fuente. La autoridad determina la capacidad de emisión basada en el tamaño actual de la fuente y el tipo de combustible que utiliza, los que son medidos durante las inspecciones anuales. En otros términos, lo que está siendo medido por la autoridad no son las emisiones reales sino que la capacidad de emisión y, por consiguiente, lo que se está transando no son derechos de emisión sino que derechos de capacidad. Así, después de cada inspección, la autoridad procede a reconciliar la capacidad de emisión estimada con la cantidad de derechos de capacidad mantenidos por la fuente. Una fuente existente puede ser un vendedor o un comprador de derechos dependiendo de si su capacidad de emisión está por debajo o por sobre los derechos diarios que se le asignaron. Es importante notar que a pesar de que los derechos se definen sobre una base diaria (y a perpetuidad), las limitaciones de monitoreo restringen a las fuentes a transar los derechos por períodos anuales o en forma permanente.

Las fuentes nuevas y las expansiones de fuentes existentes no reciben derechos de capacidad de emisión, de manera que deben cubrir toda su capacidad de emisión comprando derechos de capacidad de las fuentes existentes. Esto significa que hay un límite agregado de emisiones igual a la suma de los derechos asignados a las fuentes existentes. A pesar de su nombre oficial, el Programa de Compensación tiene todas las características de un sistema de transacción de emisiones excepto por una restricción. Todas las fuentes, nuevas y existentes, están sujetas a un límite de concentración de emisión (112 mg/m^3N), el que no puede excederse bajo circunstancia alguna.

Nuestro análisis indica que el Programa de Compensación está teniendo un buen desempeño desde un punto de vista medioambiental: a julio de 1997, la capacidad total de PTS de las fuentes participantes estaba por debajo del número total de derechos de capacidad distribuidos. Hay dos

[1] Nótese que en el contexto de este trabajo, el término *tasa de emisión* se refiere a concentración de emisiones. La tasa usada para calcular la asignación de derechos se derivó de una meta agregada de reducción de emisiones cercana al 80%, la que, a su vez, se pensaba que permitiría alcanzar las normas diarias de calidad del aire el 95% del tiempo. Nótese además que el término *derechos* no se usa en ninguna parte del DS 4 debido a la ausencia de un marco legal en el cual basar el Programa. En la práctica, las fuentes existentes generan créditos de reducción que pueden ser vendidos en el mercado. Para los propósitos de este trabajo, sin embargo, nos referiremos a estos créditos de reducción como derechos de capacidad de emisión.

razones que ayudan a explicar el marcado descenso de las emisiones de PTS de fuentes industriales que empezó en 1997 y se aceleró en los años posteriores. La primera razón es que la industria se cambia a combustibles más limpios en un esfuerzo por evitar estar entre las fuentes más contaminantes que deben cesar sus operaciones en los días de emergencia y preemergencia ambiental por deterioro significativo de la calidad del aire. La segunda y principal razón es la rápida adopción del gas natural proveniente de Argentina. Desde fines de 1997, el gas natural argentino ha estado desplazando con éxito a los combustibles alternativos en todos los sectores de la economía (es decir, residencial, comercial, generación eléctrica e industrial)[2].

Desde un punto de vista económico, sin embargo, nuestros resultados indican que el mercado creado bajo el Programa de Compensación no ha tenido un buen desempeño. En consecuencia, no se le puede atribuir la responsabilidad por la reducción en las emisiones y el logro de las metas ambientales[3]. Los precios observados y el volumen de las transacciones son muy diferentes de aquellos que se predicen con un modelo de simulación de un mercado sin fricciones. Con la rápida adopción del gas natural por parte de las fuentes industriales, la demanda por derechos de capacidad ha disminuido, pero la oferta no ha respondido tanto como se hubiese esperado y los precios se han mantenido por sobre aquellos predichos por el modelo de la simulación, y el volumen de transacciones se ha mantenido a niveles muy bajos[4].

Una parte importante del pobre desempeño que ha tenido el mercado por derechos puede explicarse por: 1) incertidumbre regulatoria (Hahn, 1989); 2) altos costos de transacción (Stavins, 1995) y el largo e incierto proceso de aprobación (Montero, 1998); 3) bajo poder de fiscalización, sobre todo durante las fases tempranas del Programa; y 4) algunas indicaciones de concentración del mercado (Hahn, 1983). Como resultado, observamos un mercado poco profundo con débiles señales de precio y donde los vendedores potenciales se sienten inseguros respecto a la posibilidad de recomprar los derechos si las condiciones futuras lo requieren. No es sor-

---

[2] En muchos sentidos, el efecto que ha tenido la introducción del gas natural en el Programa de Compensación es similar al que tuvo la expansión inesperada del carbón más barato y más limpio de Powder River Basin en el programa de transacción de emisiones de SO_2 en EE. UU. (Ellerman y Montero, 1998).

[3] El Instituto Libertad y Desarrollo (1999, p. 5) ofrece una perspectiva diferente al sostener, a nuestro juicio erróneamente, que el mercado de emisiones ha probado ser efectivo en la reducción de emisiones.

[4] En diversas entrevistas con participantes del sector industrial hemos podido constatar que esta apreciación es compartida.

prendente, entonces, que las empresas hayan tendido a cumplir con la regulación de manera autárquica, prestando poca atención al mercado.

Nosotros sostenemos que, en su intento por avanzar hacia el logro de los objetivos de las normas de calidad ambiental, la autoridad ambiental no prestó suficiente atención a las instituciones básicas para el desarrollo de un mercado, tales como subastas anuales y una unidad de cambio más líquida. Las subastas anuales ayudan en la partida del mercado, proveyendo importantes señales de precio y permitiendo que las nuevas fuentes accedan a los derechos. Una unidad de cambio más líquida podría ser un derecho de capacidad diario con duración de un año y sin la posibilidad de acumularlo para su uso futuro. Dadas las limitaciones de las mediciones anuales, esto no violaría las metas ambientales del DS 4 ni impondría una carga extra al regulador. Tal vez la intención de la autoridad nunca fue ver desarrollarse un mercado sino más bien establecer un mecanismo para auditar primero y luego disminuir las emisiones de PTS con poca resistencia por parte de los participantes en la industria.

Debido a que la asignación de derechos de capacidad en función de derechos históricos crea incentivos económicos para que las fuentes activas declaren sus emisiones y exijan los derechos correspondientes (para capturar las rentas de escasez), creemos que el Programa de Compensación ayudó a que la autoridad pudiese completar el inventario de fuentes y emisiones durante las fases tempranas del Programa. De hecho, muchas fuentes que se pensaba que no existían en el momento en que el DS 4 fue promulgado, aparecieron después exigiendo derechos. En este contexto particular de limitaciones institucionales, no está claro qué instrumentos regulatorios alternativos, tales como normas de emisión o impuestos, habrían sido tan efectivos en esta tarea particular de realización del inventario.

A pesar de este importante, y generalmente ignorado, atributo de los permisos transables asignados en función de derechos históricos, la falta de atención en el desarrollo del mercado puede haber creado un precedente indeseable (buen desempeño ambiental acompañado de un débil desarrollo del mercado) para aquellos a quienes les gustaría ver un uso más amplio de instrumentos económicos en la política medioambiental futura del país. Esperamos que el resultado de este experimento de política ambiental basado en el mercado, junto con la significativa oposición de algunos miembros del Congreso a la idea de la transacción de emisiones, no desincentivarán al Ejecutivo en su esfuerzo por lograr la aprobación de una legislación que promueva un uso más generalizado de permisos transables.

El resto del artículo está organizado como sigue. En la sección 2 se describen brevemente los problemas de contaminación atmosférica en San-

tiago con relación a PM10 y PTS. En la sección 3 se presentan los elementos regulatorios básicos del Programa de Compensación y su interacción con otras normativas legales. En la sección 4 se discute la evolución de las emisiones y de las reducciones de las emisiones (o, más precisamente, de capacidades de emisión y de reducciones de capacidad) a julio de 1999. En la sección 5 se desarrolla un modelo teórico y numérico de un mercado competitivo de PTS, contra el cual puedan compararse algunos resultados del Programa de Compensación. En la sección 6 se presentan los datos de precios reales y volumen de transacciones y se comparan con los resultados predichos por los modelos elaborados en la sección 5. Presentamos, además, una discusión de las posibles razones para las diferencias y entregamos algunas recomendaciones. En la sección 7 se concluye.

2. La contaminación atmosférica en Santiago

La ciudad de Santiago presenta serios problemas de contaminación atmosférica. De hecho, en junio de 1996 la Región Metropolitana de Santiago fue declarada oficialmente una zona saturada por cuatro contaminantes atmosféricos: partículas totales en suspensión (PTS), partículas respirables (PM10), monóxido de carbono (CO) y ozono (O_3)[5]. La declaración se basó en el hecho de que repetidamente se habían excedido las normas diarias de calidad del aire para PTS y PM10 en una o más de las estaciones de monitoreo, prácticamente en forma diaria, durante los meses de otoño e invierno de los años recientes[6].

Si bien las concentraciones altas de todos estos contaminantes urbanos causan efectos adversos en la salud de las personas de Santiago, las altas concentraciones de PM10 han probado ser las peores. Las altas concentraciones de PM10 que se han observado desde comienzos de los años ochenta, llevaron a la autoridad medioambiental, a comienzos de los noventa, a tratar de enfrentar este problema particular de una manera sistemática, en respuesta a la evidencia creciente de los posibles efectos adversos en la salud de las personas. De hecho, estudios epidemiológicos recientes, usando datos de Santiago, encontraron una fuerte correlación estadística positiva entre las concentraciones de PM10 y la mortalidad diaria (Ostro *et al.*, 1996), y entre PM10 y enfermedades respiratorias agudas bajas en niños menores de 14 años (Ostro *et al.*, 1999).

[5] Decreto Nº 131 del 12 de junio de 1996.

[6] La norma diaria de PM10 es 150 $\mu g/m^3$ para 24 horas, basada en estándares de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (US EPA).

Como se muestra en la Tabla 1, la contribución de las fuentes industriales estacionarias (calderas, hornos industriales y procesos) al PTS total en 1987 era de 21.776 kg/día, que corresponde al 61,6% del PTS total proveniente de las fuentes estacionarias y móviles. Algunos analistas sostienen que la contribución de fuentes industriales es, en realidad, mucho menor debido a que también debe incluirse como fuente de PTS el polvo resuspendido de caminos pavimentados y sin pavimentar[7]. A pesar de tales incertidumbres, una década después la contribución de las fuentes industriales ha disminuido a casi la mitad, es decir, a un 34% del PTS total. Aun así, a comienzos de los noventa la autoridad consideró la contribución de las fuentes fijas industriales lo suficientemente significativas como para incluirlas en cualquier esfuerzo serio para reducir las emisiones de PTS y de PM10.

TABLA 1: PTS EN LA REGIÓN METROPOLITANA PARA LOS AÑOS 1987 Y 1997*

Fuentes de partículas totales en suspensión (PTS)	PTS en 1987 (kg/día)	%	PTS in 1997 (kg/día)	%
Calderas y hornos industriales	9.436	26,7	4.162	17,3
Procesos industriales	12.340	34,9	4.019	16,7
Calderas de edificios	573	1,6	521	2,2
Calefactores residenciales	4.551	12,9	3.723	15,4
Fuegos abiertos	1.200	3,4	4.197	17,4
Fuentes móviles	7.290	20,6	7.482	31,0
TOTAL	35.389	100,0	24.104	100,0

* Para los números de polvo resuspendido de calles con y sin pavimentar véase el texto.

Fuente: Conama (1997a).

3. El Programa de Compensación de Emisiones

El Programa de Compensación de Emisiones —establecido en marzo de 1992 conforme al Decreto Supremo N° 4 (DS 4)— fue creado para resolver, de una manera costo-efectiva, el conflicto entre el crecimiento industrial y las normas de calidad del aire PTS y PM10 en la ciudad de Santiago. El DS 4 también instruyó al Servicio de Salud del Ambiente de la

[7] Dado que el polvo resuspendido es básicamente material particulado de gran tamaño, su efecto sobre la salud sigue siendo un tema controversial. Si se incluye el polvo resuspendido, el PTS total aumentaría a 117.337 kgs/día, reduciendo la contribución del sector industrial a un 18,6%.

Región Metropolitana (SESMA), a través de su Oficina para el Control de Emisiones de las Fuentes Estacionarias (PROCEFF), para fiscalizar el Programa de Compensación.

El DS 4 regula las emisiones diarias de PTS en unidades de masa (kg/día) de las fuentes industriales estacionarias de un cierto tamaño (principalmente calderas industriales y hornos) cuyas emisiones se descargan a la atmósfera a través de un ducto o chimenea con un volumen de flujo mayor o igual a 1.000 m^3/hr. Según PROCEFF (1993), el número total de fuentes afectadas, en julio de 1993, era de 680, de las cuales 563 eran consideradas fuentes existentes; es decir, fuentes que estaban registradas (aunque no necesariamente operando) cuando el DS 4 entró en vigencia (marzo de 1992). Las 117 fuentes restantes corresponden a fuentes nuevas (32), que son fuentes no registradas a marzo de 1992 o expansiones de fuentes existentes que comenzaron a operar después de esa fecha, y otras fuentes no definidas (85).

Las fuentes existentes enfrentan dos restricciones. Primero, en ninguna circunstancia la concentración de las emisiones puede exceder 112 mg/m^3. Además, a las fuentes existentes se les asignan derechos de capacidad de emisión diaria conocidos como emisión diaria inicial (EDI), según la siguiente fórmula:

$$EDI\ (kg/día) = F_0\ (\ m^3/hr) * C_0\ (mg/m^3) * 24\ (hr\ /día) * 10^{-6}\ (kg/mg) \qquad (1)$$

donde F_0 es el máximo flujo de emisiones según lo declarado por la fuente al momento del registro de la fuente en 1992, y $C_0 = 56\ mg/m_3$ es la "cuota" de concentración de emisiones que se usó uniformemente para todas las fuentes existentes. Las fuentes utilizan los EDI para cubrir la capacidad de emisión diaria, la cual se conoce como emisión declarada diaria (EDD). Las diferencias entre la capacidad de emisiones observada (EDD), basadas en el flujo máximo de emisiones (F) y en la concentración de emisiones (C) que varían de año en año, y la capacidad de emisión asignada EDI de acuerdo a derechos históricos según la ecuación (1) puede transarse siempre que la concentración observada no exceda el estándar máximo de 112 mg/m^3.[8] Los derechos de capacidad de emisión se reducirán en el período

[8] Debido a que casi todas las fuentes que se cambiaron a gas natural lo hicieron usando un sistema dual que les permite funcionar con gas natural o con petróleo # 2, la autoridad basa su estimación de EDD en el combustible que produce las mayores concentraciones, es decir el petróleo # 2. Una fuente con un sistema dual que planea usar sólo el combustible más limpio puede solicitar que sus EDD les sean calculados en base a las menores concentraciones si instala un sello temporal que prevenga el uso del combustible alternativo.

2000-2004 disminuyendo C_0 en la ecuación (1) a 50 mg/m^3, manteniendo constante F_0 y, del 2005 en adelante, reduciendo C_0 a 32 mg/m^3.

Las fuentes nuevas deben satisfacer una norma de concentración máxima de 112 mg/m^3 hasta abril de 1994 y de 56 mg/m^3 después de esa fecha, además de adquirir las compensaciones (derechos de capacidad) de las fuentes existentes necesarias para cubrir sus emisiones EDD. La proporción de compensación se escalonó de un 25% en 1993 a un 100% en 1996, con incrementos anuales de 25%. Después del 6 de abril de 1998, las emisiones deben compensarse en un 120% y actualmente se está considerando aplicar una regla de un 150% de compensación.

El DS 4 también le concedió al SESMA la facultad de determinar la capacidad de emisión para todos los *procesos* industriales que son distintos a las calderas industriales y hornos y sobre los cuales la expresión (1) no puede aplicarse directamente. En la práctica, esto ha significado que los procesos industriales se han excluido del sistema de compensación. Considerando que los procesos generan la misma proporción de PTS que las calderas y los hornos industriales, esta exclusión reduce el alcance del sistema substancialmente[9].

Además, el DS 4 interactúa estrechamente con el DS 32, que fue promulgado en 1990 y controla las emisiones de las fuentes fijas durante los episodios declarados de emergencia y preemergencia por mala calidad del aire en Santiago[10]. Las fuentes estacionarias reguladas bajo el Programa de Compensación pueden verse obligadas a paralizar su funcionamiento durante un episodio de emergencia (preemergencia) si se encuentran entre las fuentes más contaminantes responsables de un 50% (30%) del total de emisiones (en unidades de masa) de las fuentes estacionarias. Así, una razón importante para cambiarse a combustibles limpios, como el gas natural, puede ser la de buscar no aparecer en la lista de las fuentes más contaminantes que están sujetas a la paralización de sus actividades durante los episodios de mala calidad del aire. Desde una perspectiva comercial, estos episodios no son de tan rara ocurrencia durante el invierno, por lo tanto excluirse de la lista parece ser una razón importante para cambiarse a combustibles limpios[11, 12].

[9] Comunicaciones personales con las autoridades ambientales permiten apreciar escaso interés en incluir por ahora los procesos, debido fundamentalmente a problemas de monitoreo.

[10] Se declara una preemergencia cuando el Índice de Calidad del Aire (ICAP) alcanza un nivel 300 (equivalente a una norma de concentración para PM10 de 240 mgrs/m^3). Una emergencia es declarada cuando el ICAP alcanza un nivel 500 (equivalente a una norma de concentración para PM10 de 330 mg/m^3).

[11] Durante 1997, por ejemplo, hubo 13 episodios de preemergencia entre mayo y septiembre, y no hubo episodios de emergencia en ese período.

[12] Entrevista a Víctor Turpaud, de Metrogas. Nótese que a medida que las firmas se cambian a combustibles más limpios, el punto de corte de las concentraciones también cae,

Finalmente, el DS 4 también interactúa con el Plan de Descontaminación de Santiago promulgado en enero de 1998, debido a que este último constituye el instrumento principal para regular la contaminación del aire en Santiago[13]. El Plan afectará el desempeño del Programa de Compensación por varias razones diferentes. Como se indicó anteriormente, el C_0 para estimar los EDI para calderas y hornos industriales existentes se reducirá a 32 mg/m^3 en un período de 6 años. Además, si las limitaciones de monitoreo se solucionan, el Plan definirá los EDI para los procesos y eventualmente los incluirá en el Programa de Compensación.

4. Evolución de las emisiones y reducción de emisiones

En esta sección se explica la evolución de las emisiones y se evalúa si se han logrado las metas ambientales establecidas por el DS 4. Para lograr las metas agregadas del DS 4, las fuentes pueden reducir físicamente sus emisiones ya sea disminuyendo su volumen máximo de emisiones (F) o reduciendo la concentración de las emisiones (C) a través del cambio de combustible (por ejemplo, del carbón al gas natural) o a través de la instalación de tecnologías de control a la salida de las chimeneas.

Los datos sobre el número de fuentes y sus fechas de registro, volumen máximo de flujo de emisiones, combustibles, concentraciones de las emisiones y las asignaciones de derechos de capacidad, se obtuvieron de las bases de datos de PROCEFF desde 1993 hasta 1999[14]. Debido a que el inventario de fuentes y emisiones estaba muy incompleto cuando se promulgó el DS 4 (en marzo de 1992), una de las tareas principales que hubo que desarrollar durante la preparación de este trabajo fue la de seguir cada fuente a través de los años. Por ejemplo, algunas fuentes que no aparecían en la base de datos de PROCEFF en 1993, aparecían en bases de datos de años posteriores indicando que ya estaban en funcionamiento y registradas en marzo de 1992 y que, por consiguiente, eran fuentes existentes elegibles para recibir derechos de capacidad de emisión[15]. En consecuencia, en nues-

debido a que el porcentaje en unidades de masa permanece constante. En la actualidad, el punto de corte para una emergencia es 31 mg/m^3, lo que en la práctica significa que sólo fuentes que usan gas natural y algunas otras que usan petróleo # 2 no se ven afectadas.

[13] Para una descripción completa, véase CONAMA (1997b).

[14] Nótese que: 1) la base de datos para el año 1993, por ejemplo, corresponde a datos entregados por PROCEFF en julio de ese año, en base a información recolectada durante los 12 meses previos a esa fecha; 2) no había base de datos para 1994; y 3) PROCEFF nos advirtió acerca de la menor calidad de la información en las bases de 1995 y 1996.

[15] PROCEFF confirmó esta información indicando que la mayoría de estas fuentes recibieron su asignación de derechos y que otras están siendo evaluadas para una posible asignación de derechos.

tra base de datos procedimos a asignar derechos a todas estas fuentes según la ecuación (1).

A su vez, para dar otro ejemplo, algunas fuentes que aparecían como "existentes" en el banco de datos de 1993 y, aparentemente, con derechos ya asignados, no aparecen en la base de 1996 (o aparecen sin operación), y aparecen nuevamente como retiradas (o simplemente de nuevo no aparecen) en la base de 1997. A menos que PROCEFF nos confirmara que la fuente vendió sus derechos antes de retirarse, para la construcción de nuestra base de datos procedimos a eliminar sus derechos del mercado. Hay otros ejemplos de algunas fuentes que estaban en algunas bases de datos pero no en otras, o fuentes que estaban dos veces registradas durante los primeros años[16].

En general, la construcción del inventario de fuentes y emisiones fue bastante difícil dado los escasos recursos de la agencia reguladora. Sin embargo, al mismo tiempo la tarea se vio enormemente facilitada por el uso de derechos de emisión que reconocieron derechos históricos a las fuentes, lo que creó los incentivos para que las firmas declararan sus fuentes y sus emisiones con el fin de obtener los derechos correspondientes (y capturar así las rentas de escasez). En un contexto de restricción de presupuesto por parte de la agencia reguladora, no está claro si instrumentos alternativos de regulación (tales como impuestos o normas de emisión) hubieran sido tan eficaces en incentivar la colaboración para completar el inventario.

Basados en los datos de PROCEFF y teniendo en cuenta las irregularidades en los datos explicadas en los párrafos anteriores, y algunas otras que se explican más adelante, la Tabla 2 presenta un resumen de nuestra base de datos con las principales variables durante el período 1993-1999[17]. A julio de 1993, había un total de 680 fuentes registradas en el Programa como fuentes existentes, nuevas o "no definidas". Muchas fuentes, cuya existencia se ignoraba al momento de promulgación del DS 4, se presentaron solicitando derechos de emisión. Una revisión de PROCEFF de las 85 fuentes "no definidas" determinó que algunas de ellas estaban doblemente registradas, posiblemente (pero no siempre) por equivocación[18]. Otras fuentes simplemente desaparecieron de las bases de datos posteriores y a otras

[16] Esta información se recolectó a partir de diversas conversaciones con personeros de PROCEFF durante 1997-1999.

[17] Nuestra base de datos excluye la fuente Nueva Renca, debido a que siguió un procedimiento de compensación de emisiones distinto al de las otras fuentes industriales nuevas afectadas por el Programa de Compensaciones. Nueva Renca es una central de generación eléctrica de ciclo combinado cuyo tamaño es cuatro veces mayor (F = 766.032,9 m^3/h) que la fuente industrial más grande existente (F = 183.739,5 m^3/h) que entró en operaciones en octubre de 1997 y que aparece en la Base de Datos de PROCEFF de 1999.

[18] El comportamiento oportunista también explica parte de este doble registro.

TABLA 2: RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE LAS FUENTES AFECTADAS: 1993-1999

Variable	1993	1995	1996	1997	1998	1999
N° de fuentes	680	690	631	576	566	573
Existentes	563	551	504	430	365	365
Nuevas	32	101	117	136	193	208
No definidas	85	38	10	10	8	0
Flujo máximo (F)						
(m^3/hr)						
Total	3.344.169,3	3.301.020,1	2.910.523,5	2.339.767,5	2.385.089,6	2.375.988,7
Promedio	4.910,7	4.784,1	4.612,6	4.062,1	4.213,9	4.146,6
Desv. estándar	15.058,8	14.908,0	15.490,9	9.498,6	13.091,0	11.793,5
Max.	261.383,9	261.304,7	261.304,7	182.843,0	207.110,6	183.739,5
Min.	499,2	204,3	204,3	493,3	216,9	165,6
Concentración (C)						
(mg/m^3)						
Promedio	94,9	83,1	78,5	54,7	31,1	27,8
Desv. estándar	88,1	77,8	76,8	43,0	21,1	18,5
Max.	702,0	698,2	674,0	330,7	110,0	108,2
Min.	1,5	1,5	3,4	3,6	2,9	4,6
No cumplen	106	87	83	29	0	0
Usuarios de gas natural	0	0	0	0	145	179
Capacidades y derechos						
(kg/día)						
EDD	7.442,5	6.500,2	5.195,1	3.535,0	1.953,6	1.636,6
EDD con gas natural	7.442,5	6.500,2	5.195,1	3.535,0	1.742,4	1.380,3
EDI	4.604,1	4.604,1	4.604,1	4.087,5	4.087,5	4.087,5
Líneas bases						
(kg/día) (ª)						
(1) sin gas natural	6.158,6	5.954,5	5.062,4	4.202,2	4.077,9	4.141,8
(2) con gas natural	6.158,6	5.954,5	5.062,4	4.202,2	3.203,7	2.764,2
(3) flujo 96 & (1)	6.158,6	5.954,5	5.062,4	4.493,8	4.227,4	4.302,5
(4) flujo 96 & (2)	6.158,6	5.954,5	5.062,4	4.493,8	3.404,5	3.029,4

(ª) Véase texto para más detalles acerca de los contrafactuales.

Fuente: Elaborado a partir de los datos de PROCEFF.

PROCEFF les asignó la categoría de "fuente nueva" (en lugar de la categoría de "fuente existente" que ellos solicitaron originalmente) debido a importantes expansiones. Después de siete años, todas las fuentes se definen claramente como "nuevas" o "existentes".

El tamaño de las fuentes, medido por el flujo máximo de emisiones (F), varía ampliamente entre las fuentes. Para un año cualquiera a partir de 1993, la desviación estándar está bastante por sobre el promedio[19]. Entre las fuentes más pequeñas, puede parecer extraño observar algunas por debajo de los 1.000 m^3/hr. Éstas son fuentes existentes que en marzo de 1992 tenían un F mayor a 1.000 m^3/hr y que posteriormente disminuyó, pero que, sin embargo, decidieron permanecer en el Programa para mantener los derechos que habían recibido.

El F agregado también varía significativamente a través del tiempo. Son particularmente notorias las caídas en 1996 y nuevamente en 1997. Una explicación posible es que algunas fuentes existentes pueden haber decidido reducir su F para salirse del Programa, y que, cuando fue posible, algunas de las fuentes nuevas se separaron en unidades más pequeñas para evitar ser afectadas por el Programa. Aunque no podemos probar esta hipótesis para fuentes individuales, podemos hacer un test agregado usando las bases de datos de PROCEFF para las fuentes estacionarias más pequeñas que no están afectadas por el Programa de Compensación pero sí por la norma de emisión de los 112 mg/m^3 y por los episodios de preemergencia y de emergencia. Un resumen de estas fuentes más pequeñas se presenta en la Tabla 3, que indica que a pesar de que su número ha aumentado a través del tiempo, el F total se ha mantenido relativamente constante excepto por el año 1997, en que se alcanza un *peak*[20]. Esta observación tiende a sugerir que el cambio hacia capacidades más pequeñas para evitar el Programa de Compensación no ha sido importante.

La Tabla 2 muestra a su vez que la concentración de emisiones de las fuentes afectadas también varía ampliamente a través del tiempo y entre fuentes. Mientras algunas fuentes han cumplido desde el primer día del Programa, muchas otras han superado la norma de 112 mg/m^3 hasta 1997, como se muestra en la fila de "no-cumplidores". Esto proporciona evidencia clara de los problemas de fiscalización experimentados durante los pri-

[19] Recuérdese que el flujo máximo (F) de las fuentes que se transforman a gas natural se estima suponiendo que usan el combustible dual (petróleo # 2), para ser consecuente con el procedimiento que usa PROCEFF para estimar las emisiones diarias. Esta metodología disminuye F para estas fuentes solamente 1,145 veces, desde un promedio de 9.452 m^3/h a 8.255 m^3/h.

[20] No se puede descartar que el *peak* de 1997 se deba a problemas de recolección y procesamiento de datos.

TABLA 3: RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE LAS FUENTES NO AFECTADAS: 1993-1999

Variable	1993	1997	1998	1999
N° de fuentes	1616	1856	1963	1989
Flujo (F) (m^3/hr)				
Total	774.366,2	861.045,0	776.122,8	788.840,0
Promedio	478,9	462,7	394,4	395,2
Desv. estándar	461,3	412,0	237,4	232,1
Max.	6.654,0	5.318,6	1.220,0	1.065,6
Min.	0,0	0,0	0,0	0,0
Concentración (C) (mg/m^3)				
Promedio	39,4	37,1	35,3	33,2
Desv. estándar	20,0	12,8	10,8	9,6
Max.	469,9	189,3	107,8	89,8
Min.	1,5	3,8	5,7	4,1
Usuarios de gas natural	0	0	43	86
Emisiones (kg/día)	789,5	809,5	646,4	621,6

Fuente: Elaborado a partir de los datos de PROCEFF.

meros años del Programa. La adopción de combustibles más limpios ha llevado a una disminución importante en la concentración de emisiones, particularmente después de la introducción del gas natural en 1997[21]. Este combustible, importado desde Argentina, está disponible a precios muy convenientes, lo que ha significado que a julio de 1999, 179 de las 573 fuentes posibles ya lo han incorporado en sus procesos de producción.

De acuerdo a análisis de costos hechos por diferentes consultores y empresas, todas las conversiones al gas natural se han hecho principalmente por razones económicas independientemente del DS4[22]. Sin embargo, se puede cuestionar este argumento si se miran las acciones tomadas por fuentes más pequeñas no afectas al DS 4. La Tabla 3 muestra que en 1999 sólo una pequeña fracción de estas fuentes más pequeñas (86 de un total de 1989) se habían cambiado a gas natural. La razón principal de la diferencia

[21] Recuérdese que para ser consecuentes con el procedimiento utilizado por PROCEFF para estimar las emisiones diarias, la tasa de concentración (C) de las fuentes que se transforman a gas natural se estima suponiendo que usan el combustible dual (petróleo # 2). Esta metodología aumenta las concentraciones reales de estas fuentes 1,95 veces desde un promedio de 10,3 mg/m^3 a 20,1 mg/m^3, el que todavía es bastante inferior a C_0 = 56 mg/m^3.

[22] Entrevista personal con Víctor Turpaud, de Metrogas, octubre de 1999.

en las tasas de adopción entre las fuentes pequeñas y grandes es que éstas últimas se benefician mayormente por las economías de escala que resultan del costo fijo de convertirse, además de que tienen acceso a negociar descuentos por volumen[23].

La combinación de menores flujos de emisiones y menores concentraciones ha llevado a una fuerte caída en la capacidad diaria de emisiones (EDD) a través del tiempo, como se muestra en la última línea de la Tabla 2. Debido al procedimiento desarrollado por PROCEFF para estimar la capacidad de emisión de las fuentes que se están cambiando a gas natural, que consiste en usar el combustible dual (es decir, petróleo # 2) como el combustible real, nosotros también incluimos una estimación de las EDD totales usando gas natural (EDD c / GN) para las fuentes que se están cambiando. Independientemente si consideramos EDD o EDD c / GN, está claro que las metas medioambientales establecidas en el DS 4 han sido ampliamente cumplidas. Sorprende, sin embargo, el hecho de que, aun con los limitados niveles de fiscalización observados en 1997, la meta medioambiental se logró incluso antes de la introducción de gas natural.

En un esfuerzo por separar el efecto del Programa de Compensación y su mercado en la evolución observada de las emisiones, de otros factores tales como la introducción de gas natural, desarrollamos cuatro escenarios de líneas bases de capacidades de emisiones. Estos son escenarios hipotéticos de capacidad de emisión que se habrían observado en ausencia del Programa de Compensación de Emisiones, pero asumiendo que cada fuente cumple con la norma de concentración de 112 (mg/m^3). Para construir el primer escenario de línea base, se supone que el Programa de Compensación no afecta F, y que las concentraciones de las fuentes permanecen constantes en sus niveles de 1993[24]. Para fuentes nuevas que entran en 1993, usamos su propia concentración para ese año (que no es un mal supuesto dados los importantes problemas de fiscalización). Para fuentes nuevas que entran después de 1993, usamos la concentración media de las

[23] El número total de EDI ha disminuido a través del tiempo, porque algunas fuentes existentes a las que se les había asignado derechos de emisión en 1993, desaparecieron junto a sus derechos, los cuales no fueron vendidos. Nótese que nuestro número agregado de EDI se aproxima bastante al número informado por PROCEFF en julio de 1999, indicando un total de 3.981,6 EDI asignados a 401 fuentes. Para obtener nuestro dato a partir de los de PROCEFF, a estos últimos se les deben restar aquellos EDI asignados a fuentes que desaparecieron en 1997 y que nunca vendieron sus derechos (de manera que no están disponibles en el mercado), y se les deben sumar algunas fuentes activas existentes que aún están en el proceso de solicitar sus EDI.

[24] Se supone C = 112 para todas las fuentes para las cuales C > 112. El C promedio es, entonces, 74,0 mg/m^3.

fuentes nuevas que entran en 1993[25]. Debido a que el primer escenario no considera el gas natural, el segundo escenario supone que todas las conversiones a gas natural se deben a su bajo precio y que, por consiguiente, habrían tenido lugar independientemente del Programa de Compensación, tal como ya fue mencionado. Para controlar por la importante caída en F durante 1997, que algunos analistas pueden atribuir al Programa de Compensaciones porque la fiscalización sólo comenzó a mejorar alrededor de esa fecha, el tercer y cuarto escenario fijan los F individuales para los años 1997, 1998 y 1999 y los hacen iguales a los de 1996.

Durante el período 1993-1996, las capacidades de emisión reales siempre excedieron a las de los escenarios de líneas bases. Esto es porque en los cuatro escenarios de líneas bases se supone que todas las fuentes cumplen con la norma de los 112 mg/m^3, lo que ciertamente no ha ocurrido. En 1997, las capacidades de emisión agregadas cayeron por debajo de las líneas bases, lo que sugiere que el Programa de Compensación empezó a ser restrictivo en ese momento. Sin embargo, las capacidades de emisión agregadas estaban aún por debajo del número total de derechos de capacidad de emisión (EDI), lo que, en cambio, podría indicar algún tipo de ineficiencia, dado que los derechos no se pueden almacenar para su uso futuro[26]. Si rechazamos la explicación de la ineficiencia de mercado (o el cumplimiento autárquico) para la baja concentración en 1997, algunas fuentes deben haberse visto motivadas para convertirse a combustibles más limpios, dada la posibilidad de enfrentar un episodio de emergencia o simplemente porque combustibles más limpios y más baratos (distinto al gas natural) estaban disponibles. Mientras los participantes en la industria confirman que lo primero fue importante, para lo segundo no hay evidencia.

La llegada del gas natural en 1997, a precios muy bajos, hizo que muchas fuentes se cambiaran a ese combustible. Los escenarios # 2 y # 4, y particularmente las capacidades totales de emisión, cayeron bastante por debajo de los derechos de capacidad agregados. Debido a que para julio de 1999 casi todas las fuentes afectadas a las cuales les convenía económica y técnicamente cambiarse a gas natural ya lo habían hecho, la diferencia entre la capacidad de emisión real y la de los escenarios # 2 y # 4 debiera ser

[25] El C promedio 70,6 mg/m^3 fue adoptado para las 33 fuentes nuevas en 1993 y 13 fuentes no definidas en 1993 que posteriormente demostraron ser expansiones de fuentes existentes.

[26] El sobrecumplimiento puede ser óptimo cuando se permite almacenar los derechos (Schmalensee *et al.*, 1998).

explicada ya sea por los episodios de emergencia o por un cumplimiento autárquico, o por un poco de ambas. Así, es posible establecer dos hipótesis:

a) El límite agregado de capacidad del Programa de Compensación de Emisiones nunca ha sido restrictivo debido a la introducción del gas natural y a los episodios de emergencia.

b) Más allá de los efectos de los episodios de emergencia y el gas natural sobre la capacidad de emisiones, algunas firmas están cumpliendo con el Programa de Compensación de Emisiones de una manera autárquica, prestándole escasa atención al mercado.

Si a) es la hipótesis correcta, el bajo nivel de capacidad de emisión observado sería simplemente una respuesta económica a los factores de gas natural y emergencias, que son exógenos al programa. En otras palabras, el escenario de línea base sería el de la capacidad de emisión real. Si, en cambio, b) resulta ser la hipótesis correcta, la sobrerreducción de la capacidad de emisiones (o sobrecumplimiento) por debajo de los escenarios de líneas bases sería señal de una respuesta económicamente ineficiente al Programa.

Como a) requiere observación de un mercado de emisiones con bastantes transacciones y precios razonablemente bajos, las siguientes dos secciones desarrollan ejercicios numéricos para testear el desempeño del mercado. Un pobre desempeño del mercado sería un claro indicador de que el patrón de las capacidades de emisión y de la reducción de capacidades observado es más compatible con la hipótesis b).

5. Funcionamiento del mercado

Nuestro objetivo en esta sección es presentar los resultados de un ejercicio de simulación numérica para un mercado ideal que se usa como marco de referencia para contrastar sus resultados con los resultados observados en el mercado creado por el Programa de Compensación de Emisiones (volúmenes de transacción y precios)[27]. El ejercicio numérico intenta reflejar las reglas y las condiciones económicas exógenas al mercado descritas en las secciones anteriores.

[27] Para un análisis teórico de la construcción del ejercicio numérico, véase Montero *et al.* (2000).

5.1. Marco de referencia

Los datos para los cuatro escenarios de líneas bases se presentan en la Tabla 2. Los datos de costo marginal de abatimiento se obtuvieron de análisis econométricos e ingenieriles, basados en la información obtenida de la literatura doméstica y muchas entrevistas con operadores de la industria y vendedores de equipos de control[28]. Las emisiones de PTS pueden ser abatidas no sólo cambiando el tamaño del flujo máximo F, sino alternativa o adicionalmente instalando tecnología de filtros al final de la chimenea (filtros, precipitadores electrostáticos, ciclones y lavadores), o cambiándose de combustible (de leña, carbón o petróleo pesado a petróleo liviano, gas licuado o gas natural)[29].

Para entender la evolución del Programa y el efecto del gas natural sobre el mismo, dividimos el análisis en dos partes. Dado que las primeras conversiones de las fuentes industriales al gas natural ocurrieron a fines de 1997, la primera parte del análisis simula un mercado estático "antes del gas", usando datos de la base de datos de 1997 y suponiendo que el gas natural no estaba disponible ni se esperaba que estuviera disponible. En la segunda parte, simulamos un mercado estático "después del gas", usando datos de la base de 1999 y tomando en cuenta la disponibilidad del gas natural y todas las tecnologías de abatimiento ya instaladas en 1997.

La Tabla 4 resume los resultados de las simulaciones presentando las líneas bases de capacidad de emisión (i.e., proyecciones de EDD en un escenario sin regulación), derechos de capacidad (EDI) y requerimientos de reducción de emisiones para las simulaciones de los mercados "antes" y "después" del gas natural, seguidos de los resultados de equilibrio para un mercado competitivo sin fricciones. Los datos presentados en la Tabla 4 son para los escenarios de líneas bases # 2 y # 4. Si nos olvidamos de la disponibilidad del gas natural, la simulación del mercado "antes del gas" indica un precio de equilibrio entre US$6.600 y US$12.600 por kg/día y un volumen importante de transacciones de cerca de 1.800 kg/día; aproximadamente 45% del total de EDI. Considerando la introducción del gas natural, la simulación del mercado "después del gas" da un precio de equilibrio de cero (porque no hay requerimientos de reducción a nivel agregado), acompañado de un nivel todavía alto de transacciones cercano al 30% del

[28] Se reunieron datos para una submuestra de 225 fuentes existentes y 49 fuentes nuevas, para luego extrapolar al resto de la muestra.

[29] Es importante notar que en este análisis no se consideran los efectos de los episodios de emergencia y preemergencia en los costos marginales de abatimiento.

TABLA N 4: DATOS NUMÉRICOS Y RESULTADOS

Mercado	Contrafactual kg/día	Total EDI kg/día	q_T kg/día	p^* $/(kg/día)	Volumen kg/día
Antes del gas	4.202,2 (2)	4.087,5	114,7	6.600	1.844,9
	4.493,8 (4)	4.087,5	406,4	12.600	1.779,1
Después del gas	2.764,2 (2)	4.087,5	< 0	0	1.112,3
	3.029,4 (4)	4.087,5	< 0	0	1.164,9

Fuente: Elaboración propia.

total de EDI. Nótese que aun cuando el precio cae a cero, 333 fuentes, incluyendo 208 fuentes nuevas, deben cubrir sus capacidades de emisión con derechos.

5.2. Precios y transacciones observadas en el mercado

En esta sección examinamos si los precios y los volúmenes transados observados se alejan significativamente de aquellos predichos por los resultados de las simulaciones presentadas en la sección anterior. Las Tablas 5 y 6 muestran los precios y los volúmenes de transacción, respectivamente, que hemos recogido de diversas fuentes durante los últimos dos años. Antes de comparar estos números con aquellos predichos por los modelos de simulación, necesitamos clarificar dos temas. El primero es que todas las transacciones que se han dado, excepto una, han sido del tipo "a perpetuidad". La única transacción temporal ocurrió en diciembre de 1996, para cubrir capacidad de emisiones en un año[30]. El segundo tema es que las transacciones reportadas en la Tabla 5 corresponden a transacciones entre firmas no relacionadas[31].

El volumen total de emisiones, excluyendo la transacción de un año, fue entonces de 29,75 kg/día. Aun sin conocer todas las cantidades de la Tabla 5, este número es mucho más grande que el volumen de 3 kg/día de transacciones entre firmas no relacionadas y aprobadas que se reportan en la Tabla 6. Esto se debe a que algunas transacciones de la Tabla 5 corres-

[30] Se nos informó que este derecho de un año fue para una planta vieja que necesitaba cubrir sus emisiones por un año más antes de ser retirada.

[31] De otra forma no habría precio.

TABLA 5: PRECIOS Y TRANSACCIONES A JULIO DE 1999

Fecha	Precio 1998US$	Volumen kg/día	Tipo de transacción
Dic-96	16.558	N.D.	Derecho permanente
Dic-96	17.031	N.D.	Derecho permanente
Dic-96	14.193	0,9	Derecho por 1 año (*)
Abr-97	11.158	N.D.	Derecho permanente
Sep-97	12.274	1,2	Derecho permanente
Dic-97	35.705	N.D.	Precio solicitado por vendedor
Mar-98	5.895	2	Derecho permanente
Mar-98	11.579	1	Derecho permanente
Mar-98	11.579	N.D.	Precio solicitado por vendedor
Jun-98	6.316	N.D.	Derecho permanente
Jun-98	6.316	3,65	Derecho permanente
Jul-98	8.421	7,3	Derecho permanente
Ago-98	3.158	14,6	Derecho permanente
Oct-98	4.211	N.D.	Precio solicitado por vendedor

(*) Ésta es una venta de un derecho por un año en US$1.419 que convertimos en una venta de derecho permanente usando una tasa de descuento real de 10%.

Fuentes: Elaborado a partir de información obtenida de Ambar (Alejandro Cofré), *El Mercurio*, Gestión Ambiental, Metrogas, PROCEFF y SESMA.

TABLA 6: VOLUMEN DE TRANSACCIONES A JULIO DE 1999

	# Fuentes	kg/día
EDI totales asignados	401	3.981,3
Compensaciones aprobadas	32	159,7
Compensaciones internas (intrafirma)	30	156,7
Compensaciones externas (interfirmas)	2	3,0
Compensaciones internas/externas bajo revisión	27	104,5
Ventas que no consideran una compensación	10	72,9
Actividad total de transacciones	69	337,1
Compensaciones requeridas de fuentes nuevas hasta 1999	208	427,6

Fuente: Elaborado a partir de los datos de PROCEFF.

ponden a ventas que no involucran directamente una compensación, mientras que otras corresponden a transacciones que aún están bajo evaluación en PROCEFF, lo que claramente demuestra lo extenso que puede ser el proceso de aprobación de una compensación.

Mientras los precios efectivos desde diciembre 1996 hasta 1997 no se alejan demasiado de los precios predichos por la simulación del mercado "antes del gas", el volumen de transacciones es sólo un 9% de lo esperado cuando incluimos solamente las transacciones aprobadas (159,7/1844,9) y un 18% de lo esperado para todas las transacciones (337,1/1844,9). La introducción de gas natural ha tenido importantes efectos en los precios efectivos, pero éstos son aún altos si se estima que en todos los casos las líneas bases de emisiones caen bajo el límite de las emisiones, como ya se ha mostrado en la simulación del mercado "después del gas". Si el volumen transado observado está muy por debajo de lo predicho por el modelo, tendríamos una indicación de ineficiencia del mercado.

Se podría argumentar que el alto precio de los derechos y el bajo volumen transado se debe a que las fuentes están guardando sus derechos, debido a los límites cada vez más estrictos sobre PTS impuestos por el Plan de Descontaminación. Aparentemente, el Plan reduce el número total de derechos en poder de las fuentes existentes, restringiendo C_0 en la ecuación (1) desde 56 mg/m^3 hasta 50 mg/m^3 durante el período que va desde el año 2000 al 2004 y a 32 mg/m^3 de ahí en adelante[32]. Esto implica que el número total de EDI en el mercado disminuirá, a lo más, a 3.649,6 kg/día durante el período 2000-2004 y a 2.335,7 kg/día de ahí en adelante. A pesar de que los precios positivos de hoy podrían justificarse, si se considera que en uno de los escenarios la línea base de emisiones es más alta que el límite del 2005, la pregunta de por qué ha habido sobrecumplimiento, incluso ya en 1997, permanece vigente.

Mientras parte del significativo sobrecumplimiento (producto de un cumplimiento autárquico) se puede deber a una respuesta económica a la probabilidad de que ocurran episodios de emergencia y preemergencia, argumentamos más adelante que hay varios elementos que afectan el desempeño del mercado y que pueden tener responsabilidad en el sobrecumplimiento observado. Es importante destacar que no estamos afirmando que, necesariamente, los beneficios netos del sobrecumplimiento sean negativos (véase, por ejemplo, Oates, 1989); sino sólo que es un síntoma de imperfección de mercado.

[32] Decimos "aparente" porque no está claro si el límite será estrechado tomando en consideración todos los derechos asignados o sólo aquellos en poder de las fuentes existentes.

6. De la teoría a la práctica

En esta sección discutimos los elementos que creemos están afectando el desempeño del mercado y ofrecemos recomendaciones donde pensamos que hay espacio para mejorar.

6.1. Incertidumbre regulatoria

El primer problema enfrentado por las autoridades ambientales después de la publicación del DS 4 en marzo de 1992, fue la urgente necesidad de desarrollar las capacidades institucionales, que simplemente no existían en ese momento, para regular las fuentes fijas. PROCEFF fue creado para realizar las tareas de compilar un registro completo de las fuentes fijas considerando sus niveles de emisión y de concentración, y desarrollar reglas y normas de medición y análisis según los principios de la libre entrada sujeta a ciertas consideraciones técnicas. El registro y control de las emisiones de las fuentes fijas permitieron recolectar información acerca de fuentes que no habían sido previamente identificadas y, por lo tanto, cuya contribución al total de emisiones de material particulado no había sido cuantificada.

Por un lado, este proceso de inventario y registro de las fuentes fijas fue quizás uno de los principales logros del Programa de Compensación, dado que permitió la identificación y la inspección de todas las fuentes fijas, incluyendo aquellas que emitían por sobre la norma establecida. Por otra parte, dejó al descubierto importantes diferencias entre los inventarios de emisiones iniciales y las emisiones efectivas, suscitando un importante tema de política para la aplicación de un esquema de permisos transables que se relaciona con la asignación inicial de permisos.

En el caso del DS4, los derechos se asignaron a todas las fuentes existentes, reconociendo implícitamente derechos históricos. Sin embargo, cuando se asignan derechos de emisión iniciales de este modo, se debe conocer con precisión el número y tamaño de las fuentes existentes. Éste no fue el caso del Programa de Compensación de Emisiones. Apareció un significativo número de fuentes nuevas cuya existencia se ignoraba, lo que creó gran incertidumbre en torno al Programa y la posibilidad de transar. Esta incertidumbre llevó a PROCEFF a concentrar toda su actividad reguladora en la cuantificación de las fuentes y las emisiones. Como resultado, no se autorizaron compensaciones durante los tres primeros años del Programa.

Posteriormente y en particular después de la introducción del gas natural a finales de 1997, la autoridad encontró que la asignación inicial de derechos había resultado ser muy generosa. En un esfuerzo por revertir esta situación, se les exigió a las nuevas fuentes registradas después de junio de 1998, que compensaran un 120% de sus emisiones. En una decisión reciente, la autoridad ambiental aumentó para las fuentes nuevas los requerimientos de compensación a un 150%. Además, actualmente se están agregando nuevas provisiones al Plan de Descontaminación de Santiago para reducir, de una manera que está por definirse, el número de derechos existentes.

6.2. Elevados costos de transacción y procesos de aprobación largos y engorrosos

Los procedimientos bajo los cuales opera el sistema son bastante engorrosos, lo que por un lado genera elevados costos de transacción y gran incertidumbre respecto a la aprobación de compensaciones. El hecho de que no exista un mercado formal para los derechos de emisión incide en que existan elevados costos de búsqueda, lo que eleva aun más los costos de transacción. La Tabla 6 ofrece evidencia al respecto. Por un lado, el volumen de transacciones intrafirma (i.e., transacciones entre fuentes de una misma firma) es bastante mayor que el volumen de transacciones interfirma (i.e., transacciones entre fuentes de distintas firmas). Además, un importante número de transacciones están aún en proceso de aprobación.

6.3. Débil fiscalización

Debido a la escasez de recursos, la fiscalización del Programa siempre ha sido bastante débil. Durante los primeros años del Programa hubo problemas de fiscalización tanto para hacer aplicar la norma de emisión de 112 mg/m^3 como para llevar la contabilidad de los derechos de emisión que cada fuente debe mantener para cubrir sus emisiones. Después de 1997, el primer problema fue resuelto, pero los problemas relacionados con la necesaria reconciliación entre derechos y emisiones han permanecido. Nótese, por ejemplo, en la Tabla 6, la diferencia entre el volumen total de transacciones (337.1 kg/día) y el total de derechos requeridos para las fuentes nuevas (427.6 kg/día)[33].

[33] No cabe duda de que la fiscalización está mejorando. Cifras recientes entregadas por SESMA, en noviembre de 1999, muestran un importante aumento en las transacciones

6.4. Poder de mercado

Otro tema crítico del esquema bajo análisis es la elevada concentración de derechos que se ha dado. La agrupación de las fuentes de acuerdo a su propiedad usando el número del RUT, muestra que 21 firmas poseen el 50% de los derechos totales; 5 firmas poseen el 31% de los derechos. Luego el mercado tiene un grado de concentración que puede explicar, en parte, la escasa oferta de permisos y su alto precio (Hahn, 1983).

6.5. Mercado poco líquido

Una razón para la liquidez del mercado estriba en que los potenciales vendedores no están dispuestos a vender debido a que no tienen la certeza de que después podrán comprar de vuelta derechos de capacidad si los necesitan para expandir sus actuales fuentes o instalar nuevas fuentes. Otra razón se refiere a las restricciones de monitoreo. Debido a que es imposible monitorear diariamente las emisiones de PTS, la unidad de cambio que se transa es un "derecho permanente" en vez de algo más líquido como un "derecho anual". La implicancia es que en un mercado poco líquido los compradores pagan precios que están muy cercanos a sus precios de reserva, los cuales están por encima de lo que normalmente se podría considerar como precios competitivos. Este escenario es completamente coherente con lo que se observa en el Programa de Compensaciones: las firmas están pagando precios altos a pesar de que existe exceso de oferta a nivel agregado.

Pareciera ser que la autoridad no colocó demasiada atención en las instituciones básicas que se requieren para que un mercado se desarrolle, tales como la existencia de licitaciones anuales de derechos, y la existencia de una unidad de cambio más líquida. Licitaciones anuales ayudan a la creación de un mercado al entregar señales de precios más estables y dar acceso a las fuentes nuevas a comprar directamente los permisos. En un esfuerzo por tener más transacciones del tipo anual, tal como la única que aparece en la Tabla 5, la autoridad debería desarrollar una unidad de cambio más líquida. Dadas las limitaciones de monitoreo inherentes a las mediciones anuales, un derecho de capacidad diario de sólo un año de duración,

---

totales a 488.96 kgs/día. El mayor aumento fue en el número de compensaciones bajo revisión, el que aumentó a 246.44 kgs/día. Las compensaciones aprobadas también aumentaron a 161.13 kgs/día y las ventas que no involucraron una compensación crecieron a 81.39 kgs/día.

sin la posibilidad de guardarlo para años posteriores, resolvería en parte el problema de poca liquidez sin comprometer las metas ambientales del DS 4 ni imponer una carga extra sobre el regulador.

6.6. Limitado alcance del programa

La pregunta de cuáles fuentes pueden participar en el sistema se torna particularmente relevante cuando uno considera que los procesos industriales, que representan más del 50% del material particulado generado por fuentes fijas, han sido excluidos del sistema. Por una parte, esta exclusión crea incertidumbre de mercado adicional porque en algún momento en el futuro estas fuentes pueden verse afectadas y entrar al mercado como vendedoras o compradoras netas afectando las expectativas de precios futuros. Al mismo tiempo, esta exclusión le resta liquidez del mercado. En consecuencia, una implicancia directa de política para promover un mercado activo y competitivo de derechos de emisión radica en incluir cada vez más fuentes al sistema, comenzando por los procesos industriales. Incluso puede ser necesario considerar la inclusión al sistema de las fuentes móviles que son emisoras importantes de PM10, especialmente los buses diesel.

7. Conclusiones

En los últimos años se ha visto un renovado interés en el uso de instrumentos económicos, particularmente de permisos o derechos transables, para el control de la contaminación atmosférica. En este trabajo se ha evaluado el Programa de Compensación de Emisiones establecido por el Decreto Supremo Nº 4 en marzo de 1992 para controlar las emisiones de partículas totales en suspensión provenientes de fuentes fijas en Santiago.

Nuestro análisis muestra que el Programa ha tenido un buen desempeño desde una perspectiva ambiental, debido a factores exógenos a éste, tal como la introducción, por razones económicas, de gas natural. Desde una perspectiva económica, sin embargo, nuestros resultados muestran que el mercado de emisión de material particulado no ha operado bien debido a la existencia de incertidumbre regulatoria, altos costos de transacción, procesos de aprobación largos y complejos, y una fiscalización inadecuada. Resulta desafortunado que en la búsqueda del cumplimiento de las metas ambientales, la autoridad ambiental no haya prestado suficiente atención al establecimiento de condiciones que ayudaran al desarrollo del mercado. Sin

embargo, la asignación de derechos de emisión en función de derechos históricos creó incentivos económicos para que las fuentes existentes declararán sus emisiones con el objeto de solicitar los derechos de emisión, lo que ciertamente ayudó a que la autoridad ambiental realizara en forma relativamente más rápida el inventario de emisiones y fuentes.

REFERENCIAS

Banco Mundial (1997). "Five Years after Rio: Innovations in Environmental Policy". Rio + 5 Edition, Draft for Discussion, Banco Mundial, Washington, DC, marzo.

CONAMA (1997a). "Inventario de Emisiones Atmosféricas de la Región Metropolitana para 1997 y Proyecciones al 2005". Publicación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para la Región Metropolitana, Santiago, Chile.

CONAMA (1997b). "Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana". Santiago, Chile.

Ellerman, A. D.; y Montero, J. P. (1998). "The Declining Trend in Sulfur Dioxide Emissions: Implications for Allowance Prices". *Journal of Environmental Economics and Management*, 36, 26-45.

Hahn, R. W. (1989). "Economic Prescriptions for Environmental Problems: How the Patient Followed the Doctor's Orders". *Journal of Economic Perspectives*, 3, 95-114.

Hahn, R. W. (1983). "Market Power and Transferable Property Rights". *Quarterly Journal of Economics*, 99, 753-765.

Jacoby, H. D.; Schmalensee, R.; y Sue Wing, I. (1999). "Toward a Useful Architecture for Climate Change Negotiations". Informe N° 49, MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, mayo.

Instituto Libertad y Desarrollo (ILD) (1999). Descontaminación de Santiago: Un Plan que No Funciona. *Boletín* N° 442, julio.

Montero, J. P. (1998). "Marketable Pollution Permits with Uncertainty and Transaction Costs". *Resource and Energy Economics*, 20, 27-50.

Montero, J. P., Sánchez, J. M.; y Katz, R. (2000). "A Market-Based Environmental Policy Experiment in Chile". Working paper N° 2000-05, Center for Energy and Environmental Policy Research, Massachusetts Institute of Technology.

Oates, W. E.; Portney, P. R.; y McGartland, A. M. (1989). "The Net Benefits of Incentive-Based Regulation: A Case Study of Environmental Standard Setting". *American Economic Review*, 79, 1233-1244.

Ostro, B.; Sánchez, J. M.; Aranda, C.; y Eskeland, G. (1996). "Air Pollution and Mortality: Results from a Study of Santiago, Chile". *Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology*, 6 (1), 97-114.

Ostro, B.; Eskeland, G.; Sánchez, J. M.; y Feyzioglu, T. (1999). "Air Pollution and Health Effects: A Study of Medical Visits Among Children in Santiago, Chile". *Environmental Health Perspectives*, 107 (1).

PROCEFF (1993-1999). "Bases de Datos desde 1993 hasta 1999". Programa para el Control de Emisiones de Fuentes Fijas. Santiago.

Schmalensee, R.; Joskow, P. L.; Ellerman, A. D.; Montero, J. P.; y Bailey, E. M. (1998). "An Interim Evaluation of Sulfur Dioxide Emissions Trading". *Journal of Economic Perspectives*, 12, 53-68.

Stavins, R. (1995). "Transaction Costs and Tradeable Permits". *Journal of Environmental Economics and Management*, 29, 133-148.

Tietenberg, T. H. (1985). *Emissions Trading*: *An Exercise in Reforming Pollution Policy*. Washington, DC: Resources for the Future. □

CHILE Y ARGENTINA: REPRESENTACIÓN Y PRÁCTICAS REPRESENTATIVAS PARA UN NUEVO MUNDO*

Ana María Stuven

Desde una perspectiva de cultura política, este artículo indaga en torno a los conceptos de representación que manejaron los forjadores de las nuevas naciones, alternando entre el análisis de las ideas y las prácticas políticas. Se concluye que aunque las elites buscaran postergar el ejercicio de la ciudadanía moderna, siempre existió un sentido del rol de la representación en su proyecto de Estado y nación.

ANA MARÍA STUVEN. Doctorada en Historia por la Universidad de Stanford. Profesora/investigadora de los Institutos de Ciencia Política e Historia de la P. Universidad Católica de Chile. Se ha dedicado especialmente a investigar temas de pensamiento y cultura política latinoamericana y chilena. Recientemente publicó el libro *La Seducción de Un Orden: Las Elites y la Construcción de Chile en las Polémicas Culturales y Políticas del Siglo XIX* (Santiago: Ediciones Universidad Católica, 2000).

* Este artículo fue elaborado en el marco del Proyecto ECOS/Conicyt "Democracia Representativa y Desarrollo Democrático en Chile, Argentina y Francia" realizado en conjunto por los Institutos de Ciencia Política de la P. Universidad Católica de Chile y el Institut d'Études Politiques de la Fondation Nationale de Sciences Politiques de Francia.

Una nueva legitimidad para el Nuevo Mundo

"La soberanía reside en el pueblo [...] es una e indivisible, imprescindible e inalienable"[1]. La afirmación, publicada en el "Catecismo de los Patriotas", escrito por fray Camilo Henríquez en 1813, es representativa del tenor de muchos otros "catecismos" políticos publicados en América durante los confusos tiempos que se inauguraron con el cautiverio de Fernando VII, la formación de las primeras juntas de gobierno, y que desembocaron en los procesos de independencia. Incluso anterior a este texto es el *Catecismo Público para la Instrucción de los Neófitos o Recién Convertidos al Gremio de la Sociedad Patriótica*, publicado en Buenos Aires, en 1811, y cuyo propósito fue destruir los temores existentes por las nuevas instituciones que se creaban. También destacó entre estos textos el *Catecismo* o *Dispertador Patriótico Cristiano y Político*, que circuló en la provincia de Salta y se proponía dar a conocer "la sagrada causa" por medio de la cual el continente americano "se propone recuperar su soberanía, su imperio, su independencia, su gobierno, su libertad y sus derechos"[2]. Estos escritos, y otros que circularon en Nueva Granada, Guatemala, México y también en la península ibérica, reúnen las primeras expresiones discursivas de un ideario republicano moderno aplicadas al contexto latinoamericano. Una serie de términos, conocidos hasta ese momento como explicativos de nuevas realidades políticas, sobre todo francesas, debieron ser sometidos a una rápida conceptualización ante los eventos que comenzaban a desmoronar la legitimidad monárquica. Soberanía, patria, pueblo, representación, ciudadanía, nación, son los conceptos que permiten definir y simultáneamente crear una nueva institucionalidad, nuevos actores y nuevos idearios, al interior de los cuales se debatan las nuevas formas de legitimidad política.

Se inicia así un proceso de reemplazo de la legitimidad monárquica, de carácter histórico y tradicional, por una nueva legitimidad que, por surgir en oposición a la anterior, necesariamente debe ser moderna y, por lo tanto, estar vinculada con las nuevas legitimidades de la modernidad ilustrada y racionalista. El espacio vacío que se produce ante la desaparición de la figura orgánica de la monarquía y el monarca sólo puede ser llenado, en las conceptualizaciones políticas de comienzos del siglo XIX, desde racionalizaciones que permitan superar no sólo las formas políticas de la monar-

[1] Camilo Henríquez, "El Catecismo de los Patriotas" (18l3).

[2] Ver Rafael Sagredo B., "Actores Políticos en los Catecismos Patriotas Americanos" (1994), pp. 273-298.

quía, sino también las estructuras sociales en que ésta se sustentaba. Así, aunque los actores sociales mantengan comportamientos, valores, vínculos e imaginarios tradicionales, deben dar paso, al menos discursivamente, a nuevos actores que ocupan el espacio moderno. El pueblo, hasta ese momento definido como el habitante de un territorio, o como una comunidad con vínculos de tipo tradicional, se convierte en el depositario de una soberanía que no se aliena. En su definición como nueva realidad político-social, el pueblo asume calificaciones: pueblo libre, pueblo patriota, o pueblo soberano; son pueblo los ciudadanos, los conciudadanos, los hombres libres, como afirman los catecismos argentinos de 1811. Hay metáforas sintomáticas, como la del "Catecismo Político Cristiano", de 1810, firmado por José Amor de la Patria, cuando dice que el pueblo es "rey [...], sus delegados, sus diputados o representantes mandan a su nombre, le responden de su conducta y tienen la autoridad por cierto tiempo. Si no cumplen bien con sus deberes, el pueblo los depone y nombra en su lugar otros que correspondan mejor a su confianza"[3]. El mismo texto consagra la noción de igualdad, al afirmar que el gobierno republicano democrático es el que "más acerca y el que menos aparta a los hombres de la primitiva igualdad en que los ha creado el Dios omnipotente"[4]. Es en realidad un nuevo tipo de hombre que se convierte en actor y que reemplaza todas las figuras del pasado monárquico. Se trata del ciudadano libre que en el "Catecismo político Cristiano", tiene "derechos y prerrogativas"[5]. En el "Catecismo de los patriotas" estos derechos aparecen definidos como "la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión"[6].

Los catecismos son los primeros escritos a los que podemos apelar en búsqueda de un texto que nos permita comprender el enfrentamiento conceptual que significaron los procesos de emancipación[7]. La referencia a derechos, propios del "nuevo hombre libre", construye un nuevo andamiaje que sustenta el concepto de soberanía popular y conduce a la consagración del régimen republicano como garantía de los derechos de los nuevos actores. En la medida en que el "Catecismo Político Cristiano" define este régimen como "aquel en que manda el pueblo por medio de sus representantes o diputados que elige", la noción de representación política y de mandato popular se erige como un pilar fundamental de la república[8].

---

[3] José Amor de la Patria, "Catecismo Político Cristiano" (1943), p. 97.

[4] Ibídem, p. 97.

[5] Ibídem, p. l06.

[6] Camilo Henríquez, "El Catecismo de los Patriotas" (1813).

[7] Para una reflexión sobre los catecismos en Hispanoamérica, ver Rafael Sagredo B., "Actores Políticos en los Catecismos Patriotas Americanos" (1994)

[8] Camilo Henríquez, "El Catecismo de los Patriotas" (1813), p. 96.

En su trabajo sobre la relación entre la modernidad y las independencias en Hispanoamérica, François-Xavier Guerra sostiene que el problema de la representación en América surge para justificar el rechazo a Napoleón. Es decir, no es sólo un concepto clave en la formación de la república, sino anterior a ella, en la medida en que la formación de juntas en España es una forma improvisada de representación de la sociedad. Esto porque la lealtad al rey cautivo sólo podía argumentarse apelando a la soberanía del reino, del pueblo o nación para justificar la resistencia al invasor. En ese sentido, el concepto de representación contribuye a llenar el espacio vacío dejado por la figura del monarca, con una nueva forma de legitimidad política transferible desde las juntas de gobierno legitimistas a las repúblicas independientes[9]. El problema que se agudiza con la Independencia, como también insinúa Guerra, es la imagen de la nación representada: cómo transitar desde la soberanía del reino a la soberanía de la nación. Es decir, el concepto de nación que subyace en las expresiones sobre la representación. Para unos, se trata de una nación moderna formada por individuos, mientras otros conciben una nación antigua equivalente al reino, formada por cuerpos. En ese sentido, puede afirmarse que la discusión sobre la noción de representación da origen no sólo a la pregunta sobre la soberanía popular y el pueblo, sino también a la pregunta sobre la nación y quienes la componen. Los catecismos enuncian la "doctrina", pero se encuentran muy lejos de vincular ésta con las prácticas políticas que le deben acompañar, y aún más lejos de aquellas prácticas que surgieron con la Independencia. El régimen monárquico se había apoyado en concepciones y prácticas que correspondían a la sociedad tradicional, premoderna, de cuerpos que tienen fueros y adoptan acciones colectivas. La república impone el paso a la sociedad moderna, lo que a su vez implica, por ejemplo, superar el voto corporativo y pasar al voto individual como forma de aplicar la representación. Supone, en definitiva, superar una lógica comunitaria y estamentaria, todo lo cual evidentemente no surge con las decisiones que exigen el quiebre de la legitimidad monárquica y su sustitución por una legitimidad republicana.

Este encuentro no siempre armónico entre una sociedad que hace el tránsito hacia la república desde una cultura y valores tradicionales, y un sistema político que impone ciertas prácticas difíciles de asimilar para la mentalidad de las clases dirigentes, es el origen de gran parte de los mitos que pueblan la historia desde el punto de vista del desarrollo democrático

[9] François-Xavier Guerra, *Modernidad e Independencias. Ensayos Sobre las Revoluciones Hispánicas* (1993), p. l78 et passim.

latinoamericano. La creencia en una "ficción democrática" y en unas clases dirigentes manipuladoras, que adoptaban principios liberales pero querían marginar al pueblo de sus derechos, se origina en una mirada que busca, desde las prácticas políticas, denunciar las incoherencias con los principios formulados, a fin de acusar a sus gestores. Este argumento ha sido muy usado en el caso argentino, donde la provincia de Buenos Aires fue la primera en instaurar, ya en 1821, el principio de la democracia electoral: un hombre un voto, aunque los vicios de procedimiento impidieron todos los avances democráticos de esta ley[10]. Sin embargo, creemos que esa visión adolece de errores: en primer lugar, aplica definiciones actuales de conceptos al discurso decimonónico, y en segundo lugar, desconoce la cultura política que inspiraba y daba contenido a las prácticas de las clases dirigentes latino-americanas. Por ejemplo, si la mirada se pone en la historia electoral, desde el punto de vista de los resultados electorales, evidentemente en Chile éstos siempre favorecieron a los candidatos del Ejecutivo. Aún más, es erróneo hablar de candidatos cuando en realidad las elecciones sólo legitimaban autoridades ya en función, o que eran designadas en el palacio de gobierno. En el caso argentino, a pesar de la fuerte politización de la vida pública, existió siempre una muy baja participación e indiferencia hacia el escrutinio. La conclusión de este análisis debiera conducirnos a consagrar el mito de la ficción democrática. No obstante, si se miran el contenido del discurso y los argumentos en cuestión; si se coloca la historia electoral en el marco del proceso de adaptación de la clase dirigente a la nueva realidad de la política republicana; si se le inserta en su visión predominante del mundo y del destino de la sociedad, se hacen inteligibles conceptos y prácticas que, aislados, no conducen a la comprensión de los procesos históricos que nos ocupan. En resumen, lo que afirmamos es que el uso de los conceptos de representación, ciudadano, o soberanía, no necesariamente indica que las elecciones se asociaran efectivamente a la noción de representación que define la teoría política.

Desde esta última perspectiva, este trabajo intenta comprender la noción de representación política que tenía la clase dirigente chilena, y presentar algunos elementos comparativos con el caso argentino, siendo que ambas habían bebido prácticamente de las mismas fuentes doctrinarias

[10] Ver Pierre Rosanvallon, *Le Sacré du Citoyen. Histoire du Suffrage Universel en France* (1992). Rosanvallon señala claramente, para el caso francés, cómo los aspectos prácticos de aplicación de una ley son fundamentales, en la medida en que pueden contrabalancear las conquistas democráticas por las ambigüedades en su aplicación. Aparece citado en el artículo, no publicado aún, de Pilar González Bernaldo, "Los Clubes Electorales Durante la Secesión del Estado de Buenos Aires, 1852-1861. La Articulación de Dos Lógicas de Representación Política en el Seno de la Esfera Pública Porteña".

europeas. La visión que ambas clases dirigentes tenían del pueblo y de la nación como depositarios de la soberanía era fuente de inspiración para sus proposiciones legislativas en materias electorales, para su relación con el Ejecutivo y, en general, para el otorgamiento de los derechos que correspondían a la sociedad. El análisis privilegia un enfoque de cultura política, es decir, de los valores, las normas y los sentimientos que informan la actitud de la elite hacia la representación. Todo ello en el marco de la tensión que introduce la república entre el ideario y el contexto social en que se aplica; entre el idealismo y el realismo. Un buen ejemplo de esta tensión son los artículos que publicó Antonio José de Irisarri en *El Semanario Republicano*, uno de los primeros periódicos del nuevo Estado chileno. Allí ensalzaba el régimen republicano y revelaba su imaginario: "Nos figuramos un Estado regido sobriamente por la voluntad general, en donde las leyes más justas protegen los derechos del hombre, sin atender a sus riquezas ni a sus relaciones, en donde los intereses públicos no pueden equivocarse, porque son ventilados por la multitud; finalmente, creemos que no hay más que decir república para decir felicidad"[11]. Sin embargo, su visión de la realidad social chilena, y del pueblo soberano, le hace ser simultáneamente temeroso de la "soberanía tan extensa" y recomendar cautela: "La astucia de algunos individuos, sobre la falta de ilustración de la masa popular, ha sido siempre el escollo en que perecen las repúblicas"[12]. Entre los porteños líderes de la Revolución de Mayo prosperaron inicialmente los mismos principios liberales. Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo, impusieron su confianza en el futuro republicano americano. "El mundo", decía Moreno, "no ha visto muy a menudo un entorno como éste, en el cual se puede modelar una constitución que otorgará la felicidad al pueblo"[13]. Paralelamente, sin embargo, en su artículo "Sobre la Libertad de Escribir", sostenía que "[...] las masas del pueblo existirán en vergonzoso barbarismo, si no se les da la completa libertad de expresión en cualquier materia, *siempre y cuando ésta no se oponga a las sagradas verdades de nuestra religión y a las decisiones del gobierno, que siempre merecerán nuestro mayor respeto*"[14]. Notable es en este contexto la carta que envió Alberdi a su amigo Esteban Echeverría a propósito de la ley electoral de 1821: "Este sistema dio los frutos que siempre dará: mientras la plebe sea llamada a votar, elegirá niños que dirán frases bonitas"[15]. Entre ambas afirmaciones escurren las aguas del conflicto enunciado.

[11] Citado en Gonzalo Izquierdo F., *Historia de Chile* (1990), tomo II, p. 28.
[12] Ibídem, p. 29.
[13] José Luis Romero, *A History of Argentine Political Thought* (1963), p. 71.
[14] Ibídem, p. 70.
[15] Ibídem, p. l37.

En este trabajo privilegiaremos justamente el espacio que queda entre las concepciones de lo que las elites conocen conceptualmente como la república, y que para nosotros hoy es moderna, y las restricciones que naturalmente surgen en sus mentes para su aplicación. En ese espacio se da, en cierto modo, una tierra de nadie, en la medida en que no puede completarse su comprensión sólo desde la historia social ni tampoco desde la historia intelectual. Se trata de que lo intelectual potencie el conocimiento del mundo social, y que la política aparezca como práctica social. Es decir, por una parte están las ideas, y por otra, estas rigideces, o restricciones, que separan el mundo de referencias teóricas del mundo del contexto. Consideramos que esa paradoja se origina en una cultura política articulada en torno a nociones tan estrictas de orden social, que todo desarrollo político de inclusión social o de fortalecimiento de la igualdad, incluido por supuesto el sufragio, gatilla mecanismos de defensa contra lo que fácilmente puede ser percibido como el fantasma de la anarquía, o la desintegración social. La cultura política permite identificar bien los canales por donde fluye la continuidad en las mentalidades, en la subjetividad, en las formas de sociabilidad e incluso en las actitudes de la elite frente a la política. Como la pregunta no va enfocada sólo al mundo abstracto de las ideas de la elite, sino que también a lo muy figurativo, se trata de cotejar el discurso racional con las otras fuentes que permiten conocer formas de expresión más espontáneas y, por lo tanto, que reflejan mejor esta relación entre intelecto y contexto. Por eso, además de los debates y discursos parlamentarios como arena específica donde se discute la representación, se incluye como fuente la prensa, gran vía de expresión de la nueva opinión pública y de intercambio intelectual. “Ella contiene todas las verdades, todos los principios destinados a reemplazar el lote que la tradición nos ha legado”, decía un artículo publicado en 1844[16].

Respecto del contenido doctrinario de donde bebían los futuros dirigentes políticos chilenos y argentinos, era el propio del movimiento ilustrado. Los pensadores franceses, ingleses y españoles figuraban en las bibliotecas de las familias educadas. El liberalismo se introdujo junto con las mercaderías de los barcos que recalaban en Montevideo y Buenos Aires, o venían en los baúles de los más pudientes. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Raynal, el abate Sieyès, entre los franceses. Robertson, Burke, Locke, Hobbes y Bentham y Mill entre los ingleses. De España, Campomanes y Jovellanos eran los autores privilegiados. La revolución francesa y la independencia americana eran el foco de atención en el proyecto político de las nuevas repúblicas.

[16] “Las Reformas” (1844).

Las primeras legislaciones electorales, 1810-1830

Hemos mencionado que en los trabajos de Guerra se afirma que la idea de representación se torna necesaria en América para justificar la resistencia a Napoleón. En Chile, la primera Junta Gubernativa del reino, legitimista, reunida el 18 de septiembre de 1810, prometió "[...] convocar a las provincias a la elección de sus diputados...", otorgando el derecho a sufragio a los jefes de todas las corporaciones, prelados de comunidades y vecinos nobles. Se trata del primer reglamento electoral para Chile, donde aún puede verse cómo se consagra la legitimidad política de acuerdo a cánones coloniales, corporativos, donde la representación del reino es asumida por las ciudades principales. De hecho, esta Junta se funda sobre la idea de que la comunidad está reasumiendo el ejercicio de la soberanía en nombre del rey, como lo habían sostenido siglos antes los nuevos escolásticos de la escuela de Salamanca.

La situación en el momento de la ruptura independentista no ofrece grandes diferencias entre Chile y Argentina. El problema de la nación, de las diferencias características de ambas elites, y el del Estado unitario, donde se plasmarán las distintas experiencias en el campo de la representación, aún no surgen como definitorios. Las normas electorales fueron, como en el caso chileno, anticipadas por las que dictaron la Junta Central de España e Indias y el Concejo de Regencia para elegir diputados americanos, entre 1809 y 1810. Así fue como la Junta argentina convocó también en 1810 a "la parte principal y más sana del vecindario" para elegir sus representantes, y como, al igual que en Chile, el Cabildo continuó siendo la institución que definió el espacio político y rigió el sistema de representación. Vecino y ciudadano fueron sinónimos en ambos países y los términos que marcaron la transferencia, al menos conceptual, de la representación antigua a la moderna.

En el momento de instauración de la república, los conceptos socializados a través de los catecismos y de las lecturas ilustradas de la elite sugerían los lineamientos de la construcción institucional. Es por eso que una de las primeras medidas de la Junta de Gobierno chilena fue convocar a un Congreso Nacional, cuyas sesiones se abrieron el 4 de julio de 1811. En su discurso, el diputado Camilo Henríquez calificó a aquél como "la alta representación del estado". También afirmó que la nación chilena tiene derechos, "en cuya virtud puede el cuerpo de sus representantes establecer una constitución y dictar providencias que aseguren su libertad y felicidad"[17]. Todo ello, apoyado "en los principios de la religión católica relati-

[17] "Oración pronunciada por el diputado Camilo Henríquez en la inauguración del primer Congreso Nacional", *Páginas de la Independencia Nacional* (1975).

vos a la política [...]". Es decir, apoyado en legitimidades tradicionales, producto del manejo providencial de la historia, Camilo Henríquez inaugura la creación institucional republicana y define el rol de los representantes. "Como la autoridad pública se ejerce sobre hombres libres por naturaleza, los derechos de la soberanía, para ser legítimos, han de fundarse sobre el consentimiento libre de los pueblos. En virtud de este consentimiento, la potestad suprema puede residir en uno, o en muchos, y aquel o aquellos que la ejercen son los grandes *representantes de la nación*, órganos de su voluntad, administradores de su poder, y de su fuerza"[18].

A pesar de que la idea de representación acompaña espontáneamente a toda expresión política en torno a la independencia, la atención no está puesta en general en el sufragio como expresión de la igualdad política que refleja y la crea, sino más bien en las divisiones reales en el seno de la sociedad. El sufragio consagra autoridades y actores políticos, pero no es la fuente de poder originaria. Así como las instituciones coloniales incluían instancias de representación grupal, cuyo poder derivaba del reconocimiento dado por la autoridad, como el Cabildo para los vecinos, el nuevo Estado intenta traspasar esta legitimidad a instituciones republicanas equivalentes; en este caso, la municipalidad. No estaba en la mente del legislador que el sistema electoral afectase la marcha del sistema político, en la medida en que no se creaban instancias de deliberación unidas a la elección, ni se proponían ideas en pugna. El sufragio, por lo tanto, en los primeros años no intenta más que delimitar tanto en Chile como en Argentina, por el censo y las exclusiones, algo así como una clase política, provista de un poder distinto de la sociedad civil, que ejerce el poder en nombre de la nación[19]. Como escribe Mario Góngora: "La aristocracia, imbuida [...] de la ideología liberal francesa o inglesa, representa a través del Parlamento, lo que los cabildos en la colonia: el consenso social"[20]. La clase dirigente chilena teme, desde sus inicios, el ejemplo revolucionario denunciado por el abate Sieyès en Francia, de separación entre el poder social y el poder político[21].

En 1813, cuando ya era evidente que no se legislaba transitoriamente en espera del monarca cautivo, y luego de haberse desconocido todo resultado electoral anterior, el nuevo Reglamento chileno, atribuido a Cami-

[18] Ibídem. Letra cursiva no aparece en el texto original.

[19] Para una reflexión sobre la relación entre sistema electoral y sistema político en la Francia del siglo XIX, ver Pierre Rosanvallon, *Le Sacré du Citoyen. Histoire du Suffrage Universel en France* (1992).

[20] Mario Góngora, "Reflexiones sobre la Tradición y el Tradicionalismo en la Historia de Chile" (1987), pp. 185.

[21] Emmanuel J. Sieyès, *¿Qué Es el Tercer Estado?* (1989). Volveremos sobre este punto en los debates sobre la ampliación del sufragio.

lo Henríquez, inicia el proceso de debate sobre las exclusiones del derecho a sufragio, apoyadas referencialmente por el texto de la Constitución de Cádiz. Quedan allí impedidos de votar "los empleados de ministerio indecorosos, los fallidos, los deudores del tesoro público", además de "los condenados a penas infamantes". Se estipula que el sistema electoral será regulado por un Tribunal de Calificación, integrado por el jefe de la provincia y cuatro individuos. El Reglamento siguiente fue por decreto de 1824, en el cual se agregaron a la lista de excluidos a "[...] los ineptos física y moralmente, los jornaleros y sirvientes domésticos, los vagos [...]". Se otorga derecho a sufragio a todos los chilenos, casados, mayores de 21 años, que tuvieran una propiedad inmueble, una ocupación industriosa o un empleo del Estado, del gobierno o municipal, y en el ejército el grado de sargento o superiores, así como a los eclesiásticos. Un nuevo Reglamento, aprobado en 1826, como concesión al federalismo en boga, estipula que los candidatos a diputados deben ser naturales del pueblo que los elige, o tener vecindad de 5 años en él. Los distintos reglamentos mencionados aquí tuvieron escasa aplicación, y sólo formaban parte de los ensayos de creación institucional que se daban en un marco de lucha entre facciones de la elite por el control del Ejecutivo.

La misma característica tuvieron los primeros reglamentos electorales argentinos, aunque para estos efectos nos concentraremos en la ciudad y provincia de Buenos Aires, por el peso excepcional que tuvieron en los procesos políticos del siglo XIX, y la escasez de fuentes del resto del territorio. El Estatuto provisional para Dirección y Administración del Estado, dado por la Junta de Observación, el 5 de mayo de 1815, se ajusta al principio de la soberanía popular e igualdad ante la ley. Define al ciudadano como todo hombre libre, nativo y residente, mayor de 25 años, pero pierde, como en Chile, su condición por ser "doméstico asalariado". Se exige un censo de 4.000 pesos, o ejercer arte u oficio útil, y saber leer y escribir, para el voto activo. El voto pasivo exige una residencia de 10 años. Las limitaciones del ejercicio de los derechos ciudadanos fueron comunes a todos los proyectos constitucionales nacionales argentinos anteriores a 1853, y a todas las constituciones provinciales que contuvieran normas sobre ciudadanía[22].

En Chile se dictó, en 1827, otro reglamento que reguló las elecciones de 1828. La prensa denunció todo tipo de abusos eleccionarios, los cuales reforzaron la desconfianza hacia los actos de expresión popular y los temores ante el liberalismo expresado triunfalmente en la Constitución de

[22] José Carlos Chiaramonte, "Vieja y Nueva Representación: Los Procesos Electorales en Buenos Aires, 1810-1820" (1995)

1828. *La Aurora de Chile*, por ejemplo, editorializó afirmando que "[...] la voluntad general no ha tenido la menor parte en el nombramiento de los individuos que van a formar el Congreso"[23]. La Junta Gubernativa, que asumió el poder en diciembre de 1829, envió a las provincias una circular donde decía: "Llegó la época de las primeras elecciones constitucionales cuando en ellas los pueblos debieron expresar su libre voluntad, el resultado de esos actos tan augustos no fue otro que el de las intrigas más rastreras"[24]. Como mencionamos para el caso argentino en la década del 20, los supuestos vicios de procedimiento descalifican las urnas como método de elección de representantes. Lo que en realidad se puso en juego en ese caso concreto fue la capacidad de control por parte de los agentes encargados del acto eleccionario. Ello redundó en el triunfo total del oficialismo y la comprobación de que el Ejecutivo podía, a través del control eleccionario, ejercer un poder que atentara contra los intereses de sectores dirigentes. Hasta esta elección, la clase dirigente escogía al individuo más adecuado para ejercer el cargo en una negociación frente a un Ejecutivo débil en permanente rotación. Además, eran las ciudades las que votaban, en la medida en que ellas elegían, en reuniones de sus cabildos, a los candidatos en virtud de sus cualidades personales y no de sus ideas. En 1828, con la asunción del Presidente Manuel Antonio Pinto al poder, apoyado por los liberales que actuaron como facción política, quedó inaugurada por poco tiempo la posibilidad del debate de ideas, o al menos la posibilidad de que las divergencias se dirimieran en la arena electoral. El Ejecutivo se preocupó, sin embargo, de contrarrestar esta fuerza con medidas que aseguraban su clara ventaja en el control del proceso. Una de ellas fue extender el sufragio a los artesanos y guardias cívicos, lo que aumentaba la base popular del gobierno[25]. Más aún, un nuevo reglamento de 1830, al dar mayores atribuciones al intendente, designado por el Ejecutivo, en la autorización de las boletas que consignaban los nombres de los calificados, aumentó el poder de los agentes presidenciales. La impotencia frente al sistema que comenzaba a imponerse estuvo en el origen de la corta guerra civil de 1830 y el triunfo conservador. Con el establecimiento del llamado "régimen portaliano", autoritario y centralizado, las disquisiciones sobre un sistema electoral que reflejase de mejor forma la soberanía popular sufrieron una larga interrupción.

---

[23] 1828.

[24] Ricardo Donoso, *Las Ideas Políticas en Chile* (1946), p. 390.

[25] James Wood argumenta este punto en *Legislación y Praxis Política en Chile, 1828-1851* (1996).

Es interesante mencionar aquí que, en el caso argentino, el fraude estuvo siempre incorporado como dato constante de la vida política local. Así como en el último ejemplo mencionado, la elección de 1828 en Chile tuvo sentido político especialmente desde una pugna por el control eleccionario y no por su calidad representativa. Existe la hipótesis, para el caso de los inmigrantes argentinos, de que habría otras formas de representación política que no pasaban por el voto sino por otras instituciones de la esfera pública, como las prácticas asociativas y la prensa periódica. El hecho de que la elite argentina terminase su gestión negociadora antes por el fraude y la violencia para imponerse en la elección misma, a diferencia del caso chileno, en que disputaba las elecciones en el acto electoral aunque hubiese participado en la designación de candidatos, respondería en parte a la pregunta sobre el ausentismo e indiferencia de las elites ante las elecciones, a pesar de la fuerte politización de la vida pública[26].

Sociedad civil y sociedad política en contextos de transición

La década del 20 en Argentina transcurre en medio de la crisis caudillista, caracterizada por la intensa conflictividad al interior de la elite, dividida entre otros factores por su carácter urbano o hacendado. En Chile, las restricciones al derecho de sufragio definían al segmento de la sociedad que no debía tener acceso a la sociedad política. Lo define una elite homogénea, que incluso en los períodos más anárquicos tiene conciencia de pertenencia a un mismo grupo. Por lo tanto, a diferencia de Argentina, donde además existe la disputa entre las elites, en Chile está claramente excluido el pueblo, o sea el sector social bajo. La sociedad política, uno de los ejes del poder social de la elite, era fácilmente identificable, en la medida en que se publicitaba una separación entre sociedad civil y sociedad política, mientras que en Argentina debía disputar su lugar al interior de la elite socioeconómica. No había problema en Chile, por lo tanto, en negar la simultaneidad en los derechos de una y de otra[27]. En Argentina, la ausencia de coincidencia entre sociedad civil y sociedad política estaba marcada,

[26] Lo sostienen Hilda Sábato y Ema Cibotti, citadas por Pilar González Bernaldo, "Los Clubes Electorales Durante la Secesión del Estado de Buenos Aires, 1852-1861. La Articulación de Dos Lógicas de Representación Política en el Seno de la Esfera Pública Porteña".

[27] Para trabajar esta separación nos pareció útil el libro de José Murilo de Carvalho, *Desenvolvimiento de la Ciudadanía en Brasil* (1995), quien cita la división que T. H. Marshall hace del concepto de ciudadanía en tres elementos constitutivos: derechos civiles, políticos y sociales.

más que por la exclusión, por la relativa autonomía de la clase política en relación con las clases propietarias, lo cual se relacionaba con el conflicto entre las provincias y la ciudad. La Ley Electoral de 1821 estableció el sufragio universal para todos los adultos nacidos o naturalizados argentinos, y la elección directa de los representantes. Lo interesante de la introducción del sufragio universal en la provincia de Buenos Aires es que, al igual que en Chile, las decisiones en torno al sufragio se toman más que por razones ideológicas de profundización democrática, para establecer equilibrios políticos. Así, profundizando el régimen representativo a escala provincial, e incorporando al sector rural, la elite amplía sus bases.

La Constitución chilena aprobada en 1833, que rigió hasta 1925, definió al gobierno de Chile como popular representativo, y estipuló que la soberanía reside esencialmente en la nación, que delega su ejercicio en las autoridades que ella establece. Es sólo bajo esta constitución que puede hablarse de un Estado consolidado y de una institucionalidad que adquiere vigencia. La Carta confirma el lugar conceptualmente importante que se otorgaba al sufragio en la institucionalidad discutida hasta la fecha. Sin embargo, también limita su aplicación, consagrando la desigualdad entre los habitantes de la república. De hecho, se estipula un censo como requisito para ser elector, y se excluye a los analfabetos del derecho a votar[28].

A pesar de que en Chile surge un debate conceptual y hay conciencia de que una sociedad democrática implica coincidencia entre sociedad civil y política, es fundamental comprender que tal debate expresa y refleja el contexto de las preocupaciones de la elite por la posibilidad de democratización social, lo cual a su vez se inserta en el contexto de la homogeneidad social de esta elite y su facilidad relativa para establecer un Estado unitario en su forma. Para ello hay que tener en cuenta que una de las características de la elite chilena de comienzos del siglo XIX era su comprensión de la cultura política como formas de sociabilidad política que se visualizaban en transición. El rechazo al pasado y la imprevisibilidad del futuro eran los elementos que configuraban una nueva conciencia del tiempo y del espacio, común a todas las elites latinoamericanas, todo ello inmerso en la ideología del progreso. Una de las primeras expresiones de esta visión se encuentra en el texto epistolar de Simón Bolívar, en su "Carta de Jamaica", de 1815, donde afirma que por el estado de "nuestro carácter, nuestras costumbres y nuestras luces", no eran aconsejables lo que llamó las "instituciones perfectamente representativas", reconociendo así la nece-

[28] La vigencia de esta disposición fue postergada hasta 1840. En el momento de discutir su aplicación, se originó un interesante debate entre Andrés Bello y Manuel Antonio Tocornal, al que nos referiremos más adelante.

sidad de un tránsito hacia la posibilidad de la plena vigencia de la institucionalidad republicana moderna[29]. Diego Portales, considerado el artífice del Estado que surgió de la Constitución de 1833, escribió en una de sus cartas, famosas por la forma prosaica en que expresaba sus visiones políticas: "La Democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República". Agregaba que entendía la república como "un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte los ciudadanos"[30].

La misma sensación de alarma invadió progresivamente la prensa chilena, que asumía su rol de instancia crítica de la opinión pública que comenzaba a formarse. La generación argentina de 1838, integrada por exiliados del rosismo, entre los cuales descollaban Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, dio la voz de alarma ante la intelectualidad chilena sobre los riesgos de la aplicación de las teorías democratizantes en las sociedades latinoamericanas. Toda esta generación, influida por el pensamiento francés de Saint-Simon, Fourier, Lamennais, Lerminier y, especialmente, por Alberdi y Savigny, discriminaba entre realidad social y política. "La generación presente ha sido llamada a la vida en una época de transición y ensayos; en una época en que las sociedades cultas, detestando lo pasado, y descontentas con lo presente, se lanzan más o menos tumultuariamente hacia un porvenir que aún no comprenden bien; pero que vislumbran lo suficiente para apetecerlo como un progreso en su condición", escribía Sarmiento, en tono semejante al de Portales, en *El Mercurio*, en 1841[31]. En 1843, el mismo diario afirmaba en su editorial: "Nuestra faz exterior, nuestras instituciones, son democráticas, son republicanas; nuestras costumbres, nuestras inteligencias, las condiciones todas de nuestra situación actual, no lo son; de aquí resulta que nuestra democracia esté en las apariencias y no en el hecho, no en la vida social"[32]. Dentro del universo valórico de la clase dirigente chilena, la mantención del orden social era la medida que permitía su apertura hacia el cambio. Esa valoración del orden social, de la vigencia de las jerarquías que le permitían al grupo

[29] Simón Bolívar, *Escritos Políticos de Simón Bolívar* (1986).

[30] Ernesto de la Cruz y Guillermo Feliú Cruz, *Epistolario de don Diego Portales* (1936), tomo I, p. 177.

[31] 1841.

[32] 1843.

dirigente mantener su hegemonía como sector legítimamente heredero de la autoridad social y política, persistió durante todo el siglo, y fue el eje en que giraba la posibilidad de la incorporación de nuevos sectores a la sociedad política. De esa manera, el grupo dirigente no tenía que negociar otros temas ni con otros actores, más allá del Ejecutivo, con quien mantenía la pugna por debilitar o reforzar el poder de éste, según sus percepciones de autoritarismo presidencial o riesgo de anarquía política.

Andrés Bello fue el mejor exponente de la relación entre orden social y cambio político. Como figura magistral de la política chilena de la época, comprendió bien que la anarquía que vivían otras naciones latinoamericanas era producto de la ruptura entre sus clases dirigentes. Siempre sostuvo también el rol tutelar del grupo dirigente sobre el pueblo mientras éste alcanzaba la madurez cívica, proyecto en el que se empeñó creativa y lealmente con su patrocinio a la educación. En su rol de editorialista de *El Araucano*, periódico oficial, expresó permanentemente su pensamiento en este tenor. Por ejemplo, en el artículo titulado "La Acción del Gobierno" expresaba que Chile, "aprovechando las lecciones de la experiencia propia y ajena, evitando los escollos y huyendo todos los extremos, fundó un estado de cosas regular y adaptado a sus circunstancias, con un gobierno conservador del orden, promovedor de los adelantamientos y limitado al mismo tiempo en el ejercicio del poder por saludables trabas, que impidiesen y corrigiesen el desenfreno y el abuso en donde quiera que apareciesen"[33]. En su discurso inaugural de la Universidad de Chile, en su calidad de primer rector, afirmó que el país se encontraba en transición hacia la república plena, y sostuvo "la necesidad de adaptar las formas gubernativas a las localidades, costumbres y caracteres nacionales [...]", todo ello "bajo el amparo de instituciones libres [...] que aseguran la libertad, patrimonio de toda sociedad humana que merezca el nombre de tal". En ese mismo discurso, Bello afirmó que el siglo XIX era "por excelencia la edad de la asociación y la representación [...]", lo que inspiraba la intención de la Universidad de propagar un conocimiento que permitiese ejercer ese deber cívico en forma capacitada[34].

También ilustra lo anterior, en otro momento, el debate que se suscitó en 1849 a propósito de la creciente oposición al gobierno del Presidente Bulnes por sus intenciones de nombrar a un político de fama autoritaria, Manuel Montt, como su sucesor en la presidencia. El periódico *La Tribuna* reconoció la existencia de bandos de opinión, condenó por igual a liberales

[33] Andrés Bello, "La Acción del Gobierno" (1883), vol. 8, p. 273.

[34] Andrés Bello, "Discurso Pronunciado en la Instalación de la Universidad de Chile", *El Araucano,* Santiago, 17 de septiembre 1843.

extremos y a los sostenedores del Presidente, y afirmó que su bando "lo componen aquellos que adheridos siempre a la causa del orden, y fundando sobre él su planta, aspiran a producir de veras un cambio progresivo y discreto en las instituciones hasta darles todo el ensanche de que necesitan para colocarse a la altura del presente siglo". Y agrega: "Nos declaramos desde luego por la República moderada, única que es realizable en Chile [...]"[35]. Asimismo, en 1865, con motivo de la discusión sobre la eliminación de los fueros que daban acceso a tribunales especiales, la argumentación deriva hacia la responsabilidad de la elite en cautelar el tránsito hacia la igualdad. Al respecto, afirma el periódico *El Demócrata* que "la mayoría de los ciudadanos, no sabiendo leer ni escribir está lo más distante de desear reformas cuyo alcance no es capaz de comprender [...]"[36].

La conciencia de encontrarse en transición es la que inspira la discusión sobre los alcances de la sociedad civil y política. El mundo moderno de lo público debía reflejar la consistencia del mundo tradicional en ese largo tránsito hacia la conformación de una sociedad civil donde pudiera implementarse la institucionalidad republicana. En otra parte, también *La Aurora de Chile* escribía que "la opinión pública no puede formarse ni fortalecerse mientras se esparzan en su interior principios serviles, ideas contrarias al gobierno", porque en su lenguaje "las luces no se comunican". Deben tener su tiempo, para el cual se está en tránsito. "Liberal por principios, no por eso ha creído que conviene hoy a Chile otra línea de condiciones que la de conservar la Constitución, dejando al tiempo y al progreso de nuestra educación política, modificarla y mejorarla sin destruirla.", rezaba un editorial de *El Mercurio*, despidiendo a su editor Demetrio Peña, en 1845[37].

En este punto, es interesante referirse a la polémica entre Andrés Bello y Manuel Antonio Tocornal, ambos miembros ilustres de la elite política, a propósito de la necesidad de aplicar las disposiciones que excluían del voto a los analfabetos. La polémica se inició con un artículo que publicó Tocornal en *El Semanario de Santiago*, en 1842. Allí argumentaba que en Chile "no había choques entre clases distintas", sino total homogeneidad social, en la medida en que se "adora a un mismo Dios [...]", y la nación entera se encuentra sometida al mismo "régimen gubernativo". Lo anterior le lleva a concluir que "en una nación organizada de un modo tan compacto, sin ilotas políticos ni clases privilegiadas, no se hace sentir la

[35] 1849.
[36] 1865.
[37] 1845.

necesidad de generalizar el derecho a sufragio". Y agregaba: "la ley vigente sólo excluye a los que con toda propiedad pueden llamarse proletarios; y ni deben, los que profesan principios liberales, desear que se confiera tan precioso derecho a quienes serían incapaces de ejercerlo con acierto e independencia [...]". No es conveniente, dice, "poner en manos de la parte ínfima del pueblo unas armas cuyo valor no tardaría en conocer, y que cuando las supiese manejar, sería imposible arrancarle"[38].

Porque el sufragio establece los límites a la igualdad política, en sus posiciones frente a él puede observarse el proceso de lucha de la elite por su hegemonía social y política por una parte, y la presión de nuevos sectores por otra[39]. Asimismo, aunque se establece una forma de igualdad social, no por ello se consigna una equivalencia de derechos entre la sociedad civil y la política. Afirma Tocornal: "Las obligaciones y derechos civiles no deben confundirse con las obligaciones y derechos políticos"[40]. Los segundos se derivan del código fundamental y son producto de la deliberación de los sectores ilustrados de la sociedad para regular su funcionamiento. Bello, que era partidario de aplicar la disposición sólo para los nuevos inscritos, contestó que "por lo tocante a su adquisición y pérdida, los derechos políticos son lo mismo que los civiles; que unos y otros nacen y expiran a voluntad de la ley [...]"[41]. Esta discusión fue la que aportó los argumentos principales a ambos contendores. Lo que está en juego en la pugna por la equivalencia de derechos civiles y políticos es la vigencia teórica de los conceptos de libertad e igualdad, y la construcción de la sociedad política. Tocornal considera que ésta debe estar por sobre la sociedad civil, mientras Bello hace depender ambas de la ley, de la construcción institucional.

La discusión sobre sociedad civil y política debe remitirse a otra polémica que tuvo importancia en la definición de la representación. Es la que se dio entre quienes sostenían la capacidad de la ley para modificar las costumbres, y quienes creían que la civilización era anterior al reconocimiento de derechos. Hemos visto que Tocornal sostiene la adecuación de la ley a las costumbres y, aparentemente, Bello, lo contrario. Lo cual es sólo aparente si analizamos el siguiente texto del mismo Bello, donde reflexionando sobre el gobierno y la sociedad sostiene que: "El gobierno no puede obrar sin el concurso de la representación nacional; y la reunión misma de todos los poderes políticos carece de imperio sobre ciertos accidentes materiales, y para modificar los fenómenos morales, tiene que hacerlo por medio

[38] Manuel Antonio Tocornal, 1842.
[39] Ver discusión en torno a la Sociedad de la Igualdad más adelante.
[40] Manuel Antonio Tocornal, 1842.
[41] Andrés Bello (1883), vol. 15, p. 307.

de las leyes, que influyen tanto más lentamente sobre las costumbres cuanto les es necesario valerse de ellas y de las preocupaciones mismas para ser eficaces". En el mismo artículo consigna que "las medidas administrativas pueden indudablemente ya retardar el movimiento, ya acelerarlo. Pero es menester que no nos exageremos su poder. Hay obstáculos morales que no se deben arrostrar de frente. Hay accidentes naturales que le es imposible alterar"[42]. En realidad Bello, el gran constitucionalista, se sitúa como el que más en la paradoja que produce la aceptación de una república declarada "representativa" al interior de un debate sobre restricción de la ciudadanía. Lo anterior permite pensar que en esta polémica no está en juego verdaderamente la ampliación del electorado, sino el control del voto de los analfabetos por parte del gobierno, a lo que Bello adhiere. Entonces surge que ambos personeros están en el fondo de acuerdo en que el sufragio popular no designa la representación, sino que su debate se inserta en la autonomía de la elite frente al Estado, en este caso defendida por Tocornal al querer restringir la posibilidad de manejo eleccionario por el Ejecutivo.

Así como Bello fue la gran figura en el pensamiento sobre la organización social y política en Chile, en Argentina, Juan Bautista Alberdi resume lo mejor de esta reflexión, sobre todo en sus digresiones en torno a la redacción de la Constitución de 1853, que consagra definitivamente el Estado unitario y zanja las disputas caudillescas así como el autoritarismo del rosismo. El "trauma" originado por las experiencias despótica y anárquica, que tanto influyó en la elite chilena, recibió el trato más genial en Alberdi. En presencia del Estado unitario, Alberdi percibió de inmediato el problema entre sociedad civil y política y, como los chilenos, descartó la simultaneidad entre ambas. "La inteligencia y fidelidad en el ejercicio de todo poder depende de la calidad de las personas elegidas para su depósito; y la calidad de los elegidos tiene estrecha dependencia de la calidad de los electores. El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca uno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio." Probablemente respondiendo al gran apoyo popular que sustentó al rosismo, Alberdi se declara contrario a otorgar libertades políticas "para pueblos que sólo saben emplearlas en crear sus tiranos. Pero deseo abundantísimas las libertades civiles o económicas [...]"[43]. Esta idea se plasma en su concepto de la "república posible" expresada en sus *Bases y Puntos*

[42] Andrés Bello, *Obras Completas* (1883), vol. 8, p. 285.
[43] Juan Bautista Alberdi, "Derecho Público Provincial" (1994), p. 52.

de Partida para la Organización Política de la República Argentina, donde reúne sus meditaciones en torno al buen gobierno, su experiencia con el rosismo y su observación del proceso de consolidación del Estado chileno. De la misma manera como hemos visto que las elecciones son el único medio de representación política en las sociedades decimonónicas, parece interesante destacar que en el pensamiento lúcido de hombres como Bello y Alberdi, esa forma de representación, aunque conceptualmente necesaria a la república, en realidad no parece primordial en momentos de creación institucional. Por una parte está, como alerta Alberdi, la base social "prerrepublicana" de estos países, pero por otra están las verdaderas prioridades que antecederían a la asignación de derechos, y que él conceptúa de manera obviamente más sofisticada que el chileno Portales.

Para Alberdi, gobernar es poblar, porque "el fin de la política constitucional y del gobierno en América" debe ser especialmente económico. Siguiendo a Malthus, define la ciencia económica como la ciencia de la población. Y a este respecto, Argentina es un "desierto" que hay que hacer desaparecer para que pueda desarrollarse. A diferencia de Bello, que piensa a Chile desde la construcción institucional del Estado como base para generar políticas económicas, Alberdi desprende la organización institucional de los requisitos para el desarrollo social y económico de la población. Por eso, por ejemplo, critica a los hermanos Egaña de Chile por no haber comprendido las "necesidades económicas", favoreciendo adecuadamente, por ejemplo, la propiedad. Y afirma que "por eso sus trabajos constitucionales no fueron concebidos de un modo adecuado para ensanchar la población de Chile por condiciones que facilitasen la adquisición de ciudadanía"[44]. Con eso se refiere concretamente a las dificultades para la inclusión de extranjeros y a la exclusión de todo culto no católico. Por eso, él sugiere para Argentina "consagrar al catolicismo como religión de Estado, pero sin excluir el ejercicio público de los otros cultos cristianos"[45].

Para Alberdi, las constituciones americanas deben ser "especie de contratos mercantiles de sociedades colectivas, formadas especialmente para dar pobladores a estos desiertos, que bautizamos con los nombres pomposos de Repúblicas [...]"[46]. En su época, sostiene, hay que cambiar el fin de la construcción institucional. Respecto del tiempo transcurrido desde la Independencia, afirma: "Los fines políticos eran los grandes fines de

[44] Juan Bautista Alberdi, *Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina* (1979), p. 27.

[45] Ibídem, p. 82.

[46] Ibídem, p. 40.

aquel tiempo; y hoy deben preocuparnos especialmente los fines económicos"[47].

La noción de transitoriedad plantea el conflicto fundacional que enfrentaron quienes tuvieron que crear Estados nacionales desde ese primer acto de voluntad republicana, porque la Independencia americana fue antimonárquica. Desde esa visión del mundo había que emprender, tanto para un Bello como para un Alberdi, pero también para todas las elites chilenas y argentinas, la constitución de la nación y la creación del Estado. Allí se enfrentaban las dos lógicas descritas. La moderna incorpora al sujeto en la construcción de su historia. El actor social y político fundamental deja de ser una comunidad en beneficio del individuo; éste no actúa colectivamente sino autónomamente o por asociación libre; los derechos y las libertades se reemplazan por el derecho y la libertad de connotación abstracta; la soberanía radica en el pueblo con conciencia de sí, quien la ejerce individualmente en la figura del ciudadano, y la legitimidad política deriva de las decisiones del pueblo o de la nación. La obra creadora de figuras como Bello y Alberdi se encaminó magistralmente a hacer de ese tránsito un proceso que no pusiera en riesgo las estructuras que se habían ido consolidando con el tiempo. Bello, especialmente el sustento social de la elite chilena; Alberdi el potencial económico de la república argentina. "Penetrados de que su situación actual es de transición, de que sus destinos futuros son tan grandes como desconocidos, nada nos asusta y en todo fundamos sublimes esperanzas de mejora. Ella no está bien; está desierta, solitaria, pobre. Pide población, prosperidad." Esa es la Argentina de Alberdi[48].

Pueblo y ciudadanía

Como ya se ha establecido en la discusión de los trabajos de F.-X. Guerra, el pueblo continuó siendo por largo tiempo republicano, un concepto que se refería a comunidades concretas, estamentariamente diferenciadas. Con la irrupción del concepto de igualdad política se impuso una profunda mutación en la percepción de las divisiones sociales. Para que pudiera existir potencia soberana en favor del pueblo, éste debía ser visto como la figura de la totalidad social, es decir, debía identificársele con la nación, en la cual se expresaban los nuevos individuos igualitarios. Ello no es en absoluto evidente en el Chile ni en la Argentina del siglo diecinueve, donde, como hemos visto, al pueblo se le sigue asignando, tanto por secto-

[47] Ibídem.
[48] Ibídem, p. 58.

res liberales como conservadores, la acepción de comunidad políticamente ignorante y premoderna. Se relaciona evidentemente con la noción de transitoriedad y progreso, y con la creencia de la elite de que el pueblo va camino de adquirir la civilización. Esta posición la expresa muy bien Bello, en su Comentario citado anteriormente, cuando reconoció que los primeros gobiernos republicanos no tenían en mente los sentimientos del pueblo, "[...] pero representaron sus intereses, obraron como el tutor que defiende los del pupilo, antes que éste sea capaz de conocerlos. Ejercieron una misión sagrada que la naturaleza impone en todos los tiempos y en todas circunstancias a la más alta jerarquía social en favor de las clases menos favorecidas por la fortuna, que nunca necesitan tanto de su tutela como cuando ignorantes y abatidas no pueden ni invocarla ni apreciarla"[49]. También la prensa recoge el mismo sentir, como cuando en 1845 *El Mercurio* publicó una serie de artículos sobre el sentido del cambio. En uno de ellos aclaraba que "sobre la delegación del poder de la opinión, conferido a la parte que piensa, a la parte que resuelve después de un maduro cálculo," tenía que decir que "el pueblo (las masas) no tiene ideas, no tiene principios que le sirvan de premisas para la solución de sus instintivas deliberativas"[50]. En una discusión en la Cámara en 1851, el Ministro de Justicia, Antonio Varas, precisó que su ser republicano se definía porque quería contener la anarquía, reprimir y castigar a los criminales, "impedir que se escale el poder sobre el cadáver del pobre a quien se engaña", y mantener la paz en que se complace la república.

Como ya se ha mencionado, el pueblo es visto como un sujeto concreto futuro, y su futuro está en la educación, según Bello; en la "instrucción", según Alberdi. La diferencia radica en que ésta debe centrarse en cosas aplicadas, en conceptos de utilidad material e inmediata. La educación, en cambio, es civilizadora, formadora y encaminada a crear un sustrato cultural. Alberdi considera que la instrucción debe encaminar sus propósitos a la industria, como el gran medio de moralización. Sarmiento, en cambio, confía aún en una naturaleza humana rescatable: "Todo depende de las ideas que obsesionan y dominan al pueblo en ciertos momentos [...]", escribe, en la esperanza de que el hombre nuevo, asignado el rol de "pueblo", no se rinda tan sólo ante la realidad de la necesidad, sino que alcance la plenitud que percibe en la cultura europea. Para Sarmiento, sin embargo, el momento presente tampoco permite esta actualización del pueblo. Defi-

[49] Andrés Bello, *Obras Completas* (1883), vol. 7, p. 136.

[50] Antonio Varas, Cámara de Diputados, 18 de julio de 1851. Todas las sesiones de la Cámara de Diputados aparecen en *República de Chile: Sesiones de los Cuerpos Legislativos*, varios tomos.

niéndolo como "una mayoría que tiene por antecesores no muy remotos, turbas de salvajes reducidos a la vida social [...], sin derechos políticos que no reclaman [...]", sostiene que se debe impedir "que el gobierno bueno o malo, liberal o arbitrario o despótico", caiga en manos de esta clase de habitantes[51].

Estas nociones de pueblo son las que justifican la ciudadanía restringida temporalmente. "¿Podrá jamás un infeliz e ignorante, que no tiene educación ni fortuna, que ha nacido para gobernar sólo el azadón o el molejón de barbero, dejar este puesto en que lo colocó la naturaleza, para gobernar la sociedad y hombres que saben más y tienen más fortuna"?[52] Esta pregunta que se formula *El Verdadero Chileno* recoge el argumento que sitúa a la clase dirigente como la única en condiciones de regular la incorporación política y garantizar que la representación legítima quede en sus manos. Un manifiesto del Partido Conservador a la nación, de 1851, relaciona lo anterior con los alcances de la república: "La misma organización del sistema representativo hace que el corazón del republicano gire dentro de una órbita más dilatada, que sus aspiraciones lleguen más allá del lugar a que alcanzan las del súbdito, y que se demande con más imperio la atención que el gobernante debe a los intereses de sus comitentes"[53].

Las décadas de 1840 y 1850 en Chile fueron testigos de algunos proyectos para modificar el reglamento electoral y la definición de ciudadanía, aunque ninguno alteró la legislación vigente hasta 1861. Sin embargo, el paso del tiempo no modificó sustancialmente la definición de pueblo que se hacía pública. Por ejemplo, en 1860, *El Araucano*, diario oficial del gobierno, continuaba afirmando que "el título de ciudadano solamente debe conferirse al que posea cierto grado de conocimientos, al que disfrute de tal propiedad, sueldo u emolumentos que sean como fianza de su honradez y de su apego al orden y a la paz [...]"[54]. Lo que sí sufrió una lenta evolución fue la conciencia de los miembros del sector dirigente respecto del término de la transición y la necesidad de incluir nuevos sectores. Personajes como Santiago Arcos, Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria ya demostraron, en la década de 1850, su compromiso con posiciones alternativas a las dominantes. Como veremos al analizar los eventos en torno a la Sociedad de la Igualdad, ellos reivindicaron el aumento del sufragio como fórmula de inclusión social y de obtención de la igualdad política. En ese sentido, ellos

[51] Ricardo Rojas, *El Pensamiento Vivo de Sarmiento* (1955), p. 133.
[52] 1850.
[53] 1851.
[54] 1860.

propiciaban lo que la elite de la época más temía: la equivalencia de derechos entre la sociedad civil y la sociedad política[55].

A diferencia de lo que plantea Rosanvallon para el caso francés, en Chile, aún en 1865, continuó dándose paralelamente la lucha por los derechos civiles y no había unanimidad respecto de la igualdad social. En la discusión sobre la abolición de fueros, mencionada anteriormente, hubo un sector, representado por *El Demócrata*, que sostuvo que "la igualdad absoluta, sobre ser imposible en la práctica, entrañaría grandes injusticias"[56]. Así se explica que, a pesar de las presiones igualitarias, del surgimiento de prensa de apelación popular, y del discurso de algunos republicanos democratizantes, la Ley Electoral de 1861 fue consecuente con la visión anterior de pueblo y con el reconocimiento de la necesidad de mantener las exclusiones. Efectivamente, aumentó la posibilidad de intervención electoral del Ejecutivo al entregar el control eleccionario a las municipalidades, cuyas autoridades dependían de él, y al sancionar la condición de saber leer y escribir para ser calificado. Ni siquiera la Ley Electoral de 1874, que eliminó en la práctica los requisitos censatarios, al suponer que toda persona que sabía leer y escribir poseía el censo, tuvo como intención la extensión del sufragio a nuevas capas de la población, aunque a la larga hubo consecuencias democratizadoras, al permitir la competencia y limitar la capacidad de intervención del Ejecutivo. Esa ley entregó todo control eleccionario a los mayores contribuyentes, quienes ya en 1869 habían ingresado al mecanismo electoral como miembros de las Juntas Revisoras de elecciones; en 1874 integraron también las Juntas Calificadoras y Receptoras, dejando fuera a las municipalidades. La evolución electoral no desconoció, sino, al contrario, reforzó la legitimidad autoasignada por la clase dirigente como arbitradora de la representación política, sin poder claudicar nunca en su lucha contra los poderes electorales que buscaba recuperar[57].

Este conflicto con el Ejecutivo no marcó así la historia electoral argentina. Con el proceso electoral centrado en torno a las parroquias, la verdadera contienda se daba en dos momentos. Primero cuando en los clubes parroquiales o populares se transaban los candidatos, y segundo en

[55] Rosanvallon dice que el equivalente se produjo en Francia al comienzo de la monarquía de julio. Considera que en l789 se jugaban tan sólo los derechos civiles, con la supresión de privilegios y de distinciones legales. Ver Rosanvallon, "La République du Suffrage Universel", en François Furet y Mona Ozouf (eds.), *Le Siècle de l'Avènement Républicaine* (1993), pp. 372-373.

[56] 1865.

[57] Ver J. Samuel Valenzuela, *Democratización Vía Reforma. La Expansión del Sufragio en Chile* (1986), y "Hacia la Formación de Instituciones Democráticas: Prácticas Electorales en Chile durante el Siglo XIX" (1997), pp. 215-257.

la arena misma donde se imponía literalmente la fuerza física. "El que tiene la fuerza, toma las mesas, gana las elecciones", escribía *La Tribuna* en 1864. Como señala Hilda Sábato, para lograr una mesa "había que lograr el control del atrio de la iglesia pero también de su patio, cúpula, techos y paredes"[58]. Se trata, por lo tanto, de una situación en que el pueblo, habiéndosele otorgado la ciudadanía de derecho, no la tiene de hecho, porque no forma parte de una comunidad de iguales que transfiere su soberanía, y por lo tanto nunca la asume. Presumiéndose, como se hacía, que al establecer el censo se definía a un pueblo privilegiado con el derecho a voto, en el caso argentino no era legal ni prácticamente un privilegio.

Nación y soberanía

El Monitor Araucano escribió en 1813 que, "si la patria tiene un buen gobierno, los ciudadanos son bien gobernados [...]"[59]. La patria es la primera acepción que asume el concepto de nación, y ello se relaciona con la necesidad de identificar el territorio ante la ausencia de una identidad nacional previa. Por eso es que en sus Bases, Alberdi sostiene que "Europa [...] nos ha traído la patria", considerando que trajo la "población y el cuerpo de la patria"[60]. Recordemos que en América la idea de nación fue una creación posterior a la creación de los Estados, y que todos los elementos definitorios de la nación moderna eran inicialmente comunes a todas las elites criollas americanas, e incluso a los reinos peninsulares de la corona de Castilla[61].

En el caso particular de Argentina, el problema de creación de la nación fue más agudo. El conflicto entre las provincias llevó también la discusión a una preexistencia de una "nación argentina" en Buenos Aires anterior a las provincias, de lo que se desprendía que las instituciones nacionales fundamentales eran anteriores a la autonomía provincial. Para Alberdi, sin embargo, la nación no existe, aún en 1853: "La República Argentina, simple asociación tácita e implícita por hoy, tiene que empezar por crear un gobierno nacional y una constitución", escribió en sus *Bases…*[62].

---

[58] Hilda Sábato, "Elecciones y Prácticas Electorales en Buenos Aires, 1860-1880. ¿Sufragio Universal sin Ciudadanía Política?" (1995), pp. 107-142.

[59] 1813.

[60] Juan Bautista Alberdi, *Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina* (1979), p. 58.

[61] Ver Mario Góngora, *Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX* (1986).

[62] Juan Bautista Alberdi, *Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina* (1979), p. 15.

Si la nación se encuentra en proceso de constitución, y si en América no se dan identificaciones culturales "nacionales", la legitimidad política, asociada y manejada desde el Estado, aporta los elementos y el espacio desde donde se crea la nación como una unión de voluntades, administrada por las elites que heredan el poder. Como afirmamos anteriormente, parte del problema de representación que enfrenta la elite tiene que ver con el hecho que nació como tal simultáneamente con el Estado, y no tiene por tanto una existencia autónoma frente a él. No hubo, por así decirlo, Estados Generales chilenos ni argentinos. Sin embargo, la carta constitucional asigna a la sociedad civil que conforma la nación mecanismos de representación ante el Estado. El problema que enfrenta la elite es que debe obtener la legitimidad del pueblo soberano sin que se despliegue el nuevo actor individual, o el ciudadano, al que considera inepto para ejercer todos sus derechos intelectualmente reconocidos. "Es utópico, un sueño, un puro falso razonamiento", escribió Esteban Echeverría, amigo de Alberdi, "pensar que nuestra raza Hispano-Americana, en las condiciones en que emergió de su oscuro pasado colonial, pueda hoy fundar una república representativa"[63]. Por lo tanto, ante la imposibilidad de asignar la igualdad necesaria para la vigencia real de la soberanía del pueblo, ésta recae en la nación como totalidad indivisible[64]. En realidad, la única parte de la nación con autoconciencia de sí es la elite, la cual conforma una sociedad homogénea, cuyo valor fundamental es el consenso social que la configura, y que abarca todo el espacio de lo público, más allá de las diferencias ideológicas que momentáneamente puedan predominar. "Cuando se trata de consolidar con energía un gobierno naciente, nada contribuye más a su formación que la unanimidad constante de la opinión pública", escribe el editor de *La Aurora de Chile*, en 1813[65]. Y así lo entienden plenamente todos los miembros de la clase dirigente, conscientes de que el cambio de paradigma de legitimidad hace menos creíbles los argumentos de derecho natural, y, por lo tanto, más necesario el consenso que lo reemplace, mientras surgen los artificios capaces de convertir la potencialidad de mando contenida en cada voluntad individual en una forma concreta de gobierno. Es decir, mientras surge la representación política, mecanismo cuyo pensamiento ocupó afanosamente a Sieyès.

La búsqueda de la totalidad social que representa la nación estuvo en la base de toda justificación de las restricciones electorales, como tam-

---

[63] José Luis Romero, *A History of Argentine Political Thought* (1963), p. l48.

[64] Aquí nuevamente figura la influencia de Sieyès: "[...] un diputado lo es de la nación entera: todos los ciudadanos son sus poderdantes". Citado en el Prólogo de Emmanuel J. Sieyès, *¿Qué es el Tercer Estado?* (1989).

[65] 1812.

bién, siguiendo a Sieyès, se argumentó que el conocimiento del fin social correspondía a la voluntad racional de la nación y no a la agregación de voluntades que sería la voluntad nacional. Una expresión de lo anterior se dio con motivo de la defensa que el diario *El Progreso* hizo de la formación de listas electorales por el gobierno, y que provocó una polémica con *La Gaceta*, que criticaba esta política y proponía incluir la voluntad de todas las clases que formaban la nación. Responde *El Progreso*: "[...] claro está que los hombres ilustrados no pueden expresar la ignorancia, la retrogradación que resultaría de la voluntad nacional, si pudiera expresarse como lo observa *La Gaceta*; por eso es que no se consulta la voluntad nacional, sino que presumiéndola racional, se consultan los dictados de la razón de los hombres ilustrados, o la razón nacional"[66]. En otra parte de la polémica, sostiene que "el ejercicio de la soberanía popular, esto es, la libre expresión de la voluntad nacional, en la acepción genuina del dogma, traería por consecuencia la elevación de un caudillo popular que representase en todos sus instintos y creencias a la mayoría numérica, en despecho de la minoría ilustrada [...] a quien incumbe hoy el gobierno de la república"[67].

Aquí es importante detenerse en un punto que parece esencial, y que nos remonta al rol fundamental que desempeñaba esa "minoría ilustrada", que hoy llamaríamos el grupo intelectual, cuyo "saber" coincidía con el "poder" de la elite, en su condición de portavoz de la adaptación posible de los derechos modernos a la sociedad. Monteagudo, en Argentina, ya señalaba que el ilustrado debe tener prerrogativas que no dependen del pueblo real, pues éste, aún bárbaro, no es pueblo soberano sino esclavo de la ignorancia, del vicio y del error. Por lo tanto, el intelectual actúa en el fondo como órgano político representativo de un pueblo que es un principio y no un actor real. De esta paradoja surge la necesidad de la abstracción construida en torno a la "voluntad racional de la nación" como forma representativa transitoria. Esto marca una diferencia con el caso francés, donde la revolución sirvió como espacio de reivindicación social y como estructura para una representación nacional[68].

Esteban Echeverría, en su "Dogma Socialista", expresa bien la elaboración teórica que resuelve la paradoja de la representación transitoria, desde una suerte de despotismo ilustrado. "Sólo la razón colectiva es soberana, no la voluntad colectiva. La voluntad es ciega, caprichosa, irracional:

[66] 1844.

[67] Ibídem.

[68] Ver Pilar González-Bernaldo, "La Revolución Francesa y la Emergencia de Nuevas Prácticas de la Política: La Irrupción de la Sociabilidad Política en el Río de la Plata Revolucionario, 1810-1815", p. 11. Presentación en el Seminario Internacional La Revolución Francesa y Chile, Santiago, agosto de 1989.

la voluntad desea; la razón examina, pesa y decide. Así sucede que la soberanía del pueblo sólo puede residir en la razón del pueblo, y que sólo la parte prudente y racional de la comunidad social debe ejercer esa soberanía. Los ignorantes permanecen bajo el tutelaje y la protección de las leyes decretadas por consenso entre los hombres de razón. La democracia, por lo tanto, no es el despotismo de las masas o de la mayoría; es el gobierno de la razón"[69]. Alberdi estuvo de acuerdo con Echeverría, por ejemplo, al intentar idear un mecanismo que impidiese los riesgos del sufragio universal, y sostuvo que si el sistema electoral no cambiaba sustancialmente, habría que "abandonar la esperanza de obtener buenos gobiernos en las urnas"[70]. Aún más, en sus *Bases*... celebra la situación chilena por haber podido demostrar que "entre la falta absoluta de gobierno y el gobierno dictatorial hay un gobierno regular posible; y es el de un presidente constitucional que pueda asumir las facultades de un rey en el instante que la anarquía le desobedece como presidente republicano"[71]. Esta posición era también compartida por Sarmiento, y los otros miembros de la generación constructora del Estado argentino. En términos más poéticos, como escribió Alberdi, "una nación no es una nación sino en la conciencia profundamente pensante de los elementos que la componen". Y agrega: "Es necesario, por lo tanto, conquistar una filosofía política para alcanzar la nacionalidad". Labor que, sin duda, solamente podían realizar los intelectuales que creaban y consolidaban el espacio público en Chile y Argentina[72].

La visión de la representación que predominaba en la clase dirigente también puede comprenderse desde los primeros quiebres que se perciben en el interior del consenso excluyente, cuando algunos de sus miembros, en un compromiso inicial de democratización social, comienzan a contactarse con los intereses de otro grupo social. La Sociedad de la Igualdad, fundada en Santiago en 1850, era una asociación que incluía a artesanos que presionaban por su incorporación política, y que contaba con la participación de miembros de la elite. A raíz de un allanamiento por parte del gobierno y de denuncias de conspiración de sus miembros, se suscitó una polémica en la Cámara respecto del castigo de suspensión en sus funciones que se aplicó a los diputados Juan Bello y Urízar Garfias por su apoyo a este grupo en 1850. En primer lugar, la polémica confirma que hay una búsqueda de formas de representación popular alternativa al Congreso o "representación

[69] Esteban Echeverría, "Dogma Socialista" (1963)

[70] Juan Bautista Alberdi, citado en José Luis Romero, *A History of Argentine Political Thought* (1963), p. l45.

[71] Ibídem, p. l27.

[72] José Luis Romero, *A History of Argentine Political Thought* (1963), pp. l45-147.

nacional", y que irrumpen en la lógica de la elite en la medida en que logran adhesiones. En segundo lugar, muestra las limitaciones que la propia elite pone a las formas de socialización, y el doble rol que juegan los representantes en relación con la sociedad civil y el gobierno.

La polémica se establece en 1851 entre diputados que se oponen a la suspensión de sus colegas, y el Ministro del Interior Antonio Varas. Respecto del sentido último de la Sociedad, el diputado Salvador Sanfuentes aclaró que éste era "contrarrestar el inmenso poder que el gobierno tiene a su disposición para las elecciones". Y para eso propuso crear ciudadanos: "Se quiso pues por medio de la instrucción hacer entender a los individuos que estaban acostumbrados a vender sus sufragios, la importancia del acto que se desempeñaba al emitirlo, y cuánto podían contribuir en el uso de ese precioso derecho a la ventura o a la desgracia de su país"[73]. El gobierno en cambio justificó su acción represiva en la medida en que la Sociedad impidió que los funcionarios de gobierno ejercieran su autoridad, "y porque la Sociedad de la Igualdad provocó con sus actos las medidas [...] que tuvieron por objeto sofocar el germen de anarquía que se derramaba en su seno". Agregó que la Sociedad "ha principiado su propaganda criminal en los arrabales de Santiago, reuniendo en diversos puntos, de noche y ocultamente, a los proletarios más abyectos y despreciables, y fomentando su concurrencia con la embriaguez y los vicios en esas diversas orgías". Más grave aún fue, para el modo de ver del ministro Varas, que "a este local principiaron a concurrir algunos de los diputados de la oposición para prometer a los pobres ignorantes que fueron arrastrados a él, no sólo que se trataba de enseñarlos e ilustrarlos en todos los ramos del saber [...] sino que también se pensaría y pondría por obra la enseñanza de sus hijas mujeres". Es decir, para el gobierno, la representación dejaba de ser legítima si el representante ejercía la pedagogía como delegado popular en vez de como eficiente gestor del Estado[74].

Esta negación de legitimidad se asocia con percepciones de amenaza de rompimiento del consenso dirigente por una disputa interelites, a consecuencia de que la Sociedad hacía una apelación, al interior del Congreso, a la formación de ciudadanos y a la incorporación social por medio de la creación de conciencia de sí en el pueblo. Por eso, antes incluso de tocar el tema de los igualitarios, el gobierno intentó mostrar que la función representantiva no podía interferir en la marcha del buen gobierno que era considerada esencial, porque sus intereses eran los nacionales. Varas afirmó que

[73] Salvador Sanfuentes, Cámara de Diputados, 18 de julio de 1851.
[74] Antonio Varas, Cámara de Diputados, 18 de julio de 1851.

"Hay diputados de sobra para tratar los intereses generales", o: "¿acaso cada diputado viene a representar solamente el interés de un departamento, y no los intereses generales?" Se contestó él mismo que "la integridad de la representación no depende de éste o aquel diputado. Es siempre la misma". Justamente porque es una representación nacional indivisible, de carácter transitorio, en que el "mandato" lo otorga un ente abstracto que resume en sí el interés general o, en términos rousseaunianos, la voluntad general de la sociedad[75].

Las palabras del ministro al referirse al gobierno como portavoz del interés general nos remiten a conceptos similares usados por los representantes, en el sentido de que ambos poderes no derivan su legitimidad de una agregación de voluntades individuales, como en la república moderna, sino de una protolegitimidad que tiene que ver finalmente con la unidad social o consenso (que siempre se privilegia frente a la incorporación igualitaria). Es decir, el representante ejerce una función pública; es la personificación de lo que *El Mercurio* llamará el recto juicio de la nación, a propósito de las elecciones de 1846. Aunque el individualismo ha sustituido conceptualmente a la visión orgánica del mundo social como principio de consulta, la elite busca reproducir la concepción unanimista del mundo social como referencia, para lo cual le es adecuado el concepto de soberanía nacional. Al proclamarse portavoz de la nación racional, la clase dirigente utiliza el espacio público que queda con la exclusión del pueblo del debate político, aunque le representa como tutor, y así define una modalidad alternativa de la representación. De este modo, puede separarse ese concepto de todo ámbito institucional para permanecer en el consenso social de la opinión pública racional: los hombres ilustrados, capaces de uniformar la opinión pública, asumiendo para sí la codificación del conjunto de opiniones individuales[76].

Representación e institucionalidad

Las prácticas representativas chilenas estuvieron marcadas por la competencia entre las elites, y las elecciones como medio de regular y legitimar el acceso al poder político, sin que realmente existiese potencia soberana de parte del pueblo. La lógica representativa de las elites no necesariamente incluye el sufragio como el momento máximo de expresión

[75] Ibídem.

[76] Ver Roger Chartier, *Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII. Los Orígenes Culturales de la Revolución Francesa* (1995), p. 36.

de la soberanía, ya que el pueblo se encuentra aún en una etapa en que debe ser tutelado en el tránsito hacia la posibilidad de ser titular de esa soberanía.

También fue característica del problema de la representación en Chile la presencia de una tensión, expresada en todos los debates en torno al sufragio, entre la elite y el gobierno; entre el Parlamento y el Ejecutivo. En una situación de control del resultado electoral, la disputa fundamental del siglo XIX giraba en torno a qué órgano debía controlar el proceso, si las municipalidades o los mayores contribuyentes, según si el gobierno o la elite controlaba estas instancias.

En la polémica sobre la Sociedad de la Igualdad quedó de manifiesto que, para la clase dirigente chilena, la legitimidad representativa aparece además supeditada a la legitimidad funcional. En la decisión respecto de la suspensión de los diputados, "va a decidirse si el Poder Legislativo debe obedecer a la voz despótica del Ejecutivo, o si por el contrario éste debe acatar el mandato de aquél", alegó el diputado Vicente Sanfuentes contra el gobierno[77]. La lucha por la imposición de una u otra legitimidad expresa en esta polémica la tensión por la creación de mecanismos representativos republicanos autónomos, especialmente frente al Ejecutivo.

Es necesario reconocer que, especialmente desde la década de 1850, hubo una progresiva socialización, y por tanto muchas presiones para dar por terminada esta primera gran transición y otorgar plena vigencia a los conceptos modernos. Se intentó ampliar la conformación ciudadana y transitar de una sociedad estamental a una sociedad de clases que se reconocen, aceptan y pueden ser sujeto de representación. "Queremos [...] ver en la representación nacional verdaderos representantes del pueblo, y esto sólo se conseguirá nombrando nosotros hombres de nuestra clase para que nos representen, del mismo modo que esos señores prefieren a los de la suya para ser representados", escribía *El Artesano Opositor* en vísperas de las elecciones parlamentarias de 1846[78]. Es decir, comenzó a surgir una confrontación entre la idea de nación como una comunidad indivisa y la nación moderna. La nación "se divide en artesanos productores, nueve décimas de la población; y el otro décimo, escaso, de directores que consumen en todo respecto. Es decir, la suma del poder social y la verdadera existencia de la nación se debe al artesano", escribió el mismo diario[79]. En ese contexto es representativa una proclama de 1851 que pedía la nulidad de la elección presidencial que dio el triunfo a Manuel Montt. Denuncias de corrupción se

[77] Vicente Sanfuentes, Cámara de Diputados, 18 de julio de 1859.
[78] 1846.
[79] 1846.

encuentran a lo largo del siglo, y son características de cada elección. Sin embargo, en esta ocasión, no sólo se criticó la manipulación de los votos populares, sino que los redactores de la proclama, evidentemente de intereses contrarios a la clase dirigente, asumieron una autoconciencia de ser miembros de la nación y sus representantes, especialmente cuando afirmaron que su propuesta representaba una cuestión *nacional*, cuestión que por lo tanto afectaba profundamente a todo ciudadano, es decir, a cada chileno. En su petición de nulidad, los firmantes sostuvieron que ellos no defendían una cuestión de partido, sino una posición que afectaba a la totalidad de la nación.

La irrupción de estas nuevas prácticas discursivas tiene como finalidad presionar para la inclusión del nuevo actor legítimo de ser representado: el pueblo. Surge entonces la pregunta sobre el progresivo aumento del poder y control eleccionario en manos de la clase dirigente. ¿Cómo dar cuenta de ese enorme espacio entre la teoría y la práctica representativa? La respuesta radica en una de las características de la clase política chilena, y que Alberto Edwards ha descrito magistralmente como su capacidad de actuar como "fronda aristocrática"[80]. Ello significa que vivía en tensión con el Ejecutivo, cuyo poder recela pero al mismo tiempo origina y fortalece. Esta paradoja surge de la necesidad de resguardar el orden para protegerse de la anarquía, cosa que asegura un Ejecutivo fuerte. La construcción de la nación debe darse necesariamente sobre la base del resguardo del orden, más que sobre la lógica de la necesaria ampliación de la ciudadanía, como queda demostrado en la polémica en torno a la Sociedad de la Igualdad.

Sin embargo, garantizado el orden, el trasfondo de la mayoría de las disputas entre el Congreso y el Ejecutivo para modificar las leyes electorales tiene que ver con el debilitamiento o fortalecimiento de un poder frente al otro, más que con la inclusión de nuevos sectores. Por ejemplo, el reglamento electoral impulsado por el gobierno liberal del Presidente Pinto extendió el sufragio, en 1828, a los artesanos y guardias cívicos. La reacción conservadora que siguió, como ya se insinuó, estuvo en parte motivada por la percepción de una amenaza porque el gobierno construía una base popular más sólida en su apoyo[81]. Se ha visto también un trasfondo semejante en la polémica entre Bello y Tocornal sobre la exclusión de los analfabetos del voto, lo que debe asociarse con que la masa de sufragantes populares era el grupo más fácilmente presionable para dar el triunfo a los candidatos oficiales. Notable es, en este sentido, la carta que envía Joaquín Tocornal a su

[80] Alberto Edwards, *La Fronda Aristocrática* (1973).
[81] James Wood, *Legislación y Praxis Política en Chile, 1828-1851* (1996), p. 11.

hijo Manuel Antonio en 1846, en la cual dice que las cámaras tenían que formarse adecuadamente por hombres resueltos a oponerse al Ejecutivo, pues ésta es "la arma más poderosa, en el régimen constitucional, para deshacerse de un Ministerio que no marchara bien [...]", lo que es sinónimo de entorpecer la labor gubernamental del Ejecutivo[82].

Incluso un liberal doctrinario como José Victorino Lastarria, cuando presentó al Congreso de 1849 una reforma a la Ley Electoral de 1833, a pesar de que lo hizo en nombre de la libertad electoral y en su calidad de opositor al gobierno, lo que en realidad buscaba era la expresión de lo que llamaba "la voluntad nacional de los ciudadanos". Ello significaba que su crítica iba dirigida a la corrupción que impedía el voto iluminado de la elite: "No es pues la soberanía nacional, no es la opinión ilustrada, progresista y virtuosa de la nación la que delega la autoridad, sino una masa sin conciencia y sin voluntad, indiferente e ignorante, que es dirigida absolutamente, o a lo menos puede serlo, por el que tenga más medios de dirigirla". Comprobando el argumento que se señala, Lastarria propuso como solución al problema que denunciaba, aumentar el censo, además de aplicar medidas de mayor rigor contra la corrupción del gobierno.

Con motivo de la decisión presidencial de oponerse a la destitución por parte del Cabildo Municipal de un Procurador Municipal, se generó una discusión en la Cámara sobre la autoridad del Presidente de la República en este caso. En ella puede percibirse hasta qué nivel realmente el espacio de la discusión sobre la representación está copado por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo. También participó en ella el diputado Lastarria, recién electo como opositor, quien acusó al gobierno de querer sobrepasar el poder de las Cámaras. El Ministro de Justicia, Manuel Montt, había argumentado que la Cámara de Diputados era apenas "una rama de la representación nacional" que al oponerse a la decisión presidencial entronizaba una tiranía. "¿Se cree que el Presidente de la República es un juguete a quien se le puede ajar impunemente? ¿Se cree que no vale nada en la balanza del sistema constitucional? ¿Qué es nuestro Presidente de la República? Un poder pleno, el poder Ejecutivo; al paso que la honorable Cámara de Diputados es la mitad del otro poder". Lastarria defendió su punto apelando "a la práctica de los Estados representativos [...]", que buscan limitar las atribuciones presidenciales para destituir funcionarios públicos, "porque la responsabilidad de éstos está ligada con el interés general y porque sería demasiado peligroso dar al Presidente semejante atribución". Es decir, nuevamente se establece que es la clase dirigente la representante

[82] Joaquín Tocornal a Manuel Antonio Tocornal, 29 de mayo de 1846.

del interés general, como voluntad nacional racional, incluso en oposición al Ejecutivo. "Nosotros representamos directa y propiamente a la nación, y cualquiera señor Diputado la representa íntegramente a toda [...]. Esto es lo que se llama representación nacional", argumentó el diputado. La afirmación de la nación indivisible tiene por tanto la doble finalidad de excluir la igualdad del pueblo, pero también, y muy importante, de establecer una interlocución en condiciones de superioridad respecto del Ejecutivo. "Los Ministros deben tener entendido que cuando se habla al Presidente de la República de la opinión de una de las Cámaras, se le habla de una nación entera [...]", sostuvo Lastarria[83].

Las *Memorias* de Abdón Cifuentes son un excelente testimonio vivencial de la historia electoral desde la perspectiva del enfrentamiento entre los dos poderes. Cifuentes estuvo tanto en el gobierno como en la oposición. Conservador, diputado, campeón en la lucha por la defensa de la identidad católica del Estado, ocupó, entre otros cargos, el de Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública del gobierno liberal de Federico Errázuriz Zañartu en 1871. A su juicio, recién en 1866 se da la primera situación en que los partidos proclaman sus candidatos a la presidencia. Antes, dice, "se hacían en La Moneda [...] era el Gobierno el que nombraba y no el país el que elegía, a sus representantes"[84]. Eso es lo que Mario Góngora, refiriéndose a cómo el Presidente Santa María evolucionó de liberal fanático a autoritario intransigente, llamó "el espíritu del lugar", que impregnaba al gobernante de la voluntad de invadirlo todo con su influencia. A esa tendencia se oponía el Congreso constituyendo la "fronda" y estableciendo diversas alianzas que cruzaban transversalmente el espectro ideológico. Ahí debe encontrarse el origen de la gran paradoja de la historia electoral chilena, que convirtió a los sectores más conservadores y enemigos de la igualdad política en luchadores a favor de la libertad electoral. Cifuentes reconoce que, en su apoyo a la reforma de 1874, su sector buscaba "algún arbitrio que menoscabase siquiera la omnipotencia del Ejecutivo en las elecciones [...]". El mismo reconoce también que: "Si lograba triunfar algún opositor era debido a la casualidad o a descuidos o a simples condescendencias del Gobierno, como me sucedió a mí, cuando fui por primera vez diputado por Rancagua el año 67. El año 70, cuando era Subsecretario de Relaciones Exteriores, y el 73, cuando era Ministro, fui diputado por Santiago por simple designación del Gobierno"[85]. De allí que, como sostiene Valenzuela,

[83] Cámara de Diputados, sesión del 24 de agosto de 1849.
[84] Abdón Cifuentes, *Memorias* (1936), tomo I, p. l47.
[85] Ibídem, tomo II, p. 105.

toda la estrategia electoral de los distintos sectores hasta 1874 se encontrase enfocada hacia la negociación con el Ejecutivo "para hacer elegir a los candidatos que ellos designaban de común acuerdo con los Ministros"[86]. Esta ley sancionó además la introducción del voto acumulativo para las elecciones de diputado y suspendió el censo como requisito para ser elector. Ambas reformas pueden ser consideradas democratizantes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la primera de ellas fue bandera conservadora, propuesta por el diputado Manuel José Irarrázaval, y no puede desconocerse que garantizar el voto minoritario era fundamental para su sector, que percibía la pérdida de su hegemonía valórica. La secularización social y la presión de nuevos sectores populares eran ambas una amenaza de disolución del consenso dirigente. Los sectores conservadores percibían correctamente que serían el grupo más claramente perjudicado en el momento en que su visión del mundo dejara de ser la unificadora de la elite chilena.

Tanto en Chile como en Argentina, la representación de corte liberal se construyó precisamente para institucionalizar y legitimar el principio de influencia social. Con un Poder Ejecutivo inorgánico y con luchas interelite, en el caso argentino, fundamentalmente en el contorno delimitado por la provincia de Buenos Aires, que fue el poder regional dominante hasta 1881, la competencia con el Ejecutivo se reemplazó por la lucha entre los electores locales, incluyendo la violencia en los atrios parroquiales para conquistar el control de la mesa. La nostalgia de una situación de gobierno central legítimo llevó a Alberdi a decir: "Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución"[87].

Hay que recalcar que en Chile, si bien el fraude electoral, y luego el cohecho, era inherente a lo que hemos llamado el control del proceso eleccionario, éste no fue reconocido oficialmente como parte del juego político. El sistema tendía a rechazarlo como un acto inmoral, y se intentaba con un poco de esfuerzo que las maniobras fraudulentas no trascendieran a la opinión pública. A diferencia de Argentina, la "probidad electoral" era una virtud. Por ejemplo, con motivo de la elección de Manuel Montt a la Presidencia de la República, una de las más criticadas por la oposición debido a las maniobras del Ejecutivo, las autoridades se complacían en dejar múltiples testimonios de la transparencia del proceso. Entre ellos, esta carta de Antonio Varas, Ministro del Interior, al Intendente de Aconcagua,

---

[86] J. Samuel Valenzuela, *Democratización Vía Reforma. La Expansión del Sufragio en Chile* (1986), p. 121. Ver también su discusión en p. l7.

[87] Juan Bautista Alberdi, *Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina* (1979), p. l28.

don Juan Francisco Fuenzalida: "Jamás [...] ha habido en esta ciudad [...] una elección más libre y dignos sostenedores del gobierno. Ancho campo ha tenido la oposición para trabajar como ha trabajado [...] Basta [...] que le indique sólo que hasta las mujeres de nuestros adversarios han andado ayer y hoy, de taller en taller, arrastrando a los obreros y comprometiéndolos personalmente por todos los medios imaginables..."[88]. Como sostiene Pilar González-Bernaldo, en Argentina "el fraude se convierte en un terreno más de control de la sociedad civil y de competencia de las elites por el poder". Es más, sostiene incluso la autora que "para comprender el funcionamiento de las instituciones es indispensable pensar al fraude como parte constitutiva del sistema representativo". Esto, en la medida en que los clubes porteños, normalmente considerados instrumentos de fraude, en realidad mediaban entre las instituciones representativas y una sociedad que si no fuera por su intermedio no habría alcanzado el menor grado de participación. Sostiene que, al menos en la acción guerrera, "la multiplicación de organizaciones facciosas destinadas a movilizar secuaces para imponer una lista el día de las elecciones rompe con una suerte de monopolio que hasta entonces tenía el Estado [...] para asegurar los mecanismos de designación de autoridades representativas"[89].

Aquí hay que reiterar las diversas estructuras de poder de ambas elites en estudio. Mientras la chilena no presentaba grandes divergencias internas, y sólo hacia fines de siglo surgen intereses económicos en conflicto, la elite argentina se encontraba profundamente dividida de acuerdo a los distintos intereses económicos o a las actividades que desempeñaba, y no coincidía, como en Chile, la elite política con la elite económica. Por eso, en Chile pudo aparecer más tempranamente el pueblo como amenaza al bloque dirigente. A pesar de ello, los sectores conservadores propiciaron la libertad electoral, simplemente porque, hasta entrado el siglo XIX, la elite mantuvo su poder económico y social sobre las zonas rurales en su calidad de grandes hacendados, y por tanto toda reforma tendiente a incorporar electoralmente a nuevos sectores sólo facilitaba que su influencia se ejerciese con mayores posibilidades de triunfo. De allí que, si los mayores contribuyentes controlaban el proceso electoral, mejores aún eran las posibilidades de marginar las presiones del Ejecutivo. En ese contexto se explica que

---

[88] Antonio Varas, *Correspondencia de don Antonio Varas sobre Elecciones Presidenciales y Revolución en la Provincia de Aconcagua, 1851* (1924), ver carta a don Juan Francisco Fuenzalida, 26 de julio de 1851.

[89] Pilar González-Bernaldo, "Los Clubes Electorales Durante la Secesión del Estado de Buenos Aires, 1852-1861. La Articulación de Dos Lógicas de Representación Política en el Seno de la Esfera Pública Porteña", p. 29, artículo sin publicar.

las luchas por la extensión del sufragio en Chile con caracteres democratizantes sólo auguraran prácticas representativas modernas cuando la elite se diversifica y surgen diferencias en su seno. Antes de eso, la lucha electoral debe insertarse en el conflicto de la clase dirigente contra la omnipotencia del Ejecutivo.

Conclusión

La herencia ibérica es un punto de partida indispensable en la historia de la representación política tanto en Chile como en Argentina. Esa impronta aportó la ambigüedad que permitió amalgamar en los ensayos de institucionalidad representativa las interpretaciones modernas en torno a la soberanía y a la representación nacional con las culturas políticas tradicionales de sociedades con lógicas en que imperaba el sentido de comunidad, y donde las libertades y la igualdad moderna necesarias para la instauración de un pueblo soberano aún no les parecían adecuadas a las elites que controlaban el proceso de tránsito hacia la vigencia de la república.

Debido a las dificultades para la consolidación del Estado nacional en Argentina, el surgimiento del problema de la representación "popular" fue más tardío, pero igualmente se dieron, sobre todo desde la década del 50, las digresiones al interior de la elite gobernante en torno a la representación. En ambos países, Chile y Argentina, ellas indican la tensión respecto del principio ordenador que ejerce la igualdad, como concepto que marca, sin retorno, la entrada definitiva en el mundo de los individuos. Acerca y anula lo que hay de más naturalmente diferente entre los hombres: saber y poder, situación ante la cual la elite chilena reacciona con temor y rechazo, reforzando los roles tradicionales en la sociedad y la separación entre lo que podríamos llamar sociedad civil y sociedad política. De lo que se trata es de la forma como se comprende el pluralismo moderno. En el Chile decimonónico, todo conflicto se percibe como una amenaza contra la unidad social, en la medida en que no puede referírsele al conflicto verdadero entre lo nuevo y lo viejo. Eso es lo que le da la medida a la lucha por el sufragio en los diversos sectores, y que gatilla las defensas de la elite ante los peligros imaginados de disolución social. Como cuando, por ejemplo, *El Artesano Opositor* escribe: "La elección es la verdadera existencia social y humanitaria de una nueva y gran nación, o la destrucción de ella convertida en una horda de estúpidos esclavos dominados por el caudillaje hereditario de una familia"[90]. Frase clave porque con ella se amenaza a la elite

[90] 1846.

desde el desafío al poder social que la constituye, autoerigiéndose el pueblo como entidad con conciencia de sí.

Estos son los problemas que enfrenta el individuo soberano para ocupar su lugar en la esfera política, en la medida en que subsistía el fondo racionalista de la cultura política de Las Luces, que ve en la instauración de un gobierno de los más capaces la condición de progreso y verdadera libertad. He aquí la contradicción inaugural y fundadora de la democracia chilena, que opone la aspiración a la unidad y al consenso, contra la transfiguración de los vínculos sociales. La elite chilena optará por la vía, llamémosla pedagógica, de transformación gradual y paciente del contexto, en oposición a la revolución temida y conocida bajo la forma de la llamada anarquía.

La evolución del sufragio en Chile debe insertarse, además de en el contexto de transición y en las particulares asimilaciones que hacía la elite de los conceptos republicanos en su discurso, en la lucha de la elite por su sobrevivencia frente al Ejecutivo, y frente a un pueblo que percibe como aliado o enemigo potencial, alternativamente. Si no se tiene en cuenta ese doble conflicto, las elecciones podrían interpretarse como una fuente originaria de poder de la elite, que nunca tuvo. O sería necesario negar la vigencia de instituciones representativas en el Chile del siglo XIX, en la medida en que no se pueden identificar formas de representación autónoma. La figura de la ficción democrática se apoya en una mirada puesta en el control eleccionario por parte del Ejecutivo. Dentro de este esquema, el sufragio universal, proclamado en la Provincia de Buenos Aires, debe aparecer como letra muerta. De la misma forma que el escándalo de los procesos electorales debiera llevarnos a concluir la inexistencia absoluta de formas representativas en Argentina.

Entre Scila y Caribdis, parece posible iluminar los "principios de representación" que subyacen en la historia política o electoral, separando el ámbito de los sistemas del ámbito de las ideas. En el primero pueden insertarse las disputas interelite por la corrupción electoral y la ampliación del sufragio, marcadas por lógicas pragmáticas y de equilibrios de poder, lo cual nos permite comprender la intencionalidad de la construcción de mecanismos políticos o institucionales que gobiernan la acción y la imaginación de los hombres. En el ámbito de las ideas, el discurso de los autores es una vía de conocimiento de la cultura política de su tiempo y de los principios que subyacen en las prácticas políticas, a fin de que éstas se hagan inteligibles. La intención de este trabajo ha sido dar sentido a lo cotidiano de la política, resituado en la transformación de las instituciones y los modos de pensar.

A pesar de la irrupción progresiva de un discurso que plantea la ampliación de la igualdad política y la equivalencia entre derechos políticos y sociales, la evolución de los mecanismos institucionales de la libertad electoral en Chile no permite concluir que la legitimidad representativa popular haya ganado la lucha con la Ley de Elecciones de 1874, aunque se implementase en la práctica el sufragio universal masculino[91]. Como acertadamente sostiene Antonio Annino para el caso latinoamericano, "practicar el voto no significa necesariamente aceptar su lógica institucional"[92].

Es evidente que las instituciones representativas del Chile anterior al sufragio universal y a la pérdida de control electoral por parte del gobierno no ejercían su rol de mediadoras entre el pueblo y el Estado, pero sí pueden entenderse como instancias de representación de las ideas y expectativas de una elite que iba formando la nación moderna en su diálogo interno, y con el Estado como su creación. Con ello redefinía al sujeto digno de ser representado y ejercía la influencia social, asunto que ocupó a reconocidos pensadores del siglo XIX, como Constant, Bentham y Tocqueville en su interés por construir una representación de las personalidades socialmente relevantes. En ese sentido habría que cuestionarse, como se hace en Argentina, cuáles eran las otras vías de representación, alternativas al sufragio, y estudiar el rol de los clubes o sociedades que congregaban y servían de expresión a la opinión pública. Desde esa perspectiva, talvez se puede afirmar que existía un sentido del rol de la representación, aunque todos los mecanismos institucionales no funcionaran como es debido, ya que las leyes electorales, en Chile y en Argentina, ni dibujaron una ciudadanía verdaderamente individualista, ni cortaron los lazos con las tradiciones coloniales. La necesidad de introducir en ese mundo mecanismos más flexibles y propiamente modernos fue el campo de negociación entre los grupos que lucharon por controlar el voto.

BIBLIOGRAFÍA

Alberdi, Juan Bautista. *Bases y Puntos de Partida Para la Organización Política de la República Argentina.* Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1979.

Annino, Antonio (coordinador). *Historia de las Elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX*. Buenos Aires: F. C. E., 1995.

Bello, Andrés. *Obras Completas de Don Andrés Bello.* Santiago: Imprenta de Pedro G. Ramírez, 1883.

[91] El sufragio universal sólo se consagró constitucionalmente en la Carta de 1925.

[92] Antonio Annino, *Historia de las Elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX* (1995), introducción, p. 9.

Bolívar, Simón. *Escritos Políticos de Simón Bolívar*. Caracas: 1986.

Botana, Natalio. *El Orden Conservador. La Política Argentina entre 1860 y 1916.* Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1994.

Cifuentes, Abdón. *Memorias.* Santiago: Editorial Nascimento, 1936.

Chartier, Roger. *Espacio Público, Crítica y Desacralización en el Siglo XVIII. Los Orígenes Culturales de la Revolución Francesa*. Barcelona: Editorial Gedisa, 1995.

De la Cruz, Ernesto de la Cruz y Feliú, Guillermo. *Epistolario de Don Diego Portales.* Santiago: Ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile, 1936.

Donoso, Ricardo. *El Catecismo Político Cristiano.* Santiago: Imprenta Universitaria, 1943.

Donoso, Ricardo. *Las Ideas Políticas en Chile.* México: F. C. E., 1946.

Edwards, Alberto. *La Fronda Aristocrática.* Santiago: Editorial Universitaria, 1973.

Furet, François y Ozouf, Mona (eds.). *Le Siècle de l'Avènement Républicaine.* París: Gallimard, 1993.

Góngora, Mario Góngora. *Civilización de Masas y Esperanza.* Santiago: Vivaria, 1987.

Góngora, Mario. *Ensayo Histórico Sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX*. Santiago: Editorial Universitaria, 1986.

González Bernaldo, Pilar. "Los Clubes Electorales durante la Secesión del Estado de Buenos Aires, 1852-1861. La Articulación de Dos Lógicas de Representación Política en el Seno de la Esfera Pública Porteña". Artículo no publicado.

González-Bernaldo, Pilar. "La Revolución Francesa y la Emergencia de Nuevas Prácticas de la Política: La Irrupción de la Sociabilidad Política en el Río de la Plata Revolucionario, 1810-1815". Presentación en el "Seminario Internacional La Revolución Francesa y Chile", Santiago, agosto de 1989.

Guerra, François-Xavier. *Modernidad e Independencias. Ensayos Sobre las Revoluciones Hispánicas*. México: F. C. E., 1993.

Izquierdo, Gonzalo. *Historia de Chile*. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1990.

Murilo de Carvalho, José. *Desenvolvimiento de la Ciudadanía en Brasil.* México: F. C. E., 1995.

Páginas de la Independencia Nacional. Santiago: Instituto de Estudios Políticos, Editorial del Pacífico, 1975.

República de Chile: Sesiones de los Cuerpos Legislativos. Santiago: varios editores.

Rojas, Ricardo. *El Pensamiento Vivo de Sarmiento.* Buenos Aires: Editorial Losada, 1955.

Romero, José Luis. *A History of Argentine Political Thought.* Stanford University Press, 1963

Rosanvallon, Pierre. *Le Sacré Du Citoyen. Histoire du Suffrage Universel en France*. París: Gallimard, 1992.

Sagredo, Rafael. "Actores Políticos en los Catecismos Patriotas Americanos". *Historia*, 28 (1994).

Sieyès, Emmanuel J. *¿Qué Es el Tercer Estado?* México: UNAM, 1989.

Valenzuela, J. Samuel. "Hacia la Formación de Instituciones Democráticas: Prácticas Electorales en Chile durante el Siglo XIX". *Estudios Públicos*, 66 (otoño 1997).

Valenzuela, J. Samuel. *Democratización Vía Reforma. La Expansión del Sufragio en Chile*. Buenos Aires: IDES, 1986.

Varas, Antonio. *Correspondencia de don Antonio Varas Sobre Elecciones Presidenciales y Revolución en la Provincia de Aconcagua, 1851*. Santiago: Editorial Cervantes, 1924.

Wood, James. *Legislación y Praxis Política en Chile, 1828-1851*. Santiago: FLACSO, 1996.

Prensa:

El Araucano.
El Artesano Opositor.
La Aurora de Chile.
El Demócrata.
El Mercurio de Valparaíso.
El Monitor Araucano.
El Progreso.
El Semanario de Santiago.
La Tribuna.
El Verdadero Chileno.

EL LUGAR DEL VOTO

LA LEY ELECTORAL DE 1874 Y LA INVENCIÓN DEL CIUDADANO-ELECTOR EN CHILE*

Alfredo Joignant R.

La ley electoral chilena del 19 de noviembre de 1874 es conocida principalmente por el hecho de haber logrado una extensión del sufragio. Sin embargo —sostiene A. Joignant en este trabajo—, el interés de esta norma reside además, y quizás sobre todo, en el establecimiento de una nueva definición del acto de votar y del status del elector, consagrando tanto el secreto del sufragio como la independencia del votante. Al tomar como objeto de estudio las dos secuencias de una elección, el procedimiento de inscripción en los registros electorales y el voto propiamente tal, el autor confronta sistemáticamente esta definición jurídica con las relaciones reales y

ALFREDO JOIGNANT R. Director del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Arcis. Profesor de Ciencia Política, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencia Política, Universidad de París I Pantheón-Sorbonne, Francia. Presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política (1998-2000).

* Este texto se inscribe en el marco del proyecto de investigación Ecos-Conicyt "La socialización política: El aprendizaje de la ciudadanía en Francia y Chile" (C97H0I), dirigido por Alfredo Joignant (Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile y Escuela de Sociología de la Universidad Arcis) y Olivier Ihl (Institut d'Études Politiques de Grenoble, Francia). Una primera versión de este texto se encuelntra en las actas del coloquio "L'acte du vote en question: expériences françaises et étrangères de la pratique électorale" (París, 8-9 de diciembre de 1992). Desde entonces, este texto se ha beneficiado de la vasta literatura *sociohistórica* publicada en Francia. Entre los textos más representativos de esa corriente, podemos citar: Déloye, 1997; Ihl, 1996; Garrigou, 1992; Offerlé, 1993a y 1999.

prácticas que se establecen —o reactualizan— entre el elector y los miembros de las mesas receptoras de sufragios y de inscripción. Con la restitución de estas relaciones, se desprende una reflexión sobre las condiciones sociales y materiales de posibilidad del voto secreto y, con ello, de la autonomía del votante, abordando la incidencia de las "influencias", de instrumentos electorales tales como los sobres, el tipo de papel exigido para elaborar el sufragio y, de manera más general, del marco de la experiencia electoral.

El sufragio universal, aquel generalizado derecho atribuido hoy en día en Chile a todos los hombres y mujeres mayores de 18 años que se encuentran inscritos en los registros electorales, posee una historia compleja, constitutiva de lo que significa ser ciudadano. A lo largo del siglo XIX chileno, el cuerpo electoral, es decir aquel grupo de ciudadanos dotados del derecho a elegir y a ser electos, se mantuvo durante largo tiempo inalterado en sus —elitistas y modestas— dimensiones, las que comenzarán a ser modificadas bien entrada la centuria. Es la génesis de la masificación del electorado, acompañada por la invención de un conjunto de tecnologías social es que terminarán por inscribir en la realidad el sufragio universal, la que es posible pesquisar a contar de los debates parlamentarios que anteceden la aprobación de la ley del 12 de noviembre de 1874.

Las mesas receptoras de sufragios, órganos que reúnen a un grupo de ciudadanos con el fin de supervisar y oficializar con toda legitimidad, tanto el desarrollo como el resultado de una elección, no siempre han tenido el beneficio del crédito de imparcialidad que le otorgan los manuales de educación cívica. Tal ficción política, que eleva al pueblo al nivel de fuente última de soberanía, asumió expresiones jurídicas y filosóficas destinadas a eternizarla y justificarla. Sin embargo, también dio lugar a un conjunto de creaciones institucionales que materializaron, en cierta forma, las construcciones abstractas del derecho y la doctrina. Entre ellas, se inscriben diversas tecnologías sociales inherentes a los regímenes democráticos —cuyo olvido de su historia contribuyó a hacer que se percibieran en el modo de la evidencia—, como por ejemplo las mesas receptoras de sufragios, que constituyen un engranaje esencial de la mecánica electoral y simbolizan de manera exitosa la verdad ficticia del régimen democrático: representar la voluntad del pueblo mediante su presencia activa y organizada, del mismo modo que las instancias a composición aleatoria que se encuentran en algunos sistemas jurídicos (los jurados) están destinadas a representar el sentido popular e indiscutible de la justicia.

Por lo general, tendemos a olvidar que tecnologías sociales como la cámara secreta o, en el caso que nos ocupa, las mesas receptoras de sufragios, no sólo tuvieron que ser inventadas, sino que además debieron probar en los hechos las funciones que les fueron asignadas. Cualquiera sea el nivel de análisis adoptado por el investigador, explicación de la génesis de tal o cual tecnología —lo que no excluye necesariamente la pregunta sobre sus orígenes[1]—, o investigación de las vicisitudes que acompañan su naturalización, lo que subsiste es su permanencia en tanto objeto de luchas políticas.

En este trabajo, se privilegiará el segundo nivel de análisis. Esta elección no implica una decisión de método adoptada en completa libertad, si es que ésta puede existir en el trabajo de investigación. Refleja más bien las restricciones históricas impuestas por este objeto a la vez tan desconocido y evidente que se ha dado en llamar "mesas receptoras de sufragios". En efecto, a partir del momento en que se esboza una mirada a la historia de las elecciones chilenas —incluyendo las más antiguas—, se tiene la impresión que estas mesas siempre han existido, a diferencia de la cámara secreta. Lo anterior se debe a que, en el caso de las mesas receptoras de sufragios, la cuestión de los orígenes carece completamente de interés, en la medida en que estas mesas —objetos inmutables y aparentemente sin historia— no se encuentran asociadas a actos, o a momentos de institución susceptibles de ser identificados. Se sigue entonces que no sólo era lógico, sino también deseable el hecho de inscribir nuestro objeto de estudio en un período históricamente significativo. Tal es el sentido del debate que condujo a la reforma electoral del 12 de noviembre de 1874.

Las mesas receptoras de sufragios y la cuestión de la "libertad electoral"

Los historiadores coinciden al describir las elecciones chilenas del siglo XIX como marcadas por el fraude y la violencia. Golpizas a los electores, adulteración de votos, robo de urnas, rechazo arbitrario de la calidad de ciudadano a personas con derecho a voto... Una infinidad de hechos que, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, no remitían necesariamente al dominio de la ilegalidad y del abuso ético. En el centro de estas transgresiones, se encontraban las mesas receptoras de sufragios,

[1] Como lo prueba el estudio de Garrigou sobre el carnet (o tarjeta) electoral: Garrigou, 1990.

instancias en donde se hacían las elecciones y, por lo general, en donde se rehacían sus resultados. Ya en las elecciones parlamentarias de 1829 —período en el cual la participación electoral era privilegio de un pequeño sector de la población—, Zapiola, un observador de la época, describía cómo los *pipiolos*, en la lucha que los enfrentaba a los *pelucones*, organizaban su trabajo electoral a partir de tres comisiones que cumplían distintas funciones *en torno a las mesas receptoras de sufragios*. Es así como existía una comisión "negociadora" a cargo de la compra de *calificaciones*[2] y votos; otra era llamada "apretadora", cuya función consistía en impedir que los adversarios se acercaran a las mesas. Finalmente, se encontraba la comisión "arrebatadora", cuyo papel era quitarle al elector *su calificación* en el momento en que se aprestaba a votar[3]. Esta descripción de lo que sucedía a corta distancia de las mesas receptoras de sufragios, y a menudo frente a los ojos de sus integrantes, da cuenta del papel pasivo y parcial que éstos cumplieron durante décadas, y prefigura la cuestión planteada en los debates parlamentarios de los años 1870, respecto de la libertad del elector al momento de votar.

La ley electoral del 12 de noviembre de 1874, es principalmente conocida por haber logrado la extensión del sufragio, otorgando el derecho a voto a los hombres de 25 años (si eran solteros), o de 21 años (si eran casados) y, sobre todo, que sabían leer y escribir. De esta forma, el número de inscritos pasó de 49.047 electores al momento de las elecciones parlamentarias de 1873[4], a 106.194 tres años más tarde[5], mientras que la cantidad de sufragios emitidos pasó, en el mismo período, de 25.981 a 80.346[6]. Sin embargo, no por ello podemos deducir que el electorado chileno, antes de la promulgación de esta ley, se regía por criterios de riqueza y de fortuna, propios de los regímenes censitarios. Al respecto, y sin entrar en detalles, Valenzuela tiene razón al observar que entre 1830 y 1874, el

[2] La *calificación* fue durante lodo el siglo XIX el documento que corroboraba la calidad de ciudadano inscrito en los registros electorales. En este sentido, constituye el ancestro de las tarjetas (o carnets) de elector, cuyo estudio referido a su génesis burocrática ha sido completamente ignorado por la literatura histórica chilena. Al respecto, se podrá consultar el estimulante análisis referido al caso francés de Offerlé, 1993b.

[3] Informado por Donoso (1967), pp. 282-283. Por tratarse de un electorado reducido, es importante agregar que estas comisiones ejercían sus funciones de preferencia sobre los sujetos que, al ocupar posiciones sociales inferiores (empleados domésticos, sirvientes...), votaban en lugar de los ciudadanos debidamente inscritos en los registros electorales: en efecto, no existía ninguna obligación para el elector de ir a votar personalmente.

[4] Lo que corresponde al 2,44% de la población en aquella época, la que ascendía a poco más de dos millones de habitantes.

[5] Correspondientes al 5,12% de la población, cuya magnitud se incrementa en poco más de 70.000 habitantes.

[6] Estas cifras son extraídas de Valenzuela (1985), p. 150.

electorado chileno otorgaba un espacio importante —a pesar de la impresión dada por el artículo 8 de la Constitución de 1833— a los analfabetos, dado que el ingreso mínimo exigido durante este período para obtener la *calificación*, había sido fijado a niveles muy bajos: para las autoridades gubernamentales, "se trataba simplemente de poner las bases para la inscripción sin obstáculos de los miembros de las guardias cívicas", las que se encontraban totalmente a su disposición[7]. Dado que la inscripción en los registros electorales se efectuaba a través de las autoridades locales, estrechamente dependientes de las nacionales para su reelección, los diversos gobiernos podían entonces contar con un electorado que les era ampliamente favorable.

No obstante, el interés de la ley electoral de 1874 no se limita a la extensión del sufragio que ella hizo posible. En efecto, del conjunto de disputas previas a los debates parlamentarios, era recurrente el tema de la libertad del elector al momento de votar, que durante años confrontó a partidarios y adversarios del gobierno. Este tema, a menudo asociado a la "intervención" gubernamental ejercida por agentes electorales, ocupó un lugar considerable en los debates parlamentarios, comparable sólo con las discusiones sobre el voto acumulativo[8].

Es en este contexto que fueron discutidas por los diputados la composición y las funciones de las mesas receptoras de sufragios, con el objeto de constituirlas en órganos imparciales, susceptibles de garantizar la libertad relativa del elector al momento de votar. A este respecto, los debates parlamentarios que precedieron la promulgación de la ley de 1874 son, para el analista, de una fecundidad excepcional. En efecto, por tratarse de una ley calificada de trascendental por sus promotores, fue discutida artículo

[7] Ibídem, p. 60. Las guardias cívicas estaban formadas, principalmente, por pequeños comerciantes y campesinos. En 1869, el diputado liberal Lastarria estimaba, a partir del censo electoral realizado siete años antes, que "el poder electoral del gobierno" alcanzaba la cifra de 12.620 ciudadanos inscritos (de un total de 22.261), de los cuales 5.534 eran campesinos y 3.734 artesanos, grupos de los que se sabe formaban el grueso de las guardias cívicas (ibídem, pp. 58-59).

[8] Durante estos debates surgió por primera vez la idea de la cámara secreta, con el fin de proteger la libertad del elector. Así, durante la sesión del 9 de julio de 1872, el diputado Sanfuentes propuso "ocultar enteramente al elector dentro de una garita", con el propósito de que "nadie lo viera" al momento de insertar su voto "en el sobre". Considerando la posición social de los parlamentarios de la época, no sorprenden las risas burlonas y la hilaridad generalizada que esta proposición produjo entre los diputados presentes, como tampoco el asombro experimentado por Balmaceda, futuro Presidente de la República, quien encontraba la idea "buena" pero "algo ridícula" (*Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, sesión ordinaria del 9 de julio de 1872, pp. 228-229). El paralelo con las reacciones suscitadas por este mismo tipo de propuesta entre las elites parlamentarias francesas, ofrece una estimulante pista de investigación comparada entre diversos países, en este caso entre Chile y Francia (sobre Francia, el lector se podrá remitir al artículo de Garrigou (1988).

por artículo durante casi tres años, lo cual requirió de parte de los diputados y del ministro del Interior de la época, Eulogio Altamirano, un esfuerzo sistemático de imaginación en cuanto a los abusos que pudiera provocar y las maneras de evitarlos. De las diversas intervenciones que tenían lugar en el hemiciclo, se puede decir que eran la expresión competitiva del establecimiento de una definición legítima del sufragio y de la práctica a la que conduce. Como resultado de estos debates, las mesas receptoras de sufragios se constituyeron en un *lugar central* de las elecciones, una suerte de *carrefour* electoral que indicaba no sólo el carácter abierto y público del acto de votar, pero sobre todo que lo esencial de esta práctica se desarrollaba *frente a las mesas*, ya que la función de sus miembros era garantizar la transparencia y la sinceridad del sufragio.

Es a partir de esta ley que las mesas receptoras de sufragios se convertirían en instancias capaces de materializar, con y junto a otras tecnologías sociales, la ficción política constitutiva de un régimen democrático. En efecto, es esta reforma electoral que les retira a las municipalidades la atribución de nombrar a los miembros de las *juntas calificadoras y receptoras*, órganos ahora conformados por los mayores contribuyentes[9]. De esta forma, es toda la trama parlamentaria referida a las funciones que corresponderían a las mesas receptoras de sufragios en sus relaciones momentáneas pero cruciales con los electores, que analizaremos de ahora en adelante. Asimismo, con el fin de tener una visión más completa y más "real" de estas relaciones, estudiaremos los recursos de anulación de las elecciones realizadas en el mismo período en que tenían lugar los debates parlamentarios y luego de la promulgación de la ley, así como las actas "generales" (y algunas "parciales") referidas a las elecciones parlamentarias de 1876[10].

---

[9] Las *juntas calificadoras* eran, en el siglo XIX, las instancias encargadas de inscribir a los ciudadanos en los registros electorales. A excepción de un corto período durante el cual se estableció un registro electoral permanente, las personas con derecho a voto debían inscribirse cada vez que había una elección. Las *juntas receptoras* corresponden a las mesas receptoras de sufragios propiamente tales.

[10] Al tratarse de elecciones *parlamentarias*, en la terminología de la época se entendía por escrutinio general aquel que era realizado colectivamente, cinco días después de la elección, por los presidentes y los secretarios de las mesas correspondientes al territorio de una comuna. Los escrutinios "parciales'' concernían, en el marco de este mismo territorio, las mesas consideradas en forma individual, y se llevaban a cabo el mismo día de la elección. A partir de estas actas, elaboradas por cada una de las mesas, se efectuaba el escrutinio general. En relación a esto, hemos podido constatar que las actas de los escrutinios generales que eran redactadas en ocasión de esas elecciones reproducían, casi palabra por palabra, el contenido de las actas parciales. El interés de esos documentos es que señalan, en virtud de la ley de 1874, todas las anomalías y las irregularidades ocurridas durante la elección. Estas actas, referidas a todo Chile, se encuentran en los archivos de la Biblioteca Nacional de Santiago. *Fondo del Ministerio del Interior, Elecciones de Presidente, Senadores y Diputados* (1876) (766).

Con el fin de aprehender correctamente las relaciones entre los miembros de las mesas receptoras de sufragios, esto es los vocales, y los electores, nos apoyaremos en hechos aparentemente fútiles e insignificantes, susceptibles de dar lugar a críticas que imputan a este tipo de datos una función "impresionista". Sin duda, esta crítica se justifica plenamente en los casos en que hace referencia a informaciones de orden anecdótico que, muy a menudo, llevan a los historiadores a un entusiasmo ingenuo, a la manera de aquellos que son denostados por Finley cuando éstos descubren ejemplos destinados a ilustrar "la habilidad" de los analfabetos consistente en "garabatear una firma sobre un documento que no sabían leer"[11]. Sin embargo, los hechos que aquí nos interesan constituyen pequeños indicios acerca de las vacilaciones que acompañaron la instauración de un nuevo tipo de relación entre los vocales y los electores. En tal sentido, el interés de las actas redactadas luego de los diversos hechos es que objetivan actos y prácticas que, de otro modo, serían evanescentes.

Una ciudadanía electoral problemática

No sólo en el momento preciso de votar es cuando el elector establece una relación con individuos que podrían tanto cuestionar como "garantizar" su persona y su sufragio (comenzando por su calidad de ciudadano con derecho a voto). Efectivamente, un primer tipo de relación, tan ambigua como la anterior, se instaura entre el ciudadano y los miembros de las mesas de inscripción al momento de obtener la *calificación* que le permite, teóricamente, ejercer su derecho a voto.

Una de las principales innovaciones introducidas por la ley de 1874 fue quitarles a los alcaldes la facultad de designar a los miembros de las juntas calificadoras y receptoras de sufragios, cuya función es ahora asumida por los mayores contribuyentes. Esta modificación, que fue arduamente combatida por el Presidente de la República de la época, Federico Errázuriz, y principalmente por el ministro del Interior Altamirano, buscaba condenar un estado de hecho, a saber el enmarcamiento de las elecciones en todas sus etapas por autoridades locales dependientes del gobierno[12]. Los mayores contribuyentes aparecían entonces como personas capaces de ase-

[11] Finley (1986a), p. 47. Para una reflexión útil y sugerente sobre cuestiones metodológicas que, a pesar de las apariencias, no están muy alejadas de nuestra reflexión, se podrá consultar el libro del mismo autor, Finley (1986b).

[12] El asunto del enmarcamiento del *proceso* electoral, y no sólo de las elecciones, por la autoridad municipal, no es menor, y concierne en primer lugar la inscripción en los registros electorales, así como el resguardo de estos últimos. En este sentido, la desconfianza

gurar una mayor transparencia en el proceso electoral, dado que son "elementos sanos, independientes, extraños al poder"[13]. Tomando en cuenta las relaciones momentáneas que se entablaban entre los miembros de las juntas inscriptoras y los ciudadanos, el proceso de inscripción electoral establecido por la ley de 1874 puede ser descrito a partir del esquema presentado en la Figura N° 1.

Evidentemente, sería ingenuo creer que este proceso de inscripción electoral es idéntico a sí mismo en la realidad, como si las prácticas reales fueran la consecuencia lógica y mecánica de las veleidades del texto jurídico. Efectivamente, numerosos recursos de anulación de las elecciones muestran que, la mayor parte del tiempo, faltan una o varias de las condiciones idealmente requeridas por la ley. Dualidad de juntas de contribuyentes y, por consiguiente, de "juntas inscriptoras" en lugar de la unicidad requerida en este ámbito, composición irregular de estas juntas, adulteración de las *calificaciones*, eran hechos que no sólo se producían frecuentemente, sino que además eran insuficientes para anular el proceso de inscripción y, por tanto, la elección. Esto es lo que se desprende de la lectura de los debates parlamentarios suscitados por varios recursos de anulación, antes y después de la promulgación de la ley. En tal sentido, podríamos citar el caso de procesos de inscripción completamente viciados, al igual que las elecciones consiguientes, y de las cuales el resultado de los debates parlamentarios fue la ratificación de su conformidad a la norma[14].

En cuanto a las relaciones que el ciudadano establece al momento de inscribirse, podemos notar un conjunto de infracciones a la norma, las que a

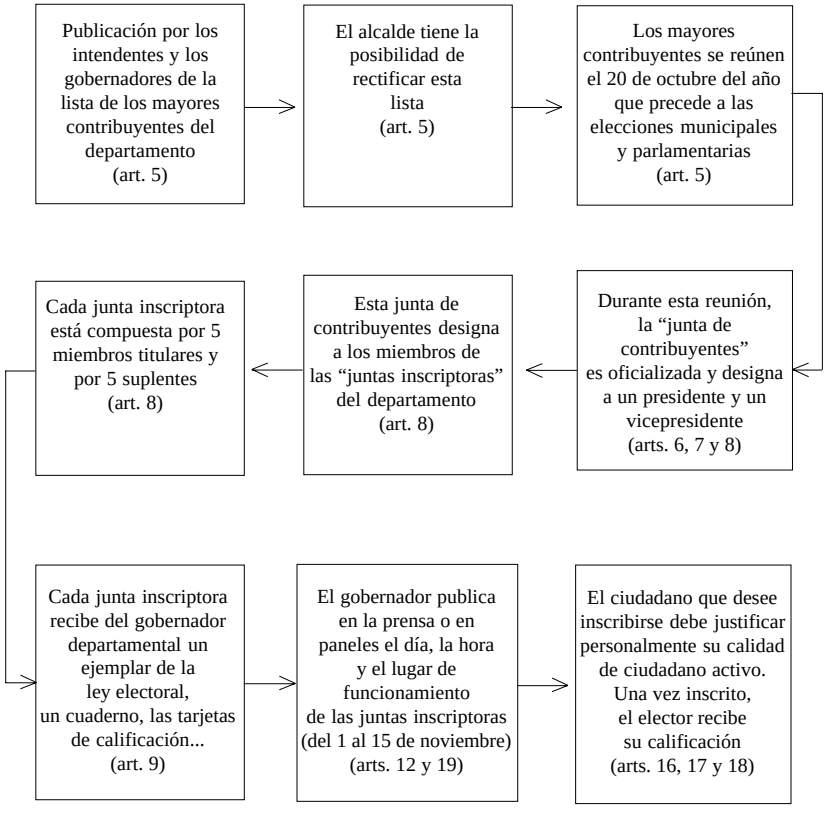
---

con el alcalde está tan presente entre determinados parlamentarios que un diputado, Vergara Albano, abogaba por que éste estuviese alejado del cuidado de los registros electorales, al necesitar éstos una "guardia especial" con el fin de evitar las adulteraciones (*Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, sesión ordinaria del 6 de junio de 1872, p. 25). La ley conferirá finalmente la guardia de esos registros al conservador de bienes raíces y al alcalde (art. 21).

[13] Según los términos del diputado Montt (*Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, sesión ordinaria del 13 de julio de 1872, p. 248). Balmaceda agregaba, respondiendo a las críticas dirigidas a los mayores contribuyentes, que no era sólo la riqueza económica la base de la independencia de esos agentes, sino también "el capital que representa la inteligencia", ya que uno y otro daban "garantías de probidad e independencia": de hecho, el impuesto que otorgaba la calidad de mayor contribuyente también era pagado por los miembros de profesiones cuyo ejercicio suponía la posesión de recursos culturales (abogados, notarios...) (sesión ordinaria del 26 de agosto de 1873, p. 402).

[14] De manera general, cabría hacer todo un estudio sobre el personal parlamentario que votaba a favor y en contra de la anulación de las elecciones, al menos en los casos en los que las votaciones eran nominales. Éste revelaría, sin duda, que los resultados de estos escrutinios se basan en divisiones "partidistas" propias del hemiciclo, pero más allá de ello en *cleavages* sociales, dado que la ratificación de conformidad a la norma jurídica equivalía en aquel entonces a un llamado al orden, social y político.

FIGURA N° 1: EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS ELECTORALES BAJO LA LEY DE 1874



veces son incluso inducidas por ella. Al respecto, es necesario recordar que la extensión del sufragio lograda por esta ley se refería a aquellos que sabían leer y escribir, lo cual debía ser probado al momento de la inscripción. A menudo, es en esa ocasión cuando tenían lugar irregularidades, como por ejemplo el rechazo de inscripción interpuesto por una junta inscriptora a un ciudadano por haber omitido poner el acento en la palabra *telégrafo*[15]. Generalmente, la dificultad para determinar la edad del ciuda-

[15] Se trataría, según el ministro del Interior Altamirano, de una mesa inscriptora de Itata (*Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, sesión extraordinaria del 13 de noviembre de 1875, p. 494). En el mismo orden de ideas, se puede citar el caso del rechazo de inscripción del rector de un liceo, tal como es informado por el diputado Mac-Iver, en el transcurso de los debates correspondientes a la elección parlamentaria de Cauquenes (ibídem, sesión extraordinaria del 2 de diciembre de 1876, p. 385).

dano daba lugar a disputas. En este caso, la propia ley no era muy precisa puesto que señalaba, en su artículo 17, que en caso de duda sobre la edad de la persona, "la junta decidiría de su admisión a partir del *aspecto del individuo*"[16]. Este último problema nos remite a la muy débil credibilidad de los documentos que corroboraban la identidad de los individuos, respecto de lo cual la propia ley se hacía eco elevando como medio de prueba aspectos tal es como el "título de una profesión o de un empleo", cuyo ejercicio le correspondería a una persona mayor (art. 17)[17]. No puede entonces sorprender el encontrar esta dificultad al momento del voto propiamente tal.

Sería fácil continuar ilustrando el amplio abanico de infracciones e irregularidades, voluntarias o involuntarias, explícitas o disimuladas, de la regla electoral. Pero al hacer esto, caeríamos inevitablemente en la descripción anecdótica, aunque ésta no siempre esté desprovista de interés[18]. Sin duda, tales transgresiones revelan un continuo que va desde la desconfianza frente al proceso electoral (así como respecto al propio acto de votar), hasta la relativa creencia en su legitimidad. Sin embargo, estas infracciones sólo adquieren verdadero sentido si se toman en serio los contextos sociales en los que se desarrolla la inscripción (y *a fortiori* la elección). Así, no es posible olvidar que situaciones destinadas a expresar la libertad y la individualidad del elector, como por ejemplo al momento de corroborar su cali-

[16] Destacado por nosotros.

[17] La dificultad para determinar la edad de los ciudadanos se encontró en el origen de innumerables debates, llegando incluso a cuestionar a los propios candidatos: tal es el caso, por ejemplo, de la incertidumbre a propósito de la edad de un diputado suplente, ya que el demandante presentaba como medio de prueba de su minoría de edad el certificado de bautizo del intimado (informe de la comisión investigadora parlamentaria de las elecciones de Casablanca, 7 de julio de 1879, *Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, 1879). El tema de la indeterminación de la edad y, más allá de ello, de la identidad personal no es algo secundario, en la medida en que se puede hacer la hipótesis de que la construcción de la ciudadanía democrática supuso el establecimiento progresivo de técnicas e instrumentos de identificación cada vez más precisos. Con ello, aunque tomando otra vía, coincidimos con la aserción de Noiriel en cuanto al surgimiento de un nuevo campo de investigación para la historia de los símbolos nacionales: "la historia de la simbólica burocrática", es decir aquella de las "fotografías de identidad, de los colores, de los timbres...": Noiriel (1991), p. 93.

[18] Efectivamente, no es necesariamente una anécdota constatar que en la víspera de las elecciones parlamentarias de 1876, surgió por primera vez la duda acerca de si las mujeres tenían derecho a voto, duda que sugiere de parte de ellas una cierta politización. Así tal como lo recuerda un historiador, "una dama se presentó en Valparaíso" con el fin de obtener su *calificación*, mientras que en La Serena, caso extraordinario, diez mujeres lograron inscribirse en los registros electorales: Edwards (1932), tomo 2, p. 372. En el transcurso de nuestras investigaciones sobre las actas redactadas a continuación de estas mismas elecciones, no encontramos ningún rastro de estas diez mujeres. Sólo en una mesa receptora de sufragios del departamento de La Ligua, se hace mención a una demanda de Paz Olivares Reyes, en la cual "protesta por la exclusión de la que es objeto en el acto de votar" (*Fondo del Ministerio del Interio*r, ibídem).

dad de ciudadano dotado de la capacidad de leer y escribir o, simplemente, de ser mayor de edad, en realidad ubican en una relación de cara a cara a personas que se conocen, e incluso que se odian. Es este tipo de situaciones, tan contradictorias con la norma, que tienen lugar principalmente en el campo y en los pueblos, en donde la inscripción y el voto se insertan en relaciones sociales preexistentes y, sobre todo, personalizadas[19]. De esta forma, es posible comprender la suerte de aquel joven ciudadano que, al momento de inscribirse en los registros electorales, le fue negada su *calificación* porque su padre, presente en el lugar, y dado que tenía opiniones políticas contrarias a las de su hijo, afirmaba que era menor de edad, pese a que este último presentaba, a título de prueba, su certificado de bautizo[20]. De manera que, al igual que en las comunas rurales francesas del siglo XIX, "es la mirada del grupo y la tradición que sirven de instrumento de identificación"[21], lo que permite comprender, por contraste, el carácter bastante más eufemístico de los abusos en materia de inscripciones y de elecciones en las grandes ciudades, ya que la urbanización produce, como se sabe, una creciente despersonalización de las relaciones sociales.

En el fondo, la situación de inscripción en los registros electorales puede ser descrita, en función del contexto social de su realización, como un momento más o menos variable de actualización de una relación de fuerza, cuyas raíces se encuentran en relaciones sociales tan diversas como complejas. Puede entonces entenderse que el acto de votar sea una oportunidad para innumerables presiones ejercidas sobre el elector: ocurre que, objeto de disputa política por excelencia, el sufragio es también un objeto de disputa social. Para comprender rigurosamente las relaciones establecidas entre el elector al momento de votar y los miembros de las mesas receptoras de sufragios, conviene previamente describir el proceso que conduce a la constitución de estas mesas y a la instauración de tales relaciones (véase Figura N° 2).

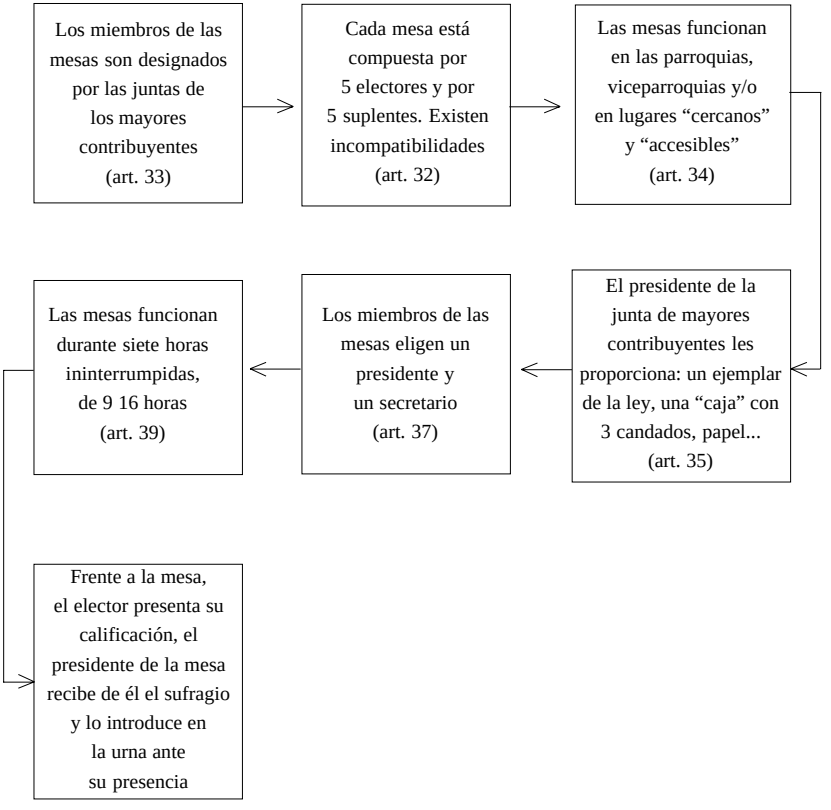
---

[19] Por lo demás, se trata de un fenómeno de alguna forma presentido por los actores políticos de la época, al constatar que los "abusos" que tenían lugar en las grandes ciudades, principalmente en Santiago, no eran tan desvergonzados ni "patentes" como en Putaendo, por ejemplo, localidad predominantemente agraria (véase en este sentido *Las elecciones de 1881. Noticia de las Reclamaciones de Nulidad Presentadas al Congreso y Discursos Presentados con este Motivo por los Diputados de la Minoría*, Santiago, Imprenta de "El Independiente", 1881. Estos recursos en anulación conciernen a las elecciones de grandes electores que, a imagen y semejanza de la elección presidencial en Estados Unidos, cumplían el papel funcional de elegir al jefe de Estado).

[20] Dado a conocer por el ministro del Interior Altamirano, en *Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, sesión ordinaria del 8 de junio de 1875, p. 42. Es importante hacer notar que la mayoría de los ejemplos citados por Altamirano se inscriben en un registro polémico, en este caso con el fin de descalificar la imparcialidad de los mayores contribuyentes, sin que sea siempre posible cerciorarse de su veracidad.

[21] Noiriel (1993), p. 11.

FIGURA N° 2: LA CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS Y SUS RELACIONES CON LOS ELECTORES BAJO LA LEY DE 1874



Por ahora, nos preocuparemos de algunas de las secuencias funcionales ligadas a las relaciones que se instauran, o que se reactualizan, entre los electores y los vocales al momento de sufragar. En primer lugar, es importante señalar que la ley prohíbe a determinadas categorías de personas formar parte de las mesas. Tal es el caso de los "empleados públicos que reciben un salario y cuya designación, promoción o destitución" depende de una intervención del Presidente de la República "o de sus agentes" (art. 32). Por medio de este artículo, lo que se buscaba era erradicar la intervención presidencial en las elecciones, cuyo corolario era un procedimiento de designación de los miembros de las mesas que dejaba un cierto espacio al

azar[22]. Por otra parte, la ley, al prever lugares accesibles y plazos imperativos de funcionamiento de las mesas, prohibía a los vocales instalarse en cualquier parte y les quitaba la atribución de interrumpir o de concluir la elección de manera discrecional[23]. En cuanto a la suspensión de las elecciones en caso de fuerza mayor, sólo se prevé en situaciones tan extremas como la presencia en el lugar de una banda armada (art. 43), de desórdenes y de aglomeraciones que impiden a los electores votar (art. 44).

No cabe duda que las secuencias que se acaban de distinguir tienden teóricamente a garantizar la autonomía, e incluso la seguridad del elector al momento de votar. Sin embargo, como se verá, la interacción que se establece entre el votante y los vocales de mesa se encuentra en el origen de un verdadero sistema de desviaciones respecto a la pulida lógica del texto jurídico. Verdaderos desmentidos prácticos opuestos a una norma destinada a regirlo, estas desviaciones nos informan de la verdad, hoy olvidada, del acto de votar al momento de su "universalización". Lo que sucede es que, tanto aquí como en otras partes, las prácticas desviadas nos enseñan mucho más sobre la legitimidad del sufragio y del votante que el conjunto de actos desvanecidos al momento de haber sido realizados, ya que éstos eran conformes con la codificación de la que eran objeto, sin ser jamás sus meros productos[24].

La economía del acto de votar

El acto de votar codificado por la ley de 1874 —es decir el conjunto de pequeñas operaciones que acompañan la inserción de un voto en una

[22] Este procedimiento de designación, cuya descripción detallada resultaría fastidiosa, es el mismo que se utilizó durante la formación de las mesas inscriptoras. Señalemos simplemente que el sorteo al que se refiere la norma concierne solamente a las listas de los mayores contribuyentes, los "elegidos", siendo los únicos habilitados para designar a los miembros de las mesas receptoras de sufragios. Es decir que el azar, concepto muy relativo en el caso que nos preocupa, funciona tanto como garantía (simbólica) de "transparencia" y como mecanismo (práctico) de distinción en comparación con el arbitrario que caracterizaba al procedimiento de antaño, en el cual el alcalde jugaba un papel decisivo.

[23] Sin embargo, podemos citar el caso, junto a varios otros en el marco de las elecciones parlamentarias de 1876, de una mesa de Huelén que "inició sus trabajos media hora antes de lo que estaba determinado por la ley", y sobre todo que funcionó en "una pieza y en presencia de fuerza armada" (*Fondo del Ministerio del Interior*, ibídem). De manera más general, la ley fijaba la hora de cierre de las mesas a las 16 horas, simplemente porque era "indispensable que la elección concluya con luz", con el fin de evitar "el robo de cajas", esto es de las urnas, según los términos del diputado Vergara Albano (*Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*), sesión ordinaria del 27 de julio de 1872, p. 301).

[24] Ahí es donde reside el principal interés del trabajo pionero realizado de Déloye e Ihl sobre los votos blancos y nulos, expresiones patológicas y desviadas de las opiniones políticas respecto de las formas establecidas, o más bien en vía de ser establecidas en Francia en la época estudiada por los autores: Déloye, Ihl (1991a) y Déloye e Ihl (1991b).

urna— no se podría comprender si se excluyeran del análisis los debates previos relativos a sus condiciones de producción, sociales y materiales. A este respecto, es preciso recordar que es en un contexto de intervención electoral de los agentes del Estado que se inscribe el trabajo parlamentario de codificación del acto de votar. Este fenómeno de presión electoral estatal, que también podemos encontrar en Francia y que, como se verá, sólo es "una de las manifestaciones, de tantas otras, del encuadramiento del sufragio"[25], era en Chile un rasgo constante de las elecciones en el siglo XIX[26], cualquiera sea la orientación política de los gobiernos del momento. Por tanto, y considerando la reciente entrada de los radicales a la Cámara de Diputados y la aparición en su seno de nuevos grupos políticos, se puede entender que el *enjeu* de la libertad del elector al momento de votar haya ocupado un importante lugar en los debates parlamentarios de los años 1870, principalmente a propósito de la pregunta si las "influencias" del poder eran legítimas y, por consiguiente, si el voto debía ser secreto.

Sucede que el voto, dada su calidad de objeto de disputa política, también es objeto de disputa social, si se entiende por lo primero la orientación política que, se supone, es expresada por el sufragio, y por lo segundo las modalidades concretas que deberían presidir su producción. En tanto objeto de disputa social, las condiciones bajo las cuales debería ejercerse el voto suscitaron debates interminables, cuyo carácter a menudo apasionado no se entendería si, según la manera de cómo se vote, no fuese el orden social el que estuviera en juego. Sólo así es posible comprender el hecho que algunos diputados, no obstante ser opositores obstinados a toda intervención electoral del gobierno, aborrezcan el voto secreto al ser una solución que destruye "otras influencias legítimas", como por ejemplo "la empresa de la opinión"[27], o que incluso estén a favor de un "voto discrecional", es decir de la "libertad de votar" como uno quiera[28]. El sentido de estos alegatos a favor del voto público, o al menos en contra del voto "oculto" como algunas veces se le llamó, se vuelve manifiesto cuando se les confronta con las intervenciones de los partidarios del secreto del sufragio. Para estos últimos, el voto secreto garantizaría al elector "la independencia de su juicio", obedeciendo "únicamente a la voz de su concien-

[25] Huard (1985), p. 137.

[26] Diga lo que diga uno de los más importantes historiadores chilenos del período en cuestión, para quien "el gran pecado del gobierno" no era intervenir en las elecciones, sino más bien "ser obedecido pasivamente y sin réplica: esta sumisión incondicional constituía la única fuerza política efectiva del país": Edwards (1959), p. 63, destacado por el autor.

[27] Según los términos del diputado conservador Blest Gana, *Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, sesión ordinaria del 27 de julio de 1872, p. 303.

[28] Posición sostenida por el diputado conservador Zorobabel Rodríguez, ibídem, sesión ordinaria del 27 de julio de 1872, p. 303.

cia"[29]. A pesar de que con el voto secreto no desaparecerán las influencias, éstas por lo menos se transformarían en "influencias voluntarias", preferibles a las "influencias forzadas" inducidas por la publicidad del sufragio[30]. De lo que se trata es evitar que el elector vote en un sentido contrario a sus convicciones: en efecto, "¿cree la honorable Cámara que Luis XVI habría sido condenado a la decapitación si el voto de la asamblea francesa hubiese sido secreto?"[31].

No cabe duda que la división entre partidarios del voto público y aquellos otros diputados favorables al voto secreto, encuentra su fundamento en factores sociales, en la medida en que desdibuja y trasciende las divisiones políticas existentes en el seno del hemiciclo[32]. En tal sentido, el objeto del debate es claramente planteado por el diputado Vicente Reyes: según él, el principal argumento esgrimido en contra del secreto del sufragio, es que "la *dignidad* del ciudadano" sólo es posible si se manifiesta "con *entereza* y públicamente su modo de pensar"[33]. Mientras para algunos el secreto del sufragio es asociado con la deshonestidad, la indecencia e incluso con la inmoralidad, y la publicidad del voto con un verdadero código del honor de un elector que tiene conciencia de la importancia de su acto, para otros, estas dos modalidades del voto remiten a propiedades exactamente inversas. Se trata entonces de concepciones éticas diferentes respecto de la individualidad y, finalmente, del status del elector que se oponen de manera apasionada en el hemiciclo. En efecto, lejos de constituir un grupo homogéneo, las elites parlamentarias manifiestan su heterogeneidad social a través de sus tomas de posiciones, sobre todo cuando éstas tienen relación con sus condiciones de existencia. Por consiguiente, el principio de explicación remite menos a factores ideológicos que a su *ethos*, concepto que indica en Weber, tal como nos lo recuerda Bendix, "que la participación de cada hombre en la sociedad a la cual pertenece, supone un compromiso personal con los modelos de conducta y los intereses materiales y espirituales de un grupo social dado"[34]. Y si el debate acerca del secreto del voto suscita opiniones diametralmente opuestas, y a menudo de

[29] Intervención del diputado Arteaga Alemparte, ibídem, sesión ordinaria del 27 de julio de 1872, p. 302.

[30] Según los términos del diputado Puelma, ibídem, p. 303.

[31] Según palabras del diputado Balmaceda, ibídem, p. 303.

[32] Casi se podría hablar de esta división como el fruto de un *enjeu* "transversal", para retomar la terminología de Garrigou, en el sentido en que los alineamientos "partidistas" y las tomas de posición políticas que se desprenden de ellos se desdibujan frente a divisiones sociales que ponen en juego, en la sociedad chilena de entonces, las relaciones entre las clases que se encuentran representadas en la Cámara Baja: Garrigou (1985), p. 366.

[33] Ibídem, sesión ordinaria del 27 de julio de 1872, p. 304, destacado por nosotros.

[34] Bendix (1979), p. 252.

manera contradictoria entre los diputados, es porque las elites parlamentarias que allí se confrontan presienten, si se puede decir, que se trata de una disputa (un *enjeu*) que amenaza su existencia en política y, más allá de ella, su posición social, ya que las definiciones en competencia del modo de ejercicio del acto de voto constituyen, desde este punto de vista, un conjunto de estrategias de subversión (y de conservación) del orden establecido[35].

Pero, ¿qué se entendía en aquel entonces por voto secreto? Principalmente, la existencia de sobres en cuyo interior se encontraría el sufragio del elector. En efecto, en el artículo 37 del proyecto de ley original, se preveía que "el sufragio deberá estar contenido en sobres", disposición que fue combatida, ya en 1872, por el diputado Walker Martínez en nombre de la publicidad del voto. De manera general, los partidarios del voto secreto consideraban el sobre como el instrumento que permitía materializar la independencia del elector. Sin embargo, rápidamente, este instrumento fue objeto de numerosas críticas, primero por parte de los diputados que estaban a favor de la publicidad del sufragio, luego por sus adversarios. Sin entrar en detalles que nos alejarían de nuestro objeto de investigación, señalemos que la ley eliminará los sobres[36] en el momento en que consagra el voto personal y secreto, lo cual evidentemente plantea la pregunta respecto de sus condiciones materiales de posibilidad.

Es en este punto del análisis que se impone, en nuestra opinión, la necesidad de analizar al elector en situación. En efecto, tratar el acto de votar como si fuera un gesto natural y coherente, libre de todo obstáculo, equivale a transportar en un plano antropológico la univocidad estadística obtenida por agregación al cabo del recuento de los votos, y por tanto a no dar cuenta de sus condiciones de posibilidad. Ahora bien, la práctica en apariencia simple y banal que consiste en presentarse a una mesa receptora

[35] De este modo, es posible explicar, por ejemplo, la acérrima oposición del diputado Blest Gana (y junto a él muchos otros) al voto secreto, a pesar de haber apoyado anteriormente reformas laicizantes que favorecían la autonomía individual, como el matrimonio civil o la libertad de cementerio.

[36] De manera muy curiosa, las incertidumbres referidas a los sobres persistieron durante largo tiempo... incluyendo el período inmediatamente posterior a la promulgación de la ley. Fue así como en 1875, el diputado Zorobabel Rodríguez concluía, de acuerdo a la letra del párrafo primero del artículo 46 de la ley ("Si al momento de abrir el sufragio apareciera que contiene varios votos idénticos, sólo uno de ellos será considerado; si fueran diferentes, ninguno será escrutado"), que de "esta redacción se sigue que el voto va en un sobre" (*Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados,* sesión extraordinaria del 13 de noviembre de 1875, p. 494). En realidad, a lo que hacía referencia este artículo era al caso de un voto *doblado* que contendría varios sufragios (véase en este sentido, la intervención del diputado Cood, ibídem, p. 495). Los ecos de esta confusión llegan incluso a inducir al error a Valenzuela, un sociólogo generalmente advertido, quien concluye no sólo en la existencia de los sobres, sino además, y de manera gravemente anacrónica, en la de la cámara secreta: Valenzuela (1985), p. 62.

de sufragios e introducir un voto en una urna, supone el cumplimiento previo de un conjunto de pequeñas operaciones que hacen del acto electoral una práctica eminentemente compleja. Efectivamente, no comprenderíamos nada de la realidad del acto de votar al momento de su extensión, si no tomáramos en cuenta sus condiciones de producción, en primer lugar aquellas que derivan de la topografía del lugar en donde éste se ejerce.

El voto secreto consagrado por la ley de 1874, no es muy diferente de aquél descrito por Garrigou antes de que en Francia se instituyera la cámara secreta, esto es un acto en el que lo esencial se hace en público. Esta práctica del voto, que se produce y se describe de manera aparentemente contradictoria, a medio camino entre lo secreto y lo público, extrae sin duda una parte de su carácter híbrido del tácito compromiso llevado a cabo entre las diversas fracciones parlamentarias al momento de su codificación. Pero desde el punto de vista del elector, el acto de votar así definido se presenta como una operación problemática, cuyo secreto consagrado por la ley revela, la mayor parte del tiempo, una imposibilidad práctica, en el sentido en que se realiza en condiciones materiales que no garantizan para nada lo que Goffman llama los "territorios del yo"[37]. Con esta idea, que nos sirve tanto para indicar la ausencia de espacios de intimidad para el votante como su imposibilidad objetiva de afirmar su *identidad* de ciudadano-elector en tanto separada de su pertenencia social, adquieren pleno sentido las discusiones sobre el tema de los sobres, del tipo de papel exigido para que el sufragio sea válido y sobre aquello que llamaremos de manera más general, el orden de la elección: es decir, un conjunto de elementos que remiten, por una parte a las relaciones entre el elector y el entorno humano y material del lugar de votación, y por la otra a la interacción más o menos contingente establecida entre el votante y los vocales de mesa.

Muchas de las dificultades que enfrenta el elector al momento de votar derivan del procedimiento establecido por el artículo 41 de la ley, a pesar de estar redactado de manera de garantizar la "sinceridad" del sufragio. Este artículo estipula que al momento de votar, el elector debe presentar a los vocales su *calificación*, la que será comparada con el registro con el fin de verificar su calidad de ciudadano inscrito. Ahora bien, al igual que al momento de la inscripción en los registros electorales, una vez más se reproducen las disputas acerca de la identidad del elector.

No podemos dejar de recordar los largos debates parlamentarios sobre este tema, en los cuales los vocales aparecían como los principales acusados. Es así como, en el proyecto de ley original de la Cámara Baja,

[37] Goffman (1973), pp. 43-72.

estaba previsto un complejo procedimiento con el fin de "verificar" la identidad del elector. En primer lugar, en caso de impugnación, el votante debía escribir su firma, la que sería comparada con la del registro. Si aparecía una total disconformidad entre ambas firmas, el intimado se vela imposibilitado de votar. Este era el único caso en que los vocales de mesa podían impugnar la identidad de la persona que se presentaba a sufragar. Sin embargo, también estaba previsto, aun cuando las dos firmas hubiesen sido declaradas con formes, que al menos dos electores podían impugnar la identidad del votante. Este último debía entonces *jurar* que él era el elector que se encontraba mencionado en la *calificación*. Si luego de esta solemne declaración, los dos electores señalados al principio juraban a su vez que no se trataba de la misma persona, entonces los vocales de mesa le impedirían votar. Omitiremos comentar las largas discusiones de los diputados, en cuanto a saber en nombre de quién se debería jurar si no se era creyente, o si jurar en nombre de Mahomet o de su propia madre tendría valor[38]. Lo que importa, histórica y sociológicamente, es que tales debates revelan la magnitud del problema, ya que la ausencia de tecnologías confiables e indiscutibles era enfrentada por medio de un acto cuyo valor supuesto podría suplir, en un plano moral, aquello que los instrumentos administrativos eran incapaces de realizar en el plano burocrático. A fin de cuentas, la ley mantendrá en su artículo 42 la proposición relativa a la comparación de las firmas, descartando las disposiciones referidas al juramento. Como era de esperar, durante las elecciones parlamentarias de 1876, las disputas respecto de la identidad del elector fueron muy numerosas[39], situación que se mantuvo durante largo tiempo[40].

---

[38] *Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados*, sesión ordinaria del 3 de agosto de 1872, p. 313 y sigtes.

[39] Los casos de disconformidad entre las firmas podían suscitar entre los vocales decisiones divididas. Tal fue el caso, por ejemplo, de una mesa de Illapel, en la que fue acordado, "por mayoría", rechazar los sufragios de dos electores, sin omitir el hecho que el mismo acuerdo fue tomado a la "unanimidad" en el caso del ciudadano Florencio Rosas (*Fondo del Ministerio del Interior*, ibídem). Un caso no previsto por la ley es aquel mencionado en un acta de una mesa de Talca: un ciudadano que se presentó a votar, llevaba una *calificación* cuyo número de orden era diferente al que figuraba en el registro. Los vocales, por tres votos contra dos, decidieron rechazar el sufragio.

[40] Al menos hasta la introducción, en 1925, de las huellas digitales en el procedimiento de inscripción (véase González García [1927], p. 220), el establecimiento de los registros electorales permanentes, en 1962, vino a completar este proceso destinado a reducir las dudas acerca de la identidad de los electores (Gil [1969], p. 227 y sigtes.) Convendría agregar que las disparidades entre la identidad del sujeto que se presenta a votar y aquella que figura en la *calificación*, también podían prestarse para abusos por parte de los mismos electores, en realidad muy a menudo en connivencia con los vocales de mesa: es así como, en los recursos de anulación presentados luego de las elecciones de 1881, se hace

No obstante, luego de haber corroborado su identidad y estando en condiciones de votar, el elector debía además realizar la operación, aparentemente anodina, relativa a la elaboración y emisión del sufragio. En este caso el artículo 41 de la ley establecía las condiciones materiales y formales del voto y del acto que conduce a él. En términos generales, se puede adelantar la hipótesis que si este artículo describe tan precisamente el acto de sufragar, enfatizando su realización práctica, es porque pone a prueba el carácter secreto del voto y, por vía de corolario, el status soberano que formalmente se le acredita al elector, tanto respecto a los vocales como en relación al entorno inseparablemente institucional y social del lugar en donde se produce[41]. De esta forma, se establece que el presidente de la mesa "recibirá el sufragio y lo depositará en la caja en presencia de quien lo emite", el voto debe ser emitido "en papel blanco común sin ninguna marca o ningún signo, en cuyo defecto este no sería admitido". Concluye que luego de haber aceptado el sufragio, uno de los vocales lo registrará en el índice alfabético "junto al nombre del elector", y en ese momento se le devolverá la calificación "con la mención *ha votado* al reverso". Por muy minuciosa que resulte la descripción normativa de las pequeñas operaciones constitutivas del acto de votar, es preciso cuidarse de erigirla en principio de producción del gesto electoral. Contra la postura objetivista que presupone, a la manera de un realismo epistemológico excesivo que postula como modo de acceso a la verdad una adecuación entre el pensamiento y su objeto de una manera ingenuamente cercana a la imagen del reflejo en un espejo[42], una identidad perfecta entre la codificación jurídica y anticipada de las prácticas y su producción real, es necesario oponer el punto de vista no menos realista del votante y de los vocales de mesa. En efecto, pretender que las personas al momento de votar actúan a partir de la lógica planteada por el texto jurídico y a la luz de categorías políticas recientemente establecidas, equivale a olvidar formular la pregunta lógicamente previa del acostumbramiento a un acto completamente inédito. Por consiguiente, no es sorprendente constatar que el conjunto de estas pequeñas operaciones sean a menudo objeto de desviaciones y violaciones, no sólo porque la defini-

mención a electores que votaron con *calificaciones* que pertenecían a personas muertas, o incluso que habían votado varías veces, siendo sin duda un caso extremo el de un menor de 18 años que votó 14 veces en las seis mesas de San Felipe (*Las elecciones de 1881*, véase nota 19, p. 46).

[41] Por ahí, nos reencontramos con el sentido de esta "ley general" formulada por Bourdieu, a saber que "mientras más peligrosa es la situación, más tiende la práctica a ser codificada" (Bourdieu [1986], p. 41).

[42] Para retomar la metáfora utilizada por Simmel a propósito del realismo en historia: Simmel (1984), p. 99.

ción recta y correcta del gesto electoral no ha sido completamente interiorizada, sino porque tales transgresiones son el indicio de una reapropiación del acto de votar a partir de esquemas fundamentalmente prácticos[43].

Al respecto, no hay que olvidar que la situación electoral permitía a menudo actualizar relaciones sociales preexistentes, como por ejemplo las relaciones de clientela, cuya característica a la vez contradictoria e interesante para aprehender la posición híbrida de un elector que no lograba consolidar una identidad de ciudadano con derecho a voto apartada de su pertenencia social[44], era un lazo afectivo ambiguo, debido a que "los celos, el odio, la humillación y el resentimiento" podían eventualmente aflorar en la superficie[45]. A pesar de las dudas terminológicas y estadísticas sobre el tema, se puede formular la hipótesis de que los debates parlamentarios relativos a las operaciones constitutivas del acto de votar, tomaban en cuenta el contexto social de las elecciones en el campo y en los pueblos[46]. Pero en todos los casos, es importante volver a las operaciones que estructuran y unifican el acto de sufragar, según el artículo 41 de la ley. Si retomamos cada una de estas operaciones y las confrontamos por una parte con los debates que les antecedieron y, por la otra, con las impugnaciones de las que fueron objeto después de alguna elección, nos proporcionamos los medios para aprehender la situación de un elector que participa en una interacción con los vocales de mesa, además de su relación con un entorno

[43] Es así como hay que entender, en un plano teórico, el fino análisis de A. Mary sobre las relaciones entre esquema práctico y codificación, a saber que "la noción de esquema práctico es [...] primera tanto histórica como lógicamente", ya que es la única que proporciona "el principio de inteligibilidad de los estados posteriores del esquema, de su eficacia": Mary [1988], p. 32. En el caso particular del acto de votar en una situación de extensión del sufragio como era el Chile de la época, nuestro problema toma ribetes un tanto diferentes de aquel que es analizado por Briquet a propósito del modo de apropiación de la política y de las elecciones por los campesinos corsos durante la Tercera República francesa: si bien es cierto que éstos interpretan "algunas relaciones sociales" a la luz de "categorías políticas recientemente aparecidas", dado que "los sistemas de representaciones políticas" se inscriben *progresivamente* en su "cotidianidad", el problema que nos ocupa remite al carácter específico e inédito de una práctica que sólo puede ser concebida por personas que acaban de acceder al status de votantes, recurriendo a una "cotidianidad" preexistente bastante alejada de la lógica política expresada por el texto jurídico: Briquet [1991], p. 32, el subrayado es nuestro.

[44] Sobre este punto, el lector podrá consultar con interés el artículo de Leca, 1986, p. 161 y p. 167 y sigtes.

[45] Médard [1976], p. 106, nota 15. Sólo a título indicativo, recordemos que según Valenzuela (1985, pp. 118-119), los "agricultores" (categoría que, en este autor, es completamente ambigua) representaban, en 1872, 16.698 electores inscritos (34% del electorado total), cifra que pasa en 1878 a 70.966 (47,7%), de los cuales 1.680 eran peones gañanes. Lo anterior no obsta a que se mantenga la interrogante sobre el sentido atribuido por el autor a la categoría "agricultores".

[46] Podemos citar, en apoyo a esta hipótesis, el hecho de que la inmensa mayoría de los recursos de anulación discutidos en la Cámara de Diputados entre 1870 y 1876 correspondía a las elecciones en el mundo rural.

susceptible de tener una incidencia sobre su comportamiento[47]. En aras de la claridad, es conveniente respetar el orden lógico y cronológico establecido por el artículo en cuestión, distinguiendo entre la elaboración material del sufragio y su emisión efectiva, es decir, su inserción en la urna.

La elaboración del sufragio: entre el buen papel y *los malos dobleces*

El asunto referido a la elaboración del sufragio no resultaría comprensible sin contextualizarlo en el marco de la discusión sobre el secreto del voto, y por tanto en la manera de garantizar la soberanía del votante. En efecto, ¿cómo impedir que el sufragio del elector sea conocido de manera anticipada por los vocales de mesa? Esta es la pregunta a la que los diputados intentarían responder, definiendo las características del instrumento que materializa la "opinión" del votante.

Por tal razón, la discusión se centró en un primer momento, y durante largo tiempo, en los sobres, y más precisamente en su fisonomía. Es así como, originalmente, estaba previsto que los sobres fueran de un color uniforme (procedimiento elemental destinado a evitar que los agentes electorales pudiesen ejercer un control sobre el votante obligándolo a llevar un sobre de un determinado color), los que serían distribuidos por los vocales. Una vez descartado del debate el tema de los sobres (aunque, como se vio, todavía suscitaba incertidumbre luego de la promulgación de la ley), principalmente en razón de la actitud arbitraria que podrían tener los vocales al decretar su agotamiento, la discusión se centró en la materialidad del voto propiamente tal. Tratándose de garantizar, para algunos diputados, la "independencia" del elector al momento de sufragar en el lugar del voto, varias maneras fueron concebidas para lograrlo. Sin duda, a los ojos del ciudadano del siglo XX, el procedimiento propuesto por el diputado Sanfuentes, el cual consistía en que el votante recibiera un sufragio, sin tomar en cuenta ni su forma ni su aspecto, "de las manos de cada uno de los representantes de los diferentes partidos"[48] y fuese introducido en una "garita", aparece como

[47] No hay necesidad de insistir en que razonamos aquí en términos de tendencias, ya que la masa de datos empíricos utilizada indica una manifiesta recurrencia (al menos en el caso de las elecciones parlamentarias de 1876) y, con ello, plausibilidades "bien fundadas" para elecciones posteriores. Restaría descubrir las lógicas que llevan del estado de probabilidad al de realidad (efectos de coyuntura, estados de los mercados políticos, formas de la movilización electoral, incidencia de los modos de escrutinio...), empresa que resulta imposible de llevar a cabo en el marco de este trabajo.

[48] *Boletín de Sesiones*..., ibídem, sesión ordinaria del 9 de julio de 1872, p. 228.

una solución lógica y llena de sentido. Pero al mismo tiempo, cabe recordar que ésta fue sólo una de las modalidades propuestas en la época, y que además fue la menos aceptable para los diputados de entonces. Sucede que la independencia del votante era concebida tomando en cuenta no tanto su posición en un espacio abierto y público (aunque, como se verá, hubo algunas proposiciones que iban en este sentido), como las características del propio voto. Ello, debido a que las "influencias" —voluntarias o forzadas— aún eran concebidas como legítimas, cualesquiera que fueran las definiciones de la legitimidad que se encontraban en competencia. De este modo, se repiten en los debates acerca de la fisonomía del voto los mismos *enjeux* y los mismos argumentos respecto de las características de los sobres, ya que la distinción entre estos dos elementos resultaba completamente problemática[50].

Si bien los debates confundieron durante largo tiempo el sobre con el voto, el problema de fondo para los diputados consistía en evitar que estos dos instrumentos contuvieran signos exteriores que pusieran en duda la "independencia" vacilante del elector. En el caso preciso del sufragio, la ley establecería como condición fisonómica de validez, la ausencia de toda marca en el "papel blanco común" que constituía la materialidad del voto. Ahora bien, es la interrogante respecto de lo que había que entender por marca la que constituirá un problema, ya que el tipo de papel utilizado por el elector, aunque fuese papel blanco común, puede ser interpretado como una marca. En efecto, "existen veinte o treinta tipos de este papel", por lo que la falta de precisión sobre este tema podía dar lugar a "una infinidad de abusos". Por tal razón, el diputado Vicuña Mackenna propuso que el papel a partir del cual sería fabricado el sufragio fuese "blanco", como "el que se utiliza para hacer papel con membrete"[51]. No obstante, se le replica que este tipo de papel tampoco es completamente uniforme, ya que "hay un papel francés, alemán, belga, español y todos son diferentes"[52]. Sin duda, el uso del papel, cualquiera fuese su especie o género, era preferible al cartón, en la medida en que este último no permitía determinar *un tipo*: el problema es que, al respecto, es "muy difícil fijar el límite en donde termina el papel

[49] De allí el que no haya sido considerada, ni siquiera llegando a provocar una votación.

[50] Lo que podría explicar las confusiones y las incertidumbres sobre este tema, principalmente a propósito de los sobres. Al respecto, es necesario señalar que las actas elaboradas por las mesas receptoras de sufragios durante las elecciones parlamentarias de 1876, no mencionan en ningún momento la existencia de sufragios al interior de sobres.

[51] *Boletín de Sesiones...*, ibídem, sesión ordinaria del 13 noviembre de 1875, p. 492. Como se puede apreciar, esta proposición tiene lugar un año después de la promulgación de la ley.

[52] Según las palabras del ministro de Hacienda Barros Luco, ibídem, p. 493.

y en donde comienza el cartón", por lo cual la mejor solución era "no decir nada" sobre la fisonomía del voto[53].

Sin embargo, no era sólo el tipo de papel utilizado el que podría haber permitido una "lectura" por parte de los vocales, sino también y *a fortiori* las marcas y los signos exteriores del propio voto. Al respecto, es necesario distinguir el caso del sufragio marcado antes de que fuese introducido en la urna, de aquel que aparece al momento del recuento de los votos. La distinción no es para nada académica, ya que comanda el destino del sufragio. Así, si al momento de votar quedaba establecido que el voto no era exteriormente virgen, éste sería rechazado (art. 41 de la ley). Por el contrario, si lograba ser introducido en la urna, éste no sería considerado en el recuento de votos: en el caso de que hubiese una petición de alguno de los vocales, sólo se haría mención de ello en el acta[54].

No cabe duda que las discusiones acerca de las eventuales marcas del sufragio, así como la solución adoptada por la ley que consistía en descartarlos *antes* de ser introducidos en la urna, sólo son comprensibles en relación a la falta de imparcialidad de la cual son acreditados los vocales al momento del recuento de votos. En efecto, "el peligro" radicaba en la posibilidad de que uno de los vocales de mesa "haga con la mano una señal cualquiera sobre los votos de los adversarios (...) con el fin de excluirlos del escrutinio"[55]. Pero no es sólo el tipo de papel y los signos exteriores del sufragio lo que ponía en duda el secreto del voto, puesto que los dobleces también podían ser interpretados como atentados a la soberanía relativa del votante. Sin duda, la cuestión de los dobleces no habría sido planteada si la propia materialidad del voto no se prestara para tal interpretación. De esta forma, aun cuando el cartón era excluido de la gama de materiales legítimos, el papel, elemento sin duda más noble a causa de su plasticidad, permitía de alguna manera las operaciones fraudulentas por parte de los vocales de mesa. En efecto, "cualquier doblez" realizado por alguno de los vocales al momento del escrutinio "podría ser considerado como una mar-

[53] Palabras del diputado Zorobabel Rodríguez, completamente congruentes con su posición relativa a la modalidad del voto (público o secreto), ya que la mejor manera de ejercerlo era, también ahí, "no decir nada": ibídem, sesión extraordinaria del 27 de octubre de 1874, p. 404.

[54] En las actas redactadas luego de las elecciones parlamentarias de 1876, sólo se hace mención a esos votos marcados en una ocasión. Así, en Valparaíso, éstos son designados bajo la etiqueta "incidentes": tal es el caso de dos votos declarados "nulos" por llevar papel de seda pegado, o bien de otros 59 votos "que tenían una raya" que, según deducción de la descripción confusa del acta, formaba un cuadrado. De manera más general, la ley no hace ninguna mención acerca del status de estos votos (¿son blancos o nulos?), y se ignora su volumen y recurrencia.

[55] J. M. Balmaceda, *Boletín de Sesiones...*, ibídem, sesión extraordinaria del 27 de octubre de 1874, p. 405.

ca"[56], ya que el límite entre el buen doblez y el incorrecto no era considerado por la ley, cuestión que era entonces erigida al estado de disputa al momento del conteo de los votos[57].

Sin embargo, la "independencia" del elector, así como la opción expresada a través de su sufragio, ¿eran sólo susceptibles de ser cuestionadas por los vocales de mesa? Si se toman en serio los debates parlamentarios previos a la promulgación de la ley, la respuesta sólo puede ser negativa: la modalidad de emisión del sufragio, al ser realizada en un lugar abierto, a vista y presencia de todos, cuestionaba una vez más el principio del secreto, pero esta vez por los individuos presentes en el lugar del voto.

La emisión del sufragio y el marco de la experiencia

A diferencia de la operación relativa a la elaboración de la papeleta de voto, que en la práctica siempre se realizaba en un lugar distinto al recinto electoral, y no necesariamente por el elector[58], la emisión del sufragio se desarrollaba en un lugar susceptible de incidir en el comportamiento y en la elección del votante. Este lugar abierto por excelencia, completamente desprovisto de espacios que pudiesen garantizar los "territorios del yo" del elector, es decir su intimidad, constituía el marco inevitable de la experiencia electoral o, si se prefiere, de un acto que se realizaba fundamentalmente en público.

La paradoja de lo que Garrigou llamó, para el caso de Francia, "un voto secreto en público", y que se repite en Chile durante el siglo XIX, se explica por la legitimidad (variable y relativa según los diputados de la época) del juego de las "influencias" ejercido sobre el votante. Ahora bien, estas influencias sólo adquieren su verdadero sentido y se tornan realmente eficaces al momento de la emisión del sufragio. Esto es lo que explica que

---

[56] Según las palabras del diputado Puelma, ibídem, sesión ordinaria del 25 de julio de 1872, p. 301.

[57] Operación en la cual participan los vocales de mesa y los representantes de los candidatos en competencia. Desgraciadamente, las actas consultadas no ofrecen ningún indicio sobre luchas a propósito de los dobleces: sin embargo, podemos suponer, considerando el tenor de los debates parlamentarios relativos a las marcas, que existieron.

[58] Es lo que se trasluce de la literatura histórica consagrada al siglo XIX chileno. Aunque poco proclives a proporcionar datos precisos sobre este tema, todos los historiadores concuerdan en señalar que numerosos electores recibían la papeleta de voto de manos de los agentes electorales al servicio ya sea de los candidatos en competencia, ya sea del gobierno: en este último caso, los miembros de la guardia cívica, objeto de codicia recurrente, eran blanco de presiones por parte de los intendentes, las que se traducían muy a menudo en la distribución pura y simple de los votos entre sus filas.

algunos diputados, liberales y sobre todo radicales, preocupados por proteger al votante de las "malas" influencias, hayan buscado imponer un dispositivo de regulación del orden electoral ajustado a su propia definición de cómo votar. No puede entonces sorprender que esta estrategia de imposición haya suscitado una fuerte oposición por parte de los diputados conservadores, no obstante ser favorables a una reforma electoral, y de manera más general por parte de las fracciones parlamentarias cuya reelección dependía de una intervención gubernamental. Sucede que la fijación de un dispositivo de este tipo ponía en juego, como se verá, no sólo intereses políticos, sino además y sobre todo intereses sociales. Con el fin de aprehender el sentido y la incidencia de este marco ineludible sobre la operación referida a la emisión del sufragio, es conveniente detenerse en la función impartida por la ley a los vocales de mesa en la gestión del orden electoral.

Por "gestión del orden electoral", entendemos la prerrogativa de administrar el conjunto de operaciones y acontecimientos que se producen durante una elección. De este modo, eran los vocales de mesa los encargados de organizar el flujo de actividades que se realizaban en el lugar del voto, imponiendo a los electores tanto la manera legítima de votar como las formas convenientes de comportarse. En relación a esto último, algunas conductas eran definidas como censurables en el lugar del voto: utilización de "palabras provocadoras" o de insultos en contra de una persona presente en el lugar, ciudadanos en "estado de ebriedad" o que repartiesen alcohol entre los votantes, individuos "armados" (art. 66 de la ley), constituían no sólo atentados a las buenas costumbres de una elite aún teñida de aristocratismo, sino que también perjudicaban los valores cívicos que comenzaban a establecerse en esa época. Ahora bien, estas conductas, censurables desde el punto de vista de las buenas costumbres, también lo eran desde la perspectiva de la gestión del orden electoral, ya que suscitaban "tumultos" y "desórdenes", del mismo modo que el "empleo de medios violentos para impedir a los electores" votar, la "compra de votos" o, simplemente, las "presiones" ejercidas por los "empleados públicos" sobre los votantes (art. 66).

Eran precisamente los tumultos y las aglomeraciones en los lugares donde se instalaban las mesas receptoras de sufragios —frecuentes a lo largo de todo el siglo XIX— lo que los diputados buscaban erradicar. De manera general, esta "actitud reformadora" expresaba "una disminución del umbral de tolerancia" ante las "diversas formas de corrupción electoral"[59].

[59] Garrigou (1988), p. 28.

Tal actitud, si bien era aún titubeante y fuente de ásperos debates, revela una tendencia a la pacificación de las prácticas políticas, de la que se puede seguir la huella tanto en las discusiones suscitadas por los recursos de anulación de las elecciones durante los años 70[60], como en las controversias relativas a cuestiones de costumbres. Con ello, los *enjeux* que precedieron la promulgación de la ley electoral de 1874 se inscriben en lo que Elias ha llamado el proceso de civilización. Los diputados de entonces analizaron y discutieron diversos medios tendientes a terminar con los desórdenes y tumultos que se producían regularmente en los lugares en donde se realizaba el "deber electoral". En tal sentido, la obligación de los vocales de mesa de instalarse a "doscientos metros" (art. 34) de la mesa siguiente (siempre y cuando las dimensiones del "pueblo" o del "poblado" exigiesen varios de estos órganos) respondía al deseo de delimitar y circunscribir espacialmente las actividades electorales. Sin embargo, suponiendo que este procedimiento de cierre fuese eficaz, el problema seguía siendo el mismo en lo que atañe a los hechos que tenían lugar al interior de cada uno de estos recintos.

Lo que se necesitaba, entonces, era dotar a los vocales de mesa de atribuciones que les permitiesen coordinar la conducta y las acciones de los electores, con el propósito de instaurar un cierto orden. Tal es el sentido del voto por lista que estaba originalmente previsto por el proyecto de ley, en tanto procedimiento de regulación elemental impuesto a grupos de individuos que debían realizar personalmente la misma actividad en un mismo momento, de modo que los electores votasen a medida que su nombre era pronunciado. De manera general, si bien la "lista por orden alfabético" constituye una "solución igualitaria y racional de gestión de la ciudadanía", a la vez que contribuye a la "atomización e individualización del voto", ello no obsta que este procedimiento haya suscitado numerosas reservas entre las elites conservadoras chilenas. Lo que ocurre es que no era el fin sino la *manera* de administrar este orden deseable lo que constituía un objeto de disputa. Es así como para el diputado radical Matta, al tomar la palabra una vez rechazado el procedimiento en cuestión por el Senado, lo relevante era que el acto electoral "se ejecutase con calma y en completa paz", con el fin de que "en cada llamado de la mesa los ciudadanos recuerden la *obediencia*

[60] Al respecto, el ejemplo paradigmático es sin duda el largo debate referido a la elección parlamentaria de Illapel de 1873. Aunque el recurso de anulación fue finalmente rechazado por los diputados, los actos cuestionados dieron lugar, por primera vez, a una tentativa de tipificación jurídica (véase en este sentido la intervención del diputado radical Cood durante la sesión extraordinaria del 4 de octubre de 1873, *Boletín de Sesiones*... ibídem, p. 12).

que le deben a esta autoridad"[61]. En tanto, el diputado conservador Z. Rodríguez veía en esa medida una suerte de incitación al "tumulto excesivo y a la acumulación de electores en torno a las mesas"[62]. Más allá de las ventajas y de los inconvenientes imputados a una técnica destinada a controlar y preservar el orden de la elección, lo que ambas posturas revelan es, una vez más, una competencia sobre la definición legítima del status del elector. Es así como para algunos diputados, el voto por lista aparecía como deseable por ser protector de la libertad del votante, mientras que para otros resultaba francamente intolerable ya que ubicaba en un plano de igualdad, por ejemplo, al campesino y al latifundista. Si es posible ver en este debate una tensión entre dos principios de visión socialmente constituidos, fuente de una relación de fuerza en el seno del hemiciclo, es también constitutivo de una relación de sentido. En efecto, el proyecto de ley, al proponer conferir a los vocales de mesa una atribución destinada a permitirles instaurar un orden y controlar la actividad desplegada por los electores, planteaba la interrogante sobre la legitimidad de este órgano. Es a esta interrogante que hacía alusión el diputado Matta cuando afirmaba que "la única autoridad electoral que es reconocida es aquella creada por los propios votantes"[63], en la medida en que no era otra cosa que una emanación del cuerpo de electores: así, volvemos a encontrar la ficción de un órgano que extrae su legitimidad de su origen último, el pueblo, y del mecanismo por medio del cual lo representa, el azar.

Una vez descartado el procedimiento del voto por lista, primero por el Senado, luego por la Cámara de Diputados, la interrogante relativa a la gestión del orden electoral se mantenía: ¿cómo podrían los vocales de mesa cumplir con su función de garantes del orden cuando una técnica de apariencia anodina les era rechazada? Es a esta interrogante que responde la atribución conferida a los vocales de mesa de disponer del monopolio del recurso a la fuerza armada en caso de desórdenes, no obstante que esta facultad pudiese dar lugar a abusos de parte de ellos. Es por esta razón que la ley les exigía un acuerdo para recurrir a la fuerza armada, la que debía intervenir en "casos extremos" (art. 70). Al respecto, las actas a las que tuvimos acceso prácticamente no ofrecen ejemplos de este tipo de situaciones límites desde el punto de vista de la ley, a diferencia de un cierto número de recursos de anulación que sólo hacen mención a aquellos en los

[61] Ibídem, sesión extraordinaria del 22 de septiembre de 1874, p. 107, el subrayado es nuestro.

[62] Ibídem, p. 107.

[63] Ibídem, p. 107.

casos de dualidad de mesas receptoras de sufragios[64]. De manera más profunda, lo que estas dualidades de órganos ponían en evidencia era la obediencia problemática de la fuerza pública a las autoridades electorales. Al respecto, no es posible dejar de recordar el estrecho vínculo entre las autoridades locales, quienes eran completamente dependientes para su reelección (el alcalde) o su designación (el intendente) de las decisiones de las autoridades centrales, y las fuerzas de orden. Es lo que explica que la ley imponga a las autoridades tanto políticas como militares del departamento, "prestar auxilio" a los vocales de mesa y "cooperar" con ellos en sus decisiones relativas a la gestión del orden. No cabe duda que la intervención arbitraria de las fuerzas de orden en las elecciones, incluso mediante su sola presencia en el lugar del voto, ponía ampliamente en duda el status soberano del elector: es por ello que el artículo 68 de la ley les prohíbe "estacionarse (...) en el recinto".

Sin embargo, ¿qué hay de la influencia ejercida sobre el votante por parte de los individuos que se encuentran en el lugar de votación, y particularmente por aquellos que hacen las veces de agentes electorales? Sin duda, los vocales de mesa tenían la posibilidad de hacer expulsar del recinto y detener a aquellos que compraran votos, aunque sólo era posible cuando esta operación se realizaba de manera ostensible. Por el contrario, si esta práctica, llamada *cohecho*, se producía fuera del recinto, ¿cómo podrían los vocales de mesa impedirlo, y el agente electoral asegurarse que la papeleta de voto que compró sería depositada en la urna? Curiosamente, y de manera bastante fascinante ya que revela una definición aún titubeante de un elector en vía de acceder a la plena soberanía en el lugar del voto, esta pregunta suscitó gran confusión en algunos diputados. Es así como, por ejemplo, cuando el diputado Sanfuentes simula una situación de este tipo preguntándose: "Se presenta Pedro, ciudadano con voto, y yo le digo: le doy tanto por el voto; llévelo usted en alto hasta depositarlo en la urna, ¿puedo o no puedo comprarlo de esa manera?", la respuesta del diputado radical Matta consiste en afirmar que era "imposible", sin lograr demostrarlo[65]. Ciertamente, los sobres fueron durante largo tiempo presentados por Matta como instrumentos capaces de proteger al votante de las "influencias

[64] Este es el caso, por ejemplo, de la elección parlamentaria de Cauquenes de 1876, que finalmente fue anulada. Entre el conjunto de actos ilegales que allí se produjeron, el recurso sistemático a la "fuerza pública" hecha por los vocales de mesa "patrocinados" por el alcalde sólo intervino en el debate a título secundario: en efecto, es en razón del establecimiento de mesas rivales, una parte de ellas puestas bajo la autoridad del alcalde mientras que las otras eran patrocinadas por el intendente, que esta elección fue declarada nula (véase *Boletín de Sesiones...*, ibídem, sesión extraordinaria del 2 de diciembre de 1876, p. 385 y sigtes).

[65] Ibídem, sesión ordinaria del 9 de julio de 1872, p. 228.

ilegítimas". Pero más allá de las virtudes imputadas a los sobres, lo que este pequeño intercambio deja en evidencia es la imposibilidad práctica de idear un medio para evitar la compra de votos. Esto fue lo que llevó al diputado conservador Z. Rodríguez a decir que el cohecho "es un mal, pero un mal inherente a las democracias", ya que "el agente de un partido que ha comprado el voto de un elector, sigue de cerca al elector y lo está mirando hasta el momento en que deposita el voto en el cierro, y sabe de este modo si ha votado o no conforme a su compromiso"[66]. No puede entonces sorprender que la ley sólo haga referencia a las operaciones de compra que se producen de manera patente, dejando a los vocales de mesa la tarea de tipificar las acciones de los individuos que se encontraban en el recinto electoral.

Seguramente, no es producto de la casualidad si las actas redactadas luego de las elecciones parlamentarias de 1876 no hacían en ningún momento mención a las compras de votos. En efecto, ¿cómo olvidar que la tipificación de una práctica que se manifestaba de manera solapada suponía, de parte de los vocales de mesa, un punto de vista capaz de discernir una acción como ésta y, sobre todo, una adhesión al status de autoridades electorales imparciales? No resulta exagerado afirmar que la separación entre la pertenencia ciudadana y la pertenencia social, tan problemática para un gran número de votantes, también lo era para los vocales de mesa, ubicados de ahora en adelante ante la disyuntiva histórica de la lealtad respecto de sus propios intereses sociales, y de la fidelidad naciente a la lógica democrática. Es este difícil compromiso que se encuentra en el origen de sus "miradas oblicuas", para retomar la expresión de Hoggart, a veces constitutivas de una visión lagunaria cercana a una miopía social, a veces generadoras de vistazos exhaustivos que no son muy distantes de una hipermetropía política. En este sentido, las prácticas electorales, "legítimas" o "desviadas", pueden ser pensadas a partir del campo de visión socialmente constituido de las mesas receptoras de sufragios, es decir de sus miembros. Con ello, nos dotamos de los medios para aprehender prácticas que, producidas y percibidas a partir de principios sociales diferenciados, son constitutivas de *enjeux* de luchas. Puede entonces entenderse lo difícil y arbitrario que resulta trazar el límite entre la legitimidad y la desviación electoral, ya que detrás de estas dos palabras encontramos definiciones rivales del status del elector. Sin duda, será necesario un tiempo más para que este status haga las veces de "patria social", según el término de Elias[67]: en el intertanto, lo que se desprende de las relaciones establecidas entre el elector y los vocales de mesa al momento de votar, constituye ya su génesis.

[66] Ibídem sesión ordinaria del 27 de julio de 1872, p. 303.
[67] Elias (1985), p. 125

BIBLIOGRAFÍA

Bendix, Reinhard. (1979) Max Weber. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Bourdieu, Pierre. (1986) "Habitus, Code et Codification". *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*.

Briquet, Jean-Louis. (1991) "Les Primitives de la Politique. La Perception par les Élites du Vote en Corse sous la Illème République". *Politix. Travaux de Science Politique*, N° 15.

Déloye, Yves. (1997) *Sociologie Historique du Politique*. Paris: La Découverte.

Déloye, Yves; Ihl, Olivier. (1991a) "Des Voix pas Comme les Autres. Votes Blancs et Votes Nuls aux Elections Législatives de 1881". *Revue Française de Science Politique*, Vol. 41, N° 2, pp. 141-170.

Déloye, Yves. (1991b) "Légitimité et Déviance. L'Annulation des Votes dans les Campagnes de la Ille République". *Politix. Travaux de Science Politique*, N° 15, pp. 13-24.

Donoso, Ricardo. (1967) *Las Ideas Políticas en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.

Elias, Norbert. (1985) *La Société de Cour*. Paris: Flammarion.

Edwards, Agustín. (1932) *Cuatro Presidentes de Chile. 1841-1876*, Valparaíso, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, tomo 2.

Edwards Vives, Alberto. (1959) *La Fronda Aristocrática*. Santiago: Editorial del Pacífico, 1959 (primera edición 1928).

Finley, Moses I. (1986a) *El Nacimiento de la Política*. Barcelona: Editorial Crítica.

Finley, Moses 1. (1986b) *Historia Antigua. Problemas Metodológicos*. Barcelona: Editorial Crítica.

Garrigou, Alain. (1985) "Cojoncture Politique et Vote". En Daniel Gaxie (ed.) *Explication du Vote. Un Bilan des Études Electorales en France*. París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Garrigou, Alain. (1988) "Le Secret de l'Isoloir". *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 71/72, marzo de 1988, pp. 22-45.

Garrigou, Alain. (1990) "Invention et Usages de la Carte Electorale". *Politix. Travaux de Science Politique*, N° 10-11, pp. 33-44.

Garrigou, Alain. (1992) *Le Vote et la Vertu. Comment les Français sont Devenus Electeurs.* París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Gil, Federico G. (1969) *El Sistema Político de Chile*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Goffman, Erving. (1973) *La Mise en Scène de la Vie Quotidienne*, tomo 2: *Les Relations en Public*. París: Editions de Minuit.

González García, Pedro Eduardo. (1927) *Reformas Religiosas, Sociales, Electorales, Económicas y Políticas de la Constitución del Año 33 Promulgadas el 18 de Septiembre de 1925. Efectos del Parlamentarismo en Chile*. Santiago: Imprenta Siglo XX.

Huard, Raymond. (1985) "Comment Apprivoiser le Suffrage Universel?". En Daniel Gaxie (ed.) *Explication du Vote. Un Bilan des Études Electorales en France.* París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Ihl, Olivier. (1996). *Le Vote*. París: Montchrestien.

Las Elecciones de 1881. Noticia de las Reclamaciones de Nulidad Presentadas al Congreso y Discursos Presentados con este Motivo por los Diputados de la Minoría. Santiago: Imprenta "El Independiente", 1881.

Leca, Jean. (1986) "Individualisme et Citoyenneté". En Pierre Birnbaum y Jean Leca (compiladores) *Sur l'Individualisme*. París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Mary, André. (1988) “Le Corps, la Maison, la Marché et les Jeux. Paradigmes et Métaphores dans le ‘Bricolage’ de la Notion d’Habitus”. En *Lectures de Pierre Bourdieu*, Cahiers du Laboratoire de Sociologie Anthropologique de l’Université de Caen, N° especial 8-9.

Médard, Jean-François. (1976) “Le Rapport de Clientèle. Du Phénomène Social à l’Analyse Politique”. *Revue Française de Science Politique*, Vol. 26, N° 1.

Noiriel, Gérard. (1991) “La Question Nationale Comme Objet de l’Histoire Sociale”. *Genèses. Sciences Sociales et Histoire*, N° 4.

Noiriel, Gérard. (1993) “L’Identification des Citoyens. Naissance de l’État Civil Républicain”, *Genèses. Sciences Sociales et Histoire*, N° 13.

Offerlé, Michel. (1993a) *Un Homme, une Voix? Histoire du Suffrage Universel*. París: Gallimard.

Offerlé, Michel. (1993b) “L’Électeur et ses Papiers. Enquête sur les Cartes et les Listes Électorales”. *Genèses. Sciences Sociales et Histoire*, 13, pp. 29-53.

Offerlé, Michel (compilador). (1999) *La Profession Politique. XIXème-XXème Siècle*. París: Belin.

Simmel, Georg. (1984) *Les Problèmes de la Philosophie de l’Histoire*. París: Presses Universitaires de France.

Valenzuela, J. Samuel. (1985) *Democratización Vía Reforma: La Expansión del Sufragio en Chile*. Buenos Aires: Ediciones del IDES. □

HACIA UN NUEVO MAPA LATINOAMERICANO: ILUSTRACIÓN Y MERCADO

Bernardo Subercaseaux

En un primer momento el artículo pasa revista —en distintos ámbitos— a la crisis actual de la matriz ilustrada. Junto con ponderar las críticas a dicha matriz, se postula la necesidad de revitalizar algunas ideas-fuerza vinculadas a ella. En un segundo momento se examina el caso de la industria editorial y del proceso del *boom* literario en la década de los 60, como ejemplo de un fenómeno exitoso en que se conjugó utopía y mercado. Finalmente, en la perspectiva de un nuevo mapa latinoamericano, se propone un conjunto de políticas en que se conjugan ilustración y mercado, las lógicas mercantiles u operantes con lógicas de otra índole, el principio de realidad con el del sueño y la utopía.

BERNARDO SUBERCASEAUX. Profesor titular y Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Autor, entre otros, de los siguientes libros: *Historia, Literatura y Sociedad* (1991); *Historia del Libro en Chile* (1993); *Chile, ¿Un País Moderno?* (1996); *Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile (1997)* y *Genealogía de la Vanguardia en Chile* (1998), y *Chile o una Loca Historia* (1999).

Estudios Públicos, 81 (verano 2001).

Una matriz en la mira

Los países latinoamericanos no están constituidos sólo por su territorio y por la sociedad o la gente que los habita, sino también por una actividad constante de articular sentidos, crear sistemas simbólicos (u orden de sentidos) capaces de generar lealtades y vínculos.

Los intelectuales y creadores —a partir del siglo XIX y por lo menos en gran parte del siglo XX— han sido un segmento muy activo en la elaboración simbólica y en el perfilamiento de ejes unificadores de pertenencia, sean éstos utopías o simplemente ideas-fuerza. Miembros de la elite ilustrada y de la intelectualidad político-literaria, desde Bolívar, Sarmiento y Rodó, hasta Gabriela Mistral, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes y Beatriz Sarlo —por nombrar sólo a algunos—, han activado un imaginario colectivo, entendido no sólo como un "nosotros" latinoamericano sino también como vocación por la construcción histórica de una utopía.

Tanto en el trasfondo crítico y utópico de los distintos "nosotros" como en el proceso de construcción de una nación de ciudadanos, o en las sucesivas articulaciones de la "gran patria latinoamericana", en todo este espectro de operaciones de sentido subyacen los parámetros de la matriz ilustrada, una matriz intelectual que está hoy día en el banquillo de los acusados. Cuestionada, en primer lugar, desde la propia realidad. Una realidad en que las estadísticas nos indican que algunos de los emblemas tradicionales de la ilustración —el libro, la imprenta, la Universidad, la nación y el constructivismo social— experimentan un proceso creciente de degradación simbólica. Una realidad en que el "homo videns" está reemplazando al "homo sapiens", en que el ver está sustituyendo al pensar. Una realidad en que la estética de la esperanza ha sido penetrada por el escepticismo, por la idea de que no hay un vínculo entre palabra y mundo, entre sentido y ser. Una realidad en que la política ha perdido su contacto con la utopía, ha dejado de ser proyecto para transformarse en una mera administración de lo existente; un mundo en que la vida pública se ha trasladado a las páginas de la farándula, en que las ideas y los valores políticos están siendo desplazados por la sonrisa, la habilidad comunicacional o los escándalos de turno.

Los paradigmas ilustrados están también siendo cuestionados —directa o indirectamente— desde diversas actividades intelectuales. Un sector importante de la nueva historiografía se ha construido a partir de una crítica y una deconstrucción del modelo ilustrado, de ese modelo que adscribía la narratividad histórica a los grandes metarrelatos, un modelo que privilegiaba como sujeto histórico a la elite patriarcal, desconociendo una pluralidad

de actores, entre otros, la mujer, los sectores populares y los pueblos aborígenes. Un modelo excluyente que alimentó también la construcción de naciones homogéneas y de ciudadanías restringidas.

En la sociología, la antropología y la comunicación social, se crítica el paradigma ilustrado desde variados ángulos. Una vertiente de la sociología esgrime como modelo de comprensión de la cultura latinoamericana al barroco en desmedro de la ilustración, argumentando que mientras el barroco permite "mirar" la heterogeneidad, la ilustración conlleva —dicen— un paradigma marcado por la universalización abstracta y por una concepción que percibe a la historia como realización de una idea. Se critica también al esencialismo culturalista que se observa en algunas de estas disciplinas, culpando al pensamiento utópico de cuño ilustrado de la invención de un específico cultural latinoamericano. Otros apuntan a esta matriz por haber privilegiado el discurso de las ideas y de la razón en desmedro de los discursos del corazón, la cultura escrita en desmedro de la cultura oral. Se crítica también a los intelectuales que arriscan la nariz frente a la cultura de masas y las industrias culturales, adjudicándoles una ceguera de raigambre ilustrada (residuo de la Escuela de Frankfurt). Es una ceguera —dicen— pensar que Mercedes Soza es más latinoamericana que el dúo Pimpinela; o no darse cuenta que MTV Latina (la señal de música popular que se emite desde Miami) ha hecho tanto o más por la integración latinoamericana que los discursos de Bolívar. O no comprender que el pensamiento crítico tiene escasas posibilidades de difundirse mientras dispute el sentido de lo público a través de circuitos íntimos de la cultura escrita, como los libros o los congresos académicos. Se nos dice también que aquello que fue perseguido con tanto ardor por las vanguardias —la conexión del arte con la vida— lo ha conseguido de modo mucho más eficiente el mercado. Desde diversas disciplinas se argumenta, entonces, que la modernidad está hoy en día más vinculada a las industrias culturales, a Internet y al mercado audiovisual que a las doctrinas ilustradas o a las estéticas de los letrados[1].

Varias de las críticas a la matriz ilustrada son justificadas, particularmente aquella que critica la forma excluyente en que desde esa matriz se construyeron las naciones hispanoamericanas, también la crítica a la historiografía que desconoce el pluralismo de los sujetos históricos (crítica que ya realizó José Martí en 1891) o el equivocado y simplista tratamiento que hizo el pensamiento ilustrado de lo simbólico afectivo y de la religión[2].

[1] Las posturas críticas a la matriz ilustrada reseñadas pertenecen, entre otros, a los siguientes autores: Pedro Morandé, José Joaquín Brunner, Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Gabriel Salazar, Alberto Fuguet y Jaime Bayley.

[2] Véase la crítica que hace Eugenio Trías en *La Edad del Espíritu* (1994).

Cabe sin embargo hacer una distinción entre el modelo ilustrado tal como lo entendió Kant en su famoso texto "¿Qué es la Ilustración?" —el "sapere aude", la razón (empírica y crítica), la voluntad de transformar el mundo y el repliegue reflexivo y crítico de la razón sobre sí misma— y el recorte y cierre que tuvo ese modelo en América Latina al ser aplicado por un sector de la sociedad en función de sus propios intereses, despojándolo así de su contenido democrático y abierto. Desde esta perspectiva postulamos que en el modelo ilustrado hay todavía un manantial importante de ideas-fuerza que siguen siendo válidas —libertad, igualdad y fraternidad— un manantial que merece ser productivizado en los más diversos órdenes.

Utopía y mercado: un ejemplo de confluencia

El *boom* de la narrativa latinoamericana, cuya etapa más plena se da entre 1965 y 1972, es significativo en la medida que allí se conjugan un proceso de industria cultural, con un proceso identitario y de integración simbólica del continente con participación de la elite intelectual; una lógica económica y de mercado con una lógica cultural, agentes y medios tradicionales —intelectuales letrados y gestos utópicos— con los nuevos agentes de conformación del campo cultural —la industria cultural y la cultura de masas.

La palabra "boom" apunta a auge, a una cotización en alza, lo que marca desde el nombre su dimensión mercantil. ¿Cómo se produjo este auge? Por una parte se dio un grupo de obras narrativas de autores de distintos países, entre otros, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, Carlos Fuentes, José Donoso, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas Llosa y José María Arguedas, autores de distintas edades y sin un ideario estético común. Muchos de ellos venían publicando desde hacía varias décadas pero sus obras no habían alcanzado difusión masiva y sólo eran conocidas por un pequeño círculo de iniciados. Antes de los años 60 las obras de Cortázar, de Asturias, de Onetti o de Borges apenas alcanzaban ediciones de 2.000 ejemplares, ediciones que permanecían por largos años en las librerías, sin agotarse; en el momento del *boom*, sin embargo, las mismas obras alcanzan tirajes promedios de 20.000 ejemplares anuales y con bastante frecuencia se agotan, lo que requiere de dos o tres ediciones por año[3].

[3] Ángel Rama (ed.) (1981).

Se asiste a un fenómeno inédito: a un público lector y a una demanda y circulación masiva de obras de autores latinoamericanos. Un rol importante en este proceso desempeñan una serie de editoriales, que actúan como mediadoras y promotoras. Editoriales básicamente argentinas (como Losada, Emecé, Sudamericana y Galerna), o mexicanas (como Joaquín Mortiz, Era y Fondo de Cultura) o españolas (como Seix Barral, Lumen y Anagrama), pero también uruguayas como Arca, o chilenas como Universitaria. Se ha hablado de "editoriales culturales", pero eran y son editoriales comerciales, con producción a escala, con intentos de ampliar los mercados, y con la presencia ineludible de una lógica mercantil.

El fenómeno del *boom* estuvo acompañado de vedetismo o de *star system*, de escritores capaces de articular un discurso interesante y de opinar sobre los temas y utopías más candentes del momento. Las revistas y sobre todo la entrevista a los autores se convirtió en un verdadero género periodístico, afianzando así un sistema de marketing que para las editoriales prácticamente tenía costo cero. Convertido el escritor en una estrella, se generó así una presión por parte del público lector —presión que fue mediada por las editoriales— para que los novelistas aumentaran su productividad. Se dio así un fenómeno nuevo en América Latina y en España: el paso de un mercado de consumo literario de elite a uno de masas.

¿Qué factores incidieron en este proceso? Hay fenómenos de larga duración que de alguna manera cristalizan en la década de los sesenta: el desarrollo urbano, el aumento demográfico, el notorio progreso de la educación primaria, secundaria y universitaria en la postguerra. No es casual que los recintos universitarios se constituyeran en el público predilecto y más masivo del *boom*. La explicación fundamental de la emergencia y posterior desdibujamiento reside a nuestro juicio en un clima intelectual de época y en los rasgos del imaginario de entonces, rasgos que fueron activados por la revolución cubana que operó como foco de una nueva etapa de latinoamericanismo, de un clima ideológico que luego por factores históricos terminó diluyéndose.

Fue el clima intelectual y el macrorrelato de una utopía socialista latinoamericana lo que explica en gran medida el *boom* como también los alineamientos, tensiones, polémicas, roces y epítetos que se dan entre los escritores que formaron parte del fenómeno. Es indudable que el éxito de la literatura latinoamericana en torno a la década del sesenta se vincula con la convicción —compartida tanto en el continente como fuera de él— de que la tormentosa historia del continente había entrado en una etapa resolutiva. Ello da una eficacia nueva a motivos nada nuevos en la conciencia latino-

americana, como el que postula una unidad de raíz y destino para la región[4].

Hay en el fenómeno del *boom*, entonces, una suerte de reverberación y de producción de presencia con respecto a lo que estaba ocurriendo en América Latina en el plano sociohistórico. Ello explica que gran parte del interés de los lectores y de la prensa por los escritores se relacionara con la postura que ellos tomaban respecto a tales acontecimientos, y bastante menos por la consideración estética de sus obras. Fue un clima cultural en que la política y el espacio continental ocupaban un lugar preponderante, especialmente para la juventud, pues allí estaba el terreno de la épica, del imaginario utópico, del futuro, del cambio, del espíritu de vanguardia, un clima intelectual y un imaginario muy diferente al que vivimos hoy en día, en que de alguna manera la racionalidad económica determina el campo de lo político y la disputa política se ha reducido —para bien o para mal, según el punto de vista— a una especie de técnica de la "real politik", a una mera competencia sobre quién puede administrar mejor lo existente.

Precisamente el rol fundamental que desempeñó el imaginario latinoamericano y el clima intelectual de la época, explica el desdibujamiento del fenómeno como industria cultural e identitario, pues la fecha tope del *boom* —hacia 1972 para algunos y hacia 1975 para otros— coincide con el reemplazo del clima anterior por un clima antiutópico, por un clima que revela una cierta postmodernización de la cultura latinoamericana.

Podría en síntesis sostenerse la hipótesis de una falta de autonomía en términos de apelación identitaria de la industria cultural en América Latina, en la medida que fue el clima político intelectual de utopía lo que en definitiva posibilitó el auge de la industria editorial y no al revés. Hipótesis que por supuesto nos regresa a lo que señalábamos en el primer acápite: a la importancia de los intelectuales y creadores alimentados por la matriz ilustrada, a los agentes y medios que históricamente han operado en la constitución de un espacio cultural común, aun cuando éste sea mediado por la industria cultural.

En apoyo de la hipótesis desplegada en este acápite podría finalmente traerse a colación el *miniboom* actual de la literatura feminista, fenómeno que sin duda está relacionado con el movimiento feminista y con un proceso intelectual y político que apunta al rescate de la diferencia y a la valorización del sujeto femenino; una literatura, en definitiva, con una causa.

[4] Tulio Halperin, "Nueva Narrativa y Ciencias Sociales Hispanoamericanas en la Década del Sesenta" (1981).

Un proyecto conjunto

Cabe señalar que hoy en día cuando se constata un cambio de proporciones en la organización de la cultura, debiera también constatarse que hay una cierta ideología del cambio y que ésta tiene sus apóstoles y sus gurús, una ideología que tiende a desconocer el rol de ciertas instancias de raíz ilustrada, que si bien ya no ocupan el rol que tuvieron en el pasado siguen sin embargo operando. En esta perspectiva, la consolidación de un espacio cultural latinoamericano no debería dejar afuera el rol que pueden desempeñar —en un proceso de esta índole— los intelectuales y creadores, las universidades y revistas, los congresos y reuniones académicas.

Se ha dicho muchas veces que en el pasado la utopía americanista significó mucho discurso y pocos hechos. Aun cuando algo pueda haber de ello, creemos que es un análisis simplista. Todo indica que cuando se trata de integrar un espacio latinoamericano, resulta conveniente combinar las lógicas mercantiles u operantes con lógicas de otra índole, el principio de realidad con el del sueño y la utopía, el cuerpo con el alma, los dictámenes del bolsillo con las ideas-fuerza, el imaginario cultural de masas producido por la TV y el imaginario cultural más tradicional que proviene de la escuela, el libro y la universidad. En síntesis, el mercado y la utopía.

En el contexto de lo señalado, y considerando los ejemplos de políticas públicas en el caso de España y de Canadá, visualizamos cuatro grandes operaciones tendientes a afianzar un espacio común latinoamericano: operaciones en que se conjugan la utopía ilustrada y el mercado. También una condición (o precondición) de clima político intelectual: la profundización de la democracia apuntalada por el repliegue de la razón crítica sobre sí misma.

1. *Operación audiovisual*: hay indicadores que señalan el rol hegemónico de lo audiovisual y de la televisión en la industria cultural. Un rol hegemónico no sólo con respecto a la sociedad, sino con respecto al resto de las industrias culturales. El equipamiento televisivo en América Latina se encuentra por sobre los promedios de los países asiáticos; en Chile y Argentina, por ejemplo, más del 95% de los hogares tienen televisión. El lenguaje audiovisual hoy por hoy tiene preeminencia sobre otros lenguajes. Los alfabetizados audiovisuales superan con creces a los alfabetizados en la lecto-escritura. En países con altos índices de analfabetismo, como Honduras (casi un 48%), este desfase es clarísimo. La legitimación social que hoy día alcanza la imagen en la pantalla no tiene competencia. La existencia social y cada vez más la identidad (aunque sea como ausencia) pasan por el lenguaje audiovisual. La constitución de un “nosotros” latinoamericano re-

quiere de ese lenguaje. Desde esta perspectiva la industria cinematográfica y la industria televisiva (abierta y por cable) son industrias que juegan un rol en términos de identidad. Por otra parte son industrias en que lo latinoamericano apenas está presente, salvo en algunos géneros como la telenovela y lo melodramático. El porcentaje de producción foránea que circula no guarda ninguna relación con el porcentaje de producción endógena. La creación audiovisual en idiomas nativos o referida a temas latinoamericanos, o ambientada en Latinoamérica, es mínima. Ello incide, sin duda, en nuestra autoimagen como latinoamericanos y también en el modo como nos perciben otros.

Todo indica que es necesario aunar esfuerzos para aumentar la producción audiovisual latinoamericana, en los más diversos géneros, atendiendo al espesor cultural de nuestras sociedades. Algo se ha hecho en términos de incentivar coproducciones o de crear Fondos —como Ibermedia, por ejemplo—; sin embargo se trata de acciones insuficientes por cuanto no enfocan con montos adecuados el circuito completo de la producción audiovisual, y por lo tanto las posibilidades de lograr cuotas de mercado en un terreno en que los Goliats están firmemente asentados, son muy escasas. Las declaraciones y los buenos propósitos ya no sirven. El esfuerzo por lo tanto debe ser integral y mancomunado, tanto respecto a los agentes que se involucren —sector privado, Estado, creadores, artistas y sus asociaciones— como por las dimensiones que se aborden —niveles de financiamiento, producción, calidad del producto, promoción, circulación y consumo. Se requiere un enfoque integral que abarque toda la cadena, de otro modo será prácticamente imposible incrementar la producción audiovisual endógena de los países latinoamericanos. Debido a problemas similares algunos países europeos, sobre todo España, deberían ser nuestros aliados en esta operación.

2. *Operación Brasil* (para los países latinoamericanos, y *operación Latinoamérica* para Brasil): con sus alrededor de 160 millones de habitantes Brasil corresponde en términos demográficos a casi un tercio de América Latina. En términos geográficos si se saca a Brasil del continente, América Latina se convierte en un región cóncava y esmirriada. Un “nosotros” latinoamericano sin Brasil es un “nosotros” esquelético y tallarinesco. Por razones históricas y de lengua la integración cultural entre Brasil y los países hispanoparlantes ha sido en el pasado escasa. Hay razones de la más diversa índole —económicas, políticas, geográficas y estratégicas— que justifican un esfuerzo sistemático y decisivo por darle un vuelco a esta desconexión. Para ello es necesario recurrir a todas las industrias culturales —desde la industria de la telenovela hasta la industria editorial—, también

a los mecanismos y agentes tradicionales y de modo muy especial a las universidades.

Por ejemplo, en cuanto a la industria editorial, Brasil cuenta con una producción literaria de extraordinaria calidad (más de 45.000 títulos anuales), de la cual en el mundo hispanoparlante sólo se conocen algunos autores (¿conoce acaso el lector la existencia de novelas como *Quadrup* o *Ciudade de Deus*?). No cabe duda que una (o varias) editoriales privadas transnacionales podrían seleccionar y traducir una treintena de títulos importantes y comercializarlos con buenas posibilidades en el circuito hispánico. Con seguridad habría también recursos y editoriales brasileñas interesadas en una iniciativa de esta índole. Estamos en un momento privilegiado para llevar a cabo este tipo de iniciativas, tanto en la industria cultural del libro como en otras áreas (industria discográfica, por ejemplo). En Brasil recientemente se ha decretado la enseñanza obligatoria del español a nivel de la educación media en varios Estados, lo que abre para Hispanoamérica grandes posibilidades de intercambio e interés cultural.

3. *Operación lengua:* la lengua es la expresión más particular de un pueblo. La lengua es el soporte del pensamiento y de la experiencia humana. La lengua es un vehículo de identidad y uno de los patrimonios culturales más significativos. Aunque América Latina es un continente multilingüe (y por lo tanto también hay que preocuparse de los idiomas indígenas), el español es la lengua más importante y mayoritaria de la región, es nuestra "lingua franca", la lengua del "nosotros". Su preservación y su lugar en los productos de las industrias culturales es un tema que merece, por ende, consideración.

Particularmente preocupante resulta la situación de Internet, donde el inglés —o el spanglish— ocupa casi un 90% de la red y por cierto es el idioma clave para todos los mecanismos de búsqueda. Sin desconocer las grandes posibilidades de la red, se la ha mitificado como un espacio democrático y abierto, en que de alguna manera las relaciones de poder del capitalismo tardío estarían neutralizadas. Esta visión desconoce que en Internet de modo creciente los servicios que en un comienzo eran gratuitos están requiriendo cancelación, desconoce también los intereses y el punto de vista con que se suele organizar la información. Por ejemplo hace poco, recurrimos a las máquinas Yahoo y Alta Vista para visitar los sitios web bajo el llamado "Chile", con sorpresa nos dimos cuenta que un número importante de estos sitios, casi tantos como los relativos al país, correspondían a Chile Pepper Company, una compañía de aliños, ajíes y condimentos. El lugar que ocupa Chile como país para la mirada de ese "otro" que son los usuarios del Norte, nos sitúa a la par con Chile Peppers, lo que

revela que la organización del ciberespacio, y de la información que lo habita, no es neutra ni aséptica, sino que patentiza un determinado punto de vista. El resguardo de la lengua en los productos de las industrias culturales y en las nuevas tecnologías resulta, por ende, un tema que debiera abordarse en términos de resguardo de la identidad y patrimonio cultural latinoamericano. De otro modo corremos el riesgo de dejar de ser países y convertirnos en "Chile Peppers".

4. *Operación tradicional* (pero puesta al día): como señalamos en la primera parte de este trabajo los intelectuales y creadores han desempeñado en el pasado un rol importante en los corredores de ideas y en la constitución de un mapa cultural latinoamericano. También instituciones como las universidades y revistas. Hoy en día, ante dinámicas generadas por los procesos de globalización —dinámicas de homogeneización y también de heterogeneización— estamos asistiendo a un reciclamiento de los viejos temas de la identidad y la cultura propias. A una discusión tanto sobre el concepto de identidad como sobre la necesidad de proteger y resguardar el patrimonio e incorporar la variable cultural en los procesos de modernización y desarrollo. En este contexto los intelectuales, creadores e investigadores, que representan una de las voces más críticas ante el orden neoliberal, están llamados a desempeñar un rol importante en la revitalización de la variable cultural y de la creatividad. También están llamados a jugar un papel en el reencantamiento con la democracia, en la profundización de la democracia política y en su ampliación a una democracia comunicacional y cultural, reencantamiento que posibilita un nuevo mapa latinoamericano y constituye una condición (o una precondición) necesaria para llevar a cabo con vitalidad e imaginación las operaciones a que nos hemos referido.

Cabe señalar, finalmente, que al postular la operación tradicional no estamos postulando la ciudad letrada por encima de la cultura oral; sólo estamos reafirmando —en un contexto intelectual en que hay una cierta ideología de la oralidad, de lo massmediático y de la antiilustración—, estamos reafirmando, decíamos, la importancia y osmosis de ambas matrices, tanto en el campo identitario como en el de la integración de un nuevo mapa cultural latinoamericano.

Si bien podemos convenir con Goya que "el sueño de la razón produce monstruos", también es necesario precaverse —y mucho— de los monstruos que se generan cuando la razón carece de sueños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Trías, Eugenio. *La Edad del Espíritu*. Barcelona, 1994.

Rama, Ángel (ed.). *Más Allá del Boom: Literatura y Mercado*. México, 1981.

Halperin, Tulio. "Nueva Narrativa y Ciencias Sociales Hispanoamericanas en la Década del Sesenta". En Ángel Rama, *Más Allá del Boom: Literatura y Mercado*. México, 1981. □

LA ERA LEZAMA: *PARADISO* Y LAS VANGUARDIAS LATINOAMERICANAS*

Nieves Olcoz

La literatura latinoamericana del siglo XX ha planteado una ruptura de las capacidades representacionales del lenguaje que se forja en la vanguardia histórica, en la apología del lenguaje como visión y el desarrollo del lenguaje como cuerpo. *Paradiso* de José Lezama Lima constituye una poética de la escritura de lo visible y de la forma de necesidad interna, una propuesta de ficción procesal y autoconsciente, cuya epistemología o forma de conocimiento del texto recorre un barroco itinerario de voces de las décadas claves de la literatura de avanzada (años 20-30). La prosa del mexicano Jaime Torres Bodet y la investigación lingüística de Vicente Huidobro y César Vallejo entran en conversación cultural con la hiperrepresentación de *Paradiso* y fundan una noción material del lenguaje capaz de cambiar el imaginario de una cultura.

NIEVES OLCOZ. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid y Ph. D. por Yale University, con especialidad en literatura latinoamericana y teatro. *Visiting Scholar* en la Universidad de Harvard (1995-1996) ha desempeñado tareas docentes y de investigación en diversas universidades de Europa y América del Norte. Ha publicado artículos (1994-1999) en revistas especializadas como *LATR, Gestos, Arrabal, Anales de Literatura Hispanoamericana, Revista Teatro, Letras Femeninas,* y colaborado en estudios de edición colectiva (Mainz, 1998; Universidad de Cádiz, 1997); editora del dramaturgo Marco Antonio de la Parra (Cuarto Propio, 1999), es autora de los volúmenes *El Texto Narcisista: Mito e Historia en el Teatro Latinoamericano del Siglo XX* (Editorial Complutense), *El Cuerpo del Dolor: Teatro de Mujer y Fin de Siglo en América Latina* (Yale University) y de *Teatro de Mujer y Culturas del Movimiento* (en prensa).

Martí volcó en lo visible, en la franja de los Hechos, las primeras raíces imaginarias de Cuba (...) Lezama es el descubridor de otra imagen nuestra, que algún día alguien hará visible.
(Severo Sarduy)

I

La reivindicación de la vanguardia desde la decadencia de la postmodernidad y la averiguación de una nueva teoría de la cultura esconde en nuestro actual momento crítico algo de tributo indeciso, de homenaje encubierto a la manera de mirar el mundo que ha marcado de modo indeleble una de las categorías epistemológicas más perdurables y renovadoras del siglo XX. El gesto se repite en la historia de las ideas si recordamos a su vez el tardío y vacilante reconocimiento del romanticismo por la modernidad. La ceguera del código realista, canon recusado por el *arte nuevo* —en observación de Mieke Bal (p. 509)—, disciplina el ojo, postulando una totalidad evidente en sí misma que no es tan siquiera advertida, sino tan sólo asumida. Frente al canon decimonónico, se va gestando la práctica que promueve un texto autoconsciente, la toma de conciencia de esa constructividad, que supone el primer cuestionamiento del todo hacia una de las experiencias artísticas de más larga trascendencia en el siglo XX. En pleno auge del llamado arte nuevo, Ortega describe en *La Deshumanización del Arte* (1924) la variante fenomenológica que está marcando definitivamente la expresión artística como desrealización por la conciencia de las mediaciones:

> Imagínese el lector que estamos mirando un jardín a través del vidrio de una ventana. Nuestros ojos se acomodarán de suerte que el rayo de la visión penetre el vidrio, sin detenerse en él, y vaya a prenderse en las flores y frondas. Como la meta de la visión es el jardín y hasta él va lanzado el rayo visual, no veremos el vidrio, pasará nuestra mirada a su través sin percibirlo. Cuanto más puro sea el cristal menos lo veremos. Pero luego, haciendo un esfuerzo podemos desentendernos del jardín y, retrayendo el rayo ocular, detenerlo en el vidrio. Entonces el jardín desaparece a nuestros ojos y de él sólo vemos unas masas de color confusas que parecen pegadas al cristal. Por tanto, ver el jardín y ver el vidrio de la ventana son dos operaciones incompatibles. (P. 53.)

La vanguardia histórica descubre la conciencia del *soporte*, que detiene el tiempo en el cuerpo de los materiales. A la materia le corresponde una memoria, una teoría compositiva que la (des)organiza. La noción de arte responde a una intervención en la materia de todo lo que signifique su peculiar cuerpo físico, como portador de un *logos* original que potencia su propia ilusión. El arte nuevo se aproxima a la materia soportando la función del texto donde "el objeto artístico sólo es artístico en la medida en que no es real" (Ortega, p. 54). "Lo real" (como categoría lacaniana de lo identificado por la percepción) no espera silenciosamente la venida de quien pueda reconocerlo como poder significante, sino que el signo se constituye por un acto de conocimiento, el objeto en su mecanismo de percepción. La conciencia crítica de la postmodernidad empieza a volver su mirada cansada a las intuiciones de las décadas de los veinte y treinta en busca del origen de sus rasgos más distintivos: la fascinación por las mediaciones. Sólo desde la acusación vanguardista de un vacío esencial de la representación y su respuesta prolífica de mediaciones se desemboca en la cultura moderna de la hiper-representación, en la cual, no ya la obra, no ya el texto, la realidad misma comienza a ser representada como una red infinita de representaciones.

La poética vanguardista en América Latina presenta cierta posterioridad frente a la europea. Sus años de desarrollo son la década de los veinte y treinta, con muchas secuelas y herencias remotas posteriores[1]. La vanguardia latinoamericana será un movimiento estético y político que hará honor a la etimología de su nombre, como "avanzadilla" que intenta renegociar los presupuestos de la modernidad y sus imágenes culturales dependientes del pasado colonial, heredados del fin de siglo anterior. En efecto, la literatura de los veinte todavía acusa la experiencia de la modernidad como amenaza y deseo, interiorizando el conflicto como textualidades en crisis. La novela de la tierra, narrativa contemporánea a la experimentación vanguardista, resuelve la inconmensurabilidad de la modernidad en una afirmación de lo autóctono y la diferencia, como bien ha demostrado el crítico puertorriqueño Carlos Alonso[2].

---

[1] Piénsese en *Cobra* de Severo Sarduy o en la novela del lenguaje de Damiela Eltit, *Lumpérica*, ya en los años ochenta del siglo.

[2] Alonso (1990) estudia exhaustivamente lo que podríamos considerar como una forma de narcisismo literario simultáneo a la vanguardia, aunque de signo distinto en el pacto de exclusiones. Para Alonso la llamada "novela de la tierra" es una postulación de la modernidad como fenómeno *retórico*, es decir, entendido como naturalización de una imagen propia o coartada cultural en América Latina. La inadecuación entre la retórica de la modernidad y la visicitud histórica genera a su vez para Alonso textualidades en crisis, que representando esta problemática de lo moderno, buscan respuestas deterministas y afirmativas de la cultura como expresión autóctona. Este último rasgo de autonomía literaria, que Alonso

Este desplazamiento de sí misma que sufre la modernidad latinoamericana se resuelve en el proyecto de vanguardia como esencialidad *mito-poética*, el lenguaje como violencia ineludible de la expresión del sujeto que detenta y remueve todos los órdenes, como autonomía literaria. El discurso literario ya nunca más será devaluado como ideología, sino que jugará un papel fundamental de entidad cultural que puede ejercer la mirada sobre la esfera de lo político. Julio Ramos (1989) ha estudiado el origen de este proceso individualizador o autonómico de lo literario en las figuras modernistas patriarcales de José Martí, todavía atrapado entre compromiso literario y comunicación social, o el erudito Andrés Bello.

El distanciamiento vanguardista debe también mucho al gesto modernista del "flâneur", el paseante de la ciudad, espectador de lo moderno en la vitrina de las grandes metrópolis[3]. Es el mundo, como escaparate y taxonomía heredados por el modernista, un reflejo prístino, un limpio museo, transformado ahora en cuadro archimboldesco, en profanaciones basadas en la comunidad básica de las artes que Gautier nunca habría podido soñar en su imaginación desaforada y atrevimiento. El artista de vanguardia abre el espejo y comunica el azogue con su mundo interior[4].

También hereda del modernismo la vanguardia un replanteamiento de las relaciones ser y lugar (espacio nombrado). El vanguardista nombra desde el exilio y el regreso del viaje del saber, de confrontación y filtro de la cultura europea. Recordemos el multiculturalismo de longevos artistas de vanguardia como Jorge Luis Borges o José Lezama Lima y el caso emblemático de Vicente Huidobro que escribe buena parte de su obra en francés, lengua de cultura para el *art-noveau*. Hay en el poeta chileno una curiosa diglosia cuya elección depende del contexto doble de la vanguardia, de su compromiso entre inmanencia y trascendencia, mitopoesis y definición política. Es también el esfuerzo del llamado *Modernismo* brasileño y la *Antropofagia* de Oswald de Andrade (1922) por devorar el cuerpo clásico de la cultura y volver a nombrarlo; pues nombrar es presuponer el origen, el texto anterior al hecho como acto de fundación[5].

---

reconoce como clave de dicha inquietud textual, me parece influencia directa del contexto vanguardista forjado en tantos mitos de individualidad, vuelta al origen como esencia cultural y hegemonía lingüística, del tipo que constituyen el centro de estudio de este artículo. La intención es detectar la familiaridad de la tradición hispanoamericana con este tipo de referencias y comportamientos de escritura, que no le son de ninguna manera ajenos.

[3] Cfr. Walter Benjamin, "Baudelaire o las Calles de París" (1991 [1972]), pp. 184-186.

[4] Recuérdese la célebre parábola de este rito de pasaje en la película de Jean Cocteau *La Muerte de un Poeta.*

[5] Cfr. Octavio Paz, "Literatura de Fundación" (1972 [1966, 1961]), pp. 15-21.

Repasando el escenario público del pronunciamiento vanguardista, aparece en 1910 la traducción al español del manifiesto futurista de Marinetti por Rubén Darío, canto al progreso de la modernidad. Pero el movimiento en América Latina nace propiamente con la publicación del manifiesto de Vicente Huidobro en 1914 *Non Serviam*[6]. El arte poética de Huidobro deja de cantar la rosa e invita a *inventarla* en el poema. Se trata de un regreso del sujeto al orden imaginario lacaniano, orden del placer y del deseo para rearticular el yo y devolverlo con esa carga proteica y deseante al orden triangular de lo simbólico; replanteamiento de las relaciones de lo Mismo y lo Otro. El lirio de Narciso se quiere rosa. El símbolo de la flor de la invención reaparece en el Cono Sur como la rosa de cobre de Endorsain, el protagonista de Roberto Arlt en *Los Siete Locos* (1930), parábola del artista revolucionario de vanguardia y su conspiración por el éxtasis. En la casa de la ficción de los poetas de avanzada, la mirada crea paisaje a través de las mediaciones, la percepción crea al sujeto a su imagen y semejanza. La metáfora es el actor de este lenguaje en el que la realidad sólo interesa como margen, frontera a traspasar.

El artículo político de la representación unido al postulado del arte nuevo permanece más allá de la cronología histórica del movimiento. Incluso en una figura tan literariamente reduccionista como Lezama, Severo Sarduy ha vislumbrado un significado histórico en la función del imaginario:

> Si el descubrimiento y la expresión de la imagen conllevan un goce es porque ésta es la fiesta de lo verosímil: rescate de las realidades que se han perdido, entre las infinitas realidades posibles, cuando la Historia escogió su realidad. [...] Descubrir estas potencialidades, hacerlas visibles, reflejarlas en la concavidad del lenguaje y hasta desplazar con ellas la *verdad* de la Historia escrita: ésa es la función del poeta [...] Escribir es apoderarse de lo *dable* y de sus exclusiones. (Pp. 85-86.)

La poética lezamiana aporta el compromiso de las imágenes míticas para postular el lenguaje verdadero del cuerpo visible. En la obra de José Lezama Lima se produce la más grande concreción de mitos de lo visible de la tradición literaria hispanoamericana. Sarduy sigue la pista a la palabra-cuerpo de Lezama, a su necesidad de carnalidad de la visión:

---

[6] Son varias las recopilaciones de manifiestos y otros documentos fundamentales con los que la bibliografía del movimiento de vanguardia en América Latina cuenta en la actualidad: Verani (1986); Osorio (1988); abundante y completa la compilación del crítico brasileño Jorge Schwartz (1992).

> En el planteo de su sistema poético Lezama otorga el primer lugar a la *ocupatio* de los estoicos, es decir, a la total ocupación de un cuerpo. [...] El poema sería un cuerpo retroactivo, creado por la imagen final a que llega la cadena de metáforas. (P. 67.)

El lenguaje es imagen en extensión que por un imbricado, erótico ejercicio de superposición metonímica llega a crear un cuerpo. Sarduy se hace eco de lo que Lezama llamaba la "dolorosa incompletez"[7] en el nihilismo de la imagen. Lezama rescata el mito de Narciso para que la palabra se vuelva reflejo de sí misma, aventure un cuerpo en su visibilidad, alcanzando la mayor amplitud del barroco[8]. Palabra que vuelve a su erotismo fundador, a su verdad de espejo por vía del gongorismo y de la crisis de las vanguardias de los años treinta.

La *era Lezama*[9] principia entonces en el mismo corazón de la vanguardia histórica y promulga el principio de un relato del cuerpo como experiencia material de conocimiento que se informa del debate radical de las primeras décadas del siglo. Cuando el lector se enfrenta al abigarrado mundo de *Paradiso* (1966) parece difícil delimitar un fondo textual sobre el que orientar el barroco indiscriminado y voraz de la escritura lezamiana. En *Paradiso* presenciamos la coexistencia de dos grandes formas de discurso que se han cruzado sin reconocerse en la novela de Lezama: la modernidad vanguardista y su exhaustividad desde el postmodernismo lezamiano. El encuentro de ambas prácticas textuales habla de la elaboración común de un mismo enunciado que ha elegido por objeto la literatura como el discurso de las mutaciones, como la palabra autogenerada que funde la discontinuidad entre vida y arte, entre realidad y ficción, que sobregira el siglo XX. *Paradiso* es una miscelánea de fábulas de manipulación del objeto y la palabra, de recreación de un espacio transicional donde recrear el cuerpo, restableciendo un nuevo marco de simbolización y semiotización progresivas capaz de representar el enorme conflicto de la representación.

En la genealogía textual profunda de la obra clave de Lezama, habita una constante e inacabada conversación cultural, poniendo en diálogo los patrones retóricos lezamianos con la investigación y relectura de las vanguardias históricas y, concretamente, desde una de las poéticas de mayor hallazgo estético en el *corpus* del imaginario vanguardista en las letras

[7] José Lezama Lima, "Sierpe de Don Luis de Góngora" ([1970] 1979), p. 271.

[8] No es Lezama, con todo, el único patriarca de las letras hispanoamericanas que hace parte íntima de su imaginario la figura carnal del barroco. Recordemos "la luna de sangre" quevedesca, como imagen borgiana en la extensión.

[9] Debemos a Severo Sarduy el acierto en la concepción de esta categoría poética (Crf. Roberto González Echevarría, 1987, p. 56).

hispanas: la prosa del mexicano Jaime Torres Bodet[10], junto a Xavier Villaurrutia, la gran figura de los llamados *Contemporáneos* y el signo lingüístico proliferante y activo de Vicente Huidobro y César Vallejo. En dichos poetas, el lenguaje, transcodificado y rescatado de la demarcación, fundamenta la incidencia del cuerpo y de la imagen del cuerpo que hace vulnerable la representación.

La intolerancia de los cuerpos

En la prosa vanguardista de la década de los veinte y treinta, encontramos textualidades elaboradas sobre lo que identificamos como genuinas obsesiones lezamianas: la primera persona proteica, la fragmentación y la autorreflexividad, la escritura de la imagen antirreferencial, la causalidad metafórica, la metonimia de la mirada, las mediaciones y los filtros generadores de ficción sobre lo real, la perspectiva del espectador, la distancia, el rito de la contemplación creativa, la prosa como reescritura de lo poético. Gustavo Pérez Firmat ha definido la obra vanguardista como obra en gestación, con cualidades potenciales o anticipatorias que nunca maduran en forma definida o estática (1982, p. 57). Se trata de una ansiedad imaginaria de afán iconoclasta, obsedida por el sentido de la composición, fascinada por la historia material del soporte, irreverente a la sacralidad del sujeto. Su carácter transgresor y expansivo halla una síntesis en el concepto específico de "unidad" que Peter Bürguer señala para la obra inorgánica, entendido como un contenido amplio que sólo produce el receptor (1987, p. 112). El sentido de la obra sólo será captable desde la identificación de un principio de construcción esencial, de un principio constitutivo responsable de su carácter enigmático. El relato vanguardista contiene mitos, desarrollos de percepción, técnicas de imagen y perspectiva que los definen como lo que Firmat califica de "obra intrascendente" ("intranscendent work"), donde: "el tema central no es sino el estatuto de la obra como una construcción

[10] Aunque la aparición de *Paradiso* en los medios de imprenta como tal obra completa data del año 1966, sabemos, por declaraciones del propio Lezama y las abundantes pesquisas críticas sobre el tema, que la obra magna de Lezama empezó a fraguarse en los años treinta. Cuando en 1949, en los números 22 y 23 de *Orígenes*, Lezama da a conocer el primer capítulo de *Paradiso*, tenía treinta y ocho años y ya había publicado *Muerte de Narciso* en 1937, abriendo su obra poética. La factura final de *Paradiso* le llevaría toda una vida de escritura. Sabemos asimismo que la "novela poemática" de Lezama no fue compuesta en sucesión lineal, sino de forma esporádica y fragmentada con los blancos propios de la inconcreción vanguardista. Para más información sobre este punto, se puede consultar, entre otras muchas obras, el estudio preliminar a la excelente edición de la novela de Lezama a cargo de Cintio Vitier, en la Colección Archivos (1988), pp. xxix-xxi.

ficcional y su relación con otros objetos de la misma índole" (p. 74). Estos relatos son metaficcionales (en sentido discursivo y narrativo) a un doble nivel. En primer lugar su autorreflexividad cumple la función descrita en *Idle Fictions*: "supervisar el acceso del lector al texto", "prescribir la transacción entre lectores y textos" (Firmat, p. 121). Pero en un sentido mucho más arriesgado son aventuras de la percepción que apuntan a la más irrenunciable de las ambiciones de la vanguardia: la reorganización de la praxis vital por medio del arte (Bürguer, p. 116). El discurso vanguardista concentra su esfuerzo en elaborar formas de mediación que permitan una lectura diferente del mundo; los relatos de vanguardia son alegorías de esa capacidad de la actitud vanguardista descrita, parafraseando a Ortega, por ese *conservar de la realidad lo estrictamente necesario para asistir a su metamorfosis* (p. 79).

Paradiso comparte con la escritura de vanguardia un mismo proyecto utópico: invocar en su textualidad ese principio enigmático que constituye el momento de crisis en el proceso creativo entre la imagen y su encarnación. En la voz guía de Oppiano Licario, maestro en la Atlántida literaria de José Cemí, es la tentativa de realizar la unión de la imagen con el conocimiento[11]. Es el espacio abierto de la *Orplid*[12], la cantidad hechizada, la utopía de la transfiguración, donde sólo "lo más difícil" es un estímulo. El proceso comienza por la constitución de un sujeto capaz de adentrarse en este espesor discursivo. Central a la composición de *Paradiso* y la prosa vanguardista es la inclusión del relato mítico como posición de lectura, como enfrentamiento clave de su textualidad. Sobre estos mitos autorreferenciales se sustenta la ambición de una analogía en el ordenamiento de lo visible, la imagen como estructura del texto (artefacto) y del mundo; textualidades epifánicas, se revelan a sí mismas y revelan la vida por el arte[13].

---

[11] Sobre el maestro de la Atlántida literaria de José Cemí, comenta Lezama en el capítulo xiv de *Paradiso*: "Fijemos ahora el inocente terrorismo nominalista. Oppiano, de Oppianus Claudius, senador estoico; Licario, el Ícaro, en el esplendor cognoscente de su orgullo, sin comenzar, goteante, a fundirse" (p. 433).

[12] La ciudad letrada de la utopía poética lezamiana, marcaría un territorio, eros de la escritura, donde lo real y lo irreal se confunden. Para la deuda con Mallarmé de la patria gnóstica de Oppiano Licario, cfr. Cintio Vitier ed. *Paradiso* (1996), p. 468, nota 5.

[13] Roberto González Echevarría contribuyó de modo definitivo a la apología lezamiana del lenguaje como visión y los numerosos textos de cultura sobre los que se fundamenta el neobarroco lezamiano (1975, pp. 479-90). Bellísima reflexión sobre la belleza del error lezamiano, del itinerario narcisista de Cemí por la re-escritura, de su tropezar constante con la abundancia de la imagen (heredada, reinventada, recuperada) para verse mejor es el trabajo de Enrico Mario Santí (1980, pp. 147-51). Para Noé Jitrik ("*Paradiso* entre desborde y ruptura", p. 71) "la continuidad está en la producción proliferante, en lo no controlado" del lenguaje de Lezama. Guillermo Sucre ve el "ordenamiento de lo invisible" en poesía lezamiana como orden órfico, donde el lenguaje de la poesía es "un debate entre la fijeza y la evaporación" que creará "un cuerpo resistente, no evanescente, que es la imagen total" (1975,

El mito de la *autogénesis* vanguardista tiene su reescritura en el mito lezamiano de la *resurrección*: el renacer del cuerpo clásico y la redención del cuerpo de la luz. En el incesante diálogo textual de *Paradiso* esta configuración poética desarrolla continuas representaciones, abordadas particularmente por el imaginario narrativo de la prosa vanguardista de los años treinta. Es así el caso que enfrenta dos fábulas de identidad del sujeto metafórico: el relato de Jaime Torres Bodet *El Nacimiento de Venus* (1941) (automitificación del sujeto vanguardista como "ser nuevo" para naturalizar otra génesis de la mirada) con el relato mítico incluido en el capítulo X de *Paradiso* (episodio de Fronesis y Lucía). La reescritura lezamiana intensifica y dramatiza la sugerencia de la vanguardia: la sobrenaturaleza, la proyección del cuerpo de la luz enfrenta la tensión impredecible del cuerpo del dolor, la resistencia al lenguaje.

Para poder sustituir la realidad del lector por la ficcional, hay que comenzar por conocer la constitución del sujeto capaz de adentrarse en esta espesura discursiva, la genealogía del *sujeto metafórico* lezamiano. Ésta es la tarea acometida por el relato de Jaime Torres Bodet "Nacimiento de Venus". Asistimos en esta breve pieza del precursor de los Contemporáneos a la automitificación del sujeto vanguardista como *ser nuevo* para naturalizar otra génesis de la mirada, contemplamos el ritual de su renacimiento[14].

"Nacimiento de Venus" da voz al mito vanguardista del "naufragio de una mujer" modelada en estatua por el Mediterráneo, y devuelta a la posesión del mundo con una mirada generatriz. El mar, convertido en curioso reverso de Pigmalión, acoge a Lidia entre sus aguas, pero fracasa en encontrar la forma única para ese cuerpo desnudo; sus olas, saturadas de memoria histórica, repiten incansablemente motivos canónicos:

> Por más que pretendiese ahondar en sí mismo el Mediterráneo no conseguía sino promover esa ola conocida, verdadera joya de la cultura, que lame en las alegorías marinas de los museos la firma de

---

p. 30). Ramón Xirau sigue la filiación órfica de la fe poética lezamiana que busca en la correspondencia secreta de las cosas la clausura de la dualidad (1978, p. 342). Nuestro ensayo retoma el viaje iniciático de Cemí donde lo dejara Maryse Renaud (1984, p. 71) tras una interesante aproximación sociocultural al texto de Lezama y desde la advocación a *Paradiso* como texto de utopía para la fundamentación de un sistema poético por Fernando Aínsa (1984 , pp. 73-86).

Al hilo de esta investigación tratamos de ampliar el palimpsesto de *Paradiso*, enriquecer su archivo de búsquedas de la visibilidad como un destino novelesco.

[14] Para la lectura metaliteraria de los textos de vanguardia, véase el magnífico estudio de Vicky Unruh, *Latin American Vanguards: The Art of Contentious Encounters*, especialmente compenetrados con nuestras tesis los capítulos 2 y 5.

> Rubens, el sol de Tiziano, el nombre de Veronés ¿A cuál no le sobraba un endecasílabo, una proa, un tridente, la servidumbre y el símbolo de una divinidad? (Pp. 234-35.)

Sobre este cuerpo contaminado por la memoria histórica actúa el simbolismo purificador de las aguas, espacio desintegrador, virtualidad que deja abolidas las formas, *repetición simbólica del nacimiento de los mundos, del hombre nuevo*, en palabras de Mircea Eliade: "la inmersión en las aguas equivale, no a una extinción definitiva, sino a una reintegración pasajera a lo indistinto, seguida de una nueva creación, de una vida nueva" (p. 166). Al actualizar ese momento intemporal, de la resistencia de materiales, en ese medio de gérmenes y latencias se abre la posibilidad de la causa secreta frente a la historia, la hipótesis lezamiana de la imagen, del mito del hombre como prodigio al que la imagen penetra e impulsa (1981, p. 19):

> Una atracción espesa del mar la había llamado hacia el fondo. Oscura solicitud de todas las células, abdicación de los músculos, tranquilo otoño del cuerpo lacio que se deshoja... En los oídos, silbante, una orquesta de agua. Un acuario en los ojos. En los tobillos unidos, el peso de una cascada invisible, de una cadena de bronce. Al postrer eslabón, el mundo. Pequeño y rápido, como una burbuja. Pesado y rápido, como una bala. (P. 244.)

Las aguas convocan la fluencia de lo preexistente pero, como recuerda Eliade, no pueden trascender su virtualidad; para que la forma adquiera límites, para que la posibilidad adhiera un sentido, ha de regresar a las leyes de lo temporal. "La emersión repite el gesto cosmogónico de la manifestación formal" (Eliade, p. 165). La imagen que ha estado al lado de la muerte, sufriendo lo que Lezama llama "la abertura del arco en su mayor enigma y fascinación" emerge a la *plenitud de la encarnación* (1981, p. 19), narrada por Bodet como un encuentro simbólico:

> Una gaviota sin patria, sin religión, sin enigmas —una gaviota que no tenía en las alas, una sola pluma de mármol— vino a posarse sobre su pecho. Llevaba en cada pata una estrella. Le sorprendió, de improviso, el latido de una sangre invisible. Era el cuerpo de Lidia... (P. 235.)

Las aguas, la condición de lo virtual, devuelven un cuerpo, es decir, una imagen, un fenómeno *hematopoiético* lezamiano, "instante en que lo orgánico se transforma en respirante", "en que aparece el espacio asimilado" (1981, p. 126). La imagen para Lezama es "una medida que respira",

cuerpo sonoro que devuelve el espacio asimilado, o dicho de otra manera, el cuerpo "es el súbito de la reminiscencia. El cuerpo es la permanencia de un oleaje innumerable, la forma de un recuerdo, es decir, una imagen" (*Paradiso*, p. 259). El relato de Bodet de la imagen como hylogenia, como génesis desde el agua, revela sus símbolos desde la poética lezamiana.

La imagen en el relato de Torres Bodet ha necesitado ser fluencia inapresable para desencarnar el canon y renacer a la fusión entusiasta con el mundo, a su pertenencia en la contemplación:

> Por primera vez, desde una fecha que no sabía precisarse, su cuerpo advertía en sí mismo una vida profunda, espontánea, capaz de expresarse a sí propia en formas originales (...) Con sólo abrir la mano podía inventar una forma (...)
> Lebrel enjuto, dócil, de fina lengua doméstica, el sueño de la tierra reconocida comenzaba a lamerle las manos. (Pp. 245-46.)

La elección del nacimiento de Afrodita para representar el mito de la revelación contemplativa se abre a importantes connotaciones desde una lectura del cuento como metalenguaje del código vanguardista. Responde en primer lugar a la necesidad de un símbolo para ese peculiar anhelo de clasicismo que nazca del vacío estético, expresado por Bodet en "La Deshumanización del Arte", su respuesta al conocido ensayo orteguiano: "¿Dónde existe esa obra eterna sin pasado, nueva sin decadencia, clásica sin deshumanización?" (p. 129). Este deseo sin memoria contesta al imperativo vanguardista de destruir el apriori histórico de los procedimientos artísticos y convertir la seducción por el pasado en lo que Bürger llama "una simultaneidad de lo radicalmente diverso" (p. 123). El nacimiento de Venus remite además en el lenguaje del arte al concepto clave de *transposición*: Venus emerge con la mirada que adquieren los cuerpos dentro del espejo, evidencia el filtro que posibilita la fluidez entre realidades, que "no altera el mundo, lo refleja exacto" pero "el solo cambio de posición a que lo obliga basta para imponer a la mirada el artificial camino por donde lo reconstruye y lo ordena dándole su nuevo sentido"[15]. Como revela el narrador de "Nacimiento de Venus" en su más íntima confidencia, "lo esencial está en pasar con fluidez de una realidad a otra" (p. 243). El acto poético es la articulación de un umbral hacia la imagen entendida a la manera Lezama

[15] Es así como Jorge Cuesta describe esta calidad de la mirada del artista de vanguardia en *Reflejos* de Xavier Villaurrutia *(Ulises*, 1 de mayo de 1927, p. 28). El espejo como forma de la visión unido al mito del nacimiento de Venus sirve también de motivo al poema de Bodet "Desnudo". Los versos finales traducen en imagen el presupuesto estético de Bodet de "tallar hasta la trasparencia la figura recibida de la realidad o de la literatura" ("Reflexiones sobre la Novela", p. 18). Es, en otras palabras, la supensión de la forma pura lezamiana.

como “ese primer asombro que inicia otra causalidad en otra región”. Por el acto poético así concebido, el sujeto gana lo que Lezama denomina una *morada*, accede a la “duración entre la progresión de la causalidad metafórica y el continuo de la imagen” (1982, p. 34), formulación superior del ideal vanguardista de lo incondicionado.

La experiencia artística celebrada en el relato de Torres Bodet enfatiza la posibilidad del *renacimiento*, la parábola de la autocreación, concepto fundamental de la estética y de la ideología vanguardistas. El sentido profundo de esta celebración del origen por el sujeto lo encontramos formulado en las reflexiones de Rosalind Krauss sobre el discurso de la vanguardia:

> Más que como reacción o disolución del pasado, la originalidad vanguardista se concibe como un origen literal, un comienzo del grado cero, un nacimiento [...]
> Pues la originalidad se convierte en una metáfora organicista referida, no tanto a la invención formal como a las fuentes de la vida. El yo como origen está a salvo de contaminarse por la tradición porque posee una suerte de originaria “naiveté”. (P. 157.)

El sujeto que renace toma la investidura de lo imprevisible y cualquiera que vuelva a ser su contacto con la carnalidad del mundo estará protegido por su conocimiento de la creación: “En su sentido originario, el ser tiene la energía potencial para continuos actos de regeneración, para perpetuar su nacimiento o autocreación” (Krauss, p. 157).

El relato de Torres Bodet, examinado a manera de pequeña muestra de la prosa de los Contemporáneos, forja un metalenguaje, con mitos autogenerados y símbolos propios. Son las formaciones discursivas de lo que Apollinaire llamó el “esprit nouveau”. Activa también esta práctica textual un orden metafórico pertinente para representar al nuevo mito. El relato de vanguardia se ofrece además a una lectura mediada por la sugestión del marco, por la teoría de la transposición y su capacidad para una imaginación artística diferente. Se trata de intentar ser otras cosas, textos de agua, de inapresable mediación, de perpetua virtualidad, mágicos en un sentido que no podemos esperar de lo narrado. Pretenden deconstruir el lenguaje narrativo con procedimientos que provoquen el rito de pasaje, el paso de un sistema significante a otro. La insistencia en estas formas de mediación transpositivas demanda un lector coproductor del texto, capaz de participar en la explotación de la pluralidad del lenguaje que, como observan Coward y Ellis, define la reformulación de la práctica de escritura en la vanguardia (p. 45). Esta nueva articulación de posiciones enunciativas y denotativas

entrena al lector en el desplazamiento, en un auténtico aprendizaje de la permutación del sentido de lo visible. La ambición irrecusable de esta experiencia artística es afectar los dominios de la visión del mundo, reintegrar la inquietud del arte en la praxis vital; visión del mundo que lo hace impredecible, libre en su utópica anarquía de formas por el poder de la mirada.

En la fábula de Bodet, la naturaleza artificialmente recompuesta ha sobrevivido a la verdad de la realidad misma, deviene materialización de lo imaginario y ocupa con este valor nuevo el concepto de "lo real". Se abre en este punto el episodio Lezama en la historia de la vanguardia literaria hispanoamericana.

El compromiso ideológico de Lezama con la vanguardia nace de una misma creencia en la capacidad creadora, *transformacional* del lenguaje literario. La gran investigación de la literatura vanguardista es asumir como reto creativo la convicción de que no hay otro acercamiento a la "realidad" que la discursividad que lo media. La filiación netamente vanguardista del imaginario lezamiano configura uno de los episodios clave de ese gran proyecto novelístico que es *Paradiso.* La aventura nocturna de Fronesis en el capítulo X de la novela de Lezama se ofrece a una lectura como relato mítico organizado sobre los arquetipos y símbolos profundos de la vanguardia que Lezama a un tiempo totaliza y expande.

El encuentro entre Fronesis y Lucía da entrada al lenguaje del cuerpo en *Paradiso* para representar la unidad de la imagen por el Eros de la lejanía[16]. Fronesis retrata al sujeto metafórico como Lezama lo describe en *Imagen y Posibilidad* a través del modelo de Martí: "dios fecundante", "preñador de la imagen" que busca la pureza de sus símbolos (p. 21). La tregua entre Fronesis y Lucía es la del signo frente a su referente, la de la realidad frente a su representación. Su unión mimética se describe en términos de mutilación corporal, de irreductible dominio de la imagen:

> Uno a otro se sentían como impedimentos; innumerables mares, invisibles deshielos, impedían que uno pusiese la mano en el secreto transfigurativo del otro, para lograr la suspensión donde los contrarios se anegan en el Uno Único. (P. 287.)

La imagen es ese punto de síntesis donde la forma se precipita a lo que Lezama llamaría *la precisión de su nombre* (1982, p. 116). Para llegar a la figuración original el sujeto metafórico tiene que forzar ese espectro de reproducción de lo inherentemente múltiple. La sexualidad laberíntica de

[16] Cfr. Salvador Bueno, "Un cuestionario para José Lezama Lima" *en Paradiso,* ed. Cintio Vitier, p. 725.

Fronesis se ofrece como lenguaje cifrado del proceso de la imagen en la poética lezamiana. El recurso a un centro que fragmente la opacidad por la penetración de la mirada es de primera inspiración vanguardista. Sólo en la distancia opera la disposición de la contemplación que permite replantear al referente como entidad verbal y discursiva; en reflexión de Lezama en *Las Eras Imaginarias*:

> El imposible al actuar sobre el posible, crea un posible actuando en la infinitud. En el miedo de esa infinitud, la distancia se hace creadora, surge el espacio gnóstico, que no es el espacio mirado, sino el que busca los ojos del hombre como justificación. (P. 62.)

El hallazgo de la imagen es el hallazgo de un medida perdida por la que, en expresión de Lezama, "la lejanía penetra en lo inmediato" (1982, p. 116), es decir la mirada inventa lo que existe, o como diría Ortega, "aumenta el mundo", abre paisaje, añadiendo a lo real un "irreal continente" (p. 72). Ortega señala también como definitorio del arte nuevo la previsión del marco, coincidiendo con la propia teoría poética lezamiana: "en la poesía el trazo del contorno es previo y posterior al goce de la habitalidad justa de ese contorno anticipado" (1982, p. 201). Es el presupuesto vanguardista de que la imagen cristaliza en la búsqueda de filtros con capacidad de extrañamiento, antirreferenciales en el sentido de detener el discurso y permitir el dominio de lo visual. En *Imagen y Posibilidad* Lezama insiste en la cadena simbólica mediación-imagen-nombre:

> Gota, germen, acto, corpúsculo, esfera, trocándose en fluencia, cuerpo, participación, logrando la epifanía verbal por la que el acto naciente se troca en signatura. (P. 130.)

Fronesis opone a la empiricidad de lo real esa circularidad contenida en sí misma, sugerencia vanguardista de la red (*grid*), vértigo de palabras que ha encontrado su mediación, su silencio impermeable al lenguaje (Krauss, p. 158). De la mímesis como "espejo que nos sorprende en su mutilación" a la imagen como "espejo para la configuración de lo invisible"[17] en virtud de un *centro*. Mircea Eliade revela el sentido del centro en la geografía mítica como apertura donde se manifiesta de modo total lo sagrado, entendiendo por tal el *espacio real* por excelencia (p. 46). El centro es a su vez sugerencia de intersección órfica entre el espacio profano

[17] Juego con dos momentos lezamianos*: Imagen y Posibilidad*, p. 200; *Paradiso*, p. 243.

y un más allá de formas puras. Leer el episodio de Fronesis como rito del centro y rito del cuerpo en el código mítico equivale a interpretarlo como el acto creador en sí (Eliade, p. 46), como modo ritual de la *hipertelia de la inmortalidad*[18] que Fronesis y Cemí quieren como destino. Aventurando el cuerpo como soporte hipertélico de la imagen, el doble círculo refugio de Fronesis remite además a la realización concreta del centro en la figura del mandala. Siguiendo a Eliade (p. 57), la función del mandala es la de rito de penetración, iniciación a un tiempo a una *imago mundi* y al "cuerpo místico" propio, ascensión al sí mismo; el sujeto tiende hacia el centro de lo creado y hacia su propio centro que le confiere realidad integral, "sacralidad". Este deseo de lo real absoluto como conjunción de imagen y cuerpo es lo que Eliade define en el lenguaje mítico como la *nostalgia del paraíso* (p. 58). Nostalgia del ámbito del conocimiento por la imagen, de la *poiesis*: "un discurso totalizante que interpreta cada cosa en su imagen" (Ríos Ávila, p. 242).

La praxis creativa puede truncarse también en experiencia de crisis. Si la complacencia en la inteligencia de la imagen es una promesa del ideal vanguardista, existe igualmente en el seno del ideario de la modernidad una postura más decadente que fracasa en el conocimiento por la metamorfosis de lo real[19]. Es también el proceso del *cuerpo del dolor* que da fin a la aventura nocturna de Fronesis. El encuentro de Fronesis con Lucía como rito iniciático al mundo de la imagen no completa su trascendencia. El "icárico intento de lo imposible" del protagonista de Lezama no consigue que la imagen rinda su visibilidad momentánea. La imagen que no participa en esa "digestión metamorfósica de lo visible con lo invisible" (Lezama 1982, p. 177), que no da por tanto oportunidad al ser causal, se convierte en opresión. Fronesis acude a la oscuridad de la noche, ámbito de la fijeza, y al poder de las aguas, espíritu de las mutaciones, como un acto de recuperación para devolver la imagen a la sucesión infinita. En el Malecón, de espaldas al mar, "como si hubiese sufrido una mutilación reciente" (p. 297) Fronesis se recoge en el encogimiento placentario y desde la protección de ese espacio vacío comienza a llorar. En el relato mítico más original y sobrecogedor de *Paradiso* las aguas regresan con el simbolismo del cuento

[18] "[U]na hipertelia de la inmortalidad, o sea una busca de la creación, de la sucesión de la criatura, más allá de toda causalidad de la sangre y aun del espíritu, la creación de algo hecho por el hombre, totalmente desconocido aún por la especie" (*Paradiso,* p. 251). "En realidad, todo soporte de la imagen es hipertélico, va más allá de su finalidad, la desconoce y ofrece la infinita sorpresa de lo que yo he llamado *éxtasis de participación en lo homogéneo*, un punto errante, una imagen por la extensión" (*Las Eras Imaginarias*, p. 180).

[19] Es el presagio de la vanguardia en el sentido de Calinescu: "se supone que el arte se convierte en una experiencia —deliberadamente dirigida— de fracaso y crisis" (p. 124).

de Bodet. El mar es ese origen de todas las posibilidades de existencia que precede a toda forma y sostiene toda creación (Eliade, p. 165). Gesto que significa acogerse a lo preexistente, al vacío embrionario que Lezama nombra como "el no ser que engendra el ser más profundo" (1982, p. 114); experiencia del ser "devuelto a la profundidad de su misterio"[20]. La enclaustración es asimismo antífrasis de la muerte, vocación de exilio insular (Durand 1981, p. 228) que Ríos Ávila interpreta como representación en Lezama de lo poético autorreferencial asegurando la autosuficiencia del lenguaje; es decir la resistencia a la invisibilidad que para Lezama define la poesía (1981, p. 129) y que hace del *lenguaje la verdadera imagen de la presencia* (Ríos Ávila, p. 245). La insularidad es imagen que participa del código regenerador de las aguas: intimidad del espacio interior, muerte simbólica que es a su vez "imagen ejemplar de toda creación (...) que se *manifiesta* repentinamente en medio de las olas" (Eliade, p. 165).

El *cuerpo del dolor* es el cuerpo de la expresión imposible, de la melancolía material, el cuerpo que no puede ser participado por la imagen porque está poblado por la ausencia. La carencia de contenido referencial —de "fijeza" que diría Lezama— hace del cuerpo del dolor para Elaine Scarry el cuerpo de la resistencia al lenguaje (p. 5). El cuerpo del dolor como aquel que resiste su objetivación en la palabra está empujado a la invisibilidad. Cuerpo que somatiza no sólo la resistencia al lenguaje sino también su activa destrucción al producir una regresión inmediata a un estado anterior al lenguaje, de sonido, llanto y grito preverbales. La fragmentación del cuerpo de Fronesis se convierte en la ficción del cuerpo sin fijeza donde la posibilidad se desarrolla en lo invisible[21]. El estado de inobjetivación permanente del cuerpo del dolor pulsa una urgencia, un movimiento desde y más allá del cuerpo. La averiguación del cuerpo del dolor es entonces la averiguación del proceso creativo. La homología entre el dolor —intencionalidad como estado— y la imaginación —intencionalidad como autoobjetivación— (Scarry, p. 64) es el marco de identidad del sujeto creador que posibilita la reinvención del orden de las cosas. La imaginación viene a generar el objeto que el mundo fracasa en proveer. Crear es hacer de esta actividad interior un proceso externo, una proyección del objeto interior al mundo. Es el "realizar la metáfora" orteguiano, hacer de ella la *res poética*, porque en el arte nuevo "no vamos de la mente al mundo sino

[20] Bachelard citado por Durand (1981, p.226).

[21] Es el espacio y el tiempo del *paideuma*, del niño eterno, el primitivo, el poeta que "cree poder forzar la aparición de lo invisible"; la región del hechizo y del devenir, sustancia configurativa con que el poeta domina el caos (*Paradiso*, pp. 247-48).

al revés, damos plasticidad, objetivamos, *mundificamos* los esquemas, lo interno y subjetivo" (p. 78).

El cuerpo del dolor es el cuerpo que se acerca progresivamente al silencio, donde los límites del sujeto se convierten en los límites del cuerpo que va a morir, en el centro de conciliación entre hombre y naturaleza. Para Ríos Ávila este punto de unión indiferenciada viene postulado por la autorreferencialidad poética lezamiana. El regreso a lo preverbal es la condición de posibilidad del lenguaje poético:

> El lenguaje del poeta es prebabélico; el ser se despliega en el silencio de las palabras, cuando ellas mismas devienen de alguna forma en sustitutos de sus objetos: "recordar que la verdadera conjuración de la cosa es su nombre". Tal es el momento de la total percepción poética. (P. 245.)

El rito del cuerpo de Fronesis como *alter ego* de *Cemí*, el regresado a lo primitivo, es un episodio fundamental para el retrato del artista que proyecta *Paradiso*. Lezama entra en diálogo con las herencias históricas de la vanguardia. La imagen en extensión se informa de un cubismo matemático y de la investigación plástica de la duración en un sentido bergsoniano, participando del principio de intervención surrealista: una exigencia de verticalidad o altura a cualquier horizontalidad, lo u-tópico de la ausencia-presencia, lo semificticio y semirreal[22]. El expresionismo alemán con su búsqueda de la manifestación en el primitivismo y el corte o cesura que la tradición produjo entre la "emoción de lo real" y la creación de las formas (G. Alcantud, p. 287), tomado por Kandinsky (1912) como principio de la necesidad interior de la forma es parte también de las partituras del palimpsesto lezamiano. Este acercamiento al pensamiento primitivo del cuerpo se entiende como el mérito surrealista de la vuelta al sujeto (Brion, 1967), de girar el arte hacia el yo reinventor de los mitos de necesidad interna, del bestiario surrealista de formulaciones visibles del imaginario como única conciencia verdadera de lo real.

El cuerpo que emerge del silencio, del lenguaje objetivado y renaturalizado, el cuerpo que reproduce presencias es el *cuerpo de la luz* o de la impulsión por la imagen[23]. El isomorfismo de la palabra y de la luz (de la palabra y la visión) invade a partir del capítulo X la novela de Lezama. La

---

[22] Cfr. José A. González Alcantud (1989), pp. 237-38. Sobre el surrealismo periférico caribeño alimentado por la etnología de Fernando Ortiz y la adhesión de Aimé Cesaire y Senghor, con Wilfredo Lam, p. 287.

[23] Así percibe Cemí a Fronesis tras su "descendimiento placentario de lo nocturno" (*Paradiso*, p. 298).

cultura de la luz propicia el encuentro de Cemí y Oppiano Licario, la cita del sujeto creador con la palabra mántrica[24]; realidad simbolizada y signo simbolizante, palabra que es su ser mismo, recitado incesante que reproduce *la presencia*:

> Impulsado por el tintineo, Cemí corporizó de nuevo a Oppiano Licario. Las sílabas que oía eran ahora más lentas, pero también más claras y evidentes. Era la misma voz, pero modulada en otro registro. Volvía a oír de nuevo: ritmo hesicástico, podemos empezar. (P. 459.)

El poeta se justifica entonces como "el ser causal para la resurrección" (Lezama 1982, p. 30). En la participación total del *logos* que Lezama propone el texto devora el cuerpo clásico de la cultura para volver a nombrarlo, pues nombrar es presuponer el origen, el texto anterior al hecho como acto de fundación. En la última voz de *Paradiso* hay un fondo del proyecto de vanguardia como esencialidad mitopoética, de la absoluta autonomía literaria.

El texto vanguardista viene a colaborar en ese gran palimpsesto de las indagaciones lezamianas desde la identidad cuerpo e imagen, desde la forma generatriz de su propia causalidad, por la inversión de la decisión referencial entre texto y mundo, en la percepción como único espacio de lo real. Para lograr esta capacidad transformadora de lo real en irreal, Lezama coincide con la vanguardia en la elección del mito como discurso capaz de la aniquilación interna del lenguaje natural por la intención metalingüística. Desde la formulación de Lévi-Strauss del mito como metalenguaje, Gilbert Durand (1993) llega a la definición del mito como praxeología:

> Todo mito es un condensado de "diferencias", de diferencias irreductibles por cualquier otro sistema de logos. El mito es el discurso último en el que se constituye la tensión antagonista fundamental para cualquier discurso, es decir, para cualquier "desarrollo" del sentido. (P. 29.)

El sentido en juego en la *era Lezama* es la necesidad de que el *universo de la inmanencia* se fusione al *universo de la manifestación*[25], que la vanguardia ya intuyó en su dependencia irresoluble. Sólo el mito por lo que Lévi-Strauss llamó su carácter "dilemático" o discriminatorio, su lógica antinómica (de la que Durand se hace eco), puede ensayar esta inversión de

[24] Sobre el simbolismo del *mantra*, cfr. Durand, 1981, p. 147.

[25] Adopto los términos de las reflexiones semánticas de Durand en torno a los metalenguajes (1993, p. 68).

la creencia objetiva. Para la vanguardia el mito es un relato fundador, una lectura inventiva sobre la conquista de la mirada genuina frente a la ceguera del realismo. El mito para Torres Bodet es una fundación metalingüística, un "*cobrar cuerpo* formal de la *realidad* del sentido" (Durand, p. 64). Para el artista de vanguardia el mito verifica la lectura como invención. Entre autor y lector implícito hay un cierto intercambio de funciones que Pérez Firmat comenta en *Idle Fictions* en relación a la novela: el lector es introducido como autor (en función de) mientras el novelista es incorporado como comentarista, como "lector" en una subversión más de la vanguardia frente a la tradición (p. 62).

Para Lezama más que espacio fundacional el mito es espacio de gracia, postulación de lo inmanente. El mito como principio constitutivo gana en complejidad —en "enigma" que diría Bürger— en la reescritura lezamiana, al instaurar lo potencial, lo dilemático radical como epistemología[26]. En Lezama el discurso mítico es un gesto ritual constante de la verdadera textualidad; su misterio sustancial es un fin en sí mismo, la infinita posibilidad de la metamorfosis, la convocación perdurable del secreto entre la palabra y la imagen. Con Lezama el narcisismo textual no se conforma con una realidad verbal para la imagen. La imagen se mira en el espejo del lenguaje y se revela como cuerpo. La imagen lezamiana "respira" (por utilizar la propia expresión de Lezama) y nace de la "sobrenaturaleza" de la palabra. Esta gestación supone un ritual de dolor —suerte de abandono y muerte de la palabra sin cuerpo— y una peregrinación o *regressus* al origen del lenguaje, a su "resurrección" como lenguaje iluminado que ha muerto para ser todas las cosas.

Paradiso comparte con la escritura de vanguardia un mismo proyecto utópico: invocar en su textualidad ese principio enigmático que constituye el momento de crisis en el proceso creativo entre la imagen y su encarnación. El placer del texto desde esta permanencia ritual en la extensión, en la imagen en devenir que el mito garantiza, se revela como un gozo borgiano "como esta inminencia de una revelación que no se produce" (p. 13). Es el momento culminante de *Paradiso* como novela de formación de la *imago*.

La superficie espejeante del lenguaje se multiplica en la vanguardia: textos de agua, de inapresable mediación, de perpetua virtualidad. Pretenden deconstruir el lenguaje narrativo con procedimientos que provoquen el rito de pasaje, el paso de un sistema significante a otro. La insistencia en

[26] Lezama reunifica la discrepancia vanguardista, en declaración a Salvador Bueno: "Acepto la expresión vida real si no se le amputa la vida irreal, ambas forman una imagen, que marcha entrelazada como puntos imanes que se precipitan hacia el centro de su unidad" (p. 726).

estas formas de mediación transpositiva demanda un lector coproductor del texto que viene siendo una constante de las textualidades narcisistas que hemos examinado. El lector, como un *voyeur* más del ritual narcisista, ha de imitar el gesto autorreflexivo de la escritura que contempla. Esta nueva articulación de posiciones enunciativas y denotativas produce un lector avezado en el desplazamiento textual, en la permutación del sentido de lo visible. La experiencia literaria no está dispuesta a contenerse en su marco y quiere afectar los dominios de la visión del mundo, volverlo impredecible, originariamente nuevo por el poder de la mirada, expresión de la máxima desrealización.

Ariel

El saber lezamiano es un resucitar de la caída material más profunda y dolorosa en la palabra. El viaje iniciático del protagonista de *Paradiso* es un puro rito órfico que convoca en lo más oscuro del lenguaje la iluminación material de la imagen; luz que Lezama sentía como "el primer animal visible de lo invisible". El viaje del saber opera como metáfora del conocimiento indirecto, de la indagación en la palabra como fin en sí mismo. El yo lírico regresa de su incursión en el abismo del lenguaje con el desengaño de cualquier interpretación literal de la escritura, pero, al tiempo, investido del privilegio de suscribir su traducción y su búsqueda como señas biográficas. El eterno insatisfecho con la mirada directa de la literalidad, signa autobiográficamente el saber que se adquiere por el exilio, por el extrañamiento, la enajenación, el relativismo, la apertura de la forma, el ya no poder pertenecer a nada salvo a la distancia. Narciso es el primer enamorado del espejo que le separa de sí mismo. Espejo que nunca le devuelve la realidad sino la sublimación de lo real en el arte.

Esta aventura de la percepción, constantemente repetida en la poesía y prosa lezamianas, halla una versión única en el drama lingüístico del poemario de Vicente Huidobro *Altazor* (1919-31). El himno de Huidobro a la palabra subtitulado "El viaje en paracaídas" se ofrece como un nuevo *collage* del ángel caído, de la precipitación de lo humano en la pérdida del lenguaje, desde una fuerte y evidente influencia del nihilismo nietzschiano y su crítica del absurdo de una contemporaneidad confundida en la incomunicación.

Recordemos brevemente la trayectoria de los siete cantos del poema. El Canto I aborda el terror del ser desde la interferencia de los mitos bíblicos. Se ha perdido la causalidad y la teleología. La voz en segunda

persona da paso a la tercera. *Altazor* toma la voz en una suerte de digresión del yo poético, que supone un distanciamiento dramático, casi brechtiano. Las imágenes inusitadas se suceden en un vértigo de anáforas y reversiones del signo que invitan apremiantemente a caer al fondo de sí mismo, desde todos los espacios y todas las edades. La vicisitud histórica se abre paso en los dos primeros cantos hasta que se introduce en primera persona la celebración de la fraternidad (espejismo de la revolución rusa). En el Canto III destacará el enjuiciamiento sobre el principio estructural de la metáfora que supondrá una crítica hacia el modernismo y el ultraísmo. La lengua del poema se enrosca en el neologismo. Se está preparando la idea de antipoesía a la par del sentimiento trágico del existir para la muerte. El delirio lingüístico anticipa el epitafio, del Canto IV al VII, a este vuelo fracasado de la palabra a lo absoluto.

La experiencia narrada en *Altazor* nos interesa como versión latinoamericana de los mitos barrocos del ave Fénix, capaz de resurgir de sus cenizas, la consunción de Faetón y el vuelo para la muerte, la caída del ser del lenguaje de Ícaro. *Altazor* puede ser leído en un sentido profundamente lezamiano como el poema de la desintegración del cuerpo del lenguaje. La construcción del ave del lenguaje empieza a gestarse como eufórica anarquía del vuelo sin límites de código. Verso a verso este cuerpo se va una vez más haciendo en su ansia significante como cuerpo del dolor donde el dolor —intencionalidad como estado— impulsa a la imaginación —intencionalidad como deseo de forma, fuga del vacío del espejo. Como vimos en el caso de Lezama, el dolor es al tiempo el drama de la resistencia al lenguaje que quiere ganarlo para el silencio. Se trata entonces de un regreso al estado prelingüístico, al balbuceo, a la no-palabra, a la diseminación del verso, de la sintaxis del cuerpo escritural del poema. Este poema del dolor del lenguaje, del signo que pospone indefinidamente su objeto, objeto perdido, poética del desencanto, debe mucho al discurso místico. Pero el vacío del cuerpo es promesa de amanecer para el místico, exégesis de la luz que para Lezama delataba al gongorismo (1981, p. 271).

Cuerpo de la luz, oportunidad de la imagen y la materia que en *Altazor,* sin embargo, se quiebra por resistencia a la fisonomía de lo visible. Pero la propuesta vanguardista de *Altazor* no supone, con todo, el triunfo de la ceguera y la opacidad mimético-realista, sino el sentido de la aniquilación, de la desarticulación para resurgir en la verdadera *navité* de Apollinaire. Es de nuevo la metáfora de la autogénesis del artista de vanguardia, del arte puro del lenguaje que ya es pleno y puro significante depurado de lo real y que sólo volverá al mundo como proyecto simbólico. *Altazor* es la fábula del desgarramiento trágico de la imagen hacia su descentramiento

perenne, hacia el triunfo de la visión refleja y oblicua. Las imágenes flotan en el reino de lo puro imaginario, en el universo semántico que la vanguardia quiere posible. Imágenes que sólo tienen como referentes a su vez a otras imágenes. El final de *Altazor* es el verdadero inicio, el origen, el principio sin principio de la identidad latinoamericana; el apocalipsis y la ficción concordante; el final lleno, cargado de resonancias de la noción de final, que dan un sentido redondo de desencuentro perpetuo, de construcción retrospectiva, a la esencia.

Como ha señalado Bernardo Subercaseaux (p. 42), el primer gesto moderno de *Altazor* es recuperar la hazaña imaginaria de "volar". Una construcción retórica que se desmorona para no transgredir con el principio de la realidad. Decisión de la materia de des-materializarse para testimoniar cómo nos percibimos en la aceleración del tiempo histórico. Si la modernidad cambia nuestra imagen del tiempo (Paz, 1986, pp. 23-27), el poema de Huidobro visiona el ocaso de la vanguardia, la alteración radical de la contemporaneidad que arrastra el sentimiento y la noción de espacio. Se completa el proceso de desmaterialización iniciado en el romanticismo (contenida su herencia barroca) y disuelto hasta la impotencia del fin del milenio. El espacio y el tiempo del que se nos otorga potestad tecnológica, nos desposee del límite y nos recuerda las hipérboles permanentes del marco, nos desestructura y reinstala en el momento mismo de la crisis, en el ápice del cambio. El arte nuevo nos invita en sus últimas entregas a procesar la transferencia, a habitar el vacío de la construcción. La pasión crítica y la negación del todo son la afirmación del no-lugar, de la conciencia insistentemente crítica de la imagen.

Con Huidobro y Lezama, el peruano César Vallejo representa una intensidad mayor en la polémica política entre materia y memoria de la vanguardia. El compromiso entre inmanencia y trascendencia se resuelve en Vallejo hacia la comunicación social. La renovación del arte, la transmutación metafórica, siempre promete un regreso a la praxis vital, una incidencia fundamental en lo real, que supera el escapismo idealista. Junto a libros de compromiso político expreso, como *Poemas Humanos* o *España, Aparta de Mí este Cáliz* (1923-37), encontramos un poemario extraordinariamente hermético para la experiencia vallejiana y de una tensión retórica de plena vigencia vanguardista, como es, *Trilce* (1921).

En toda la ideología que sustenta la obra y pensamiento de Vallejo trasluce el comunitarismo de Mariátegui (1928). *Trilce* puede ser leído desde esta referencia como el poemario de la revolución lingüística para la revolución social. Vallejo propone abrir "la cárcel del sentido" del len-

guaje[27] y trascender esa puerta de libertad y de luz de su naturaleza proteica.

El poema XIII de *Trilce*, que comienza con el deseante "Pienso en tu sexo...", es un homenaje a la palabra como logos-espermático, lengua seminal, la ante-palabra abruptamente articulada en el balbuceo final del poema. Es la palabra preñada de significación, que desinstrumentaliza el lenguaje para volverlo manifestación, pura inminencia anterior a lo significado. Palabra contenida en el placer del texto que reivindicábamos para Lezama y en el suicidio material o la encarnación momentánea de la negación crítica de *Altazor*. Lenguaje que es "trabajo", producción textual y es rito de pasaje, de la percepción y la mirada. Lenguaje profundamente sexual —como lo será el lezamiano—, logos fecundado por el lenguaje mismo.

En los dramas poéticos de Huidobro y Vallejo, contenidos en la fe poética de *Paradiso*, el cuerpo descubre por el uso improbable del signo (el descubierto en su trabajo material, en el aplastamiento de lo pragmático y lo ideológico) otra oportunidad de la experiencia, que dé lugar a una representación. El cuerpo intenta hablar en esa proporción indecisa y no-analizable que lo une a la materia. La fabulación del cuerpo es relacionalmente homóloga al proceso cultural e interferido del conocimiento.

Conclusión

Pero nada más fascinante que el poema mudo,
formado de figuras que se vuelven sobre sí mismas
y se queman como la cera.
(José Lezama Lima, *Oppiano Licario, IX.)*

La *era Lezama* expandió los códigos de la representación literaria hasta su máxima plenitud. La experiencia lezamiana constituyó en sí misma un mito. La nueva advocación de Narciso, surgida de ese espejo inagotable que fue la poética lezamiana, centró el debate literario de los años sesenta y setenta en la búsqueda de una nueva convención representativa, de una máquina de interpretación totalizante, capaz de postular una *realidad paralela* a través del mito (la cara oscura de los grandes relatos nacionales). Fue la propuesta del llamado *boom* de la literatura latinoamericana de los años

[27] Juego evidentemente con un paralelismo de sentido pues, como se recordará, la obra fue escrita en el encarcelamiento del poeta como importante trasunto autobiográfico; cfr. Américo Ferrari (ed.) (1989).

setenta que pretendió existir en el espacio mítico-literario al interior de la historia.

La práctica artística que inaugura el siglo y venimos en denominar movimiento de vanguardia, aspiraba a un signo como modelo relacional sin homología al modelo de relaciones perceptivas que construimos en su conocimiento. La utopía vanguardista perseguía un auténtico grado cero de la escritura (Krauss, p. 157). El mito de la *originaire naiveté* contenía el ideal revolucionario de la regeneración política absoluta: purificar el imaginario volviendo a inventar el lenguaje. Al interponer una mediación recodificadora en el proceso perceptivo, la vanguardia histórica buscaba la invención del signo y la recalificación del objeto, idealmente sustituido por su invención. Dicha oposición intencional marca la impronta del arte informal contemporáneo imbuido, según Eco, de un idiolecto que vincula todos los niveles (físico-técnicos y semánticos) que estructuran la forma "y es el código microfísico localizable en la intimidad de la materia" que preside la ley de sus representaciones (p. 77). La necesidad de enunciación poética de los mensajes informales modificó nuestra manera de ver la materia. Esta mirada que comunica de modo diferente, progresivamente adoptada por las artes, se convierte en la más intensa impronta de desarrollo del arte del fin de siglo, mientras que parte de las tendencias postinformales empiezan a congraciarse con la reconstrucción de la estructura artística sobre códigos precisos y convencionalizados. La superioridad tecnológica invertida en estas últimas hace triunfar globalmente el ensamblaje de la postmodernidad.

En la neovanguardia, continúa el interés por una lengua instaurada por la obra, como una gramática diferencial. Mas, ahora, hay un reconocimiento parcial de la convencionalidad que pone en peligro lo real, en base a una comunicación de códigos fuertes. El signo tiene propiedades comunes con el modelo perceptivo del objeto en su memoria material. Construye un modelo relacional investido, desviado y desplazado sobre el modelo de relaciones perceptivas de nuestra construcción de saber. El signo es mecánica de la percepción hasta el límite de la identificación. Sólo interesa desplazar al objeto real para instaurar su mecanismo perceptivo, amenazando una visión blindada de elementos discretos de la materia. Se responde a la necesidad epistemológica de enriquecer las relaciones contextuales sin variantes facultativas. Es el otro espacio del gran aparato de la representación lo que interesa primordialmente a la vocación artística, la investigación en el lenguaje del continuo icónico, inasible, con crisis de preexistencia, fidelidad al pensamiento débil y gran capacidad para el reciclaje o fábrica sobre el residuo. Los relatos carentes de la vanguardia histórica habían

iniciado esa escritura del cuerpo que opera su propio espacio cruel, no ordenado, producido desde el interior y la ausencia, que tuvo en *Paradiso* un arte poética dilatada.

En la vida de las imágenes de las vanguardias, el arte, en la averiguación constante de sus recursos de representación, ofrece una importante colaboración cultural, ante la dificultad de la historia para ser pensada en el problema de su figurabilidad. La imposibilidad de pensar la historia se reúne con la imposibilidad de articular una sobredeterminación del significante con el título de una economía de la imagen. Como Schefer ha señalado: "bajo la imagen siempre se encuentra un motivo de la fábula del origen —del hombre, del signo, del lenguaje— que se anima al ocupar el lugar de su economía significante" (p. 275).

La aportación de Torres Bodet al imaginario lezamiano con la figura joyceana del *pasencore*, el pasajero, ser incompleto que surge de las aguas de un mar perfectamente barroco para incorporar el mundo, asimilar y transmutar el mundo exterior, mediante la metamorfosis del cuerpo en un océano de imágenes, parece basado en el concepto barroco del cuerpo como forma metafórica al que Lezama alude en su ensayo "La curiosidad barroca" (p. 58). El ritual del agua y las formas que inspira el cuento de Bodet sobre la transmutación, la voracidad cognoscente de la imagen y la gratitud del cuerpo a lo real encuentran un desarrollo extremo en sus consecuencias en *Paradiso*, acto poético de confrontación que incita a introducir de otro modo lo real en la imagen, la materia en la memoria. El ludismo dramático de Huidobro y la ontología lingüística de Vallejo constituyen otros tantos capítulos de la misma escena de escritura o teatro del lenguaje bartheano; el espacio de lo indecible o lo no-dicho, probablemente de lo que aún tiene que ser pronunciado y necesita el mito como expresión: la esencialidad cultural de lo latinoamericano que ha de residir en su *forma*. Ésta es la gran empresa mitopoética lezamiana sin la que no serían posibles las búsquedas de (auto)representación en los años sesenta y setenta, que han pasado a la historia literaria como la edad de oro de las letras hispanoamericanas. Convertir la imagen en un momento de productividad significante, será también el aviso retórico recogido por la dificultad cultural del fin de siglo, con gran productividad artística en la cultura postdictatorial latinoamericana, en la deriva de la configuración, en la dificultad de la figuración material que pueda constituir a un tiempo una representación económica y una historia. El legado ético y estético de los mitos poéticos de la vanguardia histórica, ofrece entonces su postulación del compromiso semántico del cuerpo como noción pertinente de la imagen, lenguaje-cuerpo, fábula o narración que no puede determinarse en otra parte. Cuerpo-fábula que indaga la imagen como aporicidad operante o resto demostrativo del descifra-

miento. La *era Lezama* es, hasta sus últimas actuaciones, una forma de pensamiento literario que opone resistencia a la grave operación política que envuelve la última contemporaneidad, oponiendo al pasivo que caracteriza a la imagen globalizada el reto de la investigación simbólica sin tregua, del ritual de investidura de la imagen como nacimiento legítimo del cuerpo en relación a una lengua. El cuerpo que no puede reproducirse sin huella, pues une historia y articulación que significan.

BIBLIOGRAFÍA

Arlt, Roberto. *Los Siete Locos. Obras Completas.* 3 volúmenes. Buenos Aires: Biblioteca del Sur, 1981-1991. Vol. I.

Ainsa, Fernando. "Imagen y Posibilidad de la Utopía en *Paradiso*". *Coloquio Internacional sobre la Obra de José Lezama Lima. Prosa*. Centro de Investigaciones Latinoamericanas Universidad de Poitiers. Madrid: Editorial Fundamentos.

Alonso, Carlos. *The Spanish American Regional Novel.* Cambridge University Press, 1990.

Bal, Mieke. "De-Disciplining the Eye". *Critical Inquiry* 16:3 (primavera 1990).

Benjamin. *Poesía y Capitalismo. Iluminaciones II*. Madrid: Taurus (1972), 1991.

Bergson, Henri. *Matière et M´Moire*. París: Presses Universitaires de France, (1939) 1997.

Borges, Jorge Luis. "La Muralla y los Libros". *Otras Inquisiciones. Obras completas* Vol. 2. Buenos Aires: Emecé Editores, 1989.

Brion, Marcel. *L'Art Fantastique*. París: Albin Michel, 1961.

Bueno, Salvador. "Entrevista: Un Cuestionario para José Lezama Lima". En Cintio Vitier (ed.), *Paradiso.* Unesco, Colección Archivos, 1988.

Bürger, Peter. *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península, 1987.

Calinescu, Matei. "The Idea of Avant-Garde". *Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitch, Postmodernism.* Durham: Duke UP, 1987.

Coward, Rosalid; Ellis, John. *Language and Materialism*. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1977.

Cuesta, Jorge. "*Reflejos,* de Xavier Villaurrutia". *Ulises.* Ed. facsímil. México: FCE, 1980.

Durand, Gilbert. *Las Estructuras Antropológicas de lo Imaginario*. Madrid: Taurus, 1981.

Durand, Gilbert. *De la Mitocrítica al Mitoanálisis: Figuras Míticas y Aspectos de la Obra*. Barcelona: Anthropos, 1993.

Eco, Umberto. "Semiología de los Lenguajes Visuales". *Análisis de las Imágenes.* Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982.

Eliade, Mircea. *Imágenes y Símbolos.* Madrid: Taurus (1955), 1992.

Eltit, Damiela. *Lumpérica*. Santiago: Ediciones el Ornitorrinco, Colección Nueva Narrativa, 1983.

González Alcantud, José A. *El Exotismo en las Vanguardias Artístico-Literarias*. Barcelona: Anthropos, 1989.

González Echevarría, Roberto. "Apetitos de Góngora y Lezama". *Revista Iberoamericana,* 51 (1975), pp. 479-90.

González Echevarría, Roberto. *La Ruta de Severo Sarduy*. Hanover: Ediciones del Norte, 1987.

Huidobro, Vicente. *Altazor, de Puño y Letra.* Edición, prólogo y notas de Andrés Morales. Santiago: Banco del Estado de Chile, 1999.

Jitrik, Noé. "*Paradiso* entre Desborde y Ruptura". *Texto Crítico*, 13: 71-89.

Kandinsky, *Punto y Línea sobre el Plano. Contribución al Análisis de los Elementos Pictóricos* (1952). Barcelona: Labor, 1993.

Krauss, Rosalind. "The Originality of Avant-Garde". *The Originality of Avant-Garde and Other Modernist Myths*. Cambridge: The MIT Press, 1985, pp. 151-170.

Lévi-Strauss, Claude. *Antropología Estructural*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1987.

Lezama Lima, José. *Paradiso.* Cintio Vitier (ed.). Colección Archivos, UNESCO,1988.

Lezama Lima, José. *Esferaimagen. Sierpe de Don Luis de Góngora. Las Imágenes Posibles.* Ed. y prólogo de José A. Goytisolo. Barcelona: Tusquets (1970), 1979.

Lezama Lima, José. *Imagen y Posibilidad*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1981.

Lezama Lima, José. *Las Eras Imaginarias*. Madrid: Editorial Fundamentos (1971), 1982.

Mariátegui, José Carlos. *Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana.* Lima: Biblioteca Amauta (1928), 1971.

Ortega y Gasset, José. "La Deshumanización del Arte". *La Deshumanización del Arte*. Madrid: Espasa-Calpe, 1987.

Osorio T., Nelson. *Manifiestos, Proclamas y Polémicas de la Vanguardia Literaria hispanoamericana.* Caracas: Ayacucho, 1988.

Paz, Octavio. "Literatura de Fundación". *Puertas al Campo.* Barcelona: Seix Barral (1966), 1972.

Paz, Octavio. "El Ocaso de la Vanguardia". *Los hijos del Limo*. Barcelona: Seix Barral, 1990.

Pérez Firmat, Gustavo. *Idle Fictions*. Durham: Duke University Press, 1982.

Ramos, Julio. *Desencuentros de la Modernidad en América Latina.* México: FCE, 1989.

Renaud, Maryse. "Aproximación a *Paradiso:* Viaje Iniciático y Epifanía del Sentido". *Coloquio Internacional sobre la obra de José Lezama Lima. Prosa.* Centro de Investigaciones Latinoamericanas Universidad de Poitiers. Madrid: Editorial Fundamentos, pp. 63-72.

Ríos Ávila, Rubén. "The Origin and the Island: Lezama and Mallarmé". *Latin American Literary Review*, 16: Vol. VIII (primavera-verano 1980).

Santí, Enrico Mario. "Parridiso". *Hispamérica*, 25-26 (abril-agosto 1980).

Sarduy, Severo. *Escrito sobre un Cuerpo.* Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969.

Scarry, Elaine. *The Body in Pain*. Oxford University Press, 1985.

Schefer, Jean-Louis. "La Imagen: El Sentido Investido". *Análisis de las Imágenes.* Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982.

Schwartz, Jorge. *Las Vanguardias Latinoamericanas. Textos Programáticos y Críticos.* Madrid: Cátedra, 1991.

Subercaseaux, Bernardo. *Genealogía de la Vanguardia en Chile.* Santiago: Ediciones Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 1999.

Sucre, Guillermo. "Lezama Lima: El Logos de la Imaginación". *ECO* (mayo 1975), pp. 9-38.

Torres Bodet, Jaime. "Nacimiento de Venus". *Narrativa Completa*. México: Editorial Offset, 1985, Vol. II.

Unruh, Vicky. *Latin American Vanguards: The Art of Contentious Encounters.* Berkeley: University of California Press, 1994.

Vallejo, César. *Obra Poética.* Américo Ferrari (ed.). Colección Archivos de la UNESCO, 1989.

Verani, Hugo. *Las Vanguardias Literarias en Hispanoamérica (Manifiestos, proclamas, y otros escritos).* Roma: Bulzoni, 1986.

Xirau, Ramón. "Lezama Lima o de la Fe Poética". *Poesía y Conocimiento*. México: Joaquín Mortiz, 1978. □

Francisco José Folch: *Sobre Símbolos*
(Santiago: Editorial Universitaria, 2000).

SOBRE SÍMBOLOS, DE FRANCISCO J. FOLCH

Joaquín Barceló

Es providencial que Francisco José Folch tenga amigos desaprensivos, porque, según él mismo nos informa, éstos hicieron el papel de Serpiente Tentadora para inducirlo a publicar *Sobre Símbolos* (Edit. Universitaria, Santiago de Chile, 2000). Si no hubiera sido por esos amigos, habríamos carecido de un hermoso y muy necesario libro que explora un tema fundamental y que pone al alcance del lector una copiosa información, sin recargar innecesariamente el texto con notas eruditas y conservando permanentemente la claridad y —también muy importante— la amenidad de la exposición.

¿Qué es un símbolo? Es una imagen sensible de una realidad no sensible que, por tanto, se hace escurridiza, se nos escapa y resulta difícil de aprehender por los medios ordinarios de la inteligencia, que son los conceptos. Folch enfatiza la plurivocidad de los símbolos, es decir, la multiplicidad de sus significados, que les confiere un cierto carácter vago e impreciso. A ello se debe que el mundo de los símbolos sea siempre misterioso para quienes no han sido iniciados en la significación de las diversas imágenes que lo componen.

JOAQUÍN BARCELÓ. Profesor extraordinario de Filosofía, Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Andrés Bello y profesor *ad honorem* de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

¿Pero por qué son importantes los símbolos? Porque los seres humanos somos de tal naturaleza que necesitamos expresarnos, comunicar nuestras experiencias internas. Para hacerlo, utilizamos principalmente palabras. Las palabras son sonidos o combinaciones de sonidos que significan cosas. Pero —y esto lo observaron los teólogos ya desde la Antigüedad— hay cosas que significan a su vez otras cosas. Veamos un ejemplo simple. La palabra "cruz" significa una intersección de trazos o de objetos oblongos; pero la cosa cruz significa, en el mundo cristiano, la enseña de alguna institución, empresa o iniciativa religiosa, o bien el sacrificio purificador de los fieles penitentes y aun el sacrificio redentor de Cristo; y en el mundo pagano celta, por elegir al azar un mundo no cristiano, la cosa cruz denotaba a los cuatro elementos (fuego, aire, agua y tierra) con sus respectivas cualidades (caliente, frío, húmedo y seco).

En el mundo humano no es fácil encontrar cosas, si es que las hay, que no signifiquen también otras cosas. El sol no es únicamente un astro en el firmamento; significa además luz, calor y vida, y cada uno de estos significados adquiere a su vez otros significados según se apliquen al mundo físico o al mundo del pensamiento o al mundo de los sentimientos y pasiones, y así sucesivamente. La lluvia no es sólo agua que cae desde arriba, sino que es también expresión de toda caída múltiple y continuada, para no mencionar al elemento nutritivo de los vegetales y a la reserva hídrica para la alimentación de los animales y para la realización de proyectos técnicos humanos. La música no es mera sucesión y yuxtaposición de sonidos, sino a la vez manifestación de belleza y suscitación de variadas pasiones. El mundo humano se muestra así extraordinariamente enriquecido. Acaso ninguna cosa es para el hombre tan sólo ella misma, sino que cada una lleva consigo toda una carga de señales, indicaciones, sugerencias y motivaciones adheridas a ella como apéndices invisibles.

Es grande la diferencia entre las cosas mismas y las otras cosas que ellas significan. Por eso los hombres se han esforzado desde antiguo por distinguir entre las cosas tal como se muestran y lo que ellas realmente son. Fueron los griegos quienes, al considerar una cosa, se plantearon por vez primera la pregunta: ¿*qué es* en realidad esto? Formularon así el "problema del ser" y, al hacerlo, fundaron la filosofía, de la que siglos más tarde habían de nacer y derivarse las distintas ciencias. El "problema del ser" suele ser aterrorizante para quienes recién se inician en los estudios filosóficos, porque parece apuntar hacia algo misterioso, inasible y extraordinariamente abstracto. (Ésa fue, al menos, mi experiencia personal mientras fui estudiante.) Pero la verdad es que no tiene nada de esotérico. En rigor, y con el perdón de los filósofos metafísicos, la pregunta "¿*qué es* esta cosa?"

se identifica con la pregunta "*¿qué significa* esta cosa (ojo: la cosa, no la palabra que la designa) para el hombre?"

Claro está que, aun así, la respuesta a la pregunta no es fácil. Pregunto, por ejemplo, qué significa una determinada enfermedad para el hombre. ¿Pero para cuál hombre? ¿Para el hechicero de la tribu, que ve en ella la acción de espíritus malignos? ¿O para el teólogo que la entiende como expresión de la voluntad de Dios? ¿O para el filósofo racionalista que la interpreta como una muestra de la perfección de la naturaleza en el mejor de los mundos posibles? ¿O para el médico cuyo diagnóstico desencubre la acción de ciertos agentes patógenos físicos? ¿O para el enfermo que la padece en su cuerpo y en su espíritu? ¿O para quienes cuidan al enfermo, que la sufren en su espíritu, ya que no en su cuerpo? ¿O para "el hombre en general", si es que este extraño viviente existe en algún rincón de nuestro planeta?

Todo tiende a sugerir que los significados posibles de las cosas son tan múltiples como variados. Algunos hay, sin embargo, que se asientan, por así decirlo, y perduran desafiando la injuria del tiempo y las distancias geográficas, sociales o culturales. Las cosas portadoras de esos significados se consagran entonces como símbolos. Con toda razón dice Folch que "los símbolos se entretejen permanente y decisivamente en nuestra vida cotidiana, en nuestro pensar, hablar y hacer". Ello es así precisamente porque sin símbolos nuestra comunicación sería incompleta, trunca, deficiente, y nunca lograría satisfacer plenamente su propósito.

¿Cómo nacen los símbolos? ¿Por qué algunas cosas reciben el privilegio de que los significados que adquirieron en una comunidad determinada y en cierto momento histórico particular se conserven adheridos a ellas y se incorporen, como componentes estables, a una tradición cultural?

Por cierto, no tengo una respuesta para esta enorme pregunta; pero me gustaría hacer una sugerencia de la que acaso podrían derivar algunas conjeturas susceptibles de encaminar hacia una posible solución del problema.

Al parecer, los símbolos se vinculan siempre con alguna historia real o ficticia, pero historia al fin. En la antigua lengua griega tales historias se llamaban *mythoi*. Solemos traducir este término con el nombre "mito", y creemos que el origen común y la semejanza fonética de las palabras griega y castellana son garantía suficiente de que ambas significan lo mismo. Mas no es así. El sustantivo castellano "mito" connota a una historia falsa, pero la idea de falsedad es completamente ajena a la noción griega de *mythos.*

Los griegos tuvieron dos términos fundamentales para designar a la palabra y al lenguaje: *mythos* y *logos.* En el vocablo *mythos* resuena principalmente el significado de "cuento", "relato", mientras que *logos* refiere

más bien a un discurso racional lógicamente consistente que pone en manifiesto una realidad condicionada por un complejo entramado de relaciones. El *logos* razona sobre la base de datos y premisas; el *mythos* no razona sino que simplemente muestra. Es por eso que el lenguaje mítico es idóneo para hablar de lo divino, de lo que no se somete a las leyes de nuestra racionalidad; no así el lenguaje lógico, que es adecuado para expresar los hallazgos de la ciencia pero no logra hacer inteligible lo perteneciente al ámbito de lo religioso. El *mythos* muestra pero no demuestra; por eso no tiene ningún sentido aplicarle las categorías de verdadero y falso. No hay mitos verdaderos, pero tampoco los hay falsos; ellos sólo expresan la inmediatez de lo absoluto en su manifestación.

Los mitos perduran en el tiempo; los padres los relatan a sus hijos y los abuelos a sus nietos. Son cuentos, pero cuentos en que se percibe inmediatamente un significado importante. Por eso es que se conservan en lo posible intactos y sin modificaciones. Es cierto que todo cuento tiene un significado; pero cuando en el cuento intervienen los dioses, su significado trasciende por mucho el mensaje de que, por ejemplo, las niñitas que van a visitar a su abuela no deben detenerse a conversar con los lobos en el bosque, ni menos darles información acerca de a dónde se dirigen. Los mitos son cuentos que no se limitan a dar consejos de sentido común, sino que iluminan más bien la condición de los seres humanos en la Tierra, haciéndola visible en sus grandezas y sus miserias. A través de antiguos mitos griegos sabemos, por ejemplo, de las angustias y sufrimientos que debemos padecer los hombres por haber robado a los dioses aquellos dones que nos permiten dominar a la naturaleza y asegurar nuestra sobrevivencia amenazada por el medio; o aprendemos que no siempre le es posible al ser humano evitar ser desgarrado por sus propias pasiones o salir victorioso en su lucha contra la adversidad; o advertimos la insensatez de la conducta que intenta vencer a los enemigos sin la ayuda de los dioses porque desconoce las limitaciones de la naturaleza humana y su pequeñez frente al orden universal.

En cada mito hay una figura, divina o humana, o un acontecimiento que representa en él un papel central. Recordar esa figura o ese acontecimiento equivale, por simple asociación de ideas, a recordar la historia mítica que se le vincula. De este modo, la figura o el acontecimiento en cuestión adquiere el significado que poseía originariamente el mito. Con ello tenemos ya configurado el símbolo. Prometeo encadenado en la montaña y desgarrado por el ave de rapiña simbolizará así a las conquistas técnicas del hombre, que comenzaron con el hallazgo del arte de encender el fuego, y su trágico destino; cualquier héroe trágico antiguo puede servir de

símbolo del fracaso humano en la lucha contra el hado y cualquier héroe trágico shakespeariano puede serlo del fracaso en la lucha contra las propias pasiones; Áyax es símbolo de la soberbia insensata que olvida la finitud del hombre. Y así sucesivamente.

De esta manera, los símbolos y los mitos que les dan origen "explican" la realidad; no en el sentido racional que posee la explicación científica, que consiste en retrotraer los fenómenos a otros fenómenos considerados como sus causas, sino en el sentido etimológico de la *explicatio* como despliegue, desenvolvimiento que permite ver lo que los pliegues de las apariencias ocultan.

Por tales razones, Francisco José Folch tiene que recurrir a historias míticas y legendarias para hacer ostensible el significado de los símbolos que estudia. Allí concurren, pues, las fuentes que han forjado nuestro modo de pensar y de comprender el mundo: la tradición judeocristiana, la tradición grecorromana y la tradición occidental que absorbe a ambas y las continúa, no sin algún aderezo de origen oriental. Aquí topamos con un hecho muy interesante; los símbolos poseen, en medida muchísimo mayor que las palabras, la propiedad de dejarse trasladar fácilmente de un ámbito cultural a otro y aun la de enriquecerse eventualmente al ser trasladados.

Un ejemplo notable de este hecho lo constituye un símbolo que hoy talvez ya no forma parte del repertorio que nos es familiar, pero que pasó intacto del paganismo romano antiguo al cristianismo. Se trata de la condición bípeda y la posición erecta del hombre. De todos los animales, el hombre es el único que posee ojos dirigidos hacia el cielo y no hacia la tierra. Los paganos se apercibieron de ello y lo asociaron con el hecho de que el hombre es también el único animal que honra a los dioses. Por consiguiente, la posición erguida del hombre fue naturalmente el símbolo de la vocación religiosa y del sentido de trascendencia de los seres humanos. El poeta Ovidio, al relatar en sus *Metamorfosis* la creación del mundo por los dioses, afirma que

> *pronaque cum spectent animalia cetera terram,*
> *os homini sublime dedit, caelumque videre*
> *iussit et erectos ad sidera tollere vultus,*[1]

es decir: "Mientras los restantes animales miran inclinados hacia el suelo, [el dios] le dio al hombre un rostro elevado y le ordenó contemplar el

[1]Si se cita este pasaje en latín, no es por afán de erudición sino simplemente para preservar el lenguaje poético original, ya que, según otro poeta, Dante, "ninguna cosa armonizada con ligamentos poéticos puede ser trasladada de una lengua a otra sin que se pierda toda su dulzura y armonía".

firmamento y levantar la cabeza erguida hacia los astros". Este animal, el hombre, más sagrado (*sanctius*) que las restantes creaturas y más capaz de altos pensamientos (*mentisque capacius altae*), fue hecho según Ovidio a semejanza de los dioses que todo lo gobiernan (*finxit in effigiem moderantium cuncta deorum*). Por eso, su vista dirigida hacia lo alto percibe a las divinidades astrales que pueblan el cielo. Por eso también San Agustín no tuvo inconveniente alguno en recoger la idea y hacerla cristiana cuando escribió en uno de sus sermones: "Dios hizo a las bestias con el rostro inclinado para que buscasen su alimento en la tierra; a ti te levantó de la tierra sobre tus dos pies. Quiso que tu rostro mirara hacia lo alto. Que no haya desacuerdo entre tu corazón y tu rostro. No tengas el rostro hacia arriba y el corazón hacia abajo". Es un símbolo poderoso éste de la posición erecta del animal humano, en que el hombre, único forjador de símbolos, se utiliza a sí mismo como símbolo de sí. En virtud de él, los antiguos, tanto paganos como cristianos, oraban de pie y con los brazos levantados; así podían efectivamente dialogar con Dios y comunicarse espiritualmente con él, algo imposible de hacer cuando se cae de rodillas ante la majestad divina en silenciosa y temerosa espera de la palabra condenatoria.

Si la posición erguida del cuerpo humano constituye un símbolo para la trascendencia y la vocación religiosa del hombre, es claro que los movimientos no utilitarios del cuerpo continúan dicho simbolismo y lo resaltan. Las ceremonias del culto se acompañan de movimientos corporales rituales y solemnes: la lenta marcha de las procesiones y cortejos o el ritmo acompasado de las danzas. Detengámonos por un momento en este último gesto simbólico. Toda danza posee un origen esencialmente cultual; para no mencionar las danzas rituales paganas, cuyo significado religioso es ampliamente reconocido, recordemos tan sólo que el rey David no vaciló en exponerse al ridículo social al danzar por puro sentimiento religioso delante de Yavé. Hoy la danza parece haberse degradado en nuestras fiestas sociales profanas hasta ser no más que una forma estilizada del cortejo erótico, si es que no un simple sustituto del ejercicio físico. Pero en su más íntima esencia, ¿no pertenece en su origen esta forma social desacralizada a los ritos cultuales de Ishtar, de Ashtarté, de Afrodita, de Venus o de Freya? El cortejo erótico fue en las formas más antiguas de religiosidad un rito importante vinculado con el culto a las divinidades que aseguran la fecundidad de los seres humanos, de los animales y de las plantas.

Permítaseme hacer una última consideración sugerida por este libro. "No es del todo gratuito afirmar", dice Folch en algún lugar de su obra, "que vivimos en un océano de símbolos. Nos sentimos eminentemente ra-

cionales, pero apenas podemos pensar o hablar sin servirnos de ellos, que son, por definición, algo más que pura razón".

Efectivamente, si para entender los símbolos tenemos que retroceder hasta el más remoto pasado humano y fijar la atención en mitos y leyendas antiquísimos, es claro que el ámbito en que los símbolos se nos hacen patentes está fuera de los dominios de la razón y es parte del mundo de la fantasía. Si, además, no logramos comunicarnos adecuadamente sin echar mano de símbolos, se impone la conclusión de que de alguna manera la fantasía desempeña una función más importante y decisiva que la razón en nuestra vida espiritual. ¿Es correcto este razonamiento, o es una simple falacia sugerida por el entusiasmo simbólico? Veamos el asunto un poco más de cerca.

Que el hombre es un animal racional, es una afirmación hecha por primera vez por los filósofos estoicos allá por el siglo III antes de Cristo. Ni en Platón ni en Aristóteles ni en ninguno de los pensadores griegos más antiguos podemos leer una afirmación tan audaz. Es interesante, empero, que nos hayamos creído el cuento de nuestra racionalidad a pesar de las múltiples evidencias en contrario que nos proporciona nuestra historia. ¿No es, en efecto, el hombre una de las raras especies, si acaso la única, que se atacan a sí mismas? ¿No es el hombre el único animal que utiliza sus recursos mentales para autodestruirse? Nunca he oído de otras especies que practiquen el aborto inducido, el asesinato, el genocidio, la persecución religiosa o ideológica, la guerra como empresa y modelo organizacional y administrativo, la explotación de los congéneres y otras actividades de índole semejante.

Ahora bien: semejantes acciones humanas son racionales en el sentido restringido de que el hombre utiliza su razón para alcanzar los fines y metas que persigue al actuar. Pero cabe preguntarse si la realización de esos actos no supone más bien la compulsión de oscuras y contradictorias pasiones abiertamente opuestas a los más elementales principios de la racionalidad. Así como el Hipólito de Eurípides se encuentra cogido entre el llamado de la diosa Artemisa y las acechanzas de Afrodita, quedando preso de un conflicto que acaba por desgarrarlo y darle la muerte, el ser humano parece sacudido y azacanado por los atractivos opuestos de la razón y de las pasiones. Y son por cierto estas últimas (las e-mociones) las que ponen en actividad a los hombres. Actuamos movidos por el hambre o por la sed, por el amor o por el odio, por la codicia o por la generosidad, pero no por filosofemas racionales. Aun más; hombres hay y ha habido dispuestos a dar la vida por su fe religiosa, que no es racionalmente fundamentable ni demostrable, o por sus seres queridos, en circunstancias de que el amor es

reconocidamente una pasión que nada tiene de racional; pero no puedo imaginar que alguien esté dispuesto a dar una sola gota de sangre por el quinto postulado de Euclides o por el célebre teorema de Gödel, a pesar de las discusiones a que ambos productos de la razón han dado lugar. Pregunto, entonces: en el fondo de nuestro ser, ¿somos racionales antes que pasionales, o más bien lo contrario?

Pero entendámonos. No niego que poseamos una facultad racional; ciertamente la tenemos y la usamos, mas sospecho que no es ella la que nos caracteriza en nuestra esencia. Los seres humanos disponemos de diferentes facultades que ponemos constantemente en operación para vivir nuestra vida propia: pasiones que nos mueven a actuar, imaginación que nos propone metas para nuestra acción, estimativa que nos permite evaluar la deseirabilidad de las metas imaginadas, razón que nos señala los pasos necesarios para alcanzar las metas propuestas por la imaginación y valoradas positivamente por la estimativa. Dentro de este tejido, ¿dónde deberíamos ubicar nuestra capacidad forjadora de símbolos? Probablemente ella es más afín a la imaginación que a las restantes mencionadas, si es que un análisis más detenido no llegara a mostrar que se trata de una facultad distinta e independiente de las otras.

La imaginación es una función fantástica, creadora de "fantasmas", esto es, de manifestaciones de lo no existente. Con la imaginación nos representamos lo que no hay, y por eso ella es la única facultad capaz de proponer metas para nuestra acción; porque como los fines que intentan alcanzar nuestras acciones son proyectados por nosotros en el futuro, y el futuro no existe todavía, sólo puede configurarlos la imaginación. De la imaginación, de la fantasía, nacen también los mitos que dan origen a los símbolos. Pero la fantasía mítica ha estado en lucha contra la razón lógica, por lo menos desde el "descubrimiento" de esta última, unos quinientos o seiscientos años antes de Cristo. Sin duda, el hombre pensó míticamente antes de pensar lógicamente; y como durante los últimos doscientos años nos hemos habituado a pensar usando la categoría del "progreso", tendemos a considerar al pensamiento lógico como un progreso frente al pensamiento mítico, una conquista que nos ha permitido superar la barbarie mental del mito y de la poesía. Tendemos a considerar, efectivamente, que el pensamiento racional es nuestra única posibilidad de un contacto válido con la realidad. No satisfechos con ello, sostenemos que no sólo nosotros, sino también la realidad, es racional. Esto no es ni siquiera hegelianismo, sino la simple comprobación de que nuestra razón se esfuerza por buscar y encontrar las razones de las cosas, es decir, lo racional del mundo. En rigor, procuramos descubrir en los fenómenos un orden y un vínculo causal para-

lelo al orden y al vínculo lógico de nuestros conceptos. Todo lo cual es legítimo y nada censurable. Lo que no es tan legítimo, a juicio nuestro, es pensar que ese procedimiento constituye el único camino transitable para adquirir un conocimiento de lo real. Considero que el libro de Folch representa un valioso documento para persuadirnos de que hay también otros modos de acceso a lo real que no son el lógico racional.

Espero que no queden dudas respecto de que mi opinión acerca del libro de Francisco José Folch es altamente positiva. Si su lectura es capaz de sugerir reflexiones adicionales, ésta es la mejor recomendación de la obra. "Original", decía un pensador que merece todo mi respeto, "no es el escrito que dice cosas nunca antes dichas, sino el que da origen a otros desarrollos y a nuevos escritos". En este sentido, tengo al libro de Folch por una obra original y definitivamente importante para consolidar y aumentar nuestro repertorio de símbolos y, con ello, acrecer nuestra riqueza espiritual, nuestra capacidad de advertir y cultivar matices y distinciones, fortaleciendo de paso nuestra expresividad y nuestra capacidad de comunicarnos. □

Chet Baker: *Como Si Tuviera Alas. Las Memorias Perdidas.*
(Barcelona: Mondadori, 1999).

HAY ALGO EXTRAÑO EN SU SITUACIÓN, MR. BAKER

Mario Valdovinos

Éste es el jazz,
el éxtasis
antes del derrumbe...
(Gonzalo Rojas)

Esa difícil costumbre de que esté muerto
(Julio Cortázar)

El año 1997, la viuda de Chet Baker, Carol Baker, entregó los manuscritos legados por su difunto esposo. Detrás de su publicación y de su traducción al español en 1999 por la editorial Mondadori, a cuya edición pertenecen todas las citas incluidas en este trabajo, hay un acicate publicitario, buscado o no, puesto que se subtitulan "Las memorias perdidas". Sin embargo, el texto confesional, que sólo se extiende hasta el año 1963, no logra transformarse en un testimonio que, a fin de cuentas, resulte más expresivo que la biografía propuesta por el trompetista al interior de su trayectoria musical. De hecho, Baker no era escritor y cuenta de modo más

MARIO VALDOVINOS. Escritor y profesor de Literatura y Cine en la Universidad Arcis y colegio The Grange.

bien plano etapas de su vida, opiniones sobre otros músicos, desplazamientos geográficos y espirituales, amores y desamores, incidentes con la policía, y compone, como puede, los retazos del sueño que lo animaba. En su descargo podemos señalar que sus escritos están animados por un curioso sentimiento de redención que se desliza de manera sigilosa por entre los episodios de una existencia que él intenta reconstruir impávido. Nos referimos a la pasión y especialmente a los dolores autoinfligidos que parecieran no haber dejado huellas, aunque bastaría leer las más sintéticas de sus notas biográficas para percatarse de que no pocos tramos de su vida, y de la de quienes por una u otra causa lo circundaban, fueron decididamente agónicos, aunque él no dé esa sensación en su texto. No está pidiendo disculpas a nadie, al modo de plantear entre líneas: "perdónenme por mi música los desbordes de mi vida". Claro que no.

Tal vez *Como Si Tuviera Alas*, el título de su memorial, sea la anticipación del salto que anhelaba dar, algunas décadas después de arder con la trompeta.

La biografía de Chesney Henry Baker comienza el 23 de diciembre de 1929 en Yale, Oklahoma. A partir de ese momento su vida oscilará entre los datos convencionales de un chico de la clase media americana y la existencia de un maldito cuyos días se precipitan, con o sin su entusiasta participación, en el despeñadero. Los efectos de la gran crisis económica del año 29 aún se hacían sentir cuando Chet tenía once años y a esa edad se traslada con la familia a casa de unos tíos residentes en Glendale, un pueblo cercano a Los Ángeles. Al poco tiempo, el padre, guitarrista y cantante, establece con su familia relaciones de cercanía y alejamiento porque es incapaz de sustentarla del todo. La vocación artística de Chet se inicia con el trombón pero pronto se decide por la trompeta. Así lo señala en sus memorias. La desapasionada pluma del músico señala: "Mi padre en principio quería que me dedicase al trombón porque era un gran admirador de Jack Teagarden, pero su decepción disminuyó poco a poco cuando vio mis progresos con la trompeta. Lo que pasaba era que también le gustaba Bix Beiderbecke" (p. 37). La madre paga las primeras lecciones. Como intérprete se forma de manera irregular, toca en la orquesta del *high school* y toma clases esporádicas de teoría, pero por sobre todo educa un oído y una intuición notables que lo llevan, cuando madura como instrumentista, a hacer arreglos orquestales. Ensaya como un maniático la trompeta y se inclina hacia el jazz, escuchando discos de Harry James y Bobby Hackett. En el fondo, la ambrosía que requiere un adolescente sensible. La madre no deja de entristecerse cuando piensa en el futuro.

Y el futuro le daría la razón

El desconcierto habitual después de la graduación en los estudios secundarios lo lleva a enrolarse en el ejército. Lo envían a Berlín en plena Guerra Fría. La ciudad es una ruina y está ocupada por los rusos. Va como mecanógrafo, pero de inmediato se incorpora a la banda que tiene como función recibir a las autoridades militares, a quienes muy poco importa si la banda desafina o no. En la ciudad enciende las horas nocturnas con el calor de su instrumento, engancha algunos amores, acumula luces y sombras, regresa en 1948 y toca en Jam Sessions alrededor de Los Ángeles. De allí arranca el intento por establecer un sonido particular, los críticos lo llamarían más tarde "West Coast". Toca con Charlie Parker —a la sazón por esos vericuetos— cuando tiene 23 años; a Bird le quedan cerca de mil días para emprender el vuelo final; interpretan Bebop, Parker saxo alto y Chet trompeta, en un diálogo inolvidable.

Es el verano del 52 cuando encuentra bajo su puerta un telegrama enviado por un amigo que anuncia la audición a la que convocaba Bird para escoger un trompetista. Chet llega con atraso y lo recuerda así en sus memorias: "Al entrar en la penumbra del local adiviné a Bird en el escenario, volando en pleno blues" (p. 64). Y más adelante: "Tocamos dos temas. El primero fue "The Song is You", y luego hicimos un blues escrito por el propio Bird en clave de sol, que se titulaba "Cheryl". Por suerte, yo lo conocía. Después de Cheryl anunció que la audición había terminado, dio las gracias a todos y dijo que me contrataba para la gira" (p. 65).

Se vuelve un bohemio que fusiona noches y jazz. Han pasado tres años desde su regreso a Estados Unidos, después que el ejército le da la baja por "inadecuado", cuando desembarca otra vez en el viejo continente y graba "Chet Baker in Paris". Ya por aquel tiempo la vida peligrosa le envía signos de fácil interpretación: muere por sobredosis de drogas su pianista, Dick Twardzik, pero él no detiene la carrera; se acerca al mundo del hampa en desesperados intentos por conseguir narcóticos. Andy Lambert, un bajista amigo, le abre una puerta que él desesperaba por traspasar. Chet recuerda ese instante decisivo: "Andy también fue el primero que me puso en contacto con la maría, bendito sea; me encantó, y seguí fumando maría durante los ocho años siguientes, hasta que empecé a probar de vez en cuando las drogas duras y al final me enganché al caballo. Me gustaba muchísimo la heroína; la estuve consumiendo de una forma u otra durante los veinte años siguientes (si se incluye la metadona, que no proporciona la menor sensación de euforia a no ser que uno esté limpio del todo)" (p. 38).

Es débil y vulnerable. Lo detienen y pasa jornadas de pesadilla en comisarías junto a delincuentes y viciosos sin pasado ni gloria. Los carceleros ponen en duda su condición de artista; entonces enmudece y trata de dormir, pero la ansiedad es insoportable y la mala reputación avanza con paso decidido. La prensa comienza a ventilar con furia los escándalos de sus arrestos y las grescas en que participa; sus botas de vaquero se enredan en una telaraña y la imagen pública del trompetista establece las bases de la leyenda negra. Al mismo tiempo, como descargo, toca con Gerry Mulligan, saxo barítono, y graba con su cuarteto. Hace arreglos, perfecciona la técnica de su instrumento, es un inclaudicable discípulo de Miles Davis, y canta. Sobre el trabajo de este último jazzista, opina en sus memorias: "Como casi todos los músicos interesados por el jazz, había oído 'Birth of the Cool', cuando salió el año 48, con los arreglos de Gerry Mulligan y las composiciones de Mulligan, John Carisi y Gil Evans, un disco cargado de talentos como Lee Konitz, J. J. Johnson y Max Roach. Todavía hoy en día, casi treinta años después, suelo escucharlo con frecuencia" (p. 68).

La voz de Baker, en el estilo de los viejos *crooners* de las *big bands*, para el gusto de hoy suena tal vez demasiado suave. De temperamento romántico y lánguido, sabe crear intimidad, sin sumergirse en el almíbar. Se escucha lenta y arrastrada aunque no empalagosa y siempre equidistante del coma diabético, debido al fraseo repleto de matices. Como trompetista sigue siendo una fiesta oír su versión instrumental de "Somewhere over the Rainbow" y su vocalización para "My Funny Valentine" y "The Autumn Leaves" y espanta ver la metamorfosis de su rostro en las carátulas de los álbumes que grabó: de príncipe azul a sobreviviente de un campo de prisioneros.

Parábola del jazzista

Se le considera un trompetista en tránsito entre los estilos Bebop y Cool, un intérprete desbordante de sentimientos y emoción cardíaca, que no elude los instantes *hot*. Es probable que dentro de las turbulencias de su carrera los mejores momentos sean los álbumes "Chet Baker and Crew", 1956, el sonido *cool* de la costa oeste; "Chet Baker/Art Pepper", este último saxo alto, del mismo año 1956, y "Gerry Mulligan/Chet Baker", iniciado en 1951 pero terminado recién en 1965 debido a la intensa relación entre ambos músicos, plagada de rupturas y reconciliaciones. En el plano de los temas vocalizados y acompañados de trompeta por Baker, más grupo, destacamos el LP "My Funny Valentine", grabado entre 1953 y 1956.

Es curioso recordar que en 1953 la revista especializada en música *Down Beat* hizo una encuesta para elegir al mejor trompetista; Chet Baker aparece por encima de Miles Davis y de Dizzy Gillespie, ubicación difícil de aceptar en especial para Miles, quien consigna largamente el hecho en su autobiografía, sin dejar de señalar lo desmesurado de la elección y, de paso, mencionando que cuando tocaron juntos en California, Baker, avergonzado e incómodo, se puso muy nervioso en el momento del encuentro. Quizás la elección recayó en Baker por el impacto fulminante de sus primeras grabaciones con el cuarteto de Gerry Mulligan, a la sazón el grupo de moda, aunque sus proyecciones expresivas como cultor de la trompeta estaban aún en pleno crecimiento.

Los perseguidores

El itinerario de su aniquilación no excluye ninguna de las estaciones de descenso. Baker es un predestinado, elegido por el infortunio, al que se entrega dispuesto a inmolarse. De hecho forma parte de una generación —que, por supuesto, no se reconoce como tal— diezmada por la toxicomanía: "Vi los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos,/ arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico pinchazo...", advierte Allen Ginsberg en el poema "Howl" ("Aullido"). La heroína y el hundimiento en la irracionalidad, más las constantes temporadas en el alcoholismo, desembocan en el mundo viscoso de los traficantes, la existencia vil y la construcción de un (anti)heroísmo de la marginalidad, una épica de las orillas. Los jazzistas constituyen una montonera de francotiradores que disparan a la calle desde las azoteas y los limbos. La realidad llena de apariencias y de trampas los rodea, la fantasía y las representaciones del arte intentan tapar sus agujeros, sus fisuras, o, por lo menos, construir una habitación donde puedan ingresar aquellos que le dan la espalda al mundo y aceptan un reglamento de vida diferente, nunca escrito, que consiste sólo en normas ausentes e impracticables. El espacio resbaladizo de una antropología cuyos cimientos son el deseo y los sueños.

Baker pertenece a un grupo de *jazzmen* blancos, junto a Gerry Mulligan y Stan Getz, ambos saxofonistas, que tocaron y grabaron junto a cuartetos, quintetos y octetos, donde el predominio negro era abrumador. Emergían de la mayoría blanca, dominante en la música y en todos los espacios sociales, como aparecidos, extraños en el mundo de los orígenes africanos y libertarios del jazz. Una música tan rigurosa como anárquica

hecha de espasmos, de gritos, de rapsodias, de baladas, de canciones y de ritmos cuya raíz está en África, pero trasplantada a un orden receloso y agresivo. Aunque, es preciso subrayarlo, los músicos de jazz no hacían sentir a los blancos su condición de advenedizos, integrándolos de modo espontáneo a una hermandad sin fronteras y en modo alguno haciéndoles pagar lo que padecían los negros en una cultura racista.

Los blancos también eran drogadictos, pero la prensa consideraba una banda de viciosos nada más que a los negros. Stan Getz y Chet Baker rompen paulatinamente todos los límites y sólo en ese momento saltan a los titulares de la prensa. Ninguno de ellos hizo la alabanza explícita de las drogas, tampoco teorizaron o indagaron como exploradores —véase en la literatura los casos de Baudelaire y de Thomas de Quincey— sobre sus efectos y consecuencias, ni mucho menos cayeron en la diatriba. Sabían de la presencia de los "Narcos" (agentes de narcóticos) alrededor de ellos, en especial de los músicos de color, y se ocultaban porque un arresto significaba la suspensión de la licencia de trabajo, puesto que la tarjeta del sindicato de artistas quedaba retenida por la policía.

Cada forma musical tiene su propio ámbito. Así, establecer un paralelo entre las raíces del jazz y las del rock resulta impropio. Si bien surgen de un tronco común han seguido rumbos diversos. Disponer los matices frente a los rudimentos, el cromatismo al lado de la monotonía, los instrumentos nobles, con los sintetizadores, la percusión computarizada y las guitarras eléctricas, cara a cara con las leyendas y los mitos originados por el jazz y su instalación en la literatura, oponiéndolos a los mártires del rock victimados por sus excesos y envueltos en las alucinaciones de la música electrónica, es un juego especulativo e improbable. Corre el riesgo de caer en las comillas y autosabotearse mediante la ironía. Baker tiene un cuarto de siglo cuando comienza la fiebre del rock and roll que deriva en una epidemia imposible de erradicar; viene como una marejada avasalladora, de costa a costa, ya nada volverá, en la música y las costumbres, a ser como antes. La inmensa minoría asistente a los clubes nocturnos, donde los espectadores parecen flotar en medio de una atmósfera intimista, no puede compararse con las audiencias multitudinarias del rock que privilegian, por encima de la improvisación y el ritmo, el ruido y el baile. El jazz disminuye su aceleración, hasta quedar diferido en una pausa que tarda más de una década y arremete otra vez con la fusión, jazz+rock; si no puedes vencerlos...; aunque los novísimos creadores asimilan la enseñanza: en la parte artística, no rechazan en sus composiciones el uso de instrumentos de reciente data, alimentados con energía eléctrica, sintetizadores, teclados, y en la vida social, basta de demasías, no a las drogas, si las hay sólo livianas,

humo azul, nada de inyecciones. Jean-Luc Ponty, Jean-Michel Jarre, Andreas Vollenweider, Chick Corea, entre otros, proporcionan el sonido de la nueva era, aunque se detengan los mitos y se estanquen las leyendas.

Resulta paradójico comprobar cómo la herencia narcótica pasa en línea recta a los rockeros. Sin embargo, Chet, blanco y jamesdeanesco, se inclina por la fuerte tradición negra del jazz y si no se abre a asimilar la próxima ola cuyo rumor ya está en el aire, tampoco la niega: Bill Haley, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Buddy Holly, Roy Orbison y aun dos músicos negros virados al rock: Chuck Berry y Little Richard.

Baker alude al rock en sus memorias con calma, sin considerarlo una amenaza extrema. De este modo, en un párrafo en que deplora a la mayoría del público auditor por no saber oír como es debido, en el sentido de seguir a un trompetista y distinguir sus ideas, expresa: "Con la música Dixieland es distinto; es más fácil de seguir. Y el rock es más sencillo aún que el Dixieland, con la salvedad de algunos músicos de rock realmente espléndidos (o bien dedicados a hacer variantes del rock) como son Herbie Hancock, John Scofield, Mike y Randy Brecker, y unos cuantos más" (p. 40).

Todos los jazzistas que revolucionaron la expresión musical con sus propuestas eran perseguidores. Músicos iracundos en busca de lo inefable, de los espejismos tras los cuales corrió Rimbaud ("Yo escribía silencios", sentenció el vate de Charleville) y de los pasos de James Dean no extinguidos aún en la aurora de Times Square. Deseaban formar un tipo de alquimia compuesta de ingredientes inverosímiles: pesadillas+música+tiempo. Sobre esa materia sitúa los pies, como puede, Charlie Parker, o Johnny Carter, según el relato "El Perseguidor", de Julio Cortázar, cuando embalado en un frenético solo de saxo, grita: "Esto lo estoy tocando mañana"/ "Esto ya lo toqué mañana, es horrible". El jazz cura los desbordes de la vida inútil. Los días marchan, como en el poema de Gonzalo Rojas, "Lerdos y envilecidos"; es preciso aligerarlos, consumirlos y masacrarlos, volverlos polvo, polvo blanco, el emblema es no envejecer, vivir desaforadamente y atreverse a dar el salto cuando todavía hay fuerzas para intentarlo.

Pero, ¿hacia dónde?; ¿hacia arriba o hasta el fondo?

Hazme una máscara

La prensa especuló mucho en torno a la muerte de Chet Baker (Amsterdam, 1988). Por supuesto, mientras vivía, destacó en primer término su parte conflictiva, borracheras, riñas, amores turbulentos, y en menor medida fue capaz de evaluar con inteligencia, sensibilidad y profundidad el

aporte musical y vocal del trompetista. En verdad, los años postreros del músico transcurrieron como si Gabriela Mistral le hubiera dedicado el verso: "...malas manos tomaron tu vida..."; aunque cabe preguntarse: ¿Fue víctima de la mafia por deudas de drogas que no pudo pagar a tiempo? ¿Cayó en forma accidental desde la ventana de un hotel cuando iba acelerado en un *trip* sin destino? ¿Se lanzó al vacío presa de una irresistible atracción, hastiado de sí mismo y de la barbarie del mundo? ¿Creyó de verdad poseer alas como lo prefiguró en el título de sus memorias, secretas y perdidas, llamadas *precisamente* "Como si tuviera alas"?

Los inicios de su carrera fueron exitosos. Cuando ingresó al cuarteto de Gerry Mulligan las revistas musicales (*Metronome, Down Beat*) realizaron encuestas y fue señalado entre los primeros lugares como trompetista y cantante. Al mismo tiempo, en Chet Baker existía, junto a su trabajo musical, un deseo de autodestrucción, primero el germen y acto seguido el cumplimiento de una ruta sistemática. Con el jazz que interpretaba tuvo una relación caníbal e invasora, una amante absorbente que lo sumergía y extasiaba en un proceso pendular de muerte y resurrección. Su malditismo es una opción anhelada, no llega a él de modo "inocente" como le ocurrió a Charlie Parker, que declaró no "saber" (no hay ironía en el uso de las comillas) que era drogadicto hasta las inmediaciones de sus treinta años. Para Baker es una meta propuesta. De allí el lugar común de los estupefacientes, el alcohol, los arrebatos de desesperación y las constantes ausencias del mundo artístico, unidas a los abruptos e inesperados regresos, solicitados o no, en medio de deportaciones desde Inglaterra a Francia, de París a Italia, para emprender vuelo otra vez a California o Nueva York y, en el intertanto, yacer en calabozos "destas prisiones cargado", como Segismundo.

Sus frecuentes arrestos lo llevan a internarse en el hospital federal de Lexington, donde se somete a un tratamiento de desintoxicación basado en el empleo de metadona, pero reincide y se dirige asiduamente a Harlem tras la seducción de los alucinógenos. En la primavera del año 1959 va por seis meses a la cárcel de Rikers Island. A la salida comienza a usar Jetrium, un fármaco. Confiesa en sus memorias haber llegado a inyectarse de mil a mil doscientos miligramos al día. Se declara "un monstruo de las drogas".

Según Bruno, el musicólogo y biógrafo de Johnny Carter, alter ego de Charlie Parker en la aludida narración de Cortázar, Johnny, que leía en forma espasmódica a Dylan Thomas, murió con un verso del poeta galés en los labios: "Oh, hazme una máscara". Chet Baker no eludió, no pudo eludir, aquello que Neruda, satirizando su propio pasado, el de las "Residencias", llamaba: "Paroxismos zaratustrianos"; en el fondo se trata de un tipo de

creador que busca refugio en los descampados sociales, en la torre de marfil o en el abismo —dos actitudes románticas—, y sobrevive, enlutado y prometeico, en guerra contra la negación de la vida, cuyo desenlace es siempre previsible. Chet es el señor K., detenido sin razones aparentes: "¿Traen orden de cateo?", preguntó interrumpiendo la interpretación de su trompeta en un cuarto de hotel con sábanas borrascosas, jeringas en el velador y olor a cenizas. "Hay algo extraño en su situación, Mr. Baker", respondieron los detectives. Él sabía muy bien que todo se desvanece en el momento de la ejecución. Allí está la soga moviéndose en el patíbulo, brilla la hoja de la guillotina, el verdugo deposita el veneno en la cámara de gas, resplandece el tubo de oxígeno del respirador artificial, las células del hígado se corrompen por el alcohol y los sedimentos de la droga depositada en la sangre circulan sin fin. La heroína y la trompeta son las musas, proporcionan al instante la plenitud y la euforia que hacen tolerable e incluso deseable el despertar, otorgándole a cada día una pasión ausente en las horas de decaimiento, las más.

Sin embargo, el trompetista no quiso aguardar la pena de muerte. A los 59 años su cara de *golden boy* californiano era ya una máscara degradada, en primer lugar por él mismo, y por las humillaciones a que lo sometían los gángsters de pacotilla que lo explotaban y engañaban, cuando le vendían la diosa blanca en callejones repletos de basura y de gatos pordioseros.

Los últimos instantes son confusos. Siempre lo son. Estaba en un hotel de Amsterdam, en medio de una gira artística y de un nuevo regreso al mundo del show. Corre el año 1988. En estado febril por la ausencia de un pinchazo, su mente divagaba y se veía a sí mismo desdoblado y limpio, delante de una ventana rodeada de humo que parecía surgir desde los goznes. La madera y los vidrios eran densos e impenetrables; él extendía con timidez la mano e intentaba alcanzar la manilla, pero tenía los brazos agarrotados y le resultaba imposible despegarlos del cuerpo. Tras cada intento sobrevenía un dolor insoportable. La imagen se desvanece y escucha a lo lejos el ruido de la calle. Los árboles de hojas amarillas están inmóviles, no hay nadie en los puentes situados sobre los canales. Las puertas de la percepción que intentó abrir comienzan a cerrarse por la fuerza de las cosas. La base de hormigón del hotel no parece hecha de piedra, quizás porque debajo están la tierra y las raíces y aún es posible que un rayo de sol penetre por las grietas para quedarse sumergido.

Entonces viene el salto. En la trayectoria la figura desmembrada se vuelve una silueta que desciende y rebota sin cesar del suelo a la ventana.

Detrás de los visillos hay dos sombras negras. Lo ven caer y salen. □

LA IZQUIERDA CHILENA VISTA POR LA IZQUIERDA

Cristián Pérez

INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos ochenta y cuatro documentos de la izquierda chilena correspondientes al período 1969-1973. Se trata de textos que hemos seleccionado de la voluminosa recopilación realizada por Víctor Farías, *La Izquierda Chilena (1969-1973): Documentos para el Estudio de su Línea Estratégica*, publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago, 2000.

Esta selección tiene su origen en el comentario de un amigo, el que manifestó su preocupación por la casi imposibilidad de leer completamente la obra de Víctor Farías (seis tomos con más de cinco mil páginas), agregando que sería bueno que alguien hiciera una selección de los documentos centrales del libro, con el fin de que resultara digerible para el lector interesado, más no experto. Acogimos la sugerencia y comenzamos la navegación por este verdadero océano de cartas, proclamas y análisis reunidos en

CRISTIÁN PÉREZ. Candidato a magister en historia, Universidad de Santiago de Chile.

La Izquierda Chilena (1969-1973)[1]. Sólo un documento de toda la selección no proviene de la compilación de Farías, pero, por la enorme importancia que tuvo en esa época, decidimos incluirlo. Se trata del texto de la alocución de Fernando Flores (Ministro de Economía) por cadena de emisoras: "Nuestro programa es la respuesta histórica de la clase obrera" (1973).

Hemos escogido los documentos tomando en consideración los cuatro aspectos que reflejan a nuestro juicio las coyunturas centrales de la Unidad Popular: 1) la economía, donde adquieren gran importancia los problemas de inflación, desabastecimiento y expropiaciones; 2) las relaciones internacionales, en las que destacan la visita de Fidel Castro a Chile y la gira de Allende por la URSS; 3) el diálogo Unidad Popular-Democracia Cristiana sobre el Área de Propiedad Social (APS), y, por último, 4) el Paro de Octubre, que culmina con el ingreso de miembros de las fuerzas armadas al gabinete de gobierno de Salvador Allende.

Los textos se reproducen tal como aparecen en la compilación de Víctor Farías. No obstante, de los documentos seleccionados sólo reproducimos aquí, en la mayoría de los casos, los párrafos que nos han parecido más significativos. En el caso de algunos documentos hemos agregado una explicación o un breve comentario acerca de la coyuntura en que fue redactado, con el fin de facilitar la comprensión de las tendencias que existían en esos momentos. Presentamos los documentos en orden cronológico y, para cada uno de ellos, incluimos la fuente original y el tomo y la(s) página(s) de la obra de Víctor Farías de los que fueron tomados.

[1] Los documentos más importantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) contenidos en la compilación de Víctor Farías serán incluidos en una segunda selección a publicarse en *Estudios Públicos*.

ÍNDICE*

Adonis Sepúlveda Acuña: "El Partido Socialista en la revolución chilena"
(tesis aprobada en el Congreso de Linares del Partido Socialista en 1965).
(En Alejandro Chelén y Julio César Jobet, *Pensamiento Teórico y Político del Partido Socialista de Chile*, Santiago, 1972, pp. 254-256.)
[Tomo 1, p. 195.] *347*

Clodomiro Almeyda Medina: "Dejar a un lado el ilusionismo electoral".
(*Punto Final*, N° 42, 22 de noviembre de 1967.)
[Tomo 1, pp. 29-52.] *348*

"El Partido Socialista en la lucha mundial y continental por el socialismo"
(*Punto Final*, N° 42, 22 de noviembre de 1967.)
[Tomo 1, pp. 40-77.] *354*

Luis Corvalán: Unidad Popular para conquistar el poder.
Informe al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista.
(23 de noviembre de 1969.)
[Tomo 1, pp. 142-170.] *359*

Unidad Popular: Programa básico de Gobierno (1969).
[Tomo 1, pp. 114-141.] *364*

"Trabajador Manual: Trabajo de masas y lucha armada".
(*Punto Final*, N° 99, 3 de marzo de 1970.)
[Tomo 1, pp. 240-241.] *365*

Jaime Gazmuri: "El MAPU y su papel en la campaña electoral".
(Punto Final, N° 99, 3 de marzo de 1970.)
[Tomo 1, pp. 242-245.] *367*

Conversación del embajador N. B. Alekseev con Volodia Teitelboim
(14 de octubre de 1970.) (En "Chile en los Archivos de la URSS",
por Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos,* 72,
primavera 1998, pp. 411-413.)
[Tomo 1, pp. 466-467.] *371*

Salvador Allende: Primer discurso político después de haber asumido
el Gobierno. (5 de septiembre de 1970.)
[Tomo 1, pp. 471-480.] *372*

Rodrigo Ambrosio (secretario general del MAPU):
Entrevista a *Punto Final*, N° 118. (24 de noviembre de 1970.)
[Tomo 1, pp. 481-487.] *373*

* La información de tomo y páginas entre corchetes corresponde a la ubicación del documento en la compilación de Víctor Farías, *La Izquierda Chilena (1969-1973): Documentos para el Estudio de su Línea Estratégica* (2000).

Luis Corvalán: "Lo más revolucionario es luchar por el éxito del Gobierno Popular". Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista. (26 de noviembre de 1970.)
[Tomo 1, pp. 491-502.] *374*

Conversación del embajador N.B. Alekseev con Orlando Millas. Departamento General del CC del PCUS. Confidencial (20 de diciembre de 1970)
(En "Chile en los Archivos de la URSS", recopilación de Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, publicada en *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, p. 416.)
[Tomo 1, p. 545.] *376*

Pedro Vuskovic: "Avances y debilidades de la Unidad Popular". Discurso en la Asamblea Nacional de la UP. (8 de enero de 1971.)
[Tomo 1, pp. 554-557.] *377*

Pedro Vuskovic (Ministro de Economía): La política económica de la transición al socialismo.
[Tomo 1, pp. 586-598.] *378*

Salvador Allende: Discurso a los trabajadores en el Día del Trabajo. (1° de mayo de 1971.)
[Tomo 2, pp. 773-784.] *382*

Salvador Allende: Primer Mensaje al Congreso Nacional (Selección). (21 de mayo de 1971.)
[Tomo 2, pp. 802-821.] *383*

Chou-En-Lai: De la entrevista al periódico mexicano *Excelsior*. (6 de septiembre de 1971.)
[Tomo 2, pp. 1054-1055.] *385*

Luis Corvalán: "Es necesario fortalecer aún más las filas de la clase obrera". Discurso en el acto del Partido Comunista realizado en el Teatro Caupolicán el 22 de octubre de 1971.
[Tomo 2, pp. 1038- 1053.] *387*

Partido Socialista: Resolución del Pleno del Comité Central en Algarrobo. (Noviembre de 1971.)
[Tomo 2, pp. 1212-1216.] *389*

Luis Corvalán: Discurso radial sobre las acciones callejeras de la oposición. (*El Siglo*, 4 de diciembre de 1971.)
[Tomo 3, pp. 1387-1390.] *390*

Fidel Castro: "Discurso en el acto de (su) despedida (de Chile)". (2 de diciembre de 1971.)
[Tomo 3, pp. 1364-1385.] *391*

Sergio Ramos (PC): "Chile: ¿Una economía de transición?" Capítulos VI y VII, pp. 167 a 257. (Santiago, diciembre de 1971.)
[Tomo 3, pp. 1393-1499.] *397*

Conversación del embajador A.V. Basov con representantes del Partido Socialista de Chile. (26 de diciembre de 1971.)
(En "Chile en los Archivos de la URSS", recopilación de Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 417-418.)
[Tomo 3, pp. 1747-1748.] *403*

General José María Sepúlveda (Director General de Carabineros): Intervención en la Cámara de Diputados en relación a la acusación contra el Ministro del Interior José Tohá. (Enero de 1972.)
[Tomo 3, p. 1845.] *405*

Andrej Kirilenko (Secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, miembro del Buró Político y del Soviet Supremo): Discurso en el acto de masas en conmemoración de los 50 años del Partido Comunista de Chile. (2 de enero de 1972.)
[Tomo 3, pp. 1765-1772.] *406*

Conversación del Ministro Consejero de la embajada soviética con el director del Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (25 de enero de 1972.)
(En "Chile en los Archivos de la URSS", recopilación de Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 421-422.)
[Tomo 3, pp. 1859-1860.] *408*

Conversación del embajador A. V. Basov con Volodia Teitelboim (25 de enero de 1972.)
(En "Chile en los Archivos de la URSS", recopilación de Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 419-420.)
[Tomo 3, pp. 1857-1858.] *410*

Unidad Popular (Comité Nacional): La Declaración de El Arrayán. (9 de febrero de 1972.)
[Tomo 3, pp. 1976-1993.] *412*

Partido Socialista: Informe del Comité Central al Pleno de Algarrobo. (Febrero de 1972.)
[Tomo 3, pp. 1914-1966.] *420*

Salvador Allende: Informe al Pleno Nacional del Partido Socialista en Algarrobo. (Febrero de 1972.)
[Tomo 3, pp. 1967-1975.] *421*

Mensaje a los Cristianos de América Latina: Delegación de 80 sacerdotes, entre ellos 12 chilenos, miembros del Secretariado de Cristianos por el Socialismo. (La Habana, 3 de marzo de 1972.)
[Tomo 3, pp. 2153-2154.] *422*

Gonzalo Arroyo S.J.: Carta al Cardenal Silva Henríquez sobre su negativa a participar en el Primer Encuentro de Cristianos por el Socialismo. (17 de marzo de 1972.)
[Tomo 3, pp. 2157-2160.] *424*

Raúl Silva Henríquez, Cardenal Arzobispo de Santiago: Carta a Gonzalo Arroyo S.J. y miembros del Comité Coordinador del Secretariado de Cristianos por el Socialismo. (13 de abril de 1972.)
[Tomo 3, pp. 2170-2171.] *426*

Salvador Allende: Observaciones del Ejecutivo al Proyecto de Reforma Constitucional relativo a las tres áreas de la economía. (7 de abril de 1972.)
[Tomo 3, pp. 2121-2134.] *427*

Eduardo Novoa: El difícil camino de la legalidad.
(*Revista de la Universidad Técnica del Estado* N° 7, abril de 1972.)
[Tomo 3, pp. 2094-2120.] *430*

Copia fiel de la reunión sostenida por el Cardenal Silva Henríquez con los participantes en el Primer Encuentro de Cristianos por el Socialismo. (25 de abril de 1972, en el Palacio Arzobispal de Santiago de Chile.)
[Tomo 3, pp. 2172-2174.] *434*

Alejandro Montesinos (Juventud Radical Revolucionaria): Crítica a las negociaciones Democracia Cristiana-Unidad Popular.
(*Punto Final*, N° 162, 18 de junio de 1972.)
[Tomo 4, pp. 2664-2667.] *436*

Carlos Cerda (Partido Comunista): "La revolución chilena y la propiedad no monopolista".
(*El Siglo*, 29 de junio de 1972.)
[Tomo 4, pp. 2607-2610.] *438*

Jorge Tapia (Ministro de Justicia, Partido Radical): Informe al pueblo sobre las conversaciones con la Democracia Cristiana. (7 de julio de 1972.)
[Tomo 4, pp. 2622-2631.] *440*

Informe sobre la situación chilena elaborado por el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS. (1972, probablemente de comienzos de julio.)
(En "Chile en los Archivos de la URSS", recopilación de Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 424-452.)
[Tomo 4, pp. 2650-2663.] *452*

Arnoldo Camú (Partido Socialista): "Respuesta al Partido Comunista".
(*Punto Final*, N° 162, 18 de julio de 1972.)
[Tomo 4, pp. 2705-2709.] *460*

Partido Socialista (Comité Central): Informe a los militantes sobre el paro patronal. Documento confidencial interno. (19 de octubre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3328-3348.] *466*

Partido Socialista y Partido Comunista: "Propósitos de ofensiva política". (Octubre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3306-3312.] *472*

Comandos Comunales y Cordones Industriales de Santiago: "El Pliego del Pueblo". (Octubre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3272-3288.] *475*

Manifiesto de los trabajadores socialistas: "¡Para avanzar hay que destruir el poder burgués!" (23 de octubre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3302-3305.] *481*

Partido Comunista: "Declaración sobre el gabinete cívico-militar del 2 de noviembre de 1972".
(*El Siglo*, 3 de noviembre de 1972.)
[Tomo 5, p. 3413.] *483*

Fernando Flores (Ministro de Economía, MAPU): Entrevista en *Chile Hoy*.
(Chile Hoy, N° 23, 17 de noviembre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3670-3677.] *484*

Jaime Gazmuri (MAPU): "Las lecciones del paro fascista" (discurso radial).
(Noviembre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3528-3532.] *485*

General Carlos Prats (General en Jefe del Ejército y Ministro del Interior): Entrevista en *Chile Hoy*
(*Chile Hoy*, N° 22, 26 de noviembre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3523-3527.] *487*

Palabras del Presidente de la República de Chile, Salvador Allende Gossens, pronunciadas en la cena ofrecida en su honor en el Kremlin, Moscú.
(6 de diciembre de 1972.)
[Tomo 5, pp. 3699-3702.] *490*

Fernando Flores, Ministro de Economía, "Nuestro programa es la respuesta histórica de la clase obrera".
(Diario *La Nación*, jueves 11 de enero de 1973.) *492*

Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) y Secretaría General de Distribución: Marco de acción de las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios (JAP). (Enero de 1973.)
[Tomo 5, pp. 3772-3780.] *507*

Orlando Millas (Partido Comunista, Ministro de Hacienda): Declaración sobre el problema de la constitución del Área de Propiedad Social.
(25 de enero de 1973.)
[Tomo 5, p. 3932.] *510*

Partido Socialista (Comisión Política): Declaración sobre el proyecto relativo al Área de Propiedad Social. (24 de enero 1973.)
(*Chile Hoy*, N° 34, 2 de febrero de 1973.)
[Tomo 5, p. 3933.] *511*

MIR (Secretariado Nacional): Carta al Partido Socialista apoyando a sus candidatos
(*Punto Final*, N° 176, 30 de enero de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4151-4159.] *512*

Salvador Allende: Carta de la Comisión Política del Partido Socialista.
(25 de enero de 1973).
(*Chile Hoy*, N° 34, 2 de febrero de 1973.)
[Tomo 5, pp. 3934-3935.] *516*

Partido Socialista (Comisión Política): Carta respuesta al Presidente Salvador Allende. (26 de enero de 1973.)
(*Chile Hoy*, N° 34, 2 de febrero de 1973.)
[Tomo 5, p. 3936.] *517*

Salvador Allende: Carta-respuesta a la Comisión política del Partido Socialista. (29 de enero de 1973.)
(*Chile Hoy*, N° 34, 2 de febrero de 1973.)
[Tomo 5, pp. 3937-3938.] *518*

MAPU (Comisión Política): Declaración pública sobre el proyecto relativo al Área de Propiedad Social. (27 de enero de 1973.)
(*Chile Hoy*, N° 34, 2 de febrero de 1973.)
[Tomo 5, pp. 3939-3940.] *519*

Salvador Allende: Carta-respuesta a la Comisión Política del MAPU. (29 de enero de 1973.)
(*Chile Hoy*, N° 34, 2 de febrero de 1973.)
[Tomo 5, pp. 3941-3942.] *520*

Declaración pública de la Unidad Popular
(29 de enero de 1973.)
[Tomo 5, p. 3943.] *521*

Presidencia de la República: Declaración sobre el proyecto relativo al Área de Propiedad Social ante dirigentes de los Cordones Industriales de Santiago. (31 de enero de 1973.)
[Tomo 5, pp. 3944-3945.] *522*

MIR: Documentos internos 3-a. Versión ampliada y corregida del Informe de la Comisión Política al Comité Central de enero de 1973.
(Febrero de 1973.)
[Tomo 5, pp. 3954-4114.] *523*

MAPU: Informe de la Comisión Política al partido. El período octubre 1972-marzo 1973 y las perspectivas futuras. Documento de estricta circulación interna. (12 de febrero de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4261-4284.] *526*

Carlos Altamirano (Secretario General del Partido Socialista): Carta a Luis Corvalán.
(*El Siglo*, 15 de febrero de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4234-4244.] *533*

Partido Comunista: "Fortaleza del pueblo y su Gobierno".
(*El Siglo*, 6 de marzo de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4329-4330.] *535*

Partido Socialista (Regional Cordillera-Santiago): "Definir e impulsar una política revolucionaria". Documento en ocasión del 40 aniversario del Partido Socialista, marzo de 1973. (Documento para la discusión interna. Confidencial.)
[Tomo 6, pp. 4450-4468.] *537*

Óscar Guillermo Garretón (MAPU): Entrevista en *Punto Final.*
(*Punto Final*, N° 180, 27 de marzo de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4394-4400.] *545*

Partido Socialista (Subsecretaría Nacional de Frente Interno): Instructiva Nacional. Documento confidencial. (27 de abril de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4522-4524.] *546*

Carlos Rafael Rodríguez (Partido Comunista de Cuba): Discurso en el acto de celebración de los 40 años del Partido Socialista.
(*Chile Hoy*, N° 46, 27 de abril de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4469-4472.] *549*

Salvador Allende: Tercer Mensaje ante el Congreso (extractos).
(21 de mayo de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4535-4671.] *551*

Luis Corvalán (Partido Comunista): Extractos del discurso en el acto de masas del PC en el Teatro Caupolicán. (11 de julio de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4809-4811.] *554*

Carlos Altamirano (Secretario General del PS.): Extractos del discurso a los trabajadores de los Cordones Industriales.
(*Chile Hoy*, N° 57, 13 de julio de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4803-4805.] *556*

Fidel Castro: Carta a Salvador Allende. (29 de julio 1973.)
[Tomo 6, pp. 4834-4835.] *559*

Carlos Altamirano (Secretario General del PS.): "Verdades y mentiras de la situación económica que vive Chile". Discurso pronunciado en la industria Cobre Cerrillos y difundido por cadena nacional de radioemisoras. (14 de agosto de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4953-4962.] *561*

Unidad Popular (Comité Político): Declaración sobre las torturas en la Armada. (6 de agosto de 1973.)
[Tomo 6, p. 4906.] *563*

Unidad Popular (Comité Ejecutivo Nacional): Declaración sobre las torturas en la Armada. (6 de agosto de 1973.)
[Tomo 6, p. 4907.] *564*

Orlando Letelier (Ministro de Defensa): Declaración sobre la campaña contra las torturas en la Armada. (8 de agosto de 1973.)
[Tomo 6, p. 4905.] *565*

Carta de los marineros torturados a Salvador Allende. (Agosto de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4908-4909.] *566*

Óscar Guillermo Garretón (Secretario General del MAPU): Discurso radial del 4 de agosto de 1973.
(*De Frente*, N° 18, 10 de agosto de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4898-4903.] *569*

Héctor Vega: Carta abierta del Cordón Centro Osorno al Comandante en Jefe del Ejército General Augusto Pinochet. Osorno, 24 de agosto de 1973
(*De Frente*, N° 22, 7 de septiembre de 1973.)
[Tomo 6, pp. 5023-5026.] *573*

MAPU: "¿Quién allanará a los patrones?"
(*De Frente*, 24 de agosto de 1973.)
[Tomo 6, pp. 4985-4986.] *576*

11 de septiembre de 1973: Actas de las reuniones del Buró Político del Comité Central del Partido Socialista de Unidad Alemán (SED). Acta. N° 39/73 de la sesión del 11 de septiembre de 1973.
(Signatura J IV 2/2 A/1709).
[Tomo 6, p. 5027.] *577*

Salvador Allende: Último discurso desde el Palacio de Gobierno.
(11 de septiembre de 1973.)
[Tomo 6, p. 5036-5039.] *578*

SELECCIÓN DE DOCUMENTOS

ADONIS SEPÚLVEDA ACUÑA: EL PARTIDO SOCIALISTA EN LA REVOLUCIÓN CHILENA (1965)

(Tomo 1, p. 195)

[Estos párrafos forman parte de la extensa tesis aprobada en el Congreso de Linares del Partido Socialista en 1965. En este congreso se inicia el viraje del PS hacia posiciones más radicales, en respuesta a la derrota electoral de Salvador Allende en 1964.]

[...]

Afirmamos que es un dilema falso plantear si debemos ir por la "vía electoral" o la "vía insurreccional". El partido tiene un objetivo, y para alcanzarlo *deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios.* La insurrección se tendrá que producir cuando la dirección del movimiento popular comprenda que el proceso social, que ella misma ha impulsado, ha llegado a su madurez y se disponga a servir de partera de la revolución.

No podemos predecir la forma concreta que adquirirá en el futuro la insurgencia de las masas. ¿Quién niega que ella podría partir de esos pobladores y dueñas de casas, desencantados del oropel democratacristiano? ¿O de una insurgencia campesina a través de sucesivas tomas de tierras; o de una huelga general de la clase obrera? No olvidemos que en las grandes insurrecciones han sido las barriadas más pobres las que han levantado barricadas, que en la Revolución de Octubre fueron los soviets (consejos) de obreros, constituidos a veces por encima de las directivas oficiales, los que entregaron con más heroísmo toda su energía a la revolución, y que en China, el ejército de liberación surgió de las guerrillas sustentadas en el campesinado.

En la nueva etapa de la revolución chilena, el Partido Socialista tiene una nueva posibilidad de poner a prueba su condición de vanguardia revolucionaria de la clase, impulsando todas las iniciativas de las masas, desatando sus energías revolucionarias y convirtiéndose en campeón de sus luchas reivindicativas inmediatas y de su liberación definitiva.

* * *

CLODOMIRO ALMEYDA: DEJAR A UN LADO EL ILUSIONISMO ELECTORAL

(*Punto Final* Nº 42 del 22 de noviembre de 1967)

(Tomo 1, pp. 29-52)

[Esta entrevista fue realizada poco antes del Congreso de Chillán del Partido Socialista en 1967. Clodomiro Almeyda acentúa en esta etapa la radicalización socialista.]

[...]

De su respuesta anterior se entiende que hay elementos externos que influyen en el proceso actual por que atraviesa la Izquierda. Esos elementos que usted menciona ¿podrían interpretarse como propios de una crisis de la Izquierda en el mundo?

Sí, la pugna chino-soviética dentro del movimiento comunista internacional refleja los cambios producidos a escala universal en la situación del mundo en los últimos veinte años. En la medida en que éste es cada día más uno y solidario, la crisis alcanza con sus proyecciones a todos los rincones de la tierra. Proyectada esa crisis hacia la Izquierda latinoamericana y chilena, dos son los rasgos que van definiendo la futura y correcta orientación que debe caracterizar en este plano al movimiento popular en nuestro continente: su creciente internacionalización y su progresiva radicalización.

Su internacionalización, porque es cada vez más claro que todas las luchas de los pueblos del mundo tienden a integrarse en un frente común en contra del imperialismo norteamericano y sus agentes domésticos, convertido el primero en gendarme armado de la reacción mundial. En la medida en que ese proceso se va haciendo más nítido, va siendo también mayor la subordinación y el entronque de las luchas aisladas de los pueblos en un frente único que libra una y gran batalla universal, que requiere por ello, de una estrategia antiimperialista también universal.

Hoy por hoy, entonces, en Chile la gran cuestión política que divide objetivamente a los chilenos es su posición frente al imperialismo yanqui. Como alguien lo ha expresado, no son ya las cuestiones de la secularización de la vida política ni la intervención del Estado en la economía ni la defensa o ampliación de las libertades públicas, lo que divide las aguas en el proceso político real, sino la actitud frente al imperialismo. Este último por el rol reaccionario que cumple, ha planteado su tarea estabilizadora en términos de fuerza y de violencia. Esto determina la radicalización de la lucha mundial antiimperialista, la que adquiere también un carácter esencialmente violento, considerada globalmente, como lo demuestra la serie de escena-

rios bélicos que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora han ido ocupando sucesivamente la primera plana de la atención mundial. La lucha de clases en esta segunda mitad del siglo XX, se manifiesta a través de la lucha antiimperialista a nivel mundial, cuyo desenlace global en la cúspide se define en términos de violencia. No hay ya, pues desenlaces nacionales de las luchas políticas. Todas éstas se han ido insertando en un proceso de alcance general al cual ningún país puede escapar. Al desembocar la lucha antiimperialista, necesariamente, en la derrota del sostén armado de todas las estructuras capitalistas de la sociedad, el desenlace socialista de la pugna se hace globalmente viable y necesario para el mundo, radicalizándose así los objetivos de todo el movimiento revolucionario.

Creemos entender que usted considera inevitable la radicalización y la continentalización de la lucha en América Latina.

Esta perspectiva estratégica de tipo ecuménico de la lucha política no adviene de golpe sino que va de un modo necesario materializándose escalonadamente. Es evidente que en América Latina, después de la Revolución Cubana y como consecuencia suya, se está planteando objetivamente ya la necesidad de abordar la lucha revolucionaria en términos continentales, como que continental es la estrategia contrarrevolucionaria concebida y realizada por el imperialismo a través de la Alianza para el Progreso y la Doctrina Johnson. Ambos aspectos de la estrategia continental contrarrevolucionaria se condicionan mutuamente y determinan la necesidad de que la lucha revolucionaria de nuestro continente se conciba como una sola, que cada fuerza política nacional se estime como un destacamento de un ejército común, y que su estrategia y objetivo estén determinados por la forma armada con que la Doctrina Johnson ha definido su rol de gendarme del imperialismo en nuestro continente desnudando la esencia de su función política. Santo Domingo nos ahorra mayores comentarios. La organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) es el reflejo de estas características continentales, armadas y radicales que está progresivamente asumiendo el proceso político en el continente.

La muerte del Comandante Ernesto Che Guevara está sirviendo a un sector del movimiento de izquierda latinoamericano para negar la radicalización de la lucha antiimperialista en el continente. ¿Comparte usted esa opinión?

Para contestar creo indispensable hacer algunas precisiones. Desde luego, el carácter armado que está asumiendo la lucha política en su fase decisiva, en el mundo considerado en su conjunto y en América Latina, considerada como un foco, es de la esencia de toda lucha política que se plantea la toma del poder y la sustitución de una legalidad de clase y de una

escala de valores por otra. De allí que el desenlace del episodio que en Bolivia llevó a la muerte al Comandante Guevara, no puede afectar la naturaleza esencial de los fenómenos políticos ni eliminar el hecho básico y macizo de que el orden social capitalista en escala mundial y en escala latinoamericana se apuntala y se defiende por la fuerza, de manera que no cabe por el resultado de un combate cuestionar la naturaleza de la guerra. Establecido que el contenido de la lucha política en su fase superior ha alcanzado en este momento y en escala mundial y continental la forma armada, procede distinguir las diversas expresiones que pueden afectar ese contenido esencial. La guerrilla es una de esas expresiones. Se caracteriza, tal como ha sido definida por Régis Debray en su forma típica, como la emergencia de un foco de violencia en el campo, destinado a generar a través de su desenvolvimiento y expansión un movimiento político y un liderazgo revolucionarios que pasan a constituir el eje de la lucha política por el poder. Supone esta forma de violencia revolucionaria no sólo determinadas condiciones geográficas y demográficas, que no son las más importantes, sino principalmente la ausencia de un real y efectivo proceso político vigente que comprometa a la mayoría de la población. Ello ocurre, especialmente, cuando no existe participación política popular, cuando dictaduras reaccionarias, como la de Batista, obturan los canales formales de participación política o cuando estos canales se convierten en instrumentos para el juego político de las oligarquías con prescindencia de toda real inserción de las masas en sus mecanismos, como ocurría en el Perú hasta hace muy poco y hoy todavía en Argentina, Brasil y Colombia, para no decir más.

Ha quedado en pie que usted considera inevitable la radicalización de la lucha política en el continente y que la fase superior de ésta es la lucha armada y menciona como una de las expresiones de esta lucha a la guerrilla. ¿Cree que ésta es la expresión adecuada para Chile?

Conforme al criterio esbozado en la respuesta anterior, resultaría que si en un país determinado no existiera proceso político vigente alguno el foco guerrillero vendría a sustituirlo totalmente y todo el proceso político se confundiría con el proceso guerrillero en expansión. Ahora, en la medida que en un país existe un proceso político vigente, en esa misma medida el foco guerrillero deja de ser el eje fundamental a través del cual se genera y desarrolla el proceso político y el foco guerrillero, de producirse, cumpliría el papel de acelerador del proceso político preexistente, de precipitante para que ese proceso en su conjunto se lleve al nivel armado, en fin, para que tome un carácter complementario.

De acuerdo a este punto de vista, y dada la vigencia mayor o menor de un proceso político en nuestro país, no creo que en Chile sea la guerrilla la forma fundamental en que ha de expresarse la violencia revolucionaria. En este país existe un real proceso político que ha ido integrando, con mayor intensidad sobre todo en los últimos años, a cada vez más vastas capas de población en su seno, eso sí que con un sentido y una orientación fundamentalmente conservadoras que les han impreso las clases dirigentes con la complicidad inconsciente de la izquierda. La fase superior de la lucha política que es la violencia revolucionaria, no surgirá aquí de un foco externo a ese proceso político, como sería el foco guerrillero típico definido por Debray, sino a la inversa, emergerá como resultado de la agudización y del calentamiento al rojo del proceso político vigente.

Aquí la violencia expresará la forma más avanzada de un proceso preexistente y no la primera etapa de un proceso político naciente.

Me explico. Si en Chile una resuelta y audaz política revolucionaria de izquierda en todos los planos, encaminada a la toma del poder, llega en un momento a comprometer la estabilidad del sistema, la violencia contrarrevolucionaria —consubstancial con la naturaleza de clase del súper estado norteamericano que se ha ido configurando por encima de nuestras soberanías nacionales— se hará presente en una u otra forma. O será un golpe de Estado de una fracción de las Fuerzas Armadas estimuladas por la CIA, o será una invasión de "marines", para proteger "las minas de cobre" o será un levantamiento de "guardias blancos" impulsados por los yanquis o será una invasión de Chile por los "gorilas" argentinos.

En otras palabras, cuando el sistema aparece de veras cuestionado, la violencia contrarrevolucionaria emerge por fin. De ahí que si la Izquierda desea realmente tomar el poder no puede seriamente plantearse su triunfo sino en base a su capacidad en el plano de la violencia, de hacer frente y derrotar al enemigo armado.

No se trata, pues, de hacer la idealización de la violencia por la violencia sino de tomar realísticamente las cosas como son. La Izquierda, repito, no puede capturar el poder sin ser más poderosa y fuerte que la reacción y mientras ésta, a través del súper estado norteamericano y su agente, el gobierno chileno, tenga el monopolio de la violencia, no será posible derrotarlo.

Es claro que para que una situación de esa peligrosidad para el orden social se produzca, es necesario que la izquierda aspire realmente al poder para capturarlo para sí, y no limite sus ambiciones a ser un grupo de presión que desde afuera vaya obteniendo sucesivas "conquistas" economicistas o aumentando el número de sus parlamentarios. Esta política que

mecánica y periódicamente practica la Izquierda frente a cada elección para ganar representantes en el Parlamento y frente a cada huelga, para generar nuevos lazos que comprometan al movimiento popular con el sistema, nunca va a poner en peligro su estabilidad y, por lo mismo, no hace necesario que el enemigo saque la espada para defenderse. Su esencia violenta permanece disfrazada bajo una apariencia que disimula sus objetivos reales.

La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política, cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido y agudo. Ni la clásica insurgencia popular culminando en la huelga general ni la guerrilla, según el abstracto modelo de Debray, me parecen las vías armadas fundamentales más viables y más probables para nuestro país. Aunque tanto la insurgencia obrera como la guerrilla pueden integrar el proceso general revolucionario, pero no con el carácter de su vía fundamental, sino como elemento acelerador o precipitante, como se dejó dicho más atrás.

[...]

El Partido Comunista sostiene que el resultado de la última Convención Nacional del Partido Radical y la elección de la Mesa del Partido Democristiano que preside el senador Rafael Agustín Gumucio, son elementos positivos para el proceso revolucionario. ¿Usted lo entiende así también?

No, no lo entiendo así, en la medida en que el primero de los hechos citados envuelve básicamente el propósito de utilizar una plataforma doctrinaria de carácter izquierdista para pretender integrar al radicalismo como un todo en el seno del movimiento popular, siendo así que los intereses y la ideología que representan son expresivos de realidades caducas y obsoletas, cuyo único sentido es el de ser instrumentadas por la derecha a fin de neutralizar o castrar a la Izquierda. En cuanto al segundo hecho, estimo que también la directiva actual de la Democracia Cristiana está lejos de interpretar el contenido conservador de los intereses de esa fuerza política, de manera que sería un autoengaño vergonzoso el que quisiéramos definir a una fuerza que es hoy la nueva cara de la derecha y el agente directo del imperialismo en el Gobierno, por las declaraciones de líderes que en realidad expresan sólo a un sector limitado de un partido que globalmente los utiliza para simular una posición de Izquierda, que en el fondo no tiene.

Por esta razón yo me opongo a las alianzas formales con los partidos de centro para fines reformistas e inmediatistas, cualesquiera que sean los

pretextos con que se las quiera justificar y soy partidario de estimular a que vengan hacia nosotros aquellos que dentro de esas fuerzas están en proceso de desarrollo de una conciencia revolucionaria que, entre paréntesis, no es monopolio de nadie y puede advenir en todo chileno que lealmente quiera colocarse al servicio de los intereses del pueblo y del país.

¿Esta estrategia que usted ha ido definiendo a lo largo de esta entrevista importa un desahucio de la unidad socialista-comunista?

De ninguna manera, pensamos que el Partido Comunista debe integrar naturalmente el movimiento revolucionario. Y así, como los socialistas, también el Partido Comunista debe adecuar su comportamiento a la estrategia general que ambos partidos aprobaron en la Conferencia de OLAS.

El entendimiento socialista-comunista es un hecho político de innegable valor y elemento decisivo en el desenlace favorable del proceso revolucionario chileno. De ahí por qué nuestra principal tarea común debe ser el tratar de conformar para Chile tácticas que nos permitan realizar conjuntamente una política revolucionaria, combatiendo las desviaciones reformistas y electoralistas que se han generado por la convivencia estéril dentro del dispositivo legal del país.

Las discrepancias que puedan surgir entre nosotros deberán ser superadas por el método de la discusión fraterna y su resultado lo determinará la práctica y no los anatemas y las proscripciones.

¿Cómo sitúa usted al Partido Socialista dentro de esta estrategia trazada en sus declaraciones?

Yo creo que nuestro Partido, sobre todo, como resultado de su próximo Congreso está en condiciones óptimas para poder promover la realización de una política como la bosquejada, aspirando a ser el núcleo del partido de la revolución chilena, con un espíritu a la vez intransigente y abierto como el que inspiró al Movimiento “26 de Julio” y a los comunistas cubanos cuando se integraron en un solo y gran partido, sobre la base de una política común. Considero que en el próximo Congreso, el partido debe adecuar su organización y su dirección a la realización de esta política que germinalmente nosotros ya concebimos cuando formulamos la línea del “Frente de Trabajadores”, prolongada y contenida ahora en la línea general de OLAS.

[...]

* * *

EL PARTIDO SOCIALISTA EN LA LUCHA MUNDIAL Y CONTINENTAL POR EL SOCIALISMO

(*Punto Final* Nº 42 del 22 de noviembre de 1967)

(Tomo 1, pp. 40-77)

[Éste fue uno de los documentos redactados para ser discutido por los militantes del Partido Socialista en el Congreso de Chillán.]

Informe básico sobre la situación internacional

1. La posición internacional del socialismo es el aspecto básico de su línea política, por cuanto el socialismo mismo como ideología y como realidad es un producto de la internacionalización objetiva del mundo creado por el capitalismo. El socialismo no podrá realizarse nunca como sistema de convivencia humana, sino en la medida que se universalice y la lucha por el mismo tiene en consecuencia un carácter internacional insoslayable.

Los intentos de elaborar una línea política construyéndola sobre supuestos fundamentalmente nacionales y de construir cabalmente el socialismo o el comunismo en un solo país o región, por vasta que sea, generan necesariamente deformaciones en esa línea, o esa, construcción, que crean intereses contrarios al socialismo integral.

Por ejemplo, el intento de desarrollar las economías de los países atrasados desde adentro, debe conjugarse con el hecho fundamental de que la causa de su atraso en lo sustancial deriva del hecho de que la estructura económico-social del mundo impide que la riqueza ya generada por el capitalismo se utilice racionalmente en beneficio universal. Resulta así que la mejor contribución a nuestro desarrollo es la lucha por derrotar al imperialismo en el mundo.

[...]

4. En el plano latinoamericano, la nueva etapa del imperialismo se caracteriza: a) por el reformismo condensado en la Alianza para el Progreso; y b) en la Doctrina Johnson y los intentos de traducirla en una Fuerza Interamericana de Paz, como manifestación del propósito imperialista de sofocar por la violencia cualquier intento de transformar la estructura social del continente en una perspectiva socialista.

Tales caracteres son la respuesta imperialista a las condiciones creadas por la Revolución Cubana en el Continente.

La Alianza para el Progreso significa que el imperialismo, interesado fundamentalmente en la defensa del sistema capitalista como un todo en

América Latina, está dispuesto a sustituir su antigua alianza con las oligarquías tradicionales por un entendimiento con las nuevas burguesías y clases medias.

Significa que, por lo mismo, está dispuesto a presionar a las clases dirigentes de América Latina para que otorguen concesiones y promuevan reformas que eviten la agudización de crisis sociales en el continente, que puedan afectar su estabilidad política.

En este sentido el reformismo en Latinoamérica tiene un carácter fundamentalmente conservador, lo que no quiere decir que las fuerzas sociales y políticas de carácter progresista que el reformismo desate no puedan y deban ser influidas por los partidos revolucionarios con el doble objetivo de: l) Llevar las reformas más allá de sí, proyectándolas hacia objetivos más profundos; y 2) de quebrar la unidad de las fuerzas sociales que apoyan al reformismo, de manera que su apoyo vaya siendo cada vez más reaccionario y su base de sustentación más débil en la medida que se radicalice el movimiento de masas que haya logrado atraer.

Por otra parte, la política neoimperialista paralelamente a su empeño por disminuir mediante el reformismo las posibilidades de subversión violenta, intenta garantizar formalmente por la fuerza armada la estabilidad del sistema, para lo cual ha formulado la Doctrina Johnson, en cuya virtud los EE.UU. se reservan el derecho de hacer uso de la fuerza para evitar, en cualquier parte del continente, la instauración de un régimen de orientación marxista o comunista.

Esta doctrina, formalícese o no a través de la Fuerza Interamericana de Paz, envuelve la manifestación de voluntad del imperialismo de enfrentar por la fuerza al movimiento revolucionario y coloca a éste, en términos continentales, en la necesidad de plantear su lucha en ese mismo plano; en última instancia, la continentalización y su elevación al nivel armado constituyen los principales rasgos del proceso político latinoamericano.

OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, a cuya creación contribuyó decisivamente el Partido Socialista, conforme los acuerdos del Congreso de Linares y cuyas resoluciones aprobadas en su Primera Conferencia suscribió, constituye en el plano orgánico el reflejo germinal del carácter progresivamente continental y armado que está asumiendo el proceso revolucionario latinoamericano, reflejo orgánico destinado a estimular, impulsar e integrar cada vez más las luchas de los movimientos antiimperialistas de América Latina, bajo una orientación y una estrategia continental única.

[...]

Proyección mundial y continental del socialismo chileno

Estrategia internacional

[...]

2. *El imperialismo opera con una estrategia global.* En su desesperada tarea de hacer frente a la revolución, unifica a las burguesías nacionales y les da un comando centralizado. La respuesta lógica de los revolucionarios debe ser su unidad internacional. En América Latina, a la OEA debemos oponerle la OLAS; al Pentágono y al Departamento de Estado, oponerle una dirección revolucionaria continental. La revolución chilena está indisolublemente ligada a la revolución latinoamericana y ésta, a la mundial. La cabal y definitiva realización de sus tareas se logrará sólo en la medida en que se vaya derrotando internacionalmente al imperialismo y a sus aliados, y se vaya estableciendo la p1anificación socialista a niveles supranacionales.

3. Consecuente con su definición marxista-leninista, nuestro partido sustenta el principio del *internacionalismo proletario,* que en esté instante se expresa en la lucha mundial por derrotar al imperialismo en todos los frentes y en la construcción de un mundo socialista integrado internacionalmente.

Creemos que todos estos hechos nos obligan a examinar con la mayor seriedad y atención los procesos externos, para partir de ellos en la determinación de nuestra estrategia y táctica local.

Por otra parte, nuestra participación en la OSPAAAL e integración a OLAS nos pone ante dos paralelas: una teórica, la búsqueda de una posición propia, ante la conflictiva situación internacional; otra práctica, la construcción de una nueva directiva continental y mundial para el movimiento revolucionario.

La Organización de Solidaridad con los pueblos de Africa, Asia y América Latina (OSPAAAL) y la Organización Latino Americana de Solidaridad (OLAS) son un paso hacia la formación de una dirección internacional de la revolución.

E1 Partido Socialista participó de la OSPAAAL y forma parte incluso del Secretariado Ejecutivo. Igualmente contribuyó decisivamente a la creación de OLAS. Consecuentemente debe participar activamente en el funcionamiento de esta última, tanto a escala continental como en nuestro país. Para el PS la OLAS es más que una mera institución de solidaridad. Debe convertirse en una dirección de la Revolución Latinoamericana y en paso indispensable en el proceso de unidad mundial de los pueblos, meta a

la cual nuestro partido tiene la obligación de contribuir. Y cuyo primer intento lo constituye la creación de OSPAAAL en el plano mundial.

[...]

La gran tarea: Construir un comando unificado de la revolución socialista mundial

Señalamos a continuación una serie de consideraciones que orientarán nuestra toma de posición en el cuadro continental y mundial:

a) El Partido Socialista se reconoce parte de las fuerzas que luchan por el socialismo en el mundo entero.

b) El proceso mundial de la revolución socialista no puede quedar librado a la espontaneidad. Debe ser dirigido en términos globales, teniendo en cuenta que el propio imperialismo centraliza la conducción de las fuerzas contrarrevolucionarias.

c) El Partido Socialista aspira a una progresiva conformación *de una dirección internacional de los socialistas revolucionarios*. Es cierto que tal tarea es difícil, especialmente debido a la presión de las profundas divergencias que afectan al movimiento revolucionario mundial. Pero es de urgencia comprenderla.

[...]

Hacia una toma de posición en el debate mundial entre revolucionarios

[...]

En primer lugar, queremos caracterizar este momento histórico como el período de la transformación revolucionaria del capitalismo *en el socialismo y de la derrota del imperialismo.*

Esta generalización supone una transición político-militar determinada por:

1. Estratégicamente, por el empuje de las masas revolucionarias que —a pesar de parciales y pasajeras derrotas y retrocesos— golpean sin descanso hasta la victoria final; y

2. Tácticamente, por la negativa del imperialismo a abandonar pacíficamente sus posiciones, oponiendo una desesperada resistencia antes de caer.

En segundo lugar, estimamos indispensable intervenir críticamente en el análisis de las siguientes experiencias de la lucha de clases internacional. Frente a cada una de ellas, esbozamos sendos planteamientos esquemáticos, que sirvan de base de discusión para una toma de posición:

1. Procesos de liberación nacional y su curso ulterior:

Declaramos cerrada la época de las revoluciones a medias. Las revoluciones que se intitulan "pacíficas", "democráticas", "nacionales", "paternalistas", etc., han fracasado si se proponían obtener la liberación nacional, el desarrollo económico social y la participación creadora de las masas en el proceso revolucionario. Las experiencias de América Latina (revolución mexicana y boliviana, reformismo guatemalteco, venezolano, populismo de Perón, de Goulart, de Frei, etc.), de África ("socialismo" árabe, nuevas repúblicas de Africa Negra, etc.), y de Asia ("socialismo" de la India de Nehru, "antiimperialismo" de Sukarno en Indonesia, etc.), demuestran la bancarrota de las revoluciones que no se profundizan hacia el socialismo.

O la revolución la hacen las masas obreras y campesinas, con la participación de las clases medias pobres y de los intelectuales revolucionarios, bajo la dirección marxista consecuente, o se frustra el proceso bajo una dirección burguesa o pequeño-burguesa inconsecuente. O la revolución cumple en un mismo proceso las tareas democrático-burguesas y las tareas socialistas, teniendo a la clase obrera como eje del proceso, o renacen las fuerzas de la contrarrevolución y la llevan a una grave derrota. O la revolución se proyecta hacia la región o continente para convertirse en parte de la revolución mundial, o queda aislada y facilita la intervención imperialista.

[...]

4. Cuba y la Revolución Latinoamericana:

La Revolución Cubana ha dado una dimensión diferente a la lucha de clases en nuestro continente. Demostró la viabilidad de la violencia revolucionaria para alcanzar el poder; ha legado una táctica específica, la guerrilla; ha levantado un ejemplar liderazgo simbolizado en Fidel y Ché Guevara. Pero por sobre todo ha dejado al desnudo algo que los socialistas veníamos postulando desde 1957: la impotencia de la burguesía y su rol contrarrevolucionario. Una revolución verdadera —y la cubana lo es— no puede detenerse en meras tareas de democratización, independencia e industrialización, ni puede avanzar mientras tenga una conducción burguesa. En Cuba, la intervención revolucionaria de obreros, campesinos y capas medias pobres, bajo un audaz y consecuente comando marxista-leninista, ha ido cumpliendo dicho programa en la medida en que se avanza en la construcción socialista. *La Revolución Cubana, o se hacía socialista o perecía.*

* * *

LUIS CORVALÁN: UNIDAD POPULAR PARA CONQUISTAR EL PODER. INFORME AL XIV CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA

(23 de noviembre de 1969)

(Tomo 1, pp. 142-170)

[El informe al Congreso del Partido Comunista aboga por la constitución de la Unidad Popular y manifiesta preocupación por el acuartelamiento del regimiento Tacna (intento de golpe de Estado del general Roberto Viaux Marambio), en octubre de ese año.]

6. La pugna por el poder político

[...]

Por consiguiente, para resolver los problemas y hacer justicia social, hay que destruir tales relaciones de propiedad y crear otras nuevas. Las actuales relaciones de producción han dejado de corresponder al desarrollo de las fuerzas productivas, al movimiento social en todo sentido y a la época que vive la Humanidad. Estas relaciones ya no pueden contener ni uno ni otro proceso de la sociedad chilena. Y esto es lo que plantea y exige, perentoriamente, una revolución, el ascenso de la clase obrera y el pueblo al poder, medidas que erradiquen por completo al imperialismo, terminen con los monopolios extranjeros, liquiden el latifundio y sepulten o modifiquen substancialmente, según sea el caso, las instituciones caducas o atrasadas, que están al servicio de la clase dominante.

Ni la derecha, ni el actual partido gobernante, ni forma política alguna que deje en pie los cimientos en que se funda el sistema actual, pueden dar satisfacción a las necesidades que impone el desarrollo histórico.

[...]

Han fracasado todas las fórmulas políticas reaccionarias o reformistas, y hay que hacer todo lo posible para que el país no vuelva a caer en experiencias inservibles.

La tarea de las tareas consiste hoy en lograr que el problema del poder sea resuelto en favor de las clases interesadas en una profunda transformación de la sociedad.

Este es un objetivo que se puede alcanzar. En él hay apremio y necesidades vitales. Si sólo tuviésemos presente lo que en estos días es la preocupación de millones de chilenos que viven de un sueldo, de un salario o de una pensión, tendríamos que convenir en que, a la tremenda razón de sus reclamos, se agrega una verdad indiscutible: la de que ello puede tener

solución real y duradera únicamente a través de una drástica redistribución de ingresos.

[...]

Y a través de un proceso más o menos prolongado de coincidencias políticas y de acciones comunes, tiende a convertirse en una realidad el entendimiento de todas las fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas que son la mayoría nacional. A ello se agrega un hecho significativo y valioso. Se pronuncian en favor del socialismo todos los partidos y movimientos que constituyen la izquierda, lo cual está llamado a facilitar el desarrollo ininterrumpido del proceso social, a pasar de las tareas revolucionarias de hoy a las tareas revolucionarias de mañana.

[...]

7. Las Fuerzas Armadas, un nuevo factor político

[...]

Las cosas hay que llamarlas por su nombre y reconocer la realidad tal como se da. Es, por ejemplo, un hecho real que las Fuerzas Armadas constituyen un nuevo factor en la política nacional. Se puede decir que el período de prescindencia de las Fuerzas Armadas en la vida política —prescindencia que nunca fue absoluta, pero que durante varias décadas estuvo reducida a uno que otro grupo de oficiales— ha terminado o tiende a terminar.

Con motivo de los acontecimientos ya mencionados, hacemos claros distingos entre las reivindicaciones económicas y profesionales del personal de las Fuerzas Armadas y los afanes golpistas de algunos, principalmente de ciertos "generales civiles" que han querido y quieren aprovechar aquellas aspiraciones para fines contrarios al pueblo, y también a las instituciones militares. Esto está fuera de discusión.

[...]

Nuestro partido se ha pronunciado contra todo tipo de solución militar.

Las Fuerzas Armadas son instituciones del Estado. Si bien los soldados y suboficiales provienen de las capas modestas de la población, los mandos medios y superiores, emanan de la burguesía y de la pequeña burguesía. Además, desde hace unos treinta años, los distintos gobiernos, cediendo a la presión yanqui, han tratado, cual más, cual menos, de incorporar a nuestras Fuerzas Armadas al dispositivo militar de los norteamericanos y de educarlas y entrenarlas para la lucha contra la llamada subversión interna, en defensa de los intereses creados, del orden establecido. Se

han empeñado en formar en sus filas una mentalidad antiobrera, anticomunista y antipopular. Sabemos que, pese a ello, un número apreciable de militares mantiene una posición crítica frente al imperialismo norteamericano y concepciones antirreaccionarias. Sin embargo, está fuera de duda que aquella educación malsana ha hecho su efecto.

[...]

Estos también son hechos que forman parte de la realidad.

El Partido Comunista no tiene un criterio unilateral respecto de las Fuerzas Armadas. No piensa que son simples y obsecuentes apéndices del imperialismo y de las clases dominantes, pero tampoco el brazo armado del pueblo. Lejos, pues, de nuestro partido están las concepciones antimilitaristas dogmáticas y lejos también se hallan de él las tentaciones que apuntan a favorecer algún tipo de salida militar. Miramos el problema con objetividad.

[...]

Hay síntomas de quiebra en la disciplina militar. Esto nos preocupa, no porque los comunistas defendamos todos los valores en que ella se inspira hoy, varios de los cuales son reaccionarios, sino porque los intereses de la defensa de la soberanía nacional exigen que se rechace cualquier intento de convertir a las Fuerzas Armadas en un partido político o en un elemento dirigido a suplantar la voluntad popular. Pensamos que es un deber patriótico atender los problemas que han provocado una crisis en las instituciones armadas. Sobre esta base y mediante la democratización de sus estructuras, debe superarse dicha situación.

Estimamos que va en favor de los superiores intereses del pueblo y de la Patria que el verdadero pensamiento de los comunistas, que hoy suele llegar desfigurado a las Fuerzas Armadas, sea conocido por todos los chilenos, con o sin uniforme.

8. No al golpe de Estado

[...]

El tiempo que viene está lleno de interrogantes.

¿Qué va a pasar?

Lo que podría llamarse movimiento militar, ¿tiende a declinar o por el contrario, se trata de un fenómeno propenso a seguir manifestándose de más en más? ¿Habrá o no elección presidencial en 1970? Si no las hay, ¿qué sucederá, qué formas tomará en tal caso la lucha por el poder y quién

vencerá en esta lucha? Si a la inversa, se llega al acto electoral ¿cuál será su resultado? ¿Se forjará a su debido tiempo la Unidad Popular y está lo suficientemente amplia, sólida y combativa para atajar a la derecha, impedir el continuismo democratacristiano y generar un gobierno popular?

Estas son algunas de las cuestiones que forman parte de todo lo que hay de incierto en el futuro inmediato.

[...]

El país ha vivido momentos difíciles ante el peligro de golpe de Estado. La inmensa mayoría de los trabajadores y de la población chilena se pronunciaron en contra de las tentativas sediciosas. En esta lucha coincidieron las más vastas fuerzas democráticas, diversos partidos y corrientes populares y, sobre todo, los obreros, empleados y campesinos organizados en la CUT. Pero algunos sectores populares se veían confundidos y ello amenazaba con inmovilizar a los trabajadores. En tales circunstancias, fueron determinantes la actitud resuelta del partido en contra del golpe de Estado, su palabra oportuna de alerta, su llamado al combate, su capacidad de movilización de las masas y la actividad y disciplina de sus afiliados.

[...]

9. Unidad Popular para conquistar el poder

[...]

La Unidad Popular avanza. No pocas dificultades han sido ya vencidas, lo cual permite que en estos instantes todos los partidos y movimientos de izquierda se agrupen en un Comité Coordinador, se reúnan en una misma mesa para elaborar un programa común y estén animados por el propósito de dar juntos la contienda presidencial del año venidero. Las dificultades que subsisten pueden y deben ser superadas. Nos dirigimos a todas las fuerzas populares, cuyos representantes se hallan en la sesión inaugural de este Congreso, para expresarles nuestra fundada esperanza de que todos seguiremos haciendo los empeños y hasta los sacrificios que sean necesarios para llevar adelante la Unidad Popular y enfrentar en un solo bloque todos los combates del presente y del porvenir.

Nos dirigimos en especial a nuestros camaradas socialistas. Casi 14 años han probado la solidez del entendimiento entre nuestros partidos. Ni los reveses inherentes a tan larga lucha, ni las maniobras e intrigas del enemigo han podido romper este entendimiento. El se basa en la lucha por los intereses de los trabajadores, por la revolución antiimperialista y antioligárquica y por el socialismo. En estas grandes causas nuestras coincidencias son fundamentales. Esperamos que las diferencias que nos distancian

no pongan jamás en peligro la unidad socialista-comunista y que los aspectos conflictivos no vuelvan a primar en ningún momento.

[...]

10. El carácter de la revolución chilena y del nuevo estado

El objetivo de la Unidad Popular es alcanzar el poder y hacer la revolución.

Para los marxistas, el contenido del nuevo poder y el carácter de esta revolución están determinados ante todo por la realidad. No se pueden establecer subjetivamente ni someterse a esquemas artificiales, so peligro de retrasar el proceso. Son configurados por el tipo de contradicciones fundamentales que hay en la sociedad, por el significado concreto de los cambios revolucionarios que están al orden del día, por los intereses comunes, del conjunto de las clases que participan en la transformación social y por el cuadro internacional en que está inscrita la revolución chilena.

En virtud de ello, el poder popular que queremos generar y la revolución que necesitamos hacer son, por su esencia y objetivos, antiimperialistas y antioligárquicos con la perspectiva del socialismo. De ahí que, dicho sea de paso, no nos parezcan serios y sí carentes de rigor científico, aquellos planteamientos que suelen hacerse en el sentido de darle ya un carácter socialista a todo el proceso revolucionario que hoy debemos operar. El camino hacia el socialismo pasa a través de las transformaciones antiimperialistas y antioligárquicas. Y no ayudan precisamente al socialismo, sino todo lo contrario, las desfiguraciones del verdadero contenido de la revolución chilena, aunque en muchos casos sólo se trate de desfiguraciones verbales. El paso de la revolución antiimperialista y antioligárquica a la revolución socialista puede ser muy rápido y constituir un proceso continuo y único, como ocurrió en Cuba, por ejemplo. Por esto mismo y para ello, el acento hay que ponerlo en las tareas concretas que corresponden a cada momento histórico.

[...]

* * *

UNIDAD POPULAR: PROGRAMA BÁSICO DE GOBIERNO (1969)

(Tomo 1, pp. 114-141)

[Programa de Gobierno de la Unidad Popular redactado entre fines de 1969 y comienzos de 1970. Creemos necesario destacar que esta coalición, primero diseñó el programa y luego eligió a Salvador Allende como su abanderado. Se recogen aquí los párrafos donde se enuncian los objetivos estratégicos de la alianza.]

[...]

La construcción de la nueva economía

Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.

En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.

Área de propiedad social

El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir una área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;

2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;

3) El comercio exterior;

4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;

5) Los monopolios industriales estratégicos;

6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.

Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.

[...]

* * *

TRABAJADOR MANUAL: TRABAJO DE MASAS Y LUCHA ARMADA

(*Punto Final* Nº 99, 3 de marzo de 1970)

(Tomo 1, pp. 240-241)

[Documento proclive a resaltar las tesis del MIR. Se enmarca en la campaña de oposición a las elecciones impulsada por dicha organización.]

Al hablar de trabajo de masas o movilización de masas por lo general, y aunque esta tarea se plantee bajo la perspectiva revolucionaria, se tiende mecánicamente a separarla de la lucha armada, a anteponerla como un paso o etapa previa a la acción armada.

Quienes razonan de esta forma lo hacen pensando en la necesidad que existe de crear las condiciones subjetivas en las masas para la lucha armada revolucionaria, para ganarse el apoyo de las masas de la ciudad y el campo hacia la guerra revolucionaria; guerra que inevitablemente deberá ser librada por los trabajadores chilenos para liberarse definitivamente de la explotación capitalista e implantar el régimen socialista en nuestro país.

Analizando este planteamiento en profundidad, veremos que se separa en dos aspectos distintos el trabajo político de masas (movilización de masas a nivel ideológico) de la lucha armada.

He aquí un error muy serio en el trabajo revolucionario; la lucha armada revolucionaria es una acción política ciento por ciento; la lucha armada tiene como objetivo fundamental la organización, educación y movilización de las masas para su incorporación a la lucha revolucionaria.

Vo Nguyen Giap (quien algo entiende de estas cosas) dice:

"La propaganda armada consiste en utilizar las fuerzas armadas para hacer propaganda política, sembrar la confianza entre la población para convencerla del poder de nuestras fuerzas. Después de haberle inspirado confianza hay que instruirla políticamente. Debe tener confianza en la solidaridad de todo el pueblo. A los elementos poco resueltos o indecisos hay que mostrarles nuestro poder para atraerlos. En cuanto a los traidores, si permanecen recalcitrantes a pesar de las advertencias o si rehúsan reivindicarse, hay que aniquilarlos resueltamente". ("Por qué triunfa el Vietcong", PF Nº 96).

[...]

La experiencia de la Revolución Cubana también confirma que es a través de la lucha armada como se organiza, se educa y se moviliza por medio del Ejército del Pueblo a las masas en la lucha contra sus enemigos.

Aquellos que plantean que "la lucha electoral" es un medio necesario para crear las condiciones subjetivas de la revolución entre las masas, consciente o inconscientemente caen en el oportunismo y no es la revolución su mayor preocupación.

Otros sostienen que previo a la iniciación de la lucha armada, está la "etapa de construcción del partido", construcción que se realiza al margen de la lucha revolucionaria y tratando de "educar" políticamente a los trabajadores a través de consignas "sesudamente" elaboradas por quienes pretenden transformarse por obra de la influencia política en vanguardia de la revolución.

Desconocer el profundo contenido político de la lucha armada revolucionaria en la organización, educación y movilización de las masas, es desconocer y postergar innecesariamente la iniciación de ella.

Es agitar el concepto de la revolución armada para, en última instancia, oponerse a ella.

Es una de las tantas manifestaciones del oportunismo, es pensar crédulamente que los revolucionarios gozamos de libertad política para organizar, educar y movilizar de manera revolucionaria a las masas dentro del actual sistema.

[...]

Sólo a través de la lucha armada se pueden crear las condiciones subjetivas de la revolución.

Sólo a través de la guerra de guerrillas se pueden crear las condiciones para la construcción de un Ejército del Pueblo, que sea capaz de organizar a las masas para la lucha armada, esté en condiciones de educarlas políticamente y las impulse a la lucha revolucionaria por la implantación del socialismo en Chile.

* * *

JAIME GAZMURI: EL MAPU Y SU PAPEL EN LA CAMPAÑA ELECTORAL
(*Punto Final* Nº 99, 3 de marzo de 1970)

(Tomo 1, pp. 242-245)

[Jaime Gazmuri explica las razones por las que su participación en la campaña de la Unidad Popular no contradice la estrategia del MAPU denominada "Frente Revolucionario".]

¿La actual Unidad Popular responde a la imagen que de ella se había formulado el MAPU? Por ejemplo: ¿cómo se concilia con la estrategia del Frente Revolucionario que entendemos alguna vez planteó el MAPU?

"El MAPU no sólo ha planteado 'alguna vez' la estrategia del Frente Revolucionario, sino que la considera su línea estratégica permanente para todo el período de la toma del poder.

La cuestión de fondo que plantea la pregunta es que si hay alguna contradicción entre la estrategia del Frente Revolucionario y la participación del MAPU en la Unidad Popular que se ha gestado en torno a la elección de 1970. Nosotros creemos que no. Por el contrario, al participar en el proceso de Unidad Popular el MAPU está aplicando en esta coyuntura su línea estratégica permanente. No existe contradicción entre nuestra línea estratégica fundamental y la acción política que desarrollaremos en esta etapa. Para aclarar esta cuestión es necesario analizar la forma en que el MAPU concibe el Frente Revolucionario, así como su planteamiento sobre la Unidad Popular.

El MAPU ha formulado un conjunto de consideraciones estratégicas que, a nuestro juicio, constituyen los supuestos indispensables para la toma del poder por la clase obrera.

En primer lugar, en nuestra opinión, el poder se alcanza en la medida que las fuerzas revolucionarias logren crear un núcleo de dirección o vanguardia que sitúe a la clase obrera y sus aliados en la perspectiva del poder. Este núcleo debe cumplir con rigurosidad ciertas condiciones sin las cuales su potencialidad dirigente se agota y se pierde. Primero tiene que ser este un núcleo de dirección proletaria tanto por su composición fundamental como por las posiciones de clase que imprima al desarrollo de su tarea.

Esta primera condición de toda dirección revolucionaria se identifica con otra: la dirección debe estar ligada a las masas y sus luchas y debe ser reconocida como cabeza de la revolución por el más amplio número de masas trabajadoras. ¿Cuál es el origen de este núcleo de dirección? Este no es otro que la confluencia en la práctica y el combate común de los partidos

identificados con la clase obrera y los trabajadores por su composición y objetivos.

Este núcleo de la dirección revolucionaria tiene como tarea central —y este es el segundo supuesto de nuestra línea estratégica— la construcción de un poderoso frente de masas estructurado en torno a dos cuestiones fundamentales: el agigantamiento del poder de la clase obrera y la multiplicación de la lucha de masas en todas sus formas y niveles. No es por tanto este un núcleo que protege su "virginidad" política en un claustro al que sólo tienen entrada los revolucionarios probados, sino por el contrario, es una dirección que por su audacia es capaz de poner tras la locomotora de la clase obrera a las más amplias masas del país.

Este núcleo debe tener la flexibilidad suficiente para utilizar todas las formas y métodos de lucha que aseguren el triunfo final; para aprender de los nuevos métodos que el pueblo va creando en su lucha, para no dogmatizar sobre cuestiones estratégicas ni tácticas y para recoger creadoramente —sin servilismos ideológicos— la experiencia revolucionaria de todos los países del mundo. Creemos por último que el frente necesita una dirección orientada —obviamente— a aislar al enemigo y no ser aislada por éste, que utilice este criterio para la selección de sus aliados, de sus objetivos tácticos y de las formas de lucha a usar en cada etapa.

[...]

¿Cómo entiende el MAPU su participación en la campaña de la Unidad Popular?

"El MAPU no ha nacido en función de la elección presidencial de 1970. Sus objetivos van más allá. Ellos son constituir un Movimiento que junto a los otros sectores del pueblo aporte creadoramente al proceso de la revolución chilena.

Sin embargo, a nuestro juicio, la elección de 1970 representa una coyuntura política cuyo desarrollo y resultado son importantes para el pueblo de Chile. Desde nuestro punto de vista las elecciones de 1970 representan un desafío a la Izquierda chilena, que consiste en utilizar revolucionariamente el proceso electoral de manera de elevar el nivel de conciencia de las masas acerca de sus verdaderos intereses, de aumentar las fuerzas y el volumen de sus luchas vinculándolas al problema del poder y de fortalecer significativamente su organización. Se trata de construir desde ya un poder popular capaz de destruir y reemplazar el poder de la burguesía y el imperialismo. Una elección planteada en estos términos permite a nuestro juicio vencer y además estar en condiciones de mantener el poder e iniciar la construcción del socialismo. Si el resultado electoral fuera adverso, de to-

das formas el movimiento popular quedaría fortalecido y dispuesto a continuar la lucha en otras condiciones.

[...]

¿El MAPU cree que la vía electoral es la única manera que tiene la clase trabajadora de acceder al poder?

"El MAPU cree que la cuestión de las 'vías' para llegar al poder es un asunto que está normalmente mal planteado. No hay una 'vía' electoral. Hay elecciones que las fuerzas revolucionarias deben evaluar en cada caso y ver qué perspectivas presenta para el avance de la revolución. Tampoco hay una 'vía' armada. Lo que se ha dado en todas las revoluciones socialistas contemporáneas es que en un momento del proceso revolucionario las masas y sus partidos han debido luchar por las armas —usando diversas formas de lucha según cada situación particular— contra el poder armado de las burguesías y/o el imperialismo. Estos enfrentamientos se han dado después de intensos procesos de lucha social en los que se han usado formas diversas de lucha incluidas muchas veces las electorales.

Entendido así este asunto, la discusión sobre las 'vías' es irrelevante. No hay, a nuestro juicio 'vías' armadas o pacíficas. Hay procesos revolucionarios que —combinando distintas formas de lucha en cada etapa— son capaces de conquistar el poder del estado, desalojando las clases que lo utilizan para dominar y explotar a los trabajadores y construir un Estado de Trabajadores. Lo importante es que cada forma de lucha sea respaldada por las masas y aplicada en medio de una lucha de clases ampliada y activada. Entre estas formas de lucha no descartamos las formas armadas, más aún, creemos que la experiencia histórica demuestra que cuando la burguesía y el imperialismo se ven amenazados decisivamente, ambos se defienden utilizando todos los medios que tienen a su alcance. Los ejemplos son numerosos. En el caso chileno creemos que los trabajadores aun cuando la Unidad Popular triunfe en la elección del 70 deben estar preparados a enfrentar mediante todas las formas de lucha —incluso la armada— la reacción de la burguesía y el imperialismo".

[...]

* * *

CONVERSACIÓN DEL EMBAJADOR N. B. ALEKSEEV CON VOLODIA TEITELBOIM (14 de octubre de 1970)

(Tomado de "Chile en los Archivos de la URSS", documentos recopilados por Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998)

(Tomo 1, pp. 466-467)

[Transcripción de la conversación entre el embajador de la URSS en Chile, N. B. Alekseev, con Volodia Teitelboim, miembro de la Comisión Política del Comité Central del PCCh.]

[...] V. Teitelboim se refirió a la posición del Ejército. Según él, por encargo del Comité de Coordinación de la Unidad Popular, se había reunido con los representantes del alto mando del Ejército. Durante esta reunión, el jefe de la inteligencia militar dijo que los comandantes estaban descontentos con la exigencia por parte de la Democracia Cristiana de ciertas "garantías" a la Unidad Popular en cuanto al Ejército, ya que éste no necesitaba "protectores" y no había encomendado al PDC llevar a cabo tales negociaciones. Según la información de la misma fuente, el Ejército seguirá cumpliendo con su deber profesional: el de la defensa de la integridad territorial, de la soberanía, de la mantención del orden interior. V. Teitelboim informó que el mando del Ejército había dictado una circular para el cuerpo directivo de las Fuerzas Armadas, en el cual se confirma esta postura. Estas posiciones las comparte también el cuerpo de Carabineros. El General Director de Carabineros, el general Huerta, es conocido por sus posturas reaccionarias, las que, sin embargo, no son compartidas por otros comandantes. [...]

Hace poco la directiva del Partido Socialista redactó un documento interno, que sostenía que el Partido Socialista no debería mantener contactos estrechos con el Partido Comunista y que estaría en contra de la entrega a éste de los "ministerios políticos": Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, y en contra del nombramiento de comunistas como embajadores en países como Estados Unidos, Cuba, Argentina y la Unión Soviética [...]

[...] Teitelboim informó sobre el viaje a Cuba de la hija de Salvador Allende, Beatriz, que tuvo lugar inmediatamente después de las elecciones, y sobre su encuentro con Fidel Castro. Según Beatriz Allende, F. Castro considera el triunfo de S. Allende en las elecciones como el acontecimiento más importante después de la Revolución Cubana en América Latina. A él le gustaría asistir a la ceremonia del traspaso de mando presidencial perso-

nalmente, pero considera que ahora no es un momento conveniente. [...] No obstante, durante la conversación F. Castro dijo que iba a visitar Chile más tarde, se iba a reunir con los militares chilenos e iba a recomendarles comprar armamento soviético. Al mismo tiempo, comunicó que actualmente Cuba tiene excelentes relaciones con la Unión Soviética y recomendaba a Salvador Allende establecer en el futuro las relaciones al mismo nivel.

Más adelante, F. Castro recomendó a S. Allende no complicar las relaciones con las Fuerzas Armadas y abstenerse de cualquier cambio al interior de éstas. Asimismo, aconsejó no emprender pasos demasiado revolucionarios en América Latina, establecer las relaciones de buena vecindad con Argentina, Bolivia y otros países latinoamericanos; apoyar al régimen actual en el Perú en pro de la revolución peruana; no salir de la OEA. El dirigente cubano pidió transmitir a S. Allende sus deseos de que todas las situaciones conflictivas en América Latina siguieran atribuyéndose sólo a Castro.

Durante la conversación con Beatriz Allende, F. Castro se refirió al problema del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Chile. Dijo encontrarse comprensivo frente a este complicado problema, pidió que no se apresuraran con su resolución y recomendó actuar a partir de los intereses de Chile, y no de Cuba.

Al referirse a los problemas económicos, F. Castro recomendó a S. Allende mantener el cobre chileno en la órbita del dólar y aceptar el pago de una indemnización después de la nacionalización de la gran minería del cobre, si así lo exigían las compañías norteamericanas. Aseguró a S. Allende que Cuba iba a vender a Chile azúcar en cantidades ilimitadas sin exigir pagos en divisa.

F. Castro recomendó a S. Allende y a toda la directiva del Partido Socialista, en general, establecer buenas relaciones con el Partido Comunista de Chile. “PCCh es un partido bueno y maduro —dijo—, cumple con todo lo que promete”.

En cuanto al Partido Demócrata Cristiano, destacó que no es homogéneo. Con algunos de sus miembros y dirigentes es posible y necesario trabajar. En consecuencia, dijo que, desde su punto de vista, se podría dejar en el puesto de Ministro de Relaciones Exteriores de Chile a G. Valdés, a quien estima mucho como a un antiimperialista [...].

N. B. Alekseev

* * *

SALVADOR ALLENDE: PRIMER DISCURSO POLÍTICO DESPUÉS DE HABER ASUMIDO EL GOBIERNO

(5 de noviembre de 1970)

(Tomo 1, pp. 471-480)

[Frente a las críticas de los sectores más radicales de la izquierda, Salvador Allende trata de justificar, recurriendo a las palabras del teórico marxista Federico Engels, su estrategia de "vía pacifica al socialismo".]

[...]

Desde el punto de vista teórico-doctrinal, como socialistas que somos, tenemos muy presente cuáles son las fuerzas y los agentes del cambio histórico. Y, personalmente, sé muy bien, para decirlo en los términos textuales de Engels, que:

"Puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde, de acuerdo con la Constitución, se puede hacer lo que se desee, desde el momento en que se tiene tras de sí a la mayoría de la nación".

Y éste es nuestro Chile. Aquí se cumple, por fin, la anticipación de Engels.

[...]

* * *

RODRIGO AMBROSIO (SECRETARIO GENERAL DEL MAPU): ENTREVISTA A *PUNTO FINAL* N° 118

(24 de noviembre de 1970)

(Tomo 1, pp. 481-487)

[...]

¿Esto quiere decir que los trabajadores no han conquistado todavía el poder?

"No. No creemos que la llegada del pueblo a La Moneda signifique la conquista del poder por los trabajadores. Creemos sí que el gobierno es una muy buena posición para luchar por el poder. Por eso estuvimos interesados en ganar la elección y luego en obligar a la reacción a reconocer esa victoria. Pero para nosotros La Moneda no es poder".

La Unidad Popular afirma que implantará las condiciones para empezar la construcción del socialismo. Un documento oficial del Partido Socialista señala que por la forma particular en que se llegó al gobierno hay que conquistar el poder DESDE las estructuras capitalistas, a diferencia de otras experiencias donde los trabajadores tomaron el poder al tiempo que destruían esas estructuras, ¿qué piensa el MAPU al respecto?

"Es evidente que la forma institucional del acceso al gobierno está predeterminando la forma específica que en el caso chileno va a asumir la destrucción del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado de clase, de un Estado popular. Eso no significa que la destrucción del Estado burgués se haga superflua o que pueda hacerse sin enfrentamiento. La lucha de las clases por el poder se expresa finalmente en el enfrentamiento irreductible entre dos poderes. Ese fenómeno fundamental del enfrentamiento de dos poderes de clase, un poder institucionalizado, legitimado por la tradición y por la superestructura del país, pero decadente, y un poder nuevo, emergente, sin instituciones adecuadas todavía, pero que en el caso chileno podrá aprovechar también en su beneficio muchas tradiciones jurídicas y muchas formalidades institucionales, ese enfrentamiento se repite aquí como en todos los procesos revolucionarios del mundo. Chile no es, pues, una excepción. La destrucción del Estado burgués sigue siendo un requisito".

¿Ustedes están de acuerdo con la cita de Engels referente al tránsito pacífico al socialismo, hecha por el Presidente Allende en el Estadio Nacional?

"Estamos absolutamente de acuerdo con ese discurso, pero esa cita preferiríamos hacerla una vez que Chile sea socialista. No queremos facilitarnos el camino y dar a las masas la impresión de que no habrá aquí necesidad de enfrentamientos muy largos y muy duros. Mientras no salgamos victoriosos de esos choques creemos que es prematuro decir que la anticipación de Engels se cumplió".

[...]

* * *

LUIS CORVALÁN: LO MÁS REVOLUCIONARIO ES LUCHAR POR EL ÉXITO DEL GOBIERNO POPULAR. INFORME AL PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA (26 de noviembre de 1970)

(Tomo 1, pp. 491-502)

[A pocos días de haber asumido el gobierno Salvador Allende, el Secretario General del Partido Comunista traza los lineamientos de su política y advierte sobre la posición del diario El Mercurio*.]*

[...]

"El Mercurio" se mimetiza

"El Mercurio" hace lo suyo vestido con nuevo ropaje. Ha cambiado sus ejecutivos y su lenguaje. Se mimetiza para tratar de meter su cola en el Gobierno. Durante largos años combatió ferozmente al compañero Allende. Ahora pretende aparecer como su amigo. En la campaña electoral sostuvo que el triunfo del actual Presidente de la República sería el acabo de mundo, la victoria de los partidos Comunista y Socialista. Recientemente, en su comentario político del día 8, ha tenido la soltura de cuerpo de afirmar: "Sea como fuere, la opinión pública no ve en el triunfo del Dr. Allende la buena fortuna de un grupo de partidos sino la victoria de un líder que luchó valientemente para ocupar el cargo que ha conquistado". A renglón seguido se va de la lengua y dice: "El carácter mismo de la institución presidencial chilena impulsa a quien recibe tan alta investidura a emanciparse de los intereses partidarios estrechos".

Este tiro le fallará al vocero de los clanes.

Todo el país recuerda, porque lo escuchó muchas veces, que el compañero Salvador Allende fue incansable en afirmar que su victoria no sería la victoria de un hombre, ni siquiera de un partido, sino el triunfo de la Unidad Popular, el triunfo del pueblo.

Los diversos grupos empresariales han rivalizado entre sí para ofrecerle la colaboración al Gobierno. Es claro que en esto hay que hacer distingos. Hay capitalistas medianos y pequeños que no tienen motivos reales para adoptar una actitud distinta y que, por tanto, pueden colaborar en el terreno del desarrollo de sus actividades económicas. Pero hay otros que andan con un puñal bajo el poncho. Son los que hoy ofrecen colaboración en la esperanza de escapar a las medidas que el Gobierno debe tomar

en el plano de la reestructuración económica y que buscan la forma de llevar a la Unidad Popular por la pendiente de la conciliación.

Maniobran en vano. También este tiro les saldrá por la culata.

Se avecinan grandes combates de clase

Los grandes combates sólo ahora comienzan. Vendrán nuevos enfrentamientos de clase. La nacionalización del cobre y la estatización de toda la banca, para citar sólo dos cosas, se transformarán en una seria lucha contra el imperialismo y la oligarquía.

Estos defenderán con dientes y muelas sus bastardos intereses. Tratan y tratarán de sembrar la confusión, la desconfianza, la intriga, la dispersión de las fuerzas populares, la corrupción de partidos y dirigentes. No habrá carta que no pongan en juego.

[...]

* * *

CONVERSACIÓN DEL EMBAJADOR N. B. ALEKSEEV CON ORLANDO MILLAS. DEPARTAMENTO GENERAL DEL CC DEL PCUS. CONFIDENCIAL

(20 de diciembre de 1970)

(Tomado de "Chile en los Archivos de la URSS", documentos recopilados por Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos,* 72, primavera 1998, p. 416.)

(Tomo 1, p. 545)

[Transcripción de la conversación del embajador de la URSS en Chile, N. B. Alekseev, con Orlando Millas, miembro de la Comisión Política del PCCh.]

Orlando Millas informó sobre el Pleno del CC de PCCh. Destacó que en su informe Luis Corvalán planteó la necesidad de concentrar la actividad del partido en la realización de las transformaciones revolucionarias en el país. El objetivo central del partido es contribuir al éxito del gobierno de Allende.

En su análisis de la situación política en el país, Millas sostuvo que las fuerzas de la reacción promovían una estrategia de colaboración con el ala derechista del PDC (Frei) para crear una fuerte oposición unida al gobierno popular. La unidad entre los partidos Comunista y Socialista es considerada como el núcleo central de la política del PCCh. El partido miraría con buenos ojos el viraje de las fuerzas de ultraizquierda hacia el apoyo del gobierno popular, pero considera que estas fuerzas no tienen derecho de pretender ejercer el rol de orientadores de la línea del gobierno de la Unidad Popular.

Según Millas, en su informe Corvalán precisó tres momentos:

1) es necesario evitar referencias al PDC como un adversario: allí existen fuerzas sanas nacionales, que posibilitan la evolución del PDC hacia la izquierda y no hacia la derecha;

2) es preciso un trato respetuoso a todos los partidos miembros del bloque de la Unidad Popular;

3) conviene abstenerse de poner de manifiesto la importancia del PCCh en el gobierno, donde el partido encabeza ministerios claves.

Al referirse a una información proporcionada por R. Tarud, Millas comunicó que había señales de la activización de los grupos terroristas que planifican organizar provocaciones en contra de los representantes diplomáticos de los países socialistas.

Firma: M. Kudachkin

* * *

PEDRO VUSKOVIC: AVANCES Y DEBILIDADES DE LA UNIDAD POPULAR. DISCURSO EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA UP

(8 de enero de 1971)

(Tomo 1, pp. 554-557)

[Transcurridos dos meses del gobierno de la Unidad Popular, el Ministro de Economía hace un balance. Ya se muestra preocupado por lo que será su problema central: la inflación.]

[...]

Veamos ahora qué factores positivos y adversos se registran en el desarrollo de este programa

No se puede negar que hay avances bien visibles.

1) Se han iniciado pasos importantes en la constitución del área de propiedad social: el proyecto de reforma constitucional para rescatar el cobre, la recuperación de la CAP para el Estado, la nacionalización del carbón, la expropiación de Bellavista-Tomé, la próxima estatización del sistema bancario.

2) La nueva política de remuneraciones definida en el proyecto de reajuste (mayor incremento de los salarios mínimos, la nivelación de asignaciones) que no se limita sólo a mejorar los salarios, sino que implica toda una política orientada hacia un mejoramiento mayor de los sectores más postergados para ir haciendo desaparecer así las grandes desigualdades en la distribución del ingreso.

3) Una nueva política tributaria que protege a los trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios acentuando las imposiciones sobre los grandes intereses.

4) Una nueva distribución del presupuesto de gastos destacando las finalidades sociales y los "programas movilizadores".

5) Una firma política de mantención de los precios para defender el ingreso de los asalariados que se refleja en las tarifas de la energía eléctrica, en el precio del pan, etc., lo que ha dado por resultado un alza muy pequeña de costo de la vida durante el mes de noviembre y ningún alza durante diciembre.

Esto es muy importante, porque ha destruido la idea que quiso imponer la Derecha de que las medidas propiciadas por el gobierno iban a producir un proceso inflacionario, que nadie podría detener.

Este es parte del balance positivo de los dos meses de gobierno.

[...]

* * *

PEDRO VUSKOVIC (MINISTRO DE ECONOMÍA): LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO

(Tomo 1, pp. 586-598)

A fines de 1970, de acuerdo a su Constitución y sus leyes el pueblo de Chile se dio un Gobierno Popular, democrático y revolucionario.

[...]

No concurrimos a negociar un préstamo determinado o una operación particular, ni a consultar sobre cuestiones que sólo pueden ser objeto de decisiones estrictamente nacionales. Lo hacemos para entregar antecedentes en el entendido que facilitaríamos así una comprensión objetiva sobre la singularidad de la experiencia chilena, comprensión que es esencial para afirmar y ampliar relaciones económicas sobre bases de pleno conocimiento y respeto mutuo.

[...]

La exigencia histórica de las transformaciones

[...]

El programa económico del Gobierno se propone afrontar este desafío creativa y originalmente, combatiendo las deformaciones estructurales que limitan el desarrollo y abriendo amplio camino a las energías renovadoras del pueblo. De ahí que el objetivo central de la política del Gobierno sea reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del latifundio y del capital monopolista nacional y extranjero, para iniciar la construcción del socialismo. Se abre así el proceso de profundas transformaciones económicas y sociales y es en el contexto de este proceso histórico que debe apreciarse cada iniciativa del Programa de Gobierno. Para cumplir la tarea que se ha propuesto, el país dispone de un acervo cultural de valores y tradiciones que enorgullece a todos los chilenos, y cuya permanencia otorga a la experiencia de Chile una especificidad que concita el interés y la solidaridad de todos los pueblos del mundo. El Gobierno de Chile se propone no defraudar tales expectativas en ningún sentido. Cuenta para ello con la fuerza que representa ser la expresión de las más amplias mayorías nacionales, de los intereses de las clases trabajadoras del país, de sus obreros y campesinos, de sus capas medias de productores, comerciantes, técnicos, profesionales y funcionarios, de su juventud, de los hombres y mujeres que luchan porque el país supere su subdesarrollo, afiance su independencia nacional y elimine la injusticia de su extrema desigualdad social.

[...]

Los objetivos económicos básicos del Gobierno Popular

Lo anterior explica que el programa económico del nuevo Gobierno se oriente a transformar la estructura tradicional de desarrollo capitalista y dependiente para sustituirla por el inicio de la construcción del socialismo, con las características y modalidades que el propósito del pueblo chileno quiera imprimirle. Con tal propósito el Gobierno Popular ha planteado tres objetivos principales.

El primero se refiere a la reestructuración de la economía en tres áreas de propiedad: estatal, mixta y privada, de modo que el Estado se constituya en el centro efectivo de conducción de la economía y de la planificación de su desarrollo.

El área de propiedad estatal estará integrada por las actuales empresas estatales y las que se creen en el futuro, así como por las empresas monopólicas nacionales y extranjeras que se expropien, especialmente en el sector de nuestras riquezas básicas, de los bancos y las finanzas, la industria, la distribución, el comercio exterior y todas aquellas actividades estratégicas para el desarrollo nacional.

El área mixta estará constituida por empresas en que se combinen los capitales privados, nacionales y extranjeros, con capitales estatales y cuya administración y gestión se realicen conjuntamente. Su objetivo principal es permitir la combinación de intereses y recursos sociales con las iniciativas y capacidad empresariales, que se desea estimular y orientar en provecho nacional.

El área de propiedad privada estará constituida por la mayor parte de las empresas existentes, que permanecerán en ella, y cuyo tratamiento se ceñirá a las disposiciones legales sobre propiedad privada industrial y comercial. El Gobierno Popular se propone mantener y desarrollar las condiciones necesarias para asegurar a estas empresas la plena utilización de sus capacidades productivas y de empleo.

En segundo lugar, el Gobierno Popular desarrollará un vigoroso programa de redistribución de ingresos, destinado a satisfacer las legítimas demandas de las grandes mayorías nacionales y a sostener el desarrollo de nuestra economía bajo nuevos patrones de industrialización.

El tercer objetivo es el de acelerar, profundizar y ampliar el proceso de reforma agraria.

La situación de tenencia de la tierra en Chile, aún hoy día, resulta inaceptable, tanto por la extrema situación de injusticia que implica para la gran mayoría de campesinos como por las limitaciones que representa para el desarrollo de la producción agropecuaria.

Entre 1965 y 1970, la tasa de crecimiento de la producción agrícola alcanzó a un 2,8 por ciento, y la de la producción pecuaria a un 2,4 por ciento, con un promedio para el sector, en su conjunto, de un 2,6 por ciento, inferior al crecimiento demográfico y que contrasta con la meta de 6,3 por ciento postulada para el período por el plan de desarrollo agropecuario del gobierno anterior.

Tras esos resultados está el peso de latifundio y la presencia no menos extendida del minifundio, que exigen desarrollar principalmente formas de propiedad cooperativa de la tierra, o establecer haciendas estatales agrícolas cuando excepcionalmente sea necesario, e integrar a los campesinos organizados, tanto en la planificación y ejecución de la reforma agraria como en el propio desarrollo agropecuario y forestal.

Los objetivos básicos que se han señalado, configuran un nuevo esquema de desarrollo económico y social, auténticamente nacional e independiente, al servicio exclusivo de Chile y las grandes mayorías de su población.

[...]

Significación internacional de la experiencia chilena

Al emprender el camino de transformaciones socioeconómicas que hemos definido, no estamos pretendiendo poner a prueba nuevos esquemas de desarrollo cuya validez pueda trascender más allá de nuestras fronteras, puesto que este camino arranca de numerosas características singulares de la sociedad chilena. Hay, sin embargo, cuando menos un aspecto particular en que esta experiencia nuestra puede tener una significación mayor. Se trata de la conducta que respecto a ella tengan otros países y los círculos internacionales. El nuestro es el caso de un país latinoamericano que por los cauces institucionales que le son tradicionales, decide impulsar cambios profundos en su economía y en las relaciones sociales internas.

Se propone ejercer igualmente su derecho soberano para sostener y abrir vinculaciones económicas con todos los países del mundo sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Y en tales condiciones, no tiene por qué suponer que ello pueda plantearle situaciones de entorpecimiento con sus relaciones con ninguno de ellos.

Cuando planteamos la nacionalización del cobre, proponiendo las iniciativas legales pertinentes, no estamos desafiando a nadie, ni preparándonos para desviar hacia otras áreas corrientes tradicionales de comercio. Estamos simplemente recuperando para el país uno de sus recursos natura-

les más importantes. Poniendo bajo dominio de Chile una actividad fundamental para la economía del país, de la que derivan excedentes que son indispensables para ampliar y diversificar el resto de la economía interna —asegurándonos que quedarán para emplearse dentro de nuestro territorio recursos de gran cuantía que en el pasado han sido remitidos al exterior—, abriendo paso a una reestructuración económica en que la explotación del cobre no siga siendo una suerte de la isla dentro de la economía nacional, un enclave para decirlo con la afortunada expresión acuñada por la CEPAL.

Cuando definimos nuestra política respecto del capital extranjero, de los préstamos, de la inversión directa, no nos estamos proponiendo cancelar determinadas vinculaciones financieras y económicas. Estamos simplemente ejerciendo el legítimo derecho a señalar dónde y bajo qué condiciones interesan a Chile esas aportaciones.

Sin duda la opinión mundial y, particularmente, la opinión latinoamericana, mira atentamente a esta experiencia, tanto por su evolución en lo interno como por el contexto internacional en que en definitiva se desenvuelva. A este último respecto está bien definido lo que depende de nosotros mismos.

[...]

* * *

SALVADOR ALLENDE:
DISCURSO A LOS TRABAJADORES EN EL DÍA DEL TRABAJO
(1° de mayo de 1971)

(Tomo 2, pp. 773-784)

[...]

Consolidar el poder político traspasando los límites de la UP

Una parte del Estado está en manos de los trabajadores a través de los partidos populares y de la Central Unica, que representa todos los niveles de la organización sindical. Y si digo una parte del Estado es porque hay otros poderes independientes, como el Judicial o como el Legislativo, donde no tenemos mayoría. Por eso debe entenderse que, junto con las dificultades inherentes a esta realidad, hoy tenemos que fijarnos objetivos distintos. El primero de todos: consolidar el poder político. El segundo, ampliar ese poder político, el poder popular. Y hacer esto en la forma más efectiva y realista, de acuerdo a las condiciones chilenas.

[...]

Fortalecer el poder popular y consolidarlo significa hacer más poderosos los sindicatos con una nueva conciencia, la conciencia de que son un pilar fundamental del Gobierno, pero que no están dominados por él, sino que, conscientemente, participan, apoyan, ayudan y critican su acción.

Significa fortalecer el poder popular, organizar la movilización del pueblo, pero no tan sólo para los eventos electorales; movilizarlo diariamente porque el enfrentamiento de clases se produce todos los días, a todas horas, minuto a minuto. Y hay que tener conciencia de ello.

[...]

* * *

SALVADOR ALLENDE:
PRIMER MENSAJE AL CONGRESO NACIONAL (SELECCIÓN)
(21 de mayo de 1971)

(Tomo 2, pp. 802-821)

[A seis meses de inaugurado su gobierno, el Presidente Allende advierte al pueblo sobre la posibilidad de que la violencia reaccionaria clausure el proceso pacífico hacia el socialismo.]

[...]

La superación del capitalismo en Chile

Las circunstancias de Rusia en el año 17 y de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante.

La Rusia del año 17 tomó las decisiones que más afectaron a la historia contemporánea. Allí se llegó a pensar que la Europa atrasada podría encontrarse delante de la Europa avanzada, que la primera revolución socialista no se daría, necesariamente, en las entrañas de las potencias industriales. Allí se aceptó el reto y se edificó una de las formas de construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado.

Hoy nadie duda que, por esta vía, naciones con gran masa de población pueden, en períodos relativamente breves, romper con el atraso y ponerse a la altura de la civilización de nuestro tiempo. Los ejemplos de la URSS y de la República Popular China son elocuentes por sí mismos.

Como Rusia, entonces, Chile se encuentran ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista.

Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.

[...]

El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su con-

junto, el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales.

La violencia

El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obligado a utilizar las armas.

[...]

Si la violencia, interna o externa, la violencia en cualquiera de sus formas, física, económica, social o política llegara a amenazar nuestro normal desarrollo, y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que con legítimo orgullo y realismo histórico denominamos la vía chilena hacia el socialismo.

[...]

* * *

CHOU-EN-LAI:
DE LA ENTREVISTA AL PERIÓDICO MEXICANO *EXCELSIOR*
(6 de septiembre de 1971)

(Tomo 2, pp. 1054-1055)

[El líder chino habla sobre Chile.]

Allende: sólo el poder nominal

Ante el IX Congreso del Partido Comunista de China, en 1969, el Vicepresidente Lin Piao sostuvo "el principio fundamental marxista-leninista de tomar el poder mediante la fuerza armada". ¿Qué piensa usted de Salvador Allende, que eligió el camino de las urnas para llegar a la presidencia de Chile? ¿Y de Fidel Castro, que optó por la fuerza armada? ¿Qué clase de porvenir le augura China al socialismo por vía electoral?

La elección o votación es un fenómeno transitorio, pasajero. El Presidente Salvador Allende pudo encabezar el partido de la "Unidad Popular" y lograr una mayoría relativa, no absoluta.

[...]

"Quisiera llamar la atención de ustedes sobre otro hecho que me parece importante: si una pequeña parte de los militares chilenos sufre la influencia de las fuerzas agresoras del exterior, si no se tiene especial, esmerado cuidado en este problema, puede ocurrir algo grave en el país. Ese algo es el posible golpe militar.

[...]

"Pero volviendo a Chile, el Gobierno del Presidente Allende es democrático. Pero para nosotros, de acuerdo con nuestras concepciones, es imposible que un gobierno democrático logre su consolidación sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. En América latina han sido derrocados gobiernos democráticos de tendencia progresista en innumerables ocasiones. ¿O no es así?"

Fuerza armada propia

¿Por qué afirma usted que la elección es un fenómeno transitorio, pasajero?

"Porque la elección no consolida el poder por sí sola. Todo gobierno debe contar con su propia Fuerza Armada, democrática o proletaria, que lo asegure en el poder".

Peng-Jau, responsable del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene:

"El mismo Presidente Allende ha reconocido y así lo ha dicho: "He conquistado el Gobierno, no el poder".

Definitivo, Chou-En-Lai:

"Tiene razón el Presidente Allende".

Luego ¿Fidel Castro ha sido más eficaz que Allende en su toma del poder mediante la fuerza armada?

"Relativamente sí, en las condiciones de su propio país. Castro derrocó al reaccionario doméstico y vendepatrias Batista. Castro desarmó a su ejército (el de Batista). Se hizo del poder".

"Si el pueblo quiere levantarse contra el gobierno reaccionario, tiene pleno derecho. hay muchos ejemplos clásicos: Es el caso de Nasser contra la dinastía de Faruk, el caso de Fidel Castro contra Batista. Después del derrocamiento de Batista, cuando Castro nos pidió armas para prevenir la agresión extranjera, se las enviamos. También apoyamos al pueblo palestino.

"Pero en cada país lo importante, lo verdaderamente decisivo es la fuerza nativa, no la ayuda exterior, la revolución no puede ser importada, mientras las ideas revolucionarias no pueden ser bloqueadas".

[...]

LUIS CORVALÁN: "ES NECESARIO FORTALECER AÚN MÁS LAS FILAS DE LA CLASE OBRERA". DISCURSO EN EL ACTO DEL PARTIDO COMUNISTA REALIZADO EN EL TEATRO CAUPOLICÁN EL 22 DE OCTUBRE DE 1971

(Tomo 2, pp. 1038-1053)

[...]

El problema de desabastecimiento

Camaradas:

En el primer plano de las preocupaciones está también la cuestión del abastecimiento. En el mercado faltan o escasean algunos productos, como lanas para tejidos, nescafé, carne, leche condensada, etc.

Yo quisiera decir que en el Gobierno todo no marcha a la maravilla, que se cometen errores. [...]

Aumento del poder de compra

Hay más. Bajo el Gobierno de la Unidad Popular, gracias a su política de redistribución de los ingresos, de mejoramiento real de las remuneraciones y de contención del proceso inflacionista, ha aumentado apreciablemente el poder de compra de las masas populares. Ahora compran más que antes. Tienen plata para comprar más carne y más pollo y tantas otras cosas. La capacidad de consumo ha aumentado más o menos en un 20 por ciento.

[...]

Como ha dicho el Ministro de Economía, si el Gobierno le diera luz verde a las alzas de precios y se redujera por tanto el poder de compra de las masas, se podría lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de productos y hasta superabundancia de algunos artículos. Pero esa no es la gracia. La gracia consiste en mantener esta política de redistribución de ingresos y enfrentar los problemas que surgen en el camino sin volver atrás, al revés, echándole para adelante.

[...]

A constituir las Juntas de Abastecimiento

Llamamos a la constitución de miles y miles de Juntas de Abastecimiento, integradas por representantes de los Centros de Madres, de las Juntas de Vecinos, de los sindicatos y de los comerciantes, a fin de tomar conocimiento concreto y directo en cada barrio de los problemas del abastecimiento, de las cosas que faltan y de las que no faltan y aplicar medidas para asegurar la existencia de las mercaderías, todo esto en contacto con las autoridades respectivas del Gobierno, especialmente con la DIRINCO.

[...]

Derrotemos a los especuladores

Que no haya barrio, calle o cuadra que no esté bajo la atención de las Juntas de Abastecimientos, que no tengan su Junta encargada de vigilar y resolver favorablemente los problemas de abastecimiento y del control de los precios.

Todo debe venderse a los precios oficiales.

[...]

* * *

PARTIDO SOCIALISTA: RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL COMITÉ CENTRAL EN ALGARROBO (Noviembre 1971)

(Tomo 2, pp. 1212-1216)

[El Partido Socialista acuerda proponer el reemplazo del Congreso de la República por una Asamblea del Pueblo.]

[...]

La batalla de la producción debe ir aparejada indisolublemente con la batalla por la socialización.

2.— Constituye también un imperativo insoslayable la expropiación de toda la tierra que aún se encuentra en poder del latifundio, objetivo que debe alcanzarse en el próximo año. Este proceso no culminará con la creación de una gran capa de pequeña-burguesía propietaria, como lo soñara el reformismo freísta, sino con la aparición de formas de producción colectivas y solidarias en el agro chileno, garantizándose los derechos del campesinado y su plena incorporación al ejercicio del poder político y a las tareas de construcción de la nueva sociedad.

3.— La ofensiva que debe librarse en todos los frentes para liquidar la infraestructura capitalista y, por consiguiente, para crear nuevas formas de producción y relación social, encuentra su mayor obstáculo en la estructura jurídico-institucional del país, concebida precisamente para servir a los grandes propietarios y para custodiar sus intereses de clase. Por eso, ha llegado el momento de adecuar jurídicamente la institucionalidad chilena a las transformaciones revolucionarias que están remodelando nuestra sociedad.

Con este objeto, el Partido Socialista, ante el actual Parlamento que no representa ya a las mayorías nacionales y, por el contrario, ha pasado a constituirse en un bastión de la resistencia reaccionaria, propicia reformas constitucionales que contemplan la facultad del Presidente de la República para disolver el Congreso Nacional y el reemplazo de éste por la Asamblea del Pueblo; el establecimiento de los mecanismos adecuados para expropiar los monopolios industriales y comerciales, como asimismo las empresas estratégicas; y la incorporación del derecho de los trabajadores para participar en la gestión de las empresas, en el texto constitucional.

Estas reformas constitucionales generarán un verdadero enfrentamiento político entre el Gobierno Popular y las fuerzas reaccionarias internas y externas.

[...]

* * *

LUIS CORVALÁN: DISCURSO RADIAL SOBRE LAS ACCIONES CALLEJERAS DE LA OPOSICIÓN

(*El Siglo*, 4 de diciembre de 1971)

(Tomo 3, pp. 1387-1390)

[El Secretario General del Partido Comunista responde a la multitudinaria manifestación de las mujeres de derecha, denominada "Marcha de las Cacerolas Vacías", realizada el 1° de diciembre de 1971 en Santiago.]

[...]

No permitiremos otra asonada

La clase obrera y el pueblo de Chile están dispuestos a no permitir que vuelvan a salir bandas fascistas a la calle. No permitiremos otra asonada como la del miércoles. Estas no son simples palabras. Esta es la voluntad de millones de hombres y mujeres del pueblo, voluntad que compartimos plenamente los ciento cincuenta mil militantes de nuestro partido y el medio centenar de miles de aguerridos jóvenes comunistas.

Cada destacamento popular está resuelto a cumplir con su deber.

[...]

Los fascistas no pasarán.

En la cancha se verán los gallos.

* * *

FIDEL CASTRO: DISCURSO EN EL ACTO DE (SU) DESPEDIDA (DE CHILE)
(2 de diciembre de 1971)

(Tomo 3, pp. 1364-1385)

[La salida de Chile del comandante Castro coincide con la Marcha de las Cacerolas Vacías, la primera gran manifestación de masas de la oposición.]

Querido Presidente;
Revolucionarios chilenos;
Chilenos todos:
[...]

Hemos visitado a Chile no como turistas. Hemos visitado a Chile como revolucionarios, como amigos (aplausos), como solidarios de este proceso, como solidarios de este proceso y de este país. Hemos visitado a Chile —y en esto permítasenos una pequeñita discrepancia con el Presidente, pero no una discrepancia constitucional ni protocolar, sino simplemente conceptual. . . El dijo que no habíamos venido ni a aprender ni a enseñar.

Y la discrepancia es que si bien estamos absolutamente de acuerdo en que no vinimos a enseñar —y no sé qué clase de miedo tenían esos que andaban con los libelitos diciendo que no tenía nada que enseñarles, y que tal vez reflejaba una especie de complejo, un miedo subconsciente—, sin embargo, decimos con toda franqueza que hemos venido a aprender. (Aplausos).

Pero nadie piense que hemos venido a aprender algunas de las cosas que nos aconsejaban algunos libeluchos o algunos sesudos de las teorías políticas reaccionarias que decían que qué bueno que veníamos a aprender de elecciones, de parlamento, de libertades de determinadas de prensa, etc. Muy interesante la cuestión. Pero ya nosotros aprendimos bastante de todo eso, durante 50 años conocimos muchas de esas libertades burguesas, capitalistas y conocimos sus instituciones demasiado bien.

[...]

Pero, además, todas las sociedades, todos los sistemas sociales caducos, cuando estaban próximos a ser abolidos se defendieron y se defendieron con tremenda violencia a lo largo de la historia. Ningún sistema social se resignó a desaparecer de "motu proprio", ningún sistema social se resignó a las revoluciones. Y desde luego, por eso nosotros decíamos que algunas veces fueron buenos, sólo que hoy están condenados por la historia, están sencillamente caducos, son sencillamente anacrónicos.

[...]

Y nosotros, en la Universidad Técnica, a una pregunta contestamos que efectivamente nosotros no éramos demócratas representativos, no éra-

mos demócratas representativos, y mucho menos cuando ustedes saben perfectamente bien a quiénes se les ha llamado demócratas representativos en este continente (aplausos).

[...]

Y nosotros decíamos, y nosotros decíamos: en nuestro país nuestro pueblo no necesita que lo represente nadie, porque el pueblo se representa a sí mismo. (Aplausos).

Porque hay una diferencia entre el revolucionario y el reaccionario, y es que el revolucionario no miente, el revolucionario no puede mentir, el revolucionario vive de convicciones íntimas, de motivaciones profundas. Y la mentira es una violación del carácter, la mentira es una violación de los sentimientos más íntimos del hombre, la mentira es el arma de los que no tienen razón, la mentira, es el arma del que no tiene argumento, la mentira es el arma del que desprecia a los demás y, sobre todo, desprecia al pueblo. (Aplausos).

El arma del revolucionario es la verdad, el arma del revolucionario es la razón, el arma del revolucionario es la idea, el arma del revolucionario es el pensamiento, el arma del revolucionario es la conciencia, el arma del revolucionario es la cultura, el arma del revolucionario contemporáneo es la interpretación correcta de las leyes científicas que rigen la marcha de la sociedad humana. ¡Nosotros no mentimos ni mentiremos jamás! Y no tememos enfrentarnos en el campo de las ideas a ningún adversario. La verdad siempre saldrá victoriosa a la larga. Y la tarea del revolucionario es, en primer término, armar los espíritus, ¡armar los espíritus! Incluso ningún arma física tiene ningún valor si antes no están bien armados los espíritus. (Aplausos).

No intentamos siquiera que desde tal distancia se puedan comprender los problemas de nuestro país. No lo intentamos. No es, incluso, una cuestión fundamental. Pero sólo decimos que cuando hablamos de que sí vinimos a aprender, no veníamos a aprender cosas caducas ni anacrónicas en la historia de la humanidad (aplausos), ni nos interesa fundamentalmente el día o la hora, el cómo y el cuándo, los pueblos deciden barrer con los anacronismos. Nadie los barrerá en ninguna parte en tanto no puedan. Nadie puede barrerlos antes de tiempo. Ojalá siempre sean barridos lo más pronto posible. (Aplausos). Hemos venido a aprender en un proceso vivo, hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana, hemos venido a ver algo extraordinario, ¡algo extraordinario! En Chile está ocurriendo un proceso único, algo más que único: ¡insólito! Es el proceso de un cambio, es un proceso revolucionario, donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso

único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. No decimos en la historia de las sociedades contemporáneas: único en la historia de la humanidad, donde tratan de llevar a cabo el proceso revolucionario por los cánones legales y constitucionales, mediante las propias leyes establecidas por la sociedad, o por el sistema reaccionario, mediante el propio mecanismo, mediante las propias formas que los explotadores crearon para mantener su dominación de clases.

[...]

Porque es como hemos dicho en otras ocasiones que no son los revolucionarios los inventores de la violencia. Fue la sociedad de clases a lo largo de la historia la que creó, desarrolló e impuso su sistema, siempre mediante la represión y la violencia. Los inventores de la violencia fueron en todas las épocas los reaccionarios, los que impusieron a los pueblos la violencia fueron en todas las épocas los reaccionarios.

[...]

Ahora, para nosotros eso constituye un acontecimiento extraordinario.

Nos preguntaron en algunas ocasiones, de un modo académico, si considerábamos que aquí tenía lugar un proceso revolucionario. Y nosotros dijimos sin ninguna vacilación: sí. Pero cuando se inicia un proceso revolucionario, o cuando llega el momento en un país en que se produce lo que podemos llamar una crisis revolucionaria, entonces las luchas y las pugnas se agudizan tremendamente. Las leyes de la historia cobran su plena vigencia.

[...]

Ahora bien: la cuestión que obviamente se plantea —visto por un visitante— este proceso, es si acaso se cumplirá o no la ley histórica de la resistencia y de la violencia de los explotadores. Porque hemos dicho que no existe en la historia ningún caso en que los reaccionarios, los explotadores, los privilegiados de un sistema social, se resignen al cambio, se resignen pacíficamente a los cambios. De manera que ésta es una cuestión, a nuestro juicio, esencial, y un aspecto que ha ocupado nuestro interés, y algo en lo cual hemos estado aprendiendo, y aprendiendo mucho en estos días.

¡Sí, señores!, sobre todo los que me pedían que viniera a aprender. He aprendido mucho cómo funcionan las leyes sociales en los procesos revolucionarios, cómo reacciona cada sector y cómo luchan las diversas fuerzas. (Aplausos). Lo hemos vivido. Y lo hemos vivido aún en nuestra propia piel —y no porque me hayan atravesado la piel con ninguna pedrada o con ningún balazo, o porque me hayan quemado un poco. No he visto pasar ni de lejos una piedra. He sentido como visitante, como amigo, como

solidario, he sentido otro tipo de agresiones harto conocidas: de insultos, de campañas.

[...]

Pero, repito, hemos aprendido otra cosa, hemos aprendido la comprobación más de otra ley de la historia: hemos visto el fascismo en acción y hemos podido comprobar un principio contemporáneo: que la desesperación de los reaccionarios, la desesperación de los explotadores en el mundo de hoy —como ya se ha conocido nítidamente por la experiencia histórica— tiende hacia las forma más brutales, más bárbaras, de violencia y de reacción.

[...]

El fascismo en su violencia liquida todo, arremete contra las universidades, las clausura y las aplasta; arremete contra los intelectuales, los reprime y los persigue; arremete contra los partidos políticos; arremete contra las organizaciones sindicales; arremete contra todas las organizaciones de masas y las organizaciones culturales. De manera que nada hay más violento, ni más retrógrado ni más ilegal que el fascismo.

Y nosotros hemos podido ver en este insólito y único proceso cómo se manifiesta esa ley de la historia; que los reaccionarios, los explotadores, en su desesperación, apoyados fundamentalmente desde el exterior, genera y desarrolla este fenómeno político, esa corriente reaccionaria que es el fascismo.

Y les decimos con toda franqueza que hemos tenido la oportunidad de aprender y de ver el fascismo en acción. (Aplausos).

[...]

Hemos visto en el pueblo chileno cualidades que nuestro pueblo no tenía al comienzo de la revolución: más nivel cultural, más cultura política —escúchese bien—, más cultura política, mucha más cultura política; porque en nuestro país no existía la situación de Chile hoy día: la victoria en las urnas de los partidos marxistas, es decir, Partido Comunista, Partido Socialista y otras organizaciones que apoyaban a esos partidos. (Aplausos).

En el orden de la cultura política, ustedes han partido de un nivel mucho más alto que nosotros. Pero algo más: ustedes han partido de una tradición patriótica de 150 años, de una tradición nacional de 150 años; ustedes han partido de un nivel de patriotismo mucho más alto, de una valoración superior de las cuestiones de su país, de su patria.

[...]

La reacción, la oligarquía, está mucho más preparada de lo que estaba la de Cuba, mucho más organizada y mucho más equipada para

resistir los cambios desde el punto de vista ideológico. Ha creado todos los instrumentos para librar una batalla en todos los terrenos frente al avance del proceso; una batalla en el campo ideológico, una batalla en el campo político, una batalla en el campo de masas —fíjense bien—, una batalla en el campo de masas contra el proceso.

[...]

Y en estos instantes, desde nuestro punto de vista de observadores de este proceso, vemos que el fascismo trata de avanzar y ganar terreno en las capas medias, y tomar la calle. Algo más: trata de desmoralizar a los revolucionarios.

En algunos lugares nosotros hemos visto a los revolucionarios algo así como golpeados. En algunos lugares los hemos visto incluso desalentados. Si nosotros no fuésemos un hombre franco, si no fuésemos hombres que creyéramos en la verdad, no nos atreveríamos a decir esto. Pudiera parecer, incluso, que se dice algo que el adversario utiliza y gana terreno. ¡No! ¡El adversario gana terreno en el engaño, en la confusión, en la ignorancia, en la falta de conciencia de los problemas! (Aplausos).

Si quieren saber una opinión: el éxito o el fracaso de este insólito proceso dependerá de la batalla ideológica y de la lucha de masas, y dependerá de la habilidad, del arte y de la ciencia de los revolucionarios para sumar, para crecer y para ganarse las capas medias de la población (aplausos). Porque en nuestros países de relativo desarrollo, esas capas medias son numerosas y muchas veces son susceptibles de la mentira y del engaño. Ahora, en la lucha ideológica no se conquista a nadie sino con la verdad, con los argumentos, con la razón. Eso es una cosa incuestionable.

[...]

Hay algo que los conocedores de la guerra y de la historia, los profesionales de las armas saben, y es que en el combate el hombre es decisivo; en el combate los factores morales son decisivos; en el combate la moral del hombre es lo que decide. Los que conocen de la historia y los que conocen de las grandes proezas militares, saben que cuando la fuerza está unida y está inspirada y está profundamente motivada, es capaz de vencer cualquier obstáculo, de tomar cualquier posición, de hacer los más increíbles sacrificios.

[...]

Hemos avanzado y nos sentimos satisfechos. (Aplausos).

Pero si me permiten expresarles con toda sinceridad una de nuestra conclusiones y una de nuestras impresiones a ustedes, los chilenos, que son tan curiosos, que les interesan tanto las impresiones, les digo una impresión que me nace de los más profundo del alma: cuando veo la historia en

acción, cuando veo estas luchas, cuanto veo hasta qué punto los reaccionarios tratan de desarmar moralmente al pueblo, cómo se valen de tantos y tantos medios, desde el fondo de mi corazón sale una conclusión, y es que regresaré a Cuba más revolucionario de lo que vine. (Aplausos), regresaré a Cuba más radical de lo que vine, regresaré a Cuba más extremista de lo que vine. (Aplausos). Expreso palabras que quieren dar una idea, expreso palabras que quieren dar una idea. Cuando nosotros queremos expresar, tratamos de buscar una palabra que dé una idea.

[...]

Con los militares —y cuando decimos militares comprendemos a todas las armas, todos los institutos— dialogamos también ampliamente, pero tales diálogos se produjeron de manera absolutamente espontánea. Nadie los planificó. Fue el resultado de las atenciones oficiales, de las extraordinarias atenciones con que el Presidente, los ministros y las autoridades de Gobierno quisieron rodear la visita. Y en todas partes, en todos los aeropuertos, en todos los sitios, estaban presentes también los hombres de uniforme y sus representantes. (Aplausos).

[...]

Sólo podemos decirle, querido Presidente, a usted y a los chilenos, que con Cuba pueden contar (aplausos), con su solidaridad —¡con su solidaridad!— desinteresada e incondicional, con lo que esa bandera significa, con lo que esa patria significa, no la patria de los explotados sino la patria de los hombres libres, la patria donde una revolución ha llevado la igualdad y la justicia, la patria donde se ha reivindicado al hombre y se le ha dado un contenido inmenso de dignidad. A los que pretenden impugnar la legitimidad de esa revolución, que vean sus fuerzas y que expliquen cómo si no tenemos un pueblo consciente y unido, un pueblo que sabe lo que es la dignidad y la libertad, cómo hemos podido resistir culturalmente, políticamente y militarmente al poderoso imperio yanqui.

[...]

Y por ser hoy, 2 de diciembre, permítaseme terminar estas palabras como las terminamos siempre en Cuba:

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!

(Exclamaciones de: Fidel, Fidel y ovación).

* * *

SERGIO RAMOS (PC): CHILE, ¿UNA ECONOMÍA DE TRANSICIÓN? CAPÍTULOS VI Y VII, PP. 167 A 257

(Santiago, diciembre de 1971)

(Tomo 3, pp. 1393-1499)

[Desde el Partido Comunista toma fuerza en el periodo la idea de la hegemonía proletaria. La Dictadura del Proletariado es vista como imprescindible para realizar la transición al socialismo.]

Industrias manufactureras: Empresas bajo control estatal a fines de octubre, 1971 (por sectores y tipo de control)

1. *Sector de Industrias Alimenticias, Bebidas y Productos del Mar*

1	Cía. Pesquera Camanchaca	C	
2	Promar	A	
3	Cía. Pesquera Arauco S.A.	A	
4	Empresa Pesquera Tarapacá S.A.	A	
5	Pesqueras Unidas	A	
6	Sociedad Pesquera Stelaris	C	
7	Empresa Pesquera Indo	R	N
8	Empresa Pesquera Eperva	R	N
9	Sociedad Pesquera Guanaye	R	N
10	Pesquera Coloso	R	N
11	Marco Chilena	R	N
12	Pesquera Iquique	A	
13	Alimentos Purina de Chile S.A.	R	N
14	Vinex	C	
15	Interif	R	
16	Soleche	A	
17	Iansa	A	
18	Cocavi	R	
19	Pollos King	R	
20	Cecinas Loewer	C	
21	Cecinas Til	C	
22	Cía. Cervecerías Unidas	R	
23	Agua Mineral Cachantún	R	
24	Sociedad Chilena de Fertilizantes	A	

2. *Sector de Industrias de la Madera, Muebles, Papel y Celulosa*

1	Sociedad Forestal Quechumalal	A	
2	Celulosa Constitución S.A.	A	
3	Ind. Celulosa Arauco S.A.	A	
4	Forestal Arauco S.A.	A	
5	Forestal Pilpilco S.A.	A	
6	Soc. Forestal Lebu S.A.	A	
7	Industrias Forestales S.A.	A	
8	Papelera del Pacífico	A	
9	Bima	A	
10	Cimsa	C	
11	Emasil	C	
12	Impregnadora de Maderas	C	
13	Martonffi y Cía.	I	E
14	Easton	I	N
15	Novart	I	N
16	Montero	I	N
17	Ramsomes Chilena	C	

3. *Sector de Industrias Textiles y del Vestuario*

1	Yarur S.A.	R
2	Tejidos Caupolicán S.A.	R
3	Hirmas S.A.	R
4	Manufacturas Sumar S.A.	R
5	Rayón Said S.A.	R
6	Rayonhil	R
7	Textil Progreso	R
8	Paños Oveja Tomé	R
9	Fiap Tomé	E
10	Bellavista Tomé	E
11	Fabrilana	E
12	Lanera Austral Pta. Arenas	E
13	Larena Austral Coquimco	R
14	Est. Gastón Rudoff	N
15	SEDEMAR S.A.	C

4. *Industrias de Bienes de Capital y Metalmecánica*

1	Fábrica de Maquinarias	C
2	CAP	C

3	Industrial de Aceros Franklin	C	
4	Socometal	C	
5	Maestranza y Fundición Antof	C	
6	ASMAR	A	
7	FAMAE	A	
8	SGM	C	
9	Prodinsa	C	
10	INDAC	C	
11	INDESA	C	
12	Armco	C	
13	Ford Motor	R	
14	Indelco	R	E
15	Nibsa Nibco	C	
16	Morfholl	C	
17	Cormecánica	A	
18	Madeco	R	

5. *Industria de Materiales de Construcción*

1	Fca. de Cemento El Melón	R	N
2	Fca. de Cemento Cerro Blanco	R	N
3	INACESA	A	
4	INAPRECO	C	

6. *Otras Empresas Industriales*

1	INSA	C
2	MANESA	C
3	Petroquímica Chilena	A
4	Fca. de Acido Sulfúrico	A
5	IRT (Ex RCA)	C
6	Elecna	A
7	Editorial Quimantú	C

Notas

A : Pertenecía a CORFO antes del 4 de noviembre de 1970.
C : Adquirida posteriormente.
R : Requisada.
I : Intervenida.
E : Expropiada.
RN: Requisada. Negociación en curso.
[...]

Sergio Ramos (acerca de la dictadura del proletariado)

Esto es, para que el desarrollo capitalista (particularmente ahora el desarrollo del capitalismo monopolista de Estado) se transforme en inicio de la construcción socialista, además de la existencia de las bases materiales que genera, es condición inescapable el cambio del carácter de clase del Estado, tal que pase a representar prácticamente ("control obrero") los intereses de los productores directos y no los intereses capitalistas. Y para ello es necesario que el proletariado pueda *asegurar su hegemonía* en todos los terrenos, es decir, es necesario alcanzar *la dictadura del proletariado.* "La dictadura del proletariado es una *necesidad absoluta* durante la transición del capitalismo al socialismo, y esta verdad se ha visto confirmada plenamente en la práctica de nuestra revolución"[3] (subrayado S.R.).

Dependiendo, en consecuencia, del grado alcanzado por el desarrollo previo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo y teniendo presente los distintos instrumentos y aparatos de control que él genera y que se radican en el aparato del Estado principalmente, el paso a la construcción del socialismo requiere como "necesidad absoluta" el cambio en el carácter de clase del Estado, la subordinación completa de éste a los nuevos intereses de clase, es decir, la hegemonía del proletariado en todos los terrenos, o dicho más brevemente, la dictadura del proletariado.

En el particular caso chileno, dentro de todas sus peculiaridades y diferencias tantas veces enfatizadas, esta cuestión decisiva para la transición del socialismo, *sigue planteada en los mismo términos,* no varía ni un ápice respecto a lo que es esencial. Por ello es que parece necesario decir algo sobre interpretaciones que pudieran prestarse a confusiones en esta materia. En su primer mensaje ante el Congreso Nacional, el Presidente Allende expresó lo siguiente: '"Allí (en Rusia, 1917, S.R.) se aceptó el reto y se edificó *una de las formas de construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado. . .* Hoy nadie duda que, *por esta vía,* naciones con gran masa de población pueden, en períodos relativamente breves, romper con el atraso y ponerse a la altura de la civilización de nuestro tiempo. Los ejemplos de la URSS y de la República Popular China son elocuentes por sí mismos. . . Como Rusia entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de *iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista:* la vía revolucionaria nuestra, *la vía pluralista,* anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. . . Chile (donde se crearon las condiciones concretas para su logro. S.R.) es hoy primera nación de la tierra llamada a conformar el *segundo modelo de transición a la sociedad socialista. . .* estoy seguro que tendremos la energía y capacidad

necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la *primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático y pluralista y libertario*" (subrayado S.R.).

A nuestro juicio, del texto que hemos citado podrá surgir una conclusión errónea en términos de la tarea fundamental a cumplir para iniciar la transición al socialismo en el sentido de considerar innecesaria la fase de la dictadura del proletariado. En vez de ella, que es identificada como "una de las formas" para la construcción del socialismo, aparecería una segunda forma "una nueva manera" que sería la de un "modelo democrático, pluralista y libertario". Es del todo evidente que aquí existe una confusión entre lo que es la forma y lo que es la *esencia* de la dictadura del proletariado; lo que constituye la esencia de la dictadura del proletariado, la "necesidad absoluta" de su hegemonía en el período de la transición al socialismo, se confunde con las formas que esta hegemonía puede asumir y que en el caso de la Revolución Rusa es la de los Soviets de Obreros, Campesinos y Soldados. En otras circunstancias históricas concretas estas formas pudieran ser las del Ejército Rebelde transformado en Gobierno, o la forma de las Democracias Populares, o pudieran ser otras muy variadas incluyendo, por cierto, la "vía pluralista, democrática y libertaria", en la medida que las condiciones históricas concretas permitan que se ejerza incontrarrestablemente la dictadura del proletariado.

En este mismo sentido la dictadura del proletariado no es incompatible con el pluralismo, en la medida que asegurando siempre y en todos los terrenos los intereses de los productores directos (hegemonía del proletariado), permite la expresión de otros intereses sólo hasta el punto que ellos no pongan en peligro lo que es esencial: la dominación de la nueva clase. Más aún, la dictadura del proletariado es mucho más pluralista que la dictadura de la burguesía ya que ésta, por el propio desarrollo del capitalismo, el interés de la gran burguesía monopólica pasa a ser contradictoria incluso con los intereses (más inmediatos) de la burguesía media y pequeña. Por el contrario, los intereses del proletariado son coincidentes con los de estas capas de la burguesía y con las más amplias capas de trabajadores manuales e intelectuales, con lo cual las bases objetivas del pluralismo se amplían sustancialmente (sobre esto volvemos en un apartado posterior).

En consecuencia, incluso la comparación entre las formas que pueda asumir la dictadura del proletariado puede inducir a error, si se hace en términos de su carácter "democrático, pluralista y libertario", ya que en definitiva tal comparación de una u otra forma conduce a comparar conceptos formalmente iguales y esencialmente distintos, y sólo se explica como

contraposición si tras de ella afloran los contenidos que estos términos revisten en una sociedad capitalista.

En resumen, de todo lo que hasta aquí hemos dicho, nos parece evidente que respetando todas sus peculiaridades, la transición al socialismo en Chile debe pasar necesariamente (e inaugurarse) por la dictadura del proletariado, independientemente de la forma que ella pueda asumir. Esto significa que la tesis leninista de la necesidad de destruir el aparato del Estado de la burguesía para crear otro nuevo, es decir, cambiar radicalmente el contenido de clase del sistema de dominación es tan válido en Chile de hoy como en Rusia de 1917 para construir la sociedad socialista.

[...]

* * *

CONVERSACIÓN DEL EMBAJADOR A. V. BASOV CON REPRESENTANTES DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

(26 de diciembre de 1971)

(Tomado de "Chile en los Archivos de la URSS", documentos recopilados por Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 417-418.)

(Tomo 3, pp. 1747-1748)

[Transcripción de la conversación del embajador de la URSS en Chile, A. V. Basov, con los representantes del Partido Socialista A. Sepúlveda, O. Ulloa y H. del Canto.]

En el transcurso de la reunión sostenida, A. Sepúlveda, O. Ulloa y H. del Canto comunicaron que la directiva del PSCh había llegado a la conclusión de la no conveniencia en el momento actual de la visita de la delegación del PSCh a Moscú para negociaciones con el PCUS. La dirección del partido decidió no discutir en este momento la carta entregada por C. Altamirano. El tema de la visita podría volverse a plantear a principios del 1972, cuando la situación política interior sea más favorable.

Sin embargo, los dirigentes socialistas expresaron sus esperanzas de que el camarada Kirilenko, al llegar a Chile, podría recibirlos para un intercambio de opiniones sobre algunos problemas y analizar ciertos aspectos del desarrollo de colaboración entre nuestros partidos.

Según nuestros interlocutores, la situación política en el país no es favorable para las fuerzas de izquierda y para el gobierno de la Unidad Popular.

A. Sepúlveda opinó que si después de las elecciones y de la llegada de S. Allende a la presidencia la reacción había temblado, preocupada por su futuro, al término del primer año de la permanencia de la Unidad Popular en el poder, la oposición y las fuerzas de derecha reaccionarias se consolidaron y a plena voz manifiestan su fuerza. Los acontecimientos del 1 de enero han demostrado que pasaron a la ofensiva, mientras que la izquierda se encuentra a la defensiva. Durante el año recién terminado la influencia del bloque de la Unidad Popular disminuyó en amplios sectores de pequeños y medianos propietarios, y entre los pequeños campesinos y artesanos. De hecho, la base social del bloque la constituye, principalmente, la clase obrera.

Los dirigentes socialistas destacaron los éxitos de la derecha en la propaganda. Por otra parte, una situación peligrosa se está creando en el sur

del país, donde los pequeños propietarios suspendieron la producción para el mercado. Según los dirigentes del PSCh, esta situación se hizo posible sólo como resultado del avance *demasiado lento* del proceso revolucionario por parte del bloque de izquierda. Nuestros interlocutores consideran que la UP debe *activar el proceso revolucionario*, entusiasmar las masas y guiarlas hacia adelante.

H. del Canto se refirió a la situación en Chuquicamata. Según él, la clase obrera de esta empresa está muy afectada por el economicismo; el colectivo privilegiado de esta empresa expuso al gobierno las exigencias inaceptables (aumento del salario en 50%); el gobierno está dispuesto a aumentarlo en 22%. De no llegar a un acuerdo antes del 30 de diciembre, los trabajadores comenzarán una huelga a partir del 1 de enero.

Firmas: Puchkov, Pastujov

* * *

General José María Sepúlveda (Director General de Carabineros): Intervención en la Cámara de Diputados en relación a la acusación contra el Ministro del Interior José Tohá

(Enero de 1972)

(Tomo 3, p. 1845)

...Yo no he visto ninguna organización que haya interferido la acción o actuación de Carabineros. Carabineros tiene una misión expresamente establecida en la Constitución Política del Estado, cual es la de guardar el orden público y la propiedad dentro del territorio de la República. Lógicamente, entonces, ante cualquiera organización o grupo que se opusiera a la actividad normal de Carabineros, tendría que procederse a su detención. No he visto yo que se haya interferido la acción de Carabineros. No podría ser. No me lo imagino, salvo que existiera otra policía análoga, como existen en otros países, que tienen diferentes roles. Pero aquí en Chile hay una sola, unitaria. . .

(Acta de la Comisión Acusadora, pág. 18.)

* * *

ANDREJ KIRILENKO (SECRETARIO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA, MIEMBRO DEL BURÓ POLÍTICO Y DEL SOVIET SUPREMO): DISCURSO EN EL ACTO DE MASAS EN CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (2 de enero de 1972)

(Tomo 3, pp. 1765-1772)

Queridos camaradas y amigos:

[...]

Saludamos cordialmente a la delegación del Partido Socialista de Chile, aquí presente, al que los comunistas están unidos por lazos de la lucha sostenida en común durante largos años para hacer realidad los intereses vitales y los ideales avanzados de la clase obrera, para liberar al pueblo de la opresión de los imperialistas y de los monopolios y la oligarquía latifundista locales, para pasar a la edificación de la nueva sociedad.

Saludamos afectuosamente a los representantes de los demás partidos de la coalición de la Unidad Popular, que juntamente con los comunistas y los socialistas tratan de alcanzar los sublimes y nobles objetivos de la revolución chilena.

[...]

Fidelidad a la causa de los trabajadores

[...]

Al destacar la importancia de este acontecimiento, el camarada Leonid Brézhnev, Secretario General del CC del PCUS, dijo en el XXIV Congreso de nuestro partido que "en Chile, por primera vez en toda la historia del continente, el pueblo ha logrado por vía constitucional la formación de un gobierno al que quiere y en el que tiene confianza". El Gobierno Popular ha proclamado fines socialistas. La realización de transformaciones revolucionarias en Chile es una nueva página en la creación del mundo socialista. Los pueblos siguen con gran atención vuestra actividad transformadora y os desean un éxito completo.

[...]

La experiencia de Chile

[...]

La actividad del Partido Comunista de Chile es un ejemplo de aplicación creadora de los postulados fundamentales del marxismo-leninismo

en las condiciones concretas de su país; el partido hace una aportación sustancial al arsenal internacional de formas y métodos de solución de los problemas socioeconómicos candentes y al tesoro de experiencia colectiva de los partidos comunistas y obreros. Aplicando una línea marxista-leninista, el partido rechaza con energía tanto la presión burguesa como las intrigas oportunistas de derecha y de "izquierda".

[...]

Solidaridad del PC de la URSS

Podéis estar seguros de que los comunistas soviéticos y todos los soviéticos darán constantemente pruebas de solidaridad con la lucha de las masas populares de Chile, igual que con la de los demás países. ¡Vemos en ello nuestro deber de revolucionarios, de marxistas-leninistas!

[...]

Cumplir acuerdos del XXIV Congreso

Queridos camaradas: Permitidme exponer, aunque sea someramente, en esta reunión solemne, las tareas que se están cumpliendo actualmente en nuestro país. En cuanto a las cuestiones interiores, los comunistas soviéticos, todo el pueblo soviético, concentran hoy sus fuerzas y su atención en el cumplimiento de los acuerdos del XXIV Congreso de nuestro partido, que ha trazado un programa de construcción sucesiva del comunismo. Ahora podemos hacer planes grandiosos porque nos apoyamos en los resultados de nuestra lucha y de nuestro abnegado trabajo en las etapas anteriores.

[...]

Estamos cumpliendo

[...]

Queridos camaradas: Para terminar, permitidme que felicite calurosamente una vez más al fraterno Partido Comunista de Chile con motivo de la gloriosa efemérides y os desee de todo corazón nuevos éxitos en la lucha por llevar hasta el fin las transformaciones proyectadas por la coalición de la Unidad Popular en beneficio de los trabajadores, en bien de la independencia nacional y del progreso social.

¡Viva el fraterno Partido Comunista de Chile!

¡Viva la amistad de los pueblos soviético y chileno!

¡Viva el marxismo-leninismo!

* * *

CONVERSACIÓN DEL MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA SOVIÉTICA CON EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE

(25 de enero de 1972)

(Tomado de "Chile en los Archivos de la URSS", documentos recopilados por Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 421-422.)

(Tomo 3, pp. 1859-1860)

[Transcripción de la conversación de I. B. Puchkov con Hugo Cubillos, director del Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.]

Absolutamente confidencial

Por la invitación de H. Cubillos, sostuve una reunión con él en el Ministerio de RR. EE. de Chile.

H. Cubillos comunicó que el Presidente S. Allende, a través del embajador de Chile ante la URSS, G. Pedregal, dirigió una carta al camarada L. Brezhnev. Sin embargo, a raíz de la enfermedad de Pedregal, su encuentro con el camarada L. Brezhnev aún no se había celebrado.

En la carta, según H. Cubillos, el Presidente de Chile se refiere a los siguientes problemas:

1. S. Allende comunica que con gran agradecimiento acepta la invitación de visitar la Unión Soviética. No obstante, en la carta no se mencionan los plazos concretos de esta visita.

2. Según el acuerdo alcanzado durante la visita a Moscú, en noviembre de 1971, de los camaradas Millas y J. Cademártori, el Presidente S. Allende formuló la invitación oficial para recibir en Chile en enero de 1972 a una delegación soviética económica de más alto nivel.**

3. S. Allende agradece a los dirigentes de la Unión Soviética por haber resuelto rápidamente su petición de otorgar un crédito a corto plazo de 50 millones de dólares.

Hugo Cubillos dijo que entre todos los temas mencionados en la carta de S. Allende enviada a nombre de L. Brezhnev, el problema más urgente es la invitación a Chile de la delegación económica soviética (quedan solamente dos semanas hasta su llegada). H. Cubillos pidió informar a Moscú que S. Allende reitera la invitación para la delegación económica soviética en los plazos anteriormente mencionados.

Además, nuestro interlocutor destacó que S. Allende atribuye una importancia política enorme a la visita de la delegación soviética. Según

Cubillos, el Presidente S. Allende considera que durante la estadía de la delegación económica soviética en Chile deberían discutirse las medidas concretas para el desarrollo de la colaboración económica entre Chile y la URSS en el marco del protocolo, firmado en Moscú en mayo de 1971, y establecer las directrices principales de esta colaboración para los próximos 5 años.

Según informó H. Cubillos, la parte chilena será representada en las negociaciones por el Ministro de Relaciones Exteriores, C. Almeyda, el Ministro de Economía, P. Vuskovic, el Ministro de Hacienda, A. Zorrilla, así como dirigentes de ODEPLAN y del Banco Central de Chile y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los ministerios del área económica.

H. Cubillos destacó que la parte chilena se está preparando intensamente para las próximas negociaciones. Se han creado varios grupos de trabajo que están elaborando las propuestas a discutir en las negociaciones. [...]

H. Cubillos pidió informar sobre la composición de la delegación económica soviética con anticipación.

I. Puchkov

* * *

CONVERSACIÓN DEL EMBAJADOR A. V. BASOV CON VOLODIA TEITELBOIM

(25 de enero de 1972)

(Tomado de "Chile en los Archivos de la URSS", documentos recopilados por Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 419-420.)

(Tomo 3, pp. 1857-1858)

[Transcripción de las conversaciones del embajador de la URSS, A. V. Basov, con Volodia Teitelboim.]

Confidencial

En la conversación V. Teitelboim se refirió a las relaciones entre el PDC y la Unidad Popular destacando los esfuerzos del Gobierno para desarrollar contactos y dialogar con la nueva directiva del PDC. El mismo Teitelboim había sostenido cuatro reuniones con los dirigentes del PDC.

La iniciativa de preparar dichas reuniones pertenecía plenamente al PCCh, pero sobre su realización han sido informadas las directivas de todos los partidos integrantes del bloque de la Unidad Popular, así como el Presidente S. Allende, que demostró un gran interés hacia ellas.

Según Teitelboim, los resultados positivos de las reuniones consisten en la resolución del conflicto en la Universidad de Chile (la creación de una comisión constituida por los representantes del PDC y la Unidad Popular), la creación de una comisión mixta para revelar los hechos de violación de la legislación por los órganos del poder local. También fueron emprendidos pasos prácticos con el objeto de impedir la huelga en Chuquicamata, y fue aprobada la decisión de crear una comisión mixta para implementar la ley sobre las tres formas de propiedad. Como resultado de las negociaciones, se logró poner término a los insultos y ataques mutuos en la prensa.

Destacando que al PCCh y el PDC los une el rechazo al fascismo, V. Teitelboim se refirió a las cualidades de Fuentealba como un político inteligente y flexible, pero que cae fácilmente bajo la influencia de los demás. Según V. Teitelboim, es una persona impulsiva, "duro" en relación al gobierno de Allende.

El primer vicepresidente del PDC, Osvaldo Olguín, *se encuentra* en posiciones más flexibles. Olguín habla abiertamente sobre los intentos de la penetración de los elementos fascistas en el PDC. Según Olguín, en la provincia de Antofagasta fueron expulsados cuatro activistas del PDC por pertenecer a "Patria y Libertad". Los expulsados tienen automóviles y mu-

cho dinero, lo que evidencia su vinculación con las organizaciones extranjeras y la CIA.

Teitelboim subrayó que Olguín defendía la idea de la posibilidad de una amplia colaboración entre el PDC y la UP en el futuro, incluyendo una eventual integración de todo el PDC a la Unidad Popular.

Según nuestro interlocutor, B. Leighton también expresó sus preocupaciones de una posible fascistización del PDC, sugiriendo analogías entre la situación política actual en Chile con la situación en España en vísperas del estallido de la guerra civil.

Leighton recordó las palabras de Gil Robles (líder de la oposición española del período de la guerra civil), que le había advertido en una conversación personal de que detrás de los partidos políticos siempre actúan fuerzas que son capaces de provocar fuertes confrontaciones e incluso la guerra civil. En el caso chileno, Leighton relacionó con estas fuerzas a E. Frei, quien, según él, más aspira a satisfacer sus propias ambiciones políticas que lo que se preocupa por el prestigio de todo el movimiento democratacristiano en general.

En cuanto a Tomic, éste, según Teitelboim, trata de dar recomendaciones tanto a la UP como a su partido, pero que no son más que “consejos desde lejos” por su imposibilidad de influir seriamente en el actuar de la presente dirección.

A la reunión asistieron también el ministro consejero de la Embajada I. B. Puchkov y el funcionario diplomático G. I. Korochkin.

* * *

UNIDAD POPULAR (COMITÉ NACIONAL): LA DECLARACIÓN DE EL ARRAYÁN

(9 de febrero de 1972)

(Tomo 3, pp. 1976-1993)

[Las resoluciones de este encuentro se acercan a una línea proclive de acuerdos con la clase media.]

La Dirección Política de la Unidad Popular examinó los avances registrados desde el comienzo del Gobierno Popular, los problemas surgidos, las debilidades y errores en que se han incurrido; las perspectivas próximas y de más largo alcance del proceso de transformaciones iniciado y las tareas que todo ello plantea al Gobierno, a las organizaciones políticas que integran la Unidad Popular y a los trabajadores y el pueblo chileno en general. Los debates se caracterizaron por la objetividad de análisis y por un espíritu franco y abierto a la crítica y autocrítica constructivas.

[...]

Fortalecimiento interno de la Unidad Popular y su proyección en los sectores populares y capas medias

[...]

La necesidad y posibilidad de lograrlo descansa en la naturaleza misma del Programa de la Unidad Popular, que surgió de las luchas de la clase obrera y del pueblo, por sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas y por sus derechos individuales y sociales y representa, objetivamente, los intereses de la gran mayoría de la población chilena.

[...]

La lucha ideológica y nuestra voluntad común de desterrar el sectarismo, el burocratismo y la deshonestidad

[...]

El cumplimiento de estas metas básicas, así como de las demás señaladas en este documento, sería una utopía si no somos capaces de librar una dura batalla ideológica en el seno de las masas, que lleve a la comprensión integral del proceso revolucionario que estamos viviendo. Y en esto reconocemos que hemos sido remisos.

[...]

El pueblo no siempre adquiere conciencia de que esta batalla ideológica es el enfrentamiento entre quienes defienden la mantención de un estado de cosas que nunca lo favoreció y quienes buscan el progreso de la mayoría y la abolición de los privilegios, entre quienes siguen amparando las pretensiones imperialistas y quienes buscan una patria soberana e independiente.

A esta lucha diaria, la Unidad Popular habrá de darle una máxima prioridad.

En 1971 se registraron avances decisivos en el cumplimiento del programa

[...]

Grandes éxitos se han logrado también en el frente social. Entre el Ministerio de la Vivienda, la CORA, el SINAP y otras entidades, se inició en 1971 la construcción de alrededor de 100 mil viviendas, cifra sin precedentes, que significará solucionar los problemas habitacionales a más de 500 mil personas.

La expansión de la educación también fue la más alta que se conoce, la enseñanza media técnico-profesional aumentó en 38 por ciento su matrícula, la enseñanza universitaria se expandió en 28 por ciento; la escolaridad en la enseñanza básica fue de 98 por ciento en el tramo de 6 a 14 años. En 1972, entre las escuelas técnico-profesionales medias y las universidades, se dará educación a 250 mil jóvenes. Por otra parte el tradicional drenaje de profesionales chilenos ha disminuido a menos de un tercio y son muchos los que han regresado al comprobar la existencia de grandes tareas en su patria. Esta es la respuesta frente a un esfuerzo de desarrollo y a la salida del país de algunos profesionales reaccionarios.

Los éxitos anteriores han significado dar ocupación a 200 mil nuevos trabajadores. Hoy día tienen empleo remunerado 3.140.000 chilenos. Nunca antes un Gobierno pudo mostrar en su primer año estas realizaciones.

Ya tenemos bajo control de la sociedad sectores fundamentales que estaban en manos de intereses imperialistas o grupos monopólicos: el cobre, el hierro, el salitre, el carbón, la siderurgia, casi todo el sistema bancario, grandes empresas del cemento y otros materiales de construcción, textiles, pesqueras. Se expropiaron 1.378 latifundios con casi dos millones seiscientos mil hectáreas, lo que equivale a todo lo que el Gobierno anterior hizo en seis años. Los sectores no reformados de la agricultura recibieron una asistencia 58 por ciento superior.

Simultáneamente, se alcanzó un crecimiento del producto nacional cercano a 9 por ciento y un aumento de la producción industrial del orden del 13 por ciento. La tasa de desocupación disminuye del 8,3 por ciento al 3,8 por ciento. El ingreso real se elevó 20 por ciento y el nivel de consumo de los asalariados aumentó 13 por ciento, con lo cual los obreros y empleados pasaron a controlar el 60 por ciento de la renta nacional, contra un 51 por ciento anterior. Los aumentos de precios fueron sustancialmente menores a los de 1970.

[...]

Era indispensable liberar al país de la dominación imperialista, rescatando nuestros recursos básicos; liberar la capacidad de nuestra tierra, desperdiciada por el latifundio; liberar la industria y otros importantes instrumentos del control del dominio monopólico. En esas tareas se dieron pasos trascentales en 1971, sin perjuicio de que quedan todavía otras similares muy importantes por cumplir. Entretanto, a cada tarea liberadora tienen que seguir necesariamente tareas de construcción revolucionaria, las que han quedado apenas iniciadas en 1971. De ahí que los avances que se registran hasta ahora representan sólo una fracción de la potencialidad abierta por lo que se ha hecho hasta la fecha.

[...]

Los objetivos principales para 1972: profundizar el proceso con la incorporación real y masiva de los trabajadores a todos los niveles de decisión, completar lo esencial del área de propiedad social, afianzar el mejoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores, sentar bases más firmes para el desarrollo futuro [...].

[...]

Todo ello justifica la decisión que ahora se reitera de avanzar rápidamente a fin de completar, en los próximos meses, los cambios institucionales comprometidos en el Programa. En la agricultura, ello significa realizar la expropiación de todos los predios mayores de ochenta hectáreas de riego básicas del modo más rápido posible. Esto representa unos dos mil predios, a lo que hay que agregar cierto número adicional que son ofrecidos voluntariamente por sus propietarios o que están abandonados. Se emprenderá esta acción en estrecho contacto con los campesinos y sus organizaciones, especialmente a través de sus Consejos Comunales y Provinciales; y se la enmarcará, como hasta ahora en la legislación vigente, no obstante las imperfecciones de la ley y los muchos problemas que plantean los campesinos con respecto a sus limitaciones y sin perjuicio del nuevo proyecto que

el Gobierno presentará al Congreso respecto de la asignación de la tierra, ella se ajustará a la voluntad de los campesinos.

Reafirmamos nuestra política contraria a las tomas indiscriminadas de predios, que dificultan el proceso de la Reforma Agraria y no resuelven los problemas de los campesinos.

En el caso del sector industrial reiteramos la decisión de que se incorporen al área social o mixta las empresas cuya lista fue dada a conocer públicamente por el Presidente de la República, sobre la base de una movilización efectiva de sus trabajadores.

El objetivo de afianzar el mejoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores, se expresa concretamente en diversos planos. Está, en primer lugar, la política de remuneraciones, cuyos términos esenciales quedaron definidos en el Acta CUT-Gobierno. Respecto de ella, cabe señalar que suponen una nueva redistribución del ingreso en favor de los trabajadores. En razón de las limitaciones reales del sistema económico, que excede aquellos términos, no representaría mejoramientos adicionales efectivos para los trabajadores. El mismo objetivo de elevar las condiciones de vida se logra, también, por otros mecanismos importantes, distintos de la remuneración individual: la construcción de viviendas, la extensión de la educación, la formación profesional, el mayor acceso de los trabajadores a medios de descanso y recreación y, también, los esfuerzos para mejorar el abastecimiento y la distribución en los barrios populares, así como la lucha contra la especulación, con la participación activa de la propia población, a través de las Juntas de Abastecimiento y Precios.

Por último, la política económica no se limitará a cumplir objetivos inmediatos, sino también a fortalecer la capacidad para asegurar la continuidad de un crecimiento sostenido y para superar definitivamente algunas limitaciones heredadas.

Los principales elementos de la política económica para 1972

[...]

La política hacia los pequeños y medianos empresarios

En las tareas que se enuncian, la dirección política de la Unidad Popular reconoce un lugar legítimo de permanencia y desarrollo a las amplias capas de pequeños y medianos empresarios. Se ha reiterado una y otra vez que el Programa no es contradictorio con los intereses del sector privado no monopólico, cuyas contradicciones efectivas se han dado histórica-

mente y siguen dándose con las grandes empresas monopólicas de la producción y la distribución.

Sin embargo, esas bases objetivas no han llevado hasta ahora a un entendimiento generalizado y a formas de trabajo conjunto sistemático entre los organismos administrativos de Gobierno y las organizaciones gremiales representativas de esos empresarios. Ha sido más fuerte la penetración ideológica de la reacción, que ha arrastrado a algunas de estas últimas, por encima de sus verdaderos intereses, a solidarizar con la gran burguesía monopólica y sumarse a un heterogéneo Frente Nacional del Area Privada.

No obstante, se han dado recientemente pasos significativos para favorecer ese entendimiento y se reitera la voluntad de profundizarlos. El Estatuto de la Pequeña Industria y la Artesanía, suscrito con la AMPICH, incorpora viejas aspiraciones de esos sectores, les da garantías y establece diversas formas positivas de apoyo y fomento, mediante disposiciones que deben ponerse en marcha con la mayor rapidez posible. La definición explícita del ámbito de las áreas social y mixta, mediante la publicación de la lista de empresas que deben incorporarse a ellas de conformidad con los lineamientos básicos del Programa, disipa toda campaña de incertidumbre que ha sido hábilmente alimentada por la prensa reaccionaria. Se reitera, también, la disposición a suscribir con el comercio detallista un estatuto similar al acordado con la pequeña industria. Más allá de las garantías, están igualmente abiertas las posibilidades de una amplia y permanente participación de los pequeños y medianos empresarios, a través de canales que les permitan expresan sus problemas, iniciativas y sugerencias y reconocer, oportunamente, sus requerimientos para asegurarles el abastecimiento de materias primas, equipos y créditos. Se ha adelantado en esa dirección al reestructurar el Consejo Nacional de Desarrollo, invitando a la representación de AMPICH y CONPIA en sustitución de organismos que, como la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y el Comercio, responden en los hechos a los grandes intereses monopólicos. Es necesario complementar esa participación extendiéndola a los demás niveles, como los comités sectoriales de la CORFO, el Servicio de Cooperación Técnica y otros similares.

Igual ocurre con los pequeños y medianos agricultores, sector que representa cerca del 40% de la población agraria del país. Para ellos, las líneas fundamentales de la política del Gobierno Popular se reiteran asegurando la inexpropiabilidad de sus predios; la rápida extensión de los beneficios del sistema previsional, que el Gobierno les ha otorgado a través de la legislación; el fomento del sistema cooperativo, con asignación de tierras a aquellas cooperativas que no estén en condiciones de producir suficiente-

mente con los recursos de tierras que ahora tienen en sus manos; y con la ampliación de las líneas de crédito, tanto de producción como de capitalización y asistencia técnica, de acuerdo a las condiciones de las distintas regiones del país y dando especial atención a los créditos de fomento ganadero. Se redoblarán, asimismo, los esfuerzos para resolver los problemas de la población indígena, que por generaciones venía siendo menoscabada en sus derechos y su dignidad y de la cual el medio millón de personas que la constituye estaba reducido a una condición de miseria y explotación. De ahí el empeño del Gobierno Popular para acelerar el proceso de recuperación de las tierras usurpadas a las comunidades mapuches e incrementar significativamente los recursos educacionales destinados a ellas. Esta labor ha culminado con la proposición al Parlamento de una nueva legislación indígena elaborada con plena participación de esa población y que tiende a corregir la condición de ciudadanos de segunda categoría en que han vivido hasta ahora. La mayoría reaccionaria del Senado está tratando de desnaturalizar ese proyecto.

[...]

La mujer y la juventud protagonistas y destinatarios del esfuerzo del Gobierno Popular

Todo el sentido de este esfuerzo de transformación y construcción revolucionaria tiene como protagonistas y destinatarios importantes a la mujer y la juventud. En la reunión de la dirección política de la Unidad Popular se consideraron con especial detenimiento los problemas que las afectan y la necesidad de aumentar su participación directa para superarlos.

Se hace necesario entregar más atribuciones, recursos y poder de decisión a las organizaciones a través de las cuales se expresan hoy día las mujeres, y entre ellas a las Uniones Comunales, Federaciones Provinciales y Confederación Nacional de Centros de Madres, las comisiones femeninas de todos los Consejos de la Central Unica de Trabajadores y otras organizaciones de la mujer.

La igualdad plena de la mujer, la protección a su familia e hijos, la defensa de la madre soltera, su igualdad de oportunidades y remuneración en el trabajo, son conquistas y aspiraciones que la Unidad Popular ha impulsado con decisión. Sus resultados serán necesariamente ilimitados en tanto no se profundicen los cambios del sistema mismo y se avance en la construcción de una sociedad socialista, lo que hace que la mujer sea objetivamente la más interesada en esa transformación revolucionaria.

Hay que redoblar, asimismo, el esfuerzo para concretar tareas ya planteadas en beneficio de los niños y de los jóvenes e impulsar otras nuevas, en el campo de la educación, del deporte, de la cultura, de la participación activa y plena de la juventud en el proceso que vivimos.

Es urgente multiplicar el número de jardines infantiles, tanto mediante la acción de los organismos administrativos correspondientes como recogiendo las iniciativas que surjan desde la misma población. El medio litro de leche es un primer paso en una política que tiene que extenderse urgentemente, con vistas a asegurar la igualdad efectiva de la infancia en su condición básica de la vida y sus posibilidades de desarrollo físico e intelectual. Sin embargo, estamos conscientes de que aún esta medida no se ha cumplido en plenitud, debido al burocratismo y la falta de una comprensión integral de su importancia, lo que estamos dispuestos a corregir para que nuestras medidas no queden en el papel. Tenemos el decidido propósito de asegurar a cada niño, independientemente de la situación ocupacional o el ingreso de sus padres, un número creciente de productos y servicios.

[...]

La participación de pueblo y el carácter del Estado

[...]

Muchas tareas concretas quedarán, así, entregadas al pueblo mismo, bajo formas de participación que irán cambiando el carácter y la naturaleza del Estado. Es en ese cuadro, que cabe iniciar jornadas de planificación, en las que se discutan los problemas de la población o el centro productivo, se impulsen iniciativas a las que tiene que responder el aparato administrativo, se propongan metas y se organice el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores. Así se resolverán conjuntamente los problemas de movilización, participación, planificación popular y consultas.

Desde la base se construye el socialismo

[...]

Es nuestra firme decisión, que tales características se confirmen y profundicen en el trabajo que nos queda por delante, que será aún más difícil que el realizado hasta el presente, debido a las restricciones objetivas de que ya hemos dado cuenta. Para ello, reforzaremos con todo el ahínco de que seamos capaces de aplicación del método que nuestros principios y la experiencia histórica señalan, como la más adecuada herramienta revolucionaria: el trabajo de las masas. Estudiar todo con las masas, resolverlo todo

con ellas. Esta será nuestra línea fundamental de conducta, cada vez más generalizada y profunda. De las bases del pueblo no sólo deben emanar impulsos revolucionarios generales. Desde allí nacerán, también, decisiones específicas, cuya ejecución deberá ser practicada o controlada por las masas en forma cada vez más directa.

Creemos que han quedado claras las dificultades inherentes a un proceso revolucionario en marcha, como el actual. Tenemos fe en el pueblo, para superar con él los problemas. Llamamos a la conciencia de toda la gente de izquierda, a comprender que no es el momento de levantar falsas alternativas frente a la conducción política, que la clase trabajadora ha entregado a la Unidad Popular en este momento histórico. Pretender hacerlo es dividir las fuerzas del pueblo y entregarles ventajas a la reacción y el imperialismo.

[...]

Santiago, 9 de febrero de 1972

* * *

PARTIDO SOCIALISTA: INFORME DEL COMITÉ CENTRAL AL PLENO DE ALGARROBO

(Febrero de 1972)

(Tomo 3, pp. 1914-1966)

[El Partido Socialista intenta obtener mayores cuotas de poder político para acelerar el proceso revolucionario.]

[...]

Somos partidarios del socialismo y de su etapa superior: el comunismo. Queremos que los medios de producción pasen a manos de los trabajadores, para lo cual debemos arrebatárselos a los capitalistas, porque éstos no los entregarán gratuitamente. El Estado es el instrumento de los capitalistas para imponerles su sistema a las grandes mayorías de trabajadores. Está organizado y concebido de forma que la clase minoritaria y explotadora, ejerce una dictadura sobre los explotados basada en dos pilares fundamentales: la burocracia y el aparato represivo.

[...] el Estado burgués en Chile no sirve para construir el socialismo, y es necesaria su destrucción. Para construir el socialismo los trabajadores chilenos deben ejercer su dominación política sobre la burguesía, deben conquistar todo el poder y arrancarle gradualmente todo el capital. Es lo que se llama dictadura del proletariado. No lo hemos establecido así en el Programa de la Unidad Popular, pero el Partido Socialista no ha desestimado este aserto histórico leninista.

[...]

Dentro de este Estado burgués, el pueblo ha conquistado uno de sus instrumentos de dirección: el Gobierno, el Poder Ejecutivo. Es decir, *contamos con una herramienta de poder burgués.*

[...]

Sabemos que en última instancia, el poder de la burguesía descansa en su poder económico.

[...]

Actualmente, al sector público le corresponde alrededor del 70% de la inversión que se realiza en el país.

Estos mecanismos le permiten al Gobierno socavar las bases de sustentación de la estructura capitalista de producción.

[...]

Es una versión deformada de la lucha por el poder, es considerar la lucha económica al margen de la lucha política, es concebir la lucha política independientemente de los factores económicos.

[...]

* * *

SALVADOR ALLENDE: INFORME AL PLENO NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA EN ALGARROBO
(Febrero de 1972)

(Tomo 3, pp. 1967-1975)

[El Presidente Allende abiertamente polemiza con el informe al pleno. Muestra las diferencias esenciales entre ambas posiciones.]

[...]

Los militantes del Partido Socialista deben ser conscientes de que, contrariamente a lo que el Informe Político sostiene, el camino más corto hacia las transformaciones cualitativas del sistema político actual no pasa forzosamente por la quiebra y la destrucción de la constitucionalidad vigente. Este es un profundo error. El régimen institucional reposa sobre la voluntad política libremente expresada de los ciudadanos chilenos. la manifestación de voluntad del pueblo chileno permitió hace dieciséis meses que los trabajadores organizados conquistaran el Gobierno. Es la tarea imperiosa de las fuerzas populares convencer, mediante la acción revolucionaria, el ejemplo y la eficacia, a las grandes mayorías del pueblo, del sentido y razón de ser de la revolución.

* * *

MENSAJE A LOS CRISTIANOS DE AMÉRICA LATINA: DELEGACIÓN DE 80 SACERDOTES, ENTRE ELLOS 12 CHILENOS, MIEMBROS DEL SECRETARIADO DE CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO

(La Habana, 3 de marzo de 1972)

(Tomo 3, pp. 2153-2154)

[Invitados por Fidel Castro se reúnen en La Habana varios sacerdotes de América Latina, entre ellos algunos chilenos. El evento muestra cómo importantes miembros de la Iglesia Católica se radicalizan, aumentando la polarización de la sociedad chilena.]

Un grupo de doce sacerdotes chilenos, miembros del "Secretariado Cristianos por el Socialismo", hemos sido invitados por el Comandante Fidel Castro a conocer desde dentro la realidad del primer país socialista de América Latina. Al término de nuestra estadía en Cuba, nos sentimos llamados a dirigirnos a todos los cristianos de nuestro continente.

[...]

2. Por lo tanto, denunciamos como insuficientes todas las soluciones de tipo desarrollistas, reformistas, capitalistas o neocapitalistas, que no hacen sino contribuir a la mantención y agravación de dicha situación de subdesarrollo.

Desde Cuba, reafirmamos nuestra convicción de que, históricamente, el socialismo es el único camino que tiene nuestro subcontinente para romper solidaria y realmente las cadenas de la opresión capitalista e imperialista.

3. Nos duele como cristianos y porque amamos a nuestra Iglesia que ella, a través de la historia de América Latina, ha estado y sigue en la mayoría de los casos, por no decir siempre, aliada a las pequeñas minorías que han dominado y explotado al pueblo trabajador. Este es el gran pecado histórico de nuestra Iglesia, es urgente e imprescindible que todos lo reconozcamos y por él pidamos perdón, para que surja la nueva Iglesia Latinoamericana y no sólo ésta, sino un nuevo pueblo latinoamericano libre, digno y fraternal.

[...]

Afirmamos que en América Latina la verdadera y única división es entre oprimidos y opresores, entre explotados y explotadores, y no entre marxistas y cristianos.

Afirmamos que es un deber imprescindible de los cristianos estar junto a todos los hombres honestos, cristianos o no, que luchan por la liberación de nuestros pueblos.

Afirmamos que en Latinoamérica es hora de luchar y no discutir, es hora de avanzar y no atemorizarse, es hora de que por la lucha y el sacrificio las verdaderas fuerzas honestas que no tengan otros intereses que los del pueblo se unan como un solo hombre para derrocar el egoísmo y el imperialismo en nuestro continente.

Es deber histórico de los cristianos estar en esta lucha de parte de los explotados. La justicia y la historia está de nuestro lado.

5. El sistema de dominación y la ideología burguesa han mantenido a los cristianos engañados y bloqueado, marginándolos del proceso revolucionario de liberación en América Latina…

[...]

6. Junto a todos los que en nuestro continente están realmente comprometidos en la lucha de los oprimidos del campo y de la ciudad para conquistar el poder, junto a todos los verdaderos revolucionarios latinoamericanos cualesquiera sean sus creencias filosóficas o religiosas.

Convencidos con el Comandante Fidel Castro que para hacer victoriosa la alianza entre cristianos y marxistas, no puede ser solamente táctica sino estratégica.

Nos comprometemos como cristianos a entregarnos por entero a este inmenso esfuerzo de liberación; y con nuestro hermano en el sacerdocio Camilo Torres repetimos: “El deber del cristiano es ser revolucionario; el deber del revolucionario es hacer la revolución”.

Martín Gárate
Pablo Richard
Carlos Condaminet
José Arellano
Ignacio Pujadas
Óscar Letelier
Guillermo Redington
Juan Martín
Juan Latulipe
Sergio Concha
Mauricio Laborde
Germán Cortés.

* * *

GONZALO ARROYO S.J.: CARTA AL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ SOBRE SU NEGATIVA A PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO. (17 de marzo de 1972)

(Tomo 3, pp. 2157-2160)

Su Ems. Cardenal
Don Raúl Silva Henríquez
PRESENTE

Estimado don Raúl:

(..)

Sin duda, el contenido doctrinal de su carta merece de mi parte, una reflexión respetuosa y profunda. he preferido hacer dicha reflexión junto a los miembros del Secretariado de Cristianos por el Socialismo, no sólo porque la carta de usted en cierta medida los afecta, sino porque en este caso he actuado en representación de ellos.

Hemos consultado también a sacerdotes que por su formación filosófica y teológica podían ayudarnos a dilucidar las cuestiones doctrinarias. Se le dirigirá por lo tanto una respuesta común.

Sin embargo, no quisiera dejar de señalar en esta carta mi desacuerdo con su interpretación del Encuentro al que usted atribuye ser "una reunión política, con el deseo de lanzar a la Iglesia y a los cristianos en la lucha en pro del marxismo y de la revolución marxista en América Latina". Ciertamente no es esa la intención de los organizadores del Encuentro, ni tampoco se desprende del Documento de Trabajo a que usted alude. En la introducción del documento se dice explícitamente que en este momento de la historia se percibe la "necesidad de detenerse un instante en el trabajo para intercambiar experiencias, reflexionar teológicamente, darse apoyo mutuo y coordinar una acción comprometida junto a trabajadores, obreros, campesinos, estudiantes". Es sólo esa pues, la intención de la Comisión Organizadora y no la que usted le atribuye.

[...]

Respecto a la lealtad, no creo que sea muy leal el procedimiento de haber enviado copia de su carta a todos los obispos (carta que se podía suponer personal en los párrafos que me atañen), incluso *antes* de habérmela dirigido a mí. En efecto, me enteré de su respuesta por un obispo; luego llegó el original a mis manos. Me parece que hubiese sido más respetuoso

de su parte, llamarme antes de condenarme tan tajantemente, manifestarme sus discrepancias, temores, etc. Así se podía haber evitado algo que si hace todavía más público puede escandalizar y herir seriamente a muchos cristianos. Con todo, Don Raúl, prefiero creer que este procedimiento se debió a la premura de su viaje a Roma, que le impidió comunicarse personalmente conmigo.

[...]

Gonzalo Arroyo S.J.

* * *

RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, CARDENAL ARZOBISPO DE SANTIAGO: CARTA A GONZALO ARROYO S. J. Y MIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SECRETARIADO DE CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO

(13 de abril de 1972)

(Tomo 3, pp. 2170-2171)

Sres. Gonzalo Arroyo y
Miembros del Comité Coordinador del
Secretariado de Cristianos por el Socialismo

Muy estimados amigos: De vuelta de mi viaje a Roma encontré la carta de ustedes del 20 de marzo, en que responden a la dirigida por mí a Gonzalo Arroyo.

A pesar de los párrafos polémicos que ella contiene y de los juicios duros y a mi entender injustos que en ella se expresan, acepto lo substancial de esa carta, que me parece muy positivo.

Ustedes reconocen que el documento de ustedes "omite puntos importantes del pensamiento cristiano"; "que no es la expresión acabada de su pensamiento"; que "están de acuerdo en que el documento de trabajo debió haber contenido algunas referencias más explícitas a la dimensión global del cristianismo"; que la revolución prácticamente no es una sola, sino que ustedes proponen "la unión de todos los que verdaderamente desean la revolución"; que la política en la cual ustedes toman parte "no es la gestación de la cosa pública. . . ni la opción por un partido determinado", sino que es la política al estilo de la Conferencia de los Obispos de Medellín; que el Encuentro "no está dirigido a propagar una determinada ideología ni a luchar por los partidos marxistas", etc.

Con estas y otras observaciones el pensamiento de ustedes se ha aclarado mucho. Lamento sí, que el o los redactores de la contestación de ustedes no hayan sido los que redactaron el Documento de Trabajo. Tal vez nos habríamos ahorrado este intercambio de cartas.

[...]

* * *

SALVADOR ALLENDE: OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO AL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVO A LAS TRES ÁREAS DE LA ECONOMÍA
(7 de abril de 1972)

(Tomo 3, pp. 2121-2134)

[Listado de empresas que el Gobierno pretendía nacionalizar.]

[...]

a) Con el objeto de incorporar a las áreas de propiedad social o mixta, facúltase al Presidente de la República para nacionalizar el todo o parte de las empresas, o de sus acciones y bienes, que a continuación se enumeran:

Sociedad Pesquera Guanaye S. A.
Compañía de Teléfonos de Chile.
Manufacturas Sumar S.A.
Compañía de Cervecerías Unidas.
Algodones Hirmas S.A.
S. A. Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón.
Tejidos Caupolicán S.A.
Rayón Said Industrias Químicas S. A.
Textil Progreso S. A.
Paños Oveja Tomé S. A.
Rayonhil Industria Nacional de Rayón S. A.
Lanera Austral S. A.
Textiles Banvarte S. A.
Compañía Industrial El Volcán S. A.
Fábrica Nacional de Loza de Penco.
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A.
Compañía Sudamericana de Vapores S. A.
Compañía General de Electricidad Industrial.
Compañía de Petróleos de Chile.
Compañía Industrial.
Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar.
Compañía Consumidores de Gas de Santiago.
Manufacturera de Metales S. A. (MADEMSA).
Fábrica de Enlozados S. A.
Compañía Industrias Chilenas CIC S. A.
Cristalerías de Chile Sociedad Anónima.
Compañía Molinos y Fideos Carozzi.

Acero Andes S. A.
Carburo y Megalurgia S. A.
Compañía Chilena de Navegación Interoceánica.
Sindelen S. A. I. C. Sociedad de Industrias Eléctricas Nacionales.
Cemento Bíobío S. A.
Gildemeister S. A. C.
Industrias Químicas Du Pont S. A.
Pesquera Indo S. A.
Aceites y Alcoholes Patria S. A.
Industria Chilena de Soldaduras S. A. INDURA.
Refractarios Lota Green S. A.
Compañía Industrial Metalúrgica S. A.
Compañía Nacional de Teléfonos Sociedad Anónima.
Ferriloza S. A. Industrias de Metales.
Compañía de Gas de Concepción.
Manufacturera de Cobre S. A. MADECO.
Industria Chilena de Alambres Inchalam S. A.
Vidrios Planos Lirquén S. A.
Fábrica de Pernos y Tornillos American Screw Chile S. A.
Compañía Standard Electric S. A. C.
Naviera Interoceangas S. A.
Aga Chile S. A. Representaciones.
Indus Lever S. A. C. I.
Compañía Industrial Hilos Cadena S. A.
Philips Chilena S. A. de Productos Eléctricos.
Embotelladora Andina S. A.
Coresa S. A. Unidades y Complementos de R.
S. A. de Navegación Petrolera.
Chiprodal S. A. I.
Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S. A.
Agencias Graham S. A. C.
Fca. Nacionales de Aceites S. A.
Grace y Co. (Chile) S. A.
Cía. Productora Nacional de Aceites S. A.
Licores Mitjans S. A.
Compañía Chilena de Tabacos S. A.
Sociedad Industrial Pizarreño S. A.
Bata Sociedad Anónima Comercial.
Sociedad Industrial de Calzado SOINCA.
Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cuero CATECU S.A.

Fábrica de Envases S. A.
Compañía Chilena de Fósforos.
Cobre Cerrillos Sociedad Anónima.
Nieto Hnos. S. A. C. I. Consorcio.
Confecciones Burger Sociedad Anónima Comercial e Industrial.
Calderón Confecciones S. A. C.
Confecciones Oxford S. A.
Dos Alamos S. A. I. y C.
Lechera del Sur Sociedad Anónima Llanquihue.
Electromat S. A. Fca. de Materiales Eléctricos.
Industrias Textiles Pollak Hnos. y Cía. S. A.
Fca. de Paños Continental S. A.
Comandari S. A. Hilos y Paños de Lana.
Cía de Tejidos El Salvador.
Sociedad Anónima Comercial Saavedra Bénard.
Laja Crown S. A. Papeles Especiales.
Elaboradora de Productos Químicos Sintex S. A.
Oxiquim Ltda.
Farmoquímica del Pacífico S. A.
Empresa Pesquera Eperva S. A.
Maderas y Sintéticos S. A. Masisa.
Maderas Prensadas y Pinos de Cholguán S. A.
Sociedad Productores de Leche S. A.

[...]

* * *

EDUARDO NOVOA: EL DIFÍCIL CAMINO DE LA LEGALIDAD

(*Revista de la Universidad Técnica del Estado* Nº 7, abril de 1972)

(Tomo 3, pp. 2094-2120)

[El responsable de la utilización de los resquicios legales da cuenta de las dificultades del camino utilizado.]

[...]

Las vías para alcanzar el socialismo

Hemos mostrado, hasta aquí, en un cuadro objetivo y general las escasas posibilidades que el sistema jurídico nacional ofrece al plan de gobierno de la Unidad Popular. Como ha podido apreciarse, se trata de un marco legal que si no puede tenerse como un muro absolutamente infranqueable para el cumplimiento de una política que tienda al establecimiento del socialismo, apenas llega a ofrecer ásperos atajos y estrechos senderos para un fin semejante. Más adelante hemos de apreciar que no se trata solamente del sistema institucional y jurídico en sí mismo, que teóricamente ofrece la posibilidad de ser modificado conforme a sus propias reglas, sino de las dificultades y obstrucciones que surgen por la disposición práctica y realidad efectiva de tal sistema, y, muy principalmente, por el criterio con que es aplicado por los hombres que lo encarnan.

La transformación de las estructuras queda abierta nominalmente dentro de los propios cauces formales contemplados por el sistema legal chileno; sin embargo, en los hechos, cuando se trata de provocar esas transformaciones, todo un conjunto de mecanismos hábilmente dispuestos entran en acción, sutilmente si no es necesario emplearse a fondo, abiertamente si se trata de algún punto demasiado importante o si es preciso, para defender el status, no andarse con delicadezas.

[...]

Ante el firme propósito del Presidente Allende y de la Unidad Popular de dar cabal cumplimiento a su programa y ante la necesidad de que el Gobierno se ajustara en todo momento a la más estricta legalidad, con todas las dificultades, peligros y riesgos ya esbozados, fue necesario acudir a la sagacidad para no quedar inmovilizado. Pacientes estudios estuvieron destinados a la búsqueda de soluciones que permitieran superar la aparente inmovilidad.

Finalmente, tras una minuciosa indagación dentro de la frondosa legislación chilena, fue posible hallar los instrumentos legales capaces de

romper la inercia del estancamiento fatal a que llevaba la doble condición colocada como premisa ineludible.

Increíblemente, la propia exuberancia legislativa, su desorden y falta de organicidad, pasaron a convertirse en aliados de estos esfuerzos. ¿Cómo, entre tantos miles de preceptos, no iban a subsistir algunos pocos que, manejados con destreza, abrieran una brecha por la cual conducir los esfuerzos gubernativos? La respuesta fue afirmativa. Existían tales preceptos y ellos fueron encontrados.

[...]

Por una parte, aparecieron antiguos preceptos, dictados hace muchos años, en 1932, en un fugaz período en que llegó al poder un grupo declaradamente izquierdista, en momento de quebranto constitucional. Pese a tratarse de legislación irregular, ella había sido ratificada posteriormente por todos los poderes del Estado.

[...]

En segundo lugar, se encontró un conjunto bastante amplio de normas legales relativas a estructuración económica, solución de conflictos laborales y fiscalización por el Estado de las actividades productivas, que concedían al Poder Ejecutivo o algunos organismos estatales poderes de los llamados jurídicamente "discrecionales" (es decir, que permiten la adopción de medidas por la autoridad con apreciable margen de libertad), otorgados en su origen con el fin de resolver las materias pertinentes con criterio, por cierto, "reformista" o "desarrollista". Pero, aunque tal hubiera sido el pensamiento del legislador que los dictó, en el hecho estaban allí, como fuentes de poder amplio para poner en aplicación medidas destinadas a la organización de la economía y de las tareas productivas y, aun cuando otro hubiera sido el propósito íntimo de sus redactores, en plena aptitud para ser utilizados también en la aplicación de una política socialista.

[...]

Como se ve, el arsenal era valioso. Jamás imaginaron las legislaturas que aprobaron tales leyes que las facultades abiertas que concedían para poner parche y remiendo a las fallas del sistema económico establecido y para ocultar sus contradicciones más visibles, pudieran ser utilizadas alguna vez para iniciar el camino de su sustitución. Es que tampoco imaginaron, jamás, que por la vía electoral iba a llegar al poder un gobierno popular decidido a abrir la vía hacia el socialismo.

Con todo, esa copiosa legislación no es suficiente para imponer planes orgánicos de transformación de la economía, precisamente porque no fue dictada con ese fin y porque su aplicación amplia encuentra tropiezos de parte de órganos institucionales a cargo de individuos que ponen su

cargo al servicio de la ideología burguesa. Tal es el caso, principalmente, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República.

[...]

Imposibilitado el Gobierno para obtener las leyes que necesitaría para alcanzar las metas previstas, se intenta ahora darle el remate final privándolo aun de aquellos medios legales que han estado a disposición de todos los gobiernos anteriores desde hace cuarenta años. Este era el propósito declarado del proyecto de reforma constitucional en actual tramitación de los senadores Fuentealba y Hamilton según su formulación original. Deben haber tropezado con muestras de desagrado en sus propias filas por presentarlo tan desnudamente, porque en definitiva se le condimentó como una limitación de las facultades amplias que otorgaba el antiguo Decreto Ley N° 520, pero sin alterar sus primitivas finalidades. Estas facultades no le habían sido negadas ni restringidas a ningún gobierno anterior, ahora se le suprimen al que mejor podría utilizarlas y al que requiere de ellas para cumplir dentro de la ley con su programa.

[...]

La oposición acude también a otro procedimiento, que tampoco le ha redituado. Argumenta que la legalidad es vulnerada, no abiertamente, sino mediante desnaturalización de las leyes y de las atribuciones gubernativas. En cuanto a lo primero, el Gobierno interpretaría indebidamente la ley, aplicando los preceptos correspondientes con un sentido diverso del que rectamente debiera asignárseles. Lo segundo se produciría porque el Gobierno abusaría de las facultades de que está investido, extendiéndolas a fines diversos de los correspondientes, con lo que incurriría en "desviación de poder".

[...]

Por una parte se confunde la "voluntad de la ley" que es la clave de toda interpretación correcta, con la estructura ideológica o aun con las pretendidas inclinaciones de ese orden de los individuos que participaron en la elaboración de la ley. Por otra, se oculta que las facultades discrecionales importan una verdadera delegación de facultades por el legislador, para que la autoridad delegataria aprecie libremente, en cada caso, según las circunstancias existentes y su propio criterio, la conveniencia de orientar en una dirección o en otra las decisiones que se adopten; por lo que es legítimo a esta última, resolver en un sentido no previsto por el legislador, o aun apartándose del criterio personal que éste pudo haber tenido ante iguales circunstancias. Finalmente, olvidan los opositores de hoy que así argumentan que, en su época, no trepidaron en sostener la amplitud de las facultades discrecionales.

[...]

La Unidad Popular aceptó que su tarea consistía en dar cima a su programa acatando la legalidad que tendencias e ideologías opuestas había forjado, no obstante que ésta no favorecía sus objetivos. Dentro de ese cauce iban a producirse democráticamente los cambios necesarios y con ese pie forzado se llegaría a proporcionar al país una nueva legalidad para su historia futura.

La generosidad con que adoptó esa decisión no ha sido correspondida por sus adversarios (ni podía tampoco pretenderse que la correspondieran quienes acudirán a cualquier medio para impedir que en Chile se implanten reformas revolucionarias).

La actitud que ahora asume la oposición significa que ella quiere cambiar unilateralmente las reglas del juego, para colocar al gobierno de la Unidad Popular dentro de un marco muchísimo más estrecho que el limitado que éste ya había previsto.

La situación es peligrosa, porque no hay la posibilidad de que la Unidad Popular acepte o pueda aceptar un recortamiento de su programa.

* * *

COPIA FIEL DE LA REUNIÓN SOSTENIDA POR EL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ CON LOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER ENCUENTRO DE CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO

(25 de abril de 1972 en el Palacio Arzobispal de Santiago de Chile)

(Tomo 3, pp. 2172-2174)

Cardenal: Ustedes me han pedido venir a saludarme, yo no puedo negarme a recibir un saludo, un saludo cariñoso, cortés, amable, de personas que están unidas con nosotros, porque son cristianos y varios de ustedes son sacerdotes, con mayor razón, yo he recibido a muchos personajes, y a muchas personas que no son cristianas, y con mayor razón debo recibirlos a ustedes. No sé si alguno de ustedes va a decir algo, estoy dispuesto a escucharle. . .

[...]

Cardenal: Eso es otra cosa. . . otra cosa bien distinta. Nosotros hemos mandado un informe antes de que conociéramos, antes de que hubiera contacto con los que organizaron este encuentro, y una nota a todos los episcopados diciéndoles: nosotros no hemos organizado este encuentro, no sabemos qué resultado va a tener. Cada uno de ustedes juzgue como crea oportuno.

Así que esto es necesario dejarlo en claro... no estoy tratando de hacerme cargo o de justificarme. Yo quisiera que si ustedes tienen algo más que decir para poderles expresar alguna cosa más constructiva.

P. Arroyo: Quisiera señor Cardenal, a nombre de todos los que participan en este Encuentro, proporcionarle los documentos que hemos estado analizando y en que hemos examinado la situación de la iglesia en los distintos países de América Latina. Yo quisiera que usted tuviera la ocasión de leerlos y opinar sobre lo que estamos haciendo.

Cardenal: Yo les agradezco y me voy a imponer de ésto. Yo les he escrito una carta a los amigos, con los cuales tenemos mucha confianza y recíprocas maneras de expresarnos, muy a la chilena, pero nunca se ha roto la amistad entre nosotros. Quisiera manifestarles lo que a ellos les dije: ojalá que los temores que uno tiene como pastor, de que este Encuentro no sea lo suficientemente constructivo y respetuoso de los valores de la Iglesia, no se verifiquen, y que en realidad se dé un paso hacia la liberación cristiana de América Latina. Creemos que los obispos no podemos realizar una

clase de Encuentro como el presente, pero al mismo tiempo creemos que los sacerdotes y los cristianos pueden hacerlo, y nosotros estamos a la expectativa para aprobar todo lo bueno y decir tranquilamente, serenamente, lo que nos parezca menos bueno. Pero pido al Señor que los ilumine, que les dé ese espíritu de comprensión, de caridad y un inmenso amor a nuestros pueblos, y en realidad todos los cristianos podamos realizar lo que anhelamos de corazón: liberación de los pobres, de los humildes de América Latina. Muchas gracias por la visita y que Dios les bendiga. ¿Hay otra pregunta?

Una religiosa: Lo invito a participar en el Encuentro y especialmente al Acto de Clausura del domingo próximo.

Cardenal: Le agradezco, pero como muy bien se ha dicho en los programas que se enviaron, este Encuentro está ajeno a la autoridad eclesiástica y a la autoridad civil. No está organizado por la Jerarquía, no se nos ha consultado sobre la organización del Encuentro, no se nos ha pedido el parecer sobre los programas que se iban a desarrollar; ha habido una libertad que nosotros respetamos, entonces ustedes también respeten el que nosotros no queramos ir a un Encuentro que pudiera comprometer a la Iglesia. Si ustedes hacen las cosas bien hechas, los vamos a bendecir, los vamos a alabar. Y si ustedes no hacen las cosas bien hechas, con la misma franqueza les vamos a decir: miren, no nos parece bien. Es lo que yo les puedo decir.

[...]

* * *

ALEJANDRO MONTESINOS (JUVENTUD RADICAL REVOLUCIONARIA): CRÍTICA A LAS NEGOCIACIONES DEMOCRACIA CRISTIANA-UNIDAD POPULAR

(*Punto Final* Nº 162 de 18 de junio de 1972)

(Tomo 4, pp. 2664-2667)

[El Gobierno pretende llegar a acuerdos con la Democracia Cristiana para expropiar alrededor de 90 empresas. La juventud radical desconfía de esta posibilidad y sostiene una línea de enfrentamiento, especialmente en el campo.]

¿Qué opina sobre las conversaciones UP-DC?

"Aunque pudiera parecer un acto de oportunismo decir ahora cuáles fueron nuestras actitudes al plantearse el inicio de tales conversaciones, vamos a señalar lo que fue nuestra posición en aquella oportunidad. Además, fue un interesante tema de debate en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical, pues el Ministro encargado por el Ejecutivo es militante del Partido Radical, en la cartera de Justicia.

Esquematizar con meros slogans las conversaciones como "conciliación" o "traición" no es lo que debe marcar las posiciones que queremos detallar. Tras estas actitudes del gobierno de la Unidad Popular, está presente toda una concepción acerca de lo que debe y puede ser el proceso de lucha de clases, así como su dirección y desarrollo en nuestro país.

En esa oportunidad señalamos que: 1° los representantes del imperialismo y la derecha nacional, jamás conversan si tales actos no tienen al menos la perspectiva de resultar convenientes para sus posiciones; 2° en situaciones de definición política no es posible anteponer concepciones armonizantes a lo que la propia teoría nos entrega como una realidad del proceso de clases, vale decir, su carácter antagónico y conflictivo; esto último alcanza y afecta al conjunto de la sociedad, por cierto incluida la base trabajadora que compone una buena parte de la DC.

A partir de estas dos consideraciones centrales, afirmamos nuestra oposición a tales conversaciones.

Pensamos que de ello pueden obtenerse importantes conclusiones y enseñanzas: habremos de entender con mayor claridad que las fuerzas revolucionarias caen en el subjetivismo y la ingenuidad cuando remiten a factores externos a ellas mismas, las posibilidad de éxito o fracaso de tal o cual misión. Es un poco como hipotecar nuestras propias responsabilidades en el proceso. De otra parte, vinculado a lo anterior, hay que recuperar la confianza de y en las masas trabajadoras, comprendiendo y aceptando que habrán de ser ellas el motor del proceso revolucionario".

En nuestro concepto no se puede seguir pensando en "propugnar" o "luchar" por tales o cuales "ideas", sino fundamentalmente aplicarlas en la realidad, en contra del enemigo de clase interno y externo, mediante una real vinculación con los frentes de masas. En cada presencia revolucionaria se hace necesaria esa vinculación entendiendo que nuestra aportación del proceso se trunca si la entendemos sólo en la perspectiva del trabajo interno, partidario.

Aún más, pensamos con Lenin que el verdadero revolucionario se forma y forja al calor del trabajo en las masas. Entonces es necesario que cada uno de nosotros pruebe en la realidad su propósito sincero de ser, en cada lugar y a cada momento, un revolucionario de verdad.

Recientemente el Departamento Nacional Campesino Radical celebró un Congreso. ¿Qué participación le ha cabido en él a la J.R.R.?

La composición de clase de este último Congreso nos indica que era necesario generar desde el propio seno de los campesinos radicales una dirección nacional auténtica y revolucionaria que la oriente, duplicando nuestro esfuerzo en el sector campesino chileno.

Por vía del ejemplo, para evitar toda tramitación que se da entre el momento de la expropiación de un predio y su toma de posesión, los campesinos radicales acordaron impulsar tomas organizadas y responsables para poner en marcha la producción del predio de que se trate.

Esta iniciativa permite una contribución efectivamente revolucionaria por parte de los propios campesinos en la aplicación del programa de la UP.

Ximena Solís V.

* * *

CARLOS CERDA (PARTIDO COMUNISTA): LA REVOLUCIÓN CHILENA Y LA PROPIEDAD NO MONOPOLISTA

(*El Siglo*, 29 de junio de 1972)

(Tomo 4, pp. 2607-2610)

[Carlos Cerda, uno de los más importantes pensadores "oficiales" del Partido Comunista, aborda los problemas de la propiedad no monopólica.]

Se ha situado en el centro del debate político, económico e ideológico la cuestión del carácter del Gobierno Popular y de las transformaciones revolucionarias que impulsa con decisión. Tanto el llamado cónclave de la Unidad Popular como las bases de conversación con la Democracia Cristiana, tienen que ver fundamentalmente con esta cuestión.

La Unidad Popular es una alianza de partidos de la clase obrera con partidos de la pequeña burguesía y el programa que sirve de punto de convergencia a esta alianza cautela los intereses inmediatos y mediatos del proletariado y de amplios sectores de las capas medias.

El proletariado aspira como clase a la transformación revolucionaria de la sociedad chilena, a la construcción del socialismo en nuestro país. Un sector de las capas medias hace también suya esta aspiración, pero el grueso de estas capas entiende como su interés principal la mantención de su condición de propietarios de medios de producción, ya sean pequeños o medianos. En atención a este hecho es que el Programa de la Unidad Popular establece la existencia de tres áreas en nuestra economía.

Una correcta política de alianzas

La clave de la cuestión radica en que en las actuales circunstancias, ninguna clase por sí sola, en nuestro país, está en condiciones de imponer a las otras sus objetivos específicos. Tanto el proletariado como la pequeña y mediana burguesía, como los monopolios y el imperialismo, buscan construir el tipo de alianzas que les permita dar a los acontecimientos un curso favorable a sus propios intereses.

En este cuadro, la burguesía monopolista, asumiendo la defensa de la propiedad privada en general, gana a las capas medias para la defensa, en los hechos, de la propiedad de tipo monopolista, pero es evidente que lo logra porque la defensa de la propiedad privada en general, es también la defensa de la pequeña y mediana propiedad.

El posible acuerdo con la DC en torno a los vetos de la Reforma Constitucional pone nuevamente esto en el centro de la discusión. Lo nega-

tivo del asunto es que debido a nuestros propios errores se corre el riesgo de que sea la DC la que aparezca ante los pequeños y medianos industriales como fuerza política gracias a la cual sus intereses fueron considerados. Y el hecho de que un sector importante de las capas medias vea en la DC la expresión de sus intereses es algo que no contribuye al propósito de la UP de transformarse en la expresión política de la inmensa mayoría del pueblo, ni al objetivo de la clase obrera de constituirse en la fuerza dirigente de un amplio conglomerado social.

Una actitud sin complejos

El presente Pleno de nuestro Comité Central se realizó en los momentos en que se abre una nueva posibilidad de modificar en favor de la clase obrera la correlación de fuerzas. Una vez más se demuestra que la aplicación decidida de nuestra política leninista es un latigazo para los enemigos principales de nuestro pueblo y el mejor remedio para la enfermedad ultraizquierdista. La ofensiva ideológica sólo puede desarrollarse con plenitud cuando se está políticamente a la ofensiva. Y el proletariado está a la ofensiva cuando es capaz de golpear a los enemigos principales, cuando está luchando por ganar aliados, cuando consolida la tarea revolucionaria iniciada y cuando logra que sus intereses específicos se confundan con los intereses también particulares de las demás fuerzas con las que es preciso avanzar.

* * *

JORGE TAPIA (MINISTRO DE JUSTICIA, PARTIDO RADICAL): INFORME AL PUEBLO SOBRE LAS CONVERSACIONES CON LA DEMOCRACIA CRISTIANA
(7 de julio de 1972)

(Tomo 4, pp. 2622-2631)

[La Unidad Popular aclara al pueblo su posición sobre las tratativas con la Democracia Cristiana.]

[...]

A través del proceso de discusión del Proyecto de Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía, en reiteradas oportunidades, tanto el Presidente de la República como Ministros del Estado, subsecretarios, parlamentarios de la Unidad Popular y reconocidos juristas de nuestro país, han refutado públicamente el antojadizo planteamiento de la oposición en cuanto a que, tratándose de un proyecto de ley que reforma la Constitución Política, no procedería el trámite de la insistencia del Congreso ante observaciones o vetos supresivos o substitutivos presentados por el Ejecutivo, y además, frente también a negar competencia al Tribunal Constitucional para resolver acerca de la justa interpretación que debe darse en esta parte a nuestra Carta Fundamental.

Para el Gobierno es y ha sido de suma gravedad que un sector político pretenda colocarse en una posición de franca violación de normas fundamentales que rigen la organización del Estado, violando con ello el régimen institucional imperante cuyo respeto irrestricto ha mantenido en todo momento nuestro Gobierno".

Las conversaciones

"Fue por ello que una vez aprobado este proyecto de Reforma Constitucional por el Parlamento, el Presidente de la República junto con observar o vetar algunas de sus disposiciones proponiendo rechazos, substituciones y adiciones a las mismas autorizó al Ministro de Justicia para entrar en conversaciones con personeros de la Democracia Cristiana, a fin de considerar la posibilidad de que se llegase a un entendimiento acerca de la manera cómo despachar dichas observaciones y un conjunto de leyes paralelas a las nuevas disposiciones de la Constitución.

Designadas comisiones representativas de la Unidad Popular y del Partido Demócrata Cristiano para este estudio en conjunto, se fijó en una etapa de las mismas un plazo de 15 días para contar todo lo necesario al

respecto. Llegado el vencimiento de este término —el jueves 29 de junio— los miembros de la comisión de la Unidad Popular solicitaron al senador Renán Fuentealba una prórroga de estas conversaciones, aduciendo que dado el grado de acuerdo a que se había llegado, aparecía injustificable no disponer de unos pocos días más para consivir de estudios de algunas materias que aún quedaban pendientes.

La respuesta a este planteamiento nos fue dada indirectamente a través del acuerdo del Consejo del Partido Demócrata Cristiano, quien, junto con ratificar las determinaciones del presidente y de la Directiva Nacional del partido, en el sentido de que las conversaciones debían darse por terminadas y reanudarse la tramitación del proyecto y los vetos en el Congreso Nacional, trasladaba a este organismo la posibilidad de que en dicha instancia se produjera que permitieran superar el conflicto existente, lo que para el Consejo dependería fundamentalmente de la actitud que asumiera el Poder Ejecutivo.

Consecuente con el citado acuerdo del Consejo del Partido Demócrata Cristiano, los miembros de la Comisión de la Unidad Popular, nos dirigimos nuevamente al senador Renán Fuentealba, con fecha 4 del presente mes de julio, exponiéndole que dentro del propósito anunciado por el Consejo de su partido en el sentido de ser posible que en el Congreso Nacional se produjera la solución de estos problemas nos parecía necesario sintetizar el grado de acuerdo que se había alcanzado hasta esta fecha.

Nos referimos en aquella oportunidad a cada una de las materias tratadas en las comisiones conjuntas, puntualizando el grado de acuerdo alcanzado a fin de dar relevancia a las escasas diferencias que aún existían. Estas materias fueron las siguientes:

1. Facultad para nacionalizar o expropiar 90 empresas

Se puntualiza en la carta las tres empresas respecto de las cuales hubo consenso de las comisiones negociadoras para retirarlas de la lista de nacionalizaciones o expropiaciones; la conformidad de incorporar otras cuatro en que el Estado había adquirido derechos en forma mayoritaria, y, por último, la agregación de la lista de las instituciones bancarias particulares, de conformidad con el entendimiento a que se había llegado respecto de la nacionalización de esta actividad. Se llegaba así a una enumeración explícita y nominativa de 100 empresas y bancos que serían nacionalizadas o expropiadas. Dado que en dicha lista no figuraba la Empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, se hacía la salvedad y se dejaba constancia por nosotros, que esta circunstancia no involucraba compromiso alguno al res-

pecto para que el gobierno de la Unidad Popular, especialmente en cuanto a su libertad para obtener la incorporación de dicha empresa al área social de la economía, sin perjuicio de mantener su criterio, reiteradamente expuesto a los negociadores de la Democracia Cristiana en el sentido de facilitar la creación de un organismo autónomo encargado de administrar todo cuanto concierne a la producción de papel para diarios e imprentas y a la asignación de las cuotas respectivas.

2. Bancos

En cuanto a las instituciones bancarias, actualmente la proposición del Gobierno de derogar las disposiciones que prohíben la participación de los trabajadores bancarios en los directorios, planteando en su reemplazo el establecimiento de un sistema de plena participación, basado en que cada directorio quede constituido por cinco representantes del capital, un gerente designado por el Estado y cinco representantes de los trabajadores del respectivo banco, elegidos en votación directa, impersonal y secreta. Puntualizábamos la coincidencia con los representantes de la Democracia Cristiana, en que, para abrir paso a una tan amplia participación, correspondía autorizar por ley la expropiación de los saldos de acciones en manos de particulares, completando el establecimiento de la propiedad estatal sobre todo el capital bancario; pero que dichos negociadores habían reclamado que cuatro instituciones bancarias —los Bancos de Chile, Sudamericano, Edwards y Crédito e Inversiones— tuviesen un directorio diferente, formado por siete representantes de sus respectivos trabajadores, y tres del Estado —con ciertas facultades decisorias en materias determinadas— y la elección del gerente por tal directorio, debiendo contar con el voto favorable de los personeros estatales. Añadíamos que se había aclarado a satisfacción de la comisión negociadora de la DC, que circunstancias de hecho impedían incluir en esta modalidad al Banco Edwards. Respecto de los otros tres bancos, expresábamos la aceptación de la proposición de la DC, quedando por aclarar sólo quién sería el presidente de cada uno de ellos y que a nuestro juicio debería ser un representante estatal con derecho a voz y voto en el directorio. Concluíamos, respecto de materias bancarias, que estimábamos así en lo substancial con incidentes la posición aceptada por ambas partes, puntualizando que en relación con esta actividad no se había discutido, por obvio, que las tres instituciones mencionadas quedarían encuadradas dentro del sistema bancario general del país, ya que sería inconcebible imaginarlos al margen de la tuición y conducción que al Banco Central y a la Superintendencia respectiva corresponde en esta materia.

3. Normas de indemnización de las empresas nacionalizadas, expropiadas o reservas al Estado

Expresamos sobre esta materia al senador Fuentealba en la mencionada carta, que el régimen de indemnización de estas empresas sería, en principio, el mismo establecido en el proyecto de ley de las tres áreas de la economía, despachado por la Cámara de Diputados, que contiene los criterios sustentados al respecto por el PDC, y agregábamos que quedaba pendiente al respecto de la remisión en común de las siguientes materias: plazo, naturaleza y forma de liquidación y pago de los bonos, integración del Tribunal de reclamos y recursos contra sus resoluciones.

4. Empresas mixtas

Manifestábamos sobre empresas mixtas que nosotros habíamos entregado un proyecto redactado de acuerdo con los criterios generales de ambas comisiones y que hasta la fecha del envío de la carta, no había habido observaciones de parte de la comisión de la DC.

5. Definición de pequeña y mediana propiedad y del grupo familiar

Decíamos que estaba aprobado de común acuerdo el texto del proyecto de ley sobre estas materias.

6. Actividades reservadas al Estado

Aludíamos a un documento emanado del Departamento Técnico de la DC entregado con posterioridad a la redacción conjunta del proyecto, conteniendo criterios que se estaba de acuerdo en desestimar; y que subsistía, en consecuencia, el temor del proyecto aprobado conjuntamente sobre el particular.

7. Atribuciones CORFO y otros organismos estatales

Expresábamos que el proyecto referente a estas atribuciones estaba aprobado por ambas comisiones.

8. Régimen de participación

Afirmábamos que el criterio de la Unidad Popular había quedado fijado en la observación (veto) referente a esta materia y que dicho criterio

había sido aprobado en sus líneas generales por la DC al vetarse tal observación en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado. Se recordaba que las comisiones negociadoras habían acordado que este mismo sería el criterio base para la redacción del proyecto conjunto.

9. Empresa de trabajadores

Enunciábamos que ambas comisiones habían concordado en que las empresas de trabajadores no se establecerían en áreas estratégicas de la economía o monopólicas, y que por nuestra parte habíamos aclarado que cuando una empresa pasa a ser de "trabajadores", debe de dejar de intervenir en su propiedad el capital privado, como asimismo que los derechos de participación en la empresa de trabajadores tienen que corresponder a todos ellos, inclusive aquellos que se desempeñan en un momento dado como trabajadores temporales. Agregamos que, previa consulta a los trabajadores respectivos, habíamos aceptado que podían constituirse como empresa de trabajadores la totalidad de las correspondientes a los sectores textil y del calzado, cuyo capital hubiese sido al 31 de diciembre de 1969 de 14 millones de escudos o más, figurasen o no en la lista de las 90 empresas. Reproducimos, a fin de sintetizar nuestro criterio, lo expuesto por el Ejecutivo en las observaciones al proyecto de reforma constitucional, donde se expresa lo siguiente:

"En efecto, el Gobierno propicia el más amplio sistema de participación de los trabajadores en la administración de las empresas del área social y en las del área mixta controladas por el Estado. Se acepta también que los trabajadores administren por cuenta propia, ciertas empresas que no operen en actividades económicas esenciales que deben reservarse al Estado; que los trabajadores no posean la propiedad individual de los medios de producción de la empresa, y que no haya reparto de utilidades entre los trabajadores, sino que los excedentes —estimados en el conjunto de la rama de producción respectiva— no accedan en beneficio individual, sino que sean capitalizados socialmente o repartidos en beneficio social". Por último decíamos respecto de las empresas de trabajadores, que habíamos coincidido en que a fin de hacer factible la experiencia era preciso establecer un sistema nacional que permita acrecentar el control de los trabajadores sobre el aparato productivo, como asimismo capitalizar socialmente el excedente. Dicho sistema debería contener normas sobre el grado de autonomía de cada empresa a fin de evitar desviaciones particularistas.

10. Publicidad

En nuestra carta expresábamos que ya se había llegado a un acuerdo para establecer un sistema de distribución equitativo de todos los recursos para la publicidad estatal que aborde campañas de interés general, y del 50 por ciento de los recursos publicitarios de las grandes empresas de las 3 áreas de la economía.

11. Regulación de precios

Expresábamos que había habido acuerdo para constituir una Comisión Administrativa para conocer de los reclamos sobre regulación de precios y que sólo restaba precisar la integración de dicha comisión.

12. Requisiciones e intervenciones

Puntualizábamos en nuestra carta que existía acuerdo en el texto del proyecto sobre reglamentación de las requisiciones e intervenciones, quedando pendiente sólo la decisión de quién o quiénes actuarían como Tribunal Administrativo Provisional en tanto se creara una Corte Administrativa.

A nuestra carta —sintetizada en los párrafos anteriores— dio respuesta el senador Fuentealba puntualizando algunos detalles de apreciación que en sí mismo no desvirtúan la conclusión del alto grado de acuerdo a que se había llegado en las conversaciones con los representantes del PDC, siendo las materias aún en discusión de escasa relevancia si se atiende a la magnitud general del asunto y a los aspectos en que ya existía entendimiento.

Este grado de acuerdo y la recordada decisión del Consejo del PDC de que se situara en el Parlamento la posibilidad de producir soluciones definitivas, indujo al Ministro de Justicia a tomar contacto directo en el Senado con dirigentes de ese partido. Fruto de estas conversaciones fue el acuerdo alcanzado en la tarde de ayer, después del Consejo Extraordinario del PDC celebrado en el mediodía en el cual aprobó la gestión de sus mandatarios. Este acuerdo se refería a los siguientes puntos:

Acuerdo proyectado

a) El Ejecutivo retiraba de inmediato alguna de las observaciones o vetos al proyecto de Reforma Constitucional sobre áreas de las economía, referentes especialmente a la exigencia de ley especial para el estableci-

miento de dichas áreas, a la vez que presentaba, también de inmediato, un proyecto de ley referente a definiciones de la pequeña y la mediana propiedad rústica, la pequeña y mediana empresa industrial, extractiva y comercial y de familia, todo para los efectos de la garantía constitucional respectiva; sobre el régimen de las actividades reservadas al Estado; la reglamentación de las facultades sobre requisiciones e intervenciones, y, por último, sobre adquisión por los organismos de Estado de empresas privadas o derechos en ellas;

b) Por su parte, el PDC se comprometía a aceptar y apoyar en el Congreso el proyecto de ley a que se ha hecho mención, sin perjuicio de reservarse su parecer respecto a algunas materias no substanciales contenidas en el mismo proyecto, las cuales serían objeto de examen por las comisiones de la DC y de la UP que habían participado en las discusiones, a fin de llegar a un pronto entendimiento que se materializaría en indicaciones al proyecto.

c) En el proyecto, además, se definiría el concepto de "trabajadores permanentes" para los efectos de la Reforma Constitucional en cuanto agrega un nuevo inciso al N° 10 del art. 10 de la Constitución;

d) El citado proyecto de ley sería tramitado con urgencia y el apoyo a él de la DC —en las materias señaladas— se mantendría en cualquiera que fuera la suerte que corrieran las conversaciones sobre las observaciones al proceso de Reforma Constitucional no afectadas por el compromiso;

e) En todo caso, y siendo las disposiciones vigésima y vigésimoprimera transitorias del proyecto de Reforma Constitucional, normas que reglamentan algunas de las materias sostenidas en el proyecto de ley en referencia, la DC votaría favorablemente las observaciones supresivas de las mismas, y;

f) Por último, la discusión de las observaciones o vetos al proyecto de Reforma Constitucional no se reanudaría antes del 16 del presente mes de julio, esto es, después de la elección extraordinaria de un diputado por Coquimbo.

Boicot del PIR

El Ministro de Justicia, una vez convenido este compromiso, obtuvo del Presidente de la República la firma tanto de oficio de retiro parcial de los vetos como el proyecto de ley mencionado. Sin embargo, al llegar con ambos instrumentos a la Vicepresidencia del Senado para ultimar los trámites que materializaban la gestión, fue informado por el senador Fuentealba que todo había fracasado en razón de que el Partido de Izquierda Radical se

negaba a retirarse de la sala del Senado a fin de no dar quórum para la sesión en que empezaría minutos más tarde, la votación de las observaciones, ya que los senadores de dicho partido junto a los nacionales y los radicales democráticos daban número necesario para reunirse y votar las observaciones.

Inconstitucional

Puestas en votación las observaciones en la sesión del Senado, la mesa de esa corporación, frente a los requerimientos de los senadores de la Unidad Popular de que, acerca de que si el Senado insistía o no, por los dos tercios declaró que a su juicio no correspondía, de acuerdo a la Constitución, votar sobre la insistencia.

En esa forma, se consumó la infracción a la Carta Fundamental, que da origen a un conflicto Constitucional y político cuya gravedad y efecto no es posible prever pero que sin duda dañará el estilo de convivencia de los chilenos.

En este evento el Gobierno de la Unidad Popular usará todos los mecanismos que la Constitución prevé para dar solución institucional al conflicto, consciente de que ella será obstaculizada por la oposición, que ha anticipado que no acatará las decisiones del Tribunal Constitucional. El conflicto se produce no sólo por diferencias sobre las materias que abarcan la Reforma Constitucional y las observaciones, sino también por otras razones de mayor gravedad. En primer lugar, se busca un desplazamiento del centro del poder político del Estado desde el Presidente de la República al Congreso Nacional, por efecto de las tesis de que en la tramitación de la Reforma Constitucional la simple mayoría en ejercicio del Congreso puede imponer su criterio sobre el del Primer Mandatario. En segundo lugar, se busca cerrar el camino a la legalidad del proceso revolucionario de la Unidad Popular derogando facultades actuales e impidiendo el establecimiento de una nueva legalidad, más adecuada a la dinámica del proceso político chileno.

[...]

El Gobierno está en la razón y defiende la Constitución y la ley, porque ello es defender los intereses del pueblo. Sostenemos que la Constitución exige al Congreso que insista por los dos tercios de sus miembros presentes en un proyecto de Reforma Constitucional para que éste pueda subsistir y sostenemos que el Tribunal Constitucional es competente para conocer de las infracciones a la Carta Fundamental que se produzca en la tramitación de una Reforma Constitucional, por las siguientes razones.

Razones políticas

En Mensaje con que el Presidente Frei envió al Congreso el proyecto de Reforma Constitucional que comenzó a regir en 1970, expresa claramente que se quiso establecer otra posibilidad, paralela a la existente, para llegar a plebiscito en materia de Reforma Constitucional, debido a que era muy difícil reunir el quórum de la mayoría en ejercicio para aprobarla y eso impedía reformar la Carta Fundamental.

Hasta ese momento la consulta prebiscitaria sólo era posible respecto de los textos observados por el Presidente de la República en que el Congreso insistiere por los dos tercios de ambas Cámaras. Sin modificar esta situación se agregó a ella el caso de rechazo total del proyecto. En este evento la base del plebiscito es la negativa del Congreso a reformar la Constitución, en circunstancias que el Presidente de la República cree necesario una Reforma. El problema puede ser resuelto a través de una consulta a la ciudadanía. En cambio, cuando el plebiscito se refiere a las materias vetadas por el Presidente de la República, se parte de la base de que hay acuerdo general para reformar la Constitución, pero existen discrepancias sobre la forma de hacerlo. En principio, esta discrepancia puede ser resuelta a través del procedimiento usual de formación de la Ley, dentro del cual la facultad de vetar el proyecto aprobado por el Congreso significa que el Presidente puede impedir que se dicte una norma o que ella sea establecida en forma distinta a la que él estima conveniente, y su criterio se impondrá a menos que una mayoría del Congreso tan alta como los dos tercios prime sobre su voluntad. En caso contrario no habrá ley sobre la materia, porque la esencia del veto es impedir la dictación de una nueva norma.

Desde el punto de vista político y como resulta claramente de la historia y contenido de la Reforma Constitucional de 1970, ésta tuvo por objeto dotar de mayores atribuciones al Presidente de la República, en claro desmedro del Congreso, de manera que sería absurdo suponer en un aspecto tan importante que la reforma pudiese debilitar hasta tal punto al Poder Ejecutivo que lo dejare sometido, atado de pies y manos, a la mayoría del Congreso.

Razones históricas

En ninguna acta, informe o debate de los numerosos producidos durante la discusión de la Reforma Constitucional de 1970 se contiene la menor constancia de que el propósito del constituyente hubiere sido el de

variar los quórum de votación relativos a las observaciones. Las constancias que existen indican todo lo contrario. En informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, se dijo expresamente que no había otra excepción en la materia que la contenida en el actual inciso final del Artículo 108 de la Constitución. Esa excepción consiste en que para aprobar las observaciones es necesaria mayoría de los miembros en ejercicio en ambas Cámaras. En todo lo demás seguía aplicándose la regla contenida en el Artículo 54 de la Constitución, por efecto de la referencia que a ella hace el inciso 1° del Artículo 108. En consecuencia, es irrefutable, a la luz de este antecedente histórico, que el Congreso, cuando vota sobre una observación supresiva o sustitutiva y en caso que la rechace, debe proceder a votar por segunda vez sobre si insiste o no en mantener el texto que originalmente aprobó, y que para ello necesita de los dos tercios de los miembros presentes.

Razones jurídicas

La interpretación recién afirmada se desprende con absoluta claridad del tenor del Artículo 108. De acuerdo con el inciso 1° de esta disposición, el Proyecto de Reforma Constitucional se somete a la misma tramitación que el proyecto de ley, sin otras excepciones que las que el mismo Artículo y el Artículo 109 establecen. Ahora bien, en lo relativo a las observaciones o vetos hay sólo dos excepciones: la primera, relativa al contenido de las observaciones y la segunda, referente al quórum para aprobarlas. En Derecho, toda excepción a una regla general debe ser expresa y clara y, según se comprueba, no existe tal excepción en lo relativo a la votación de insistencia en los textos vetados y al quórum para mantenerlos.

Es efectivo que el simple rechazo de la observación otorga al Presidente de la República la facultad de llamar a plebiscito sobre el particular, si lo estima necesario. En otras palabras, no es indispensable que el Congreso insista por los dos tercios de sus miembros presentes en el texto originalmente aprobado por él para llamar a plebiscito. Pero de ello no puede deducirse que, a falta de plebiscito, se imponga el criterio del Congreso. Lo que simplemente acontece es que no hay ley sobre la materia, y si no la hay, el Presidente no tendrá necesidad de llamar a plebiscito cuando se trata de vetos sustitutivos o supresivos.

Por otra parte y desde un punto de vista lógico y formal, resulta absurdo sostener que el Congreso está en condiciones de mantener su criterio frente a un veto supresivo y sustitutivo, con una mayoría inferior a la

que debió reunir para aprobar el artículo vetado. Sería absolutamente inútil que el Presidente reiterase sus planteamientos sobre el particular en forma de observaciones supresivas o sustitutivas, sabiendo de partida que un número inferior de parlamentarios que el que antes fue necesario para rechazar su criterio, va a poder rechazarlo nuevamente al momento de observar el proyecto.

Es obvio entonces que la absurda y forzada interpretación constitucional que sustenta la oposición no tiene el menor asidero jurídico, siendo, por el contrario, de fundamento e intencionalidad netamente político. Lo que se quiere es hacer de la reforma constitucional un mecanismo de Gobierno, más flexible de manejar que la propia ley, y cuyo efecto práctico es entregar a la mayoría del Congreso la conducción política, gubernamental y administrativa que la Constitución confía claramente al Presidente de la República. La derecha reaccionaria, al comprobar que ha perdido toda influencia en el Poder Ejecutivo, vuelve a refugiarse en el Congreso y pretendiendo hacer retroceder la historia, quiere volver a cambiar el régimen presidencial de gobierno que ella creó y fortaleció, por un régimen parlamentario de gobierno.

Defensa de prerrogativas

La gravedad política y jurídica de este ataque a la Constitución y al régimen de gobierno chileno, obliga al Poder Ejecutivo a recurrir al Tribunal Constitucional, instancia superior establecida por la Carta Fundamental para resolver de este tipo de discrepancias. La oposición, que no trepida en quebrantar la Constitución al alterar los quórum para votar las observaciones a la Reforma Constitucional, vuelve a quebrantarla en este punto, anticipando que no acatará la decisión del Tribunal Constitucional, cuya competencia niega. Mientras se acusa al Poder Ejecutivo, infundadamente, de no respetar las decisiones judiciales, no se tiene el menor escrúpulo para desacatar pública y anticipadamente el fallo del más alto Tribunal de la República. Es esta actitud de la oposición la que da mayor permanencia al conflicto institucional producido. Mientras el Ejecutivo ha declarado que se atendrá a lo que resuelve el Tribunal Constitucional, la oposición anticipa su rebeldía. Profesores de Derecho Constitucional de filiación derechista, como los señores Alejandro Silva Bascuñán y Jorge Ovalle, reconocieron durante el debate de la reforma que nacionalizó la Gran Minería del Cobre, que la competencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, la que por lo demás se desprende en forma irrefutable del inciso primero del artículo

108 en cuanto, siendo el reclamo al Tribunal Constitucional una instancia propia de la tramitación de un proyecto de ley, ella es también procedente en la de una Reforma Constitucional, en cuanto no se ha hecho excepción expresa al respecto.

Agotados los posibles caminos del diálogo, sólo resta esperar que el normal funcionamiento del sistema institucional resuelva el conflicto planteado, sistema dentro del cual la última palabra corresponde al pueblo".

* * *

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN CHILENA ELABORADO POR EL INSTITUTO DE AMÉRICA LATINA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS

(1972, probablemente de comienzos de julio)

(Tomado de "Chile en los Archivos de la URSS", documentos recopilados por Olga Uliánova y Eugenia Fediakova, *Estudios Públicos*, 72, primavera 1998, pp. 424-452.)

(Tomo 4, pp. 2650-2663)

[Los intelectuales soviéticos analizan el caso chileno, mostrando el alto grado de conocimiento que tenían.]

Academia de Ciencias de la URSS *Confidencial*
Instituto de América Latina *ej. Nº 35*
Reg. Nº 04.

Situación en Chile y perspectivas de colaboración económica soviético-chilena
Moscú, 1972

1. Situación política

En octubre del año 1970, en Chile, por primera vez en América Latina, el bloque de fuerzas revolucionarias, unidas alrededor de un programa de profundas transformaciones económico-sociales, llegó al poder. El objetivo principal del gobierno de la Unidad Popular, de acuerdo a su programa, es "acabar con el dominio del imperialismo, con monopolios y con la oligarquía latifundista y empezar la construcción del socialismo en Chile".

En perspectiva, la exitosa realización del programa del bloque de la Unidad Popular tiene que conducir a la construcción de una sociedad socialista. Sin embargo, los modos para alcanzar este objetivo no están claros todavía. En su primer mensaje al Congreso (mayo de 1971), S. Allende declaró : "No podemos repetir la experiencia de Cuba, la Unión Soviética y China. Tenemos nuestro propio camino, tenemos que construir la nueva sociedad, partiendo de las condiciones chilenas reales, tomando en cuenta la historia de Chile". Además, el gobierno de Allende tiene problemas bastante serios en las esferas tanto política como económica.

[...]

La situación política de Chile se destaca por una serie de importantes particularidades.

1. Los partidos políticos de izquierda que llegaron al poder pacíficamente, disponen sólo de una parte del poder político, más precisamente, del ejecutivo. El poder legislativo y el judicial (la Corte Suprema) están en las manos de la oposición de derecha. De esta manera, el problema clave de cualquier revolución, el problema del poder estatal, hasta ahora no ha encontrado y, en una perspectiva más cercana, no va a encontrar su resolución definitiva.

2. Después de llegar al poder, Allende prometió conservar la libertad absoluta de prensa, respetar los derechos de oposición y mantener lealtad a la Constitución. En la práctica, esto significa el compromiso de conservar todas las instituciones democrático-burgueses estatales existentes, es decir, rechazar el quiebre revolucionario del antiguo aparato estatal, incluyendo el Ejército, los servicios de seguridad, etc.

3. Una característica particular del proceso revolucionario chileno consiste en que está dirigido por un bloque multipartidista que incluye elementos socialdemócratas y cristianos de izquierda, como también representantes de las corrientes ultraizquierdistas e izquierdizantes. La unidad de los partidos Comunista y Socialista, que constituye la base del bloque, tampoco es plenamente sólida. Entre los comunistas y socialistas existen discrepancias y contradicciones por problemas tan importantes como el agrario, la actitud hacia las agrupaciones de la izquierda extremista, las relaciones con la oposición de derecha, entre otros.

(...)

5. Ultimamente, en los círculos gubernamentales chilenos surgió la tendencia a utilizar el Ejército y Carabineros para solucionar problemas políticos y sociales (declaración de estado de sitio, nombramiento de los militares en cargos superiores administrativos civiles, etc.). Al parecer, es un índice de que en el sistema de poder existente Allende no tiene intenciones o no puede resolver problemas sociales apoyándose exclusivamente en la directiva sindical, y solucionar los problemas políticos contando sólo con el apoyo de los partidos de la Unidad Popular.

6. La polarización de las fuerzas políticas en Chile alcanzó un nivel tan alto que en la perspectiva más cercana no puede estar excluida la posibilidad de confrontaciones abiertas (probablemente, con uso de armas) entre la ultraderecha y la ultraizquierda.

[...]

En general, observando la oposición de derecha, da la impresión de que dentro de ella se podría destacar la presencia de dos tendencias, unidas

en su rechazo a la política de la Unidad Popular, pero diferentes en su visión de los métodos de la lucha contra el gobierno. Los extremistas de derecha de la oposición se unen con el movimiento "Patria y Libertad" que realiza acciones ilegales contra el gobierno. Como declaró hace poco el líder de esta agrupación, P. Rodríguez, "Patria y Libertad" está segura de que el gobierno tarde o temprano va a romper la Constitución; entonces el Ejército saldrá a actuar, y esta organización de derecha tiene que estar preparada para apoyar a las Fuerzas Armadas con una acción civil. Es decir, la ultraderecha apuesta al desencadenamiento de la guerra civil.

[...]

En la perspectiva más próxima también hay que esperar el fortalecimiento de la actividad de las agrupaciones extremistas de izquierda, en primer lugar, de la más influyente de ésta, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Los vínculos de la Unidad Popular con el MIR son más estrechos y complicados que lo parecen a primera vista. Especialmente esto se refiere al Partido Socialista y su secretario general, Carlos Altamirano. Durante el período de las elecciones presidenciales y después de éstas, el aparato del MIR ejercía las funciones de una especie de órgano de contrainteligencia en la Unidad Popular, y efectivamente ayudó a la Unidad Popular a descubrir varias organizaciones conspiradoras. Por una parte, esto demuestra capacidades y vinculaciones aún no esclarecidas del MIR, pero, por otra parte, demuestra sus contactos con los líderes socialistas. Es sabido que dos parientes cercanos de Allende son integrantes del MIR.

Nos parece probable que Allende, a pesar de algunas de sus declaraciones respecto al MIR, donde los amenaza con represalias, aspira más bien a poner bajo su control a esta organización que a debilitarla o destruirla. De hecho, los grupos miristas pueden ser comparados con los grupos activos de extremistas de derecha que en febrero de 1972 realizaron una serie de actos vandálicos.

Desde los primeros meses de 1972, el MIR se activó, tratando de dividir la Unidad Popular y aislar al Partido Comunista. En la provincia de Concepción los miristas lograron ciertos éxitos en este sentido. En mayo de 1972, el MIR, MAPU, la Izquierda Cristiana y la organización local del Partido Socialista organizaron el frente único contra los comunistas y exigieron la dimisión del Intendente de la ciudad de Concepción (comunista). En la asamblea de los dirigentes de partidos de la Unidad Popular, dedicada a este asunto, las discrepancias alcanzaron un nivel muy alto. Apoyando a los extremistas de izquierda, el secretario general del PSCh, Carlos Altamirano, exigió a Allende acelerar las transformaciones revolucionarias en for-

ma de un ultimátum. No obstante, en las declaraciones oficiales de las directivas nacionales de todos los partidos que forman parte de la Unidad Popular, el incidente en Concepción fue condenado y se declaró que si el MIR no renunciaba a su política divisionista, no habría ningún tipo de contactos con él (una declaración más vaga hizo al respecto C. Altamirano).

[...]

En general, en el gobierno y en la Unidad Popular llegó a predominar, al parecer, la idea de la necesidad de transformar al máximo la economía antes de 1976, para cerrar el camino atrás, independientemente de quién llegue al poder en las nuevas elecciones presidenciales. Los promotores de esta idea (en eso casi no hay lugar a dudas) son los comunistas. Los socialistas (más que otros partidos) esperan quedarse en el poder después de 1976, pero no saben cómo hacerlo. De ahí sus vacilaciones y discrepancias internas.

En lo político, la actual reestructuración del gobierno sólo aparece como una concesión a los elementos izquierdizantes, en realidad es un triunfo de la línea del PCCh.

[...]

Pero en general el golpe de Estado en Chile actualmente es poco probable. En sus últimas declaraciones el Comandante en Jefe del Ejército chileno, general C. Prats, destacó la lealtad de los militares a la Constitución. Respondiendo a los llamados de la prensa derechista que instiga a los militares a intervenir y acabar con los grupos armados de izquierda, Prats declaró: "En nuestro país no existen grupos armados que amenazarían con la intervención militar en la vida política nacional"[2]. En Chile, según Prats, la situación es muy diferente a la de Colombia o Venezuela: aquí nadie se pronuncia contra el Ejército. En cuanto a poner orden en las calles, es el trabajo de la policía. Los objetivos de las Fuerzas Armadas están definidos por la Constitución, y las FF. AA. deben cumplir con ellos estrictamente. Las Fuerzas Armadas no intervenían, no intervienen y no intervendrán en la vida política del país.

El Ejército chileno apoyó decididamente al gobierno en el tema de la nacionalización de las minas de cobre de propiedad de las compañías norteamericanas.

Entre las causas más importantes que explican el apoyo real del Ejército al gobierno de Allende, se podrían mencionar las siguientes:

1) Cambios en la composición social del cuerpo de oficiales. De hecho, desde la época de la Constitución de 1925, los representantes de las capas medias urbanas adquieren cada vez más mayor importancia en todos los eslabones de mando. El nivel de vida de los oficiales venía bajando

constantemente, así que en la década de los 60 se igualó con el nivel medio de vida de los empleados públicos. E. Frei prestó poca atención a la situación económica de los militares: se atrasaba el pago de sueldos, no se reajustaban a tiempo las remuneraciones según el IPC (esto afectaba a los oficiales en mayor medida que a los obreros y empleados públicos). Aprovechando las condiciones especiales de los militares, el gobierno de Frei les pagaba parte de sus salarios y sueldos en especies. Solamente el motín de octubre de 1969 lo hizo reconsiderar su actitud frente al Ejército y mejorar algo la situación económica de los militares. En este sentido el suelo resultó fértil para el gobierno de Allende, pero el cultivo de buenas relaciones con los militares cuesta caro.

2) Fortalecimiento de la influencia de la izquierda no solamente entre los oficiales, sino también entre la tropa. Lo demuestra la aparición de organizaciones de izquierda entre los militares en retiro, de carácter tanto político como profesional. El Movimiento de la Acción Popular Independiente encabezado por el senador R. Tarud tiene muy buenos contactos entre los militares, especialmente entre aquéllos en retiro. Después de la llegada de Allende al poder fueron realizadas purgas de envergadura entre los oficiales, lo que fue facilitado por la investigación del motín de 1969 y, especialmente, del asesinato de general Schneider. Se puede suponer que la parte reaccionaria del cuerpo de oficiales, en su mayoría, se vio obligada a renunciar por una u otra razón.

Una prueba indirecta del fortalecimiento del apoyo a la izquierda entre la tropa la constituyen algunos datos de la estadística electoral. Por los partidos Comunista y Socialista a principios de los 60 votaban más del 60% de los hombres. En las elecciones municipales de 1971, por primera vez participaron los jóvenes entre 18 y 21 años. Más del 70% de ellos votaron por la Unidad Popular. Es natural suponer que los conscriptos del Ejército, de la misma edad, tienen una postura más o menos semejante. En consecuencia, es difícil suponer la posibilidad de una acción del Ejército chileno como una fuerza unida al margen de partidos y del gobierno.

3) El Ejército chileno no tiene una experiencia práctica suficiente de gobierno.

Un papel importante en la actual situación política del país juega el cuerpo de Carabineros. De las 70 mil personas en armas en Chile, 20 mil son carabineros. A ellos en gran medida se puede referir todo lo dicho anteriormente sobre el Ejército. Pero hay también ciertas particularidades. Carabineros fue creado en 1927 por el general Ibáñez, tras la pérdida del apoyo del ala progresista del cuerpo de oficiales, dirigido por el futuro

fundador del Partido Socialista, Marmaduque Grove. Carabineros fue creado como contrapeso a esta parte del Ejército. Posteriormente los gobiernos burgueses del país, actuando, según el principio *divide et impera*, apoyaban las discrepancias entre el Ejército y Carabineros. En 1964, el 80% de los carabineros en retiro y de los de servicio activo con derecho a voto, votaron por Frei. Sin embargo, bajo el gobierno demócrata cristiano las relaciones entre el gobierno y el cuerpo de Carabineros se deterioraron significativamente. Una de las razones principales fue el empeoramiento de la situación económica de los carabineros, el aumento de los años de servicio necesarios para obtener jubilación, de 10 hasta 20 años (en la práctica, hasta 25-30 años), la reducción de personal, etc.

Después de la llegada al poder, Allende designó un nuevo General Director del cuerpo, subió las remuneraciones de los carabineros y oficiales, presentó ante el parlamento un proyecto de ley que proponía aumentar la dotación de la institución (este proyecto fue rechazado por los votos de PDC y Partido Nacional, lo que, naturalmente, provocó descontento entre los carabineros con las acciones de la oposición). Durante su viaje al Perú el Presidente ofreció al General Director de Carabineros y a su esposa que lo acompañaran. Ocurrió por primera vez en la historia de la institución y recibió una gran y positiva repercusión entre sus miembros. Durante la visita a Cuba del Ministro de Relaciones Exteriores, éste fue acompañado por otro alto oficial del cuerpo de Carabineros. Los dirigentes de la institución más de una vez destacaron su satisfacción por no tener que realizar ahora las humillantes funciones de un órgano represivo antipopular.

El golpe de Estado en Chile actualmente es poco probable, y la ultraderecha y la ultraizquierda no disponen de fuerzas suficientes para eso. Además, Allende tiene grandes posibilidades para utilizar, en el caso de necesidad, el Ejército contra las acciones abiertas de ultraizquierda y la ultraderecha.

[...]

4. Estado de relaciones económicas con la URSS y perspectivas de su desarrollo

En enero-febrero de 1972, estuvo de visita en Chile la delegación económica soviética, dirigida por el vicepresidente del Comité Estatal de Planificación de la URSS, camarada M. A. Pertzev. Durante las negociaciones con la delegación soviética, la parte chilena expresó su visión de las perspectivas de la colaboración económico-comercial para los años 1972-1975.

La parte chilena expresó sus expectativas en el sentido de que en 1972-1975 el intercambio promedio comercial entre la URSS y Chile podría alcanzar aproximadamente 300 millones de dólares anuales. Se destacó el interés especial de Chile de importar desde la URSS trigo, carne, mantequilla y algunos otros productos alimenticios, así como algodón, petróleo crudo, etc., por un total de 100-120 millones de dólares anuales. Además la parte chilena informó de su interés en importar maquinaria y equipos varios (para la construcción de carreteras, el sector energético, instalaciones de perforación, además de tractores, trolebuses, etc.) por un total de 30 millones de dólares anuales, aproximadamente. Sin embargo, la parte chilena quisiera empezar los primeros pagos por los suministros respectivos sólo a partir del año 1976. Esto implica que los productos soviéticos, principalmente alimentos y materias primas, se importarían en las condiciones de un crédito a largo plazo, que sería pagado después de las elecciones presidenciales de 1976, es decir, por la siguiente administración chilena, mientras que las transacciones con estos productos en la práctica internacional se realizan normalmente en efectivo sobre la base de crédito de corto plazo (hasta un año),

Al mismo tiempo, la parte chilena dio a conocer su lista de productos para exportar a la URSS, que incluía concentrados de cobre, cobre no elaborado y refinado, salitre, yodo, pescado, harina de pescado y también varios productos manufactureros industriales (calzado, productos de lana, etc.). A juzgar por la suma del intercambio anual (alrededor de 300 millones de dólares) propuesta por la parte chilena, el volumen de las compras soviéticas en Chile debería equivaler a 150 millones de dólares anuales, aproximadamente. Además, el pago por las exportaciones chilenas se realizaría en efectivo y en divisa convertible.

La parte chilena fundamentó su posición en el tema de las relaciones económicas entre la URSS y Chile aludiendo, por un lado, a grandes restricciones de carácter monetario y financiero y, por otro lado, a razones políticas.

En marzo de 1973 se celebrarán en Chile las elecciones al Congreso Nacional, de cuyos resultados dependen muchas cosas. Así, en el transcurso de las negociaciones la parte chilena hizo hincapié en que el triunfo de la derecha en estas elecciones puede conducir a la caída del gobierno de la Unidad Popular. Por esta razón, la parte chilena solicitó, con especial insistencia, ayuda económica para los próximos meses, es decir, antes de la elecciones parlamentarias.

De esta manera, el plan de desarrollo del comercio soviético-chileno propuesto por la parte chilena implica que la Unión Soviética tendría que

aceptar condiciones que jamás se han contemplado en las relaciones de la URSS con los países en vías de desarrollo. Los chilenos esperan que la URSS les suministre anualmente grandes partidas de productos de primera necesidad, y escasos en la URSS, como trigo, carne, mantequilla, algodón, etc., sobre la base de un crédito a largo plazo. A su vez, se supone que la Unión Soviética tendría que importar productos, de los cuales no tiene mayor necesidad, y pagarlos de inmediato en moneda firme […].

* * *

ARNOLDO CAMÚ (PARTIDO SOCIALISTA): RESPUESTA AL PARTIDO COMUNISTA

(*Punto Final* Nº 162 del 18 de julio de 1972)

(Tomo 4, pp. 2705-2709)

[Arnoldo Camú, uno de los dirigentes más importantes del PS polemiza con el Partido Comunista respecto a los mejores medios para acumular fuerza.]

En PF N° 160 reprodujimos el artículo de Orlando Millas, aparecido en "El Siglo" del 5 de junio, donde adelanta la posición comunista sobre el rumbo que debe seguir el Gobierno. Ahora resumimos la respuesta a Millas escrita por Arnoldo Camú, de la Comisión Política del PS, publicada en la revista "Posición", N° 12, del 4 de julio.

[...]

El artículo de Arnoldo Camú coloca las cosas en su lugar, cuando los tres ministros comunistas se esfuerzan de hecho y palabra por presentar sus criterios partidistas como "política de toda la UP" (caso Perlack, conversaciones con la DC, etc.). Esta actitud de una de las partes en un debate todavía no resuelto, lleva confusión y desaliento a la clase obrera y a los trabajadores en general. El artículo de Camú servirá para que se vea con claridad que algunas de las posiciones calificadas por el PC como "ultraizquierdistas" y "provocativas" también forman parte del pensamiento actual del Partido Socialista.

Marcha atrás

El artículo de Camú comienza destacando las coincidencias con el PC. Señala así "el vigor con que Millas desarrolla el principio de que ninguna revolución es tal si no se propone y no consigue alterar las condiciones en que la clase obrera participa en la actividad económica". Y en tal sentido coincide en advertir los peligros de limitarse al "capitalismo de estado" si no cambia la actitud cualitativa en la administración de las empresas expropiadas. Camú expresa que las "gigantescas transferencias de propiedad sobre los bienes de producción" deben implicar "cambios en las relaciones de producción".

Igualmente, Camú coincide con Millas en plantear la necesidad de una conducción obrera real de la economía, a través de la participación, y destaca los aspectos desarrollados por Millas sobre esta materia, tanto en lo que se refiere a "la utilización de métodos científicos y renovados en la dirección del área social" (planes científicos de producción), como la for-

mación de un sistema de administración nuevo "que funcione sobre la base de la participación democrática". Ambos elementos, junto a otros factores, son señalados por Camú al igual que Millas como fundamentales para "dar realidad a un cambio de relaciones de producción (término de la relación explotador-explotado de la empresa capitalista)".

Pero Camú agrega que el tratamiento de estas materias no son "lo medular" en el documento de Millas. "Lo más importante en este documento y en todos los documentos e intervenciones del Partido Comunista de las últimas semanas (conferencia de prensa de Luis Corvalán, informe de Víctor Díaz al Pleno del C. Central de 23 de junio, etc.), es el planteamiento de una reorientación táctica en la política económica del Gobierno y en la línea de conducción de las masas, que por los efectos prácticos que implica debe preocupar e interesar a todo el movimiento popular".

Según Millas, "lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que *la correlación de fuerzas* ha sido afectada en contra de la clase obrera y del Gobierno Popular" (...) "por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la UP". (Subrayado de Camú).

Por transgresiones, Millas entiende las tomas de tierras e industrias, los incidentes en Concepción e incluso la acción radical de algunos miembros del Gobierno en el plano de las expropiaciones fabriles y de la Reforma Agraria, acciones en la mayoría de las cuales ha estado comprometida la militancia y dirigencia socialista. En su criterio, estas "transgresiones" significaron la pérdida de los sectores medios como aliados y así el fracaso de la posibilidad de aislar a los sediciosos.

Se hace necesario, entonces, por sobre cualquier otro objetivo, defender la estabilidad del Gobierno, y agrega Millas en el párrafo citado por Camú: "Sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos, y, por el contrario, deberán hacerse algunas concesiones... En estas condiciones, *en nada ayuda al proceso revolucionario* poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro cuando haya condiciones más desarrolladas" (subrayado de Camú), puesto que "pueden contribuir *a que despierten suspicacias, incomprensiones y resistencias innecesarias*" (subrayado de Camú). Así, esta reorientación "requiere aislar a los sediciosos, afianzar el Gobierno, consolidar su obra y modificar en su favor la correlación de fuerzas".

"Dónde empiezan las diferencias"

Entrando de lleno a su respuesta a Millas, Camú señala: "Enfocar el problema de la correlación de fuerzas exclusivamente desde la perspectiva

de la eficacia o debilidad para dividir al enemigo y neutralizar a los sectores influenciables y desde allí auspiciar una nueva táctica para el movimiento popular, es una posición equivocada que, unida a otros planteamientos ya publicitados por el PC va configurando un claro cambio en la estrategia de la UP para la conquista del poder político".

Camú señala que este error comunista proviene de su "unilateralidad" en el análisis, pues no aborda el problema de la correlación de fuerzas "en todas sus partes", y en cambio considera sólo un aspecto de él. Se apoya en Lenin, quien refiriéndose a la unilateralidad, dijo: "La lógica dialéctica requiere que sigamos más allá. Para conocer verdaderamente el objeto hay que abarcar todos sus aspectos, todas sus vinculaciones e intermediaciones. Jamás lo conseguiremos por completo, pero la exigencia de la multilateralidad nos prevendrá contra los errores y el anquilosamiento".

Contrariamente a Millas, que mide la correlación de fuerzas sólo por el grado de división del enemigo, Camú estima que en el caso chileno ésta debe apreciarse según "la capacidad de combate nuestra y del enemigo en relación a un objetivo determinado: la conquista del poder". Y en este punto, definitorio para el análisis, hay "muchos aspectos más preeminentes que el grado de cohesión o división del enemigo o la actitud de los neutrales para apreciar lo desfavorable o no de la correlación de fuerzas en una situación dada para el proletariado". Entre esos aspectos —que Camú define como "grado, calidad y cantidad" de las fuerzas proletarias— menciona, además del número de los combatientes, su organización, su experiencia y tradición de lucha, su moral y mística, la decisión y audacia de los líderes, la justeza estratégica, la adecuada utilización de los elementos de combate (medios de comunicación), el terreno del enfrentamiento, los aliados, etc.

Camú refuerza su argumentación citando al primer secretario del Partido de los Trabajadores de Vietnam, Le Duan ("la Revolución Vietnamita"): "Lejos de quedarnos cruzados de brazos y cifrar nuestras esperanzas en las contradicciones de las filas enemigas, sabemos muy bien que el desarrollo de esas contradicciones, así como hasta dónde es posible aprovecharlas *lo decide la fortaleza real de la revolución.* Las experiencias de todas las revoluciones verdaderamente populares han enseñado que mientras más grande es la fuerza de la revolución, es más impetuoso el movimiento revolucionario, más se desarrollan las contradicciones internas del enemigo y mayor posibilidad hay de profundizar la diferenciación en sus filas".

Ganar las fuerzas revolucionarias

A la política comunista de alianza con la burguesía media y pequeña, Camú responde que en esta correlación lo decisivo es "la propia fuerza

de la revolución", la que se logra "esencialmente por la firmeza y resolución de las vanguardias proletarias de conquistar, en primer lugar, a la mayoría del proletariado, de unir tras sí a las grandes masas de trabajadores, a los mejores hombres de la clase obrera". Y agrega: "Defícilmente se podría afirmar que esta tarea está cumplida en Chile, como para poner por encima de esta tarea y contradictoriamente a ella otras tácticas conducentes a la captación o neutralización de la pequeña, mediana burguesía y otros sectores medios y pequeño burgueses".

Camú especifica que la tesis del PC de hacer concesiones para ganar determinadas capas sociales es antagónica al camino de acrecentar las fuerzas proletarias, semiproletarias del campo y la ciudad, y otras capas populares. "Ciertamente no se ganan estas fuerzas (sobre todo en medio de las dificultades económicas, financieras y de cerco imperialista en que nos encontramos) aceptando la premisa de Orlando Millas de que "*en nada ayuda* al proceso revolucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro, cuando haya condiciones más desarrolladas". (Subrayado de Camú).

Por el contrario, Camú estima, junto con Rosa Luxemburgo, que la ley vital de toda revolución "es la de avanzar con extrema celeridad y decisión (. . .) y *planteándose siempre metas ulteriores*", de lo contrario será empujada más atrás "de las débiles posiciones de partida", hasta ser aplastada. (Subrayado de Camú).

Más adelante, Camú se refiere a los peligros de perder fuerzas entre los propios trabajadores "al optar por políticas de quietismo, atrayentes a la pequeña burguesía". Da como ejemplo el planteamiento de Millas sobre la cuestión agraria, quien dice "en cuanto *a los sectores no afectados* por la actual etapa de la Reforma Agraria, debe llegarse con ellos a acuerdos concretos de producción, *asegurando su estabilidad y ascenso económico*". Consejo con el cual pretende evitar el efecto de la lucha campesina que, a juicio de Millas, ha enajenado el apoyo de grandes masas de agricultores medios.

Camú señala que un acuerdo con los sectores no afectados por la Reforma Agraria significa concretamente "que no habrá para ellos Reforma Agraria". Y agrega "esta seguridad brindada a estas clases sociales 'permitiría' ganar o neutralizar aproximadamente a treinta y dos mil propietarios de predios entre 20 y 80 hectáreas de riego básico y a setenta y dos mil propietarios de predios entre cinco y veinte hás. de riego básico. Esta política, que es correcta sin discusión de nadie con respecto por lo menos a la pequeña propiedad (hasta veinte hectáreas de riego básico y quizás hasta cuarenta) conduce derechamente a la conclusión de que 120 mil obreros

agrícolas ...que laboran en propiedades de entre 40 y ochenta hectáreas *quedan marginados de su derecho histórico a la tierra, al no impulsarse una nueva* Reforma Agraria". (Subrayado de Camú).

Camú pregunta si al ofrecerse en cambio a esos 120 mil obreros agrícolas solamente salarios mínimos, beneficios contractuales y otros "¿sería posible incorporarlos vitalmente al carro de la revolución para aumentar las fuerzas del proletariado?" Por otra parte, señala Camú que el criterio comunista representa una falta al programa de la UP, el cual asegura que "la Reforma Agraria implicará la expropiación de todos los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos".

A la vez, el dirigente socialista recuerda que el 7 de marzo de 1971, un informe agrario del PC planteaba como tarea fundamental "la liquidación de la tenencia de la tierra, en la cual el dominio de la propiedad es desigual", y agregaba que en lo referente "a la lucha por una verdadera Reforma Agraria, necesitamos que el sector más consciente del campesinado, en alianza con la clase obrera, se fortalezca ganando nuevas fuerzas sociales del campo".

En consecuencia, Camú afirma que debe ponerse el acento ante los campesinos explotados en que una verdadera Reforma Agraria dependerá de su organización y capacidad de lucha "para apoyar al Gobierno y la Unidad Popular a arrancar a las fuerzas reaccionarias los mecanismos de aplicación de una nueva ley".

Detener aun temporalmente la formación del área social, a juicio de Camú, por otra parte, significa paralizar el "más potente caudal de acumulación de fuerzas en favor del Gobierno", pues "el efecto dominante de la incorporación al área social o mixta de una cantidad importante de empresas monopólicas o estratégicas ha sido el acrecentamiento neto de las fuerzas del proletariado, con que antes no se contaba, y con las cuales quizás ahora se cuenta para todo. ¿Cuál es la naturaleza y la magnitud de los obstáculos que aconsejarían debilitar una política económica que arroja estos incuestionables resultados y en su lugar, consolidar solamente lo alcanzado o avanzar a menos ritmo?"

Millas ha criticado como desenvolvimiento negativo de la economía la acción indisciplinada, el voluntarismo y la ineficiencia en las nuevas áreas económicas, para justificar una revisión del programa de expropiaciones. Tras revisar las ventajas de colocar las empresas monopólicas y estratégicas en las áreas social y mixta, al tiempo de reconocer determinados errores de administración Camú se muestra de acuerdo con el economista Julio López, quien en un extenso análisis sobre la economía política de la UP señala que "la condición política para la consolidación del Gobierno

Popular, el fortalecimiento y ampliación de su base de apoyo y el debilitamiento de sus enemigos estratégicos, también imponen como requerimiento ineludible *la aceleración y el avance coordinado de su programa económico*". (Subrayado de Camú).

Finalmente, sería un riesgo ineludible, según el juego natural de la burguesía, que ésta arrastre consigo a sectores medios —dice Camú— tras la defensa general de la propiedad privada.

Se hace necesario "neutralizar y atajar a esos mecanismos de dominación ideológica... para desgajar la alianza de todos los sectores de la burguesía", pero en el bien entendido que esa táctica "en caso alguno debe obstaculizar la gran táctica para abatir el poder de los enemigos principales de dentro y fuera, y no puede conducir al abandono del camino de preparación de las condiciones óptimas de conciencia y organización de las masas de los sectores industriales monopólicos, para su lucha por su ingreso a las nuevas áreas de la economía. Creemos que esas masas deben saber que el paso firme hacia el socialismo cruzará más temprano que tarde los umbrales de sus fábricas y empresas y abatirá para siempre, irreversiblemente, la explotación capitalista. Y para que lo sepan hay que poner los acentos del caso".

* * *

PARTIDO SOCIALISTA (COMITÉ CENTRAL): INFORME A LOS MILITANTES SOBRE EL PARO PATRONAL. DOCUMENTO CONFIDENCIAL INTERNO (19 de octubre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3328-3348)

[En la coyuntura del Paro de Octubre, el Partido Socialista informa a sus militantes y desarrolla ideas para organizar a los trabajadores.]

La Comisión Política del Partido Socialista a los organismos intermedios, de base y mandatarios del partido

I. Información acerca de la actual situación del país y las tareas políticas del Gobierno, la Unidad Popular y el partido.

II. Resumen de las instrucciones concretas entregadas por la Dirección del partido.

III. Instructivas de la Dirección a partir del estado de alerta (secuencia cronológica).

IV. Acerca de los efectos de las zonas en estado de emergencia.

V. Otros documentos relativos a la actual situación.

Santiago, octubre 19 de 1972

Información acerca de la actual situación política

La ofensiva estratégica de los enemigos del pueblo

En los últimos días, como culminación de todo un proceso de agudizamientos del enfrentamiento de clases en el cual las fuerzas enemigas de la Unidad Popular y del Gobierno, procuran a toda costa mantener la iniciativa y fijar el terreno y las reglas de la lucha política. Se ha desatado una ofensiva a fondo de los enemigos del pueblo. Su propósito último no es sino derribar al Gobierno Popular, a fin de imponer una dictadura fascista que revierta todos los avances del proceso revolucionario en marcha y desate la represión contrarrevolucionaria. La represión que se debe esperar para el caso de que obtengan la victoria será tanta y tan sagrienta como se necesite *para liquidar la capacidad revolucionaria de la clase obrera* y sentir la seguridad de que sus intereses y su existencia misma como clase dominante no serían nuevamente amenazados: destrucción de las organizaciones populares, eliminación física de todos sus dirigentes (como lo han

postulado públicamente), aislamiento de la clase de otros sectores revolucionarios, silenciamiento de su voz en los medios de comunicación, cátedras universitarias, etc.

[...]

El domingo 5 se hace pública la adhesión incondicional de la DC al movimiento sedicioso, y a partir de entonces se ve con claridad que el enemigo está jugando todas sus cartas. En una acción cuyo objetivo máximo es derribar al Gobierno, cuyo programa mínimo es: garantías para la Papelera, reapertura de Radio Agricultura-Los Angeles, garantías de no crearse ninguna empresa estatal de transporte. Todo esto con carácter de *intransable.*

Al conjunto de paros parciales impulsados en la perspectiva de ir creciendo y llegar a la paralización del país, se sumó otro tipo de acciones encaminadas al mismo objetivo: resistencia a la acción de la autoridad civil, policial y militar, presión sobre sectores de las FF.AA., sabotajes de diverso tipo, pronunciamiento parlamentario, violenta campaña de prensa interna e internacional, hasta llegar al anuncio de la acusación inconstitucional al Presidente de la República, pasos sin precedentes en la vida política nacional. ¡Pocos esquemas sobreviven en este país a la "insólita experiencia" del actual proceso revolucionario!

Con todos estos elementos se puede afirmar sin lugar a dudas a que *la insurrección civil está en marcha.*

[...]

Se cometería el más grave de los errores si no se aprovechan las actuales circunstancias en que obreros, empleados, profesionales, técnicos, estudiantes, mujeres, campesinos, etc., se encuentran alerta; movilizados en todo tipo de tareas y *conscientes de que deben jugarse y dispuesto a darse enteros en la defensa del proceso revolucionario.* El fortalecimiento de las organizaciones populares y el surgimiento de otras nuevas para concretar el *poder popular nacido desde las bases,* es la victoria más importante que se pueden obtener de esta batalla, y la única que por sí sola avala y garantiza efectivamente las otras victorias conseguidas.

[...]

En grandes líneas, éste ha sido el desarrollo y los efectos concretos hasta hoy de la ambiciosa ofensiva de la contrarrevolución. Todo esto, que objetivamente es bastante, golpeando al enemigo con la conciencia, la disciplina y la organización de las masas. *¡Sin usar todavía los puños!*

¡La batalla no ha terminado!

¡Demos un gran salto adelante... ¡Ahora!

Resumen de las instrucciones concretas
entregadas por la Dirección del partido

[...]

2. *Comandos comunales:* [...]

El comando comunal debe organizar el control de los trabajadores sobre las actividades fundamentales y organizar la defensa frente a la acción contrarrevolucionaria. A la larga esto tiene que convertirse en *poder popular efectivo*, a través del control progresivo de la producción, el transporte, abastecimiento, servicios públicos, vigilancia, etc. El comando estudia la situación de la comuna y toma medidas a través del comisiones: abastecimiento, transporte, defensa, y las que sean necesarias. Planifica, organiza y dirige la movilización de masas en la comuna. Organiza los Comités de Autodefensa de la comuna, de los sectores en que divida la comuna, de las poblaciones de cada sector y manzana por manzana en cada población. Sólo una vez que estén formados, funcionando y ejerciendo un control real de los Comandos Comunales, se pasará a integrarlos en Comandos Provinciales y en un gran Comando Nacional, de manera que éstos surjan con un poder real en la base y *con representatividad real*, no burocráticamente por arriba.

[...]

Defensa: La premisa general es que en Chile se desarrolla un enfrentamiento de clases en todos los planos y con múltiples formas de lucha, que tienden a generalizar la violencia provocada por los enemigos del pueblo. Se trata entonces de *incorporar a todo el pueblo*, a través de todas sus organizaciones a la defensa del Gobierno, del movimiento popular y del proceso revolucionario. En un sentido amplio, mantener la producción a través de la propaganda y la movilización (demostraciones de fuerza), son todas formas de defender el proceso. Pero hay tareas de defensa más concretas: bajo la dirección de la CUT y Comandos Comunales, formar y fortalecer los Comités de Protección en cada empresa, servicio, oficina, escuela, etc., y los Comités de Autodefensa manzana por manzana en todo Chile. A través de la defensa de cada fábrica, población, vía férrea, puente, etc., las masas se preparan para responder ofensivamente las provocaciones violentas de los enemigos internos, y defender con éxito a la Patria ante la agresión imperialista externa. Que no quede nadie desvinculado de las tareas de defensa del proceso. Ese es el objetivo.

5. *Coordinación con el Gobierno y relación con las FF.AA.* Debe entenderse que es indispensable convertir toda la lucha popular en una *acción concertada del Gobierno con las masas.* Son dos elementos de la

misma fuerza: no pueden disparar para distinto lado. Esta es una guerra en que se usan todas las armas: el Gobierno tiene la administración del Estado, la Ley y la Constitución; las masas tienen la fuerza que emana de su número, su organización y su conciencia de clase. Las organizaciones respaldan todas las medidas de Gobierno y ayudan a hacerlas efectivas. El Gobierno se apoya en las masas para avanzar con medidas más enérgicas y decisivas. En el proceso surgen naturalmente contradicciones que deben superarse positivamente a través de la discusión, la crítica constructiva y en un plano que no ayude al enemigo, sin dejar de ser firme. Con las FF.AA. se debe tener el trato que se ha dado en la actual emergencia: hay una actitud de respeto mutuo entre militares y movimiento de masas (CUT, principalmente), porque ambos son depositarios de la fuerza. Debe recogerse la experiencia del "encuentro solidario de los trabajadores con los soldados en la acción común de normalizar la país".

[...]

Instrucciones emitidas por el CC

[...]

Instructiva N° 3
Domingo 15-10-72

[...]

Todos los Comités Regionales durante el día lunes deberán arbitrar fundamentalmente las siguientes medidas:

1° Formación de piquetes de protección para aquellos establecimientos comerciales que abran sus puertas al público, fundamentalmente en los grandes centros de distribución de alimentos. Actuar en apoyo de la fuerza pública en los casos que sean necesarios. En aquellos puntos de la ciudad donde no haya fuerza pública, en el momento que sea necesario, estos compañeros deberán actuar sobre los elementos que presionan ilícitamente a los comerciantes o los que busquen problemas traducidos en desmanes y desórdenes. Estas acciones deben ser perfectamente controladas, evitando enfrentamientos inútiles, sin que esto signifique, por supuesto, actuar con blandura;

2° En todos los Comités Regionales y Seccionales deberá disponerse de un equipo de compañeros que estén en condiciones de movilizarse a cualquier lugar ante una orden del Comité Central o del Comité Regional respectivo;

3° Durante el día de hoy domingo y de los próximos días, deberá acentuarse la acción de vigilancia en todas las empresas. Si los patrones deciden cerrar una empresa, los obreros deberán proceder a abrirla y hacerla funcionar. Ninguna empresa, fábrica o industria puede detenerse;

4° Debe activarse, en todas partes, la acción de detección y denuncia a este CC de todo camión que permanezca oculto o detenido sin trabajar por razones injustificadas. Esta denuncia, si es posible, deberá ser hecha incluyendo el nombre del propietario, patente y lugar donde está estacionado. Estas denuncias deberán ser hechas telefónicamente a los números 88382, 713416, 85835;

[...]

Comité Central
Instructiva N° 4
Lunes 16-10-72

A los
Comités Regionales
Comités Seccionales
Núcleos y Mandatarios:

[...]

Dado el desarrollo de la actual situación, la Dirección instruye al partido:

Se debe movilizar a todos los cuadros militantes y periferia partidaria, en torno a las siguientes medidas concretas:

[...]

2° Los regionales deben organizar la formación de brigadas a nivel de los frentes de masa, dispuestos a concurrir a los sitios en que se manifieste la acción provocadora de ultraderecha. O sea, además de los Comités de Protección en las empresas o poblaciones, se debe incorporar al máximo de masa independiente a estas brigadas que deben estar preparadas para movilizarse y actuar en cualquier momento.

[...]

Instructiva N° 7
Jueves 19-10-72. Hora 17.00.

1. La Dirección del partido estima:

Que la derecha se plantea a partir de mañana una fuerte contraofensiva en el plano del comercio, locomoción colectiva, intentos de tomar empresas y particularmente, las empresas estratégicas, buscando producir un enfrentamiento decisivo.

2. Por lo tanto, el partido "deberá extremar" las medidas de protección de las empresas estratégicas: impedir por todos los medios las tomas y paralización de la producción y servicios básicos.

3. En el caso de la locomoción colectiva, deberá trabajarse con los choferes, incluso llegar a tomar los medios de locomoción, entregándolos al interventor militar correspondiente, si este interventor está nombrado, o a la autoridad correspondiente, como manera de quebrar el paro de la locomoción.

[...]

Comunicado de las JS

El presente es de lucha; el futuro es nuestro

[...]

Frente a los graves acontecimientos que vienen sucediendo, la Juventud Socialista llama a las masas juveniles a mantenerse movilizadas en torno a las siguientes tareas:

1. Decidido apoyo a todas las medidas que el Gobierno Popular tome en relación a la situación de emergencia, a la que los reaccionarios arrastran al país. La fuerza del Gobierno Popular radica fundamentalmente en la fuerza del pueblo que lo respalda.

[...]

5. Reforzar la vigilancia de masas sobre el comercio, el transporte y el abastecimiento del combustible, denunciando a las autoridades cualquier irregularidad.

[...]

7. Ante las criminales actitudes de sabotaje y el reintento de la derecha de incorporar al paro a otras organizaciones por ella controladas, es tarea fundamental la constitución de Comités de Vigilancia en barrios, fábricas y escuelas.

[...]

La Juventud Socialista manifiesta así su irrenunciable deber de ocupar la primera trinchera de todos los frentes de lucha y combatir junto a la clase obrera y el pueblo en la perspectiva de la construcción de la patria socialista. Nada cambiará nuestra decisión, porque está alimentada con la presencia de los compañeros caídos.

Por el socialismo a combatir.
Con la fuerza de las masas, con el Gobierno Popular
V e n c e r e m o s

Comisión Política Juventud Socialista

* * *

PARTIDO SOCIALISTA Y PARTIDO COMUNISTA: PROPÓSITOS DE OFENSIVA POLÍTICA (Octubre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3306-3312)

[Como respuesta a la paralización de los gremios, los partidos comunista y socialista acuerdan realizar una contraofensiva que les permita acelerar el proceso de construcción socialista. Quizás fue la primera y última vez en que se pusieron de acuerdo en este tipo de iniciativas. Es uno de los documentos de mayor importancia histórica.]

A juicio de ambas direcciones la actual conyuntura política posibilita al Gobierno y a la Unidad Popular desencadenar una gran ofensiva que nos permita tener la iniciativa de ahora en adelante. Y por otra parte, dar respuesta adecuada al sentir de las masas en la hora presente. Es un hecho que el frente derechista se bate en retirada y que surgen en él contradicciones a la salida política que ellos deben presentar. Para ambos partidos este triunfo que está obteniendo la clase obrera y sus aliados es de la mayor trascendencia histórica y debemos utilizarlo para ganar más poder y obtener un avance cualitativo e incluso cuantitativo de proporciones insospechadas. Pensemos que cualquier error o conciliación nuestra introducirá elementos de contradicción en el seno de la clase obrera y sus aliados y de desconfianza hacia el Gobierno Popular, puesto que la clase obrera y sus aliados han logrado con enorme sacrificio y esfuerzo contener y quebrar la ofensiva reaccionaria que intentaba derrocar al Gobierno Popular. Pensamos, por lo tanto, que ha llegado la hora de contragolpear con firmeza, aprovechando las debilidades del enemigo y el fortalecimiento evidente del frente de clase. En este sentido planteamos una vez más que la única salida a la crisis debe ser una salida de fuerza y es en esta línea que se inspiran las medidas concretas que proponemos.

IX. Ofensiva de masas

Hasta hoy sólo hemos utilizado una pequeña parte del potencial combativo de las masas; pensamos que hay que estructurar una táctica de movilización que libere este potencial y proponemos:

Comandos Comunales: Entendidos como organismos de poder en el seno de la masa, que sin entrar a suplir los organismos de poder del Estado, canalicen las inquietudes y problemas de los trabajadores y del pueblo en general. Pensamos que existen las condiciones para su creación inmediata.

Composición:

CUT comunal o en su defecto un organismo coordinador de todos los sindicatos de la comuna.

Unión Comunal de Juntas de Vecinos o en su defecto un Comité Coordinador de las mismas.

Unión Comunal de JAP o en su defecto un Comité Coordinador de las mismas.

Unión Comunal de Centros de Madres o en su defecto un organismo coordinador de las mismas.

Alcaldes y regidores que deseen participar.

Comité Coordinador Comunal de Federaciones o Centros Estudiantiles Universitarios si los hay.

Comité Comunal Coordinador de Federaciones o Centros Estudiantiles Secundarios y Primarios.

Consejo Comunal Campesino.

En general, otros organismos de masas que existan en la comuna y pudieran, posteriormente, ser invitados a participar.

Dirección:

A objeto de una correcta canalización y solución de los problemas y en el espíritu de que estos organismos no aparezcan como poderes paralelos al Gobierno, pensamos que deben estar presididos por el Intendente, el Gobernador o el Subdelegado, según sea el caso.

III. Ofensiva en el Parlamento

Pensamos que sin ser la tribuna parlamentaria un frente de lucha fundamental con la clase dominante, también es necesario poner allí a la derecha entre la espada y la pared.

IX. Dar urgencia a los proyectos de ley de delito económico y probidad administrativa, pero sin retirarlos para obligar al Parlamento a pronunciarse.

b) Urgencia a los proyectos de ley que crean el sistema nacional de autogestión, de garantías a la pequeña y mediana industria y participación de los trabajadores.

c) Estudio inmediato y envío al Congreso de la segunda Ley de Reforma Agraria, sobre bases que serán discutidas por las Comisiones Agrarias de los partidos de la UP.

[...]

IX. Área Social

Estimamos que constituiría un error político grave si no aprovechamos la coyuntura que nos entrega la burguesía para ampliar rápidamente el APS. En este sentido ningún monopolio ni empresa importante requisada puede ser devuelta. Cualquiera presunta devolución deberá ser aprobada por los partidos de la Unidad Popular y en ningún caso por resolución unilateral del Gobierno.

[...]

* * *

COMANDOS COMUNALES Y CORDONES INDUSTRIALES DE SANTIAGO: EL PLIEGO DEL PUEBLO*

(Octubre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3272-3288)

[Documento presentado por los Comandos Comunales, Cordones Industriales y otras organizaciones populares de base, en respuesta al documento "Pliego de Chile" redactado por directivas gremiales en octubre de 1972.]

Frente al Pliego de los Patrones Levantemos el Pliego de:

La clase obrera.
Los pobres del campo y la ciudad.
Todos los trabajadores de Chile.

A. Las enseñanzas de las crisis de octubre

I. La huelga de los patrones

1. El paro patronal, la resistencia civil, tuvo como objetivo paralizar el país para así derrocar al Gobierno y reprimir al pueblo. Es el intento de los grandes patrones del transporte, del comercio, la industria y la agricultura de usar el inmenso poder económico y político que conservan para coronar, de esta forma, la acción de sabotaje permanente que vienen realizando desde el 4 de septiembre de 1970.

2. Mostraron los patrones toda su fuerza con la huelga del comercio, el transporte, la pequeña burguesía privilegiada de la fuerza institucional que tienen en el Parlamento, en la Contraloría, en la Justicia; mostraron la fuerza de su riqueza.

Pero no lograron paralizar el país; la clase obrera y el pueblo lo hicieron andar. No han logrado, por otra parte, arrastrar a oficiales y soldados a sus sucios y criminales manejos.

[...]

II. Los patrones están demás

1. La experiencia de estos días ha demostrado que los trabajadores no necesitan de los patrones para hacer funcionar la economía. En sus desesperados intentos por paralizar el país, sólo han conseguido mostrar su

carácter parasitario ante los ojos de todo el pueblo. Todavía, más, se han quedado aislados, junto al puñado constituido por aquellos sectores medios privilegiados. La conclusión es clara: sobran los patrones.

Así, pues, los patrones quisieron golpear al pueblo y lo seguirán intentando, pero no consiguieron su propósito y han dejado en claro que están demás como patrones.

[...]

III. Las tareas de los trabajadores

[...]

2. Durante el desarrollo de esta lucha hemos ido generando nuevas fórmulas orgánicas, los Consejos Comunales de Trabajadores, que irán aumentando inmensamente nuestra fuerza. Allí, unidos, obreros, campesinos, pobladores, estudiantes y todo el pueblo en torno a este pliego del pueblo haremos sentir a nuestros enemigos el enorme peso de nuestra fuerza.

3. Una parte del pueblo, los soldados, se han enfrentado, como nunca antes con la actividad social y política de una clase que lucha feroz e inescrupulosamente por conservar sus privilegios y ha presenciado la actividad de un pueblo del que también forman parte, que se demuestra capaz de sostener la producción, de alimentar al pueblo, de transportarlo y de defender los bienes de Chile del sabotaje de los patrones.

IV. Abramos el camino al poder popular

1. En las nuevas condiciones políticas creadas, de aislamiento y desenmascaramiento de los patrones y de fortaleza de la clase obrera y el pueblo este pliego nos dará unidad y nos señalará claramente la dirección de cada uno de nuestros golpes.

[...]

B. Los delitos de los patrones

[...]

2. La aristocracia del dinero pretende desvergonzadamente imponer al pueblo el pliego de la miseria, de la explotación, de la opresión: el pliego de la SNA, la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Central de Comercio. Exigen la satisfacción de este pliego, pues sólo así están dispuestos a seguir cumpliendo su papel de zánganos. Ese es el pliego de Chile.

Pero el pijerío y los haraganes acostumbrados a vivir a costa de la esclavización de la clase obrera, los trabajadores y el pueblo, tendrán que acostumbrarse ahora a vivir bajo nuevas reglas; las reglas que impone el proceso de liberación y emancipación de los trabajadores; la legalidad que impondrán los trabajadores con sus luchas.

3. Por eso el pueblo considera delitos económicos a los explotadores y luchará por someterlos desde ahora a la sanción del pueblo los siguientes:

—Es delito explotar impunemente a los trabajadores, someterlos a salarios de hambre, despidos arbitrarios, cesantía, incumplimiento de las leyes sociales.

[...]

—Es delito acaparar, especular, traficar, sobornar, desarrollar el mercado negro.

—Es delito dejar sin abastecimiento al pueblo, cerrando el comercio, paralizando las industrias, los fundos, el transporte.

[...]

—Es delito que los capitalistas no inviertan las ganancias que extraen de la explotación de los trabajadores y las utilicen en el financiamiento de la sedición de los grupos armados derechistas, en el consumo suntuario, en la compra de mansiones y autos de lujo.

[...]

C. El pliego del pueblo

Hay que expropiar a los inservibles, hay que terminar con
los grandes capitalistas

I. Asegurar la distribución y abastecimiento adecuado y oportuno al pueblo

1. El gran comercio es un parásito que no produce nada, salvo ganancias fabulosas a costa de los consumidores, de los obreros, los campesinos y los trabajadores en general. Hoy pretenden, con su paro patronal, impedir que el pueblo se alimente y se vista.

Por eso exigimos y lucharemos por la:

—Nacionalización de todas las grandes distribuidoras.

—Nacionalización del comercio exterior.

—Nacionalización de todas las grandes empresas comerciales.

[...]

II. Por un sistema de transporte y movilización que resuelva las necesidades del pueblo

[...]

—Nacionalizar las grandes empresas del transporte terrestre, marítimo, de pasajeros y carga.

—Crear empresas de transporte dependientes de las empresas del Area Social.

—Fortalecer las empresas de transporte colectivo del Estado.

—Desarrollar empresas comunales de transporte colectivo, dependientes de los Consejos Comunales y en las que participen el Estado, la comuna, los choferes y empleados y los pequeños empresarios del transporte.

—Apoyar a los pequeños empresarios del transporte asegurándoles los repuestos y reposición de los equipos; agruparlos. Organizar a los choferes, cargadores y pionetas y desarrollar allí formas de control obrero.

[...]

III. Que todas las industrias produzcan para el pueblo bajo control del pueblo

[...]

Por eso los trabajadores llamamos a luchar por la:

—Nacionalización de todas las grandes empresas y monopolios industriales.

—Nacionalización rápida y sin indemnización de las inversiones norteamericanas.

—Establecimiento del control obrero de la producción en todas las industrias que permanezcan en el área privada y que exploten trabajo asalariado.

—No devolución e incorporación definitiva al Area Social de todas las grandes industrias que fueron requisadas o intervenidas durante la huelga patronal sediciosa.

—Ilegalización de la SOFOFA.

IV. El pueblo tiene derecho a tener viviendas, hospitales, escuelas, campos deportivos y una ciudad igual para todos

[...]

Por eso el pueblo levanta como plataforma de lucha:

—La nacionalización de las grandes empresas de la construcción.

—Formación de una empresa estatal de la construcción y de empresas regionales y empresas comunales.

[...]

—La ilegalización de la Cámara Chilena de la Construcción.

V. Sólo el pueblo puede resolver el problema del campo y hacer producir la tierra

[...]

Por eso los trabajadores de la ciudad y del campo luchamos por:

—La expropiación de todos los fundos de más de 40 HRB, a puertas cerradas.

—Eliminar el derecho a reserva y la indemnización de la tierra.

—Apoyo técnico y crediticio a los pequeños y medianos propietarios.

[...]

—Entregar el poder suficiente a los Consejos Comunales para que dirijan todas estas transformaciones y la producción en la comuna apoyados por los aparatos técnicos del Estado.

[...]

XII. Por una educación abierta, popular e igualitaria

[...]

Por eso los trabajadores levantamos la lucha por:

1. Una nueva educación, de carácter popular, igualitaria y ligada al trabajo productivo.

2. Un nuevo sistema educativo que establezca:

a) La nacionalización de toda la educación, la supresión de la enseñanza particular y el establecimiento de un sistema nacional unico de educación dependiente del Estado.

b) La dirección democrática del sistema educativo, a través de los consejos nacionales, provinciales, comunales y locales de educación. Estos consejos deben estar integrados por el Gobierno, los trabajadores de la educación, los estudiantes y la clase obrera y los trabajadores en general a través de sus organizaciones representativas.

El Consejo Comunal debe establecer una dirección y control general sobre la educación de la comuna a través de un Comité de Educación.

c) La reorganización, democratización y carácter popular de todo sistema educativo desde la enseñanza parvularia hasta la universitaria, asegurando en todos sus niveles el ingreso masivo de los hijos de obreros, campesinos y trabajadores en general. Abriendo al mismo tiempo, amplias posibilidades de estudio para todos los trabajadores.

[...]

XIV. El derecho del pueblo a la contraofensiva política

[...]

Frente a esto los trabajadores proclamamos nuestro derecho:

—A defendernos en todos los terrenos.

—A llamar a todo el pueblo a estar en alerta permanente.

—A responder golpe por golpe a los patrones.

—Y a tomar en nuestras pripias manos la contraofensiva a la embestida patronal.

[...]

—Las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas y los soldados no estarán contra el pueblo en esta tarea y emplearán los recursos que nuestro trabajo les ha entregado para defender la soberanía y enfrentar a los traidores y agresores de la patria y del pueblo.

[...]

Las tareas inmediatas de la clase obrera,
los trabajadores y el pueblo

[...]

I. Las tareas inmediatas

a) Derrotar con la movilización y organización de la clase obrera, los trabajadores y el pueblo cualquier salida de la crisis que esté a espaldas de las masas. Derrotar el gabinete militar y cualquier otro tipo de concesiones.

(..)

II. Reforzar la organización del pueblo

a) Reforzar la organización de los comités de autodefensa y vigilancia en cada industria, cada fundo, cada manzana de la población, en los servicios públicos, etc.

[...]

* * *

MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS: ¡PARA AVANZAR HAY QUE DESTRUIR EL PODER BURGUÉS!

(23 de octubre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3302-3305)

[En medio de la paralización de los gremios, los trabajadores del Partido Socialista dan a conocer su estrategia para materializar la revolución.]

El imperialismo yanqui lanzó su ataque a Chile utilizando a los sectores patronales disfrazados de "gremialistas" y a los Colegios Profesionales dirigidos por pijes ricachones conectados con la banca, los monopolios y el latifundio, quienes a su vez arrastran a profesionales que olvidan que somos los trabajadores los que pagamos con sudor y sangre su educación y su ubicación privilegiada en esta sociedad burguesa. Todos estos adoradores del dinero han planteado ante el país un paro de la burguesía. Esta clase minoritaria, desesperada y agónica, ha logrado movilizar tras sus banderas sediciosas a sectores oportunistas de la pequeña burguesía.

¡Quieren recuperar sus privilegios! —¡Quieren detener la marcha inexorable de la historia!— ¡Han dado un salto hacia su tumba!

[...]

¡Cuidado! El pueblo se ha unido férreamente frente a la emergencia; la unidad combativa y la conciencia de clase surgen por los campos y ciudades de Chile. Las clases trabajadoras se han puesto de pie, encabezadas por su destacamento más consciente, el proletariado.

¡Señores burgueses! La paciencia tiene su límite, se agota, llega el momento en que la cuerda se acorta y los trabajadores avanzan, barriendo del camino a sus enemigos de clase, abriendo nuevos caminos.

El pueblo no está desarmado; su principal arma es su conciencia y organización.

[...]

La respuesta a la sedición y a la antipatria debe ser consecuente con la firmeza demostrada por los trabajadores.

El Gobierno Popular debe ser duro y responder profundizando el proceso revolucionario, avanzando sin transar.

[...]

1. *Requisición sin devolución de las industrias y gran comercio que apoya al paro político-sedicioso.* Pasar todas estas empresas y consorcios al Area de Propiedad Social, definitiva e irreversiblemente. Aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a las directivas seudogremialistas y reac-

cionarias. ¡Mano dura contra los empresarios y comerciantes millonarios y sediciosos!

[...]

Chile debe entender y saber

—Si en este momento hay alimentos para la población, se debe a los trabajadores.

—Si en este momento hay energía eléctrica, se debe a los trabajadores.

—Si en este momento hay agua, se debe a los trabajadores.

—Si en este momento hay pan, se debe a los trabajadores.

—El país no se ha detenido porque los trabajadores han desbaratado los planes de la burguesía y el imperialismo.

¡Que nadie se engañe! Los trabajadores no serán derrotados, no obstante la decisión de la derecha de llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias.

¡Patria, revolución, socialismo!

¡Trabajadores al poder!

¡Venceremos!

[...]

* * *

PARTIDO COMUNISTA: DECLARACIÓN SOBRE EL GABINETE CÍVICO-MILITAR DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1972

(*El Siglo*, 3 de noviembre de 1972)

(Tomo 5, p. 3413)

"El Comité Central del Partido Comunista, reunido extraordinariamente en la mañana de hoy, dio su plena aprobación a la formación del nuevo gabinete.

La constitución de este ministerio, con participación de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y con la presencia relevante de la clase obrera y del movimiento popular, surgió como una necesidad derivada de la situación política que ha vivido el país.

[...]

El Partido Comunista declara que el pueblo y la nación pueden tener la certeza de que con el nuevo gabinete los enemigos de Chile y de los cambios no podrán llevar adelante sus planes sediciosos e inconstitucionales. No podrán tampoco convertir la campaña electoral en una lucha fratricida y sangrienta.

[...]

Estamos ciertos que la acción del pueblo y de su Gobierno asegurarán la continuidad del proceso revolucionario en los términos contenidos en el Programa que llevó a la Presidencia de la República a Salvador Allende".

Santiago, 2 de noviembre de 1972.

* * *

FERNANDO FLORES (MINISTRO DE ECONOMÍA, MAPU): ENTREVISTA EN *CHILE HOY*

(*Chile Hoy* N° 23 del 17 de noviembre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3670-3677)

[Después del Paro de Octubre, el Ministro de Economía aborda los problemas de desabastecimiento y mercado negro.]

[...]

Ch. H.: Pero la oposición señala que el mercado negro se da a partir de políticas gubernamentales, como el aumento del gasto público y las medidas de precios y remuneraciones.

F. F.: El problema básico es entender los objetivos del programa económico del Gobierno Popular en el sector de abastecimiento de bienes esenciales. Durante estos dos años hemos tratado de defender, y lo seguiremos haciendo, la capacidad de compra de los trabajadores de bajos ingresos. Esto expresa una política de aumentos de salarios que evidentemente produce presiones de demanda que son aprovechadas por los especuladores para fomentar el mercado negro.

[...]

Ch. H.: ¿Es decir, que no hay problemas con la canasta popular? ¿Se puede asegurar esta canasta básica a toda la población?

F. F.: Desde el punto de vista de la cantidad, sí. Esto requiere un plan gradual y evolutivo de implantación. Porque si hablamos de la canasta y la convertimos en una aspiración sentida, y no somos capaces técnicamente de responder, se nos arma un desajuste general. Hay que comenzar por los productos que son más escasos, como la carne y otros, e ir paulatinamente creciendo. Todo esto requiere una gran capacidad de programación y organización de los canales distributivos y los organismos de masas.[...]

* * *

JAIME GAZMURI (MAPU): LAS LECCIONES DEL PARO FASCISTA
(Noviembre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3528-3532)

[Jaime Gazmuri, alto dirigente del MAPU, analiza el Paro de Octubre al que ellos denominan fascista.]

Compañeros, amigos, chilenos:

[...]

Eso es lo que queremos ahora: hacer un balance a la mitad del camino. Porque, desde que comenzó la ofensiva enemiga, hace ya tres semanas, no hemos faltado a nuestra obligación como partido, a nuestra obligación como destacamento de las fuerzas revolucionarias de nuestra sociedad, a nuestra obligación de informar y de orientar a la clase obrera, a los trabajadores, a todo el pueblo: el testimonio de esta obligación cumplida está en los muros de Santiago y de todas las ciudades de Chile, en los diarios murales que nuestros militantes han colocado con sacrificio en todas las murallas del pueblo.

¿Qué pasa en Chile, compañeros, desde el día 11 de octubre? ¿Una crisis? Mucho más que una crisis. ¿Un conflicto? Mucho más que un conflicto. Una guerra, amigos y compañeros. Un enfrentamiento.

Sin chauvinismo ninguno, podemos afirmar que en Chile se desarrolla hoy una lucha de la cual está pendiente el mundo.

[...]

El paro de los camioneros era la señal de partida para un movimiento perfectamente coordinado, para una acción perfectamente dirigida, cuyo propósito final era el derrocamiento de Allende. A confesión de parte, relevo de pruebas: ahí tenemos al Partido Nacional diciéndole a la Democracia Cristiana que hay que derribar al Gobierno antes de marzo del 73.

[...]

Pero la ofensiva del enemigo, los planes de los imperialistas y sus aliados internos, se estrellaron no sólo contra la decidida movilización de la clase sino también contra la actitud patriótica de las FF.AA. de nuestro país. Ellas han colaborado dentro de los marcos de la constitución y en el cumplimiento de sus deberes, haciendo respetar el Gobierno legítino del país. El imperialismo y sus servidores no han podido mellar la actitud patrótica de las FF.AA. chilenas. Y no porque no le hayan puesto empeño, sino porque en la lucha de Chile por su independencia y su soberanía, las

FF.AA. chilenas entienden que Chile libra hoy una lucha sólo comparable a la que libraran Bernardo O'Higgins, Carrera y Rodríguez contra el imperio español. Y en esa lucha están por Chile, por la Patria.

[...]

Pero digamos, primero, que estas tareas las vamos a realizar en condiciones diferentes a las que hemos conocido. En primer lugar, porque el enemigo no puede aceptar la derrota sin entregar la oreja definitivamente, y eso significa que vamos a vivir por largos meses un clima de hostigamiento muy semejante a una guerra. En segundo lugar, porque los daños causados a nuestra economía van a exigir que desarrollemos sobre bases nuevas toda la gestión económica del Gobierno. Finalmente, porque el crecimiento, especialmente cualitativo, de nuestra fuerza, permite enfrentar este conjunto de tareas en base a una participación de los trabajadores y del pueblo en general, superior a todo lo que hemos conocido hasta el momento.

[...]

* * *

GENERAL CARLOS PRATS (GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO Y MINISTRO DEL INTERIOR): ENTREVISTA EN *CHILE HOY*

(*Chile Hoy* N° 22 del 26 de noviembre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3523-3527)

[El comienzo del gabinete militar y la discusión sobre si el gobierno de Salvador Allende capituló.]

Ch. H: ¿Cómo definiría el papel que va a corresponder a las Fuerzas Armadas en el nuevo gabinete del Gobierno Popular?

C. P.: Se trata de colaborar con el Gobierno en la tarea que se ha impuesto de asegurar la paz social, gravemente amenazada por las dramáticas proyecciones del movimiento de paros, y de contribuir a que el proceso electoral que culmina en marzo próximo se realice dentro de las más amplias garantías para todos los sectores de opinión.

[...]

Ch. H.: Usted definió la participación de las Fuerzas Armadas en el Gobierno como "un deber patriótico para contribuir y afianzar la paz social en Chile y promover la concordia entre los chilenos". ¿Qué medidas concretas se propone adoptar para conseguirlo?

C. P.: Aplicar con autoridad y sin discriminación las normas legales vigentes, de modo que todos los sectores reafirmen su convicción y confianza de que los cambios estructurales se realizarán dentro de una efectiva vigencia democrática, como lo propugna el programa de Gobierno.

[...]

Ch. H.: El Gobierno está preparando un proyecto de nueva Constitución Política, que correspondería a una etapa "de transición al socialismo". ¿Qué papel cree usted que debería asignársele en esa nueva Constitución a las Fuerzas Armadas?

C. P.: La Constitución actual menciona en su artículo 22 la actitud que el Estado impone al Ejército, como integrante de la "fuerza pública".

Una nueva Carta Fundamental debiera precisar su misión permanente de resguardar la soberanía nacional en el ámbito geoeconómico y su misión eventual de participar en el resguardo del orden interior, todo ello sujeto a las directivas del Poder Ejecutivo.

Ch. H.: Recientemente fue promulgada la ley que entregó a las Fuerzas Armadas el control de los armamentos en poder de particulares. Durante el paro se han registrado más de 200 atentados, de todo tipo, realizados por grupos armados de ultraderecha. Como Ministro del Interior, ¿se propone aplicarles a esos grupos la lueva legislación?

C. P.: A los grupos armados yo no les pongo apellido. El espíritu de la ley de control de armas es garantizar la tranquilidad pública. Se trata de suprimir las armas que prohíbe la ley y, entre las autorizadas, las que no cumplen con las exigencias de inscripción y porte, quienes quiera que sean sus portadores. Naturalmente, mi deber es cumplir la ley, dictando las normas de aplicación y promoviendo que funcione la mecánica legal correspondiente.

[...]

Ch. H.: Algunos sectores de izquierda han planteado que la presencia de las Fuerzas Armadas en el gabinete limitaría el desarrollo del movimiento de masas. ¿Qué opinión le merece ese juicio?

C. P.: El desarrollo del movimiento de masas es legítimo en la dinámica del mundo actual, encauzado en la legalidad que le es consustancial. Los líderes populares chilenos comprenden por otra parte que el Ejército no está al servicio de estamentos sociales específicos, sino en custodia de los intereses permanentes de la Patria.

[...]

Ch. H.: Una de las características del nuevo gabinete es la presencia de los máximos dirigentes de la CUT junto a representantes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significado tiene esto para usted?

C. P.: Es una solución muy adecuda a las circunstancias políticas del momento. Los trabajadores del país han dado un ejemplo de gran responsabilidad cívica durante el desarrollo del movimiento de paros y su conciencia social de sentido del orden y de afán productor merece el respeto de la esfera militar. El Ejército no tiene complejos clasistas; sus cuadros reflejan la realidad social de Chile, porque son extraídos proporcionalmente de los distintos niveles de la comunidad nacional.

Una conferencia de prensa “dura”

El lunes 6 de noviembre, por la mañana, el general Carlos Prats ofreció su primera conferencia de prensa como Ministro del Interior. En su exposición inicial y luego en las respuestas a diversos periodistas, sorprendió por su dureza, en especial cuando se refirió a tergiversaciones de diarios de derecha sobre la forma en que se había resuelto el paro.

En su primera declaración, resumió así la forma cómo el Gobierno planteó la situación a los representantes de los gremios:

“Durante el desarrollo de este conflicto el Gobierno estuvo permanente dispuesto al diálogo, y es así que durante muchos días se realizaron conversaciones entre los Ministros pertinentes con los diferentes sectores

gremiales que participaron en este movimiento de paro. Pese a la buena disposición del Gobierno, estas conversaciones no fructificaron y el día 1° de noviembre quedaron terminadas.

[...]

Canal 13: Quisiera pedirle al Ministro del Interior dos pequeñas aclaraciones que inciden un tanto en lo que se acaba de manifestar: usted ha señalado que aquí no ha habido arreglo; ¿esto significa que no existen aún acuerdos o compromisos concretos entre las partes en conflicto?

Y segunda cosa: múltiples declaraciones, especialmente de los gremios en conflicto, señalan que este principio de acuerdo había surgido fundamentalmente por su actuación personal, después que usted asumió la cartera de Interior. Quisiera saber qué opinión tiene respecto de estas dos materias:

Ministro del Interior: Yo le voy a contestar la segunda pregunta, porque la primera realmente ya ha sido absorbida aquí en preguntas anteriores, pero muy directamente debo decirle que la solución de este paro se debe justamente a la reafirmación de la autoridad del señor Presidente de la República, quien es el que legítimamente designó a los ministros y en función de esa facultad introdujo cambios en el gabinete, para refirmar su decisión de restablecer la normalidad en el país.

Eugenio Lira Massi (“Puro Chile”): General, yo quería hacerle una pregunta personal: ¿cómo se siente usted, como militar, formando parte del Gobierno Popular?

Ministro del Interior: Yo soy un chileno. Igual como debe serlo usted, y como chileno, debo proceder a prestar mi colaboración, si fuera requerida, para una tarea de tanto interés nacional.

* * *

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE, SALVADOR ALLENDE GOSSENS, PRONUNCIADAS EN LA CENA OFRECIDA EN SU HONOR EN EL KREMLIN, MOSCÚ (6 de diciembre de 1972)

(Tomo 5, pp. 3699-3702)

[El Presidente Allende solicita un crédito al gobierno de la URSS.]

Estimado camarada Podgorny:

Estimados camaradas Miembros del Presidium del Soviet Supremo de la URSS. Diputados al Soviet Supremo de la URSS:

Estimados Camaradas:

[...]

Me encuentro aquí como viejo amigo. Hace ya muchos años en 1954 estuve aquí junto con mi esposa, encabezando la delegación parlamentaria de nuestro país.

Después llegué a la Unión Soviética cuando regresaba de Vietnam a mi Patria. Tuve el honor de encabezar la delegación chilena que llegó a la Unión Soviética para asistir a los festejos en conmemoración del Cincuentenario de la Gran Revolución de Octubre. He tenido el gran honor de recibir la Medalla que me impuso el estimado camarada Kirilenko en conmemoración del Centenario del Natalicio de Lenin. Mi esposa y mis dos hijas también estuvieron anteriormente en la Unión Soviética.

Primer Presidente chileno en la URSS

Pero ahora, hablo no sólo personalmente, hablo como Presidente de Chile. Constituye para mí un gran honor ser el primer Presidente de Chile que visita la Unión Soviética.

[...]

Sobre la realidad chilena

[...]

Ahora nosotros realizamos el proceso revolucionario en correspondencia con nuestras condiciones, con nuestra Constitución, con nuestras leyes. Lo hacemos en el marco de la democracia burguesa. Y no es nada

fácil. Hemos tocado algunos intereses de los amos de nuestras principales riquezas nacionales y ellos lo han notado. Lo ha notado también la oligarquía financiera, bancaria, los latifundistas.

[...]

No estamos solos

Cité varios datos en mi discurso en la ONU y demostré que los monopolios internacionales imperialistas han desencadenado la agresión económica contra mi patria. Remarqué, al mismo tiempo, que no estamos solos. Contamos con la solidaridad de muchos gobiernos y pueblos. Remarqué que encontramos entendimiento en muchos países industriales de Europa y también que los países de la comunidad socialista patentizan solidaridad fraternal con nosotros. Esto se refiere principalmente a la Unión Soviética, a la que nosotros denominamos "Nuestro hermano mayor". Merced a esta solidaridad, merced a esta ayuda, gracias a que nuestra causa es justa, jamás nos desviaremos de nuestro camino, aunque comprendemos perfectamente la escalada de la resistencia contra los pueblos que intentan conquistar su libertad económica.

(..)

Tiene especial alcance el apoyo a Chile de los países donde reina la paz y no hay guerra, donde reina la colaboración económica y no hay explotación, donde respetan nuestra soberanía. Como dijo nuestro gran amigo y camarada, el poeta Pablo Neruda, Premio Nobel, Chile se convierte en un "Vietnam silencioso", sin el estruendo de aviones ni explosiones de granadas, pero con los mismos sentimientos: millones de compatriotas nuestros sienten el cerco abierto y encubierto que tiene lugar en torno a nuestro país.

[...]

* * *

FERNANDO FLORES, MINISTRO DE ECONOMÍA "NUESTRO PROGRAMA ES LA RESPUESTA HISTÓRICA DE LA CLASE OBRERA".*

(Diario *La Nación*, jueves 11 de enero de 1973)

[El Ministro de Economía Fernando Flores anuncia la nueva política de comercialización y distribución de productos. El control de estas operaciones —no lo dice— quedó en manos de las Fuerzas Armadas.]

- La oposición más negativa y destructiva de que haya memoria
- *Lograron organizar una economía de mercado negro*
- *Sanción enérgica para los malos funcionarios*
- *Extender y fortalecer la organización de las masas*
- Es decisivo solucionar problemas de comercialización
- No habrá venta directa al público, ni trueque entre empresas
- Producción del área social irá a las distribuidoras estatales
- Las JAP deben intensificar su participación y vigilancia

Por cadena de emisoras se dirigió al país en la noche de ayer el Ministro de Hacienda Fernando Flores, quien dio a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno para terminar con el mercado negro y la especulación.

El texto de su intervención es el siguiente:

Estimados compatriotas:

El Gobierno ha estimado necesario dirigirse al país para dar a conocer su posición sobre los problemas que enfrentamos en materia de distribución y comercialización de productos básicos para el consumo popular.

Es necesario que este pronunciamiento sea especialmente discutido a fondo por las organizaciones y personas que participaron en la ejecución de las medidas aquí determinadas.

Nos dirigimos en primer lugar, a los trabajadores que, por tener y reconocer en el Gobierno su instrumento político más eficaz, han buscado organizarse en unidades sindicales y vecinales con el objeto de actuar sobre el funcionamiento de los sistemas de distribución y comercialización. Nos dirigimos igualmente a numerosos sectores del proletariado y del campesinado que todavía no se han organizado, y a los vastos sectores, especialmente de capas medias urbanas, que representan una parte importante de la masa consumidora afectada por los problemas actuales.

* Este artículo es el único de toda la selección que no pertenece a la compilación de Víctor Farías. Lo hemos incluido debido a su enorme importancia.

En segundo lugar, este pronunciamiento se dirige a los distintos sectores de comerciantes que, por cumplir funciones diferentes en el sistema de distribución y comercialización, participarán en la aplicación de las medidas diferenciadas que más adelante se exponen.

En tercer lugar, nos dirigimos a los funcionarios del Gobierno y de las empresas públicas, quienes en el desarrollo y en la ejecución de las tareas que más adelante enumeraremos, deben cumplir un papel importante.

Las dificultades actuales tienen su origen en la acción de los enemigos del pueblo

El Gobierno tiene conciencia que existe un conjunto de dificultades derivadas de la escasez en el comercio regular de productos indispensables para el consumo, de la especulación desenfrenada y del mercado negro, dificultades que han tendido a agravarse en el último tiempo.

Para nosotros la causa fundamental de estos problemas está en la acción de los grupos perjudicados por el Programa de profundas transformaciones que impulsan las masas trabajadoras y el Gobierno.

La Unidad Popular alcanzó el Gobierno con un Programa de carácter revolucionario. Este Programa era y es la respuesta histórica de la clase obrera y de amplios sectores populares a un sistema social que se había desarrollado bajo el signo de la dominación imperialista, monopólica y latifundista, y la respuesta a un sistema en que los frutos del trabajo de millones de chilenos eran apropiados por una minoría nacional privilegiada, y por los voraces grupos imperialistas que explotaban nuestras riquezas y nuestro mercado interno.

El Gobierno Popular tenía y tiene una de sus principales razones de ser en la derrota de cada uno de estos enemigos del pueblo, con el propósito de hacer de Chile una nación soberana y verdaderamente democrática, y de echar las bases para la construcción del socialismo.

El cumplimiento de estos propósitos ha impuesto la ejecución rápida y firme de medidas destinadas a romper los lazos de dependencia externa y a destruir el poder de los monopolios y el latifundio.

Al mismo tiempo, se buscó y se logró, como conquistas inseparables de lo anterior, mejorar rápidamente los niveles de vida del pueblo, a través del aumento de los sueldos y salarios de los trabajadores, de la disminución de la cesantía y de la expansión de los servicios de utilidad social, como atención médica, nutrición, vivienda, educación.

La derecha defiende sus intereses con toda la fuerza de que aún dispone

Nunca hemos pensado que el programa de la Unidad Popular podía realizarse sin que entraran en agudo conflicto los intereses de los sectores populares y los intereses de los grupos reaccionarios y del imperialismo. También sabíamos que esos conflictos iban a provocar serias dificultades económicas y políticas.

En cuatro terrenos los enemigos de la Patria y del Pueblo han desatado en forma concertada su lucha contrarrevolucionaria.

En primer lugar, utilizando los otros poderes del Estado, han hecho lo imposible por evitar la realización del Programa Popular, creando trabas al proceso. Han formado la oposición más negativa y destructiva de la historia reciente de Chile. En esa acción han contado a su favor con el viejo aparato estatal, que estaba y está destinado fundamentalmente a administrar al capitalismo y no a transformarlo.

En segundo lugar, han conspirado para derrocar al Gobierno, empeñándose en ello sectores significativos de la oposición, en asociación con las agencias y los agentes de los intereses imperialistas.

En tercer lugar, los grupos reaccionarios se han empeñado a fondo en una gigantesca campaña de falsificación de noticias, de mentiras, difamaciones e instigaciones, que varían en la forma según los órganos de divulgación, pero que mantienen su contenido permanentemente calumnioso. Todo, con el objeto de confundir al pueblo y hacer creer a algunos sectores que la responsabilidad de los problemas que hoy día se presentan, cabe al Gobierno y a las fuerzas que lo apoyan, y no, como es la verdad, a reacción encarnizada de las minorías perjudicadas por los cambios.

En cuarto lugar, en el plano económico, los adversarios de la revolución han utilizado plenamente sus posiciones de poder, que todavía son importantes, para crear toda suerte de problemas al abastecimiento del país y al consumo de los chilenos. Han recurrido a todas las mañas aprendidas en las experiencias de su larga dominación, así como al conocimiento práctico que tienen de la operación del mercado capitalista, del que han hecho su razón de ser y que defienden hasta las últimas consecuencias.

El mercado negro es la síntesis de toda la acción antipatriótica de la derecha

¿Cómo se desenvolvió esa lucha contrarrevolucionaria de la burguesía y el imperialismo?

Los enemigos del pueblo empezaron su actividad antipatriótica desvalijando las grandes empresas industriales y las grandes propiedades agrícolas, que deberían pasar al área social de la economía o a manos de los campesinos, dejándolas en las peores condiciones de funcionamiento. Trataron también de crear inseguridad en los pequeños productores y comerciantes que no tienen nada que perder con la destrucción de los monopolios y del latifundio. Intentaron anular la redistribución del ingreso realizada en beneficio del pueblo, retirando bienes de consumo del mercado regular para su venta a precios especulativos. Han especulado con mercaderías, con dólares y hasta con la paciencia el Gobierno y del pueblo. Dieron lugar a la formación de una verdadera economía de mercado negro, la forma más degenerada del funcionamiento de un sistema capitalista.

Y, en el plano externo, los grupos imperialistas, adversarios de nuestra revolución, han pasado a realizar el más drástico bloqueo de divisas, de gran impacto en una economía dependiente y fuertemente endeudada por gobiernos anteriores.

El agudo conflicto entre los intereses del pueblo y de los trabajadores, y los intereses de los grupos reaccionarios e imperialistas, no ha tenido la misma intensidad, ni ha provocado los mismos problemas a lo largo de los dos años de Gobierno.

En una primera fase, existían importantes márgenes de capacidad ociosa en las actividades de producción de bienes y servicios, lo cual permitía aumentar la producción, y mejorar el nivel de vida popular sin restringir en forma equivalente los ingresos y el consumo de las minorías privilegiadas. El boicot económico externo, y la acción destructora en lo interno, estaban en sus comienzos, sólo andando el tiempo irían a producir sus peores efectos.

Poco a poco, sin embargo, empezó a coparse totalmente la capacidad productiva, y a hacerse sentir con más fuerza el peso de las restricciones sobre nuestras divisas, por efecto del creciente bloqueo norteamericano, y de la baja de precio del cobre. Se abrió de esta manera una fase de agudización del conflicto entre los intereses inmediatos del pueblo y los de la burguesía, centrado en el reparto de los ingresos y de los bienes de consumo.

A esta altura, adquirieron mayor significado el boicot a la distribución, convirtiéndose la especulación y el mercado negro en prácticas cotidianas de algunos sectores deseosos del enriquecimiento rápido, impulsados y dirigidos por la minoría perjudicada por los cambios. Dicha práctica constituye una forma de lucha utilizada por la burguesía para no perder sus ingresos en beneficio de los sectores populares.

Por medio del acaparamiento, retiran mercaderías de los mercados regulares, donde el Gobierno puede controlar gran parte de los precios, y se provoca la escasez artificial, obligando a las dueñas de casa a comprar más caro en los canales del mercado negro. La misma prensa reaccionaria colabora en esa acción criminal, cuando anuncia mentirosamente que va a faltar tal o cual producto, impulsando así a la gente a comprar en mayor cantidad de lo normal y de tal forma que se agote en días o en horas la existencia del producto en el comercio. Es así como se crean las condiciones para desarrollar el mercado negro de ese mismo producto.

Por eso tenemos hoy en Chile el fenómeno de que falten algunos artículos en el mercado, habiendo aumentado significativamente su producción.

Por ejemplo, entre 1970 y 1972 el aumento de producción de leche condensada fue de 26%, para la margarina fue de 38%, para fideos fue de 82%, para cigarrillos fue de 26%, para neumáticos fue de 26%. Y, sin embargo, estos productos escasean.

Al pagar más caro en el mercado negro los bienes que necesita para consumir, el pueblo pierde ingresos que van a parar a manos de una minoría criminal, sedienta de ganancias.

Pero no es sólo ganancia lo que esos grupos buscan en el mercado negro. Tratan también de dañar ante el pueblo la imagen y la autoridad del Gobierno, preparando el camino hacia el derrocamiento, en un intento vano por hacer retroceder la marcha de la historia.

La inflación es hija del agudo conflicto que tenemos en curso en el terreno económico. Los aumentos de remuneraciones conquistados por el pueblo en estos dos años son la respuesta de los trabajadores y del Gobierno a la acción especulativa de los antiguos grupos privilegiados, acción que eleva constantemente los precios. En estos mismos momentos, y en cumplimiento del convenio firmado por el Gobierno con la Central Única de Trabajadores, se encuentra en estudio la entrega de una compensación a las remuneraciones, que restituya el poder de compra disminuido por el alza del costo de la vida entre los meses de octubre y enero.

En resumen, y volviendo al tema central de esta exposición, debemos reiterar que los problemas que enfrentamos hoy día son el resultado de un conflicto constante en nuestra sociedad, desatado y alimentado por aquellos que no se resignan a perder su lugar de privilegio en la sociedad chilena.

Las soluciones que propone la derecha no son nuevas, ya fueron repudiadas por el pueblo

¿Cuál es la alternativa que representa la derecha para combatir la inflación y el mercado negro?

En primer lugar, reducir los gastos públicos. Esto significa disminuir los gastos sociales que benefician al pueblo; crear problemas para una administración eficiente de los servicios gubernamentales; disminuir los niveles de empleo y bajar las inversiones públicas, que son esenciales para el futuro económico de Chile.

En segundo lugar, la derecha propone congelar los sueldos y salarios, lo cual, en condiciones de fuerte inflación, significa reducirlos drásticamente en términos reales. Ella no sostiene abiertamente esta proposición, dadas sus preocupaciones electorales. Pero aparece claramente en los análisis de los mismos que ayer siendo gobierno aplicaron estas medidas contra el pueblo.

En tercer lugar, la derecha considera que se debería soltar los precios que están siendo controlados, para que se restablezca el feroz racionamiento que prevalece en el capitalismo, garantizar que no falten artículos en el mercado, impidiendo que las mayorías tengan acceso a ellos.

En cuarto lugar, proponen que se restituyan los monopolios que integran hoy en el Área de Propiedad Social para seguir favoreciéndolos como se hacía en otros gobiernos, a costa de los recursos públicos. Proponen restaurar el clima de "confianza" y tranquilidad en la economía. ¿Pero de qué confianza y tranquilidad se trata? Se trata de la "confianza" y la "tranquilidad" para el capitalismo monopolista, lo cual significa, a su vez, garantías para sus ganancias y para el consecuente proceso de explotación del pueblo. Esa es la única confianza que requiere el capitalismo. En resumen, se trataría de revitalizar precisamente lo que nuestro programa contempla eliminar.

Nuestras dificultades tienen solución sobre la base de la organización del pueblo

Para el pueblo y para el Gobierno Popular, la alternativa histórica destinada a resolver los problemas inmediatos del país es bastante diferente. La inflación, fruto de la lucha distributiva entre la burguesía y las masas populares, se combate fortaleciendo las posiciones de los trabajadores y sacándole ingresos a la burguesía. El mercado negro se combate no fortaleciendo al capitalismo sino que profundizando el control de las masas y las

acciones y medidas tendientes a reemplazar el sistema vigente por formas de producción y distribución que apuntan a la sociedad socialista.

Creemos que es fundamental para ello ampliar la participación y el control de las masas a todos los niveles de la vida económica, corrigiendo activamente las fallas e insuficiencias del Gobierno, de las organizaciones y de los militantes de las filas del pueblo.

El Gobierno tiene insuficiencias, pero no son las que denuncia la derecha

En sus dos años de existencia el Gobierno ha tenido insuficiencias y las reconoce.

En primer lugar, el aparato estatal requiere, en numerosos aspectos, severas rectificaciones. Heredamos un aparato estatal cuya estructura, composición y hábitos de comportamiento se han mantenido, obstaculizando en parte importante las tareas de transformación. Las rectificaciones serán aplicadas con el mayor rigor a partir de ahora, con el fin de sancionar ejemplarmente a los malos funcionarios y de erradicar las diversas formas de burocratismo que frenan la acción concertada y eficaz que Gobierno y masas deben desarrollar. Pero el Gobierno tiene la obligación de orientar a los trabajadores del Estado. Y este pronunciamiento es una orientación.

En segundo lugar, aunque el Gobierno ha tenido y tiene claro que la estrecha vinculación entre las organizaciones de masas y las instituciones estatales es una cuestión determinante para enfrentar las tareas de abastecimiento, en la práctica no se ha desarrollado toda la potencialidad que esta concertación permite.

Una de las lecciones más importantes del paro patronal de octubre ha sido precisamente la de poner en evidencia la tremenda fuerza de la acción conjunta Gobierno-organizaciones del pueblo. Por todo ello, hoy más que nunca se hace imprescindible una amplia difusión de las tareas que pueblo y Gobierno enfrentan, así como un vigoroso esfuerzo para extender y fortalecer la organización de las masas en función de estas tareas.

La derecha utiliza los problemas que ella misma crea para atraer sectores medios hacia su campo

La gran masa explotada por el capitalismo chileno ve en el Gobierno un instrumento decisivo para la solución de sus problemas. Su larga y dura lucha contra la opresión capitalista les ha permitido identificar bien a sus enemigos de clase.

Otros sectores no proletarios, muchos de ellos comerciantes, profesionales, empleados, dueñas de casa, que no han vivido bajo las mismas condiciones ni han tenido las mismas experiencias y luchas que el proletariado y el campesinado chilenos, carecen a veces de claridad para identificar bien a sus enemigos y a sus aliados.

La derecha y el imperialismo se han dado cuenta que una parte de estos sectores puede constituirse en una palanca vital para su estrategia y saben que su lucha antipopular, antipatriótica, contrarrevolucionaria tiene posibilidades solamente si logra manipular y seducir a un sector influyente de grupos no proletarios.

En efecto, es necesario subrayar que tales grupos ofrecen un terreno favorable para la siembra del engaño y de la mentira que fluye de los voceros de la derecha reaccionaria; son éstos quienes, sirviéndose de los medios de difusión que controlan, buscan convencer a los profesionales, a los pequeños y medianos comerciantes y otros cuyas funciones en el proceso económico corresponde a los llamados grupos medios, que las masas y el Gobierno popular están contra ellos. La calumnia organizada, incesante, ininterrumpida, ha llegado al extremo cinismo de buscar, a toda costa, plasmar en la mente de los chilenos que los problemas de consumo que hoy día se presentan obedecen a una supuesta mala conducción del Gobierno. Ellos, los culpables, la burguesía y el imperialismo, los que conspiran en contra de la democracia, los que bloquean económicamente al país, los que impulsan o realizan la especulación, el acaparamiento y el mercado negro, los que están por detrás de los problemas que afligen a los chilenos, precisamente ellos, quieren que se crea que el Gobierno popular tiene la responsabilidad principal.

El paro patronal de octubre debe ser interpretado en el contexto señalado. En este paro se utilizaron intereses e inquietudes inmediatas de algunos sectores no proletarios, transformándolos en agentes inconscientes de una deliberada estrategia antipatriótica, antipopular y sediciosa.

La solución de los problemas de la distribución es decisiva en la lucha actual por el poder

Los trabajadores y el Gobierno saben que las minorías explotadoras han encontrado en los problemas de comercialización y distribución que, repetimos, son desatados por ellos mismos, un buen pretexto para agitar en contra de la revolución a algunos grupos no proletarios. Por consiguiente, se empeñan en agravar y multiplicar esos problemas. Su solución se ha

transformado, por lo tanto, en uno de los aspectos más decisivo de la lucha actual por el poder.

El Pueblo y el Gobierno deben pasar a la ofensiva. Y lo hacen.

Estimados compatriotas:

Nosotros entendemos que la lucha debe darse al mismo tiempo en tres niveles: en la producción, en la distribución mayorista y en la distribución minorista.

Creemos que es fundamental actuar sobre la producción, pues son numerosos los productores que se desvían al mercado negro, creando especulación y escasez, saltándose los canales normales de distribución. Creemos que es fundamental actuar sobre la distribución mayorista, porque sus problemas pasan de inmediato al comercio detallista, provocando aquí las dificultades consecuentes. Creemos que es fundamental actuar sobre la distribución minorista pues, desgraciadamente, existen comerciantes al detalle que especularán aun cuando haya un buen control sobre la producción y la distribución al por mayor.

Es indispensable, crucial, actuar al mismo tiempo en estos tres niveles: producción, distribución mayorista y distribución minorista. Esto hace necesario que en el interior del aparato del Estado exista un organismo especializado que dirija la acción del Gobierno en lo referente a distribución y abastecimiento. Se creará para este efecto la Secretaría Nacional de Distribución, dependiente del Ministerio de Economía.

Producción industrial privada

Primero:

La Secretaría Nacional de Distribución celebrará "contratos de exclusividad" con las empresas industriales privadas que producen bienes de consumo esencial, de modo que sus productos se comercialicen por intermedio de los cauces que centraliza la Secretaría. Esta medida se toma para impedir que ingresen al mercado negro productos industriales provenientes de esas empresas.

Segundo:

Las empresas no están obligadas a celebrar contratos de exclusividad. Pero, no quepa duda que en la orientación de la política gubernamental se tomará en cuenta en qué medida las empresas se han acogido y han cumplido los contratos de comercialización.

Tercero:

Los trabajadores controlarán el cumplimiento de los contratos de comercialización, a través de sus organizaciones: federaciones, sindicatos, comités de vigilancia.

Cuarto:

Dejará de existir la venta directa al público y el trueque entre las empresas, cuando así haya sido convenido en los contratos de exclusividad. Del mismo modo, planteamos a las organizaciones de trabajadores la necesidad de terminar con las remuneraciones en productos y con las preferencias en la adquisición de los artículos producidos en la empresa, ya que hoy son, en muchos casos, fuentes del mercado negro. Los Comités de Vigilancia procurarán que se cumpla cada una de estas medidas.

Producción industrial del Área de Propiedad Social

Primero:

Toda la producción del Área de Propiedad Social debe pasar a las distribuidoras estatales. Terminarán allí el trueque y la venta directa al público.

Las empresas no tienen a su cargo tareas relacionadas con la venta y la distribución de las mercaderías, sino con la producción propiamente tal. Por lo tanto, consideramos una malversación todas las ventas que no se realicen a las distribuidoras respectivas.

Segundo:

Al igual que en el sector privado, planteamos a los trabajadores la necesidad de terminar con las remuneraciones en productos y con las preferencias para su adquisición en la empresa.

Producción agrícola

Primero:

El Gobierno reitera su decisión de canalizar lo substancial de la producción agropecuaria a través de los mecanismos de comercialización estatal. Sobre esto, el Ministerio de Agricultura anunciará en los próximos días un conjunto de medidas.

Segundo:

Llamamos a los trabajadores del campo a evitar que los productos agrícolas ingresen al mercado negro y a coordinarse en esta labor con los funcionarios del Gobierno en la zona.

Tercero:

La venta directa y el trueque deben disminuir en medida substancial, pues perjudican gravemente al país. En este sentido, el Gobierno adecuará sus decisiones sobre créditos, asistencia técnica y mecanizada, etc., al cumplimiento de los objetivos indicados.

Cuarto:

La política de precios agrícolas asegurará ingresos adecuados a los productores, sin que sea afectado el nivel de vida de los trabajadores urbanos.

Distribución mayorista

Primero:

La Secretaría Nacional de Distribución ejercerá su autoridad sobre las empresas distribuidoras de abarrotes y alimentos como también sobre las empresas privadas que hayan convenido contratos de exclusividad. Además, regulará e integrará al sistema programado a las empresas mayoristas privadas, las que justificarán siempre la procedencia de sus productos esenciales. Las normas que regirán la distribución del resto de los productos serán fijadas en los próximos días por el Ministerio de Economía.

Segundo:

El Gobierno no aceptará la persistencia de monopolios privados sobre la distribución de ningún producto. Se avanzará con decisión hacia el establecimiento de un control directo sobre la distribución de estos productos, de manera que todas las familias reciban bienes en cantidades y calidades que correspondan a sus necesidades reales.

Tercero:

En relación con las empresas distribuidoras estatales y privadas, se actuará de la misma manera antes indicada respecto de las empresas productoras en lo que hace a los procedimientos de trueque, venta directa al público, remuneraciones en productos y preferencias para la adquisición.

Distribución minorista

Primero:

La programación, distribución y control del abastecimiento minorista en cada unidad vecinal es una tarea que sólo podemos enfrentarla por medio de la acción conjunta de los trabajadores y el Gobierno.

Han surgido iniciativas en diversas poblaciones y comunas que indican que el pueblo organizado, enfrentado al mercado negro y la especulación, desarrolla acciones que permiten avanzar en la solución del problema.

El Gobierno aprueba estas iniciativas y propone hoy día un conjunto de medidas que tienden a dar mayor eficacia a estas acciones.

Sobre la base de una cuota de productos necesarios por familia que se establecerá, que estará compuesta por artículos como aceite, azúcar,

arroz, café, carne, para alcanzar alrededor de 30 productos, las organizaciones del pueblo a nivel local (JAP, Comandos Comunales) en las que participan los comerciantes, programarán las necesidades periódicas de productos esenciales y determinarán las responsabilidades que en su comercialización cabe a cada local comercial.

Estas organizaciones de base se relacionarán estrechamente con la Secretaría Nacional de Distribución —en cada provincia y a nivel nacional— para precisar y poner en práctica esta importante tarea y posteriormente, para los efectos de controlar y dirigir los flujos de productos.

Segundo:

Las JAP, tal como lo han venido haciendo, denunciarán en el vecindario a los comerciantes inescrupulosos, evitarán la presencia generalizada en las poblaciones de afuerinos que se aprovisionan para especular y acaparar, y denunciarán a las autoridades cualquier infracción. Las denuncias deberán dirigirse siempre a través del canal más expedito.

La denuncia no excluye la acción directa organizada y responsable para impedir la especulación, el mercado negro y demás infracciones de este tipo.

Tercero:

La experiencia ha demostrado que las tareas de vigilancia no son sino una parte de las tareas de las JAP. Como unidad poblacional básica en esta materia, el Gobierno piensa que deben generalizarse, constituyéndose en cada unidad vecinal o pequeña unidad territorial. Los Comandos Comunales determinarán la forma más adecuada para constituir las JAP en el interior de cada comuna. Las JAP procurarán integrar a todas las familias del lugar; sin embargo, las familias que no se integren al trabajo de las JAP no serán privadas de los beneficios del abastecimiento programado.

Cuarto:

Las JAP tomarán las medidas necesarias para relacionar de modo estable a las familias con los comerciantes ubicados en el área. Así, se trata de obtener que la clientela de cada comerciante sea todo regular que se pueda.

Esto es necesario para asegurar a todas las familias un abastecimiento adecuado de los productos básicos. Para que esto se logre, dadas las condiciones actuales del mercado negro, es indispensable saber cuáles son las necesidades reales de tales productos para cada comerciante y para cada familia del área respectiva. Por consiguiente, la JAP definirá, de acuerdo con la canasta popular, las necesidades reales de cada familia. Los Comandos Comunales y la Secretaría Nacional de Distribución prestarán en estas materias la asistencia y los recursos necesarios.

Quinto:

Una vez definidas las necesidades de productos a nivel de familias, comerciantes y JAP, la información será centralizada por la Secretaría Nacional de Distribución a través de los Comandos Comunales y provinciales. La Secretaría asegurará a los comerciantes el abastecimiento que les corresponda a través de las distribuidoras estatales.

Sexto:

Los comerciantes no están obligados a participar en las JAP. En caso de que no lo hagan, ellos dejarán de recibir los beneficios consiguientes. Sin embargo, la eventual negativa a participar en las JAP en ningún caso se traducirá en represalias o presiones por parte de las autoridades ni de las organizaciones populares. Pero debemos agregar que la vigilancia de las infracciones será estricta para todos los comerciantes, pertenezcan o no a una JAP; el Gobierno actuará con la mayor severidad que le otorgue la ley. Es imprescindible que el Parlamento tramite favorablemente el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que sanciona el delito económico. Este instrumento dará un mayor y efectivo control sobre la especulación y el mercado negro.

Séptimo:

En las JAP y en los Comandos Comunales los comerciantes, dado sus conocimientos, pueden desempeñar una gran labor patriótica. Además, están en condiciones de favorecer las relaciones entre los organismos de base y la Distribuidora Nacional. El Gobierno ve en su colaboración un elemento de primera importancia para que el plan que aborda tenga éxito. Por esta razón, los organismos estatales han recibido instrucciones de respetar y proteger de un modo efectivo a los comerciantes que se encuadren dentro de los procedimientos descritos. Ellos tendrán asegurados un abastecimiento y una clientela regulares y márgenes de comercialización razonables. Asimismo, se tomarán en cuenta sus peticiones referentes a costos de reposición, centrales de compra y establecimiento de contactos regulares con los organismos correspondientes del Estado.

Octavo:

Respecto del comercio organizado bajo la forma de cooperativas el Gobierno asegurará su abastecimiento necesario mediante convenios que contendrán prescripciones sobre el destino y la distribución de los productos así como sobre la política de expansión enfocados hacia los sectores mayoritarios de la población. Mediante la suscripción y el cumplimiento de dichos convenios, estas cooperativas obtendrán la seguridad de su abastecimiento necesario a precios oficiales.

Noveno:

El Gobierno, en general, estimulará la creación de cooperativas de consumo que no rompan el normal funcionamiento de la distribución y que estén incluidas en los sistemas regulares de organización al nivel de la base poblacional. El Gobierno tratará de acordar con los trabajadores la supresión de los sistemas de economatos que existen en diversas empresas estatales y privadas. Se considera que los economatos entorpecen el orden que se requiere para eliminar los problemas actuales de abastecimiento. Sin embargo, el Gobierno reconoce que sean justificables en determinadas circunstancias. Puede ser el caso, por ejemplo, de mujeres trabajadoras que en virtud de su ocupación estén imposibilitadas de adquirir productos del lugar donde ejercen sus labores; o de algunos economatos existentes como resultado de conquistas sociales.

Décimo:

La distribución minorista corresponde al comercio establecido. Pero en aquellas poblaciones o campamentos que no cuenten con él, la distribución minorista se hará directamente por las distribuidoras estatales, de acuerdo con las normas generales antes enunciadas.

Undécimo:

El Gobierno, junto con las organizaciones campesinas, dará fuerte impulso a la actividad de los "Centros de Abastecimiento Rural" en el suministro de bienes esenciales para la población del campo. Esta política no significa desconocer la actividad del comercio rural establecido.

Finalmente, debemos reiterar que sólo se lograrán los resultados que perseguimos si se desarrolla en su plenitud la acción del pueblo, que es el gran requisito de las tareas que nos proponemos abordar. La actividad concertada de los trabajadores y el Gobierno es una imperiosa necesidad del proceso revolucionario chileno y tiene, a través de las acciones que proponemos, una de sus expresiones más evidentes. Por esto, más que nunca es imprescindible que las organizaciones de base asuman sus funciones con una firme conciencia de los problemas y de sus causas verdaderas; con responsabilidad para dar cada paso y cumplir cada tarea, y con una capacidad de respuesta que hará de la creatividad de las masas un instrumento vital para liquidar las múltiples provocaciones y mentiras que lanzarán la reacción y el imperialismo.

Estimados Compatriotas:

Las tareas que tenemos por delante para resolver los serios problemas que afectan al pueblo chileno en el plano del abastecimiento y del

consumo, son complejas, de ejecución prolongada y difícil. Sin embargo, para los que creen y luchan por la causa de la emancipación de Chile y de la liberación social de su pueblo, dificultades no son imposibilidades. Unido en torno a sus organizaciones, en los frentes de lucha, el pueblo chileno sabrá garantizar, ampliar y desarrollar cada conquista que realice, vencer cada obstáculo que se presente, por duro que sea, mediante la poderosa fuerza que le da tener la historia en sus manos.

* * *

DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (DIRINCO) Y SECRETARÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: MARCO DE ACCIÓN DE LAS JUNTAS DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS (JAP)

(Enero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3772-3780)

[Allende decide controlar la distribución y comercialización de productos.]

Necesidad de la asistencia de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios

El mayor acceso al consumo de las grandes masas, como consecuencia del aumento del poder adquisitivo alcanzado por éstas en los dos últimos años, a través de la aplicación de una política redistributiva (aumento de salarios y ocupación) ha originado un incremento de la demanda que choca con la estructura productiva y distributiva tradicional, incapaces de satisfacerla.

Surge así la necesidad de programar el abastecimiento en todos los niveles territoriales a lo largo del país.

Conforme a la política que sustenta el Gobierno, en esta tarea corresponde una participación muy destacada a las organizaciones de base de la población. De aquí que se ha propiciado la creación de organismos de los consumidores y comerciantes denominados JAP.

[...]

Criterios básicos de acción de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP)

Las JAP son organizaciones legales, amplias, de afiliación voluntaria de los vecinos de una misma unidad vecinal a la cual también es conveniente que se integren los comerciantes de la unidad vecinal correspondiente.

Son organizaciones esencialmente democráticas en cuanto a su organicidad y normas de funcionamiento.

Los organismos del Estado las deberán considerar representativas de las inquietudes y aspiraciones de toda la población que agrupan en relación a los problemas de distribución, abastecimiento, comercialización y control de los artículos de consumo habitual.

Representan la acción unificada de los consumidores y, en consecuencia, actúan con los mismos derechos individuales que éstos tienen en

su calidad de ciudadanos particulares en relación a los problemas de abastecimientos y precios.

En consecuencia, deben representar cualquier situación irregular ante DIRINCO, el Cuerpo de Carabineros, Servicio Nacional de Salud, Impuestos Internos, Municipios, autoridades administrativas, etc.

Las JAP deben enmarcar sus acciones en las orientaciones y programas emanados de DIRINCO, de acuerdo a lo expresado en la Resolución N° 112 de la Dirección de Industria y Comercio, y en las políticas definidas por la Secretaría Nacional de Distribución.

Lo anterior deberá ajustarse a las normas establecidas por el presente documento.

Principales objetivos y tareas de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios

De acuerdo a la Resolución N° 112 de la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y con la toma de razón de la Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial del 4 de abril de 1972, se da carácter legal a las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios y les señala los siguientes objetivos:

"2.— Se entenderá por Juntas de Abastecimiento y Control de Precios aquella agrupación de trabajadores que luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo dentro de cada unidad vecinal, de preferencia esforzándose por lograr un adecuado abastecimiento, velando por un eficaz control de los precios, luchando contra la especulación y los monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los medios de subsistencia del pueblo y cooperando en general con todas las funciones de la Dirección de Industria y Comercio".

"6.— Son atribuciones de una Junta de Abastecimiento y Control de precios en general todas las necesarias para cumplir los objetivos señalados en el número 2 de esta Resolución.

Especialmente podrán:

a) atender los problemas de abastecimiento de los comerciantes detallistas y respaldar sus denuncias contra los intermediarios inescrupulosos o contra los funcionarios o inspectores que no cumplan correctamente su función.

b) cooperar con el control de los precios teniendo al día en cada unidad vecinal las listas de precios oficiales y exigiendo a los comerciantes su cumplimiento mediante la persuasión y en caso contrario, mediante la respectiva denuncia.

El Departamento de Juntas de Abastecimiento y Control de Precios procurará que las iniciativas y sugerencias de dichas Juntas como asimismo su derecho a reclamar contra todo tipo de abusos o especulación, tengan el más amplio cauce para expresarse en la reglamentación más detallada de sus atribuciones.

Consecuente con lo anterior y como lo ha precisado la Contraloría General de la República al cursar la Resolución N° 112 de DIRINCO precitada, las JAP son organizaciones asesoras y cooperadoras en la función pública que compete a la Dirección de Industria y Comercio.

[...]

Eliminación de la especulación, mercado negro, acaparamiento y contrabando

Las JAP, así como cualquier ciudadano, tienen el deber de denunciar y evitar la especulación, el acaparamiento, el mercado negro y el contrabando.

En consecuencia, deberán investigar y denunciar oportunamente a las autoridades correspondientes, el traslado de mercaderías, llegada de camiones con dichos elementos a la unidad vecinal, apertura de bodegas o existencias de bodegas no declaradas, funcionamiento de mataderos clandestinos, cierre ilegal de negocios, comercio ilegal, evasiones tributarias y en general toda actitud que signifique boicot y sabotaje en lo que se refiere a comercialización y distribución.

Sólo a los organismos competentes o a sus representantes les corresponderá el ejercicio de la acción pública de acuerdo con sus atribuciones.

las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios deberán verificar la correcta aplicación de la política de precios del Gobierno.

Deberán editar y mantener al día y en conocimiento de toda la población, las listas de precios oficiales.

[...]

* * *

ORLANDO MILLAS (PARTIDO COMUNISTA, MINISTRO DE HACIENDA): DECLARACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA CONSTITUCIÓN DEL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL

(25 de enero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3932)

De acuerdo a la resolución adoptada por el Gobierno y que se dio a conocer en declaración oficial hace diez días, se envió al Parlamento el proyecto de ley en que se propone una solución jurídica definitiva al problema de la propiedad de aquellas empresas que deben integrar el área social de la economía y en que, a raíz de situaciones conflictivas muy agudas, se mantienen vigentes intervenciones o requisiciones.

El Gobierno reafirma su decisión de constituir el área social, insiste en el proyecto de ley sobre expropiación o nacionalización de las 90 empresas y agotará sus esfuerzos por integrarlas a esta área, poniendo término con ello a la dominación monopólica de la oligarquía financiera.

En cuanto a aquellas empresas que están requisadas o intervenidas y que técnicamente corresponden a la definición del área social, el Gobierno, además de proponer una solución a través del proyecto de ley para el que solicitamos una tramitación más urgente, manifiesta, sin perjuicio de ello, su voluntad de negociar directamente con los propietarios.

* * *

PARTIDO SOCIALISTA (COMISIÓN POLÍTICA): DECLARACIÓN SOBRE EL PROYECTO RELATIVO AL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL (24 DE ENERO 1973)

(*Chile Hoy* N° 34 del 2 de febrero de 1973).

(Tomo 5, p. 3933)

[Los socialistas se oponen a la forma en que el Presidente quiere formar el Área de Propiedad Social.]

"Ante la declaración formulada por el Ministro de Economía Orlando Millas, y el anuncio de un proyecto de ley enviado al Congreso Nacional sobre definiciones del área social, mixta y empresas denominadas "casos especiales", la Comisión Política del Partido Socialista, en reunión extraordinaria, ha resuelto expresar públicamente que dichas decisiones no han sido consultadas a nuestro partido y, además, no compartimos su contenido.

Declaramos, asimismo, que el compañero Armando Arancibia, Subsecretario de Economía y militante del Partido Socialista, presentará la renuncia a su cargo al compañero Presidente de la República.

Comisión Política,
Partido Socialista
Santiago, 24 de enero de 1973

* * *

MIR (SECRETARIADO NACIONAL): CARTA AL PARTIDO SOCIALISTA APOYANDO A SUS CANDIDATOS

(*Punto Final* N° 176 del 30 de enero de 1973)

(Tomo 6, pp. 4151-4159)

[El MIR manifiesta su deseo de apoyar a los candidatos del PS en las elecciones de marzo de 1973. El documento permite aclarar la posición del Movimiento sobre las luchas parlamentarias.]

Compañeros de la Comisión Política del Partido Socialista:

1. Introducción

Como es de conocimiento público, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria no ha inscrito candidatos para las elecciones generales de parlamentarios de marzo próximo.

La decisión de no llevar candidatos propios en dicha elección no significa que el MIR vaya a marginarse del proceso electoral. Por el contrario, públicamente hemos manifestado que, aún sin llevar nuestros propios candidatos, participaríamos de lleno en las próximas elecciones desarrollando el máximo esfuerzo político, ideológico y orgánico, en todos los niveles en que se dé el enfrentamiento electoral.

De acuerdo con esto, es nuestro propósito establecer acuerdos bilaterales de carácter nacional con algunas organizaciones de la izquierda, como forma de efectivizar nuestra participación. Le asignamos el carácter de eje central de nuestra actividad al acuerdo que proponemos se alcance entre el MIR y el Partido Socialista. Estos acuerdos no deben surgir alrededor de candidatos o nombres, sino a partir de posiciones políticas, pues pensamos que por sobre las diferencias y discrepancias existentes, han surgido en el último tiempo posiciones coincidentes que configuran una base suficiente para la acción común en una serie de campos y también en el particular de la lucha electoral de marzo.

[...]

En particular, el Parlamento constituye un componente del aparato del Estado capitalista y es uno de los instrumentos a través de los cuales se realiza la dominación de la burguesía sobre las clases subalternas.

Por todo ello, y por otras razones de sobra conocidas, un triunfo electoral o una mayoría parlamentaria, jamás, por sí mismos, permitirán la conquista del poder y la destrucción del sistema de dominación burgués.

Quien pretenda, por la vía de una sumatoria de triunfos electorales, ir conquistando "porciones" de poder al interior del aparato del Estado, y viva así la ilusión de estar conquistando el "poder" de "a poco" en el marco de la institucionalidad burguesa, para ir realizando progresivas "reformas" del aparato del Estado y de la economía, no sólo no estará "construyendo el socialismo", sino que estará formulando hoy, torpemente, lo que en el pasado otros "marxistas", los brillantes reformistas Bernstein, Kautsky y Plejánov ya formularon; y en la práctica, estará desarrollando lo que Marx y Engels calificaron de "cretinismo parlamentario".

[...]

Las formas electorales de lucha pueden y deben ser utilizadas, entonces, por los revolucionarios como instrumentos tácticos que, puestos al servicio de una política revolucionaria, desarrollen y fortalezcan la lucha de la clase obrera y el pueblo por la conquista del poder político.

[...]

3. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973

[...]

Para otros sectores, se trata de alcanzar en marzo la fuerza electoral necesaria para volver a una situación de gobierno como la que existía antes del ingreso de los militares al gabinete y proponen luchar, entonces, por un gabinete basado en las fuerzas orgánicas de la UP. Son los que confieren un carácter táctico al gabinete UP-Generales.

Para nosotros, se trata de luchar para que la clase obrera y el pueblo conquisten en marzo la constitución y funcionamiento de un gobierno de los trabajadores que apoyándose en la fuerza y movilización de la clase obrera y el pueblo y en sus instituciones de clase y en vinculación de nuevo tipo con los oficiales, suboficiales, clases y tropas, se comprometa en la realización de un programa que permita al pueblo avanzar, contando con sus propias fuerzas y encontrando un punto de apoyo en la acción gubernamental.

[...]

4. Nuestra táctica electoral

Con el propósito de desarrollar la política antes esbozada nos proponemos:

a) Participar activamente en las elecciones de marzo de 1973, desarrollando todo tipo de actividad electoral y volcando importantes recursos a

esta actividad, pues el pueblo participará masivamente en esta elección y lo entiende como un enfrentamiento de carácter decisivo.

b) Nosotros nos disponemos a participar detrás del objetivo de que las masas conquisten un gobierno de los trabajadores de la ciudad y el campo ya que, en la situación actual asumir una posición defensista frente a la ofensiva burguesa, es crear las condiciones para la derrota del proletariado.

[...]

El programa de lucha con el cual nos proponemos enfrentar esta coyuntura debe estar formulado de acuerdo al nivel actual del enfrentamiento por las masas, comprendiendo al menos los siguientes puntos:

1. Nacionalización del conjunto de las grandes empresas industriales, comerciales, financieras, de la construcción, el transporte, etc., monopólicas y no monopólicas. Establecimiento de la dirección obrera en la industria nacionalizada.

2. El control obrero de la producción en las empresas del sector privado, industriales, comerciales, financieras, del transporte y la construcción, etc.

3. Una nueva ley de reforma agraria que establezca la expropiación de todos los fundos entre 40-80 hectáreas de riego básico, a puertas cerradas, sin reserva y, como dice el programa del MCR, sin indemnización de la tierra. El control obrero de los fundos que permanezcan en el área privada y que exploten trabajo asalariado en forma estable.

4. El control obrero y popular de la distribución y el abastecimiento.

5. La suspensión unilateral del pago de la deuda externa al imperialismo norteamericano, la apertura de negociaciones bilaterales con el resto de los países acreedores y el llamado a la solidaridad a los países socialistas, especialmente a los más desarrollados.

6. La defensa del no pago de indemnización a las compañías del cobre.

7. La defensa irrestricta de la soberanía nacional frente a las agresiones imperialistas.

8. La defensa del nivel de vida de las masas. El derecho irrenunciable a sueldos y salarios justos, a reajustes automáticos cada vez que el alza del costo de la vida suba más allá de un 5%, como sostuvo el programa de la UP.

9. La lucha por el derecho a voto en las próximas elecciones de marzo de los suboficiales, clases y tropas.

10. El establecimiento de los derechos de la mujer y la creación inmediata de las condiciones para la liberación material de la mujer del yugo y la esclavitud del trabajo doméstico.

11. El establecimiento de los derechos de la juventud al estudio, al trabajo, la recreación y el deporte.

12. El desarrollo de un poder popular a través de los Comandos y Consejos Comunales de Trabajadores y Consejos Comunales Campesinos.

13. La lucha contra el parlamentarismo y por el establecimiento de la Asamblea del Pueblo.

14. La lucha por una nueva justicia.

15. La lucha por una nueva educación y por un sistema único nacional de salud.

[...]

5. Naturaleza y carácter del acuerdo que proponemos

[...]

Con plena conciencia de las diferencias y discrepancias que mantenemos en una serie de campos y que tendrán que seguir planteándose en el campo de la lucha ideológica, creemos que el enfrentamiento político electoral de marzo permitirá crear las condiciones para una acción conjunta sobre la base de impulsar intransigentemente la acción revolucionaria de las masas y su avance permanente.

[...]

Dispuestos seriamente a volcar capacidad política y orgánica de nuestro partido a la lucha electoral, para impulsar la acción revolucionaria de las masas, para unir y fortalecer las luchas de la clase obrera y para fortalecer la política revolucionaria en el seno del movimiento obrero y las masas populares, y sobre la base de la certeza de nuestra participación orgánica en la campaña, quedamos a la espera de vuestra decisión de enfrentar en conjunto esta lucha.

Con saludos revolucionarios,

Secretariado Nacional
Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR)

Santiago, enero de 1973.

* * *

SALVADOR ALLENDE: CARTA DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO SOCIALISTA (25 DE ENERO DE 1973)

(*Chile Hoy* N° 34 del 2 de febrero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3934-3935)

[En los siguientes documentos se puede ver una dura disputa entre el Presidente Allende y los partidos de la coalición de gobierno, respecto a la formación de Área de Propiedad Social.]

"A los compañeros de la Comisión Política del Partido Socialista.
Presente

Compañeros y amigos:

En resolución adoptada y hecha pública por la Comisión Política, el miércoles 24 del presente mes, decidieron que el compañero Arancibia presentara la renuncia al cargo que yo le confiara de Subsecretario de Economía. Tal actitud fue legitimada públicamente sobre dos supuestos: en primer lugar, que el Partido Socialista no había sido consultado sobre el proyecto de ley de delimitación del Area Social, últimamente enviado al Congreso, y, en segundo lugar, que la Comisión Política no compartía el contenido de este proyecto.

[...]

En segundo lugar, el Gobierno es el responsable de las decisiones administrativas, aunque yo siempre —por deferencia— oportunamente he comunicado o consultado a los partidos sobre aquello que por su trascendencia merece especial consideración. Ha sido y es norma en la práctica de gobierno de la Unidad Popular que ningún partido puede pretender imponer sus propias concepciones por sobre las resoluciones del Presidente de la República, cuando no hay acuerdo unánime en este sentido. Hecho que no ha ocurrido nunca. Si ello acaeciera me haría meditar profundamente sobre la medida propuesta por el Gobierno. Así entiendo el papel del Gobierno y el de las directivas nacionales de los partidos. El dinamismo y la oportunidad de la acción gubernativa exigen la adopción de resoluciones que no pueden dejarse indefinidamente en suspenso.

Por último, y aunque parezca innecesario, debo afirmar que el contenido del Proyecto de Ley sobre definiciones del Area Social es absolutamente fiel al Programa de Gobierno y conforme con los principios que sobre la dimensión y función del Area de Propiedad Social ha venido sustentando la Unidad Popular desde el primer momento.

Fraternalmente,

Salvador Allende G.
Presidente de la República

* * *

PARTIDO SOCIALISTA (COMISIÓN POLÍTICA): CARTA RESPUESTA AL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE (26 DE ENERO DE 1973)

(*Chile Hoy* N° 34 del 2 de febrero de 1973)

(Tomo 5, p. 3936)

"Estimado compañero Presidente:

En relación a la carta pública dirigida por usted a la Comisión Política de nuestro partido en la que nos expone sus puntos de vista acerca de nuestra injerencia en la generación del proyecto de ley de delimitación del APS, dado a conocer públicamente por el compañero Ministro de Economía, Orlando Millas, esta Comisión Política, con todo respeto y fraternalmente, puntualiza lo siguientes:

1) La Dirección del partido, ni sus funcionarios de la más alta jerarquía en el sector económico jamás conocieron el texto del referido proyecto;

2) Efectivamente, la Comisión Política conoció "los términos en que fue concebido" dicho proyecto de ley y ellos fueron rechazados categóricamente por nosotros como le consta al compañero Presidente de la República;

[...]

Fraternalmente,

Comisión Política,
Partido Socialista.

* * *

SALVADOR ALLENDE: CARTA-RESPUESTA A LA COMISIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO SOCIALISTA (29 DE ENERO DE 1973)

(*Chile Hoy* N° 34 del 2 de febrero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3937-3938)

"A los compañeros de la Comisión Política del Partido Socialista.

Compañeros y amigos:

En respuesta a su carta pública de hoy, me complace que su contenido me permita esclarecer ante esa Comisión Política y los trabajadores en general, el real alcance del último proyecto de ley enviado al Congreso para expropiar empresas e incorporarlas al área social o mixta, superando equívocos.

Las medidas del Gobierno en relación con el área social son las siguientes:

[...]

En relación con las empresas que no corresponden al área social, la posición del Gobierno es la siguiente:

1. No es efectivo que se haya resuelto su devolución;

[...]

Los militantes del Partido Socialista y todos los trabajadores pueden estar tranquilos, porque en todo momento el compañero Presidente de la República ha velado y estará atento al cumplimiento efectivo del programa de Gobierno y a la regular continuación del proceso revolucionario.

Fraternalmente,
Salvador Allende G.
Presidente de la República
(Lunes 29 de enero).

* * *

MAPU (COMISIÓN POLÍTICA): DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO RELATIVO AL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL (27 DE ENERO DE 1973)

(*Chile Hoy* Nº 34 del 2 de febrero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3939-3940)

1. Durante las últimas semanas han venido ocurriendo hechos que afectan el carácter revolucionario del proceso económico y político nacional.

[...]

4. Se ha informado, al mismo tiempo, acerca del envío de un proyecto de ley mediante el cual se incorporarían al APS determinadas industrias ya requisadas. En dicho proyecto se plantea la inaceptable posibilidad de coadministrar las empresas entre obreros y antiguos patrones, y la posibilidad todavía más inaceptable de devolver determinadas empresas grandes o de carácter claramente monopólico a los capitalistas.

5. Los anteriores configuran una situación y una tendencia que no beneficia el avance revolucionario de las masas. En conjunto, esos hechos tienden objetivamente a debilitar al Gobierno y a la Unidad Popular, más que a fortalecerlos. Por consiguiente, el MAPU manifiesta con entera franqueza y responsabilidad su desacuerdo con ellos.

6. En consecuencia, el MAPU llama a los obreros, campesinos, pobladores, a todos el pueblo a movilizarse resueltamente por:

[...]

b) Crear, desarrollar y multiplicar todos los órganos de control y poder popular, especialmente las JAP y los Comandos Comunales en todas las provincias del país. Sólo construyendo y desarrollando el poder popular se resuelven los problemas económicos fundamentales del país.

[...]

¡Con las masas y el Gobierno a conquistar el Poder!

MAPU
Comisión Política
(Sábado 27 de enero).

* * *

SALVADOR ALLENDE: CARTA-RESPUESTA A LA COMISIÓN POLÍTICA DEL MAPU (29 DE ENERO DE 1973)

(*Chile Hoy* N° 34 del 2 de febrero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3941-3942)

"A los compañeros de la Comisión Política del MAPU.

Presente.
Compañeros y amigos:

El pasado 27 de enero la Comisión Política del MAPU dio a la publicidad una declaración. [...]

En primer lugar, las afirmaciones en la declaración de la Comisión Política desconocen la unidad de las actuaciones del Gobierno. El discurso del Ministro de Hacienda del 10 de enero no fue pronunciado a título personal ni en nombre de algún partido político individual, sino que, obviamente, era la manifestación a través de un Secretario de Estado, expresamente designado por mí a ese efecto, de las resoluciones de Gobierno. Es decir, resoluciones que contaban con la aprobación del Presidente de la República, es lógico que el MAPU reafirme las medidas contenidas en la declaración ministerial. Pero no puede, por la misma razón, negar como "inaceptables" otras resoluciones del Gobierno como son las contenidas en el último proyecto de ley que para autorizar la expropiación de empresas yo enviara al Congreso. Los actos del Gobierno son complementarios y no pueden enfrentarse a unos apoyándose sobre otros. Esto significaría minar en sus propios fundamentos la unidad del Gobierno.

(..)

Lo anterior me lleva a concluir que la declaración mencionada de la Comisión Política parece concebida y articulada como si el MAPU estuviera fuera del Gobierno y de la Unidad Popular. Más que una contribución tiene las características definitorias de un petitorio público al Gobierno al margen de los procedimientos y de la responsabilidad que implican compartir el proceso interno y externo de la política gubernamental. Me permito llamar la atención a la Comisión Política del MAPU sobre el significado de esta posición.

[...]

Salvador Allende G.
Presidente de la República
(Lunes 29 de enero).

* * *

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA UNIDAD POPULAR
(29 de enero de 1973)

(Tomo 5, p. 3943)

1. La directiva política de la Unidad Popular se ha reunido en el día de hoy con el Presidente de la República para analizar los problemas de abastecimiento, remuneraciones y área de propiedad social, sobre los cuales habrá un criterio uniforme frente a interpretaciones erróneas o planteamientos insuficientemente claros que se hayan presentado.

2. Los partidos de la Unidad Popular declaran frente a las especulaciones de la prensa reaccionaria que reafirman una vez más la plena vigencia de la Unidad Popular como dirección política de todo el pueblo.

Ninguna maniobra de la reacción afectará la unidad de acción de la Unidad Popular y del Gobierno.

[...]

* * *

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: DECLARACIÓN SOBRE EL PROYECTO RELATIVO AL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL ANTE DIRIGENTES DE LOS CORDONES INDUSTRIALES DE SANTIAGO

(31 de enero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3944-3945.)

[En el marco de la discusión del P. S., el gobierno desmiente la versión entregada por dirigentes de los Cordones Industriales.]

En el día de ayer martes 30 de enero, el Presidente de la República sostuvo una conversación con los dirigentes de los cordones industriales de Santiago la que no tuvo carácter público.

En declaraciones formuladas hoy, dichos dirigentes sostuvieron que el Primer Mandatario les había manifestado que si de él dependiera disolvería el Congreso, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Tal versión no corresponde en absoluto a lo expresado por el Presidente de la República y la desmentimos en forma categórica.

[...]

El Presidente de la República hizo especial hincapié en las características de las Fuerzas Armadas chilenas que son profesionales y democráticas, estableciendo que en los países socialistas éstas tienen una definición ideológica lo que no ocurre en el caso de Chile.

En relación al proyecto enviado al Congreso, el Presidente asumió la plena responsabilidad del mismo, haciendo resaltar que no es el proyecto de un Ministro, sino del Gobierno. Agregó que la iniciativa no restringe el área social de las 91 empresas y que al contrario la amplía. Dio detalles claros sobre la dirección temporalmente integrada que podrían tener algunas empresas cuyos propietarios aceptarán traspasarlas al área social, tomando como ejemplo preciso Elecmetal, en el caso que eso ocurriera. De la misma manera explicó el alcance de las comisiones creadas para el estudio de la situación de diversas industrias, destacando que el Gobierno tiene la obligación de estudiar caso por caso, porque si bien hay algunas que no pasarán al área social pueden regirse por el sistema autogestión, de cooperativas, declararse en liquidación o en quiebra o permanecer en el área privada.

[...]

El Presidente de la República reiteró a los dirigentes su respeto y aprecio por los cordones industriales, pero les manifestó también que hay un Gobierno que es el que toma las decisiones y su política está al servicio del país y de todo el pueblo y no de un sector determinado.

[...]

Secretaria General de Gobierno

Santiago, 31 de enero.

* * *

MIR: DOCUMENTOS INTERNOS 3-A.
VERSIÓN AMPLIADA Y CORREGIDA DEL INFORME DE LA COMISIÓN POLÍTICA AL COMITÉ CENTRAL DE ENERO DE 1973
(Febrero de 1973)

(Tomo 5, pp. 3954-4114)

[Completo informe de la máxima dirigencia del MIR a su Comité Central.]

[...]

Los desequilibrios inmediatos de la economía chilena

La economía chilena está sometida en este instante a un cuadro agobiante de desequilibrios financieros, expresados en un abultado déficit fiscal, déficit de las empresas del área social, en requerimientos muy fuertes de expansión monetaria (la producción de dinero fue en 1971 de E° 9.192 millones al 31 de diciembre, luego a E° 20.131 millones, E° 40.215 millones en diciembre de 1972); desequilibrios en la balanza de pagos, obligan a reducir las importaciones de materias primas y productos esenciales, problema que se agravará en el 73, y que llevará sin lugar a dudas a la contracción, disminución, en los niveles de actividad económica y en la ocupación en 1973; crecientes desequilibrios entre la disponibilidad real de bienes físicos de consumo y servicios y el poder de compra, lo que acelerará las tendencias inflacionarias y alentará todas las tendencias a la especulación.

La ocupación

Todas las cifras indica para 1973 la tendencia al recrudecimiento de los problemas de desocupación provocado por la baja tasa de inversión lo que no genera más empleos o el número de empleos suficientes para incorporar al sistema productivo a la mano de obra que año a año se incorpora al mercado de trabajo. La contracción de la actividad económica en 1973, por efecto de la disminución de las industrias también influirá en el aumento de la desocupación si frente a los problemas inmediatos que afectan a la economía chilena, se imponen en el seno del Gobierno la respuesta de retroceso, tan cara al reformismo, eso significará buscar corregir los desequilibrios disminuyendo el ingreso real de los trabajadores (política Millas) y disminuir el gasto público lo que afecta a servicios como vivienda, educación, obras públicas y contraerá los niveles de actividad económica y la ocupación. Por otra parte, la situación en el campo es también grave, pues la

disminución de las superficies sembradas en la agricultura tendrá como consecuencia una baja en la ocupación agrícola considerable.

[...]

Inflación y redistribución del ingreso

Se calcula que el índice real de la inflación alcanzó durante el año 1972 a 172% con respecto al año anterior, la tasa inflacionaria más alta de la historia de Chile. Ahora bien, dado el hecho que los asalariados tienen una remuneración fija, que no se reajusta automáticamente, con el alza del costo de la vida, en tanto que los precios suben periódicamente y la inflación es siempre un mecanismo que favorece a los capitalistas. En efecto, el aceleramiento de la inflación es uno de los principales caminos mediante el cual la burguesía recupera su posición en la participación en la distribución del ingreso. [...]

[...]

Situación y perspectivas de la economía chilena

El crecimiento económico. La economía chilena entró en 1972 en una fase de estancamiento, como consecuencia del agotamiento del modelo de crecimiento basado en el aumento del consumo y esto es una reactivación económica inducida a partir de un proceso de redistribución del ingreso y aumento de la producción a partir de la capacidad instalada ociosa.

(..)

Algunos sectores calculan que la economía chilena no habría crecido en más de un 0,8% durante el año 1972. Situación que correspondería a una caída de las tasas de crecimento prácticamente en todas las ramas de la producción.

En efecto, se calcula que para 1972 se produjo una caída de la tasa de crecimiento industrial que fue de un 12% para 1971 a un 5 a 6% para 1972, como producto de la crisis de divisas, la no renovación de maquinaria y repuestos, la caída de la productividad, la caída de las tasas de inversión, etc.

La agricultura. Para 1973 se estima que el descenso de la producción agrícola llegará alrededor del 20% como consecuencia de la disminución de las áreas sembradas y de la caída de la productividad y producción en el área reformada por falta de maquinarias, materias primas, etc. En los otros sectores de la economía se calcula una reducción del siguiente orden: 3,6% en la minería, 6,2% en construcción, mientras se observa un creci-

miento en los siguientes sectores: electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 4,0% y el sector del resto de los servicios con un 5%.

La inversión. El Gobierno y la UP definieron el año económico 1972, como el año de la acumulación, sin embargo, el año 72 ha terminado con una caída de la inversión por segundo año consecutivo, e incluso con un deterioro parcial de la capacidad productiva instalada.

[...] Sin embargo, el Gobierno cuenta con ambiciosos proyectos de inversión para 1973, a partir de la ayuda de los países socialistas, especialmente de la URSS en lo que se refiere a crédito y apoyo para inversiones industriales.

El déficit de la balanza de pagos. Se estima que las necesidades de importación del país ascenderán a 1.287 millones de dólares, en tanto que las exportaciones sólo alcanzarán a 853 millones de US$.

Es decir, el déficit de la balanza comercial (importaciones-exportaciones) alcanzará a 444 millones de US$.

El déficit de la balanza de pagos, es decir, el déficit de la balanza comercial, incluyendo las remesas al exterior, el déficit en cuenta corriente asciende a 564 millones de US$. Como la entrada neta de capitales fue negativa (—US$ 17 millones), el déficit de la balanza de pagos ha sido estimado en 581 millones de US$.

[...]

En verdad sólo una política radical que se plantee la suspensión unilateral del pago de la deuda externa al imperialismo norteamericano, la apertura de negociaciones bilaterales con otros países capitalistas y la exigencia de apoyo al área socialista, pueden ayudar a resolver la pesada carga de la deuda externa y el déficit de la balanza de pagos.

La política planteada por Millas y el PC para resolver los problemas de la balanza comercial y de pagos: aumento de la producción, substitutivas, de importaciones y el aumento de la producción agropecuaria, no son en verdad soluciones reales al problema en términos inmediatos.

[...]

* * *

MAPU: INFORME DE LA COMISIÓN POLÍTICA AL PARTIDO. EL PERÍODO OCTUBRE 1972 - MARZO 1973 Y LAS PERSPECTIVAS FUTURAS. DOCUMENTO DE ESTRICTA CIRCULACIÓN INTERNA

(12 de febrero de 1973)

(Tomo 6, pp. 4261-4248)

[El MAPU se prepara para cambiar la correlación de fuerzas al interior de la Unidad Popular.]

[...]

B. Después de la crisis de octubre

14. La constitución del gabinete cívico-militar señala así el inicio de un *cuarto período* en la historia del Gobierno de Allende. Este período, en el que todavía nos movemos, tiene tres rasgos fundamentales que se hallan en la base de todos los fenómenos de los últimos meses:

a) El agravamiento de la crisis económica, tanto en su aspecto interno (desabastecimiento) como externo (falta de divisas), pero sin que se llegue todavía a un punto de ruptura;

b) La presencia importante, aunque no predominante, de las FF.AA. al interior de la conducción política del Gobierno; y

c) La lucha electoral como marco general y principal del combate político.

[...]

18. Las FF.AA. son una fuerza de centro. Su concepción de la seguridad nacional implica mantener la institucionalidad vigente y la unidad de la nación. Evitar cualquier crisis grave que amenace dividir al país en bandos irreconciliables, afectando con ello la unidad interna de las FF.AA. y las perspectivas de desarrollo económico, o poniendo en peligro los intereses de la defensa del país ante una agresión extranjera (agresión que se vislumbra como una no muy lejana amenaza, de parte del régimen expansionista brasileño y su brazo boliviano). Por eso las Fuerzas Armadas están en contra de cualquier minoría "extremista" (de derecha o de izquierda) que pretenda provocar un vuelco radical, sea en un sentido reaccionario, sea en uno revolucionario. Con mayor razón las FF.AA. se juegan por enteras por evitar y prevenir cualquier situación que pudiese desembocar en una guerra civil. Estando en el Gobierno, las FF.AA. tienen más instrumentos que antes para actuar en su perspectiva, y por eso su presencia resulta un obs-

táculo para los sectores reaccionarios de la oposición, que quisieran producir un caos conducente a la guerra civil. Pero, por lo mismo, en la medida en que la acción de los sectores proletarios y revolucionarios amenace la unidad nacional, y la estabilidad institucional del país, las FF.AA. también estarán en su contra.

[...]

22. Por todo esto la acción de la oposición frente a la presencia militar en el Gobierno se desenvuelve en forma contradictoria. Por un lado, en predominio del sector reaccionario en la CODE y los efectos endurecedores de la lucha electoral hacen que en el estilo de la acción, los sectores reformistas sean clara y totalmente subordinados, siendo arrastrados por los grupos más reaccionarios a una crítica desembozada a los ministros de las FF.AA. Pero, por otro lado, el predominio de los sectores centristas dentro de la UP y del Gobierno, y el efecto desmovilizador causado por la presencia militar en el gabinete, hacen que las contradicciones entre la UP y las FF.AA. se minimicen, con lo cual las presiones de la oposición sobre las FF.AA. no tiene por resultado el objetivo buscado por los sectores reaccionarios (salida de las FF.AA. del Gobierno), sino todo lo contrario: el fortalecimiento del poder de las FF.AA. dentro del Gobierno (objetivo del sector reformista). Esto puede verse en particular claridad en la sucesión de hechos que comienzan con el discurso de Flores y termina con el control de las FF.AA. sobre el aparato de distribución (ver el punto 30).

[...]

26. La solución al problema económico no depende, sin embargo, de una definición técnica. Requiere una opción política. La lucha entre las líneas centristas y proletaria se da hoy día, principalmente, en el terreno del abastecimiento. Es la lucha entre quienes quieren liquidar el mercado negro para volver al "mercado blanco" (o sea, al funcionamiento normal de la distribución capitalista), y los que, como el MAPU, piensa que la solución debe buscarse fuera de los marcos del mercado capitalista, sea éste "negro" o "blanco". Pero no se puede "blanquear" el mercado sin una transacción política con la oposición, que altere el comportamiento especulativo de los empresarios privados y cree un clima de "confianza" nueva en el futuro del capitalismo en este país. Ni se puede reemplazar el mercado capitalista sin contar con la fuerza política necesaria para enfrentar la crisis social —e incluso militar— que ello desencadenaría. Contar con esa fuerza política supone, a su vez, estar dispuesto a implementar en todos los terrenos una línea estratégica revolucionaria y socialista.

27. Desde septiembre de 1970 (y antes) hasta la fecha, la UP fue revelando el rostro de una línea política que guió los pasos del Gobierno en

cada una de las situaciones decisivas, salvo excepciones escasas. Esa línea, que es la centrista, y que encuentra su expresión más coherente en el PC, se ha ido haciendo cada vez más hegemónica al interior del Gobierno, mientras que la línea proletaria, fortalecida a nivel de masas, ha ido perdiendo sus posibilidades de acción desde el Gobierno, el cual se ha debilitado así como instrumento revolucionario. Cualquier superación de fondo de las limitaciones actuales de la UP y del Gobierno, exige pues necesariamente un cambio de línea política, un cambio de la orientación estratégica predominante, un cambio de la hegemonía política dentro de la UP y del Gobierno.

[...]

29. A lo largo de los dos años de Gobierno UP, la lucha de clases se ha ido agudizando, la nación se ha ido polarizando en bandos antagónicos, y las fuerzas de centro (o sea: el reformismo, el centrismo y las FF.AA.) han sido puestas, a raíz de ello, en una situación de extrema tensión y progresivo debilitamiento. Es así como el polo reformista de izquierda de la oposición (el tomicismo) ha tenido que ir subordinándose y apagándose ante el avance del freísmo. El centrismo, por su parte, se ha ido desnudando ante las masas en todo lo que tiene el freno al proceso revolucionario, sobre todo a partir del tercer período del Gobierno. Y las FF.AA., última reserva de las fuerzas de centro, han tenido que colocarse en el medio del escenario, en la incómoda posición de estar constantemente bajo la inspección crítica de los ojos del pueblo, lo que deteriora progresivamente sus defensas de apoliticismo y no deliberación.

Al mismo tiempo, sin embargo, los sectores reaccionarios ven obstaculizadas seriamente sus posibilidades de acción autónoma, precisamente debido a la posición de las FF.AA. y al ataque de que han sido objeto sus bases económicas por la acción antimonopólica del Gobierno. Las posiciones revolucionarias y proletarias se han visto fortalecidas, en cambio, tanto desde el punto de vista del afinamiento de su línea política, como desde el ángulo de sus posibilidades de acción a nivel de masas. Su mayor debilidad sigue siendo, sin embargo, la ausencia de un adecuado instrumentos partidario, lo cual les impide estar en condiciones de imponer su línea estratégica en el bloque de la UP y en el Gobierno. Es así como, a pesar del agudizamiento del conflicto de clases, las fuerzas de centro conservan todavía la potencia suficiente como para terminar imponiéndose en las situaciones más críticas. Octubre fue una prueba de ello y los acontecimientos de las últimas semanas dan fe de que sigue siendo así, y de que ello puede continuar aún por bastante tiempo.

[...]

44. En suma, pues, hay voluntad en el PC, en el sector allendista del PS, en las FF.AA. y en los sectores reformistas y freístas del PDC, para buscar una salida de centro, un reordenamiento del cuadro político y económico, capaz de evitar la crisis total y la guerra civil. Y esa salida no parece imposible. De allí que, evaluando toda la situación actual, las tendencias que se vienen dando en dos años de Gobierno, y los acontecimientos de las últimas semanas, podemos concluir que la alternativa *más probable* después de las elecciones de marzo es un nuevo viraje del Gobierno hacia posiciones de centro, un reordenamiento político de las características ya indicadas, que puede o no llegar a completarse cabalmente.

[...]

46. Por último, hay que tener presente que si los actores políticos que buscan el reordenamiento no se mueven con la rapidez que las circunstancias exigen, entonces es posible que no logren adelantarse a los plazos de ruptura de la crisis económica (abril, mayo), y *en ese caso*, la alternativa de un enfrentamiento agudo capaz de desembocar en una guerra civil, cobra mayor probabilidad. Por otra parte, incluso habiéndose comenzado a implementarse un reordenamiento de centro, éste puede, en el camino, no encontrar todas las condiciones que los hacen factible, y puede por tanto, fracasar. Y por último, incluso después de hacerse *ya* realizado cabalmente el viraje al centro, las contradicciones que ello crea a nivel de masas y la capacidad de conducción de éstas que las vanguardias políticas proletarias y revolucionarias han venido desarrollando, hacen que el reordenamiento de centro no pueda lograr condiciones de gran estabilidad, a menos que haga efectivo su potencial carácter represivo. A raíz de esto, un régimen de centro como el que resultaría del reordenamiento, generaría, a más largo plazo, las condiciones de nuevas situaciones críticas, cuya salida no podría ser ya una nueva negociación. Es por todas estas razones que, a pesar de que la alternativa más probable para después de marzo sea un nuevo viraje del Gobierno hacia posiciones de centro, el partido no debe creer que con ello se cancelan las perspectivas de agudo enfrentamiento que son inherentes, a toda lucha por la conquista del poder. Por el contrario, el partido debe redoblar su preparación para enfrentar condiciones más críticas y no debe olvidar que ello forma parte de su línea estratégica permanente.

D. La línea del partido en la actual coyuntura

[...]

49. Ir avanzando en la creación de las condiciones que permitan cambiar la hegemonía centrista de la UP por otra hegemonía, proletaria y

revolucionaria, es algo que puede y debe hacerse *desde adentro* de la Unidad Popular y del Gobierno. Nuestro objetivo es dar una conducción revolucionaria al conjunto de la clase obrera y de pueblo, nuestro objetivo no podría ser jamás divisionista. No se trata, pues, de romper abruptamente relaciones con los sectores centristas sino de aplicar el principio de unidad y lucha para, aprovechando las contradicciones indicadas, ir subordinándolos a nuestra línea. No se trata de abandonar el buque porque comienza a virar hacia un rumbo de centro, sino que se trata de impedir que ese rumbo se estabilice, de retener el timón lo más a la izquierda que podamos, de impedir que el buque se hunda, y de saber también nadar, con o sin buque. Hoy día, abandonar la UP o el Gobierno no serviría sino para aislarnos y debilitarnos para favorecer en vez de impedir un viraje aún más pronunciado hacia el centro, puesto que los sectores centristas siguen siendo los más fuertes y quedarían (si nosotros nos vamos), con las manos libres. La línea del partido en esta coyuntura es, pues, la de obstaculizar la consolidación establece de un reordenamiento que perjudica a las masas y debilita al Gobierno; pero hacerlo desde dentro de la Unidad Popular y el Gobierno. El partido no está por favorecer ningún resquebrajamiento de la UP, pero tampoco está por favorecer transacciones y virajes que perjudiquen al pueblo. Estamos porque el conjunto de los partidos del proletariado y de la UP sigan una política auténticamente revolucionaria, y rechazamos enérgicamente las provocaciones de aquéllos que quisieran vernos fuera de la UP y del Gobierno.

50. Los sectores proletarios y revolucionarios no son hoy lo suficientemente fuertes todavía como para imponer su hegemonía al interior de la UP y del Gobierno. Pero, ante cada paso de las fuerzas de centro tendiente a implementar el "reordenamiento", nuestra tarea es plantear la alternativa proletaria que, tomando en cuenta la correlación de fuerzas permita ir haciéndole claridad a las masas acerca del carácter y significado de ese reordenamiento, al mismo tiempo que les vaya entregando tareas concretas, *factibles de conseguir hoy día*, para avanzar en la perspectiva nuestra[12]. Ello implica no una simple "denuncia" verbal que no conduce a nada, sino una actitud de crítica positiva, expresada en proposiciones realizables y concretas, y que se debe ir desarrollando simultáneamente y paralelamente al curso que irá tomando el "reordenamiento", el cual, como dijimos, no será brusco, sino un proceso continuo y gradual.

51. La correlación actual de fuerzas, la hegemonía actualmente existente en el interior de la UP y el Gobierno, no permiten a los sectores revolucionarios y proletarios oponerse frontalmente a quienes quieren implementar un nuevo viraje. Pero sí permiten actuar, de manera de hacer que

ese viraje sea lo menos pronunciado posible. De lo que se trata es de lograr que, incluso habiendo un reordenamiento, éste no se consolide establemente, y subsistan las condiciones suficientes como para seguir desarrollando desde dentro del Gobierno nuestra política proletaria.

[...]

54. El desarrollo del poder popular y la movilización de masas adquieren, sin embargo, en esta coyuntura, características específicas.

En general podemos decir que es necesario:

a) Replantear el tipo y carácter de los órganos de poder popular, en especial los comandos comunales, partiendo del hecho de que existen posibilidades muy limitadas de transferirles funciones desde el Gobierno dado el viraje al centro que éste viene realizando.

[...]

d) Esta organización de masa debe servir además para defender al Gobierno llegado el caso y tiene, pues, que tomar medidas en ese sentido.

e) Por último, todo lo anterior hace imprescindible fortalecer la presencia del MAPU en esos organismos y requiere que el trabajo de masas sea la preocupación prioritaria del partido; es en ese marco que debe entenderse la importancia de la campaña electoral: es preciso que el partido obtenga una alta votación en marzo y que esa votación pueda transformarse, en un alto porcentaje, en nueva militancia y en organización de masas.

55. Avanzar en el proceso de cambio de la actual hegemonía al interior de la UP, requiere también desarrollar al máximo, al interior de la izquierda, vinculaciones con las fuerzas proletarias y revolucionarias, de manera de fortalecer y perfeccionar a corto plazo la capacidad orgánica y de dirección revolucionaria del proletariado. Es necesario desarrollar, al interior de la UP y del Gobierno, un "polo socialista", por decir así, que vaya ganando terreno al polo centrista hoy día dominante. Ese polo socialista, desarrollado, debe constituir el germen de la futura dirección proletaria y revolucionaria unitaria que hasta el presente la UP no ha sido capaz de generar.

[...]

57. Respecto a las FF.AA., el partido debe tener muy claro que a pesar de no ser estas una fuerza proletaria y a pesar de que su presencia en el Gobierno fortalezca las posiciones de los sectores de centro (tanto dentro como fuera de la UP y el Gobierno), hoy día resulta imposible retroceder a las condiciones preoctubre. Dar una lucha por la salida de las FF.AA. del Gobierno o de la distribución, sería hoy día una política ultra, porque no tiene posibilidades reales de concretarse y crearía contradicciones entre nosotros y las FF.AA., que no es de ningún modo conveniente crear. De allí

que nuestra posición frente a las FF.AA. debe partir de la base de que exista el hecho de su presencia en el Gobierno y de lo que se trata es entonces de desarrollar en la mejor forma nuestra política en estas nuevas condiciones. De impedir al máximo que esa presencia signifique una burocratización definitiva y un freno absoluto a la iniciativa de las masas. De impedir que en lo posible el poder de las FF.AA. siga aumentando en el Gobierno y, al mismo tiempo, de ir favoreciendo la progresiva radicalización de las FF.AA.; hay que ir ganándolas al máximo para la izquierda.

[...]

¡Con las masas y el Gobierno a conquistar el poder!
¡Crear y desarrollar el poder popular de masas!

Comisión Política, MAPU
12 de febrero de 1973.

* * *

CARLOS ALTAMIRANO (SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA): CARTA A LUIS CORVALÁN (*El Siglo*, 15 de febrero de 1973)

(Tomo 6, pp. 4234-4244)

[Carlos Altamirano del Partido Socialista refuta a Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista.)

[...]

En esta perspectiva los socialistas estimulamos el desarrollo de todos los gérmenes de poder popular que han venido surgiendo como expresión de la movilización de las masas trabajadoras en sus luchas; en contra del poder burgués, representado en el campo de la economía, por patrones, en el campo de la política, por los partidos reaccionarios, y en el campo propiamente institucional, principalmente por el Congreso, los Tribunales de Justicia, la Contraloría y la Administración Pública que, en general, continúa en manos de las fuerzas reaccionarias.

El desarrollo y profundización del poder popular debe contribuir a fortalecer la unidad de la clase obrera y de todos los trabajadores, así como a vitalizar la acción de todas sus organizaciones de clase, como la CUT, las federaciones y sindicatos, que deben asumir activamente su responsabilidad en el impulso a la generación de este nuevo poder, tarea que no han cumplido cabalmente hasta ahora. La participación o intervención directa de los trabajadores debe constituir el pilar fundamental para hacer irreversible el proceso, sentar las bases del poder popular, cambiar las relaciones de producción, iniciar la planificación socialista y educar política, técnica y administrativamente a las masas.

Así entendida, la participación no puede reducirse a los estrechos márgenes de las empresas del Area de Propiedad Social, ni éstas pueden mantenerse aisladas del medio que las rodea. Por el contrario, los Comandos Comunales, surgidos en torno a las organizaciones de la clase obrera en los cordones industriales, representan un paso importante en la generación de un efectivo poder popular. Para nosotros está claro que los trabajadores organizados, conjuntamente con participar en sus empresas en las tareas de la producción y en la gestión de ellas mismas, deben salir hacia afuera, organizar y vanguardizar a sectores no organizados, dándoles dirección a todos ellos, para ayudar a vencer los obstáculos de la legalidad burguesa en la que está inserta el proceso. Se trata, en consecuencia, de organismos

opuestos al poder burgués, no al Gobierno. Dicho de otra manera, estos organismos nacen *no dependientes* del Gobierno, pero tampoco *en contra* del Gobierno, toda vez que ellos nacen para ayudar al proceso revolucionario, y el Gobierno constituye hoy una palanca fundamental que impulsa este proceso.

El mismo rol deben desempeñar los Consejos Comunales Campesinos, que incorporan en su seno a todas las oganizaciones existentes y también a los campesinos no organizados, con el objeto de establecer el control del proceso productivo y ejercer el poder popular en el campo, contribuyendo a la transformación del aparato institucional.

En uno y otro caso es menester impedir que estos órganos de poder popular sean aprisionados en el marco de hierro de la legalidad vigente. Permitirlo sería provocar su muerte en el mismo momento de nacer.

[...]

* * *

PARTIDO COMUNISTA: FORTALEZA DEL PUEBLO Y SU GOBIERNO

(*El Siglo*, 6 de marzo de 1973)

(Tomo 6, pp. 4329-4330)

[Conocido el resultado de las elecciones de marzo, el Partido Comunista concluye que el gobierno y el pueblo tienen la fuerza suficiente para continuar el proceso.]

La Unidad Popular alcanzó en las elecciones del domingo el 42 por ciento de los sufragios emitidos. Esto demuestra que su influencia en las masas se acrecienta y se hace más sólida. Por lo menos hay diez nuevas bancas parlamentarias en su poder y tres de éstas corresponden al Senado de la República.

Los sectores más reaccionarios y fascistas se habían fijado una meta calenturienta y arrastraron tras ella a casi la totalidad del contingente político opositor: alcanzar los dos tercios de la votación del Senado, para proceder a formular una acusación "constitucional", contra el Presidente Allende y hacer posible su derrocamiento "constitucional", aún a costa de una guerra civil, destrucción de nuestra economía y de una trágica cuota de más o menos un millón de muertos.

La meta se les derrumbó. El sueño enfebrecido se hizo trizas y los soñadores padecen de insomnio desde la tarde del domingo. Los dos tercios de la votación del Senado están muy lejos de sus manos.

Soñaban, además, con ver la repetición de una historia que durante décadas a ellos les penó como una maldición. La historia del deterioro de los grupos en el poder. Todo Gobierno, según ellos, se deteriora a poco de asumir el poder y su influencia en las masas se debilita. Se pierden las elecciones y el pulso parlamentario del Gobierno se hace casi imperceptible. Luego sobrevienen la agonía y la muerte. Ibáñez, Alessandri y Frei eran los últimos casos típicos de la nefanda historia del deterioro. Esta, sin embargo, no se repitió. Y por primera vez en largos años el Gobierno, luego de veintiocho meses de ejercicio del poder, se fortalece en el número de votos, en el porcentaje de sus conquistas de sufragios y en el número de representantes que elige.

Después de veintiocho meses de Gobierno, la Unidad Popular es más grande y poderosa que cuando alcanzó el triunfo con Salvador Allende como candidato a la Presidencia de la República.

Mientras tanto, la oposición no sólo se debilita respecto al número de votos, al porcentaje de éstos y a la cantidad de parlamentarios, sino que sufre de una notoria debilidad táctica y estratégica que es el fruto natural de su falta de principios y del oportunismo electoralista que predomina en el

origen mismo de la combinación opositora. Nada serio los une. No hay puntos de contacto ni en lo doctrinario ni en lo programático y los separa más, sobre todo ahora y seguramente mañana la separación será más tajante que hoy, el problema de elegir un camino. En esta hora de nuestra Historia están en una encrucijada. O acatan el resultado de las urnas que les niega la posibilidad de derrocar "constitucionalmente" al Presidente y obedecen, por tanto, el mandato de la Constitución y de las leyes, o vuelcan su actividad hacia el golpismo desenfrenado y abren las compuertas para la violencia, la guerra civil y el exterminio a sangre y fuego de vastos sectores de la población chilena. Unos, es cierto, los de mentalidad y militancia fascista, los más retrógrados y cavernarios, optarán por el segundo camino y habrá que atarles las manos y los pies, habrá que ponerles una camisa de fuerza y habrá que hacerlos entrar en vereda rápida y enérgicamente. Pero otros, que no han perdido ni la serenidad ni la cordura, no están dispuestos a echar sobre sus hombros la carga de una traición a Chile ni sobre sus conciencias la sangre derramada en una guerra civil.

Además, en esta elección de un camino, hay otros factores que es necesario por lo menos mencionar. La Unidad Popular, ya lo hemos dicho, alcanzó un 42 por ciento de la votación. Lo que no significa que todos los puntos del Programa de Gobierno tengan sólo ese respaldo ciudadano. Hay muchos puntos del Programa que tienen detrás de sí la voluntad absolutamente mayoritaria de la ciudadanía. Vastos sectores ciudadanos estuvieron en favor de la nacionalización de la Gran Minería del Cobre —para poner un solo ejemplo— y son contrarios a toda medida que signifique un retroceso en esa materia. Y con la gente que apoya el Programa en dos, tres, cuatro o muchos de sus puntos, se puede entablar un diálogo que reduzca la prédica del golpismo y la traición a su expresión más débil y precaria.

El movimiento popular no le teme al diálogo, porque su pujanza y su fuerza se basan en la más esclarecida, patriótica y revolucionaria de las clases sociales, en la clase obrera, y en la alianza de ésta con el campesinado y las capas medias. El pueblo se enriquece y fortalece con el diálogo. Son sus enemigos los que pierden con él.

* * *

PARTIDO SOCIALISTA (REGIONAL CORDILLERA - SANTIAGO): DEFINIR E IMPULSAR UNA POLÍTICA REVOLUCIONARIA. DOCUMENTO CON OCASIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA, MARZO DE 1973

(Documento para la discusión interna. Confidencial)

(Tomo 6, pp. 4450-4468)

[Los sectores más radicales del PS muestran su descontento por la política seguida y diseñan su estrategia para asumir el poder.]

Introducción

"... e iniciar la construcción del Socialismo"
(Del Programa Básico de Gobierno de la UP).

El 4 de septiembre de 1970 se inició en Chile un proceso de profundos cambios en su estructura económico-social, bajo la acción de la Unidad Popular. Desde entonces a esta fecha se han producido alteraciones positivas en la correlación de fuerzas entre los trabajadores y la burguesía que permiten, hoy, dar un salto cualitativo.

[...]

Con el propósito de colaborar en la elaboración de la línea de acción que debe seguir el Partido Socialista, ofrecemos a continuación un estudio de la experiencia política acumulada, desde 1970 a 1973, de cuyo balance surgen conclusiones imperativas.

[...]

II. La estrategia revolucionaria

1. El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular

El Programa con que se triunfó formula un objetivo estratégico "antiimperialista, antimonopólico y antilatifundista de transición hacia el socialismo". El Programa caracteriza a Chile como un país "capitalista dependiente del imperialismo". Esta caracterización es un avance ideológico y programático con respecto a los programas del FRAP que sólo sustentaban objetivos de "liberación nacional". Así, entonces, el Programa señala que su objetivo es *terminar* con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e *iniciar* la construcción del socialismo en Chile".

Hay que tener claro que los comunistas cedieron formalmente al admitir en el Programa Básico de Gobierno de la UP "iniciar el socialismo", pero es dudoso que hayan pensado en cumplir este propósito en la actual fase del proceso. Eso puede verse con toda claridad en documentos que tienen para ellos un valor prioritario en su orientación política.

[...]

En el programa vigente del Partido Comunista de Chile, aprobado en 1969, se dice textualmente: "Los comunistas luchamos por unir a la mayoría del país, víctima del régimen capitalista, a fin de avanzar en una primera etapa por la senda de la revolución antiimperialista y antioligárquica y, en el curso de las transformaciones que ella introduzca, *abrir paso al advenimiento de nuevas relaciones de producción*, al socialismo".

La fórmula encontrada por el Partido Comunista chileno en su programa es un intento de conciliar la realidad chilena, que exigía un pronunciamiento anticapitalista, con la receta soviética que no la menciona para nada. Pero lo que queda totalmente en claro es que para los comunistas existe *una primera etapa* que abre paso a otra *etapa.* En la primera etapa, no se plantea el problema del socialismo. El Programa de la UP fue aceptado a regañadientes, pero sin que se pensara cumplirlo, pues si se cumplía se planteaba de inmediato la lucha por el poder, que es el problema que se desea rehuir.

2. La cuestión del poder

En efecto, ¿cómo se puede hablar seriamente de "iniciar la construcción del socialismo", sin haber resuelto previamente la cuestión del poder? Tanto la teoría revolucionaria como la experiencia histórica demuestran inapelablemente que la construcción del socialismo solamente se puede iniciar *a partir y no previo* a la toma del poder político por parte de la clase obrera.

Es a la luz de este principio que se deben discutir tanto el carácter del Programa y del Gobierno de la UP como los fundamentos ideológicos de la llamada "vía chilena". Para un revolucionario marxista-leninista el camino hacia el socialismo es un proceso único e ininterrumpido, sin posibles etapas para consolidación; por lo tanto toda acción táctica, todo el quehacer diario, debe apuntar a la conquista del fin estratégico que es la toma del poder político.

Para el Partido Comunista, en cambio, el triunfo electoral representó la posibilidad de llevar a cabo los objetivos estratégicos planteados en su programa, que pospone las tareas de la construcción socialista para un

mañana lejano y para una generación futura. Su objetivo a corto plazo es obtener un Estado de "democracia avanzada", lo que implica la integración de los llamados sectores no monopólicos de la burguesía nacional a las tareas de Gobierno.

[...]

3. La institucionalidad burguesa

[...]

Nosotros no negamos la utilización táctica del sistema institucional, pero esa utilización debe básicamente apoyarse en la formación de un poder revolucionario independiente y autónomo de la legalidad vigente. La experiencia histórica demuestra que para el establecimiento de un poder revolucionario siempre ha sido condición necesaria la creación de una institucionalidad revolucionaria. La llamada "vía chilena" no puede evitar esa ley histórica que, por lo demás, es un sentimiento profundamente arraigado en las masas chilenas. Ahí están los Consejos Comunales y Provinciales Campesinos, los Cordones Industriales, la Asamblea Popular de Concepción. Así están los Comandos Comunales surgidos de la entraña misma de la clase trabajadora, en los momentos más críticos de la lucha de clases y como respuesta natural a la ofensiva patronal de octubre.

[...]

4. La experiencia de octubre de 1972

Lo anterior encuentra plena confirmación cuando a fines de 1972, el imperialismo y la burguesía se plantean el derrocamiento del Gobierno a través de la crisis económica y de la alteración del orden institucional.

[...]

En estas condiciones surge la respuesta de los trabajadores, espontánea en muchas ocasiones, enfrentándose con todo éxito a través de las organizaciones de masas, al paro de los patrones. El resultado de estos días es una elevación de la conciencia de clase y un desarrollo cualitativo de las organizaciones populares, además de un fortalecimiento de la unidad de la clase. En este contexto las masas esperaban del Partido Socialista y del Gobierno una respuesta que se expresara en un gabinete "para avanzar".

Sin embargo, la dirección política del proceso, consecuente con su línea reformista, optó una vez más por "la paz social de la burguesía", significando el ingreso de los altos jefes de las FF.AA. al gabinete, un freno al ímpetu revolucionario de los trabajadores. Con esta solución dada a la

crisis de octubre, el Gobierno cedió a las exigencias de la burguesía y a las presiones de los sectores reformistas, a pesar que la tendencia revolucionaria al interior de nuestro partido luchó por imponer una línea basada en la movilización y organización de los trabajadores.

[...]

III. Reformistas y revolucionarios

1. Coexistencia de dos tendencias en el proceso

Dos tendencias están presentes en nuestro partido. En todos los organismos regulares, desde la Comisión Política, los Comités Regionales y los Núcleos, hay camaradas que sustentan una de estas dos tendencias, que guían su acción de acuerdo a enfoques distintos del proceso chileno.

La tendencia revolucionaria tiene su antecedente histórico en el seno del partido, en la tesis siempre vigente del Frente de Trabajadores. Considera que el actual proceso chileno debe conducir al socialismo en una marcha ininterrumpida, sin etapas, sin consolidaciones prematuras dentro del actual capitalismo, ganando el poder para el proletariado. Plantea que la característica fundamental de la "vía chilena" es el cumplimiento simultáneo de las restantes tareas democrático-burguesas y de las nuevas tareas socialistas. La tendencia revolucionaria ha hecho suya la consigna surgida de las masas de "avanzar sin transar".

La tendencia reformista es convergente a la tesis del Frente de Liberación Nacional (el opuesto ideológico del Frente de Trabajadores), base de la política del Partido Comunista. Para el reformismo no está planteada la construcción del socialismo en el plano inmediato, ni la toma del poder, sino sólo medidas que abran el camino a una futura nueva etapa de la revolución en Chile. Plantear tareas socialistas ahora, dicen ellos, aisla al proletariado, debilita el proceso, lo enajena a las capas medias y terminará por derrotar a la revolución. Para ellos no se plantea el problema del poder en este período como cosa previa a la construcción socialista. Esta tendencia reformista asigna a la alianza PC-PS un valor tan importante e irremplazable que, en la práctica, subordina la línea política socialista a la comunista.

2. Formas de acción derivadas de ambas tendencias

Estas dos tendencias conducen a formas muy distintas de acción partidaria:

1. Mientras la tendencia revolucionaria plantea apoyarse en las masas pobres de la ciudad y del campo, la reformista arrastra al PS a una alianza política oportunista con los partidos de centro, concepción que los ha llevado a aceptar, a principios de 1972, la incorporación del PIR a la Unidad Popular, a "permitir" un pacto con la Democracia Cristiana, en junio, y a la incorporación de los militares al Gobierno, en noviembre.

2. Mientras la tendencia revolucionaria considera que el avance del proceso conducirá inevitablemente a un enfrentamiento armado provocado por los explotadores y que, por tanto, hay que prepararse y preparar a las masas para ese enfrentamiento, la reformista considera que el enfrentamiento es evitable en la medida que no planteemos el cumplimiento de tareas socialistas, que si hay enfrentamiento será porque la reacción se sale de la constitucionalidad y que, entonces, el pueblo contará con el respaldo mayoritario de las Fuerzas Armadas, lo que reduce la necesidad de preparar a las masas.

[...]

Como es lógico, discrepancias tan profundas como las existentes entre revolucionarios y reformistas deben resolverse en el próximo congreso del partido y para ello todos los militantes deben debatir estas posiciones y determinar democráticamente cuál será la política del socialismo. Defenderemos incansablemente la unidad de nuestro partido en torno a su línea revolucionaria ratificada en los congresos de Chillán y La Serena.

[...]

V. Salvemos nuestro proceso revolucionario

1. Las coyunturas revolucionarias perdidas

[...]

Este momento coyuntural se dio en lo económico a través de la política impulsada por el camarada Ministro Pedro Vuskovic, estructurando con firmeza al Area de Propiedad Social a través de intervenciones o requisiciones. Por otra parte, estableciendo costos reales al área privada, bajando los márgenes de comercialización, manteniendo precios bajos, lo que se tradujo en un apoyo masivo y combativo en favor del proceso.

[...]

Fue el momento de dar el salto hacia adelante convocando al plebiscito, con la clara perspectiva de construir el socialismo, pero esto no fue compartido por otros partidos de la coalición ni por nuestro camarada Pre-

sidente. Todos, ahora, reconocen ese error. El Partido Socialista, triunfante en las elecciones, debió tomar la ofensiva, pero su dirección, con claro predominio del sector reformista, no se juega por poner en práctica los acuerdos del partido.

La responsabilidad histórica de esos camaradas debe quedar establecida con meridiana claridad en la historia del Partido Socialista y de Chile.

[...]

Dentro de este contexto, han sido vanos los esfuerzos de la tendencia revolucionaria para impulsar una línea de comunicación de masas que las informe y oriente hacia el socialismo. El sector reformista reprime estas iniciativas. El caso del periódico "Aurora de Chile", del Comité Regional Santiago-Centro, es una prueba clara y contundente. Cada vez se hace más evidente la coincidencia de la línea reformista dentro del Partido Socialista y la línea del Partido Comunista.

En este sentido es necesario rechazar los propósitos dirigidos a destruir el acervo socialista, torciendo los mandatos entregados por los congresos del Partido Socialista. La posición de la tendencia revolucionaria no pretende plantear un anticomunismo enfermizo. Entendemos que los comunistas han sido consecuentes con sus objetivos estratégicos y los respetamos, aunque los estimemos equivocados. Nuestras diferencias con el Partido Comunista las podemos resolver, llevando la discusión al seno de la masa para implementar una línea correcta de conducción política.

2. El proceso está en peligro

Chile será socialista tarde o temprano, no lo duda ningún marxista convencido. Pero si será socialista en el futuro próximo, a través del proceso iniciado por el Gobierno de la Unidad Popular, es cosa que está por verse, como también está por verse si nuestra generación lo alcanzará a celebrar, pues la oportunidad histórica que tiene la UP, si se pierde por errores o traiciones alejará las perspectivas del socialismo en Chile por varias décadas. La causa del socialismo aparecerá desprestigiada ante las masas sin que realmente hayamos vivido nada parecido al socialismo. Habremos usado todas las consignas programáticas que la izquierda chilena elaboró en casi 50 años, sin obtener a través de su cumplimiento el cambio estructural que se esperaba.

[...]

El capitalismo está a la ofensiva y en plena restauración de su poderío. Por eso, está en la orden del día la tarea de salvar el proceso de construcción del socialismo.

3. Es necesario desarrollar el Programa

[...]

El objetivo fundamental del programa es la conquista del poder y la implantación del socialismo, es decir, obtener la propiedad social sobre los bienes de producción, transporte y distribución, y la gradual eliminación de las diferencias de clases, a través de la transición del capitalismo al socialismo. Los aspectos básicos contemplados en el programa tienden a debilitar cada vez más a la burguesía, tanto en su aspecto económico como político; a organizar a los trabajadores, tanto en su lugar de trabajo como en los lugares de residencia, dándoles cada vez más poder real sobre los asuntos decisivos de la dirección de la economía, sobre el reparto y el consumo de los artículos de primera necesidad, sobre los medios de transporte y comunicación, etc.

[...]

- Entregar más poder a los Consejos Comunales Campesinos, para que dirijan todas estas transformaciones, orienten y controlen la producción, canalicen las soluciones y distribuyan los recursos.

3.- Desarrollar los Comandos Comunales, como gérmenes del Poder Popular alternativo al poder burgués. Deben ser dirigidos por la clase obrera e integrados por todos los organismos existentes a nivel poblacional: JAP, Junta de Vecinos, asambleas de trabajadores de industrias, etc. Debe impedirse la institucionalización de los Comandos comunales, los cuales no pueden estar subordinados ni al Gobierno ni a la U.P.

4.- Desarrollar el Poder Popular que convertirá a los Comandos Comunales en Comandos Provinciales y de ahí se avanzará a la Asamblea del Pueblo, organismo supremo de la soberanía nacional. En esta Asamblea, los trabajadores deben estar representados como clase.

¡Todo el poder a los trabajadores! debe ser la orden de combate.

5.- Establecer el derecho a voto para los suboficiales y tropa y el escalafón único.

[...]

8.- Mantener y fortalecer los Frentes de la Patria, entendiéndose como los órganos de expresión de las capas medias y empresarios no monopolistas que acepten el Programa de la Unidad Popular.

El desarrollo del Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular debe servir para que nuestro Partido se convierta en una auténtica vanguardia revolucionaria. Sobre la base de este programa de transición al socialismo deben replantearse las relaciones P.S. - P.C. La unidad con los

comunistas debe colocarse al servicio de los principios revolucionarios y en ningún caso plantearse la unidad por la unidad, amarrando a nuestro Partido al carro reformista.

Sobre la base de este programa será posible conseguir una dirección revolucionaria y homogénea para nuestro Partido y para el proceso que vivimos.

¡Viva la Unidad del Partido Socialista!
¡Viva la revolución chilena!
¡Viva el 40° aniversario de nuestro Partido!

* * *

ÓSCAR GUILLERMO GARRETÓN (MAPU): ENTREVISTA EN *PUNTO FINAL*

(*Punto Final* N° 180, del 27 de marzo de 1973)

(Tomo 6, pp. 4394-4400)

[...]

P.F.: ¿Cuáles son las tareas prioritarias que el MAPU propone en esta instancia política?

O.G.G.: La tarea de desarrollar el poder popular es la número uno en esta etapa y ella está vinculada con las tareas económicas. Implementar la política económica que, en nombre del Gobierno, entregó al país el ministro Flores. Ella implica desde la formación del área de propiedad social en la producción y distribución de modo que se garantice el control sobre los productos esenciales y su flujo por canales que lleguen a las masas, hasta el control por los trabajadores de la dirección de las empresas y el aparato planificador del Estado.

En el área privada propugnamos la formación de comité de vigilancia, que vigilen la producción, resguarden la normalidad en las empresas y controlen el destino de los productos. Y, a nivel poblacional, el desarrollo de las JAP y el control del abastecimiento.

A partir de ello, debe irse al desarrollo de formas cualitativas mayores de organización como los encuentros sectoriales y de trabajadores, los cordones industriales y por sobre todo, los comandos comunales. En esas tareas estamos dispuestos a trabajar con todos los partidos de izquierda que están en esa línea.

En el campo, estamos por el desarrollo de las organizaciones campesinas y la dictación de una nueva ley de reforma agraria, que rebaje la cabida a 40 hectáreas básicas. Además, por la formación de centros de abastecimiento rural.

[...]

* * *

PARTIDO SOCIALISTA
(SUBSECRETARÍA NACIONAL DEL FRENTE INTERNO)
INSTRUCTIVA NACIONAL.
DOCUMENTO CONFIDENCIAL
(27 de abril de 1973)

(Tomo 6, pp. 4522-4524)

[Documento secreto socialista.]

La vigencia que mantiene el análisis y la orientación política del presente documento —no obstante haberse expedido a fines de abril—, impone que sea consignado en las páginas de la presente edición del Boletín del Comité Central, que corresponde a los N^{os} 34-35 de abril y mayo últimos.

[...]

1. Los hechos ocurridos en el país en los últimos días y hasta este mismo momento, confirman plenamente la escalada fascista denunciada en la última Resolución Política del Comité Central. Las fuerzas de la contrarrevolución se movilizan con todos sus recursos en la perspectiva de provocar enfrentamientos civiles parciales que conduzcan a una situación de caos propicia a la guerra civil. La Dirección del partido afirma categóricamente que existe una conspiración burguesa-imperialista en marcha, que amenaza la estabilidad del Gobierno Popular, y cuyo fin último es reconquistar todo el poder para destruir el movimiento popular a través del terror represivo de una dictadura fascista.

[...]

3. Algunos de los elementos de la escalada política y conspirativa son:

[...]

b) *Aumento de la actividad conspirativa.* Giras del ex General Canales, actividad sediciosa del ex Coronel Labbé, incremento de la actividad de los fascistas vinculados a Marshall y al fascismo boliviano, preparación de grupos operativos paramilitares, organización celular de la militancia derechista, aprovisionamiento, etc.

c) *Agitación de masas y preparación de un paro.* Se promueve la movilización de los estudiantes en torno a la ENU, al decreto de democratización y a los problemas materiales de los establecimientos de educación.

Existe todo un trabajo para movilizar a pobladores, dueñas de casa, personal de las FF.AA., en torno a los problemas de abastecimiento, contra la posibilidad de racionamiento, etc. Se preparan activamente paros locales y nacionales de la locomoción, el transporte privado terrestre, el comercio detallista, los colegios profesionales, lo que se manifiesta en giras nacionales de los dirigentes (Vilarín, Cumsille, etc.), asambleas de profesionales, etc. Además se hace todo lo posible, en particular por parte de la DC, para provocar la paralización de importantes sectores de trabajadores (cobre, ENAP, servicios básicos, ferrocarriles, administración pública, magisterio, etc.), agitando mejoramientos económicos de tejo muy pasado, al mismo tiempo que en el Parlamento se impide la dictación de la Ley de Reajuste. Esta última es la amenaza más seria que se debe combatir con mayor fuerza.

d) *Creación del clima insurreccional.* Complementando los otros factores de la escalada, se realiza una serie de actos violentistas y se promueven movilizaciones callejeras instrumentadas por los activistas del fascismo, para imponer el desorden callejero generalizado.

[...]

5. La Dirección del partido señala que la gran tarea política del momento es organizar la defensa irrestricta del Gobierno Popular y la continuidad del proceso revolucionario. La defensa consecuente del Gobierno no implica prepararse para aguantar otro octubre, sino impedir que se produzca desde este mismo momento. Hay una gran conspiración en marcha, y se trata de abortarla.

[...]

7. Las tareas más inmediatas son:

a) Establecer un adecuado grado de coordinación Partido-Unidad Popular-Gobierno, en todos los niveles, para discutir y aplicar rápidamente todas las medidas del caso; b) Movilización en torno al 1° de Mayo con el sentido de defensa del Gobierno y del proceso, demostrando fuerzas; c) Organización de la defensa y protección de todas las empresas, en particular los servicios vitales y estratégicos, preparando su ocupación masiva para cuando sea necesario; d) Movilización organizada, responsable y con dirección muy clara, para ocupar la calle, aplastando con firmeza y en forma racional, la agitación callejera del fascismo; e) Agitación en los centros de trabajo del problema del reajuste, obteniendo pronunciamientos de las organizaciones sindicales respecto a la conducción del PDC, y también el problema del control de la clase obrera en la economía, poniendo en discusión la participación de los trabajadores en la elaboración, la aplicación y el

control del Plan de la Economía Nacional para 1974; f) Llevar el asunto de la ENU al terreno de la discusión de fondo, impediendo que sea el problema de fondo de la lucha política del momento.

[...]

9. La Comisión Política del partido instruye a todos los organismos intermedios y de base, a los militantes, dirigentes y mandatarios del partido, en el sentido de cumplir rigurosamente las tareas emanadas de la última Resolución Política del Comité Central, y de esta instructiva, y poner en práctica todas las medidas previstas por la Dirección para enfrentar la amenaza sediciosa, tareas políticas y medidas que serán desarrolladas en posteriores instructivas.

Santiago, abril 27 de 1973.

Comisión Política

A los Comités Regionales, Seccionales, Núcleos, Dirigentes, Mandatarios y Militantes del partido.

* * *

CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ (PARTIDO COMUNISTA DE CUBA): DISCURSO EN EL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS DEL PARTIDO SOCIALISTA

(*Chile Hoy* N° 46 del 27 de abril de 1973)

(Tomo 6, pp. 4469-4472)

[Con motivo del aniversario del Partido Socialista, Cuba entrega su decidido apoyo a la Unidad Popular y notifica que no hay posibilidades de hacer la revolución fuera del proceso iniciado por Allende.]

[...]

"El origen revolucionario del socialismo chileno lo liberó desde su mismo surgimiento de todo lastre socialdemocrático. La circunstancia de que aún antes hubiera brotado en este mismo Chile otro partido obrero que, siguiendo el camino de Recabarren, tomaba tempranamente en América las enseñas del comunismo esparcidas por la Revolución Bolchevique en todo el mundo, le dieron también a la fundación del nuevo Partido Socialista chileno un significado especial. A diferencia de lo que había ocurrido en Europa, y aún en otros países de América Latina, no se trataba aquí de constituir el movimiento socialista en la guardia defensora de una vieja tradición reformista a la que los disidentes de la izquierda, convertidos en comunistas, luchaban por vencer y desplazar. El socialismo chileno surgía como una posibilidad adicional de incorporar a las ideas del marxismo-leninismo zonas y capas de la sociedad chilena que, de no haber encontrado esa alternativa, habían podido quedarse rezagadas, desviándose en radicalismos aparentes o quedando presas del liberalismo reformista que por tanto tiempo retrasó a las capas medias en otros países de América Latina.

[...]

América Latina se encuentra a ojos vistas, compañeros y amigos, en una nueva coyuntura histórica. Otra vez, como en los años treinta, comienzan a derribarse las estructuras políticas erigidas por el imperialismo norteamericano para contener el empuje popular. Lo que aflora de nuevo no es, como lo era hace cuarenta años, una batalla local entre tiranos o "gorilas" ocasionales y pueblos protestantes. Detrás de la confrontación entre las oligarquías de nuestras tierras y los obreros, campesinos y estudiantes que se les rebelan, esta —lo hemos sabido desde hace mucho tiempo— la irreductible contradicción entre el centro imperialista de los Estados Unidos y la América Latina, su traspatio colonial...

[...]

Pero esa nueva y más profunda crisis de la estructura de dominio imperialista será definitiva sólo si los revolucionarios sabemos usarla para la victoria popular. Y es aquí donde Chile y Cuba tienen su mayor contribución y por ello su más alta responsabilidad. Nos toca ahora, sobre todo, mirar más allá de nuestras fronteras, cumplir un deber continental. Esa es la experiencia que quisiéramos, con toda modestia, transmitir a nuestros compañeros chilenos.

[...]

Eso implica, compañeros del Partido Socialista, el compromiso de unidad que ustedes y sus hermanos del Partido Comunista han proclamado como consecuencia de sus respectivos análisis sobre el resultado electoral. Los revolucionarios cubanos quisiéramos decirles que si Cuba pudo derrotar al más poderoso imperialismo de la historia, fue porque nuestras fuerzas revolucionarias —entre las cuales las diferencias no eran pocas y las tradiciones de honrosa rivalidad no eran pequeñas— supieron encontrar la forma del mando único, la disciplina única y el programa común.

Tal como lo vemos a la distancia y desde nuestra propia experiencia, no hay alternativa revolucionaria para el Gobierno de la Unidad Popular y el Presidente Allende. Sólo existen alternativas reaccionarias y oligárquicas. Postular políticas que dividan a las fuerzas obreras y populares que socialistas y comunistas guían unidamente, no es abrir camino para una posible revolución más profunda, sino abrir las brechas por donde penetrará un enemigo momentáneamente derrotado, al que le hace necesario acorralar con la unidad del pueblo.

[...]

Los saludamos, compañeros del Partido Socialista de Chile, en nombre del Comité Central de nuestro Partido Comunista de Cuba y del pueblo revolucionario. Lo que hace 40 años parecía delirio inasequible, es hoy realidad que ustedes construyen y definen. Salvar a Chile en la revolución y para la revolución es una deuda de los revolucionarios chilenos con los revolucionarios de América Latina, un compromiso que los comunistas cubanos compartimos con ustedes, como lo habría compartido nuestro presente y actuante Che Guevara.

¡Patria o muerte!

* * *

SALVADOR ALLENDE: TERCER MENSAJE ANTE EL CONGRESO (SELECCIÓN)

(21 de mayo de 1973)

(Tomo 6, pp. 4535-4671)

[Último mensaje del Presidente Allende al Congreso.]

[...]

Los cambios revolucionarios se han profundizado

El proceso de cambios que caracterizó a 1971, se ha acelerado en los doce últimos meses. La transferencia del poder económico hacia la clase trabajadora continuó realizándose en la forma anunciada en el Programa de Gobierno. Mientras en 1971 se erradicó de nuestra Patria a las empresas imperialistas que controlaban las riquezas básicas, en 1972 se acentuaron los cambios internos. Fue profundizada la Reforma Agraria, se incorporó al Area Social parte de las empresas monopólicas, se completó la nacionalización de los bancos, algunos consorcios de la distribución mayorista fueron puestos bajo control estatal.

[...]

En el curso del último año ha sido expropiada prácticamente la casi totalidad de los fundos de más de 80 hectáreas de riego básico, los que han pasado a manos de los campesinos. La ancestral oligarquía terrateniente ha perdido la base económica de su poder. En ese período, 2.192 predios expropiados se sumaron a los del año anterior, completándose un total de 3.570. Los campesinos han conquistado, de este modo, cinco millones de hectáreas, con los que, considerando lo hecho antes de mi Gobierno, el 35% de la superficie agrícola total del país está hoy en el sector reformado.

[...]

Todo ello aparece animado por el creciente vigor del movimiento campesino. Hoy es mucho mayor el número y la capacidad de movilización de las Confederaciones, los Sindicatos de Trabajadores Agrícolas y Consejos Comunales. la cantidad de miembros de las organizaciones sindicales campesinas es el orden de los 278.000, es decir, 33% más que en 1971 y 168% superior al existente en 1969.

[...]

Chile ha asumido la responsabilidad de la explotación, procesamiento y comercio de sus recursos mineros. Tarea que constituye un desafío

para la capacidad económica existente en el país y que debemos cumplir en forma óptima, superando dificultades objetivas y errores. Durante este Gobierno, a pesar de todo, la producción de cobre de la Gran Minería ha bordeado en 1972 la cifra de 600.000 toneladas, contra 540.000 en 1970. Estamos produciendo 50.000 toneladas más que antes, aumento que dista mucho de dejarnos satisfechos.

En lo que se refiere a las empresas industriales estratégicas, la resistencia de los propietarios privados al avance del programa revolucionario se ha hecho cada vez más ostensible y enconada. Definidos por el Gobierno los límites del Area Social Industrial; determinado el número e identidad de las empresas que deben integrarla, los sectores afectados han recurrido a todos los medios a su alcance para entorpecer su constitución. No obstante, en la industria manufacturera el Estado controlaba en 1970 apenas el 3% de la producción y hoy controla sobre el 30%. Están incorporadas al Area Social más de 200 empresas, incluidas las que eran de propiedad pública antes de 1970.

El ingreso al Area Social de un centro productivo representa un hecho absolutamente distinto a un simple cambio de patrón. Es el comienzo de una transformación radical en las relaciones de trabajo y en el modelo organizativo cuyo desarrollo va a ocupar durante muchos años a los trabajadores. Los mecanismos de participación son el símbolo del desaparecimiento del poder empresarial. Es la dignidad del hombre de trabajo y su labor creadora las que están contenidas en el proceso de socialización de los medios productivos.

Las formas concretas que adopte la participación deben adaptarse a las circunstancias cambiantes. La experiencia adquirida por los trabajadores y autoridades administrativas en los dos años de práctica del convenio CUT-Gobierno, sugiere la necesidad de corregir numerosos defectos y la instauración de nuevos métodos. Del debate nacional de los trabajadores deben surgir proposiciones concretas para este pilar fundamental de nuestra política.

Otro sector que ha experimentado cambios esenciales es el sistema bancario-financiero. Más del 90% del crédito está bajo control público, a través del Banco Central y de los Bancos nacionalizados, lo que ha permitido su democratización y el acceso a él de los medianos y pequeños productores.

En el área de la distribución, el Estado controla apenas un tercio del comercio mayorista; pero se ha organizado un conjunto de empresas, como DINAC, llamadas a cooperar decisivamente en la racionalización del consumo. Ya no se atiende sólo a los barrios privilegiados. La distribución es

directa en los sectores donde no existe comercio establecido. El desarrollo de las Juntas de Abastecimientos y Precios permite que la población asuma, junto con los comerciantes, la responsabilidad de asignar mejor los artículos fundamentales; la Secretaría Nacional de Distribución realiza una labor que progresivamente hará posible atender en forma racional el abastecimiento. Lo alcanzado con la valiosa cooperación de las Fuerzas Armadas es parte de la gran tarea que tenemos que cumplir.

[...]

Pero el hecho más relevante consiste en que las transformaciones estructurales y la transferencia de poder económico hacia las organizaciones populares han abierto el camino de la socialización del poder político. La jerarquía, la autoridad y el orden burgués han perdido su vigencia ante los trabajadores, quienes se esfuerzan por crear, dentro del régimen institucional del Estado y su normativa legal, un orden y una disciplina que repose socialmente en ellos mismos. Comités de Dirección del Área Social, Consejos Comunales Campesinos, Consejos de Salud, Consejos Mineros, Juntas de Abastecimientos y Precios, Cordones Industriales, Comandos Comunales, etc., son otras tantas manifestaciones de esta realidad surgida después de 1970. En pugna con la estructura de la antigua clase dominante, las instituciones de la naciente organización social están buscando, ensayando, criticando y recreando su propio estatuto de trabajo y disciplina.

[...]

* * *

LUIS CORVALÁN (PARTIDO COMUNISTA): DEL DISCURSO EN EL ACTO DE MASAS DEL PC EN EL TEATRO CAUPOLICÁN (11 de julio de 1973)

(Tomo 6, pp. 4809-4811)

[...] "Queremos dejar plenamente establecido que (...) no renunciamos ni podemos renunciar a los cambios institucionales. Los reaccionarios nos acusan de pretender la totalidad del poder. Sí, señores. Pretendemos que todos los poderes estén al servicio del pueblo, cada cual desde su órbita de acción y conforme a los límites que fije la ley (...) Si las clases hasta ayer del todo dominantes tenían en sus manos la suma de los poderes, ¿por qué el pueblo no puede aspirar a lo mismo? Derecho tiene a hacerlo y necesidad hay de que así suceda.

[...] "Hay que estar preparados para todas las circunstancias, dispuestos a combatir en todos los terrenos. Si la sedición reaccionaria pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie le quepa dudas que el pueblo se levantará como un solo hombre para aplastarla con prontitud. En una situación tal, que no deseamos, que no buscamos, que queremos evitar, pero que se puede dar, no quedará nada, ni siquiera una piedra, que no usemos como arma de combate. En tal supuesto, la nueva alternativa será derrotar con la máxima rapidez y energía a los que desencadenen la guerra civil y liquidar éste apenas estalle, para evitarle a Chile los daños de una prolongada contienda de este tipo.

"Como los trabajadores adoptaron inmediatamente medidas de seguridad ante el reciente intento golpista y mantienen esas medidas de precaución, algunos reaccionarios han comenzado a chillar y han creído encontrar un nuevo tema para tratar de meter una cuña entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, sosteniendo que estamos orientados a reemplazar al Ejército profesional.

"¡No, señores! Seguimos y seguiremos apoyando el carácter absolutamente profesional de nuestros institutos armados. Sus enemigos no están en las filas del pueblo, sino en el campo de la reacción.

"El Partido Comunista, junto a los demás partidos de la UP y a todos los revolucionarios dispuestos a actuar bajo una sola dirección responsable y no como francotiradores o por la libre, pondrá en el platillo de la balanza toda la fuerza de su organización, su disciplina y su coraje.

”Creemos que tenemos derecho a notificar al enemigo, a los que quieren lanzarse a una nueva aventura sediciosa. No pasarán y ellos sacarán la peor parte [...]”

[...] “Estamos seguros que el mismo espíritu anima a los demás destacamentos de la UP. Más todavía, estamos convencidos que más allá de los efectivos de esta coalición, en las circunstancias de que hablamos, surgirán decenas de miles de combatientes sin partido. La clase obrera y el pueblo en general darán muestras de firmeza, de heroísmo, como aquellas que han dado todos los pueblos que en momentos tales no tienen otro dilema que vencer o morir (...)!

[...]

* * *

CARLOS ALTAMIRANO (SECRETARIO GENERAL DEL PS.): DEL DISCURSO A LOS TRABAJADORES DE LOS CORDONES INDUSTRIALES

(*Chile Hoy* N° 57, 13 de julio de 1973)

(Tomo 6, pp. 4803-4805)

La fase subversiva iniciada el viernes 29, con el artero ataque al Palacio de La Moneda, constituye un episodio penoso y lamentable en esta escalada ofensiva que tiene como objetivo final el derrocamiento del Gobierno Popular y el término del proceso revolucionario. Hasta el momento ha fracasado.

[...]

El PS no aceptará jamás conciliar con los enemigos de Chile, del Gobierno Popular, de los trabajadores. En este momento cualquier fórmula de transacción con la derecha sólo sirve para alentar a los grupos facciosos que operan en su seno.

Hay quienes pretenden insinuar "diálogos democráticos" con la Democracia Cristiana. Los socialistas planteamos que es posible el diálogo con todas las fuerzas políticas que se definan claramente en contra de los explotadores, en contra del imperialismo. Impulsamos y desarrollaremos el diálogo a nivel de la masa, con los trabajadores, militen o no militen, pero rechazamos categóricamente todo diálogo con partidos y directivas reaccionarias, contrarrevolucionarias [...].

[...]

Nadie puede negarle al pueblo de Chile el derecho a su propia defensa, principio —por lo demás— consagrado universalmente [...].

En uso pleno de ese derecho y de ese deber, los trabajadores de todo el país se han organizado en los cordones industriales, comandos comunales, consejos campesinos, comités de defensa y vigilancia y otros organismos, que constituyen los gérmenes de un incipiente pero ya poderoso poder popular, y configuran una barricada inexpugnable ante cualquier tentativa insurreccional de la burguesía [...].

Obreros, campesinos, pobladores, jóvenes, están amasando su propio poder para rechazar el poder burgués amotinado. Y tienen la obligación de hacerlo como clase y como revolucionarios.

En una palabra, el PS no sólo reclama el derecho a la legítima defensa del pueblo chileno frente a los traficantes de la guerra civil, sino que además lo llama a ampliar y fortalecer sus organizaciones de masas, consolidar sus posiciones estratégicas en industrias y fundos ocupados, y prepararse para iniciar una gran ofensiva de masas [...].

Nunca la convergencia y homogeneidad de la Unidad Popular ha sido tan sólida. Nunca la unidad socialista-comunista ha sido más férrea, ni ha existido entre ambos partidos —vanguardias de la clase obrera— una mayor identidad de objetivos. Nunca en esta defensa de la patria amenazada ha sido más vigorosa y decisiva la unidad de todas las fuerzas revolucionarias sin excepción. Nunca como hoy se había producido una identidad más grande de pueblo, Fuerzas Armadas y Carabineros, identidad que se irá fortaleciendo aún más en cada nuevo combate de esta guerra histórica [...].

El pueblo de overol y el pueblo de uniforme constituyen uno solo. Por ello es estéril el ominoso intento de la reacción para hacer aparecer como adversarios antagónicos al Gobierno, la Unidad Popular y los trabajadores con el conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La intención es obvia: levantar un muro artificial para así lanzar a un enfrentamiento fratricida a padres, hijos y hermanos, nacidos del mismo pueblo. . .

La reacción parece olvidar que el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes, en una heroica ofensiva libertaria y patriótica [...].

Olvidan que durante el Gobierno reaccionario de Arturo Alessandri Palma se crearon las llamadas "milicias republicanas", organización paramilitar que llegó a contar con 100 mil hombres bajo las armas, destinada precisamente a aplastar las aspiraciones de una oficialidad joven y progresista [...].

Hoy, en cambio, rasgan hipócritamente sus vestiduras cuando se habla de constituir milicias populares, no para oponerlas a las Fuerzas Armadas, sino para enfrentar a los fascistas y sediciosos que como el señor Pablo H. Rodríguez o el ex mayor Marshall confiesan descaradamente que están decididos a derrocar al Gobierno legítimo de Salvador Allende [...].

[...]

Los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, para asesinar trabajadores. Y llegado el caso, en que nuevamente algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clases y soldados no tienen la obligación de la obediencia. Aún más claro: no sólo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el Gobierno de los Trabajadores —sus hermanos de clase—, sino de oponerse activamente. Estamos seguros que este criterio patriótico, nacional y revolucionario, prevalecerá por encima de las maniobras desesperadas de la burguesía [...].

El Partido Nacional y el sector reaccionario de la Democracia Cristiana han arrastrado al país a una crisis de tal gravedad que no es imposible

que ella desemboque en una guerra civil. Hemos afirmado, una y mil veces, que no la deseamos, pero que tampoco por temor dejaremos de cumplir con nuestro imperativo histórico [...].

La reacción está empujando a Chile hacia ese abismo sin fondo. Y en su insania se niega a recapacitar sobre el hecho de que un régimen levantado sobre los cadáveres de miles de chilenos sólo sería posible a través de la más brutal de las represiones y de una implacable dictadura.

* * *

FIDEL CASTRO: CARTA A SALVADOR ALLENDE
(29 de julio 1973)

(Tomo 6, pp. 4834-4835)

[Después del tanquetazo Fidel Castro ofrece colaboración a Salvador Allende. Uno de los enviados era el jefe de la Dirección de Seguridad de Cuba.]

"Habana, julio 29 de 1973.

"Querido Salvador:

"Con el pretexto discutir contigo cuestiones referentes a la Reunión de Países No Alineados, Carlos y Piñeiro realizan un viaje a ésa. El objetivo real es informarse contigo sobre la situación y ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que obstaculizan y amenazan el proceso.

"La estancia de ellos será muy breve por cuanto tienen aquí muchas obligaciones pendientes y, no sin sacrificio de sus trabajos, decidimos que hicieran el viaje.

"Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo con la Democracia Cristiana en medio de acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu Edecán Naval y la nueva huelga de los dueños de camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo, mejorar la correlación de fuerzas para caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un cauce que permita seguir adelante el proceso revolucionario sin contienda civil, a la vez que salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos loables. Pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condiciones de valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e irresponsable exigiendo un precio imposible de pagar por la Unidad Popular y la Revolución, lo cual es, incluso, bastante probable, no olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles; ella puede, a tu llamado ante la Revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y su combatividad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor aun cuando otras circunstancias sean desfavorables.

”Tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor, hasta el precio de tu propia vida, que todos te saben capaz de cumplir, arrastrarán a tu lado todas las fuerzas capaces de combatir y todos los hombres y mujeres dignos de Chile. Tu valor, tu serenidad y tu audacia en esta hora histórica de tu patria y, sobre todo, tu jefatura firme, resuelta y heroicamente ejercida constituyen la clave de la situación.

”Hazle saber a Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar tus leales amigos cubanos”.

”Te reitero el cariño y la ilimitada confianza de nuestro pueblo.

”Fraternalmente,

”Fidel Castro”.

* * *

CARLOS ALTAMIRANO (SECRETARIO GENERAL DEL PS.): "VERDADES Y MENTIRAS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE VIVE CHILE". DISCURSO PRONUNCIADO EN LA INDUSTRIA COBRE CERRILLOS Y DIFUNDIDO POR CADENA NACIONAL DE RADIOEMISORAS (14 de agosto de 1973)

(Tomo 6, pp. 4953-4962)

[Los socialistas tratan de salvar el proceso revolucionario.]

[...]

El problema de la inflación

La inflación es problema muy serio. Es quizás el único problema más realmente grave que enfrenta la economía chilena. Una cuota de ella, es cierto, es responsabilidad nuestra, pero la mayor parte —insistimos— corresponde a la terca e insensata negativa del Parlamento a otorgar los recursos requeridos por el Gobierno.

[...]

Una estrategia antiinflacionaria, sin embargo, no podrá alcanzar resultados efectivos mientras no se sustraigan ingentes recursos recursos de la burguesía, y se impongan severas medidas financieras.

Esa es una premisa fundamental.

En alguna medida, las demandas excesivas de reajustes también agudizan el proceso inflacionario.

Estamos seguros de la disposición de los trabajadores a discutir y replantear este problema, e incluso a asumir los sacrificios que fueran necesarios.

Sin embargo, esa disposición de los trabajadores exige condiciones justas. Exige que se realice en los marcos de una política que asegure, en primer lugar, que serán afectados drásticamente los inmensos ingresos de la burguesía.

En segundo lugar, exige que se asegure que los resultados de su esfuerzo productivo no seguirán alimentando a toda una cadena de especuladores.

En tercer lugar, exige que se asegure, de una vez por todas, que se implantará un sistema de racionamiento que les garantice un abastecimiento normal de productos esenciales y a precios oficiales.

Sólo bajo esas condiciones, los trabajadores están dispuestos a mayores esfuerzos y sacrificios.

[...]

Es hora de dar a este Poder Popular toda la proyección política y revolucionaria que encierra. Los Comandos Comunales pueden y deben convertirse ahora en una realidad generalizada. Los Comandos Comunales pueden y deben ser reconocidos como una instancia del poder local, generado democráticamente por todas las organizaciones de base y con funciones y atribuciones definidas sobre los problemas locales de abastecimiento, transporte, salud, vigilancia y cada una de las actividades específicas de toda comuna.

Sólo un Poder Popular así generado y proyectado permitirá llevar a cabo las tareas que impone la situación actual y futura.

[...]

Al conjuro de esa potencialidad en ebullición, ha nacido en el trabajador una nueva concepción de la dignidad, una nueva escala de valores, una nueva perspectiva histórica. Consignas como: "Soy obrero, mando yo". "Crear, crear, Poder Popular", no sólo reflejan un estado de ánimo y una disposición para el combate, sino también una conciencia revolucionaria imposible de detener mediante consolidaciones prematuras, transacciones de salones, ni siquiera bajo el imperio de la metralla de un fascismo eventualmente erigido en dictadura.

Toda esa erupción social tiene una importancia tan grandiosa que sus propias vanguardias políticas, en mayor o menor grado, somos incapaces de evaluar en toda su dimensión histórica.

Hemos despertado a un pueblo y lo hemos echado a andar, y "nada ni nadie podrá detener su marcha de gigante".

A su paso, palidece todo cuanto pretenda entorpecerlo o frustrarlo.

[...]

* * *

UNIDAD POPULAR (COMITÉ POLÍTICO): DECLARACIÓN SOBRE LAS TORTURAS EN LA ARMADA (6 de agosto de 1973)

(Tomo 6, p. 4906)

[A comienzos de agosto un grupo de marineros fueron detenidos, acusados por la Armada de conspirar, para dar un golpe en favor de Allende. Los afectados denuncian haber sido torturados. En los documentos siguientes se aprecian algunas versiones del hecho.]

"El Comité Político de la UP, autoridad máxima de los partidos de izquierda, declara que el comunicado del Comité Ejecutivo del Partido Federado de la Unidad Popular sobre el proceso que sigue la Fiscalía de la II Zona Naval no tiene los alcances que le han dado algunos sectores, en el sentido de que implicaría un apoyo a los actos subversivos en la Armada.

La UP está convencida que el proceso establecerá que los inculpados no han cometido acto alguno de subversión.

"Por lo misma razón, el Comité Político de la UP reafirma su solidaridad con el Secretario General del PS, senador Carlos Altamirano, y con el Secretario General del MAPU, diputado Óscar Garretón. Está fuera de toda lógica que pudieran participar en actividades subversivas personeros de partidos integrantes del Gobierno y de una coalición que ha expresado reiteradamente su posición de respecto irrestricto al carácter profesional y constitucionalista de los institutos armados".

* * *

UNIDAD POPULAR: (COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL): DECLARACIÓN SOBRE LAS TORTURAS EN LA ARMADA
(6 de agosto de 1973)

(Tomo 6, p. 4907)

"Frente a la siniestra campaña derechista respecto de los sucesos ocurridos en la Armada, el Comité Ejecutivo de la Unidad Popular declara:

1. Su solidaridad con los marinos y suboficiales procesados cuya única actitud fue defender la Constitución y la ley y rechazar a quienes pretendieron comprometer a la Armada en el golpismo. Igualmente acuerda hacer llegar todo su apoyo y solidaridad a las esposas, hijos y familiares de los procesados.

2. Denunciar que las torturas sin precedentes a que han sido sometidos y que nadie ha podido desmentir, constituyen un atentado a los derechos humanos. El pueblo exige garantías de corrección, trato digno y respeto por los derechos inalienables de los marinos injustamente acusados.

3. Entregar su más amplio respaldo a los compañeros Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista; Oscar Garretón, Secretario General del Partido MAPU, y Miguel Enríquez, a quienes se pretende implicar en una supuesta subversión. La Unidad Popular y el pueblo saben que no están en su seno quienes pretenden permanentemente dividir a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, ha sido y es su política de siempre el respeto irrestricto por su carácter profesional y constitucionalista.

4. Alertar al pueblo sobre esta nueva maniobra reaccionaria que atenta contra la seguridad nacional al pretender separar al pueblo de las Fuerzas Armadas intentando comprometerlos con los intereses golpistas del imperialismo y los reaccionarios.

¡¡El pueblo exige castigo para los golpistas!!

¡¡Contra la sedición y el fascismo, unidad y combate, venceremos!!

Comité Ejecutivo Nacional Unidad Popular"

* * *

ORLANDO LETELIER (MINISTRO DE DEFENSA): DECLARACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA CONTRA LAS TORTURAS EN LA ARMADA (8 de agosto de 1973)

(Tomo 6, p. 4905)

El Departamento de Difusión y Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa Nacional, ha entregado el siguiente comunicado, en relación a publicaciones aparecidas en distintos órganos de difusión:

El Ministro de Defensa Nacional ha podido comprobar con profunda preocupación que en los últimos días, en distintos órganos de prensa, han aparecido publicaciones que afectan al prestigio e institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno se hace un deber señalar que tales publicaciones merecen su más enérgico rechazo y que se ejercerán todas las acciones legales que sean pertinentes, contra los responsables de dichas publicaciones.

Las Fuerzas Armadas de la República merecen el respeto de toda la ciudadanía y no es posible que por intereses menores de cualquier índole o procedencia se pretenda dañar su tradicional prestigio.

Por esta razón el Ministerio de Defensa Nacional acudirá con el máximo rigor a las facultades que le otorga la ley.

(Fdo.) Orlando Letelier del Solar, Ministro de Defensa Nacional.

* * *

CARTA DE LOS MARINEROS TORTURADOS A SALVADOR ALLENDE
(Agosto de 1973)

(Tomo 6, pp. 4908-4909)

A su Excelencia el Presidente de la República,
y a los trabajadores de todo el país:

Nosotros los marinos de tropa, antigolpistas, les decimos a las autoridades, a los trabajadores de todo Chile y a nuestros familiares, que ni las amenazas que nos hacen nuestros jefes, de volver a flagelarnos, ni mil torturas más, nos impedirá decirle la verdad a nuestra gente, la clase obrera y a nuestros compañeros de tropa del Ejército, Fuerza Aérea y ciudadanía en general.

Los reaccionarios han usado todos los medios de convicción para mentirle al pueblo diciendo que nosotros los marinos, con los señores Altamirano, Garretón y Enríquez, íbamos a bombardear las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y otras.

Los hechos son diferentes, nosotros esclarecemos estos hechos tan inmensamente distorsionados por la derecha reaccionaria junto a los oficiales y grupos golpistas de la armada, que por fuera se ven limpios, blancos —y por dentro están podridos.

Es falso que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigieran. Es distinto.

Nosotros acudimos a distintas personalidades para dar cuenta del golpe de Estado que preparaba la oficialidad golpista coludida con los reaccionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas y partidos políticos de derecha.

Nosotros los marinos, antigolpistas de tropa, buscamos por todos los medios comunicarle al pueblo y al Gobierno de este golpe de Estado que planificaba la oficialidad golpista de la Armada. Para nosotros era vital evitar esa gran masacre contra el pueblo, que estaba ya planificada con fecha definida entre el 8 y el 10 de agosto, por datos e informaciones concretas, sumando a éstos las diferencias de nuestros jefes para con nosotros, la tropa, donde nos explicaban que por tales o cuales razones el Gobierno marxista debía ser derrocado y limpiado el pueblo de dirigentes marxistas.

Era, sin duda, el Plan Yakarta, como nosotros habíamos logrado saber por ellos mismos y corroborado en el proceso que se nos sigue.

En tanto a hechos, por ejemplo: A uno de nosotros, el comandante Bilbao, Fiscal, le preguntó de cómo se iba a restituir la legalidad, cuando no iba a quedar después del golpe ningún líder de izquierda vivo. También para nosotros dentro de este plan, la suerte era incierta.

[...]

Nuestro delito

Oponerse al golpe de Estado, por lo cual ellos fracasaron. Se nos ha flagelado y torturado criminalmente.

Se nos ha ofrecido no flagelarnos más, inclusive dejarnos en libertad, con tal de que nosotros cooperemos y digamos que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigían y que nos habían ordenado bombardear Valparaíso, Viña, la Escuela Naval y otras cosas por el estilo.

Como nos negamos, nos seguían golpeando en la cruz, nos colgaban en ataúd, nos hacían tomar las meadas de los verdugos, nos colgaban de los pies y nos sumergían en el agua, nos sumían en pozos de barro, nos aplicaron corriente, nos tiraban agua caliente en el cuerpo, después fría y decenas de cosas más.

En Valparaíso nos vendaron los ojos

En Talcahuano (la tortura) fue sin venda y estuvo a cargo, en forma de hecho, de los señores Koeller, capitán Bhuster, teniente Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia, Maldonado, Leatich.

Nos hacían hablar en grabadora lo que ellos querían en Talcahuano. Pegándonos culatazos por todos lados y nos decían: tienen que hablar lo mismo donde el Fiscal.

Y el Fiscal nos preguntaba: “¿Se sienten mal?”, !Si les han hecho algo, díganme”.

[...]

Si defender al Gobierno, la Constitución, la legalidad, el pueblo, es un delito, y, al contrario, derrocar al Gobierno, atropellar la ley y terminar con la vida de miles de seres humanos, eso es legal.

¡Que contesten los trabajadores!

Firmado:

Sargento 2° (MG) Juan Cárdenas.
Cabo 2° (Artill.) Alberto Salazar.

Marinero 1° (MA) Ernesto Zúñiga S.
Marinero 1° (MA) Ernesto Carvajal.
Cabo 2° (EL) José Lagos A.
Marinero 1° (Art.) David Valderrama.
Marinero 1° (Art.) Claudio Espinoza.
Marinero 1° (CF) José Velásquez A.
Marinero 1° (CF) Luis Rojo G.
Marinero 1° (Art.) Mario Mendoza U.
Marinero 1° (EL) Roberto Fuentes F.
Cabo 2° (MQ) José Jara.
Cabo 1° (ME) Miguel González.
Marinero 1° (MQ) Tomás Alonso.
Cabo 1° (Art.) Pedro Lagos.
Cabo 2° (Art.) Juan Rodán B.
Marinero 1° (MA) Jaime Salazar.
Cabo 2° (E) Pedro Blasset C.
Cabo 2° (MA) Sebastián Ibarra V.
Marinero 1° (Art.) Luis Ayala N.
Marinero 1° (Art.) Carlos Ortega D.
Marinero 1° (Art.) Rodolfo Claro C.
Cabo 2° (MA) Teodosio Cifuentes R.
Marinero 1° (Art.) Juan Segovia A.
Marinero 1° (Art.) Juan Dotts.
Cabo 1° (MQCA) Carlos Alvarado.
Cabo 1° (EL) Mariano Ramírez.
Marinero 1° (MR-AF-MQ) Alejandro Retameo.
Marinero 1° (MR-AF-MQ) Luis Fernández R.
Operador 3° (MQ) Bernardino Farina.
Operador 3° (MQ) Víctor Martínez C.
Marinero 1° (MQ) Nelson Córdoba.
Marinero 1° (MA) Orlando Véniz V.

* * *

ÓSCAR GUILLERMO GARRETÓN (SECRETARIO GENERAL DEL MAPU): DISCURSO RADIAL DEL 4 DE AGOSTO DE 1973

(*De Frente* N° 18, 10 de agosto de 1973)

(Tomo 6, pp. 4898-4903)

Compañeros y compañeras:

[...]

El MAPU tiene la profunda convicción que nos amenaza de manera inminente un intento golpista de la burguesía que busca desatar la guerra civil para aplastar el Poder Popular y derrocar al Gobierno.

[...]

El golpe del 29

Toda esa ofensiva poselectoral, de la derecha, tiene su culminación en el fracasado intento golpista del 29 de junio, ejecutado por Souper, dirigido por los fascistas de Patria y Libertad y alentado e impulsado por los golpistas del P. Nacional.

[...]

Nunca antes nuestro pueblo había alcanzado ese nivel de movilización como para el Tancazo. Nunca antes había alcanzado un nivel de organización, de lucidez como en esas horas. Es al calor del Tancazo donde se hacen realidad los Cordones Industriales, a los que la derecha identifica de inmediato como enemigos decisivos, a los que hay que destruir implacablemente. La derecha sabe que en todas las formas de Poder Popular encontrará el corazón de la defensa del proceso revolucionario.

[...]

Nuevas vacilaciones

El apoyo impresionante que la UP y el Gobierno obtuvieron a raíz del Tancazo permitía dar saltos decisivos en la conquista del Poder. El pueblo así lo deseaba y exigía cuando llamaba esa misma noche del 29, a "cerrar el Congreso Nacional".

[...]

Relaciones Cordones-CUT

[...]

A nuestro juicio, los cordones junto con darle fuerza a la lucha de la base obrera de su territorio, son un instrumento fundamental para fortalecer orgánica y políticamente la alianza con los sectores populares que habitan o trabajan en torno al cordón. El desarrollo de los Comandos Comunales, bajo hegemonía de la clase obrera, tiene en los cordones la base sólida para su concreción y desarrollo. Y ésta sí que es una necesidad para hacer más contundente la respuesta del pueblo a los problemas políticos y económicos que debemos enfrentar.

Diálogo UP-PDC

El MAPU no se opone por principio a participar en diálogos. Muy al contrario, creemos que el diálogo con fuerzas distintas o enemigas, es un recurso táctico concreto en determinadas circunstancias. Por eso, el MAPU no se opone por principio a dialogar con la DC. Se opone a la forma y contenido en que se ha dado este diálogo. Dialogar tiene sentido cuando se dan, alternativa o simultáneamente, dos condiciones:

La primera de ellas es que la negociación permita ganar posiciones en nuestra perspectiva política.

La segunda es que nos permita ganar tiempo para mejorar nuestra correlación de fuerzas.

Estas condiciones suponen que simultáneamente se trabaja para desarrollar nuestras propias fuerzas. Para que no se debiliten durante la negociación. Por eso, jamás negociación es sinónimo de desmovilización. Además, es requisito indispensable para el éxito, que la masa entienda las razones que llevan a conversar.

Pero no se hizo así y, por lo tanto, resulta negativo para el proceso revolucionario. Por estos motivos, el MAPU rechaza el diálogo.

[...]

Aceptar la Reforma Hamilton-Fuentealba es arrasar con el APS. Aceptar el Proyecto Moreno es terminar con la Reforma Agraria. Los acontecimientos mismos van demostrando cómo este diálogo no ha contenido ni un ápice los preparativos golpistas. Por el contrario, amparados en la desmovilización del pueblo, que algunos consideran requisito para dialogar, no han demorado en desatar su ofensiva.

[...]

El paro camionero

Es el detonante golpista sobre el cual monta la reacción su ofensiva. El objetivo central de este nuevo paro patronal es provocar el enfrentamiento a corto plazo, arrastrando a la DC tras sus posiciones. Pero la acción de la derecha no se ha detenido allí. Los actos terroristas se han desatado a lo largo de todo el país, destruyendo vías férreas, oleoductos, puentes, y asesinando a personas.

Entre los actos terroristas realizados en estas semanas el más increíble es el asesinato del Edecán Naval, Comandante Arturo Araya. Se asesinó a un oficial de la Armada, además hombre cercano al Presidente, con el siniestro objetivo de responsabilizar a la izquierda y a la Embajada de Cuba para enardecer a las FF.AA.

El país sabe de dónde proviene el golpismo y el terrorismo. Afortunadamente, las FF.AA. y el Gobierno saben —y repito, saben—, que este intento de culpar a la izquierda y al pueblo cubano fue un montaje. Hace algunos días fueron descubiertos los asesinos. Son una banda de fascistas vinculadas al P. y L. y al PN, relacionados directamente con los senadores del PN, Fernando Ochagavía y Sergio Diez.

[...]

Las tareas centrales

[...]

Esta tarea central, compañeros, sólo es posible si desarrollamos cuatro líneas políticas de acción:

Primero: sólo es posible poner nuestras fuerzas en tensión con medidas revolucionarias. La masa no se moviliza si su dirección aparece vacilante, a la expectativa, a la defensiva. Sólo trabajando como el que sabe que está a punto de perderlo o ganarlo todo, con decisión, con urgencia, con la cabeza fría, pero a todo vapor, es posible preparar la victoria.

Segundo: sólo es posible poner nuestras fuerzas en tensión y dirigirlas correctamente si hay una unidad real en la dirección política del pueblo. Hoy la unidad es sólo una frase tras la cual se esconden diferencias políticas y luchas sórdidas. Hoy, más que nunca, reclamar la unidad de dirección de toda la izquierda es condición de victoria.

Tercero: es indispensable el desarrollo político y orgánico del Poder Popular. Sólo el desarrollo del pueblo, el aumento de su capacidad de respuesta, es garantía de victoria y de consecuencia revolucionaria del proceso. Queremos destacar en este sentido una tarea de masas central: la

creación y desarrollo de los Comandos Comunales a partir de los Cordones Industriales. La clase obrera no puede aislarse del resto de la masa, debe conducirla.

Cuarto: entendemos que cualquier intentona golpista se encontrará de frente con las FF.AA., leales, quienes junto al pueblo la enfrentará y derrotará.

Llamamos especialmente a los hombres de las FF.AA. a no dejarse arrastrar por los aventureros golpistas que existen en su seno. La experiencia de los que siguieron a Souper es triste: se convirtieron en asesinos civiles y de soldados leales a nuestra Patria.

Soldados golpistas

[...]

Nuestro partido plantea la salida del Sr. Washington Carrasco, Comandante de la 3° División del Ejército, de Concepción, y del Contraalmirante Toribio Medina, de Valparaíso, que se ha caracterizado por los allanamientos en contra del pueblo. Pedimos también la salida de inmediato del Coronel de Carabineros, Sr. Ortega y del Capitán de Carabineros, Sr. Esquivel, quienes participaron en el montaje destinado a culpar a la izquierda en el asesinato del Comandante Araya. Pedimos también la salida inmediata del General Torres de la Cruz, responsable de la muerte de un compañero en el allanamiento en Punta Arenas.

Llamamos a pueblo

Compañeros, la tarea política central es aplastar el golpe de Estado que la derecha trata de desatar. Por eso llamamos a todo el pueblo, al Gobierno y a la UP a sumar todas las fuerzas para concretar las tareas del momento.

[...]

* * *

HÉCTOR VEGA: CARTA ABIERTA DEL CORDÓN CENTRO OSORNO AL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO GENERAL AUGUSTO PINOCHET (OSORNO, 24 DE AGOSTO DE 1973)

(*De Frente*, N° 22, 7 de septiembre de 1973)

(Tomo 6, pp. 5023-5026)

[La organización se queja por actitud de los militares en la ciudad.]

Señor Augusto Pinochet
Comandante en Jefe del Ejército

Señor Comandante en Jefe:

En mi calidad de presidente del Centro Osorno me dirijo a usted para poner en su conocimiento hechos que ocurren en estos instantes en Osorno y que envuelven la responsabilidad de altos oficiales del Regimiento N° 4 Arauco de esa ciudad.

Estos hechos se refieren a la intervención en el caso del paro de transportistas y a la aplicación de la Ley de Control de Armas y Explosivos.

[...]

[...]

Empieza la requisición

A las 14.30 horas, en lugar de aparecer carabineros, entró en escena un camión con efectivos militares, quienes procedieron a allanar al grupo de trabajadores, que se encontraban frente a un local de la CUT con sus instrumentos de trabajo. Siendo en su mayoría obreros carpinteros, fueron detenidos por portar martillos, los que se estimaron revestían la calidad de armas. Transcurrida una hora, el intendente reconoció que carecía de respuesta plausible para explicar la demora de la fuerza pública. Finalmente, cuando éstos llegaron, el intendente, los funcionarios de DIRINCO y tres trabajadores se dirigieron a la intersección de las calles Mackenna y Bulnes, para proceder a la apertura del almacén Burnier. Junto con el intendente y acompañantes, llegó el comandante, quien procedió a allanar el vehículo de la intendencia y a retirar la fuerza pública. Esa orden se originó después de haber circunscrito el decreto de DIRINCO a un solo negocio de los cuatro primitivamente contemplados. La cancelación del operativo se produjo cuando según el comandante el orden público se encontraba seriamente alterado.

La represión

Mientras se llevaban a cabo estas conversaciones frente al negocio Burnier, los trabajadores que esperaban organizadamente en la plaza las instrucciones de sus dirigentes y a la espera de las gestiones de DIRINCO y el intendente fueron rodeados por una compañía del regimiento. Se instalaron frente a la Intendencia ametralladoras punto 30, apuntando a cerca de 500 trabajadores y pobladores. Sin mediar provocación alguna y mientras se parlamentaba con el oficial a cargo de la operación en el sector norte de la plaza, algunos conscriptos procedieron a culatazos en contra de los trabajadores. Ya anteriormente se habían disparado, desde el Edificio Consistorial, tres balazos por elementos no identificados. Este hecho no fue investigado.

Finalmente, deseo señalar al señor Comandante en Jefe el significado que los trabajadores concedemos a estos hechos. Estimamos que se atacó la organización de los trabajadores mediante el arbitrio de aplicación de una ley, en los precisos instantes en que la organización ejerce su derecho de protesta y de apoyo al Gobierno en la medida de apertura del comercio, ilegalmente cerrado. El ataque ha sido físico y moral. Está claro que los acontecimientos relatados muestran una autoridad civil sobrepasada, infiriéndose con ello un grave daño a la autoridad del intendente en la provincia. Al margen de los derechos que el intendente tiene como representante directo del Presidente de la República en la provincia, los trabajadores fuimos representados por el intendente y el jefe de DIRINCO en la acción del día martes 21, de manera que el vejamen inferido a estos funcionarios es un vejamen a los trabajadores. Los hechos se han agudizado a partir de ese día, pues desde la Fiscalía Militar se han dictado numerosas órdenes de detención en contra de dirigentes sindicales y de partidos políticos. Actualmente se encuentran con órdenes de detención las dirigencias regionales de los partidos Socialista, MAPU, Izquierda Cristiana, MIR, Juventud Radical Revolucionaria; partidos éstos integrantes del llamado Comando Operativo Revolucionario. También existe orden de detención en contra del secretario provincial de la CUT y de numerosos trabajadores de la construcción. Sin embargo, el hecho de mayor gravedad lo encierra la orden de detención e incomunicación dictada en contra del jefe de DIRINCO, Armando Liemlaf. Hasta hoy viernes lo único que se sabe es que Liamlaf se encuentra detenido e incomunicado en la Penitenciaría de Osorno.

Que se investiguen los hechos

[...]

Creo, señor Comandante en Jefe, que estos hechos merecen una investigación de parte de las autoridades militares, pues ellos lesionan fundamentalmente el ejercicio de los derechos políticos y sindicales de los trabajadores y, además, comprometen gravemente el prestigio del Ejército.

Saluda atentamente al señor Comandante en Jefe del Ejército,

Héctor Vega
Presidente Cordón Centro Osorno

* * *

MAPU: ¿QUIÉN ALLANARÁ A LOS PATRONES?

(*De Frente*, 24 de agosto de 1973)

(Tomo 6, pp. 4985-4986)

[El MAPU manifiesta sus dudas respecto a la actitud de las Fuerzas Armadas que allanan los locales de las organizaciones de izquierda. Nótese la visión que tenían del combate armado.]

En los últimos días la derecha ha lanzado una verdadera ofensiva de allanamientos en busca de armas.

Usando una ley reaccionaria sobre control de armas, los patrones están lanzando a algunos sectores militares en una acción represiva contra el pueblo y sus organizaciones.

Los militares han allanado locales del MAPU, Partidos Socialista, MIR, en busca de armas. Allanaron un cementerio, fábricas y servicios controlados por los trabajadores.

Los oficiales podrán dar cualquier explicación, cualquier chiva, pero no pueden desmentir que la acción de allanamiento ha sido efectuada contra la izquierda y el pueblo.

[...]

Cercar a los fascistas

[...]

Si los fascistas, desatan la guerra se encontrarán con un pueblo dispuesto a combatir.

La clase obrera y el pueblo tendrán los instrumentos para luchar y aplastar a los fascistas, arrastrar a los vacilantes y abrirles los ojos a los reformistas.

Queda poco tiempo

El tiempo lo ganamos usándolo bien. La tarea actual es elevar la organización del Poder Popular, lograr instrumentos de lucha para el pueblo, fortalecer la unidad de la clase obrera y el pueblo a la ofensiva, arrinconando al enemigo.

Mañana cuando empiece el combate, bajo el ruido de la dinamita y la metralleta, al calor de los gritos y canciones del pueblo, abriremos el camino a la verdadera victoria.

* * *

11 DE SEPTIEMBRE DE 1973: ACTAS DE LAS REUNIONES DEL BURÓ POLÍTICO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE UNIDAD ALEMÁN (SED). ACTA. N° 39/73 DE LA SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

(Signatura J IV 2/2 A/1709)

(Tomo 6, p. 5027)

Temas tratados:

2.1 Informe sobre la participación de una delegación del Comité Central del SED en el XIV Congreso del Partido Comunista de Argentina y el envío de un mensaje de solidaridad al Presidente Allende en Santiago de Chile.

Informante: Winkelman.

2.1 Sobre la situación en Chile.

Acuerdos:

Se aprueba 2.1.

Se aprueba la declaración del Comité Central sobre la situación en Chile.

Anexos al acta 39/73 (Signatura J IV 2/2/1467)

a) Accediendo a una petición del Presidente Allende será invitada en 1973 una delegación del Partido Socialista de Chile.

b) Accediendo a una solicitud del Presidente Allende, la dirección de la Federación Sindical Libre de Alemania (FDGB) debe encargarse de:

—Invitar una delegación de la Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT) para que estudie el rol y las relaciones Gobierno-Partido-Sindicato en la República Democrática Alemana, así como los problemas del aumento de la productividad del trabajo, las normas laborales y la dinámica de la competencia.

—La formación de ulteriores o nuevos funcionarios sindicales en cursos breves (1-3 meses).

c) Correspondiendo a una solicitud del Presidente Allende se debería estudiar la posibilidad de que a la brevedad parlamentarios de la Unidad Popular inviten una delegación de 2 o 3 parlamentarios de la Unión Democrática Cristiana (de la República Democrática Alemana) a fin de que ellos puedan viajar a Chile y dialogar con determinados parlamentarios y funcionarios del Partido Demócrata Cristiano, así como con dignatarios de la Iglesia.

* * *

SALVADOR ALLENDE:
ÚLTIMO DISCURSO DESDE EL PALACIO DE GOBIERNO
(11 de septiembre de 1973)

(Tomo 6, pp. 5036-5039)

[Poco antes de que La Moneda fuera bombardeada, el Presidente Allende se dirige por última vez al pueblo. En este discurso entrega su testimonio político.]

Compañeros:

Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción; y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron.

Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, también se ha denominado Director General de Carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley; y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y que reafirmara el Comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños.

Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando junto a la sedición auspiciada

por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista les da a unos pocos.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro suelo el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder. La historia los juzgará.

Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo les dará el hombre digno que fue leal a la virtud de los trabajadores.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende el poder. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. □